

DON WHITEHEAD

DON
WHITEHEAD

HISTORIA

del

HISTORIA
del

FBI



FBI

*Con un
prólogo
de su
director
J. Edgar
Hoover*



EDITORIAL
SOPENA
ARGENTINA

EDITORIAL SOPENA ARGENTINA

270
270
Don Whitehead

Historia del F.B.I.

La famosa institución
de los G-Men vista por dentro,
en un relato verídico y apasionante
de sus luchas y triunfos
contra el crimen

CON UN PROLOGO DE SU DIRECTOR
J. EDGAR HOOVER

TRADUCCION DIRECTA DEL INGLES
DE
RODOLFO J. WALSH



EDITORIAL SOPENA ARGENTINA S. A.

COMERCIAL, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

ESMERALDA 116

BUENOS AIRES

Es propiedad
Derechos reservados
Copyright 1959 by Editorial Sopena Argentina S. A. C. I. e I.
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Prohibida la reproducción total o parcial

A mi esposa Marie

SEGUNDA EDICION
ENERO DE 1959

PRINTED AND PUBLISHED IN ARGENTINA
IMPRIMÉ ET PUBLIÉ EN ARGENTINE
STAMPATO E PUBBLICATO NELL'ARGENTINA
DRUCK UND AUSGABE IN ARGENTINIEN
IMPRESSO E EDITADO NA ARGENTINA

IMPRESO Y EDITADO EN LA ARGENTINA

AL LECTOR

Hace más de dos años me decidí a buscar las respuestas a ciertas preguntas que me intrigaban como periodista. Quería saber por qué J. Edgar Hoover había sobrevivido como director del F. B. I. durante treinta años en una ciudad donde la política produce numerosas bajas entre los jefes de dependencias públicas. Quería saber por qué y cómo actúa el F. B. I. Y quería saber si tenían algún fundamento las insinuaciones de que el F. B. I. representaba una vaga amenaza contra los derechos civiles.

En suma, quería saber la verdad para poder referir la historia íntima del F. B. I., historia que, aunque parezca curioso, nunca ha sido relatada en su totalidad.

Cuando el director Hoover me permitió echar un vistazo detrás de bastidores, tuve acceso a una inmensa cantidad de material inédito. Además de esa información, yo había recogido casi todo el material de alguna importancia publicado sobre el tema. Descubrí, asimismo, que el F. B. I. estaba siempre dispuesto —dentro de los límites de la seguridad nacional y del deseo de proteger a ciudadanos particulares de inútiles molestias— a responder a cualquier pregunta que se le formulara.

A medida que me sumergía en los archivos, empezó a aparecer ante mí una historia mucho más emocionante y de alcances mucho más vastos de lo que hubiera sospechado. El «misterio» del F. B. I. ya no era un misterio. Las sombras se esfumaban. En la historia del F. B. I. encontré una apasionante aventura norteamericana, aventura precursora en las fronteras de la custodia de las leyes y la seguridad nacional.

Pero lo más importante era la lucha por imponer el incorruptible cumplimiento de la ley mediante profesionales adiestrados en la protección de los derechos civiles.

Para relatar esta historia, he elegido aquellos datos y aquellos casos particulares que, en mi opinión, dan una clara idea de las actividades del F. B. I. y de los móviles que guían a los hombres que están al frente de la organización.

Me ha costado trabajo seleccionar el material, por su misma importancia. De mala gana he tenido que dejar de lado muchos casos notables; las limitaciones del espacio me han obligado, asimismo, a rozar apenas algunas importantes actividades del F. B. I.

Sin embargo, espero que, merced a este informe, el lector podrá llegar a una apreciación exacta de lo que es y lo que hace el F. B. I. En cuanto a mí, he hallado satisfactorias respuestas a las preguntas que me inquietaban hace más de dos años.

D. W.

Arlington (Virginia), 8 de septiembre de 1956.

LISTA DE PROCURADORES GENERALES⁽¹⁾ DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DE JEFES DEL SERVICIO FEDERAL DE INVESTIGACION⁽²⁾

PROCURADORES GENERALES

Charles J. Bonaparte	1906-1909
George W. Wickersham	1909-1913
James C. McReynolds	1913-1914
Thomas W. Gregory	1914-1919
A. Mitchell Palmer	1919-1921
Harry M. Daugherty	1921-1924
Harlan F. Stone	1924-1925
John C. Sargent	1925-1929
William D. Mitchell	1929-1933
Homer S. Cummings	1933-1939
Frank Murphy	1939-1940
Robert H. Jackson	1940-1941
Francis Biddle	1941-1945
Tom C. Clark	1945-1949
J. Howard McGrath	1949-1952
James P. McGranery	1952-1953
Herbert Brownell (Jr.)	1953-

JEFES DEL SERVICIO FEDERAL DE INVESTIGACIONES

Stanley W. Finch	1908-1912
A. Bruce Bielaski	1912-1919
William J. Flynn	1919-1921
William J. Burns	1921-1924
J. Edgar Hoover	1924-

(1) El procurador general, o *Attorney General*, es en los Estados Unidos la más alta autoridad del Departamento de Justicia, equivalente a ministro del ramo.

(2) Federal Bureau of Investigation, o F. B. I.

PROLOGO

El F. B. I. es una organización unida y compacta integrada por más de 14.000 hombres y mujeres. Es una organización que trabaja en equipo. Yo suelo llamarla «a we organization» (1). Cada miembro de su personal tiene deberes claramente definidos, y responsabilidad personal e individual en cuanto al cumplimiento de esos deberes. Pero ningún caso se resuelve por el esfuerzo de una sola persona. Nuestros éxitos resultan de los esfuerzos combinados de toda la organización.

Ningún hombre en particular ha hecho del F. B. I. la organización que actualmente es. El F. B. I. fue construido por el esfuerzo leal y sacrificado de los millares de hombres y mujeres que en el transcurso de los años han servido en sus filas. Yo no me canso de repetir a mis camaradas que ningún hombre aislado ha edificado la reputación del F. B. I., pero un solo hombre puede destruirla.

Llevar la credencial del F. B. I. es exhibir un legado. Siempre lo ha sido y deberá serlo en el futuro. El F. B. I. siempre debe tener conciencia de ese legado. Una parte del mismo es la confianza que nos otorgan y que debemos inspirar. Sin esa confianza, no podemos en modo alguno cumplir nuestras responsabilidades.

Una de mis mayores satisfacciones es la cooperación que las personas respetuosas de la ley prestan a nuestros agentes.

El hecho de que semanalmente acudan a nuestras oficinas alrededor de 7.000 hombres y mujeres de toda edad y condición es una fuente de orgullo para nosotros; pero esas personas nos recuerdan constantemente que debemos estar a la altura de la confianza y de las esperanzas que en nosotros depositan.

Cuando un agente arresta a un malhechor o descubre un delito, una corrupción, una deshonestidad, no es para nosotros una experiencia agradable. Es una obligación que se debe cumplir. Cuando descubrimos actos de traición y subversión, no podemos permanecer impasibles: nos sentimos indignados como cualquier norteamericano. Experimentamos también los agudos desengaños que nacen de la indiferencia o de la absoluta ignorancia con que se contemplan las fuerzas destructivas que se manifiestan de tanto en tanto. En resumen, el F. B. I. es una organización muy humana. Nunca está

(1) Frase sin traducción exacta, que destaca el carácter cooperativo o colectivo del F. B. I. Literalmente, «organización de nosotros», es decir, «de muchos» o «de todos nosotros», y no de uno en particular. (N. del T.)

muy lejos, espiritual o físicamente, de la encrucijada donde se juegan los destinos de América. Nuestros agentes están siempre tan cerca de usted, lector, como su propio teléfono. En casos de emergencia, puede usted confiar en ellos día y noche, aun en los feriados o fines de semana.

Al llegar a este punto, deseo afirmar enfáticamente que el F. B. I. no es una organización de policía nacional, y nunca podrá serlo mientras siga desarrollándose dentro de un cauce de colaboración con otras fuerzas policiales. El mérito más duradero del F. B. I. es justamente su cooperación con las oficinas encargadas de hacer cumplir las leyes en el orden local, condal y estatal (1). De la Academia Nacional del F. B. I., que funciona desde hace veintidós años, han egresado más de 3.200 selectos representantes de las diferentes fuerzas que hacen cumplir las leyes en el país. Actualmente, más de una cuarta parte de esos graduados son jefes de dichas policías locales. El resultado ha sido una mayor eficacia técnica, una mejor capacidad administrativa y una creciente comprensión de los derechos civiles. En el seno del F. B. I. nadie duda de que las policías locales deben estar siempre a la vanguardia en la represión del delito.

Una organización como el F. B. I. alcanza su máxima efectividad cuando es homogénea, compacta, fiscalizada con firmeza, extremadamente móvil y certera. Por mi parte, nunca he deseado que el F. B. I. se expandiera excesivamente, porque eso impone una descentralización y un entorpecimiento. Bien venido el día en que dejen de ampliar nuestra jurisdicción.

No somos una organización autárquica. El F. B. I. es un servicio subordinado al Departamento de Justicia. Y así tiene que ser. Nunca deberá permitirse que se convierta en una organización independiente, que opere sin los recaudos ni la fiscalización a que actualmente se somete.

El F. B. I. es un servicio de acción, que tiene por fin certificar los hechos, prender a transgresores de las leyes federales dentro de su jurisdicción y cooperar con las policías locales. Una vez que determinamos los hechos, prendemos al transgresor y prestamos ayuda a las demás fuerzas del orden, nuestra tarea está terminada. Los resultados de nuestras investigaciones los sometemos a otros funcionarios gubernamentales. Pero ni evaluamos esos resultados ni formulamos recomendación alguna. No nos inmiscuimos en el mecanismo administrativo de otras dependencias del gobierno diciendo quién es leal, quién no lo es, quién representa un peligro para la seguridad del país o quién es apto para desempeñarse en las distintas funciones del gobierno federal. Nosotros nos limitamos a señalar hechos probados, sin abrir juicio.

Otro de los puntales del F. B. I. es el hecho de que constituye un servicio escalafonado donde nombramientos y ascensos no reco-

(1) Para los lectores de habla castellana, conviene subrayar la distinción: el F. B. I. actúa solamente ante una violación de las leyes federales de los Estados Unidos. No mediando violación de una ley federal (la que rige idéntica en todos los Estados), intervienen las distintas policías resultantes de la división política de ese país en Estados, condados, etc., equivalentes en cierto modo a nuestras provincias argentinas. (N. del T.)

nocen otro origen que la capacidad, el mérito y la competencia. Cada uno de los once procuradores generales a cuyas órdenes he actuado como director ha sostenido infatigablemente ese principio, apoyando al F. B. I. contra cualquier tentativa de introducir en él un factor de favoritismo político.

La norma de efectuar todos los ascensos dentro de las mismas filas del servicio, que establecí en 1924, cuando era procurador general quien más tarde había de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, Harlan Fiske Stone, ha demostrado su valor. Toda persona que actualmente ocupa un cargo ejecutivo o supervisor, tanto en las delegaciones del interior como en la sede central de Washington, ha recorrido las jerarquías previas del escalafón. Y espero que siempre sea así.

No es fácil formar buenos jefes. Y los espléndidos jefes surgidos del F. B. I. se han formado mediante la experiencia, adquiriendo nuevas responsabilidades a medida que demostraban su capacidad. La energía y devoción que consagran al Servicio, con nada pueden comprarse. Cualquiera de ellos doblaría o triplicaría su sueldo en la actividad privada. Si el dinero fuese el principal aliciente en la vida de estos hombres de extraordinaria capacidad ejecutiva, no los tendría a mi alrededor.

Desde sus primeras épocas el F. B. I. reflejó el ritmo de los tiempos. Su obra, para el observador cuidadoso, es como un barómetro que anuncia los días tempestuosos o calmos que encierra el futuro inmediato.

En el frente del delito, es posible que pronto salgamos del caos y la depresión moral que sigue a todas las guerras. Hay signos auspiciosos. Existe en mayor grado que nunca una conciencia colectiva del problema del delito. La opinión pública, escandalizada, está exigiendo a los padres de nuestros jóvenes un cumplimiento más diligente de sus responsabilidades. Los recursos de la comunidad se movilizan, y crece el convencimiento de que la ley y el orden pueden convertirse en realidad si existe la firme decisión de convertirlos en realidad.

Las actividades de elementos subversivos, particularmente comunistas dogmáticos, exigen una renovada vigilancia. La seguridad de nuestro país se ha resentido porque fueron muchos los engañados por la propaganda que sostenía que el partido comunista era un partido político como el Demócrata o el Republicano. Asimismo muchos norteamericanos se dejaron embaucar por el argumento de que los espías, elementos subversivos, agentes de gobiernos extranjeros y comunistas que han sido condenados y encarcelados, son «prisioneros políticos». En los Estados Unidos no hay «prisioneros políticos». Los que están presos violaron las leyes de los Estados Unidos, fueron encausados por jurados federales de acusación y condenados por tribunales federales. No creo que merezcan el trato especial ni los derechos y privilegios especiales que piden para ellos sus simpatizantes.

En los Estados Unidos el elemento subversivo se convierte en transgresor porque viola las leyes del país, no porque esté en desacuerdo con el partido gobernante. Cualquiera que infrinja la

ley comete un delito, aunque por propia conveniencia alegue que sus móviles son políticos. Si permitimos que móviles políticos justifiquen violaciones de las leyes, surgirán en este país tiranías políticas, como en circunstancias similares han surgido en otros países del mundo.

Durante más de treinta años la prensa, la radio y ahora la televisión se han ocupado día a día del F. B. I. Nuestra organización ha sido examinada en detalle por comisiones del Congreso, por la Oficina de Presupuesto y por los Tribunales. En libros y artículos de revistas se han registrado muchos aspectos de la obra del Servicio. Algunas de esas descripciones eran correctas, otras desfiguradas y algunas otras un simple producto de la fantasía.

Pero hasta ahora nadie podía encontrar en una sola obra la verdadera historia del nacimiento, desarrollo y luchas del F. B. I. Sinceramente, el hecho de que esa información no estuviese disponible para el público en forma de libro ha sido motivo de frecuentes consultas de personas interesadas en el tema. El F. B. I. ya era demasiado «misterio». Misterio por la dispersión de sus archivos, debida a la amplitud de sus operaciones, y porque indagar en sus muchas actividades exige un trabajo que pocas personas tienen tiempo de realizar.

En el verano de 1955 Don Whitehead reiteró una solicitud anterior para escribir un libro que abarcara toda la historia del Servicio. Don Whitehead era bien conocido en Washington. Había ganado dos premios Pulitzer por sus crónicas de temas norteamericanos y extranjeros. En general se le consideraba como uno de los mejores corresponsales de guerra, tanto en la segunda guerra mundial como en la de Corea. Había escrito algunos artículos sobre el Servicio, y teníamos absoluta confianza en su integridad, capacidad y objetividad.

Para hacer bien su trabajo, el autor debió tener acceso a los archivos, dentro de los límites impuestos por la seguridad nacional y por las normas de reserva del F. B. I. Siempre existirán algunas fases del funcionamiento del Servicio donde las reglas de seguridad, el mero recato y el «modus operandi» no permiten revelaciones. Mr. Whitehead debía conocer los hechos para obtener un resultado objetivo válido, y ese conocimiento se le proporcionó con toda amplitud en tanto no violara los principios antedichos.

El autor pudo formular libremente preguntas, y nosotros hemos creído nuestro deber contestarlas para que pudiese formar un juicio independiente sobre nuestras normas, procedimientos y rendimiento. Esa colaboración prestada al autor mereció la plena aprobación del procurador general de los Estados Unidos, honorable Herbert Brownell (Jr.).

Este volumen, pues, es el informe del señor Whitehead. El ha elegido el material utilizado y los hechos que relata están avalados por los archivos del Servicio. Lamento solamente que el autor no haya tenido espacio para mencionar a todos los hombres y mujeres cuya lealtad tanto ha contribuido a los triunfos del F. B. I. Esos hombres y mujeres han sido muchos.

En años recientes personas ignorantes y elementos subversivos han

lanzado contra el F. B. I. una campaña de falsedades y desprestigio. En la lucha mundial de los pueblos libres, la verdad sigue siendo una de nuestras armas más poderosas. Y la «foja de servicios» del F. B. I. habla por sí sola. Es la mejor respuesta a las falsedades, verdades a medias y rumores difundidos por los comunistas, sus testaferros y defensores.

La actuación del F. B. I. ha sido una experiencia afortunada y meritoria. Examinados retrospectivamente, sus triunfos fueron posibles porque el pueblo norteamericano lo quiso. Las tres ramas del gobierno, legislativa, judicial y ejecutiva, le han prestado un apoyo reconfortante, que garantiza sus futuros servicios al pueblo norteamericano.

Mis colegas y yo estamos profundamente agradecidos al autor, Don Whitehead, por la minuciosa preocupación que ha puesto para dar un fiel retrato del F. B. I., y también al señor Bennett Cerf, por el interés que demostró en esta publicación.

J. Edgar Hoover

Septiembre 8 de 1956.

El F. B. I.

I. - EL F. B. I. EN ACCION

Un granjero de Colorado había ordeñado sus vacas y concluido las tareas del día. Cerró la puerta del granero y echó a andar hacia la casa, donde lo esperaba la cena. Vio parpadear las luces de un avión: el Vuelo 629 de la United Air Lines, que había salido de Denver once minutos antes y se dirigía a Portland (Estado de Oregón), con treinta y nueve pasajeros y cinco tripulantes. La oscura silueta recortada en lo alto era un mensajero de la muerte atravesando el cielo y guiñando sus luces a quien acertara a contemplarlo 1.700 metros más abajo.

De pronto aquella silueta fue desgarrada por una terrible explosión. Una bola de fuego quedó suspensa en el cielo y serpentinas de nafta incandescente chorrearon sobre el telón de la noche. Una bengala se inflamó y bajó a la deriva, iluminando la escena con luz espectral. Los restos del destrozado DC-6B y de sus ocupantes quedaron dispersos en una extensión de más de cinco kilómetros cuadrados. Eran las 19.03 del 1º de noviembre de 1955. El granjero acababa de presenciar uno de los más espeluznantes asesinatos en masa que registran los anales del crimen.

Cuando la noticia de la catástrofe llegó a Denver y fue retrasmitida a toda la nación, sólo un hombre sabía que lo ocurrido era fruto de un atentado criminal. Sólo un hombre sabía que dentro de una maltrecha y vieja maleta cargada en el avión iba una bomba de tiempo. Ese hombre era el hosco y corpulento Jack Gilbert Graham, de veintitrés años, 1,83 metros de estatura y 88 kilos de peso, que en una oportunidad había dicho a un vecino:

—Por dinero, soy capaz de cualquier cosa.

Jack Graham había conducido en automóvil a su madre, la señora Daisy King, al aeropuerto de Denver, para ponerla a bordo del avión del Vuelo 629. La señora había planeado el viaje durante mucho tiempo: iba a visitar a su hija en Alaska. Jack bajó del automóvil el equipaje de su madre

—un neceser, un pequeño bolso de viaje y la mencionada maleta— y lo llevó al mostrador de boletería, para que lo pesaran. El equipaje resultó pesar casi diecisiete kilos adicionales sobre el límite de treinta.

Un empleado de ventanilla sugirió a la señora King que ahorrara 27 dólares aliviando su equipaje y despachando por carga parte de su ropa. Aún tenía tiempo para abrir las maletas y sacar lo que deseara.

La señora King se volvió hacia su hijo.

—¿Crees que necesitaré todo esto?

—Sí, mamá —repuso—. Creo que lo necesitarás.

La señora vaciló un instante y después se encogió de hombros. Mientras pagaba el exceso de equipaje, su hijo manipulaba un artefacto común en todos los aeropuertos norteamericanos: una máquina que por cada moneda de 25 céntimos de dólar depositada en una ranura, entrega una póliza de seguro de vida por 6.250 dólares. El torpe manipuleo de Jack arruinó una póliza de 18.750 dólares y otra de 43.750. Pero al fin logró serenarse.

Entonces llenó dos pólizas por 37.500 dólares cada una, en las que escribió su propio nombre como beneficiario. En dos más, por 6.250 dólares cada una, colocó como beneficiarias a una tía suya que vivía en Missouri y a una hermanastra que estaba en Alaska. La señora King firmó tres de las pólizas, mas por algún motivo ignorado Jack no le hizo firmar una de las de 37.500 dólares. Quizá el tictac de la bomba de tiempo empezaba a golpear en su cerebro; tal vez comenzaba a sentir pánico. El avión en que viajaría su madre estaba retrasado y pasaba el tiempo.

Otros pasajeros se hallaban adquiriendo fuertes pólizas de seguros, tal vez guiados por una oscura y subconsciente premonición de la muerte. Sea como fuere, el Vuelo 629 fue uno de los más fuertemente asegurados que haya salido de Denver. Dieciocho pasajeros sacaron pólizas de vuelo por un total de 752.200 dólares, sin incluir el seguro de vida personal que cada uno pudiera tener.

El avión del Vuelo 629 llegó con once minutos de retraso. La señora King dio besos de despedida a su hijo, a su nuera Gloria y al hijo de ambos, Allen, de veintidós meses de edad. Después subió al aparato.

Para Jack Graham transcurrieron doce minutos más de agonía mientras el avión esperaba a un pasajero demorado. Por fin cerróse la portezuela en pos del tardío pasajero, y a las 18.52 la gran aeronave despegó con un rugido.

Los Graham fueron al bar del aeropuerto para comer algo. De pronto Jack se sintió descompuesto y entró en una sala de descanso, a vomitar. Cuando salió, parecía sentirse mejor.

Los Graham oyeron rumores de una catástrofe al marcharse del aeropuerto rumbo a su casa. Gloria dijo más tarde:

—Al fin escuchamos por radio el nombre de su madre, y Jack se desmayó.

Roy Moore, subjefe (1) de la delegación de Denver del F. B. I. estaba en su casa mirando un programa de televisión, cuando alrededor de las 19.25 se anunció la noticia del desastre. Como es habitual cuando ocurren tales tragedias, el F. B. I. avisó a la United Air Lines (U. A. L.) que ofrecía su ayuda para identificar a las víctimas y establecer las causas de la catástrofe, si era necesario. Después Moore notificó a las oficinas centrales del F. B. I. en Washington.

Esa misma noche el médico de vuelo de la U. A. L. pidió la ayuda del F. B. I. para identificar los cadáveres, y la Junta de Aeronáutica Civil (*Civil Aeronautics Board*, o C. A. B.), que tiene la responsabilidad de investigar las causas de los accidentes aéreos, pidió al laboratorio del F. B. I. que enviase un experto al escenario del desastre para ayudar a examinar los restos. Estos agentes llegaron a Denver, desde Washington, al día siguiente.

La investigación de la catástrofe de Colorado fue un notable exponente de los progresos realizados por el F. B. I. en el orden de la técnica de investigación, la eficacia y el trabajo de equipo, desde aquel día de 1924 en que J. Edgar Hoover asumió la jefatura de un servicio hasta entonces inepto y viciado por la política. Veamos la forma en que fue descubierto un asesino mediante procedimientos modernos y científicos, con la ayuda de otros organismos gubernamentales, ingenieros aeronáuticos y ciudadanos particulares.

Los cadáveres de las víctimas fueron llevados a una morgue provisional instalada en el Arsenal de la Guardia Nacional en Greeley (Colorado). Nueve de ellas fueron rápidamente reconocidas por parientes y amigos, o identificadas por sus efectos personales. Los agentes del F. B. I. tomaron las impresiones digitales a las treinta y cinco restantes, y pudieron identificar a veintiuna cuyas impresiones estaban archivadas en la División de Identificación del F. B. I.

Un matrimonio de canadienses fue identificado merced a las huellas dactilares que se les tomaron en 1954, cuando solicitaron la ciudadanía norteamericana. A otros cinco pasajeros se les habían tomado las impresiones digitales cuando prestaron servicios en las fuerzas armadas. A una víctima le habían sacado las impresiones en averiguación de antece-

(1) *Assistant special agent in charge*, es decir «ayudante del agente especial en cargo». *Special agent* es en el F. B. I. el que actúa en las investigaciones. *Special agent in charge* es el jefe de una «office» o delegación. Preferimos simplificar la terminología en castellano, llamándolo «jefe», y «subjefe» al *assistant special agent in charge*. (N. del T.)

dentes. Otras estaban fichadas en el archivo dactiloscópico en su condición de obreros o empleados del gobierno en las fábricas de material bélico.

El agente del laboratorio del F. B. I. se unió al equipo de investigadores de la United Air Lines, la Douglas Aircraft Company y la Junta de Aeronáutica Civil. Su misión consistía en descubrir si el desastre obedecía a una falla mecánica, a un error humano o a un sabotaje. Y el sabotaje era la causa menos probable.

En primer término, un agrimensor trazó una línea que, pasando por el centro de dispersión de los restos, seguía la dirección de vuelo del aparato. A intervalos de 1.000 pies (trescientos metros), esa línea básica fue cortada perpendicularmente por otras líneas de 1.000 pies, formando así una «rejilla» de cuadrados; a éstos se los numeró correlativamente. Distintos grupos recorrieron entonces el terreno cuadrículado, recogiendo trozos de metal, de equipajes o de cualquier objeto procedente de la aeronave. Cada fragmento fue marcado con el número correspondiente al sitio del hallazgo; asimismo se midió cuidadosamente la situación de cada pieza en relación con las demás dentro de cada cuadrado.

La cola del avión estaba virtualmente intacta; parecía haber sido cortada con un inmenso cuchillo. Estaba a dos kilómetros y medio del punto en que la nariz y los motores del aparato habían horadado la tierra.

Los fragmentos fueron llevados a un depósito de Denver y colocados sobre una «rejilla» reducida a escala, en los lugares relativos en que se los había hallado en el escenario de la catástrofe. Después las piezas fueron sujetadas con alambres a una gigantesca maqueta en madera del DC-6B. Lentamente se «reconstruyó» el fuselaje. El gran cascarón de la aeronave quedó razonablemente completo... salvo en un punto. No se hallaron las piezas correspondientes a un agujero de filosas aristas en el flanco derecho del avión, cerca de la cola. Era el lugar que correspondía al compartimiento de cargas número 4.

Los ingenieros observaron que en ese punto el metal había sido doblado hacia afuera por una fuerza más violenta que la de un choque. Hallaron desgarradas esquirlas de fuselaje, limpias de un lado, pero quemadas del otro y descoloridas por una sustancia de color gris blancuzco. Fragmentos metálicos habían perforado suelas y tacones de zapatos. Guarniciones de bronce de una maleta habían penetrado hondamente en un recipiente de acero inoxidable. Ningún choque común podía proyectar trozos de metal con fuerza tan terrible.

Expertos del F. B. I., la C. A. B., la Douglas Aircraft Company y la United Air Lines sumaron los indicios. Era evidente

que en el compartimiento de cargas número 4 se había producido una violenta explosión. Pero no había conductos ni tanques de gasolina en esa parte del avión; por lo tanto, la tragedia había sido causada por la explosión accidental de un cargamento clandestino o por sabotaje.

El 7 de noviembre, la C. A. B. pidió al F. B. I. que iniciara una investigación de sabotaje. En un plazo de veinticuatro horas, alrededor de cien agentes en veinte ciudades hurgabán en el pasado de los tripulantes y pasajeros del avión, buscando motivos para un asesinato y revisando las planillas de carga para descubrir si se había producido algún transporte clandestino de materiales que pudiesen haber estallado accidentalmente.

A las oficinas del F. B. I. en Denver comenzaron a llegar datos sobre la vida y antecedentes de los pasajeros, así como sobre la carga transportada. No había indicios de un cargamento ilegítimo. Los agentes estudiaron el cúmulo de informes buscando a alguien: un pariente, un amigo, un rival en negocios, que pudiera haber tenido motivo para un asesinato y provocado el desastre.

Y así fue saliendo a la superficie, vagamente al principio, la imagen de Jack Graham.

Los agentes sospecharon por primera vez de Graham cuando no pudieron encontrar el equipaje de la señora Daisie King, salvo algún fragmento aquí y allá. Sólo encontraron más o menos completo un bolso de mano que la señora King conservó consigo a bordo del avión. Y entre los efectos personales de ese bolso había un recorte de un periódico de 1951, donde se decía que la policía buscaba a Graham, acusado de falsificación. Gradualmente el F. B. I. comenzó a concentrar su interés en Graham, mientras todos los demás sospechosos posibles eran descartados uno a uno.

Jack Graham había nacido en Denver en 1932. Su padre, segundo esposo de la señora King, murió cuando Jack tenía cinco años. La madre, desprovista de medios, mandó al chico a un orfanato donde permaneció seis años. Pero se reunieron en 1943, cuando ella contrajo matrimonio con un acomodado propietario rural, John Earl King.

En la escuela, el joven Graham mereció calificaciones superiores al término medio. Sin embargo, era un muchacho inquieto, hosco, de pésimo carácter. Se fue de su casa a los dieciséis años e ingresó en la Guardia Costera, para lo cual debió declarar una edad falsa. Permaneció nueve meses en la Guardia Costera, de los cuales sesenta y tres días «ausente sin licencia». Fue dado de baja por ser menor de edad cuando se descubrió su impostura.

Mientras indagaban en su pasado, los agentes descubrieron

el familiar cuadro de síntomas del delincuente juvenil salido de un hogar descalabrado, que rechaza toda disciplina y se hace perdonar sus excesos por una madre demasiado indulgente. Veamos el caso que mencionaba el periódico. En 1951 Jack había empezado a trabajar como empleado de caja en una fábrica. Los 200 dólares mensuales que ganaba no eran bastante para él. Jack robó algunos cheques de la compañía, fraguó la firma de un jefe y logró canjearlos por valor de 4.200 dólares. Se compró un flamante automóvil convertible y se alejó de Denver, cruzando cinco Estados.

En Lubbock, Texas, Graham fue arrestado bajo acusación de contrabando, pero ello sólo fue posible después de atravesar con su automóvil una barrera policial en un camino y entre una lluvia de balas. Estuvo sesenta días en la cárcel del condado. Después lo entregaron a las autoridades de Denver, para que respondiese a los cargos de falsificación. Daisie King, como la mayoría de las madres, no podía tolerar que su hijo fuese a la cárcel. Acordó pagar 2.500 de los 4.200 dólares robados para que Jack quedase en libertad condicional, y en el entendimiento de que el muchacho saldaría el resto de la deuda. Durante un tiempo pareció que Jack Graham iba a marchar derecho. Trabajaba duramente. En 1953 se casó con Gloria Elson, joven de Denver. Tuvieron dos hijos.

Cuando en 1954 murió el tercer marido de la señora King, la dejó en una buena posición económica. Ella invirtió 35.000 dólares en un restaurante carretero en West Denver, y Jack fue el encargado de administrarlo. También compró una casa para su hijo y la familia de éste. Cuando la señora King iba a Denver, paraba con ellos.

Cuando Jack no estaba ocupado en el restaurante, trabajaba en un garaje de la cadena Hertz «Drive-Ur-Self». Gradualmente redujo su deuda a 105,34 dólares. Exteriormente, al menos, daba la impresión de haberse convertido en un ciudadano responsable.

Pero en el transcurso de sus investigaciones, los agentes del F. B. I. oyeron rumores de que en cierta oportunidad Graham había detenido un camión «pick-up» al paso de un tren para cobrar un seguro. También en el restaurante se había producido una explosión de gas que causó pérdidas por 1.200 dólares y que parecía otro deliberado intento de cobrar un seguro. Y si bien Daisie King «consentía» a su hijo, a veces ambos peleaban «como perros y gatos» por la forma en que él administraba el restaurante.

Los agentes interrogaron a Graham el 10 de noviembre. Llegaron a preguntarle por el equipaje de la señora King.

—No sé qué puso ella en su equipaje —dijo Graham—. A mamá le gustaba hacer sus valijas sola y nunca permitía

que nadie la ayudara. Sé que llevó algunos cartuchos de escopeta y balas de rifle. Pensaba practicar la caza en Alaska.

Jack dijo que él no había puesto nada en el equipaje.

El joven contestaba a las preguntas con rapidez y aparente franqueza. Al día siguiente, los investigadores hablaron con la señora de Graham, que corroboró la afirmación de su marido según la cual la señora King prefería empacar sus cosas sin ayuda. Pero, añadió Gloria, poco antes de conducir a la señora King al aeropuerto su marido había llevado al subsuelo un paquete envuelto en papel lujoso como para un regalo. El regalo —pensaba ella— era un equipo de barrenos, limas y herramientas cortantes que Jack había comprado para su madre; la señora King cultivaba el «hobby» de hacer adornos de fantasía con conchas marinas. Gloria calculó que el paquete tenía unas dieciocho pulgadas de largo, por catorce de ancho y tres de alto. Imaginaba que Jack había entregado el regalo a su madre poco antes de ir todos al aeropuerto.

Este episodio del regalo intrigó a los agentes. Graham no había dicho nada acerca del mismo. Pero nuevamente apareció mencionado por una vecina de los Graham, que había oído a Jack hablar de él.

—Le oí decir —declaró la vecina— que había buscado en toda la ciudad el equipo que quería, y que cuando lo encontró, lo envolvió con cuidado y lo puso en el equipaje de su madre, como sorpresa, para que ella lo encontrase al llegar a Alaska.

Sólo dos comercios de Denver vendían equipos de herramientas que podían usarse para tallar conchas marinas. Una investigación en esos comercios reveló que nadie había comprado un equipo similar en octubre. El sospechoso debía explicar las fallas de su relato.

La segunda entrevista con Jack Graham se desarrolló cuando éste fue con su esposa a la oficina del F. B. I., la tarde del domingo 13 de noviembre, para identificar unos fragmentos de cuero que, al parecer, eran cuanto restaba del equipaje de la señora King. Gloria se quedó unos minutos; después volvió a su casa para atender a sus hijos, mientras Jack reconstruía ante los agentes la historia de su vida. Salió con ellos para un tardío almuerzo, y después continuaron las preguntas. Insistentemente negó saber algo del presunto paquete con el regalo.

Al anochecer, el agente Roy Moore llamó por teléfono al laboratorio del F. B. I. en Washington, para preguntar por los resultados del análisis de los carbonizados fragmentos metálicos descubiertos en el escenario del desastre. La respuesta fue:

—Hay positivas evidencias de una explosión de dinamita.

El laboratorio había descubierto que el metal conservaba

vestigios de carbonato de sodio, nitrito de sodio y compuestos de azufre..., los residuos que deja una explosión de dinamita.

—Al recibir el informe del laboratorio —comentó Moore más tarde— comprendí que seguíamos una pista correcta.

A las 18.40 de ese mismo día Moore entró en las oficinas donde sus colegas interrogaban a Graham.

—Quiero hacerle saber que tiene usted ciertos derechos —le dijo—. La puerta está abierta. Puede irse cuando quiera. Si lo desea, puede llamar a su esposa o a un abogado. No tiene por qué decirnos nada... y cualquier cosa que nos diga puede ser invocada contra usted en un tribunal. Si prefiere que hablemos, no habrá amenazas ni promesas de nuestra parte. Jack —prosiguió—, hemos investigado todo lo que usted nos dijo. Usted hizo estallar ese avión para matar a su madre, ¿no es así?

—No —protestó Jack—, yo no.

—¿Tiene inconveniente entonces en que registremos su casa?

—No, en absoluto.

Graham firmó una autorización para que los agentes registraran su casa, sin necesidad de pedir a un juzgado una orden de allanamiento. Moore destacó con ese fin a varios hombres, que iniciaron una metódica búsqueda.

Poco más tarde un agente llamó a la oficina para informar:

—La señora Graham afirma que Jack le pidió que no hablara del regalo. Ha firmado una declaración.

En seguida los agentes encontraron los cartuchos de escopeta y las balas que, según Graham, su madre había puesto en su equipaje.

Los investigadores se precipitaron sobre esas discrepancias del relato.

—¿Qué nos dice ahora? —preguntaron al joven.

Graham admitió por fin que había comprado a «un tipo» que no conocía un regalo para su madre, un equipo de herramientas marca «X-Acto». Dijo que lo pagó diez dólares, y que dos de sus compañeros del garaje estaban presentes. Dibujó la caja y las herramientas que contenía, y agregó que la había introducido subrepticamente en el equipaje de su madre. La había cerrado con tela adhesiva y guardó el sobrante de tela en la guantera de su automóvil.

Los agentes no encontraron tela adhesiva en el automóvil, pero sí encontraron en el bolsillo de una camisa de Jack un rollito de alambre, del tipo empleado para detonar dinamita.

A las 22.15 los agentes descubrieron una póliza de seguro por 37.500 dólares, pagadera a Jack Graham y firmada por Daisy King. Estaba oculta en la cómoda del dormitorio de

Jack. De ese modo se enteró el F. B. I., por primera vez, de que Jack había asegurado en esa suma la vida de su madre. Las firmas aseguradoras habían entregado copias de las pólizas firmadas por los pasajeros del avión accidentado; mas, por un error de la compañía, las copias correspondientes a la señora King no habían llegado a poder del F. B. I.

Los agentes descubrieron otras cosas de interés: medias, una bolsita de cosméticos y algunos regalos que la señora King pensaba ofrecer a su hija en Alaska, así como otros objetos que presumiblemente debió llevar consigo.

—¿Por qué dejó estas cosas su madre? —preguntaron a Graham.

—Yo le dije que no las llevara, porque su equipaje pesaba demasiado.

Un minuto después de medianoche los agentes informaban que los dos empleados del garaje Hertz no recordaban que Graham hubiera comprado un equipo de herramientas. Si alguien hubiese ido al garaje con ese fin, estaban seguros de que lo habrían visto. Este informe fue mostrado a Graham, así como el originado en el laboratorio del F. B. I., según el cual los análisis demostraban que el desastre obedecía a una explosión de dinamita.

A las 0.05 Graham preguntó:

—¿Puedo tomar un vaso de agua?

Un agente le alcanzó el agua. Jack bebió largamente, a grandes tragos. Miró en torno, ceñudo, y exclamó:

—Bueno, ¿por dónde quieren que empiece?

—Por donde prefiera.

—Muy bien. Todo comenzó seis meses atrás. Mamá hacía un escándalo tras otro porque el restaurante no daba ganancias...

Sin vestigios de emoción refirió cómo había fabricado la bomba con veinticinco cartuchos de dinamita, dos fulminantes eléctricos, un mecanismo de tiempo y una batería de seis voltios. Había trabajado en un taller de electricidad durante diez días, ganando un dólar y medio por hora, para aprender algo más de electricidad antes de comprar la dinamita y el mecanismo de tiempo. Cuando llegó el momento sacó algunas cosas de la maleta de su madre y las reemplazó por la bomba.

Graham habló veinte minutos. Después acudió un taquígrafo para registrar su confesión.

A la 1.42 vino un médico que sometió a Graham a un examen completo, dejando constancia de que no había sido obligado a confesar por métodos violentos, que estaba en plena posesión de las facultades mentales y que era capaz de formular libre y voluntariamente una confesión. El mismo

Graham informó al médico que no lo habían maltratado y firmó la confesión.

A las 3.42, Jack Graham fue arrestado bajo acusación de sabotaje. Más tarde el F. B. I. lo entregó a las autoridades de Colorado para que lo juzgasen por asesinato.

Detalle singular del caso es que la confesión se produjo antes de existir pruebas terminantes de culpa. Sólo más tarde fue posible localizar los comercios donde Graham había adquirido la dinamita y el mecanismo de tiempo; y allí lo identificaron como el comprador de una y otro.

Mientras estaba en la cárcel aguardando su proceso, Graham dijo a un guardián:

—Hasta el próximo mes puede mandar mi correspondencia al presidio de Canon City. Después puede enviarla al infierno.

Durante el proceso, Graham desconoció su confesión, aunque admitió haberla firmado. Las pruebas eran tan concluyentes, sin embargo, que el jurado sólo necesitó setenta y dos minutos para decidir que era culpable de asesinato premeditado. La sentencia fue apelada ante la Suprema Corte de Colorado el 8 de agosto de 1956.

El caso de Jack Graham es uno entre muchos desconcertantes asesinatos esclarecidos por el F. B. I. Pero es más que eso: es como una ventana que nos permite contemplar parte de los progresos realizados por el F. B. I. hacia la meta de la investigación policial científica, realizada por profesionales adiestrados para servir a la justicia, respetando al mismo tiempo las libertades civiles.

El F. B. I. tiene casi medio siglo de existencia. Para millones de personas, su nombre es un símbolo de integridad y eficacia. Pero aunque sus actividades están ligadas a la protección de los derechos civiles y la seguridad de la nación, sigue siendo para muchos ciudadanos norteamericanos una organización misteriosa.

Pocos saben cómo actúa el F. B. I. Pocos saben que, en su tarea de proteger al país, el F. B. I. mantiene también un severo y permanente sistema de fiscalización y recaudos sobre sus propios agentes y las actividades de éstos. Hoover puede —y suele—, en cualquier momento, tomar el teléfono y en pocos minutos averiguar dónde está un agente, en qué caso trabaja y cómo marcha la investigación.

El sistema de fiscalización opera en la siguiente forma. Los jefes de las cincuenta y dos divisiones regionales del F. B. I. en todo el país son considerados representantes personales de Hoover. Son directamente responsables ante él del trabajo que se efectúa dentro de las zonas geográficas que les corresponden. A cada jefe le corresponde un ayudante o subjefe; este

cargo es un terreno de adiestramiento para la formación de futuros jefes.

Las oficinas o delegaciones del F. B. I., tales como las de Nueva York, Chicago y Los Angeles, tienen supervisores regionales que dirigen la actuación de los agentes y son responsables ante el jefe y el subjefe. Las delegaciones regionales están situadas lo más cerca posible del centro de gravedad del trabajo que realizan. En las ciudades menores, en torno a las delegaciones regionales, el F. B. I. ha dado destino a unos 1.200 agentes «residentes», que son responsables de la tarea que se efectúa en subsecciones determinadas de la división a que pertenecen. Esta distribución de los agentes en centros estratégicos permite un adecuado despliegue de fuerzas capaces de trasladarse rápidamente a cualquier sitio, ahorrando tiempo y dinero.

En la sede central de Washington, el funcionamiento del Servicio está altamente integrado y centralizado. Por ejemplo, todos los informes sobre asaltos de bancos van a un solo despacho, donde diversos inspectores se encargan de correlacionar las investigaciones emprendidas en dos, tres o acaso media docena de ciudades distintas. Tal vez un inspector, por ejemplo, advierta en el asalto a un banco de Chicago el mismo «modus operandi» empleado pocos días antes en Los Angeles. O quizá en las oficinas centrales exista algún informe que vincule a un sospechoso con un delito no esclarecido. Este método de trabajo se emplea también en los casos de espionaje para relacionar operaciones aparentemente inconexas y para coordinar la labor de los agentes.

Durante el día, a intervalos fijos, cada agente debe telefonar a su respectiva delegación e informar sobre sus movimientos. El progreso realizado en cada investigación se consigna en informes periódicos y se hace constar en la foja de actuación del agente.

Durante más de treinta años, Hoover ha exigido disciplina en las filas del F. B. I. Esta disciplina es más severa, desde luego, entre la fuerza de agentes especiales, compuesta por unos 6.200 hombres. Pero también se mantiene entre los restantes 8.000 empleados. La obediencia a las reglamentaciones oficiales que se exige alcanza un grado asombroso para el observador de afuera.

La razón de esta obediencia es sencilla para quien recuerde la indisciplina que casi aniquiló al Servicio en la época anterior a Hoover.

Una y otra vez Hoover ha subrayado que jamás debe haber escándalo en las actividades del F. B. I.

—Ningún hombre en particular creó el F. B. I. —dice—, pero basta uno solo para destruirlo.

La vida de un agente especial no es fácil. Sabe que puede ser exonerado sumariamente si quebranta ciertas reglas. Por ejemplo:

1. No puede tomar bebidas alcohólicas mientras está de servicio. Y aun fuera de servicio está prohibido el consumo excesivo de licores, pues el agente puede ser llamado en cualquier momento.
2. No puede utilizar un automóvil oficial para fin alguno ajeno al servicio.
3. Le está prohibido emplear la violencia o la amenaza en el trato con las personas investigadas.

También puede ser castigado por muchas otras cosas. He aquí algunas de las prohibiciones que pesan sobre él:

1. No puede, sin ser autorizado, revelar información a persona alguna; ni aun a su esposa.
2. Bajo ningún concepto puede aceptar regalos o recompensas.
3. No puede eludir el pago de sus impuestos u otras obligaciones financieras.
4. No debe extraviar bienes oficiales que le hayan sido confiados.

Y la lista es mucho más larga...

El agente recién nombrado empieza a formarse en la disciplina desde el momento en que se presenta a la sede central del F. B. I. para iniciar un curso de adiestramiento intensivo que dura dieciocho semanas. El curso se divide en dos partes: el estudio teórico de las técnicas de investigación, de las responsabilidades del F. B. I. ante la ley y de la tarea administrativa por un lado; y por otro, el curso práctico de autodefensa y manejo de armas de fuego, impartido por la academia que tiene el F. B. I. en la base de Infantería de Marina de Quantico, Virginia.

Cada agente, inclusive los hombres de ciencia e ingenieros que trabajan en el laboratorio, debe saber cuidarse a sí mismo en un tiroteo. Aprende el «quick draw» (extracción rápida), que le permite sacar la pistola de la cartuchera en una fracción de segundo al tiempo que busca la posición más segura para hacer fuego certero. «Nunca apriete el gatillo mientras corre», es un axioma del F. B. I.

Aprende a utilizar sus armas en las distintas posiciones: de pie, rodilla en tierra, sentado o cuerpo a tierra, y contra blancos variados, fijos o móviles. Aprende a tirar con ambas manos para el combate en barricadas, y también a ponerse a cubierto bajo el fuego enemigo.

Además de la pistola, debe aprender a manejar el rifle calibre 30, la escopeta de repetición y la pistola ametralladora.

El agente recibe lecciones de jiu-jitsu y asimila otros trucos de la pelea callejera. Dieciocho hombres del F. B. I. han

caído en actos de servicio; eso recuerda a los demás que la batalla contra el crimen es peligrosa.

El sistema de adiestramiento del F. B. I. produjo resultados tan excelentes que, aún antes de la segunda Guerra Mundial, la Infantería de Marina norteamericana pidió que los instructores del servicio adiestraran a los infantes en las tácticas del cuerpo a cuerpo necesarias para la defensa personal y para desarmar al adversario. El teniente general Alexander A. Vandegrift, de la Infantería de Marina, comunicó al F. B. I. durante la guerra: «Puedo asegurar que esas tácticas han sido bien aprovechadas».

Pero el F. B. I. ha debido recorrer un largo camino para llegar al punto en que ahora se encuentra. Tuvo su comienzo en 1908, cuando el presidente Theodore Roosevelt exigió un organismo investigador durante su cruzada contra los «ladrones de tierras» del Oeste norteamericano y los grandes «trusts» comerciales del Este. Por muchos años ese organismo se llamó *Bureau of Investigation* (Servicio de Investigación). Sólo recibió su nombre actual, *Federal Bureau of Investigation* (Servicio Federal de Investigación), y las siglas que lo representan — F. B. I. — en 1935. Por razones de comodidad, sin embargo, seguiremos llamando F. B. I. al servicio anterior a esa fecha.

Veamos, sintéticamente, cómo se desarrolló el F. B. I. en el transcurso de los años.

1908 - 1924

Al principio, el servicio era un organismo desorganizado y descentralizado, carente de carácter y disciplina. La sede central de Washington ejercía escasa fiscalización sobre los agentes regionales. No existían normas fijas de adiestramiento, o siquiera de conducta personal. Las influencias políticas pesaban más que la experiencia o el carácter en la designación de los agentes.

La reducida e inepta fuerza de 219 agentes que existía en 1915 fracasó en su primera misión de importancia. No estaba preparada en absoluto para luchar contra la astuta red de espionaje y sabotaje organizada durante la primera guerra mundial por el embajador alemán Johan von Bernstorff. Los saboteadores pudieron consumir con toda tranquilidad grandes atentados, como las tristemente célebres explosiones en la isla Black Tom, dentro del puerto de Nueva York, que destruyeron el más grande arsenal de los Estados Unidos y cuyo estruendo se oyó a más de ciento cincuenta kilómetros de distancia. Volaron con explosivos fábricas militares e incendiaron grandes trigales en el Oeste.

Fue ésta una época de violenta inquietud social. Muchos predicaban la anarquía; misteriosas bombas sembraban el terror, y el Partido Comunista se organizaba por primera vez en los Estados Unidos para postular el derrocamiento del gobierno por la fuerza. En su lucha contra la violencia, los agentes del servicio, faltos de adiestramiento, olvidaban a menudo el respeto a las libertades civiles, como ocurrió en las llamadas «batidas rojas de Palmer» (*Palmer Red Raids*), en 1919, cuando los extremistas extranjeros fueron arrestados y deportados. En muchos casos, grupos de llamados «vigilantes civiles» tomaron la ley en sus manos.

También fue ésa la época en que una ola de corrupción se extendió por el país, penetrando en el gobierno de Washington. Y llegó por fin el momento en que el servicio mismo estuvo a punto de ser destruido por la indignada reacción pública contra la deshonestidad.

1924 - 1933

El procurador general Harlan Fiske Stone siguió el consejo de quien más tarde iba a ser presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, y designó al joven J. Edgar Hoover (que no tenía con el anterior ningún parentesco) para hacer una limpieza en el Servicio de Investigación. La primera medida de Hoover fue establecer severas normas de conducta personal para los agentes. Después comenzó a librarse de los «acomodados» políticos que no eran capaces de sujetarse a esas normas y a reemplazarlos por hombres jóvenes, con experiencia como abogados o contadores.

Hoover colocó los agentes bajo una estricta fiscalización. Se elaboraron métodos para verificar su conducta y rendimiento. Se adoptaron procedimientos operativos uniformes. Se creó una escuela para adiestrar nuevos agentes. El F. B. I. se convirtió en un organismo sólido con un propósito firme: hacer de la investigación policial una profesión honorable para hombres adiestrados y capaces.

1933 - 1939

Esta época exigió una campaña agresiva y drástica contra los «gangsters» que, después de la ley de prohibición, asolaban vastas zonas del país. La tarea fue encomendada al F. B. I.

Los agentes fueron adiestrados en el manejo rápido y certero de las armas de fuego por instructores de la Infantería de Marina y el Ejército. El Congreso les confirió autorización para portar armas y efectuar arrestos. Una serie de leyes

penales extendió la jurisdicción del F. B. I., que a partir de entonces debió investigar secuestros, asaltos a los bancos, extorsiones y otros delitos.

Durante esos años, Hoover y sus hombres se convirtieron para el público en los «G-Men» (abreviatura de «government men», hombres del gobierno, mote acuñado por el pistolero George «Ametralladora» Kelly), y ganaron fama de incorruptibles. Fue ésta la época ruda y estrepitosa de los grandes tiroteos con las pandillas de John Dillinger, Barker-Karpis y otros hampones que asolaban el Medio Oeste.

El F. B. I. se consolidó como organismo móvil en lucha contra el crimen. Hoover requirió la ayuda de la ciencia, para lo cual fundó el laboratorio del F. B. I. Después se creó la Academia Nacional del F. B. I., con el fin de adiestrar a oficiales de las policías del interior en las últimas técnicas de lucha contra el crimen y para fomentar la cooperación entre el organismo federal y las instituciones locales. De ese modo se procuró eludir la creación de una policía nacional, exigida entonces por parte de la opinión pública.

1939 - 1945

Durante estos años de guerra, las operaciones del F. B. I. asumieron una nueva dimensión. El presidente Roosevelt hizo responsable al servicio, juntamente con el Ejército y la Marina, de la lucha contra el espionaje, el sabotaje y la subversión. El F. B. I. se convirtió, no sólo en organismo de lucha contra el crimen, sino en servicio de inteligencia.

En llamativo contraste con la torpeza del Servicio de Investigación durante la primera guerra mundial, el F. B. I. estaba preparado para anular el espionaje nazi, y los diversos grupos de espías fueron desarticulados antes de que los Estados Unidos entraran en el conflicto. Durante toda la contienda no hubo un solo caso de sabotaje ordenado desde el exterior. No se repitieron las explosiones de Black Tom ni los incendios que antes habían devastado las fábricas de productos químicos. Y esta inmensa tarea de vigilancia en tiempo de guerra fue cumplida dentro del más escrupuloso respeto de los derechos civiles. No hubo batidas en masa ni grupos civiles de «vigilantes».

En una operación sumamente secreta, agentes del F. B. I. se trasladaron a la América Central y a la América del Sur para colaborar con gobiernos amigos en la destrucción de las redes de espionaje nazis y descubrir transmisores de radio clandestinos que pasaban información a Alemania.

En contraste con el pasado, cuando las tareas de contraespionaje del F. B. I. se limitaban a misiones específicas y de

breve duración, a partir de la presidencia de Roosevelt el F. B. I. asumió una responsabilidad permanente en ese campo, abriendo así un nuevo y amplio frente de actividades.

1945 - 1956

Durante los años de la «guerra fría», el F. B. I. ha luchado principalmente contra el comunismo y contra el resurgimiento del delito. En 1936 el presidente Roosevelt, por intermedio del secretario de estado Cordell Hull, había impartido al servicio una orden secreta en virtud de la cual debían investigarse las actividades comunistas en todo el país y ser vigilado el Partido Comunista.

Entonces las investigaciones comenzaron a revelar pruebas de la subversión comunista que Hoover viene denunciando hace años. Aparecieron los casos Fuchs, Harry Gold, Rosenberg, y se recogieron indicios de que los líderes del Partido Comunista conspiraban para derribar el gobierno de los Estados Unidos por la fuerza. Este fue el período en que el F. B. I., declaró, literalmente, la guerra al Partido Comunista. Pero al mismo tiempo continuó la lucha contra el crimen. Los agentes del F. B. I., siguiendo tortuosas pistas, lograron esclarecer casos resonantes, como el secuestro del pequeño Peter Weinberger en Long Island y el atentado contra el periodista sindical Victor Riesel, a quien un malhechor arrojó ácido a los ojos, dejándolo ciego.

A pesar de la estricta disciplina, el trabajo duro y los fatigosos horarios, es relativamente escaso el número de agentes que abandonan el F. B. I. en busca de empleos más fáciles y mejor remunerados. Hay algo en el F. B. I. que parece retenerlos, un espíritu intangible afín al espíritu de cuerpo que constituye el orgullo, por ejemplo, de la Infantería de Marina norteamericana. En 1955 las bajas voluntarias de personal fueron inferiores al medio por ciento.

¿Quiénes son estos hombres que forman el cuerpo de agentes del F. B. I.?

Constituyen algo así como un corte transversal de la vida norteamericana. Son profesionales en leyes, contabilidad, ciencias, ingeniería. Pero la adaptabilidad y la aptitud se consideran tan importantes, para las tareas de investigación, como la formación académica. El F. B. I. recluta su personal entre hombres jóvenes que demuestran los más amplios y variados intereses.

Algunos agentes han sido artistas publicitarios. Otros han estudiado medicina. Hay quienes estudiaron para músicos, farmacéuticos, corredores de libros, asistentes sociales, via-

jantes, arquitectos, periodistas, maestros, auditores, agentes de bolsa, cajeros, granjeros y obreros de fábricas, entre otros oficios y profesiones. Treinta idiomas y dialectos diferentes encuentran entre ellos a alguien capaz de hablarlos o leerlos. Sus «hobbies» abarcan una amplia gama, que va desde las artes a los deportes⁽¹⁾.

Estos hombres forman el F. B. I. Todos ellos son profesionales altamente especializados y guiados siempre por el principio de que probar la inocencia es tan importante como probar la culpa.

Las primeras etapas de lucha fueron amargas. Pero es imposible comprender al F. B. I. sin examinar los factores que en el pasado contribuyeron a forjar su futuro.

II. - COMIENZA LA HISTORIA

La cruzada que el 26 de julio de 1908 dio nacimiento al Servicio Federal de Investigación estuvo encabezada por el presidente Theodore Roosevelt, que luchaba entonces contra el afán de lucro de los grandes monopolios comerciales, desdén del bienestar público, y se esforzaba también por detener los escandalosos despojos de tierras fiscales en el Oeste del país.

Desde el momento en que entró en la Casa Blanca, en septiembre de 1901, Roosevelt empezó a clamar contra la corrupción política y financiera, exigiendo una fiscalización federal más rígida para los excesos de los ricos y los poderosos. En el caos reinante, los monopolios industriales se burlaban de la ley Sherman contra los monopolios; prácticamente, le sacaban la lengua al gobierno federal y al pueblo.

La inmoralidad no terminaba ahí. Hombres de gran reputación, en connivencia con funcionarios federales, robaban al gobierno valiosas tierras en las regiones del Oeste, donde administraciones anteriores habían apartado como reservas forestales más de dieciséis millones de hectáreas. Ese paraíso verde y tentador estaba presuntamente custodiado por la Oficina General de Tierras. Pero a ésta le interesaba más enajenar los predios confiados a su vigilancia que poner en práctica la previsora política de Roosevelt. Cuando éste asu-

(1) Los agentes del F. B. I. tienen títulos expedidos por aproximadamente 750 escuelas y universidades. Reúnen experiencia en 150 profesiones, negocios y oficios, y en 35 campos científicos distintos. De los 8,623 empleados masculinos, 4,924, es decir, el 57 por ciento, son veteranos de guerra. Además, 405 estaban en servicio militar activo a mediados de 1956.

mió la presidencia, tras el asesinato de su antecesor McKinley, hacía rato que los ladrones se enriquecían a costa del fisco.

Roosevelt estaba decidido a terminar con los robos y con las transgresiones a la ley de monopolios. Pero en el transcurso de esta lucha el Congreso se encrespó repentinamente contra el Departamento de Justicia, por utilizar «detectives» en sus investigaciones, y aprobó una enmienda a la ley de presupuesto civil. En virtud de esa enmienda, el departamento se vio privado de un organismo investigador que le permitiera reunir pruebas para los juicios que emprendía.

Roosevelt se puso furioso. Y con toda razón, teniendo en cuenta lo que había sucedido en el pasado.

Después de la Guerra de Secesión, el Congreso norteamericano aprobó diversas leyes que fomentaban la colonización rural, permitiendo que individuos y familias enteras comprasen tierras y se afincaran en el Oeste. Una de esas leyes era la llamada «Timber and Stone Act» de 1878, que reglamentaba la venta de tierras en California, Oregón, Nevada y territorio de Washington. Estos suelos se consideraban ineptos para los cultivos, pero estaban cubiertos por selvas vírgenes que valían millones de dólares.

El cumplimiento de la ley de tierras dejó mucho que desear. Simples particulares —a veces de buena fe— cercaban en beneficio propio predios fiscales. Otros, valiéndose de recursos fraudulentos, compraban enormes extensiones y las vendían a los aserraderos, acumulando fáciles y rápidas ganancias.

Hacia pocos meses que Roosevelt estaba en el cargo, cuando el secretario del Interior, Ethan A. Hitchcock, de Missouri, empezó a sospechar que su propio departamento estaba complicado en las maniobras dolosas. Algo olía mal en la Oficina General de Tierras, y el secretario dispuso una investigación. Logró que un agente del Servicio Secreto del Tesoro renunciara a su puesto y calladamente fuese a echar un vistazo a lo que ocurría en el Oeste. Sus sospechas quedaron confirmadas cuando el agente informó que algunos de los «detectives» de la propia Oficina General de Tierras estaban tan profundamente complicados en manejos turbios que prácticamente eran instrumentos de los ladrones de tierras. Temiendo confiar en su propio personal, Hitchcock resolvió que las maniobras fraudulentas fuesen investigadas por el Departamento de Justicia. Para realizar la investigación, el procurador general pidió «prestados» algunos agentes al Servicio Secreto del Tesoro. Entre esos hombres adscriptos al Departamento de Justicia, uno de los más sobresalientes era Laurence Richey, que más tarde sería secretario del presidente Herbert Hoover.

La redada de ladrones fiscales fue sensacional. Docenas de

personas fueron juzgadas y condenadas por «conspiración⁽¹⁾ para despojar a los Estados Unidos de tierras públicas». Y se recuperaron decenas de millares de acres de terrenos fiscales cercados ilegalmente o comprados merced a títulos de propiedad fraudulentos.

Pero la gran revelación se produjo cuando el senador nacional John H. Mitchell y el representante John N. Williamson, ambos del Estado de Oregón, fueron acusados de «conspiración para defraudar». Se los procesó y condenó en 1905. Para condenar a Williamson, fueron necesarios tres procesos. Años más tarde se supo que algunos de los fiscales acusadores estaban tan corrompidos y eran tan politiqueros que, en comparación con ellos, los hombres a quienes debían juzgar eran pobres inocentes...

He aquí la historia de lo ocurrido, según la investigación efectuada en 1911 por George W. Wickersham, procurador general del presidente William Howard Taft. Al preparar sus alegatos en las causas por robos de tierras ventiladas ante el juzgado federal de Oregón, el fiscal nacional Francis J. Heney solicitó la ayuda de un detective, William J. Burns, para que investigase previamente a los candidatos que iban a formar los distintos jurados. Burns y sus hombres se las ingeniaron de suerte que en los jurados predominasen abrumadoramente demócratas, populistas, socialistas y aun republicanos que eran enemigos políticos de la fracción del Partido Republicano en que militaba el senador Mitchell.

En el juicio contra Mitchell, los informes de los detectives sobre los candidatos a miembros del jurado rezaban así: «Fulano de tal pedirá condena antes de sentarse»... «Fulano, socialista, enemigo de Mitchell»... «Hombre de confianza»... «Este es capaz de condenar a Cristo»... «Este mandaría a Mitchell a la horca»... Se probó que algunas anotaciones eran de puño y letra de Burns.

Según Wickersham, era indudable que Burns había procurado la selección previa del jurado, actuando como agente del fiscal Heney. Quedó constancia de que Burns, recurriendo a la intimidación y la amenaza, había obligado a ciertos testigos a presentar falsos testimonios ante un gran jurado⁽²⁾ de acusación y ante jurados ordinarios.

Por esa época, ni Roosevelt ni el Congreso se enteraron del episodio protagonizado por Burns y Heney. Pero el hecho de que miembros del Parlamento fuesen investigados, acusados y condenados, bastó para aumentar la tensión entre el Con-

(1) *Conspiracy*, figura delictiva equivalente a «asociación ilícita». (N. del T.)

(2) *Grand Jury*, cuerpo formado por 12 a 23 miembros que realiza una investigación preliminar de los hechos, y en caso necesario encausa formalmente al sospechoso de un crimen ante un *petit jury*, o pequeño jurado, compuesto por 12 miembros, que es el encargado de juzgarlo. (N. del T.)

greso y la Casa Blanca. Otros acusados en este caso fueron el comisionado nacional Marion R. Biggs y un hombre llamado Van Gesner, que era socio comercial del representante Williamson. El principal acusador debió ser el fiscal nacional de distrito, John H. Hall, hasta que se comprobó que el propio Hall estaba complicado en los despojos de tierras fiscales. Fue exonerado, acusado, condenado y finalmente indultado en virtud de los tejemanejes que se hicieron con los miembros del jurado. Gesner y Biggs pagaron cada uno una multa y cumplieron una condena en la cárcel. El senador Mitchell apeló de la sentencia, pero lo sorprendió la muerte antes de que los tribunales superiores produjeran el fallo. Williamson también apeló y obtuvo de la Suprema Corte una revocatoria, en virtud de la cual luego fueron retirados los cargos que pesaban contra él.

El empleo de detectives por el gobierno de Roosevelt en esta campaña de limpieza fue objeto de serios ataques. Circulaban rumores de que el presidente se valía de pesquisas para investigar en la vida privada de los miembros del Congreso y reservar la información obtenida como una mordaza política. Estos rumores nunca se probaron, antes o después de la muerte de Roosevelt, pero contribuyeron a lanzar una sombra de sospecha sobre los métodos de investigación empleados para combatir los monopolios y los robos de tierras.

Las anécdotas de «espías» habían creado ya una atmósfera de hostilidad cuando en 1907 el procurador general Charles J. Bonaparte señaló al Congreso la falta de un organismo investigador en el Departamento de Justicia.

«Creo necesario —señalaba Bonaparte— llamar la atención del Congreso sobre la anomalía de que el Departamento de Justicia carece de un organismo ejecutivo y, más en particular, de una fuerza permanente de «detectives» bajo su fiscalización inmediata... Parece evidente que el departamento al que no sólo el presidente, sino los tribunales de los Estados Unidos deben dirigirse en primer término para asegurar el cumplimiento de las leyes, debe tener entre sus propios resortes los medios para ejecutar ese cumplimiento; un Departamento de Justicia sin ninguna clase de fuerza policial permanente bajo su dependencia ciertamente no está del todo equipado para su función».

El Congreso ignoró intencionadamente la petición de Bonaparte, aunque ya en 1871 se había reconocido la necesidad de realizar ciertas tareas de investigación dentro del mismo Departamento de Justicia. Ese año se había votado en el presupuesto una partida de 50.000 dólares para «la investigación y represión de crímenes cometidos contra los Estados Unidos», y el procurador general había designado el primer

«agente especial» del departamento para dirigir las indagaciones.

Con el transcurso de los años, el Departamento de Justicia (y otras dependencias del gobierno) adoptaron la costumbre de «pedir prestados» agentes al Servicio Secreto del Departamento del Tesoro. Este Servicio Secreto había sido organizado después de la Guerra Civil, con el fin principal de combatir una ola de falsificaciones de billetes y valores fiscales. Los agentes prestados, aunque trabajaran para el Departamento de Justicia, seguían presentando sus informes al jefe del Servicio Secreto, y se consideraban responsables ante el jefe del Servicio Secreto y no ante el procurador general.

Dentro de este sistema, ningún funcionario del gobierno ejercía en realidad fiscalización o vigilancia sobre las actividades de los agentes. La mayoría de ellos eran contratados para servicios temporarios, y elegidos entre una lista de detectives particulares «aprobados» por el Servicio Secreto; se sospechaba que algunos eran ex malhechores y se los llamaba empleados del Servicio Secreto, aunque en verdad no eran agentes regulares del mismo.

Este sistema de emergencia se prolongó hasta el 27 de mayo de 1908, cuando el Congreso prohibió al Departamento de Justicia —y a todos los demás departamentos ejecutivos— que utilizaran agentes del Servicio Secreto para investigar violaciones de las leyes. La prohibición fue consumada mediante una enmienda a la ley de presupuesto civil.

La medida constituyó un golpe demoledor para el cumplimiento de las leyes federales, y Roosevelt —que había sido antaño comisionado de policía en la ciudad de Nueva York⁽¹⁾— lo comprendió plenamente. Sabía que para ejecutar las leyes del país era necesario tener investigadores que reuniesen pruebas de los delitos. La ley era, en realidad, una barrera en la campaña de limpieza general emprendida por Roosevelt.

El presidente había intentado prevenir la enmienda. Pocas semanas antes de la votación parlamentaria, había escrito al presidente de la Cámara de Representantes Joseph G. Cannon diciendo: «La disposición referente al empleo de hombres del servicio civil perjudicará mucho al Gobierno en sus es-

(1) En 1901, cabalgando un día por el parque de Rock Creek, el presidente Theodore Roosevelt se volvió hacia el policía montado, negro, que lo acompañaba y le dijo:

—¿Tienes un muchacho al que quieres emplear?

El policía Joseph F. Amos respondió:

—Tengo uno, pero yo mismo no puedo dominarlo.

El presidente respondió:

—Ése es el que quiero.

Y así fue como James E. Amos se convirtió en guardaespaldas, ayudante y amigo de Roosevelt. Era el único que estaba a su lado la noche que murió el ex presidente, en 1919. Jim Amos ingresó en el F. B. I. como agente especial en 1921 y se convirtió en algo así como una leyenda dentro de la organización. En 1941 pudo optar por el retiro, pero a pedido del director J. Edgar Hoover siguió en servicio activo hasta octubre de 1953. Murió a los 74 años de edad, dos meses después de retirarse.

fuerzos por prevenir y castigar el delito. No hay alarma más tonta que esta que se alza contra los espías; sólo los criminales pueden temer a nuestros agentes».

El *Times* de Nueva York, en un editorial titulado «Instrumentos de ladrones», decía: «Según nuestros informes, ha sido la comandita de *tiburones de tierra firme* quien ha logrado que la Comisión de Presupuesto aprobara y la Cámara sancionara la enmienda a la ley civil Sundry, que anula la acción preventiva e investigadora del Servicio Secreto... Los representantes, aun sin quererlo, se han convertido en instrumentos de ladrones. Los senadores quedan debidamente prevenidos».

Durante breve tiempo hubo algunas esperanzas de que la enmienda fuese rechazada por el Senado. Desde la ciudad de Nueva York, el fiscal nacional Henry L. Stimson (que más tarde integraría los gabinetes de los presidentes Taft, Hoover y Franklin D. Roosevelt) escribía al procurador general Bonaparte: «En su lugar yo consideraría mutiladas por semejante estatuto todas las facultades ejecutivas de mi cargo. ¿No hay modo de detener la enmienda en el Senado?».

Pero el Congreso no estaba con ganas de escuchar advertencias.

Aprobada la enmienda restrictiva, circuló por el Departamento de Justicia la versión de que el presidente Roosevelt había llamado a la Casa Blanca al procurador general Bonaparte y le había ordenado organizar un servicio de investigación.

Un memorándum que se conserva en los archivos del F. B. I., escrito por el veterano agente James G. Findlay, dice que se supo por aquella época que «el presidente Roosevelt ordenó a Bonaparte que crease un servicio de investigación dentro del Departamento de Justicia, no sujeto a otro departamento o dependencia alguna, y que no respondiera ante nadie salvo ante el procurador general». Y el 26 de julio de 1908 Bonaparte dictó la orden creando una agencia de investigación dentro de su departamento: esta orden fue el comienzo del F. B. I.

El agrio debate entre el Congreso y la Casa Blanca cumplió una finalidad. Suscitó el convencimiento general de que el Departamento de Justicia necesitaba, y debía tener, un brazo investigador, pero que, al mismo tiempo, no se debía permitir que un organismo de ese tipo se convirtiera en un «sistema de espionaje» terrorista como el que habían utilizado los déspotas en Europa.

El 4 de marzo de 1909, doce días después que el presidente William Howard Taft reemplazara a Roosevelt en la Casa Blanca, el nuevo procurador general dio al servicio de in-

vestigación del departamento una garantía de estabilidad y la dignidad de un título: *Bureau of Investigation*.

Este fue el comienzo de la historia en cuyo transcurso, a medida que el Congreso expandía la jurisdicción del F. B. I., sus agentes cumplieron extrañas misiones en todo el país y luego en otros sitios del mundo.

Una de estas misiones fue la encomendada al agente Jim Trent⁽¹⁾ en lo más profundo de los montes Cumberland, Estado de Tennessee. Después de dejar su automóvil en la ruta, Trent había ascendido trabajosamente un sendero montañoso que conducía a una choza gris, acurrucada contra el cerro en las sombras del atardecer.

Por fin Trent hizo un alto en el camino. Allá adelante, en un claro, vio la choza y se preguntó si el hombre que buscaba estaría allí...

Bill Howard era ese hombre. Un joven cerril, fugitivo de la justicia y probablemente tan buen tirador como el sargento Alvin York, el héroe más condecorado de la primera guerra mundial, que vivía unos pocos kilómetros más lejos, detrás de los cerros. Jim Trent buscaba a Bill Howard porque el gran jurado federal de Nashville lo acusaba de violar la ley de trata de blancas, comúnmente llamada ley Mann. Howard, al parecer, había obligado a una muchacha estudiante de Jamestown, Tennessee, a acompañarle en un viaje a Kentucky, donde abusó de ella antes de dejarla volver a su casa.

Pero Bill Howard era un hombre difícil de encontrar en los cerros, sobre todo para un desconocido que hacía demasiadas preguntas.

Trent siguió trepando el sendero, pasó junto a un pequeño cementerio y llegó al porche de la cabaña. Golpeó y, al abrirse la puerta, entró. Lo primero que vio fue una hilera de rifles apoyados en la pared. Después, cuatro hombres y una mujer que lo observaban con mirada tan fría como el viento de afuera.

Trent supuso que un hombre anciano, de barba y cabellos grises, era el padre de Howard. Y efectivamente lo era. Trent se identificó y le explicó el motivo de su presencia.

—Si su hijo está aquí, señor Howard —declaró—, tengo que llevármelo.

El anciano respondió con voz inexpresiva:

—No estoy tan seguro de que se lo lleve.

Y a continuación explicó lo que pensaba de la «justicia» en general, de los recaudadores de impuestos en particular y del mismo Trent.

(1) Nombre supuesto.

Cuando cesó el torrente de recriminaciones, dijo Trent:

—No le critico su manera de pensar, señor Howard. Si usted dice que su hijo no está aquí, aceptaré su palabra. Pero, si está, tengo que llevarlo detenido.

El viejo gruñó:

—No está, y ustedes no lo van a encontrar en mil años.

—Muy bien. Si usted dice que no está aquí, acepto su palabra y me marchó.

Trent se dirigió a la puerta. Pero una voz tranquila lo detuvo:

—¡Usted no sale de esta casa, amigo!

Trent se volvió lentamente y miró esos rostros, tan duros e implacables como las lápidas del cementerio por donde acababa de pasar. Con un encogimiento de hombros, se sentó en una silla de cañas, cerca de la chimenea. Reinó silencio en la habitación, como si todos esperasen que afuera las sombras se tornaran más profundas.

Trent captó la faz ridícula de esta comedia rural representada en una miserable y solitaria choza montañesa. Pero no había nada de ridículo en aquellos fusiles, y tampoco en los duros semblantes que lo rodeaban. Por eso prefirió sentarse. La mujer salió del cuarto, pero los hombres no se movieron, salvo de tanto en tanto para hacer circular una jarra de whisky de maíz o para encender una lámpara de aceite colgada en un rincón.

Y entonces Trent descubrió el violín. Estaba en la repisa de la chimenea. Alargó la mano para tomar el instrumento y comenzó a afinarlo, temiendo a cada instante que alguien se lo arrancara de un golpe. Pero nadie se movió. Empezó a tocar, suavemente al principio, melodías como «Carry Me Back to Old Virginy» y «The Rosary». Y no tardó en sentir que se aflojaba la tensión de la atmósfera. Siguió recordando viejas canciones de la época en que formaba parte de la «orquestra» de la escuela secundaria.

A medianoche, el agente Trent tocaba «She'll Be Comin' Round the Mountain»; de la penumbra brotaban pedidos especiales y alguien marcaba el compás con el pie.

Por fin Trent dejó el violín en su sitio. Ahora o nunca, pensó. Y dijo:

—Bueno, señor Howard, si tiene usted una cama de sobra, me gustaría pasar la noche.

Y se quedó aguardando la decisión.

El viejo lo miró largamente. Por fin meneó la cabeza y tendió la mano, casi en un gesto de resignación.

—Mande los papeles a Louisville —dijo—. Yo haré que el muchacho se entregue allá.

Al día siguiente, tras un cordial desayuno, Trent salió de

la cabaña. Pocos días más tarde Bill se entregó a las autoridades, declarándose culpable. Fue multado en 200 dólares.

Podrá parecer que este antiguo incidente ocurrido en las colinas de Tennessee tiene poca o ninguna importancia en el anecdotario del F. B. I. Históricamente, sin embargo, tuvo gran trascendencia.

La ley que reprime la trata de blancas, aprobada por el Congreso en 1910, apuntaba contra el traslado o comercio interestatal o internacional de mujeres y muchachas con fines inmorales. El principio establecido por esta legislación dio al gobierno federal una jurisdicción más amplia sobre los delitos de orden interestatal, es decir, aquellos que se cometen franqueando los límites de uno o más de los Estados que componen el país. Esta fue la ley que permitió al F. B. I. convertirse en un organismo de alcances nacionales en la lucha contra el crimen.

Hacia 1902 la trata de blancas se había transformado en un escándalo internacional tan vasto que representantes de trece naciones europeas se reunieron en París para discutir el problema. De la conferencia surgió un acuerdo que preveía un esfuerzo común para detener el tráfico del vicio. El gobierno de los Estados Unidos adhirió formalmente al pacto, según anuncio efectuado por el presidente Theodore Roosevelt el 15 de junio de 1908.

Se levantó entonces un clamor público exigiendo una drástica acción policial, no sólo contra la importación de mujeres extranjeras con fines de prostitución, sino contra las pandillas de explotadores del vicio que trasladaban mujeres de una ciudad a otra de los Estados Unidos. Artículos de diarios y revistas daban a sus escandalizados (y a veces ávidos) lectores la imagen de un mundo donde el sexo estaba en venta y donde los «sindicatos» del vicio cosechaban continuamente grandes ganancias.

Una de las mayores sensaciones de la época se produjo cuando el fiscal nacional en Chicago secuestró correspondencia y libros de contabilidad que revelaban las operaciones de un «sindicato» del vicio encabezado por Alphonse Dufaur y su esposa Eva. Las constancias demostraban que durante un período de más de diez años los agentes del «sindicato» habían introducido en los Estados Unidos alrededor de 20.000 mujeres y muchachas, haciéndolas figurar, ante las autoridades de inmigración, como sus esposas o hermanas. En los doce meses anteriores a su arresto, los libros de contabilidad de los Dufaur registraban un ingreso de 102.000 dólares (1).

(1) Los Dufaur falsificaron títulos por valor de 25.000 dólares y huyeron. Al pagarlos, regresaron a Francia.

Ante estos sucesos, el representante James Robert Mann, de Illinois, presentó a la Cámara su «ley de tráfico de esclavas blancas», destinada no sólo a aplastar el comercio internacional e interestatal de mujeres, sino también a fiscalizar el simple traslado interestatal de mujeres con fines inmorales.

El proyecto tuvo inmenso eco popular y emocional. Pero el debate en el Congreso, se limitó, en su mayor parte, a los aspectos constitucionales de la medida; los opositores a la misma sostenían que el ataque contra el vicio era una invasión de las facultades de las policías estatales. Los partidarios de la ley argumentaron que, según el artículo primero de la Constitución, el Congreso tiene la facultad «...de regular el comercio con las naciones extranjeras, y entre los distintos Estados». En el verano de 1910 el Congreso sancionó el proyecto por unanimidad. La Suprema Corte, también por unanimidad de sus miembros, sostuvo que la ley de tráfico de esclavas blancas era constitucional⁽¹⁾.

Desde el primer momento, sin embargo, fue evidente que la ley Mann daría origen a numerosas controversias. Se llamaba ley de tráfico de esclavas blancas, pero prohibía el «traslado» interestatal de una mujer con fines inmorales aun cuando no fuese «esclava». Y la Suprema Corte dictaminó que la mujer no era necesariamente la víctima inocente en tales casos: podía ser ella misma culpable de complicidad⁽²⁾.

Amarillentas actuaciones existentes en el Departamento de Justicia demuestran que, cuando el Congreso aprobó la ley Mann, el procurador general Wickersham previó las dificultades que ella iba a crear. Sabía muy bien que era necesario aplicarla con prudencia. Previno a los juzgados federales que evitaran cuidadosamente «convertirse en tribunales ordinarios de faltas y ocuparse de transgresiones a los edictos policiales de la comunidad, que deben ser diligenciadas ante los tribunales locales».

Al mismo tiempo previno a los fiscales nacionales: «En cuanto a los casos específicos, el departamento debe confiar en la discreción de los fiscales de distrito, que tienen conocimiento directo de los hechos y oportunidad de entrevistar personalmente a los testigos, y que en consecuencia podrán determinar las circunstancias agravantes del delito, si existen; la edad e interés relativo de las partes; los motivos de los demandantes; y las causas, si existen, para pensar que

(1) El miembro de la Suprema Corte leyó la decisión del tribunal el 24 de febrero de 1913 y dijo, en parte: «Incuestionablemente existe en los Estados fiscalización sobre la moral de los ciudadanos y cabe admitir que la misma califica la prostitución de delito. Es una fiscalización, sin embargo, que sólo puede ejercerse dentro de la jurisdicción de los Estados, pero existe un dominio al que los Estados no pueden alcanzar, y sobre el cual únicamente el Congreso tiene poder... El ejercicio de ese poder no invade la jurisdicción de los Estados». *Hoke v. U. S.*, 227 U. S. 308.

(2) *U. S. v. Holte*, 230 U. S. 140.

han de cumplirse mejor los fines de la justicia mediante un proceso substanciado bajo las leyes federales y no bajo las leyes del Estado que tiene jurisdicción primera».

De este modo Wickersham estableció las normas básicas para encuadrar las violaciones de la ley Mann, normas que han permanecido invariables en el transcurso de los años⁽¹⁾.

En aquella primera época, los jefes del Servicio de Investigación carecían de verdadera autoridad. Estaban facultados para trasladar agentes de una ciudad a otra, pero aun en esto tropezaban a menudo con la hostilidad de políticos que cuidaban a sus protegidos.

Gradualmente, sin embargo, iban aumentando las responsabilidades del Servicio⁽²⁾, hasta incluir la investigación de todas las transgresiones a las leyes federales, salvo las específicamente asignadas a otros organismos investigadores del gobierno⁽³⁾.

Después empezó a cernirse la tormenta sobre Europa. Y el Servicio distaba mucho de estar preparado para la prueba.

(1) Desde la aprobación de la ley Mann en 1910, las investigaciones del F. B. I. han conducido a más de 15.000 condenas por trata de blancas. Al ser indagadas las ramificaciones interestatales del vicio, se han descubierto focos de avaricia, brutalidad y corrupción. Notorios delincuentes consagrados a una de las más degradantes explotaciones del vicio fueron llevados a la justicia y se puso freno a un comercio de carne humana que producía millones de dólares a los grandes bonetes del placer.

Las grandes pandillas de traficantes del vicio que antes existían no pueden ya organizarse con tanta facilidad, como resultado de la vigilancia del F. B. I. que arresta a los tenebrosos antes que puedan organizarse.

(2) En 1912 las principales funciones investigadoras del F. B. I. eran las siguientes: antitrust, trata de blancas, estatutos de neutralidad, tráfico interestatal ilegítimo de licores intoxicantes, quiebras fraudulentas, imposturas y localización de fugitivos.

(3) En un «Informe Preliminar de la Comisión Elegida para Investigar las Agencias Ejecutivas del Gobierno» (Senado norteamericano, 1937), se declaraba que «en 1900, cuando el Servicio tuvo su verdadero comienzo, la intención del Congreso era que la tarea de imponer el cumplimiento de las leyes en general debía estar centrada en el Departamento de Justicia; y que otras dependencias federales destinadas a vigilar el cumplimiento de las leyes debían mantenerse dentro de los límites jurisdiccionales de sus respectivos departamentos».

Los años de inquietud

III. - ESPIONAJE Y SABOTAJE, SOCIEDAD ILIMITADA

El ejército imperial alemán marchaba a través de Bélgica, entre las llamas de la primera guerra mundial, cuando un transatlántico ancló en el puerto de Nueva York, en agosto de 1914. Entre los pasajeros que desembarcaron se encontraban dos caballeros cortesés, impecablemente vestidos, que tenían un profundo interés en que los Estados Unidos fuesen neutrales.

Estos dos hombres eran el conde Johann von Bernstorff, embajador alemán, y el doctor Heinrich Albert, agregado comercial. Las reglas de la inmunidad diplomática les ahorraron la demora de abrir sus equipajes para la inspección aduanera. Von Bernstorff se dirigió a la embajada alemana en Washington, y el doctor Albert a sus oficinas en el Hamburg-American Building, en Nueva York.

La situación era favorable para von Bernstorff y sus secuaces. América seguía siendo la «inocente» desprevenida, magníficamente aislada e inexperta en las intrigas de las potencias europeas. A los norteamericanos les interesaban más sus propias dificultades y sinsabores que los asuntos de Europa. La frontera mexicana estaba convulsionada y al sur del Río Grande las revoluciones se prolongaban desde tres años antes. Reinaba inquietud en la industria, donde los jóvenes sindicatos luchaban para ser reconocidos por los patronos. Las diferencias laborales desembocaban a menudo en terribles y sangrientos conflictos, como la reñida batalla entre cuatrocientos mineros huelguistas y doscientos milicianos estatales, en Colorado, que según un cronista «duró más y fue más terriblemente disputada que la mayoría de las batallas de la revolución mexicana». Hubo veinticinco muertos, inclusive catorce niños y dos mujeres.

En esta atmósfera de fermentación, pequeños grupos de hombres y mujeres predicaban la doctrina de que los obreros debían tomar el dominio de la producción, y para ello

fomentaban la violencia, invitándolos a unirse al I. W. W. (*Industrial Workers of the World*, Trabajadores Industriales del Mundo) y a otros grupos extremistas, entre cuyos miembros se contaban quienes habían de ser más tarde los cabezas del Partido Comunista norteamericano.

A la llegada del embajador alemán, el contraespionaje en los Estados Unidos estaba a cargo de cinco pequeñas dependencias. El Departamento de Justicia contaba con el Servicio de Investigación, creado seis años antes y mal organizado, cuya función consistía en investigar las violaciones de las leyes federales. El Servicio Secreto era responsable de la protección del presidente, la represión de falsificaciones y otras tareas similares. El Departamento de Estado tenía una sección de inteligencia propia. El personal de la sección de inteligencia del Ejército sumaba dos oficiales y dos empleados. La Marina sólo tenía unos pocos oficiales asignados a la inteligencia naval. Cada una de estas unidades operaba por cuenta propia, sin coordinación con las demás.

Von Bernstorff puso en seguida manos a la obra. Su personal era escaso pero eficiente y bien distribuido: el doctor Albert manejaba el dinero y dirigía complejas maniobras financieras; el capitán Karl Boy-Ed, agregado naval, se encargaba de sabotear los buques que llevaban pertrechos a los aliados; y el capitán Franz von Papen ⁽¹⁾, agregado militar, vigilaba otras misiones de espionaje y sabotaje en todo el territorio de los Estados Unidos y el Canadá.

Cinco meses después de desembarcar von Bernstorff y Albert en Nueva York, la embajada imperial, con sede en Massachusetts Avenue 1435-1439, N. W., Washington, recibió un mensaje secreto del estado mayor general alemán, despachado vía Estocolmo, que rezaba así:

Para el agregado militar: los individuos capaces de efectuar sabotajes en los Estados Unidos y Canadá pueden reclutarse consultando a las siguientes personas: (una lista de tres nombres)... En los Estados Unidos, el sabotaje puede alcanzar toda clase de fábricas de suministros de guerra; en cambio, no deben tocarse ahí ferrocarriles, represas y puentes. Bajo ninguna circunstancia comprometer la embajada, y tampoco la propaganda germano-irlandesa.

En los meses subsiguientes, misteriosas explosiones volaron depósitos de municiones, almacenes de algodón pólvora, fábricas de pólvora y de productos químicos. Los incendios

(1) Von Papen contribuiría más tarde a que Hitler conquistara el poder y se convertiría en figura importante de la diplomacia nazi. Desde 1936 hasta 1938 fue embajador en Austria, y durante la segunda guerra mundial, embajador en Turquía. Después del conflicto, los aliados lo juzgaron como criminal de guerra, pero fue puesto en libertad.

desmantelaban las fábricas de artefactos bélicos. Buques norteamericanos cargados con municiones y otros suministros, en ruta a Inglaterra, Francia y Rusia, se incendiaban en el mar y muchos se hundieron.

En la oscura madrugada del 30 de julio de 1916, terribles estallidos de mil toneladas de dinamita sacudieron a Manhattan y Jersey City, en el Estado de Nueva Jersey. Las explosiones ocurrían en la isla Black Tom, en el puerto de Nueva York, importantísimo embarcadero de los pertrechos que iban a Europa. La atronadora detonación se oyó a más de ciento cincuenta kilómetros de distancia. La onda de choque destrozó casi todas las ventanas de Jersey City, y en las aceras de Manhattan y Brooklyn llovieron las esquirlas de destrozados ventanales. La isla de Black Tom quedó inutilizada como embarcadero. Murieron tres hombres y un niño.

Una explosión similar conmovió a Kingsland, en Nueva Jersey, en enero de 1917, cuando un establecimiento de armamento de granadas se incendió, desparramando trozos por toda la zona. Afortunadamente, los proyectiles carecían de espoleta... y no estallaron. Los daños fueron calculados en 17 millones de dólares ⁽¹⁾.

En un caso de sabotaje, un ex soldado alemán, Werner Horn, dinamitó el puente internacional Estados Unidos-Canadá, en Vanceboro, en el Estado de Maine. Los agentes alemanes le dieron una valija llena de dinamita para realizar su obra y le pagaron 700 dólares de viáticos.

Horn colocó la dinamita en el puente, encendió la espoleta, con un alfiler clavó una diminuta bandera alemana en la manga de su sobretodo y se alejó. Horas más tarde fue detenido y alegó que, puesto que usaba la escarapela alemana, debía ser tratado como prisionero de guerra. Lo condenaron, mas no por sabotaje —pues ninguna ley federal preveía el sabotaje—, sino por transportar dinamita en un tren de pasajeros que cruzaba el límite de un Estado.

El contraespionaje británico estaba prevenido contra la campaña de los saboteadores alemanes en los Estados Unidos. El mensaje del estado mayor general alemán a von Bernstorff fue interceptado por el departamento de inteligencia del Almirantazgo británico y transmitido a funcionarios del Departamento de Estado norteamericano en Londres. En los archivos del Departamento de Justicia, sin embargo, no se ha encontrado constancia de que la información haya llegado al Servicio de Investigación.

(1) La Comisión Mixta Germano-Americana de Reclamaciones, tras un prolongado litigio, terminó por adjudicar la responsabilidad legal al gobierno alemán. Pero en lo referente a las explosiones de Black Tom y Kingsland (Nueva Jersey), sólo en junio de 1939 se llegó a un acuerdo definitivo, al fijarse una indemnización por daños de 50 millones de dólares.

A comienzos de 1915, Berlín mandó otro mensaje a von Bernstorff: «Informe a Rintelen, que llega hoy..., sobre las proposiciones de Papen».

Y al día siguiente: «Informe a Boy-Ed sobre las proposiciones de Papen para ser transmitidas a Rintelen».

El recién llegado de Alemania, vía Noruega, con un falso pasaporte suizo, era Franz von Rintelen, oficial de la marina alemana y uno de los saboteadores más audaces y llenos de recursos que hayan pisado suelo norteamericano. En pocos días tuvo a su disposición 500.000 dólares.

Von Rintelen actuó con rapidez. Conocía los Estados Unidos, que había visitado en varias oportunidades para realizar estudios bancarios. Hablaba corrientemente el inglés. Era persuasivo, simpático y semejante a un camaleón por su capacidad para adaptarse a distintas situaciones.

Von Rintelen organizó en Nueva York una firma comercial: E. V. Gibbons, Inc., dedicada a exportar suministros de guerra a Europa. Los pertrechos que enviaba E. V. Gibbons, Inc., se embarcaban en buques que eran saboteados a voluntad de Rintelen. Sus cómplices formaron una compañía de seguros marítimos como medio apropiado para obtener planes de navegación y declaraciones de carga.

Fue el escurridizo von Rintelen quien concibió la idea de organizar el «Consejo Nacional por la Paz», sindicato que pagaría compensaciones extremadamente generosas a sus miembros en huelga dentro de las fábricas militares o en las zonas portuarias. Rintelen admitió más tarde que a él mismo la idea le pareció fantástica en un principio. Pero cuanto más pensaba en ella, menos extravagante le parecía.

Von Rintelen se procuró la ayuda de toda clase de personas. Entre ellas había dos miembros del Congreso, los representantes Frank Buchanan y H. Robert Fowler, de Illinois. En sus memorias, el espía alemán recuerda:

Lo primero que hice fue alquilar un gran salón y organizar un mitin, en el que hombres muy conocidos declamaron ruidosamente contra la exportación de municiones. Los señores Buchanan y Fowler, miembros del Congreso; el señor Hannis Taylor, ex embajador norteamericano en Madrid..., junto con numerosos profesores universitarios, teólogos y líderes sindicales aparecían en el escenario y pronunciaban fogosos discursos. Yo me sentaba inadvertido en un rincón y veía fructificar mis planes. Ninguno de los oradores sospechaba remotamente que estaba al "servicio" de un oficial alemán sentado entre el auditorio.

Pero Samuel Gompers, presidente de la Federación Americana del Trabajo, reconoció en el sindicato un «frente» alemán. Y protestó: «El movimiento obrero norteamericano en

pleno es leal a los Estados Unidos. Nada tiene que ver con esas actividades antiamericanas, progermanas, promovidas por el Consejo de la Paz; y por el contrario, se opone a ellas».

Todos los planes de von Rintelen, sin embargo, parecían prosperar. Descubrió que el doctor Walter T. Scheele, brillante químico de origen alemán con veinticinco años de residencia en los Estados Unidos, había inventado una pequeña, ingeniosa y diabólica bomba incendiaria capaz de estallar en un plazo de minutos o días, según fuera necesario. El doctor Scheele estaba ansioso por cooperar, y por otra parte ya había participado activamente en la conspiración de von Bernstorff. También había realizado una substancial contribución a la causa alemana cuando descubrió un procedimiento para embarcar petróleo sólido, disfrazado como fertilizante.

Von Rintelen puso al doctor Scheele al frente de la fabricación de las bombas, a bordo de un buque alemán internado en Hoboken. El químico alemán llegó a preparar de treinta y cinco a cincuenta por día, mientras von Rintelen buscaba en la zona portuaria hombres dispuestos a introducir los artefactos en naves que zarpaban cargadas con suministros para los aliados. Se cree que von Rintelen fue responsable de la destrucción parcial o total de los cargamentos contenidos en treinta y seis buques, por un valor total de 10.000.000 de dólares (1).

Mientras von Rintelen, von Papen y Boy-Ed organizaban el sabotaje (y en esa época no había leyes federales que reprimieran el espionaje o el sabotaje), el doctor Heinrich Albert se encargaba de monopolizar materiales de guerra escasos y obtenía para sí una parte de la producción norteamericana de municiones.

La hazaña más audaz del doctor Albert consistió en organizar una firma comercial, la Bridgeport Projectile Co., cuya función era negociar contratos que durante más de un año frenaron importantes suministros para los aliados. El agregado comercial alemán llegó a conseguir que el gobierno estadounidense otorgara a esa «firma» una orden de granadas por valor de 1.210.000 dólares, y otra de 146 cañones navales de 5 pulgadas por valor de 1.387.000. La intención de Albert, por supuesto, era no entregar nada.

El Servicio de Investigación descubrió la pista de von

(1) En agosto de 1915 el gobierno alemán ordenó a von Rintelen regresar a su país. Pero el espía fue sacado del barco e internado en Londres. En abril de 1917, devuelto a los Estados Unidos, fue juzgado ante un tribunal federal por conspiración en perjuicio del comercio internacional. En mayo de 1917 fue condenado y sentenciado a prisión. En noviembre de ese mismo año von Rintelen se declaró culpable del cargo de perjurio, por haber pretendido obtener pasaporte norteamericano. Fue sentenciado a veinte meses de cárcel en la penitenciaría de Atlanta, Georgia. En febrero de 1918 se le aplicó una sentencia adicional de dieciocho meses y 2.000 dólares de multa por entrega clandestina de bombas a bordo de un buque. En 1920 fue indultado a condición de que abandonara el país.

Rintelen cuando, usando un nombre supuesto, pretendió comprar al gobierno 300.000 fusiles. Después, un agente del Servicio Secreto, en un tranvía, escamoteó al doctor Albert un portafolios que el momentáneamente distraído espía alemán había dejado en el asiento contiguo al suyo. El contenido del portafolios descubrió algunos de los secretos de la maquinaria montada por von Bernstorff y reveló a los funcionarios del gobierno los primeros detalles de lo que estaba ocurriendo.

La historia completa de las intrigas alemanas fue esclarecida después que los Estados Unidos entraron en la guerra. El Servicio de Investigación supo que los alemanes habían dejado un depósito lleno de documentos en el consulado suizo, en el noveno piso de la calle Broadway número 11, Nueva York, y el superintendente de división Charles De Woody encomendó a varios agentes la obtención de esos papeles. Después que los empleados consulares suizos salieron de la oficina de Broadway una tarde de abril, los agentes penetraron en el consulado por un túnel abierto en la pared. Allí encontraron cajones y baúles atados con metros de cordel y lacrados con el sello imperial alemán.

Trabajando con gran rapidez y cuidado, los agentes retiraron cuidadosamente los sellos y vaciaron los baúles y cajones, que contenían casi una tonelada de papeles, libros de contabilidad, códigos, cartas y comprobantes. Cuando se fueron, la habitación tenía el mismo aspecto que antes, inclusive los metros de cordel que ceñían baúles y cajones. Los sellos estaban intactos.

De Woody informó:

Estos documentos revelaron los métodos utilizados por el enemigo para el transporte de materiales y suministros de guerra en buques enemigos que navegan bajo banderas neutrales. Asimismo permitieron recaudar información sobre los códigos y actividades de espionaje enemigos en este país desde el comienzo de la guerra.

En el transcurso de 1916 la opinión pública norteamericana se fue volcando lentamente contra Alemania. El 31 de enero de 1917 Alemania reanudó la guerra submarina sin restricciones y hundió buques norteamericanos sin aviso. El 6 de abril el Congreso declaró la guerra a Alemania. El presidente Woodrow Wilson encomendó al Servicio de Investigación la tarea de poner en práctica su declaración referente a los ciudadanos de países enemigos.

El Servicio sólo tenía 300 agentes para fiscalizar las actividades de más de 1.000.000 de hombres obligados a registrarse como ciudadanos de países enemigos. Y además debía realizar sus tareas ordinarias. En Inglaterra, todos los alemanes habían sido internados hasta el fin del conflicto, pero el gobierno

de Wilson opinaba que semejante plan era imprudente y difícil de llevar a la práctica. Se pensaba que la gran mayoría de los llamados extranjeros enemigos permanecerían leales. Y, en efecto, así sucedió.

Veinticuatro horas después de la declaración de guerra, sin embargo, 63 extranjeros de países enemigos estaban arrestados; y en el primer mes del conflicto ese número ascendió a 125. Durante todo el período de guerra, unos 6.300 extranjeros fueron detenidos por orden presidencial, pero sólo 2.300 quedaron bajo custodia del ejército. La mayoría salieron en libertad bajo caución juratoria.

El Congreso votó una ley de servicio militar selectivo, y los hombres comprendidos entre los veintiuno y los treinta años de edad, inclusive, recibieron orden de presentarse a la primera leva, efectuada el 5 de junio. El día transcurrió tranquilamente.

Pero un creciente amago de histeria empezaba a recorrer los Estados Unidos. La nación experimentaba su primera ola de temor a los espías. El *Tribune* de Nueva York proclamaba que los espías estaban «en todas partes». Crecía la cólera contra el I. W. W. y los grupos anarquistas, cuyos líderes se oponían a la guerra y al llamamiento bajo banderas al mismo tiempo que el presidente Wilson apelaba al patriotismo de la nación.

El resentimiento contra el I. W. W. se alimentaba en las propias declaraciones de dicha organización, como ésta: «...abiertamente nos declaramos opositores de todo sectarismo o patriotismo nacionalista y del militarismo predicado y sostenido por nuestro enemigo: la clase capitalista». Aparecieron carteles con el nombre del líder del I. W. W., W. D. Haywood: «Sabotaje: sabotaje significa empujar hacia atrás; arrancar o quebrar los colmillos del capitalismo».

Se extendían las sospechas de que el I. W. W. estaba financiado con dinero enemigo, y de que sus miembros eran responsables de los actos de sabotaje que se realizaban en Chicago y zonas del Oeste.

En el Departamento de Justicia, el subprocurador general Charles Warren era partidario de que los civiles que obstruían el esfuerzo de guerra fuesen juzgados por tribunales militares. Finalmente llevó su propuesta a los miembros del Congreso. Pero el presidente Wilson y su procurador general, Thomas W. Gregory, la rechazaron. Gregory dijo que el proyecto «subvertía fundamentales principios de justicia». El deseaba leyes que contemplaran el espionaje, el sabotaje y los actos y expresiones calificados de desleales, inclusive manifestaciones habladas o escritas que apoyaran la causa enemiga. El Congreso aprobó esas leyes.

Se admitió, sin embargo, que la enmienda a la ley de espionaje que reprimía las «expresiones sediciosas» podía ser fuente de abusos. El Departamento de Justicia instruyó a los fiscales nacionales:

No debe permitirse que esta ley se convierta en instrumento para suprimir la crítica honrada y legítima de la administración, o la discusión de la política gubernamental; tampoco debe permitirse que se transforme en instrumento para venganzas personales o persecuciones.

Sin embargo, en todo el país surgieron organizaciones voluntarias de ciudadanos que se erigieron en jueces de actos y expresiones desleales. En Henry County, Missouri, el consejo de defensa encabezado por el reverendo A. N. Lindsay creó sus propios métodos para tratar con aquellos que, a juicio del consejo, «hablaban o actuaban con deslealtad».

Primero el sospechoso recibía una tarjeta blanca con esta advertencia:

Usted ha sido denunciado al Comité de Patriotas y Patriotismo como peligroso y desleal en sus actos y expresiones. Le recomendamos *prevención* y un cambio total de actitud. (Firmado) Comité de Patriotas.

Si la actitud del sospechoso no cambiaba a satisfacción del comité, en el plazo de una semana de cuidadosa vigilancia, recibía una tarjeta azul:

La tarjeta blanca significaba *prevención*; la azul significaba *advertencia*. Cada bandera de nuestro país ondea para protegerlo, para proteger su vida y su propiedad. Su deber es defender con su vida la bandera de su país. (Firmado) Comité de Patriotas.

En caso de que la tarjeta azul no resultara convincente, quedaba una última, roja.

Si considera injustas las denuncias contra usted, o si desea evitar una acción sumaria, preséntese inmediatamente al jefe de correos para manifestar su cambio de actitud. Nada le ocurrirá si se mantiene leal en su devoción al país en esta hora difícil. *Advertencia final*. (Firmado) Comité de Patriotas.

Cabe señalar que nadie llegó a recibir la tarjeta roja, y que sólo unos pocos debieron ser aguijoneados con la azul. El reverendo Lindsay recomendó al Departamento de Justicia el sistema de tarjetas blanca, roja y azul, pero la idea fue rechazada.

Mientras organizaciones como el comité de patriotas de Henry County llegaban a ese extremo, había quienes trabajaban en el opuesto. En Nueva York, Alexander Berkman y

Emma Goldman, veteranos anarquistas, formaban la «Liga contra la Conscripción», prometiendo ayuda a quienes se negaran a registrarse e incorporarse a las fuerzas armadas.

En Texas, un grupo de hombres resolvieron que ellos y sus hijos resistirían la conscripción. Fueron a Dallas, compraron rifles, pistolas y municiones, y, junto con sus amigos, ganaron los bosques, resueltos a enfrentar a los oficiales de reclutamiento. En Oklahoma, unos 2.500 jóvenes, presuntamente influidos por el I. W. W. se plegaron a la llamada «Roasting Ear Rebellion» (Rebelión del Choclo Asado). Empuñaron las armas y ocuparon los maizales para luchar contra la conscripción dispuesta por «la clase adinerada». Se denunciaron millares de presuntas tentativas de sabotaje.

En esta atmósfera de tensión, se enteraron los norteamericanos de la revolución rusa, la abdicación del zar y, finalmente, el derrumbamiento del ejército ruso, destrozado por motines y revueltas. Durante un tiempo hubo esperanzas de que el gobierno provisional de Kerensky diera a los rusos una forma democrática de gobierno, pero la contrarrevolución bolchevique de noviembre de 1917 barrió a Kerensky. Un hombre llamado Nikolai Lenin clamaba:

«Ahora tenemos una revolución. Los campesinos y obreros fiscalizan el gobierno. Esta es apenas la etapa preliminar de una revolución semejante en todo el mundo».

IV. - LOS «VIGILANTES»

Al producirse el llamamiento a las armas en la primera guerra mundial, el Servicio de Investigación se vio abrumado de trabajo. Su personal fue aumentado en el acto de 300 a 400 hombres. Pero ésta era una fuerza insignificante para vigilar a más de 1.000.000 de extranjeros enemigos, proteger los puertos y las zonas de industrias bélicas —de acceso prohibido para aquellos extranjeros—, ayudar a las comisiones reclutadoras y al Ejército a localizar rezagados y desertores y por último cumplir sus tareas regulares de investigar violaciones de las leyes federales.

Cuando se hizo evidente que la guerra estaba cerca, el jefe del Servicio, A. Bruce Bielaski, comprendió el inmenso trabajo que habría que realizar. Por ese motivo le interesó una carta que recibió en marzo de 1917 de un publicitario de Chicago, A. M. Briggs. Briggs sugería formar una organización voluntaria de leales norteamericanos que ayudaran al Servicio de Investigación en las tareas relacionadas con la

defensa nacional. Los propios ciudadanos costearían todos los gastos de esas actividades.

La idea agradó a Bielaski y al procurador general Gregory. Briggs fue autorizado a ponerla en práctica. Cuatro días después de recibir la conformidad del Departamento de Justicia y del Servicio de Investigación, Briggs fundaba la Liga Protectora Americana, con sede nacional en Chicago.

La organización creció como la proverbial bola de nieve. En tres meses tenía casi 100.000 miembros. Después llegó a 250.000. En todas las ciudades importantes del país aparecieron filiales de la A. P. L. (*American Protective League*, Liga Protectora Americana). La fiebre por ingresar en la organización se hizo tan intensa que la inscripción debió clausurarse hasta que la sede central tuvo un respiro y pudo conseguir una nueva partida de insignias de setenta y cinco céntimos con la leyenda: «Liga Protectora Americana, División de Servicio Secreto». La insignia debía llevarse oculta, y mostrarse únicamente, junto con las credenciales, en casos de emergencia. Se previno a los miembros de la A. P. L. que no eran representantes del gobierno y no tenían facultad de arrestar, pero muchos, en su afán por cazar un espía, no tardaron en olvidarlo.

Tres meses después de crearse la organización, el secretario del Tesoro, McAdoo, protestó ante el procurador general Gregory por el empleo de las palabras «Servicio Secreto» en la propaganda y las insignias de la A. P. L. Alegó que se estaba creando una molesta confusión entre la A. P. L. y el Servicio Secreto oficial del Tesoro. «Recordará usted —escribió McAdoo— que durante la revolución norteamericana una organización voluntaria... se formó bajo el nombre de Hijos de la Libertad. Cometió graves abusos e injusticias. Esta división del servicio secreto de la Liga Protectora Americana contiene, en potencia, los mismos males...»

Gregory defendió a la Liga Protectora Americana y sus fines patrióticos, pero prometió que en lo futuro las palabras «servicio secreto» serían eliminadas de las insignias y la publicidad. Las nuevas insignias rezarían así: «Liga Protectora Americana, Auxiliar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos».

La advertencia de McAdoo resultó profética. El trabajo eficaz que con pleno respeto de las leyes efectuaban ciudadanos responsables y sobrios quedó sepultado bajo las violaciones de los derechos civiles perpetradas por el ejército de sabuesos aficionados. Los agentes de la A. P. L. efectuaban arrestos y allanamientos ilegítimos y en muchos casos fomentaban la creencia de que eran funcionarios federales. Los líderes obreros protestaban amargamente, sosteniendo que en algunas

ciudades la liga era utilizada como instrumento de los patrones para intimidar a los trabajadores en huelga.

Los agentes regulares del Servicio de Investigación se mostraron propensos a burlarse de los «novatos» y «detectives aficionados», hasta que sus jefes les previnieron que cualquier observación insultante o burlona dirigida contra los miembros de la A. P. L. podía costarles el empleo.

Aunque la A. P. L. llegó a contar con 250.000 miembros, la mayoría eran «inactivos» y se contentaban con la insignia. De los 7.500 miembros que existían en la zona de Chicago, por ejemplo, sólo 300 eran activos. Pero el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación comprobarían, a su pesar, que aun esa proporción de 300 miembros activos contra 7.200 inactivos resultaba demasiado grande, puesto que los perjuicios superarían a las ventajas derivadas de su actividad.

Una creciente impaciencia para con los procesos normales de la ley fomentaba en toda la extensión del país un espíritu de «vigilantismo». En nombre del fervor patriótico se perpetraron crímenes violentos. En Butte, Estado de Montana, seis enmascarados penetraron en una pensión y se apoderaron de Frank Little, miembro del comité ejecutivo del I. W. W. Lo sacaron en mitad de la noche y lo colgaron de un puente ferroviario porque, según sus ejecutores, era culpable de manifestaciones y actos de traición.

Un parlamentario preguntó en la Cámara de Representantes si quienes no profesaban lealtad a los Estados Unidos «tienen algún derecho a *chillar* cuando ocasionalmente ciudadanos de este país cuelgan a uno de ellos». Un periódico del Oeste dijo que el pueblo de Butte «se había desgraciado como un caballero». La situación llegó a tales extremos que el presidente Wilson se vio obligado a señalar «el gran peligro de que los ciudadanos tomen la ley en sus manos».

Pero tanto el presidente como el procurador general Gregory pensaban que el gobierno debía actuar contra el I. W. W. Discutieron el problema, y Gregory encargó al Servicio de Investigación y a los fiscales nacionales que indagaran discretamente en las actividades del I. W. W. y en el origen de sus fondos. Gregory abrigaba fuertes sospechas de que el I. W. W. estaba financiado por los alemanes.

El 5 de septiembre de 1917 agentes del Servicio de Investigación allanaron locales del I. W. W. en Chicago y en ciudades de la costa del Pacífico y se incautaron de fichas, archivos, documentos y material de propaganda. La sede socialista en Chicago también fue allanada, y el líder del I. W. W., W. D. Haywood, arrestado junto con otras personas.

El gran jurado federal de acusación reunido en el distrito norte de Illinois dictaminó que el I. W. W. pretendía destruir

la clase capitalista, «no por la acción política», sino mediante la fuerza y la violencia, y que su fin último era «el derrocamiento revolucionario y violento de toda autoridad gubernamental existente en los Estados Unidos...». En la lucha del gobierno por condenar a los líderes del I. W. W., el presidente Wilson apoyó a su procurador general Gregory, señalándole que la organización de Trabajadores Industriales del Mundo «ciertamente merece ser suprimida». Haywood y 98 acusados más fueron condenados.

A fines de 1917 las tareas vinculadas a la guerra se tornaron tan abrumadoras en el Departamento de Justicia que, poco después de los allanamientos del I. W. W., Gregory designó a John Lord O'Brian, republicano de Buffalo (Estado de Nueva York), «asistente especial del procurador general para tareas de guerra». Entre los numerosos ayudantes de O'Brian se hallaba un abogado de veintidós años, J. Edgar Hoover, que había ingresado en el Departamento el 26 de julio de 1917. O'Brian puso al joven Hoover al frente de una sección en el registro de extranjeros enemigos ⁽¹⁾.

La guerra impuso nuevas y pesadas cargas al Departamento de Justicia, y el procurador general improvisó métodos para sobrellevarlas en la mejor forma posible. Pero se habría estremecido si hubiera previsto la tormenta que iba a estallar sobre el Departamento, el Servicio de Investigación y la Liga Protectora Americana en el verano de 1918.

La primera nube asumió la forma de una carta, fechada el 5 de agosto de 1918, del secretario de Guerra, Baker, al procurador general Gregory, informando que «la lista de desertores de las dos primeras conscripciones revela que al 10 de junio de 1918 los casos conocidos de desertión ascendían a 308.489...».

Si las cifras del secretario de Guerra eran exactas, un número de hombres equivalente a veinticinco divisiones estaba eludiendo el servicio militar. La carta fue pasada al jefe del Servicio de Investigación, Bielaski, cuyos propios agentes —y también la A. P. L.— cooperaban con el ejército y las comisiones de reclutamiento en la búsqueda de «remisos» que no se registraban ni comparecían ante sus respectivas comisiones y de desertores que después de registrarse no acudían al llamado bajo banderas.

Bielaski empezó a cooperar con el ejército en una escala

(1) Hoover nació en la ciudad de Washington, el 1º de enero de 1895. Se educó en las escuelas públicas y egresó de la Escuela Universitaria de Derecho George Washington en 1916. Allí mismo obtuvo el año siguiente el «master's degree» en leyes. Ingresó en el Colegio de Abogados del Distrito de Columbia. Entró a prestar servicios en el gobierno el 13 de octubre de 1913, en la Biblioteca del Congreso, y en 1917 comenzó a trabajar en el Departamento de Justicia con un sueldo inicial de 900 dólares anuales.

mucho mayor que antes. Había efectuado una primera batida de remisos en Pittsburgh, utilizando policía local y agentes de la A. P. L. con resultados aparentemente buenos. Más tarde Bielaski informó a Gregory: «Hace poco se realizaron con particular éxito batidas de este tipo en Chicago y Boston, donde 500 y 800 hombres, respectivamente, resultaron desertores y fueron incorporados al servicio.

Entonces Bielaski decidió capturar a los remisos de Nueva York, Brooklyn, Jersey City y Newark. La operación fue encomendada al superintendente de división, De Woody. Las primeras fechas elegidas fueron el 29, 30 y 31 de agosto, pero las dificultades de organizar una maniobra tan vasta obligaron a postergarla para el 3, 4 y 5 de septiembre.

Se pidió a los diarios que publicaran anuncios previniendo a todos los hombres comprendidos entre los veintiuno y los treinta y un años de edad que en todo momento llevaran consigo, como requería la ley, su tarjeta de enrolamiento militar; y los no comprendidos en el grupo debían exhibir alguna «evidencia debidamente legalizada de su fecha de nacimiento». Pero no se avisó al público que iba a efectuarse una batida.

Como lugares de concentración para los desertores que fueran detenidos estaban previstos los arsenales militares, y se dispuso de muchos automóviles para transportar a los sospechosos. Miembros de las comisiones de reclutamiento y voluntarios de la A. P. L. fueron alertados para verificar la situación de los detenidos desde el punto de vista de la ley militar.

Cuando llegó la hora 0, De Woody había organizado su fuerza operativa: 35 agentes especiales del Servicio de Investigación, 2.000 voluntarios de la A. P. L., 1.350 soldados y guardias nacionales, 1.000 marineros y varios centenares de policías. El grueso de estos efectivos, naturalmente, se concentró en Nueva York y Brooklyn.

La batida empezó a las 7 de la mañana del martes 3 de septiembre. Al finalizar la tercera jornada, unos 50.000 hombres habían sido arrancados de teatros, restaurantes, tranvías, estaciones ferroviarias, salas de billares y aceras, a veces entre las burlas de las multitudes. Soldados con bayoneta calada detenían a los transeúntes en las calles y les pedían su tarjeta de enrolamiento. Voluntarios de la A. P. L. «arrestaban» a sospechosos. Forasteros que habían olvidado sus tarjetas eran arrastrados hasta los estadios cercados con sogas que el vulgo bautizó «ruedos de toros». Afligidas esposas acudían en busca de sus extraviados maridos. Muchos obreros eran detenidos al salir de su trabajo. A numerosos cautivos se los obligó a permanecer de pie horas enteras, sin alimentos y sin

permiso para telefonar en busca de ayuda que les permitiera probar su inocencia.

Un diario de Nueva York describió esta escena captada en una estación de ferrocarril:

Apenas se reunían grupos de 50 ó 100 prisioneros... un sargento les ordenaba formar. Así experimentaban su primer contacto con la disciplina.

Si tenían valijas, no encontraban un changador que se las llevara. Ellos mismos debían hacerlo. Y marchaban con denuedo militar de las estaciones a los cuarteles del regimiento 69.

Detrás de cada grupo iba un sargento, y si uno de los cautivos daba señas de cansancio o amagaba bajar sus maletas, escuchaba un grito:

—¡De frente ahí! ¡De frente! ¡Hip, hip, hip!

El *World* de Nueva York calificó las batidas de «monstruosa invasión de los derechos humanos» y «vergonzoso abuso de poder».

En el Senado, el senador Hiram Johnson, de California, declaró ante sus colegas que «humillar a 40.000 ciudadanos, empujarlos con las bayonetas, someterlos a cárceles y a la fuerza militar sumaria, simplemente porque son sospechosos, es un espectáculo que jamás se presenció en la República.

Algunos senadores defendieron las «razzias». El senador Miles Poindexter, de Washington, argumentó que los ciudadanos debían estar dispuestos a sobrellevar algunas molestias «para ayudar y facilitar el descubrimiento y arresto de desertores y remisos...». El informe final sobre la batida presentado por Bielaski demostraba que unos 1.505 hombres habían sido incorporados bajo bandera y otros 15.000, considerados transgresores, remitidos a las comisiones de reclutamiento respectivas.

Pero la opinión pública se pronunció contra los métodos utilizados y el presidente Wilson pidió un informe a Gregory. Este informó al presidente: «Asumo plena y total responsabilidad», y añadió que deploraba la aplicación de procedimientos extralegales, pero que, salvo orden en contrario, seguiría utilizando el método de las batidas para cercar a los remisos. La guerra concluyó el 11 de noviembre de 1918 y ahorró la necesidad de aplicar nuevamente tales medidas. La Liga Protectora Americana fue disuelta oficialmente el 19 de febrero de 1919.

Del fracaso de los «raids» contra los remisos quedó algún saldo positivo: el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación comprendieron que el «vigilantismo» y los detectives aficionados en nada contribuyen a un mejor cumplimiento de la ley, aun en casos de grandes emergencias.

V. - EL NUEVO ENEMIGO: EL COMUNISMO

En Washington faltaba poco para medianoche. La noche era estrellada, tibia y apacible... En los edificios residenciales de R. Street, Northwest, las luces se iban apagando una a una. Un automóvil atravesó las calles arboladas y entró en el garaje de R. Street Nº 2131. El secretario ayudante de la Marina, Franklin D. Roosevelt, bajó y entró en su casa. En el edificio situado sobre la acera de enfrente, el nuevo procurador general, A. Mitchell Palmer, y su esposa habían apagado las luces de la biblioteca, en la planta baja, y se retiraban al piso superior, para acostarse.

Eran las 23.15 del 2 de junio de 1919.

Un golpe sordo, como el de un objeto pesado que chocara contra la puerta de calle, sobresaltó a los Palmer. Después una poderosa explosión sacudió la casa. El estallido voló el frente del edificio, destruyó la biblioteca, agrietó los cielos rasos, rompió ventanas y descolgó cuadros de las paredes. La casa vecina sufrió serios daños, y en la de Roosevelt saltaron las ventanas que daban a la calle. Lo mismo sucedió en la residencia del senador Claude A. Swanson, dos puertas más allá, y aun a dos cuadras de distancia se registraron perjuicios en la edificación.

Entre los escombros quedaron los restos de dos hombres, aparentemente los dinamiteros, destrozados por su propia máquina infernal. Un fragmento de uno de los cadáveres cayó sobre el umbral de los Roosevelt. Otro fragmento fue lanzado a través de la ventana de la residencia del ministro noruego, situada a escasa distancia del hogar de los Roosevelt.

Esa misma noche de junio, el estallido de R. Street repercutió en otras ocho explosiones: en Filadelfia, Pittsburgh, Nueva York, Cleveland, Newtonville (Massachusetts) y Paterson (Nueva Jersey).

En casi todos los escenarios de los atentados, la policía recogió volantes que decían:

Palabras Claras: Los poderes gobernantes no ocultan su intención de detener aquí, en los Estados Unidos, el avance mundial de la revolución. Los poderes gobernantes deberán aceptar entonces la lucha que han provocado. Ha llegado el momento de que la solución del problema social no puede demorarse más; se está librando la guerra de clases, que sólo ha de cesar con una completa victoria del proletariado internacional...

Una ola de temor e indignación recorrió el país, ya bastante sacudido un mes antes, cuando se despacharon bombas por

correo a veintinueve prominentes personas. Una de esas bombas estalló, hiriendo a un criado del senador Thomas W. Hardwick, de Georgia. No hubo otras víctimas.

Estos treinta y ocho incidentes con bombas interceptadas o estalladas tenían como presuntas víctimas a tres miembros del gabinete presidencial, un juez de la Suprema Corte, cuatro senadores nacionales, dos miembros de la Cámara de Representantes, un juez nacional de distrito y dos gobernadores. También figuraban John D. Rockefeller y J. P. Morgan, símbolos de la riqueza privada ⁽¹⁾.

El *World* de Nueva York dijo: «En forma abierta y desafiante se predica el asesinato en los Estados Unidos... No se ha puesto freno a la instigación verbal al crimen, salvo en la medida en que interfiere con el esfuerzo de guerra». El *Record* de Filadelfia vio en los atentados la obra «de unos pocos individuos obsesionados por planes bolcheviques o radicales». Y el *Times* de Nueva York opinó que «evidentemente están inspirados por los bolcheviques o por el I. W. W.» La opinión general era que los conspiradores probablemente serían descubiertos entre los 9 millones de extranjeros del país. El *Evening News* de Buffalo decía que había llegado el momento de enseñar «americanismo» a esos extranjeros. Y el *Times* acordaba que era preciso hacer algo para «acallar el incesante torrente de falsedades y enseñar la verdad».

El procurador general Palmer tomó una decisión. Nombró a Francis P. Garvan, de Nueva York, subprocurador general a cargo de todas las investigaciones y procesos relativos al problema, y designó a William J. Flynn, ex jefe del Servicio Secreto, como director del Servicio de Investigación, en reemplazo de A. Bruce Bielaski, que había renunciado al cargo unos meses antes.

Dentro del personal administrativo de Garvan, Palmer creó una División General de Inteligencia, bajo el mando del asistente especial del procurador, J. Edgar Hoover, que contaba entonces veinticuatro años. El joven Hoover recibió instrucciones de estudiar las actividades subversivas en los Estados Unidos para determinar sus alcances y proponer medidas en el orden judicial ⁽²⁾. La fiscalización de las operaciones del

(1) Entre las víctimas que perseguían los atentados con bombas se encontraban: el senador Lee S. Overman, presidente de la comisión del Senado que investigaba el bolcheviquismo en Europa y en los Estados Unidos; el senador William King, miembro de la Comisión Overman; el representante John Burnett, presidente de la Comisión de Inmigración de la Cámara de Representantes; el juez nacional Kenesaw M. Landis de Chicago (que más tarde sería comisionado de *baseball*); el miembro de la Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes; el alcalde de la ciudad de Nueva York, John F. Hylan; el director general de Correos, Albert S. Burleson, y el secretario de Trabajo, William B. Wilson.

(2) El principal ayudante de Hoover en esta investigación fue George F. Ruch, que había ingresado al Servicio en 1918 y que fue adscrito al Departamento de Justicia. Salió del Departamento en 1923, para convertirse en alto empleado de la Compañía Carbonífera H. C. Frick. Ruch y Hoover se habían conocido en la Escuela de

Servicio de Investigación siguió en manos de Flynn, cuyos agentes remitían a la G. I. D. (*General Intelligence Division*, División General de Inteligencia) copias de todos los informes referentes a comunistas, anarquistas y grupos sindicalistas como el I. W. W. ⁽¹⁾.

Cuando Hoover comenzó su estudio, los extremistas de izquierda estaban divididos, en términos generales, en tres grupos: comunistas, anarquistas y el I. W. W. Esta última organización postulaba un gobierno industrializado, es decir, un Estado fiscalizado por los obreros, y sus miembros propugnaban la violencia para conseguir sus fines. Los anarquistas no creían en gobierno alguno y abogaban por el derrocamiento de todas las formas de gobierno, que consideraban opresoras de la libertad del hombre.

Al investigar la trayectoria de los comunistas, Hoover descubrió lo que para él constituía, fuera de toda duda, una conspiración con centro en Moscú, destinada a derribar por la fuerza todos los gobiernos no comunistas en el resto del mundo, inclusive el de los Estados Unidos.

No sin motivos llegó Hoover a esta conclusión. En los escritos de Karl Marx, Friedrich Engels, León Trotsky, Nikolai Lenin y sus discípulos, veía un plan de acción cuyo fin era comunizar el mundo, no por medio de elecciones y procesos democráticos, sino merced a la violencia y la subversión. Y en los actos del Partido Comunista vio la ejecución de esos planes.

Si uno aceptaba literalmente las enseñanzas y fines expresos del Partido Comunista, el comunismo no era un movimiento político en el sentido ordinario de esos términos. Tampoco era una teoría idealista de gobierno. Era una conspiración tan vasta, tan audaz, que pocas personas podían de entrada imaginar siquiera sus alcances. Era una conspiración contra la historia misma. Era una conspiración para destruir total y definitivamente la religión, los gobiernos, las instituciones y el pensamiento del mundo judeocristiano, el mundo budista, el mundo musulmán y todos los demás cuerpos religiosos.

Los creadores del comunismo columbraban una nueva sociedad surgiendo de las cenizas de la antigua, que había sido construida por siglos de lucha en pro de la dignidad y la

Derecho George Washington. Hasta su muerte, acaecida en 1938, Ruch fue uno de los más íntimos amigos de Hoover.

(1) Doce días después de crearse la G. I. D., el director Flynn notificó a sus agentes especiales: «El Servicio exige una vigorosa y amplia investigación de los grupos anarquistas y similares, del bolcheviquismo y movimientos agitadores afines que se proponen cambiar la actual forma de gobierno por la fuerza y la violencia, promoviendo sediciones y revoluciones, lanzamientos de bombas y actividades similares». La orden de Flynn señalaba particularmente a los extranjeros que, si incurrían en actividades ilegales, se exponían a ser deportados por el Servicio de Inmigración del Departamento de Trabajo.

libertad humanas. Sería un mundo de, por y para las mentes «científicas» de la *élite* del Partido Comunista, mentes «libres» de ataduras tales como la creencia en Dios, el patriotismo, el nacionalismo... de tantas cosas superfluas y pasadas de moda que, según el dogma partidario, habían maculado los procesos mentales del hombre desde el comienzo de los tiempos, y que, según la doctrina marxista, eran utilizadas por los explotadores de la religión y por los imperialistas para oprimir a las masas. El comunismo, según estos teóricos, era la lógica de la historia, el fin inevitable de la lucha de clases, la esperanza del mundo..., un movimiento social idealista, del que Rusia Soviética era la precursora, la «madre patria», la preceptora.

Para cuando las masas destruyesen los gobiernos existentes, el dogma prometía un nuevo reino, un reino benigno inspirado únicamente en los motivos más abnegados y puros. Esta dictadura mundial sería beneficiosa, decían los teóricos; esta dictadura despejaría el camino para una vida mejor en el planeta, aunque antes fuese necesario matar varios millones que no querían ser beneficiados. Se llamaría «dictadura del proletariado», expresión que identificaba a la «intelligentsia» comunista con las masas, fundiéndolas como si fuesen una sola y misma cosa. La dictadura se presentaría bajo el aspecto de una lucha obrera contra la opresión y en pro de la libertad. Tendría la apariencia de un justiciero «directorio» del auténtico liberalismo, consagrado a corregir los viejos males económicos y políticos de un pasado reaccionario. Sería, en su forma exterior, el gobierno de las «democracias del pueblo». Pero en la práctica no sería otra cosa que una dictadura de los científicos sociales del comunismo, la *élite* del partido incapaz de confiar en la libre elección del pueblo. Sin embargo, ellos repetirían la promesa de que en un futuro glorioso e indeterminado el mundo científicamente regido no necesitaría de la institución llamada «Estado», y el Estado se marchitaría y desaparecería.

La plataforma del Partido Comunista adoptada por la Tercera Internacional, bajo la inspiración de Lenin, el genio intelectual del movimiento, acoge esa promesa. Pero la clave para comprenderlo todo consiste en que, cuando la plataforma se refiere al «proletariado» en sentido gobernante, esa palabra significa en realidad «*élite* del partido comunista». Dice la plataforma:

Como todo Estado, el Estado proletario (la *élite* del Partido Comunista) representa un aparato compulsivo, y este aparato compulsivo se dirige ahora contra el enemigo de la clase trabajadora... Por otra parte, la dictadura del proletariado (*élite* del Partido Comunista), que oficialmente colocará a esa clase en la posición

de clase dominante en la sociedad, representa un estado de transición. A medida que se quiebre la oposición de la burguesía, esta última será asimilada y gradualmente convertida en clase trabajadora dentro de la sociedad, y la dictadura desaparecerá y se extinguirán el Estado y la división de la sociedad en clases.

Una vez que las masas fueran inducidas a rebelarse contra la vieja sociedad, el capitalismo en todas sus formas sería aplastado —decían los teóricos— y las diferencias raciales eliminadas. También desaparecerían las fronteras entre los países. Los obreros del mundo —afirmaban— fiscalizarían el Estado y la propiedad y recibirían todo el fruto de su trabajo. La filosofía, la ciencia, la música, el derecho, la educación y el gobierno, libres de las cadenas del pasado, conquistarían nuevos horizontes.

De este modo las puertas del comunismo quedaban abiertas a los millones de descontentos y resentidos que poblaban el mundo. La promesa era un nuevo comienzo para todos, desde los campesinos pobres y oprimidos hasta los intelectos más brillantes que no habían encontrado paz en sí mismos. Pero las riendas de la conducción debían permanecer en manos de quienes estaban «científicamente» capacitados para dictar lo que convenía al pueblo; y éstos eran los líderes del Partido Comunista, al que era preciso obedecer en todo, porque el partido determinaba lo que mejor convenía a la humanidad.

Era ésta la más perversa y monstruosa conspiración contra el hombre desde el comienzo de los tiempos: una conspiración para modelar el futuro del mundo y dominar a las masas con fórmulas sociales frías y «científicas» elaboradas en el cerebro de unos pocos comunistas. Estas fórmulas podían ser «demostradas», decían ellos, en el laboratorio comunista del materialismo dialéctico, como los teoremas de la física se demuestran por ecuaciones matemáticas. Y así reinaría suprema la élite del Partido Comunista. El pizarrón de la historia sería limpiado y enjugado, y en él aparecería la historia nueva, «científica».

Pero la pandilla comunista que imperaba en Moscú no podía alcanzar ese objetivo hasta que todos los gobiernos existentes fuesen destruidos por la infiltración, la subversión o la conquista. Los obreros debían convertirse en instrumentos de la élite comunista; de lo contrario, no podría advenir el «puro» reino del pensamiento y el planeamiento social «científico». En este nuevo orden la autoridad no podía ser cuestionada. Lo que había nacido, en realidad, era la nueva «religión» del materialismo, que exigía inflexible lealtad a sus adeptos, porque —afirmaban los nuevos preceptores— el comunismo era la lealtad al hombre. Era algo más grande que el propio hogar. Más grande que el propio país. Tan gran-

de, en realidad, que su dirección sólo podía confiarse a los amos del Kremlin.

La amplitud y profundidad del comunismo no se comprendían fácilmente, porque los comunistas osaban arrancar la historia misma de su cauce. Dos veces, en 1864 y 1889, los primitivos comunistas y socialistas habían tratado de formar una asociación internacional que fundiera los respectivos grupos en una fuerza militante. De ahí surgieron la Primera y la Segunda Internacional. Pero ambas fueron disueltas por divergencias internas, nacidas de las diversas tácticas propugnadas y de una deficiente comprensión del marxismo. Muchos de los viejos socialistas se limitaban a exigir «reformas», tales como horarios más cortos, mejores salarios y condiciones de trabajo, fiscalización estatal de la propiedad, pero no se proponían subvertir íntegramente la vieja sociedad.

El Partido Socialista de los Estados Unidos se organizó en 1901, y desde su comienzo fue perturbado por luchas internas, como había ocurrido con todos los grupos socialistas anteriores. En general, las opiniones divergían sobre los métodos utilizables para conquistar el poder. Unos aceptaban el parlamentarismo, otros postulaban la violencia.

En 1916 los socialistas de izquierda formaron la Liga de Propaganda Socialista, que recomendaba para el socialismo norteamericano el programa bolchevique ruso, aún antes de la revolución bolchevique, ocurrida en noviembre de 1917. A comienzos de 1919, estos disidentes comenzaron a trabajar en serio para copar el Partido Socialista. Un grupo, por medio de su periódico, *The Revolutionary Age* (La Era Revolucionaria), exigió una convención nacional para reorganizar los principios y las tácticas del partido. Si los izquierdistas no lograban copar el partido, se proponían desarticularlo.

La creación de la Tercera Internacional entusiasmó a los probolcheviques norteamericanos. Sus delegados rubricaron en Moscú el programa ya formulado por Lenin. El manifiesto de la Tercera Internacional decía, en parte:

Nosotros, comunistas, representantes del proletariado revolucionario de los distintos países de Europa, América y Asia, reunidos en Moscú soviética, nos sentimos y consideramos discípulos y ejecutores de la causa... Nuestra tarea actual es... apresurar el triunfo de la revolución comunista en todo el mundo.

Entre los famosos «21 puntos» adoptados por la Internacional, el número 16 rezaba:

Todas las resoluciones de los congresos de la Internacional Comunista, así como las resoluciones del Comité Ejecutivo, son de cumplimiento obligatorio para todos los partidos que se incorporen a la Internacional Comunista.

Los socialistas de izquierda norteamericanos abrazaron el programa de la Tercera Internacional. Las alas derecha e izquierda del Partido Socialista se enfrentaron resueltamente. Morris Hillquit, de la derecha, invitó a «barrer las cubiertas», es decir, purgar la organización, y el ala izquierda aceptó el desafío. El Comité Nacional Ejecutivo del Partido Socialista expulsó a unos 40.000 miembros de organizaciones colaterales por considerarlas perturbadoras para la causa del socialismo.

Dentro del ala izquierda del socialismo se produjo, a su vez, una lucha interna por discrepancias tácticas, que la dividió en dos grupos. Uno quería formar inmediatamente un partido comunista norteamericano. El otro, mayoritario, insistía en copar el Partido Socialista. A pesar de esta escisión, los izquierdistas triunfaron en las elecciones internas de autoridades nacionales, realizada en la primavera de 1919, pero cuando a fines de agosto se realizó en Chicago una convención nacional de emergencia, los miembros regulares del comité ejecutivo se negaron a ceder sus bancas a los candidatos izquierdistas.

Los izquierdistas del socialismo se reunieron en dos convenciones separadas. Un grupo fundó el Partido Comunista Laborista de los Estados Unidos el 31 de agosto de 1919, mientras que el otro, el 1º de septiembre de 1919, creaba el Partido Comunista de los Estados Unidos. En realidad, salvo cuestiones de menor importancia, había escasas diferencias entre estos dos grupos ⁽¹⁾.

Años más tarde, Hillquit diría amargamente que el gobierno soviético era «el desastre y la calamidad más grande que jamás haya soportado el movimiento socialista».

Las convenciones comunistas se reunieron un mes después que Hoover empezara a investigar las fuerzas ultrarradicales que entonces operaban en los Estados Unidos. Un hombre cuyas actividades llamaban particularmente la atención era Ludwig C. A. K. Martens, que en el mes de marzo —poco después de reunirse la Tercera Internacional— había arribado a Nueva York con bombos y platillos como representante oficial de comercio de Rusia Soviética, aunque el gobierno de los Estados Unidos aún no había otorgado su reconocimiento diplomático a los Soviets. Pero se afirmaba que traía 200 millones de dólares en oro con el fin de reanudar las relaciones comerciales entre los dos países.

Martens se instaló en el número 299 de Broadway, en una

(1) Al analizar más tarde estas diferencias, William Z. Foster, como jefe del Partido Comunista de los Estados Unidos, dijo que los dos grupos comunistas evolucionaron dentro de una posición marxista-leninista «básicamente correcta», pero «fracasaron en la aplicación» de esos principios «a la concreta situación norteamericana».

oficina alquilada por Santerri Nuorteva, encargado de la propaganda bolchevique en los Estados Unidos. La Federación Bolchevique Rusa de los Estados Unidos, en su diario, saludó así la llegada de Martens:

La gran significación del nombramiento de un representante soviético en este país consiste precisamente en que ese nombramiento abre al proletariado norteamericano nuevas perspectivas y nuevas oportunidades; una oportunidad para la acción revolucionaria en directo contacto y cooperación con el proletariado ruso y con el gobierno soviético de Rusia.

Martens intervino inmediatamente en los asuntos de los socialistas de izquierda. El era el centro de la propaganda comunista y, como representante de Moscú, se le agasajaba y festejaba, considerándose una autoridad en comunismo.

No tardó Martens en verse complicado en un conflicto dentro del partido, al sospecharse que el «camarada» Louis C. Fraina era un agente secreto del Departamento de Justicia. El colega de oficina de Martens, Nuorteva, acusó formalmente a Fraina ante el partido, y se adoptaron medidas para juzgarlo. Primeramente Fraina fue juzgado en Nueva York por un tribunal del partido, formado por comunistas norteamericanos, y declarado inocente. Después su caso fue investigado por el comité ejecutivo de la Tercera Internacional, en Moscú, y una vez más se lo declaró inocente; pero ya el procedimiento revelaba la verdadera escala jerárquica dentro del Partido Comunista. Los agentes del Servicio de Investigación, al estudiar las actividades de Martens y de sus secuaces, comenzaron a comprender que el verdadero «cerebro» que inspiraba a Martens era su secretario Nuorteva, un alemán rubio de ojos azules, a quien solía verse en compañía de marineros escandinavos. El 22 de julio de 1920 un marinero sueco llegado en el vapor *Stockholm* fue sorprendido cuando pretendía introducir clandestinamente en el país una partida de diamantes. El «correo» traía asimismo un paquete de cartas dirigidas a residentes en los Estados Unidos, material de propaganda e instrucciones comunistas. Uno de los sobres estaba dirigido a Martens y contenía 231 diamantes valuados en 50.000 dólares. Al ser allanada la residencia de Martens, se descubrió correspondencia referente al contrabando de diamantes. Era así como los Soviets financiaban sus primeras campañas de propaganda en los Estados Unidos.

Las actividades de Martens también concitaron el interés de la comisión Lusk de la Legislatura del Estado de Nueva York, designada para observar las «actividades sediciosas» de ciudadanos norteamericanos y extranjeros. Ese organismo parlamentario fue un primitivo y debatido precursor de la

Comisión de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. Al comparecer ante el grupo Lusk, Martens declaró que era miembro del Partido Comunista ruso y que «la revolución ha sido mi vida misma».

Pero cuando al cabo de cuatro meses no se obtuvieron resultados visibles en el esclarecimiento de los atentados dinamiteros de junio, el senador Miles Poindexter de Washington presentó al Senado un proyecto de resolución pidiendo al Departamento de Justicia que explicara por qué no adoptaba medidas legales que condujesen al castigo de los ciudadanos norteamericanos, y a la deportación de los extranjeros, que propugnaban el derrocamiento del gobierno por la fuerza y la violencia.

VI. - LAS «BATIDAS ROJAS» DE PALMER

Eran las 12.01 del 16 de septiembre de 1920 en la ciudad de Nueva York. Un carro tirado por un caballo se detuvo cerca de Broad Street, ante la Oficina de Tasaciones de los Estados Unidos, frente al edificio J. P. Morgan. Las aceras comenzaban a llenarse de secretarías, empleados y hombres de negocios que salían de los grandes centros financieros para ir a almorzar. Pero nadie prestó atención al hombre acurrucado en el pescante ni al objeto oculto por una lona que traía el carro. Al cabo de unos minutos, el conductor ató las riendas y bajó del carro, alejándose sin ser observado.

Y de pronto el objeto oculto en el carromato estalló. Era una bomba fabricada con dinamita y recortes de hierro forjado. Las esquirlas metálicas se dispersaron como metralla en la calle angosta. Hombres y mujeres cayeron segados en sangrientos y aullantes montones. Treinta resultaron muertos y trescientos heridos. El edificio Morgan sufrió daños y un empleado que estaba adentro perdió la vida. Otras entidades financieras resultaron gravemente dañadas.

El espectro del terrorismo aparecía una vez más en los Estados Unidos.

El atentado de Wall Street —jamás esclarecido— fue un imponente y estruendoso desafío a los que buscaban suprimir la violencia de la época. Repetía, como un eco, los actos de terrorismo del año anterior.

Después de las explosiones de 1919, el Senado norteamericano había dirigido un virtual ultimátum al procurador general Palmer: tenía que hacer algo, y pronto.

En varios casos experimentales, Palmer había intentado

determinar si la ley de espionaje para tiempos de guerra era aplicable, en épocas de paz, a los grupos anarquistas a quienes se consideraba responsables del terror dinamitero. Así, la acusación del ministerio público contra una sociedad anarquista española, denominada El Ariete, que actuaba en Buffalo (Estado de Nueva York) se basaba en el manifiesto de la sociedad que decía, en parte: «Proclame abiertamente su anarquismo. Deje que venga la revolución. Viva la inmaculada y redentora anarquía».

El juez federal John Raymond Hazel sostuvo que el gobierno no había probado que semejante léxico constituyera una conspiración para derribarlo. Y dictaminó: «Es evidente que el manifiesto contiene muchas frases reprobables —frases desleales, frases sediciosas— pero... que no constituyen violación de ninguna ley que me haya sido señalada».

Palmer estaba convencido de que las leyes de espionaje no podían aplicarse a «las actuales actividades radicales», pero llegó a la conclusión de que tenía autoridad para actuar conforme a una ley que establecía «que todo extranjero que al momento de entrar a los Estados Unidos sea, o posteriormente se convierta, en miembro de cualquiera de las clases de extranjeros [que propugnan el derrocamiento violento del gobierno] podrá en cualquier momento... ser detenido y deportado...»⁽¹⁾.

Uno de los primeros objetivos de Palmer fue la Federación de la Unión de Trabajadores Rusos (*Federation of the Union of Russian Workers*), compuesta principalmente por extranjeros que después de cinco años de residencia en el país no realizaban gestión alguna para obtener la ciudadanía norteamericana. El secretario de Trabajo dictaminó que esos extranjeros eran pasibles de deportación en virtud de que la Federación predicaba el derrocamiento por la fuerza del gobierno de los Estados Unidos⁽²⁾. El Departamento del Trabajo propiamente dicho no había intervenido en este campo por la negativa del Congreso a votar en el presupuesto una partida para poner en práctica las leyes de deportación. Sin embargo, el Departamento de Trabajo expidió órdenes de captura que permitieron a los agentes del Servicio de Investigación y del Servicio de Inmigración detener a más de 250 dirigentes y miembros de la federación en doce ciudades

(1) Sec. 2, Chap. 186, 40 Stat. 1012, ley del 16 de octubre de 1918.

(2) Anthony Caminetti, comisionado de Inmigración, cooperó estrechamente con el Departamento de Justicia en la iniciación de procedimientos de deportación. De ahí que él y Hoover tuvieran que trabajar en contacto casi diario para resolver problemas legales. Caminetti, que había sido fiscal de distrito en Jackson, California, fue el primer nativo de ese Estado elegido para el Congreso (1891-1895). Murió en 1923. El hombre que sugirió utilizar las leyes de inmigración como freno contra los anarquistas extranjeros fue el ayudante del procurador general Francis P. Garvan. Garvan fue uno de los primeros hombres del Departamento que se interesaron en Hoover y lo ayudaron a progresar.

distintas. Esta fue la primera de las llamadas «Batidas Rojas de Palmer».

La última «razzia» incluyó a Emma Goldman y Alexander Berkman, dos anarquistas confesos que durante la guerra habían sido condenados por «conspiración para disuadir del enrolamiento militar» a hombres que debían inscribirse en los correspondientes registros. En este proceso, los dos acusados alegaron que sus discursos y escritos no constituían conspiración, sino actos individuales y expresiones personales contra la guerra. Pero la Suprema Corte confirmó la sentencia y la pena correspondiente: dos años de cárcel y 10.000 dólares de multa para cada uno.

Emma Goldman y Berkman habían sido anarquistas durante muchos años. El ministerio público sostuvo que eran los inflamatorios discursos y escritos de Emma Goldman los que instigaron a León Czolgosz a matar al presidente McKinley. En cuanto a Berkman, durante la huelga de la Homestead Steel, en 1892, había entrado en el despacho del magnate del acero Henry C. Frick para matarlo de un tiro. Más tarde escribió en su libro *Memorias de un anarquista en la cárcel*: «Eliminar a un tirano, no sólo está justificado; es la obligación primordial de todo auténtico revolucionario. La vida humana, sin duda, es sagrada e inviolable. Pero la muerte de un tirano, de un enemigo del pueblo, en modo alguno debe considerarse como la pérdida de una vida».

Emma Goldman y Berkman declararon ante el tribunal de deportación en Ellis Island, y los alegatos del gobierno fueron formulados por el joven J. Edgar Hoover. Se ordenó la deportación de ambos anarquistas y la Suprema Corte confirmó la sentencia ⁽¹⁾.

Ahora se presentaba el problema de cómo deportar a Rusia a estos revolucionarios. Lo solucionó el ejército, proveyendo un transporte, el *Buford*; en él fueron embarcados 249 extranjeros. La prensa no tardó en apodarar al buque «El Arca del Soviet».

Varios miembros del Congreso viajaron de Washington a Nueva York para presenciar la partida de la nave. Cuando Emma Goldman se disponía a transbordar de un remolcador al transporte, uno de los parlamentarios le gritó:

—Feliz Navidad, Emma.

Ella retribuyó el saludo haciéndole pito catalán.

(1) Declaraciones efectuadas por León Czolgosz, después de su arresto por el asesinato del presidente McKinley, fueron invocadas en la causa contra Emma Goldman. Czolgosz dijo que los discursos y los escritos de Emma Goldman habían influido en su decisión de matar. Al ser arrestado, llevaba en el bolsillo copia de un discurso de la Goldman. Mientras estaba en la cárcel, Emma Goldman le escribió diciendo: «Mi corazón lo acompaña con profunda simpatía, así como también a todas las víctimas de un sistema de injusticia».

Berkman vestía botas rusas, pantalones y chaquetilla de color kaki y sombrero. Dictaba órdenes como si fuese el patrón del grupo. De pronto vio al jefe del Servicio de Investigación, Flynn, y algunos de sus agentes. Berkman les mostró el puño.

—¡Volveremos! —gritó—. ¡Y entonces, verán ustedes! ⁽¹⁾.

Según el *Herald* de Nueva York, «Flynn se quedó tan impresionado por la amenaza que ofreció un cigarro a Berkman. Acostumbrado como está a las amenazas contra su vida, el exabrupto del anarquista pareció reconfortarlo».

Parece que todos los deportados iban abundantemente provistos de dinero. Uno pidió a Hoover que le canjeara un cheque por 3.000 dólares. Hoover sugirió que lo mandara a sus amigos, para que ellos lo canjearan.

—A ustedes no les tengo confianza —dijo el hombre—. ¿Cómo sé que lo entregarán a mis amigos?

—Muy bien —repuso Hoover—, llévelo a Rusia y confíe en los bolcheviques.

El «Arca del Soviet» zarpó el 21 de diciembre de 1919 con destino a Rusia.

Ocho días más tarde, Hoover presentaba al procurador general Palmer un documento jurídico titulado: «Memorándum referente a la situación legal de Ludwig Christian Alexander Kaslovitch Martens ⁽²⁾», según la ley aprobada por el Congreso el 16 de octubre de 1918».

Fue ésta una de las primeras actuaciones jurídicas presentadas contra el Partido Comunista sobre la base de que constituía una conspiración dirigida contra los gobiernos no comunistas de todo el mundo. Salvo su aplicación al caso particular de Martens, el alegato estaba dedicado a probar la tesis de que el Partido Comunista conspiraba para derribar por la fuerza al gobierno de los Estados Unidos, y por lo tanto, como miembro del partido, Martens era pasible de deportación.

En sus líneas esenciales, la tesis de Hoover era que el gobierno soviético estaba dominado por los mismos hombres que dirigían el Partido Comunista ruso, y que este partido predicaba el derrocamiento por la violencia y la fuerza del

(1) Rusia desilusionó a la Goldman y a Berkman. Pronto comprendieron que la tierra de los Soviets no era la gran esperanza de la humanidad que ellos imaginaban. Emma Goldman escribió: «...me he equivocado gravemente al defender a Lenin y su partido como los verdaderos campeones de la Revolución». En 1921 abandonaron a Rusia y ambularon de un país a otro. La Goldman vivió en Alemania e Inglaterra; finalmente se estableció en Canadá. En 1934 obtuvo permiso para realizar una visita de noventa días a los Estados Unidos, donde pronunció una serie de conferencias. En Nueva York conoció al periodista George Sokolsky, que daba una conferencia en una sala contigua. Le dijo que deseaba morir en los Estados Unidos. Regresó al Canadá, donde falleció en 1940. Berkman se suicidó en 1936 en Niza, Francia.

(2) Arthur Adams, que años más tarde sería denunciado en el Congreso como agente atómico soviético tras su presunta fuga a Rusia, llamó por primera vez la atención del F. B. I. cuando formaba parte del personal de Martens.

gobierno de los Estados Unidos. Los comunistas rusos, así como los norteamericanos y todos los demás comunistas, adherían a los principios y tácticas adoptados por la Tercera Internacional; y la Tercera Internacional era en realidad hechura de los comunistas rusos.

«Establecidos los puntos anteriores —decía Hoover— se desprende necesariamente la conclusión de que si Ludwig C. A. K. Martens es miembro del Partido Comunista de Rusia, y si ese partido persigue el derrocamiento por la fuerza del gobierno de los Estados Unidos, Martens está incluido en la categoría de personas sujetas a deportación según la ley aprobada por el Congreso el 16 de octubre de 1918».

Era éste un esfuerzo, dentro de los angostos límites de una sola disposición legal, por reducir a lenguaje jurídico la vasta conspiración político-social de la dictadura comunista. Hoover preparó memorándums similares sobre el Partido Comunista de los Estados Unidos y el Partido Laborista Comunista. Y Palmer eligió a estas dos organizaciones como sus próximos objetivos.

Los agentes del Servicio de Investigación recibieron órdenes, firmadas por Frank Burke, ayudante del director Flynn, de allanar los locales comunistas la noche del viernes 2 de enero de 1920. Burke les suministró copias de los memorándums de Hoover y les ordenó que mandaran informes sobre los allanamientos al propio Hoover, jefe de la G. I. D., donde se estaban fichando los nombres y actividades de los extremistas.

Las instrucciones de Burke decían, en parte:

Toda clase de propaganda, libros, papeles y todo lo que cuelgue de las paredes debe ser requisado; sondear cielos rasos y tabiques en busca de escondites... Evitar escrupulosamente la violencia con cualquier extranjero... Si se los encuentra en grupos... deben ser alineados contra la pared y registrados... El modo de entrar en esos locales queda enteramente a criterio de ustedes. Si... les resulta absolutamente necesario obtener una orden de allanamiento, deberán comunicarse con las autoridades locales... Las causales para la deportación en estos casos se basarán únicamente en la afiliación al Partido Comunista de los Estados Unidos o al Partido Laborista Comunista...

A la hora señalada, agentes distribuidos en treinta y tres ciudades, provistos de unas 3.000 citaciones expedidas por el Servicio de Inmigración, detuvieron a unos 2.500 extranjeros para iniciarles juicio de deportación. Un total de 446 fueron deportados en el año fiscal que terminó el 30 de junio de 1921.

El clamor contra la injusticia de estas batidas se prolongó años enteros. Y las quejas procedían no sólo de los comunis-

tas y otros grupos extremistas, sino de abogados, líderes sindicales y periódicos, quienes alegaban que los agentes del Servicio habían invadido domicilios privados y lugares de reunión sin órdenes de allanamiento; que ciudadanos norteamericanos y extranjeros habían sido arrestados y demorados sin órdenes de captura, y que se había negado a los detenidos el derecho a la defensa. También se acusaba a los agentes de violencias, falsificaciones y perjurios.

Ante la Comisión de Reglamentos de la Cámara de Representantes Palmer se enzarzó en una disputa con el subsecretario de Trabajo, Louis F. Post, por la negativa de éste a aprobar muchas deportaciones. Post dijo que el periodismo había creado «una inmensa alarma terrorista en el país». El abogado de Post acusó a Palmer de actuar con «absoluta ignorancia de los principios norteamericanos», y al Departamento de Justicia, de organizar filiales comunistas, reclutar miembros y luego denunciarlos para que fuesen deportados.

Palmer, furioso, calificó tales declaraciones de «escandalosamente falsas». Defendió las batidas y acusó a Post de inclinarse «hacia la tolerancia y protección de los anarquistas». Sugirió que Post, inconscientemente, era víctima de la propaganda bolchevique y se negaba a aprobar deportaciones a pesar de las abrumadoras pruebas en que las mismas se fundamentaban.

Una comisión de doce abogados, que representaba a la Liga de Gobierno Nacional Popular (*National Popular Government League*), arrojó más leña a la hoguera con un «Informe sobre las Prácticas Ilegales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos». Después la Comisión Judicial del Senado designó una subcomisión para investigar el caso, y Palmer debió una vez más explicar la actuación de sus agentes. El procurador general volvió a defender su departamento y asumió plena responsabilidad por la política seguida. Recordó que una resolución del mismo Senado virtualmente lo había conminado a tomar medidas con respecto a los atentados dinamiteros del 2 de junio de 1919.

Dijo Palmer:

Afirmo que me han gritado desde todas las tribunas periodísticas de los Estados Unidos, de costa a costa. Me han predicado sermones desde todos los púlpitos. A todo lo largo y a todo lo ancho del país me han apremiado, hasta que me zumbaron los oídos, para que hiciese algo, y lo hiciese pronto, y lo hiciese al momento, y lo hiciese de tal modo que pudiéramos acabar con estas cosas en los Estados Unidos... Acepto la responsabilidad por todo lo que ellos (mis agentes) han hecho. Si acaso unos pocos, por exceso de celo o tal vez indignados como ciudadanos norteamericanos patriotas —que todos lo son— ante la conducta

de esos extranjeros, han sobrepasado los límites y los han tratado un poco rudamente, o demasiado rudamente, yo los perdono. No lo apruebo, pero tampoco he de hacer un escándalo por eso.

La infatigable defensa de Palmer, sin embargo, no pudo justificar los abusos cometidos en los procedimientos. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Harlan Fiske Stone, opinó: «A juzgar por lo que públicamente admite el procurador general y por otros indicios, ha procedido según la teoría de que esos extranjeros no están amparados por la garantía constitucional que asegura los debidos procesos legales». Stone pidió leyes que diesen a los extranjeros una más adecuada protección contra «el ejercicio arbitrario del poder».

Durante la controversia desatada por los «raids» de Palmer, el secretario de Trabajo, Wilson, había declarado que los miembros extranjeros del Partido Comunista de los Estados Unidos eran deportables, puesto que el objetivo de la organización era derribar por la fuerza al gobierno. Pero en cambio sostuvo que el Partido Laborista Comunista, en su programa, preveía la evolución política por medios parlamentarios, y por lo tanto sus miembros no entraban en una misma categoría con los del Partido Comunista. Hoover argumentaba que los dos partidos tenían los mismos objetivos y principios, y eran gemelos en sus creencias, criterio sostenido más tarde por el líder comunista William Z. Foster, para quien ambas organizaciones sólo estaban divididas por cuestiones «sectarias». Pero la decisión del secretario de Trabajo con respecto al Partido Laborista Comunista quedó en pie.

En los casos de deportación que llegaron a los juzgados federales, la controversia legal giró en torno a las violaciones de los derechos civiles cometidas por los agentes del Servicio de Investigación y al dictamen del secretario Wilson, según el cual el Partido Comunista de los Estados Unidos abogaba por el derrocamiento, mediante la fuerza, del gobierno. Los fallos dictados en dos de los casos se contradecían asombrosamente desde el punto de vista de la lógica. Era como si estos jueces no hablaran del mismo tema.

El juez George W. Anderson, del juzgado nacional de distrito de Massachusetts, veía en el Partido Comunista una organización pacifista:

...una especie de sociedad fraternal constituida sobre el sistema de las logias... Está íntegramente organizada para la propaganda verbal, no para la acción. Armas cortantes o explosivas, con las cuales... se llevan a cabo las revoluciones, no se encontraron en este allanamiento. Por lo tanto, no hay la más mínima prueba de que los comunistas se propongan «derribar el gobierno

de los Estados Unidos» por la violencia... La conclusión inevitable es que la única fuerza que este partido considera digna de discusión, la única fuerza en la que cree o que propugna, es la huelga general; en todo lo demás, sus métodos son los comunes a la propaganda política y social. Es cierto que en el «Manifiesto» y en la «Plataforma»... se encuentran... algunos lugares comunes referentes... a «la conquista del poder del Estado»... Pero es notorio que las plataformas políticas generalmente adoptan el lenguaje de la exageración... Aquí, en Occidente, la libertad y un oportuno sentido del humor y de las proporciones han impedido, hasta hace poco, que nos dejáramos asustar por la retórica de los redentores... Las instituciones fundamentadas en la libertad y en la justicia del derecho están demasiado arraigadas para que puedan aterrarnos las críticas y los cambios con que se nos amenaza. El Partido Comunista, en su integridad, es insignificante (1).

El juez John C. Knox, del juzgado federal del Distrito Sur de Nueva York, veía así a los comunistas:

...Opino que el manifiesto y el programa del Partido Comunista, junto con otras evidencias incorporadas a la causa, invisten un carácter tal que fácilmente inducen a un hombre razonable a concluir que el propósito del Partido Comunista es realizar su objetivo, vale decir, el apoderamiento y la destrucción, por la fuerza y la violencia, del Estado tal como ahora está constituido... El abogado de la defensa sugiere que lo que se juzga en esta causa es el comunismo, que define como un idealismo humano abstracto. No puedo concordar con esa afirmación... No alcanzo a percibir cómo podría efectuarse el incautamiento de la propiedad privada sin el empleo de medios prohibidos... Si tal transferencia (de la propiedad) fuese pedida y negada, y si los comunistas se considerasen lo bastante fuertes, ¿podemos suponer por un momento que vacilarían y buscarían medios pacíficos de persuasión? Me parece que incuestionablemente ejercerían cualquier tipo de coerción y emplearían cualquier grado de fuerza o de violencia que fuesen necesarios para lograr sus fines... Cabe decir... que tal posibilidad no pertenece al futuro inmediato... Pero aquí no se trata de establecer hasta qué punto es o no inminente que ese partido derribe al gobierno por la fuerza, sino, más bien, cuál es la finalidad última de esa organización (2).

Estos criterios opuestos, expresados en 1920, delimitaron la frontera en la que iba a librarse la batalla por el comunismo. De un lado quedaron los que veían en el comunismo una fuerza idealista, y en el partido, simplemente un grupo político más. Del otro se alinearon los que consideraban al comunismo como una conspiración conducente a la negación de la verdadera libertad, y al partido como el instrumento

(1) Colyer et al. v. Skeffington, 265 F. 17 (1920).

(2) U. S. ex rel. Abern v. Wallis. Comisionado de Inmigración, 268 F. 413 (1920).

de realizar ese fin por la violencia... cuando fuese lo bastante poderoso.

Las batidas de Palmer empujaron al Partido Comunista a la clandestinidad y redujeron el número de sus afiliados, que se calculaba en 60.000, a unos 10.000 recalcitrantes. Los «raids» se efectuaron en una época de violenta agitación obrera y de reajuste industrial, en plena posguerra. Al terminar el conflicto bélico, se había producido la gran huelga del acero, la huelga de policías en Boston, una huelga general en Seattle y otros movimientos similares. La mayoría de los empleadores se oponían fuertemente a las demandas de los sindicatos, que pedían ser reconocidos y procuraban mejores condiciones de trabajo; y tanto los comunistas como el I. W. W. se mostraban activos en las huelgas. El Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación fueron acusados de aliarse con los patronos contra los sindicatos y de utilizar «el fantasma rojo» como instrumento rompehuelgas.

En todos estos meses de inquietud, el joven Hoover había seguido recogiendo información sobre las actividades comunistas. En agosto de 1922 observaba en un memorándum: «El Partido Comunista de los Estados Unidos está realizando una convención en Bridgman, condado de Berrien, Michigan. Tres agentes de la delegación de Chicago están secretamente en Bridgman, vigilando a determinadas personas que asisten a la convención».

Esas «determinadas personas» eran tres representantes de la Tercera Internacional que se habían reunido con los líderes comunistas norteamericanos en un escondite en el bosque, a orillas del lago Michigan. El tema central de las discusiones era si debía mantenerse el comunismo clandestino o si había que abolirlo y procurar un «frente nacional». Moscú decretó que los principios básicos del marxismo-leninismo exigían una organización pública y otra secreta. Durante tres días los delegados debatieron agriamente cuestiones de detalle, mientras los agentes del Servicio los vigilaban desde el bosque. Aquellos dirigentes norteamericanos no habían aprendido aún todas las lecciones de la estricta conformidad a la línea del partido... pero estaban aprendiendo.

La convención de Bridgman fue víctima del mayor desconcerto cuando William Z. Foster, paseando por el bosque, tropezó con dos agentes del Servicio. Corrió la voz de alarma y los delegados huyeron. Algunos fueron arrestados por oficiales de la policía de Michigan y acusados de violar las leyes sindicalistas del Estado.

La reunión de Bridgman demostró que los comunistas estaban resueltos a buscar nuevos métodos para atacar la vida norteamericana. Pocos meses más tarde, en abril de 1923, el

Partido Comunista clandestino se fusionó con el Partido de los Trabajadores, que actuaba públicamente y había sido creado por los comunistas a fines de 1921. En realidad, eran una sola y misma cosa.

Pero cuando los comunistas huyeron de la convención de Bridgman, dejaron tras sí una detallada historia del comunismo clandestino, inclusive una lista de todos los que habían asistido a la reunión. Esta lista —que se encontró sepultada en el bosque, en un barril de patatas— era una especie de *Quién es Quién* del primitivo comunismo norteamericano.

Escándalos en Washington

VII. - UNA VERGÜENZA NACIONAL

El 4 de marzo de 1921, el risueño y elegante Warren G. Harding se convirtió en el vigésimo noveno presidente de los Estados Unidos. Y trajo consigo a sus amigos de Ohio, a quienes conoció en su carrera de político y director de un periódico pueblerino. Estos hombres habían sido sus compañeros en las mesas de póker y luego formaron su estado mayor de estrategia política. Fueron ellos quienes planearon las victoriosas campañas que habían de conducirlo a la Casa Blanca.

Nada tenía de sorprendente, pues, que Harding designara procurador general —cargo equivalente a ministro del gabinete— a su viejo amigo de Ohio, Harry M. Daugherty. Pero los tres años subsiguientes estarían llenos de sorpresas. Sorpresas que casi darían por tierra con el Servicio de Investigación, amén de traicionar la confianza que depositaba el pueblo en altos funcionarios y provocar una general desilusión en el país.

Antes que Harding asumiera el mando, los empleados del Departamento de Justicia empezaron a poner en práctica ese antiguo juego de las reparticiones gubernamentales que consistía en adivinar quiénes quedarían cesantes en el nuevo reajuste administrativo. Durante ocho años los demócratas habían fiscalizado la dispensa de favores en el orden federal. Ahora, por derecho de conquista política, les tocaba el turno a los republicanos.

En esta atmósfera de incertidumbre, William J. Flynn trató de disipar sus dudas con respecto a su propio futuro como director del Servicio de Investigación. No sólo miembros del Congreso, sino hasta cuatro jueces federales escribieron a Daugherty elogiando a Flynn y recomendando que se lo confirmara en el cargo.

Flynn tenía motivos para sentirse intranquilo. Circulaban rumores de que el próximo director del Servicio de Investigación sería «el famoso detective internacional William J.

Burns». Burns se paseaba con Daugherty y con otros que tenían fácil acceso a la Casa Blanca. El y Daugherty habían sido amigos de infancia en Ohio, y por otra parte el candidato gozaba de cierta fama como presidente de la Agencia Internacional de Detectives William J. Burns.

Los clientes comerciales de Burns le prestaban su apoyo. El vicepresidente de un banco de Chicago escribió a la Casa Blanca que «ningún hombre de su oficio en los Estados Unidos goza de más sólido prestigio entre los banqueros del país que William J. Burns...».

Los comentarios empezaban a atribuir gigantescas proporciones al futuro papel de Burns en el gobierno. No sería ya solamente director del Servicio de Investigación, sino jefe Supremo de todos los organismos investigadores del gobierno. El boletín del *Chicago Banker* decía:

Reina júbilo en toda la Avenida (Pennsylvania) ante la versión de que el presidente Harding nombrará a William J. Burns «comandante en jefe» de todos los departamentos de investigación y servicio secreto del gobierno. El procurador general Daugherty, que conoce a Burns desde hace años y lo ha contratado en ocasiones especiales, es quien recomienda al detective. Importantes intereses comerciales, sobre todo los que fiscalizan ciertas firmas bancarias de Nueva York, también trabajan para Burns... El movimiento obrero está contra Burns, pero todos los que no pertenecen a los sindicatos, lo apoyan.

El movimiento obrero, ciertamente, estaba contra Burns. El Consejo Central del Trabajo del Gran Nueva York (*Central Trades and Labor Council of Greater New York*) escribió al presidente Harding, instándolo a buscar para ese cargo a un hombre «que nunca haya despertado odio...». Una crónica publicada en un diario canadiense acusaba a la Agencia Internacional de Detectives William J. Burns, de Canadá, Ltda., de mandar circulares a los empresarios, ofreciendo sus servicios para espiar a los obreros en las fábricas y en las convenciones sindicales e informar luego «cuándo, dónde y cómo estallarán conflictos laborales». Sus detectives eran acusados de fomentar deliberadamente la discordia obrera.

Una carta enviada al presidente recordaba el escándalo de 1912, cuando el ex procurador general George W. Wickersham acusó a Burns y sus hombres de digitar la composición de un jurado, seleccionando candidatos resueltos de antemano a dictar sentencia condenatoria. Junto con la carta iba el informe de Wickersham sobre el caso. Tal vez Harding nunca leyó ese testimonio acusador. El secretario del presidente lo remitió, junto con otras protestas, al procurador general Daugherty.

Las protestas fueron inútiles. Daugherty despidió a Flynn con un seco telegrama fechado el 18 de agosto. El mismo día recibió Burns la notificación de su nombramiento y cablegrafió a Daugherty: «No encuentro palabras para expresar cabalmente mi reconocimiento ante la confianza dispensada por usted al designarme para este cargo...». Flynn protestó que había sido despedido injustamente, sin que se le dieran los motivos de la cesantía.

En el transcurso del «reajuste» efectuado por Daugherty en el Departamento de Justicia, J. Edgar Hoover —que entonces contaba veintiséis años— fue transferido del cargo de ayudante especial del procurador general al de director ayudante del Servicio de Investigación, con fecha 22 de agosto de 1921. Su sueldo en este puesto ascendía a 4.000 dólares anuales.

Los viejos archivos del Servicio reflejan las fuertes influencias políticas que caracterizaron la administración de Harding. Un memorándum dirigido a Burns, por un senador según versiones, detallaba las afiliaciones partidarias de los agentes del Servicio en Chicago. Los republicanos aparecían en la lista sin comentarios, pero junto a los nombres de los demócratas se leían observaciones como éstas: «Yerno de un senador estatal demócrata; afiliado activo de la organización demócrata»; «Acomodado por el representante A.»; «Demócrata activo»; «Despedido hace dos años y luego reincorporado, según se dice, por mediación del senador B.».

Este era el estado de cosas cuando apareció el «célebre» detective Gaston B. Means, nombrado por Burns agente del Servicio de Investigación el 28 de octubre de 1921. Means hizo constar inmediatamente que era íntimo amigo y favorito de Burns. Casi en el acto chocó con Hoover. Este pidió a Burns que le ordenara no entrar en su despacho. Le desagradaban sus costumbres dispendiosas y su moral poco clara.

En el Departamento de Justicia, Means frecuentaba la oficina privada que ocupaba «un hombre misterioso» que respondía al nombre, bastante vulgar, de Jess Smith. Means y Smith se llevaban bien y parecían entenderse perfectamente. Means sabía que Smith no era un cualquiera.

Jess Smith era en realidad el amigo más íntimo de Harry Daugherty, y vivía con los Daugherty en el departamento que éstos alquilaban en el Wardman Park Hotel. Aunque oficialmente no ocupaba cargo alguno, pronto se supo en Washington que Jess Smith era un hombre con influencia en las altas esferas. Se le conocía como amigo personal del presidente Harding y su esposa, y a menudo se contaba entre los invitados a las selectas reuniones sociales de la Casa Blanca. Desde su oficina del Departamento de Justicia, daba curso

a una voluminosa correspondencia personal y semioficial. Se decía que utilizaba a Means para investigar confidencialmente personas y hechos que interesaban a Daugherty.

El *Sun* de Nueva York dijo más tarde de este personaje:

Hace tiempo que Means aparece en los diarios... Fue (en 1916) un agente pagado por Alemania para perturbar el comercio británico. En 1917 se le acusó del asesinato de una viuda adinerada, la señora Maude A. King, muerta de un tiro de pistola en North Carolina cuando estaba en compañía de... Means. Fue absuelto, y en seguida acusado ante otro tribunal por presentar un testamento fraguado que prácticamente habría puesto a su disposición toda la fortuna de los King. Después volvemos a encontrarnos con este sujeto convertido en investigador del Departamento de Justicia...

Means contaba la historia de otra manera. Durante años —según él— había luchado contra espías, malhechores y ladrones internacionales que parecían confabularse para torcer sus honestos propósitos. En una oportunidad recuperó baúles enteros de documentos vitales para la defensa de los Estados Unidos; pero, justo cuando iba a entregarlos al servicio de inteligencia del Ejército, agentes foráneos se los «robaron». El punto débil de esta fábula era que los baúles, al ser entregados sin los documentos, pesaban lo mismo que antes, cuando estaban presuntamente atestados de papeles secretos. Means no obtuvo la carta de recomendación del Ejército, que constituía el objetivo de su maniobra.

Pero Burns defendía resueltamente a su viejo amigo contra los detractores. Poco después que Means ingresara en el Servicio, un abogado de la acusación en el proceso incoado por la muerte de la señora King protestó ante el procurador general Daugherty, y ante el propio Burns, diciendo que Means lo había amenazado, usando «un lenguaje soez e indecente». Burns respondió al abogado que había «cometido una muy grande injusticia contra el señor Means», puesto que la propia «agenda oficial» de Means demostraba que éste no podía haber realizado la visita en que le hizo sus presuntas amenazas.

Eran demasiadas, sin embargo, las personas que formulaban preguntas molestas con respecto a Means, por lo que Daugherty y Burns resolvieron el problema de este modo: el 9 de febrero de 1922 el procurador general suspendió a Means como agente del Servicio «hasta nuevo aviso»; después Burns incluyó a Means, como informante, en el presupuesto del Servicio, donde prosiguió sus actividades.

Por lo demás, el país entero estaba enfermo y con alta fiebre en esa época de adaptación a la posguerra. Millones

de desocupados transitaban las calles. En pocos meses, los demócratas empezaron a burlarse del «slogan» utilizado por Harding en su campaña política: «De vuelta a la normalidad». *The Nation* satirizaba los antecedentes legislativos de Harding y el apoyo que había prestado a los aumentos de tarifas, diciendo: «Ahora está comprendiendo lenta y dolorosamente lo que debió resultarle obvio..., que no se puede hacer retroceder las agujas del tiempo... volver el país a la época de McKinley, como si nada hubiera cambiado desde 1896...».

En el campo sindical, hacía meses que se incubaba una tormenta en los ferrocarriles. La Junta Gubernamental de Trabajo Ferroviario había decretado en 1921 una reducción de salarios del 12 por ciento para casi todos los empleados y obreros ferroviarios, impidiendo una huelga con la promesa de que no se harían más reducciones en el futuro inmediato.

Pero a medida que disminuían los ingresos, los ferrocarriles buscaron una salida en nuevas disminuciones de sueldos. El 6 de junio de 1922 la Junta de Trabajo Ferroviario anunció que los obreros de talleres tendrían que aceptar otra reducción del 12 por ciento. El 1º de julio, 1.400.000 obreros de talleres decretaron la huelga. Las «Cuatro Grandes» Fraternidades Ferroviarias —que comprendían el personal de trenes—, en cambio, siguieron trabajando.

La administración de los ferrocarriles declaró que los huelguistas perderían su antigüedad al volver al trabajo. El presidente Harding intentó mediar en el conflicto, pero sus esfuerzos fracasaron en lo relativo a la antigüedad, punto que había llegado a cobrar mayor importancia que el motivo original de la huelga.

Hubo actos de violencia. Obreros que no se plegaban a la huelga fueron apaleados. La policía ferroviaria atacó a los huelguistas. Hubo muertos, puentes dinamitados y sabotaje en las máquinas. El movimiento de trenes se entorpeció a tal extremo que llegó a temerse el estrangulamiento de la economía nacional.

El 20 de julio Burns despachó este mensaje a los agentes:

El Departamento (de Justicia) informa que prevalece el desorden en varios distritos por la negativa o incapacidad de las autoridades estatales y municipales para hacer cumplir la ley. En los sitios donde las autoridades policiales necesitan ayuda para reprimir el desorden, el procurador general ordena que todos los agentes especiales cooperen con ellas para que el comercio y la correspondencia... circulen sin obstrucción. Queda librada a su buen criterio la designación de agentes para esas tareas...

También se recibió una queja de que policías locales actuaban como agentes de empleo, contratando rompehuelgas

para los ferrocarriles de Chicago, Milwaukee y St. Paul. Daugherty pidió a Burns que efectuara «una investigación confidencial... y mándeme un memorándum con los resultados obtenidos».

El presidente Harding convocó una reunión de gabinete, en cuyo transcurso se decidió procurar un mandato judicial contra los huelguistas. Daugherty se presentó ante el Juzgado federal de distrito de Chicago, el 1º de septiembre, y obtuvo lo que iba a llamarse «el mandato más amplio que jamás se haya expedido». El procurador general declaró que utilizaría los poderes del gobierno federal para impedir que los sindicatos «destruyesen los talleres libres (1)».

Dentro de los términos de la orden represiva de Daugherty, cualquier acto o palabra que interfiriese con el funcionamiento de los ferrocarriles podía constituir una violación del mandato judicial, a cuyos fines cabía interpretar literalmente el lenguaje utilizado.

Así fue como una decisión adoptada por el gabinete de Harding y ejecutada por el procurador general Daugherty complicó al Servicio de Investigación en la lucha ferroviaria, junto con los fiscales, jueces del crimen y toda la maquinaria oficial para imponer el cumplimiento de las leyes.

Afortunadamente, los líderes sindicales y los representantes de numerosos ferrocarriles llegaron a un acuerdo dos meses después de comenzado el movimiento. Los obreros conservaron su antigüedad y el sindicato alegó una victoria moral. Pero la reducción de salarios quedó firme. En algunas líneas férreas, sin embargo, la huelga continuó por un año, y cuando el mandato temporario de Daugherty fue declarado permanente, el *World* de Nueva York comentó: «En realidad, un juzgado federal, a pedido del señor Daugherty, ha creado una ley (que prohíbe huelgas que afecten el comercio interestatal); una ley que se aparta de las tradiciones norteamericanas está en conflicto con la opinión mayoritaria y es totalmente imposible de llevar a la práctica».

Un nuevo indicio de la enfermedad de los tiempos se reflejaba en el gigantesco crecimiento de una «fraternidad» secreta, que prometía en su propio manifiesto «...proteger al débil, al inocente y al indefenso de las indignidades, maldades y atropellos de los desbordados, los violentos y los brutales; aliviar al lastimado y al oprimido; socorrer al que sufre y al infortunado...».

Nobles propósitos, sin duda. Pero estos singulares protectores de los oprimidos eran los Caballeros (*Knights*) del Ku Klux Klan.

(1) *Open shop*, aquel que emplea indistintamente trabajadores agremiados o no agremiados. (N. del T.)

El primer Klan nació en los días sombríos y terribles de la reconstrucción del Sur, tras la Guerra Civil. Algunos historiadores dicen que se inició en Pulaski (Estado de Tennessee), como una simple e inofensiva sociedad secreta cuyos miembros buscaban divertirse. Pero la diversión pronto se convirtió en terror. Hombres encapuchados utilizaron el Klan para aterrar a negros y mulatos y mantener sobre ellos la supremacía de la raza blanca. Con el tiempo, el movimiento se extinguió.

Pero en 1915 el coronel William S. Simmons, de Atlanta, Georgia («me llaman coronel, sobre todo por respeto»), había resucitado un Klan antinegro, anticatólico y antijudío. El Klan creció lentamente hasta 1920, cuando el coronel Simmons unió fuerzas con Edward Young Clarke, cuya Asociación Publicitaria del Sur había realizado durante la primera guerra mundial las campañas de conscripción de afiliados de la Cruz Roja, la Y. M. C. A. (*Young Men's Christian Association*, Asociación Cristiana de Jóvenes) y otras causas dignas. Clarke y el coronel firmaron un contrato por el cual Clarke se convertía en un Kláguila («Kleagle») Imperial y mandaba sus agentes, o kláguilas, por todo el país. Se fijó una matrícula de iniciación de 10 dólares para cada aspirante a miembro del Klan. De esa suma, Clarke y su organización recibían 8. Los otros 2 iban al coronel Simmons, el Brujo Imperial del Klan. Sin contar los ingresos procedentes de las túnicas hechas con sábanas y los capuchones, cuyo costo total probablemente no era superior a 1,25 dólares por persona, pero que se vendían a 6,50 dólares.

En un tiempo increíblemente corto, de Nueva Inglaterra a California, las noches se poblaron de cruces ígneas. Hombres grandes, muchos de ellos ciudadanos prominentes en la esfera de su actuación, se reunían con toda solemnidad, enfundados en sábanas, para atisbar por los agujeritos de sus capuchones las ceremonias de iniciación. Los afiliados se contaban ya por decenas de millares. El Klan se extendió a casi todos los Estados de la Unión. Se dice que en una época tuvo en sus manos el equilibrio del poder político en Indiana. Era fuerte en Nueva Inglaterra. Según algunos comentaristas, llegó a dominar la legislatura de Texas. En muchos Estados, los candidatos a la función pública debían contar con el apoyo del Klan para aspirar al triunfo en las elecciones.

En ciertas comunidades, el Klan no era más que una inofensiva logia fraternal. En otros lugares, sus intereses eran puramente políticos. Pero ya los hombres encapuchados empezaban a sembrar el pánico en algunas familias. Después, en las comunidades. Luego, en Estados enteros. Se repetía el viejo esquema de la época de la reconstrucción.

Durante más de un año, el Servicio de Investigación vigiló las actividades del Klan, sin descubrir violaciones a las leyes federales. Pero un día de septiembre de 1922 Paul Wooton, corresponsal en Washington del *Times-Picayune* de Nueva Orleans, que estaba escribiendo una serie de artículos sobre el Ku Klux Klan, visitó a J. Edgar Hoover en su despacho y le contó una historia de ribetes fantásticos.

—¿Quiere usted decir, realmente —exclamó Hoover al término del relato—, que el gobernador de Luisiana no puede utilizar siquiera el teléfono, el telégrafo o el servicio de correos, por impedirse el Klan?

—Eso es lo que me ha dicho personalmente el gobernador cuando me mandó llamar —repuso Wooton, y entregó a Hoover una carta del gobernador de Luisiana, John M. Parker—. Se la traigo yo, porque el gobernador Parker no puede confiar en el correo. Tiene la correspondencia vigilada por el Klan, y el teléfono intervenido. Necesita ayuda.

La carta estaba dirigida al procurador general Daugherty. Lo que en ella se relataba parecía increíble, pero era cierto. El gobernador Parker pedía ayuda para sacudir el yugo del Klan en el norte de Luisiana, donde se sospechaba que dos hombres habían sido secuestrados, torturados y asesinados por hombres del Klan.

Hoover conferenció con el procurador general de Luisiana, A. V. Coco. Se decidió que el gobernador Parker elevaría directamente su pedido de ayuda a Harding. Y en efecto, el 2 de octubre de 1922, el gobernador mandó al presidente una carta que decía, en parte:

Por culpa de las actividades de una organización que se dice es el Ku Klux Klan... no sólo se han violado las leyes, sino que se han producido casos de hombres secuestrados, golpeados y azotados. Dos hombres han sido brutalmente asesinados sin proceso ni acusación... esta noche me informan que otros seis ciudadanos han recibido orden de abandonar sus hogares (en Morehouse Parish), so pena de muerte. La situación escapa al dominio del gobernador de este Estado... Numerosos funcionarios de la justicia y la policía están reconocidos públicamente como miembros del Ku Klux Klan.

Parker pedía al presidente que adoptara alguna medida, por medio del Departamento de Justicia, de acuerdo con la sección 4, artículo 4, de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza a los Estados la protección federal contra toda violencia interna... siempre que la soliciten la Legislatura estatal o el jefe del poder ejecutivo del mismo Estado.

La decisión última del Departamento fue que el Servicio de Investigación mandaría agentes para ayudar al goberna-

dor Parker, pero que el propio Estado emprendería las acciones judiciales que fuesen necesarias. Esta decisión se consideró como un precedente capaz de afectar las futuras relaciones entre los Estados y el gobierno federal, en el orden de la jurisdicción policial. Los agentes comenzaron a trabajar en secreto, perseguidos a veces por los integrantes del Klan. Pero poco a poco desenterraron la verdad.

El Klan dominaba por el terror todo el norte de Luisiana. Entre sus miembros se contaban policías y ciudadanos prominentes. Las personas que el Klan consideraba indeseables recibían orden de abandonar su comunidad. Hombres y mujeres eran azotados y encarcelados por orden de los líderes del Klan, que tenían sus propias normas para juzgar la moralidad privada.

Una noche el doctor B. M. McKoin, miembro del Klan y ex alcalde de Mer Rouge, denunció que presuntos asesinos habían hecho fuego contra su automóvil. Algunos ciudadanos escépticos sugirieron que el mismo McKoin había disparado los tiros con fines propios. Miembros del Klan secuestraron a Watt Daniels y T. F. Richards para interrogarlos sobre el caso McKoin, pero como ambos tenían coartadas los dejaron en libertad, previniéndoles que no hablaran.

Daniels y Richards comentaron con sus amigos que habían reconocido a algunos de los secuestradores, y el caso se divulgó. Una semana más tarde, hombres armados y enmascarados empezaron a detener los automóviles de vecinos de Mer Rouge que regresaban de una excursión campestre y un partido de baseball. Las mujeres gritaban y se desmayaban. Sus acompañantes masculinos, desprovistos de armas, nada podían hacer. Los secuestradores se apoderaron de Daniels y Richards, y nadie los vio nuevamente con vida.

Buzos profesionales, custodiados por milicianos del Estado, rastrearon el lago La Fourche, en cuyas orillas, la noche del secuestro, había ardido una fogata de gasolina. El 22 de diciembre de 1922 encontraron los cadáveres decapitados y mutilados. Tenían casi todos los huesos rotos. Se habían utilizado viejas ruedas de carreta como potros de tortura. La autopsia demostró que las mutilaciones habían sido perpetradas por un experto en cirugía.

El doctor McKoin y un ayudante del «sheriff» fueron acusados de asesinato. Pero el tribunal no los condenó. El *Times-Picayune* dio esta explicación: la mayoría de los miembros del jurado eran integrantes del Klan.

El caso contribuyó a volcar la opinión pública contra el Klan. Pero el cambio fue lento. Después que el coronel Simmons formó su alianza con el superpublicitario Clarke, el Klan llegó a tener casi un millón de miembros repartidos en

cuarenta y seis Estados. Y en 1925 realizó una demostración de fuerza política, haciendo desfilar 50.000 hombres encapuchados a lo largo de la avenida Pensilvania, en Washington.

El poder del Klan fue gradualmente quebrado por el F. B. I. y las policías locales con la ayuda de los periódicos de combate. Entre otras cosas, el Klan afirmaba defender la «pureza de la femineidad»; sin embargo, una de las primeras oportunidades en que el F. B. I. chocó con él fue a raíz de una violación de la ley de tráfico de esclavas blancas, cometida en Nueva Orleans, Luisiana, por el «Klágula Imperial» Clarke, que fue juzgado en Houston, Texas. Clarke se declaró culpable el 10 de marzo de 1954, ante un juzgado federal, y pagó una multa de 5.000 dólares.

Durante muchos años el Departamento de Justicia había utilizado los agentes del Servicio para la protección de los derechos civiles, y particularmente en su campaña contra el «peonage» (explotación ilegítima del trabajo), que había subsistido en varias formas en todo el país aún después de la abolición de la esclavitud.

El «peonage» se había convertido en problema federal porque algunos Estados tenían leyes que fomentaban prácticas corrompidas e inmorales. Un empleador podía formular una denuncia contra un obrero pobre e ignorante, gestionar su libertad bajo caución o fianza, y después obligarlo a trabajar en su granja o en su plantación bajo amenazas de mandarlo nuevamente a la cárcel. En otros casos, la ley permitía que un propietario abonara la multa de un preso y después lo obligase a trabajar por contrato hasta el pago de la deuda.

Uno de los peores casos de «peonage» que se recuerden fue investigado por el Servicio en Georgia, en 1921. Se acusaba a John S. Williams de «comprar» prisioneros negros en las cárceles y cuadrillas de forzados, y de hacerlos trabajar en su granja hasta el pago del «precio de compra». En realidad, eran esclavos de Williams. Cuando Williams supo que el Servicio de Investigación lo estaba indagando, se dice que mató más de una docena de negros, eliminándolos como testigos potenciales. Fue procesado por asesinato y condenado a prisión perpetua.

Casos como éste irritaron a la opinión pública. Actualmente es raro que se ventile ante un tribunal un caso de «peonage».

Por singular ironía, mientras en Luisiana y otros lugares los agentes del Servicio protegían los derechos civiles, William J. Burns y Jess Smith destacaban hombres para espiar a los miembros del Congreso que por esa época exigían que se investigaran las denuncias de corrupción lanzadas contra el régimen de Harding; entre esas denuncias se contaba la del tristemente célebre escándalo de «Teapot Dome».

Poco después de asumir el cargo, el presidente Harding había entregado al Departamento del Interior la administración de las reservas petroleras navales de California y Wyoming. Esta última era el denominado yacimiento petrolífero de Teapot Dome. El secretario del Interior, Albert B. Fall, firmó un contrato con intereses privados que encabezaban Harry F. Sinclair y Edward L. Doheny, por el que se les permitía extraer y almacenar, cobrando una regalía, el petróleo de la reserva naval. La transacción fue defendida con el argumento de que las reservas petrolíferas de Teapot Dome eran drenadas por los pozos particulares más próximos, y que el convenio protegería los intereses del gobierno.

Pero poco después de anunciarse el convenio, los vecinos de Fall, en Nuevo México, notaron repentinos signos de prosperidad en su finca rural, donde se estaban introduciendo mejoras excesivas. Más tarde Sinclair y Doheny explicaron que habían «prestado» a Fall más de 135.000 dólares. Doheny afirmó que los 100.000 dólares que le correspondían en ese préstamo eran una simple «ayuda a un viejo amigo».

Tales explicaciones no convencieron al Congreso. Por otra parte, empezaban a surgir interrogantes sobre el manejo de fondos de la Administración de Veteranos y la Oficina de Custodia de la Propiedad Enemiga; también había quien se preguntaba por qué el Departamento de Justicia no iniciaba acciones contra presuntos fraudes en contratos de la primera guerra mundial.

Cuando se desencadenaba la tormenta sobre el régimen de Harding, el misterioso Jess Smith se suicidó el 30 de mayo de 1923, dejando una fortuna calculada en 500.000 dólares. El presidente Harding enfermó en el transcurso de un viaje a Alaska y murió el 2 de agosto de 1923. Calvin Coolidge, nuevo presidente de los Estados Unidos, heredaba el caos.

Las denuncias de negociados crecían como bolas de nieve. En el Congreso se pedía a gritos la renuncia de Daugherty. Al principio, no se acusaba al procurador general de estar personalmente complicado en los negocios turbios. El *Literary Digest* comentó que se pedía la renuncia de Daugherty porque había perdido la confianza del Congreso y del pueblo, «no por lo que haya hecho, sino por lo que ha dejado de hacer».

El senador Burton K. Wheeler, de Montana, fue uno de los que encabezaron abiertamente la lucha contra Daugherty. Los republicanos bloquearon varios proyectos de investigación en el Congreso, pero el 1º de marzo de 1924 el Senado aprobó una resolución, presentada por Wheeler, para juzgar la conducta de Daugherty. El único voto en contra fue el del senador Davis Elkins, de West Virginia.

Mientras el Senado realizaba su sensacional investigación

acerca del procurador general, el propio Wheeler era procesado ante un tribunal de Great Falls, Montana. Se le acusaba de aceptar dinero de un «sindicato» de buscadores de petróleo con la promesa de influir para que el Departamento del Interior diera al sindicato concesiones exclusivas para la exploración de petróleo y gas. Wheeler acusó inmediatamente al Departamento de Justicia de «fragar» tales cargos. El *News and Observer*, periódico de Raleigh (Estado de Carolina del Norte), opinó que el proceso era fruto de una confabulación entre William J. Burns, Harry Daugherty y el Comité Nacional Republicano.

Los acontecimientos posteriores dieron fuerte apoyo a la teoría del periódico. Una comisión del Senado y más tarde un tribunal de Montana declararon inocente a Wheeler. El *Record* de Filadelfia dijo que el proceso era «una de las persecuciones políticas más despreciables y vengativas que jamás hayan ocurrido en el país». En el transcurso de la investigación realizada en torno a Daugherty, Burns admitió que había enviado tres contadores del Servicio a Montana, para cooperar en el caso Wheeler. Los archivos del Departamento de Justicia muestran que estos contadores figuraban en el presupuesto del Servicio de Investigación, pero estaban adscritos a John S. Pratt, ayudante especial del procurador general, y presentaban sus informes exclusivamente a Pratt (1).

La investigación del caso Daugherty nunca habría sido completa si no hubiera salido a relucir el viejo amigo de Burns, Gaston B. Means. Y Means realizó una espectacular entrada en escena, declarando que había participado en actos de espionaje dirigidos contra los propios senadores. Los agentes de Means se habían introducido subrepticamente en los despachos de los senadores y habían abierto su correspondencia y registrado sus archivos, en un esfuerzo por encontrar cualquier indicio comprometedor que pudiera ser utilizado para detener los ataques contra el procurador general Daugherty. Means añadió que había entregado sus informes a

(1) En los primeros tiempos era práctica habitual en el Departamento destinar un agente a misiones especiales que lo alejaban de la vigilancia rutinaria del Servicio. El Servicio carecía de medios para saber dónde estaba o qué estaba haciendo ese agente. El caso Wheeler puso sobre el tapete el tema de la fiscalización central y la supervisión de los agentes. Hoover ya había protestado contra la costumbre de «adscribir» agentes a los fiscales nacionales o a funcionarios del Departamento. Tomando como ejemplo el caso Wheeler, formuló sus puntos de vista sobre la utilización indebida de agentes, en un memorándum fechado el 8 de abril de 1923, dirigido al coronel William J. Donovan, en esa época ayudante del procurador general. Decía Hoover: «Al asumir las funciones de director... descubrí que los contadores y agentes destinados al caso... habían sido adscritos al ayudante especial del procurador general Pratt. No sabía siquiera dónde estaban esos contadores y agentes. Y sólo cuando transcurrieron varios meses pude impartir órdenes que me permitieran, por lo menos, saber dónde se encontraban esos hombres... Pero aun entonces no asumí la dirección de sus tareas de investigación, no vi ninguno de sus informes ni supe qué estaban haciendo». Gradualmente, Hoover pudo afianzar el principio de que los agentes pagados por el Servicio eran responsables ante el director del mismo.

Jess Smith y que nunca trataba con nadie inferior en categoría al terceto Daugherty-Smith-Burns.

En un momento de su declaración, lo interrumpió el senador Wheeler:

—El senador Moses (de Nuevo Hampshire) me sugiere que ahorremos tiempo preguntándole cuáles son los senadores a quienes usted *no* ha espiado.

Means respondió:

—Oh, hay muchos. En general son tipos bastante decentes. No se les encuentra gran cosa.

Means explicó a los senadores cómo «opera» un detective:

—Oh, revisamos... toda la correspondencia que llega, todos los papeles, cualquier cosa que haya a la vista. Hacemos averiguaciones en su casa. Hacemos lo mismo que usted, senador... cuando realiza una investigación criminal... e informa sobre lo que descubre... Si es comprometedor, por supuesto se utiliza. Si no, claro está que no puede utilizarse. No hace mal a nadie.

Si este testimonio era verdad, ficción o una mezcla de ambas, nadie salvo el propio Means iba a saberlo. Pero encajaba perfectamente en el panorama de corrupción general de que él formaba parte. Como diría más tarde el historiador Samuel Hopkins Adams, el Departamento de Justicia «había llegado a su nivel más bajo de honestidad, moral y eficiencia, a pesar de muchos funcionarios capaces. El cáncer del sistema Daugherty-Smith-Burns lo invadía todo».

El 28 de marzo de 1924 el presidente Coolidge pidió la renuncia al procurador general Daugherty. Había llegado por fin el momento de la gran limpieza en la maquinaria del gobierno.

VIII. - HOOVER HACE UNA LIMPIEZA

Un día de marzo de 1924 el presidente Calvin Coolidge recibió en su despacho de la Casa Blanca a un nativo de Nueva Inglaterra, un hombre corpulento que caminaba con el paso cadencioso y un poco arrastrado de los campesinos. Era Harlan Fiske Stone, republicano nacido en Nuevo Hampshire, abogado en Nueva York y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

El presidente habló largo y tendido con Stone. Este era el hombre a quien Coolidge pensaba nombrar procurador general; esperaba que su integridad de roca restablecería la confianza del pueblo en el Departamento de Justicia, al que

se llamaba, con sobrada razón, el «Departamento de la Fácil Virtud». Cuando Stone salió de la Casa Blanca, aquella fría mañana de marzo, ya había aceptado la misión de reorganizar el Departamento, y particularmente el Servicio de Investigación.

El 2 de abril Coolidge anunció que Stone, su viejo condiscípulo del Amerst College, sucedería a Harry Daugherty como procurador general. Con escasas excepciones, el Congreso reaccionó favorablemente ante el nombramiento de Stone. Se recordó, sin embargo, que Stone había criticado las «batidas rojas» de Palmer en 1919, y que había sumado su voz a la impopular defensa de los «conscientious objectors», pacifistas que durante la primera guerra mundial se negaron a combatir, por escrúpulos de conciencia. Más tarde el senador Tom Heflin, de Alabama, llamó a Stone «un testaferrero de la casa Morgan», porque había tenido un estudio jurídico en sociedad con un yerno del financiero J. P. Morgan. Se le atribuía el doble papel de liberal y reaccionario. El 6 de abril, sin embargo, el Senado confirmó por abrumadora mayoría el nombramiento de Stone efectuado por Coolidge. De este modo comenzó Stone su carrera pública, que lo llevaría a presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos y le granjearía perdurable prestigio por su indestructible honestidad y coraje moral.

Stone se instaló en el cargo más alto del Departamento de Justicia y estudió cuidadosamente el terreno antes de tomar medida alguna. No era hombre de juicios apresurados y quería estar seguro de seleccionar la gente más capaz para los puestos claves. Previamente debió realizar una limpieza. El *Gazette Times* de Pittsburgh comentó: «Stone encontrará cierto grado de desmoralización en el Departamento de Justicia, y tendrá que eliminarla para poder consagrarse a sus verdaderas funciones».

Un mes y siete días después de su nombramiento, Stone aceptó la renuncia de William J. Burns como director del Servicio de Investigación. Para el Servicio terminaba una época.

Stone había invertido ese tiempo en buscar el hombre apropiado para el cargo. Mencionó el problema en una reunión de gabinete a la que asistía Herbert Hoover, entonces secretario de Comercio. Cuando Hoover volvió a su despacho, dijo a su ayudante Larry Richey que Stone estaba buscando un joven inteligente para ponerlo al frente del Servicio.

Richey contestó:

—No veo por qué lo buscan afuera, cuando lo tienen en el mismo Servicio. Un abogado joven y culto. Se llama Hoover.

—¿Cree que es capaz de desempeñar el cargo?

—Estoy seguro —contestó Richey—. Lo conozco bien porque es amigo mío.

Pocos días más tarde Herbert Hoover informaba a Richey que había hablado con Stone y que el procurador general iba a «probar al joven Hoover».

Un día después de la renuncia de Burns, Stone llamó a su despacho a J. Edgar Hoover, que entonces tenía veintinueve años. Era el 10 de mayo de 1924. En el Servicio circulaba ya la noticia de que Burns se iba. Hoover no estaba seguro de que ahora no le tocara a él. Stone tenía fama de hombre duro y áspero y ya empezaba a cortar cabezas.

Hoover entró en el despacho de Stone y vio al gigantesco procurador general sentado detrás de su escritorio. Stone medía más de un metro y ochenta centímetros y pesaba más de cien kilogramos. A Hoover, en ese momento, le pareció tallado en roca.

—Siéntese —dijo Stone, hosco como de costumbre.

Hoover tomó asiento. Stone lo espió por encima de sus anteojos. Los dos hombres quedaron mirándose, separados por el escritorio. Luego Stone dijo abruptamente:

—Joven, quiero nombrarlo director interino del Servicio de Investigación.

Hoover comprendió la magnitud del elogio que esas palabras llevaban implícitas. Adivinó que el procurador general había rechazado el argumento de que era demasiado joven para el cargo. Y lo que es más importante, supo que Stone no lo hacía responsable de los procedimientos, los errores y los vicios de quienes hasta ese momento habían estado al frente del Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación.

—Aceptaré el cargo, señor Stone —dijo Hoover por último—, bajo ciertas condiciones.

—¿Cuáles son?

—El Servicio debe permanecer al margen de la política. No debe ser el receptáculo de los recomendados. Los nombramientos se harán según los antecedentes personales. Los ascensos responderán a una probada capacidad, y el Servicio sólo será responsable ante el procurador general.

El procurador general frunció el ceño y dijo:

—No le daría el cargo en otras condiciones. Eso es todo. Buenos días.

Así fue como, bajo la guía de Harlan Fiske Stone, Hoover se puso al frente del Servicio de Investigación, primero como director interino, siete meses más tarde como director.

En aquellos primeros meses, Hoover necesitó a fondo el apoyo de Stone. Y lo obtuvo. El Servicio estaba desacreditado. En todo el país se alzaban voces para reclamar que fuera

disuelto, y sus funciones distribuidas entre otros departamentos y organismos del gobierno.

Pero Hoover estaba convencido de que el Departamento de Justicia necesitaba abogados y contadores diestros en la búsqueda de probanzas judiciales. Reconocía que a menudo los acusadores fiscales no podían hacer valer sus argumentos, porque sólo contaban con pruebas recogidas en forma caprichosa por agentes no adiestrados. Y sin embargo, la búsqueda de las pruebas era la base para demostrar la inocencia o la culpa.

Stone y Hoover no tuvieron dificultad en establecer para el Servicio normas básicas de procedimiento. Tres días después de la designación de Hoover, se acordó lo siguiente:

1. El Servicio sería un organismo encargado de recoger pruebas, y sus actividades se limitarían estrictamente a investigar violaciones de las leyes federales.

2. Las investigaciones se realizarían bajo las instrucciones del procurador general.

3. El personal del Servicio sería reducido dentro «...de lo compatible con el adecuado cumplimiento de sus funciones».

4. Los empleados incompetentes o poco dignos de confianza serían despedidos lo antes posible.

5. El personal «provisional», los agentes «honorarios» y todos los que no estuviesen regularmente nombrados serían suprimidos del presupuesto.

6. No se harían nuevos nombramientos sin la aprobación del procurador general; y se daría preferencia a hombres capaces y de buen carácter que tuvieran cierta experiencia en leyes.

Este acuerdo, que asumió la forma de un memorándum de instrucciones, dio a Hoover el margen de acción que necesitaba. Empezó por despachar una rápida serie de órdenes escritas a sus agentes, que se sintieron sorprendidos por la brusca e inesperada ola de actividad procedente de Washington. Los archivos del Servicio indican que numerosos agentes prestaron escasa atención a la novedad, creyendo que se trataba de un capricho pasajero, algo que se disiparía si aguantaban el tiempo suficiente; y en caso contrario, siempre les quedaba el recurso de acudir al senador o al representante que los respaldaba. Otros agentes, en cambio, expresaron regocijo porque vislumbraban la esperanza de una organización de la que pudieran sentirse orgullosos.

Una de las primeras medidas de Hoover fue despedir oficial y definitivamente a Gaston B. Means. Means había permanecido en el Servicio como agente «temporariamente suspendido» durante todos los meses en que actuó en forma clandestina para Burns y Jess Smith. Hoover elevó un memorán-

dum a Stone, sugiriendo que el nombre de Means fuese borrado de la lista de personal. La respuesta de Stone, al pie del memorándum fue ésta: «Sí, por favor».

Seis días después de asumir el cargo, Hoover dirigió una nota a Stone en la que decía:

He informado a los jefes de las respectivas divisiones del Servicio que las actividades del Servicio deben limitarse estrictamente a investigar violaciones de los estatutos federales, bajo las instrucciones de usted...

Ya he comenzado a examinar la foja de cada empleado. Hay cierto número de agentes especiales cuyas funciones conviene dar por terminadas en pro de los mejores intereses del Servicio. Seguiré enviándole estas recomendaciones... a medida que vaya examinando los archivos del personal.

Los empleados del Servicio deberán realizar todos los esfuerzos posibles por vigorizar la moral de la organización... y cumplir al pie de la letra sus instrucciones.

La lenta y difícil tarea de reorganización estaba en camino. Era una campaña de doble objetivo. Por una parte, la lucha para eliminar a los recomendados políticos, poner en vigencia el nuevo código de conducta y consolidar el Servicio transformándolo en una fuerza eficaz. Por otro lado debía librarse una batalla para convencer a los miembros del Congreso y dirigentes políticos de ambos partidos de que el Servicio ya no era el destino forzoso de sus recomendados.

Una de las primeras medidas de Hoover fue dar a los jefes de las delegaciones regionales mayor autoridad sobre sus agentes. Se eliminó el viejo sistema por el cual los agentes mandaban informes administrativos individuales a Washington. Cada agente se entendía con su jefe y éste elevaba los informes a Washington. De este modo se creó un orden jerárquico que antes no existía. El escalafón fue reajustado de acuerdo con la capacidad de cada uno; Hoover puso particular empeño en que a mayor eficiencia correspondiera mayor salario. El papeleo burocrático fue reducido al mínimo y se reforzó el principio de autoridad.

En circular fechada el 1º de julio de 1924, Hoover notificó a cada jefe de delegación:

Usted, como jefe de delegación, es mi representante, y considero que su deber y su función es procurar que los agentes especiales y otros empleados de su delegación se ocupen permanentemente en sus tareas específicas... Debe usted ejercer una vigilancia aún más estricta sobre el trabajo de los agentes que dependen de usted...

Se estableció un sistema de inspección regional. Los inspectores visitaban cada delegación y observaban la eficacia,

el carácter y el dinamismo de los agentes. La rutina oficinesca fue sistematizada y uniformada, de suerte que el agente trasladado de una delegación a otra encontrase exactamente los mismos métodos y reglamentos de trabajo. El agente debía cumplir honestamente su jornada íntegra... y no «cerrar el negocio» a mediodía, como acostumbraban muchos.

Hoover exigió que los jefes de delegaciones abandonaran la práctica de «pasar el muerto» a Washington cuando se hacía necesario notificar a un subalterno que su trabajo era insatisfactorio. A menudo, cuando Hoover comunicaba a un agente que su jefe había presentado un informe desfavorable sobre su trabajo, el agente contestaba que era la primera noticia que tenía.

Hoover notificó a los jefes:

No deseo ser molestado nuevamente con tales episodios... Quiero que los jefes mantengan una absoluta franqueza en el trato con sus hombres. El Servicio seguirá utilizando la misma franqueza en sus relaciones con todos los empleados.

Es imposible comprender la estructura del F. B. I. actual sin antes conocer los puntos de vista de Hoover sobre la disciplina. Su código de conducta se convirtió en un modo de vida para los que deseaban permanecer en el Servicio. En un principio, Hoover y sus hombres fueron motejados de «militicos universitarios» y de «boy scouts» por quienes no los creían capaces de realizar una tarea policial eficaz. De Hoover se dijo que era un burócrata que imponía a sus empleados condiciones irracionales, porque había prohibido a sus agentes beber whisky en público o en privado (al terminar la era de la Prohibición, los reglamentos del F. B. I. fueron modificados). Sus hombres debían ser pulcros en su aspecto y discretos en sus hábitos. El los consideraba representantes del Servicio, tanto si estaban trabajando como cuando participaban en una reunión social con sus amigos. Y hasta las dactilógrafas, taquígrafos y otros empleados administrativos del Servicio debían cumplir esas rígidas normas. Los empleados debían pagar sus deudas. Los inspectores⁽¹⁾ llevaban una vigilancia continua, y la autocrítica dentro del Servicio también era incesante.

En una carta personal y confidencial escrita en mayo de 1925 y dirigida a todos los jefes de delegaciones, Hoover explicó por qué insistía tanto en que los agentes se condujesen con circunspección.

(1) El primer inspector del Servicio, bajo el nuevo sistema, fue James S. Egan, quien ayudó a Hoover a introducir nuevos métodos administrativos y diezmar a los recomendados políticos. Firme partidario de la disciplina, Egan fue un gran factor en el afianzamiento de las nuevas normas. Más tarde estuvo al frente de todas las tareas de contabilidad del Servicio, y se jubiló en 1952, con treinta años de actuación.

Quiero señalarle ciertas condiciones imperantes dentro del Servicio en el pasado y que no permitiré que persistan en el futuro... Sé que en estos últimos años las fuerzas del Servicio de Investigación no han gozado de muy buena fama... Soy un firme convencido de que la única forma en que podemos volver a ganar el respeto y el apoyo del público es observando una conducta correcta...

Estoy resuelto a exonerar sumariamente del Servicio a cualquier empleado a quien descubra consumiendo bebidas intoxicantes en cualquier cantidad o en cualquier momento. Comprendo que ésta es una actitud muy drástica, y algunos elementos probablemente me considerarán un fanático. No me creo un puritano, pero estimo que un hombre que forme parte de este Servicio debe observar tanto oficial como extraoficialmente un comportamiento que excluya la más mínima posibilidad de crítica de sus actos... Yo, personalmente, me abstengo de consumir licores... Por lo tanto, no exijo de mis subalternos nada que previamente no exija de mí mismo...

Este Servicio no puede afrontar un escándalo público, teniendo en cuenta los numerosísimos ataques de que ha sido objeto... en los últimos años. No quiero que se apliquen a este Servicio los términos que con frecuencia oigo dirigidos contra otras dependencias gubernamentales...

Lo que quiero es proteger a la fuerza del Servicio de Investigación de las críticas de afuera, impedir que se desacredite por casos aislados de conducta de hombres que, estando excesivamente sujetos a sus deseos y gustos personales, no pueden recordar en todo momento y en toda ocasión el honor y la integridad del servicio del que forman parte.

Era evidente para Hoover que, si el Servicio pretendía surgir de las sombras del pasado, sus integrantes deberían someterse a un rígido código de conducta, inclusive en su vida privada.

Las nuevas reglas comenzaron a dar resultados casi en el acto. En un caso, el ayudante del procurador general de un Estado del sudoeste pidió que un agente investigara las actividades del hijo de un senador nacional. En épocas anteriores, la investigación se habría realizado sin más trámite; pero esta vez el agente se negó, a menos que recibiera instrucciones específicas de Washington.

Hoover notificó al agente: «...su actitud en este caso está aprobada... El Servicio no puede ser utilizado con fines partidarios».

Después de observar durante siete meses el trabajo de Hoover, el procurador general Stone borró de su designación la palabra «interino» y lo confirmó como director del Servicio de Investigación, el 10 de diciembre de 1924. En una carta de fecha posterior, dirigida al decano de la Facultad de Derecho de Columbia, Young B. Smith, dijo Stone:

Asumí la responsabilidad de nombrar al señor Hoover jefe del Servicio de Investigación, aunque muchos pensaban que era demasiado joven y que había tenido un contacto demasiado estrecho con el «régimen» de Burns. Yo creí conocer al hombre, y los hechos han demostrado que estaba en lo cierto. El estaba de acuerdo conmigo en que se puede realizar una tarea policial eficaz utilizando hombres que no sean delincuentes y que no utilicen procedimientos del hampa. El señor Hoover ha realizado permanentemente el prestigio del Servicio...

Cuando llegó a oídos de Hoover la noticia de que algunos ex agentes tenían acceso a la información recogida por el Servicio, despachó a todos sus empleados esta circular, fechada el 27 de febrero de 1925:

Me han llegado rumores... según los cuales ex empleados y funcionarios del Servicio reciben informes sobre nuestra tarea y actividades, y son objeto de especial consideración en sus relaciones con el Servicio. Espero que esa noticia carezca de fundamento, mas deseo estar seguro de que todos los empleados del Servicio comprendan plenamente que no se debe dispensar privilegios especiales a nadie, haya tenido o no vinculación con el Servicio... y además, que los archivos, constancias y actividades del Servicio... no pueden discutirse ni revelarse a nadie que no esté oficialmente vinculado al Servicio o al Departamento.

Mientras se efectuaba esta reorganización y reeducación del Servicio (1), Hoover, dando cumplimiento a su palabra, procuraba que la política no interfiriese en la designación o ascenso de los agentes. No tardó en poner a prueba sus propósitos cuando transfirió al Sudoeste a un agente que intervenía demasiado activamente en política. Pocos días más tarde un senador a quien se atribuía considerable influencia visitó a Hoover para preguntar por qué había trasladado a ese agente. El senador agregó que lo necesitaba para su inminente campaña electoral.

—Lo siento mucho —respondió Hoover—, pero creo que lo mejor para ese hombre, y para el Servicio, es que se libere de sus ataduras políticas. He querido darle una nueva oportunidad.

—Hablaré con el procurador general —resopló el senador. Quince minutos más tarde Stone llamaba a Hoover a su despacho.

Stone lo espió por encima de sus anteojos.

—Hoover, ¿cuáles son los antecedentes de este caso?

Hoover explicó la situación.

(1) Harold Nathan fue el primer director ayudante de Hoover. Estuvo al frente de la División de Investigaciones del Servicio hasta 1937; después fue jefe de las Divisiones de Identificación, Administrativa y Adiestramiento. Se jubiló en 1945, con veintiocho años de actuación. Ahora tiene setenta y cinco, vive en San Francisco y suele visitar las delegaciones del F. B. I. en sus viajes a través del país.

—Me parece que no ha procedido usted exactamente como debía —dijo Stone.

Hoover recordaría más tarde que aspiró hondo, mientras pensaba: «Bueno, llegó el momento de renunciar».

—Me sorprende —agregó Stone— que usted no haya exonerado a ese hombre en el acto.

Otro caso ilustrativo era el del agente B., un rezago del régimen de Burns, respaldado por un senador del Medio Oeste. En 1922 le dieron destino en Arkansas. El fiscal de Little Rock se quejó de que el agente B. era tan inepto que resultaba poco menos que inútil. En consecuencia, el agente B. fue trasladado a su Estado natal de Minnesota...

Pero no hizo más que llegar a Minneápolis cuando el jefe de la delegación regional descubrió que el agente B. era un ex presidiario, que había sido condenado en Minnesota por asaltante de caminos. Aun cuando fuese inocente, como él alegaba, su testimonio carecía de valor en cualquier proceso en que tuviese que declarar como testigo del gobierno. El jefe de la delegación pidió que el agente B. fuese trasladado.

A esa altura de las cosas, un miembro de la Cámara de Representantes escribió a Hoover diciendo que, si bien comprendía la dificultad planteada, en su opinión el agente B. debía conservar su puesto. Hoover, que ya lo había despedido, respondió explicando la situación y agregando: «...comprenderá usted que es imposible reincorporar al señor B.»

Hoover pensó que ahí terminaba el caso. Pero un año más tarde otro representante le escribió diciendo: «El suscripto conoce al señor B. desde hace muchos años y no vacila en recomendarlo a usted en todo sentido... Es un hombre muy trabajador y siempre lo he creído digno de confianza...».

Otra vez una larga explicación sobre los motivos por los cuales el señor B. no podía ser reincorporado, y el estribillo final: «En consecuencia, lamento sinceramente no poder acceder a su interés por el señor B.»

Otro caso era el de un agente que no quería aceptar destino fuera de Nueva York. Cuando Hoover le notificó la cesantía, apeló a «su» representante en el Congreso. El representante escribió a Hoover. Y la vieja calesita empezó a girar de nuevo.

Hoover elevó un memorándum a uno de los ayudantes de Stone que decía:

Uno de los mayores problemas de este Servicio es la impresión general de que los agentes, recurriendo a determinadas influencias, pueden hacer revocar las órdenes e instrucciones que reciben. Si L. es destinado otra vez a Nueva York, es indudable que otros agentes de la delegación de Nueva York pensarán que logró este acomodo merced a la «influencia» del Congreso...

Sin embargo, por primera vez, Hoover sintióse inclinado a dar al agente otra oportunidad. Lo citó a Washington para una entrevista personal, en la que tal vez fuese posible arreglar la situación. Pero L. replicó con un violento ataque contra el jefe de la delegación de Nueva York, sugiriendo que daba a sus empleados católicos un trato preferencial en detrimento de los protestantes. L. accedía a volver al trabajo si Hoover trasladaba al jefe.

Hoover le mandó una cortante respuesta, diciendo que el jefe de aquella delegación siempre había demostrado estricta justicia e imparcialidad, y que el cargo de partidismo religioso era infundado e injusto. «En vista de su actitud», concluyó Hoover, «es innecesario que se entreviste conmigo en Washington. Considero que su caso está cerrado».

Al jefe de la delegación, Hoover le confió en una carta: «...esto me convence un vez más de que, cuando se despide a un hombre, no se debe nunca reincorporarlo a menos que estemos absolutamente seguros de que se ha cometido una injusticia».

Hoover tardó unos tres años en depurar el Servicio de Investigación y perfeccionar la organización básica que adquiriría renombre por su eficiencia. En esos años de formación, Hoover mantuvo estrecha amistad con Harlan Fiske Stone, que permaneció once meses al frente del Departamento de Justicia, y después fue designado miembro de la Suprema Corte.

A menudo Stone entraba a la sede del Servicio, con su paso cansado, para saber cómo andaban las cosas.

—Edgar, vengo a vigilar qué tal marcha esto.

El 2 de enero de 1932 Stone escribió a Hoover:

A menudo vuelvo con el recuerdo a los días en que lo conocí en el Departamento de Justicia, y siempre es una satisfacción para mí comprobar hasta qué punto ha justificado usted mi criterio cuando decidí colocarlo al frente del Servicio de Investigación. El Gobierno puede ahora enorgullecerse del Servicio, en vez de sentir la obligación de disculparse.

Así había girado la rueda.

IX. - EL F. B. I. SE PONE SERIO

El 10 de marzo de 1921 llegaba a Washington un acaudalado financiero alemán, Richard T. Merton. La ciudad engalanada festejaba aún la ascensión del mando por el presidente Warren G. Harding.

A Merton no le interesaban particularmente las trivialidades del júbilo. Había venido de Alemania para reclamar la bonita suma de 6.968.929,97 dólares, en poder del administrador de la Propiedad Enemiga. El visitante alemán no tuvo dificultad para orientarse dentro de la ciudad y conocer a las personas influyentes que necesitaba. Estudió cuidadosamente la situación y resolvió negociar con John T. King, hombre de Connecticut, miembro del Comité Nacional Republicano que tenía amigos en las más altas esferas de la nueva administración.

Merton abordó a King con esta proposición: le pagaría un anticipo de 50.000 dólares para actuar como agente suyo, y 391.000 dólares más si King obtenía la liberación de los millones bloqueados. King aceptó y recibió el primer pago de 50.000 dólares.

Los millones que estos hombres buscaban tenían una interesante historia. Después que los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania, el gobierno norteamericano confiscó propiedad enemiga que incluía 34.644 acciones de la American Metal Company en poder de ciudadanos alemanes. Estos bienes estaban bajo custodia del administrador de la Propiedad Enemiga. A fines de 1919 las acciones se vendieron en subasta pública en Nueva York, a razón de 166 dólares cada una. Es decir, un total de 5.750.904 dólares. Los dividendos e intereses acumulados a esa fecha sumaban algo más de 700.000 dólares adicionales.

Poco después de cerrar trato con King, Merton fue presentado al misterioso Jess Smith, íntimo amigo del procurador general Daugherty. A su vez, Smith lo presentó al coronel Thomas W. Miller, administrador de la Propiedad Enemiga. Smith y Miller eran buenos y viejos amigos, tanto que Miller había depositado 50.000 dólares, pertenecientes al fondo de la Propiedad Enemiga, en un banco de Washington Court-house, Ohio, que era propiedad de Mal Daugherty, hermano del procurador general.

Merced a estas presentaciones, Merton pudo llegar por fin al hombre capaz de hablar de negocios. Informó al coronel Miller que, antes de entrar los Estados Unidos en guerra con Alemania, los accionistas alemanes habían transferido sus acciones, por acuerdo oral, a una compañía suiza. Esta transferencia oral significaba, explicó Merton cuidadosamente, que el dinero procedente de las acciones confiscadas no era dinero alemán, sino dinero suizo que se retenía injustamente. Merton presentó documentos que presuntamente fundamentaban la transferencia.

Hasta ese momento, ninguna persona relacionada con la American Metal Company había oído decir que las acciones

fueran de propiedad suiza. Los propios funcionarios de la compañía jamás habían puesto en duda que los propietarios fuesen alemanes. Aun después de iniciada la guerra, las discusiones sobre el caso se habían realizado con los dueños alemanes.

Pero el 23 de septiembre de 1921, apenas seis meses después de su arribo, la reclamación de Merton fue aprobada por el coronel Miller y por funcionarios del Departamento de Justicia que seguían instrucciones del procurador general Daugherty. A los abogados del Departamento que aprobaron la entrega de fondos no se les dio un solo documento importante relativo a la propiedad alemana de las acciones. Esos documentos no estaban en la carpeta del expediente entregado por el administrador de la Propiedad Enemiga, aunque más tarde fueron restituidos a su lugar entre las demás constancias.

Pocos días después de recibir Merton el dinero se destapaban botellas de champaña en un departamento del Ritz-Carlton Hotel, en Nueva York. Regocijadas voces celebraban la extraordinaria hazaña de Merton. En medio de los festejos, el coronel Miller entregó a Merton dos cheques contra el Tesoro de los Estados Unidos, por un total de 6.453.979,97 dólares. Además, el gobierno había acreditado a Merton 514.950 dólares en bonos de la Libertad, remitiendo esa suma al National City Bank de Nueva York en pago de los dividendos e intereses acumulados.

Merton cumplió su parte del trato con John T. King. Le entregó 391.000 dólares en bonos de la Libertad. Después regresó triunfante a Alemania.

El singular «affaire» permaneció inadvertido bajo el polvo acumulado durante casi tres años, hasta que el procurador general Stone pidió al F. B. I. que siguiera el rastro a los cupones de los bonos de la Libertad que habían estado en poder de Merton. Los agentes rastrearon los cupones de un banco a otro y fueron desenterrando transferencias de dinero de una a otra cuenta bancaria. De ese modo se logró identificar a los primitivos tenedores de los cupones, que eran Harry Daugherty, Jess Smith, John T. King y el coronel Miller. Las pruebas recogidas establecieron que King había recibido 112.000 dólares en bonos, Miller 50.000 y Smith 90.000. El enigma sin resolver era éste: ¿qué había sido de los 139.000 dólares en bonos que faltaban?

El misterio de los bonos nunca se aclaró del todo. Las pistas existentes conducían a numerosos callejones sin salida. Jess Smith se había suicidado en 1923, dejando una fortuna calculada en 500.000 dólares, de la que legaba el 25 por ciento a Harry Daugherty. Del banco de Mal Daugherty en Washing-

ton Courthouse, Ohio, faltaban algunos comprobantes, y Mal informó a los agentes que su hermano los había retirado para quemarlos. King admitió haber recibido 50.000 dólares para representar a Merton, pero alegó que eran honorarios legítimos, y que el dinero que entregó a otros era en pago de ciertas deudas contraídas en sus campañas políticas. Antes de terminar la indagatoria, King murió y sus archivos desaparecieron.

El coronel Miller fue declarado culpable de «conspiración para defraudar a los Estados Unidos», condenado a dieciocho meses de prisión y multado en 5.000 dólares. El 1º de febrero de 1933 Miller obtuvo un indulto presidencial, con la recuperación de sus derechos civiles. En lo que atañe al ex procurador general Daugherty, el jurado no llegó a una decisión.

Mientras un grupo de agentes investigaba el negociado de los bonos, otro ponía al descubierto la corrupción acumulada en la Oficina de Veteranos, por obra del coronel Charles R. Forbes, primer administrador de ese organismo, cuya flagrante deshonestidad ya había sido expuesta por investigadores del Senado.

En su juventud, Forbes se había enganchado por dos años en la Infantería de Marina; después, a la edad de veintidós años, ingresó en el Ejército. Desertó en Fort Myer, Virginia. El Ejército le echó el guante cuatro años más tarde. Estuvo encarcelado en Fort Strong, Massachusetts. Había firmado su solicitud de ingreso como «soltero»; no obstante, el Ejército recibió quejas de una «Mrs. Forbes», quien afirmaba que la había abandonado con sus dos hijos, negándole todo sostén. «Por intermedio del Departamento de Caridad Pública de Nueva York, me ha estado enviando una pequeña suma», escribió la mujer. «Ahora me notifican que dejará de enviarla».

Forbes alegó que se había divorciado de su esposa, y el Ejército decidió que no tenía autoridad para obligarlo a pagar. Se le conmutó la desertión bajo promesa de cumplir el período de su contrato y comportarse como un buen soldado. Lo destinaron a Filipinas, donde ascendió a sargento. Sus compañeros lo llamaban «Willie el Chiflado». Oficiales y soldados por igual lo consideraban el alma del cuartel. Muchos lamentaron verlo abandonar el Ejército y regresar a la vida civil.

Forbes recogió cierta experiencia en el negocio de la construcción, como capataz de una cuadrilla de albañiles en el Noroeste. Allí empezó a actuar en política de comité. Se había convertido en orador eficaz, y era un hombre de notable atractivo, tosco pero ingenioso.

Antes de la primera guerra mundial, Forbes recaló en Honolulu. Entró en la política de Hawaii, y no tardó en con-

vertirse en comisionado de Obras Públicas. De ahí que formara parte del comité de recepción cuando el senador Warren G. Harding llegó en visita oficial. Hermosas muchachas isleñas, según la costumbre, colocaron fragantes guirnaldas de jengibre y «pikaki» en torno al cuello del senador, y hubo «luaus» (fiestas) a la luz de las estrellas. Cuando Harding decidió marcharse, él y Forbes estaban en tan buenos términos que se palmeaban la espalda y se llamaban «Warren» y «Charlie»... y Harding invitó a Charlie a visitarlo en su casa de Marion, Ohio, en cualquier momento.

Después vino la guerra. Forbes solicitó ingresar como mayor en el cuerpo de Señaleros del Ejército, y le fue concedido. Al parecer, nadie se molestó en revisar su foja de servicios, con aquel viejo antecedente de desertión. Dicho sea en honor de Forbes, sin embargo, combatió en el frente, en Francia, ganó una medalla de Servicios Distinguidos y una «Croix de Guerre» francesa, y ascendió a teniente coronel.

Después Charlie Forbes regresó a los Estados Unidos. Se dedicó al negocio de la construcción en Seattle, y allí estaba en 1920 cuando la estrella política de Harding surgió raudamente sobre el horizonte.

Forbes era un oportunista. Fue uno de los primeros visitantes que aparecieron en Marion después de la elección presidencial. Según una crónica de la época, Forbes pidió ser puesto al frente de la Junta de Navegación, pero finalmente Harding le respondió algo así como lo siguiente:

—Charlie, dicen que no sirves para la Junta de Navegación. Pero tengo algo mejor. Vamos a concentrar en una sola organización todos estos programas de ayuda a los veteranos de guerra. Con tu actuación en el ejército, eres el hombre indicado. El cargo es tuyo, si lo quieres.

Forbes, naturalmente, aceptó. Como director de uno de los organismos más costosos del gobierno, con un presupuesto de más de 450.000.000 de dólares anuales, Forbes se convirtió en un hombre importante. Un cronista recordaría luego:

Carecía de medios de vida visibles, excepto su salario de 10.000 dólares anuales, pero vivía con opulencia, organizaba «reuniones» cuya generosa esplendidez tardará en olvidarse y mantenía a su familia en Europa.

En tanto otros hacían antesalas para ver al presidente, Forbes entraba como Pedro por su casa. Seguían tratándose de «Warren» y «Charlie». En su tosco humorismo, en su burbujeante jovialidad y campechana camaradería, el presidente encontraba alivio para las preocupaciones de un cargo que pesaba demasiado sobre su naturaleza bondadosa. Esto lo sabía en Washington toda la «gente enterada»; y Forbes, con la mayor naturalidad, utilizaba esa reputación para sus propios fines.

Forbes estaba tan seguro de que el Congreso aprobaría un programa para construir sanatorios de veteranos por valor de 17.000.000 de dólares, que aconsejó a un amigo que se convirtiera en agente del mayor número posible de proveedores de equipos hospitalarios y de contratistas; y este amigo cerró trato con un contratista de obras que le aseguró un 35 por ciento de las ganancias. Mucho antes de anunciarse la construcción de los sanatorios —según surge de testimonios judiciales—, Forbes había informado al contratista en qué lugares serían edificados.

Forbes y sus amigos realizaron una alegre gira por los Estados del Oeste, para «inspeccionar» las obras en construcción. Circulaban rumores pintorescos, según los cuales en cierta oportunidad Forbes y una amiga se habían zambullido completamente vestidos en una piscina; se decía que en una partida de póker alguien había entregado distraídamente 5.000 dólares a Forbes, y que ese dinero no había sido devuelto al generoso prestamista. Se hablaba de un trato para repartir una ganancia de 450.000 dólares en la construcción de hospitales; Forbes habría recibido 150.000. Hubo ofertas y negociados secretos, en los que no sólo estaba complicado Forbes, sino el asesor legal de la Administración de Veteranos, Charles F. Cramer.

En noviembre de 1922 Forbes firmó un contrato para la venta de excedentes hospitalarios de guerra almacenados en Perryville, Maryland.

La señora de Cramer mandó a su marido, que estaba en la costa del Oeste, un telegrama que decía: «Creo necesario vuelvas en seguida; me parece Coronel es un traidor. Ha desvalijado Perryville esta semana...».

Cuando los agentes del F. B. I. entraron en acción, descubrieron pruebas que confirmaban el sórdido escándalo, desmascarado en primer término por los investigadores del Senado. En un período de dos meses habían salido de Perryville 155 vagones de excedentes, inclusive 98.995 pijamas donados por las mujeres norteamericanas a la Cruz Roja durante la guerra. El inventario oficial de excedentes aprobados para la venta mencionaba 2.000 sábanas; pero se descubrió que más de 83.000 sábanas prácticamente nuevas habían sido despachadas a los compradores. Las sábanas fueron vendidas a 27 céntimos cada una, y al mismo tiempo el gobierno las estaba comprando a 1,03 dólares cada una.

Indignados funcionarios del Servicio de Salud Pública observaban cómo salían de Perryville suministros que ellos necesitaban con urgencia, y a los que tenían derecho. Por fin lograron transmitir sus protestas al presidente Harding, por intermedio del general Charles E. Sawyer, médico resi-

dente de la Casa Blanca. Dos veces ordenó Harding que cesara el embarque de excedentes de Perryville; y las dos veces sus órdenes fueron ignoradas.

Por fin, cuando ya estallaba el escándalo, Harding llamó a Forbes a la Casa Blanca. Los cronistas de la época dijeron que Harding sujetó a Forbes y lo sacudió «como un terrier sacude a una rata», gritando:

—¡Farsante! ¡Me has traicionado otra vez!

Forbes fue despedido. Salió de la Casa Blanca pálido y tembloroso. Su mundo se había desmoronado.

El F. B. I. siguió metódicamente, de un depósito a otro, el rastro de las mercaderías. Sus hombres compulsaron los comprobantes de los Departamentos de Guerra y Marina, el Servicio de Salud Pública y el Servicio de Veteranos para determinar el origen y el costo de los excedentes. Informaron: «La suma total defraudada supera los 400.000 dólares».

Forbes estuvo dos años en la cárcel y pagó una multa de 10.000 dólares. Charles F. Cramer se suicidó.

Mientras se investigaban estos casos, otro asunto preocupaba al procurador general Stone: los persistentes rumores de irregularidades en el presidio federal de Atlanta. Stone llamó a Hoover a su despacho y discutieron los informes.

—Me parece conveniente que investigue —dijo Stone—. Estos informes parecen basados en algo más que simples rumores.

Hoover asintió. El 1º de octubre de 1924 ordenó a sus agentes que investigaran las condiciones imperantes en el presidio de Atlanta, y en un par de días se hizo evidente que el alcaide A. E. Sartain hacía caso omiso de los reglamentos carcelarios en vigor, administrando el establecimiento como si fuese un «country club».

Los primeros informes rezaban así:

Se ha visto a prisioneros caminando por los terrenos exteriores a la penitenciaría, sin custodia, hasta las 10 de la noche... Prisioneros con el uniforme de la penitenciaría pasan el tiempo en la ciudad de Atlanta, sin guardianes... Presos sentados en el porche de residencias de Atlanta... Siete presos tendidos en el patio de la casa del alcaide... El correo del presidio está a cargo de Grady Webb, que cumple pena de 25 años por asaltar al Correo, y todos sus ayudantes están condenados por violación de las leyes postales.

A medida que los agentes del F. B. I. profundizaban la investigación, descubrieron que los presos pudientes pagaban a los funcionarios del presidio sumas que oscilaban entre 1.500 y 5.000 dólares, para que les diesen «trabajos livianos» y les otorgaran privilegios tales como el de reunirse en el

garaje del alcaide para jugar al póquer por 50 dólares la ficha. Pero lo más asombroso era que el capellán de la cárcel estaba complicado a fondo en ese mecanismo de soborno.

El alcaide Sartain y otros funcionarios del presidio pretendieron entorpecer la investigación. Algunos testigos fueron intimidados y se quiso inducir a los prisioneros a que repudiasen los informes suministrados a los agentes. Pero éstos lograron aclarar el panorama a pesar de todo.

El capellán claudicó y confesó. Dijo que en una oportunidad, en un hotel de Atlanta, conoció a representantes de una pandilla de contrabandistas de licor, de Savannah, que habían sido condenados por violar las leyes de la Prohibición. Se mostraron dispuestos a pagar 10.500 dólares después que el capellán les aseguró que siete de los condenados recibirían trato especial cuando ingresaran en el presidio. Más tarde, dijo el capellán, fue a Savannah con uno de los amigos del alcaide Sartain, Laurence Riehl, quien cobró el dinero y le entregó su parte: 2.100 dólares.

George Remus, de Cincinnati, conocido como el «rey de los contrabandistas», y Emanuel Kesler de Nueva York, llamado «el contrabandista millonario», informaron a los agentes que habían pagado a los funcionarios del presidio entre 2.000 y 5.000 dólares a cambio de comida especial, habitaciones especiales y trato preferencial. Otros dos grandes contrabandistas de licores dijeron que habían pagado 2.500 dólares cada uno por el privilegio de comer en la habitación del capellán.

Un penado atestiguó por escrito que había servido de intermediario en un convenio por el cual el alcaide Sartain dio plaza de chofer a Chesley Tuten, uno de los contrabandistas de Savannah. La declaración del penado parece una página de Damon Runyon:

Después de la conversación con el alcaide, yo me pongo en contacto con Tuten y le digo si él tenía ganas de agarrar el trabajo, que yo se lo podía conseguir por poca cosa. Tuten dijo:

—Bueno, el trabajo me gusta. ¿Cuánto me cuesta?

En ese momento yo no se lo podía decir, pero le contesté que se lo diría más tarde... Volví para hablar con el alcaide, y el alcaide me dijo:

—¿Cuánto te parece que le podemos sacar?

Yo le dije:

—No sé. De eso todavía no hablé con Tuten, porque yo no hice más que seguir sus instrucciones, porque usted me dijo que necesitaba dinero.

Yo sabía que Tuten era frágil y delicado y quería trabajar afuera. Entonces Sartain me dice:

—¿Qué te parece si le sacamos 2.000 ó 2.500 dólares?

Fui a ver a Chesley Tuten, y hablamos del asunto, y Chesley se negó a pagar más de 2.000 dólares, y yo le dije:

—Está bien.

Comuniqué el mensaje al alcaide Sartain, diciéndole que había entregado su mensaje y que había hablado personalmente con Tuten, y que Tuten decía que no estaba dispuesto a pagar 2.500 dólares por el trabajo, pero sí estaba dispuesto a pagar 2.000, y Sartain dijo que podía arreglar el asunto. El trabajo era de chofer para el doctor. Pasaron unas tres semanas antes que le dieran el trabajo a Chesley. Yo entregué el dinero al alcaide... El tomó el dinero y se lo guardó en el bolsillo...

El alcaide Sartain y su amigo Laurence Riehl fueron declarados culpables de cohecho. Riehl fue sentenciado a un año y un día de cárcel, y Sartain a dieciocho meses. El ex alcaide se convirtió en el penado N° 24.207 entre los presos cuyo dinero aceptaba a cambio de favores especiales. Por vicios de procedimiento, el proceso al capellán no resultó en condena; no obstante, su obispo lo relevó del cargo en el presidio.

Terminada la investigación, los agentes del F. B. I. recomendaron drásticas reformas en el penal de Atlanta, y más tarde el procurador general comunicó al Congreso: «El informe del F. B. I. constituyó la base para introducir extensas reformas en el funcionamiento y administración de la penitenciaría de Atlanta».

Por aquella época, el gobierno ejercía una fiscalización muy relativa sobre los bancos y las instituciones financieras que negociaban en acciones y títulos. Los crédulos compraban valores falsos por importe de varias decenas de millones anuales, lo que motivó una protesta del presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, E. H. H. Simmons: «Es literalmente exacto que resulta mucho más arriesgado hurtar un pan que vender acciones falsas por valor de un millón de dólares».

Fue ésta una época dorada para los embaucadores, y el F. B. I. debió salir a la palestra, una y otra vez, aguzando el ingenio para recoger pruebas contra los delincuentes. En Georgia hubo un caso en que un agente del F. B. I. debió representar el papel de «loco» para llevar ante los tribunales a un banquero fraudulento que fingía insania.

El asunto empezó cuando W. D. Manley, joven y brillante financiero nativo de Georgia, se convirtió en presidente de la recién organizada Bankers Trust Company de Atlanta, en 1911. La flamante organización surgió de una reputada firma bancaria, y con el tiempo se convirtió en agente fiscal de unas 185 asociaciones bancarias con sede en Georgia y Florida. En conjunto se las conocía bajo la denominación de Cadena Manley.

El 13 de julio de 1926 la Bankers Trust Company pasó a

manos de los síndicos. En un plazo de sesenta días, como castillos de naipes, sesenta y ocho bancos de Florida y Georgia cerraron sus puertas. Estas sucursales habían sido inundadas con documentos por valor de 18.000.000 de dólares, que les había vendido la casa matriz; casi la mitad de esos papeles representaban obligaciones de la Bankers Trust Company y sus corporaciones subsidiarias. Tras el balance final, las pérdidas ascendieron a unos 10.000.000 de dólares. Por lo menos seis personas se suicidaron a raíz de la catástrofe.

Agentes del F. B. I., con la ayuda de inspectores de correos, pudieron elaborar una acusación de fraude postal contra los más altos funcionarios de la corporación. Los investigadores compulsaron metódicamente toneladas de archivos bancarios, analizando operaciones financieras que abarcaban un período de más de veinte años. Por fin se presentaron las pruebas ante un tribunal, y cuatro altos empleados del banco fueron condenados y enviados a presidio.

Pero el presidente W. D. Manley no estaba entre ellos. So pretexto de hallarse demasiado enfermo, había conseguido sustraerse al proceso. Más tarde, en 1929, ingresó en un «hogar de inválidos», en Milledgeville, Estado de Georgia, uno de esos asilos aristocráticos e íntimos donde los «desdichados» son recluidos por sus familiares, que a partir de entonces hablan de ellos en voz baja. Se alegó que Manley estaba mentalmente desequilibrado, y tanto física como mentalmente incapacitado para ser sometido a juicio.

Poco después del ingreso de Manley, un joven llamado Charles Seymour se despedía en el umbral del hospicio de sus acongojados parientes. Su ficha médica diagnosticaba: «melancolía». Al principio, Seymour se mantuvo solitario y retraído. Pero después comenzó a ambular por las dependencias del instituto, y el médico alienista comprobó con satisfacción la chispa de interés que empezaba a dispensar a las cosas que le rodeaban.

Seymour trabó amistad con Manley. Se visitaban en sus respectivos cuartos, hablaban de libros, finanzas y problemas del momento. Seymour tenía la costumbre de trazar garabatos en un papel cuando Manley hablaba... aunque esos garabatos se parecían notablemente a símbolos taquigráficos. Seymour no tardó en recuperarse lo bastante como para abandonar el sanatorio.

Entonces los jueces ordenaron una audiencia para determinar el estado mental de Manley, y Charles Seymour, agente del F. B. I., presentó sus garabatos: la versión taquigráfica de las actividades de Manley en el hogar de inválidos. El tribunal dictaminó que, si bien Manley podía estar enfermo, era física y mentalmente apto para ser procesado. Lo

juzgaron, condenaron y sentenciaron a siete años de cárcel y 10.000 dólares de multa.

Todos estos grandes fraudes, escándalos y negociados: el de Teapot Dome, el de la Administración de Veteranos, el de la Administración de la Propiedad Enemiga, el del banquero Manley, fueron simples manifestaciones de un colapso moral en cuyo seno el delito crecía de manera alarmante en toda la nación. Empezaba a surgir el gangsterismo. Muchas reparticiones comunales, estatales y federales estaban corrompidas.

Al F. B. I. le correspondió tomar la iniciativa en la lucha contra los «gangsters».

La tempestuosa década del veinte

X. - LOS «GANGSTERS» CONQUISTAN EL PODER

En la tempestuosa década que va de 1920 a 1930 («the Roaring Twenties»), los «gangsters» se abrieron paso, a tiros o mediante el soborno, hacia los resortes del poder; y el F. B. I. se halló virtualmente incapacitado para enfrentar a pistoleros como Alphonse «Scarface» Capone, que de chico mensajero en un burdel se convirtió en amo del hampa de Chicago.

Estos fueron los años en que los «gangsters» crearon sus propios imperios invisibles, mediante infames alianzas con políticos corrompidos, abogados corrompidos, médicos corrompidos y policías corrompidos. El tributo que recogían los «gangsters» del whisky, la cerveza y el alcohol de contrabando, de los robos, la prostitución, el juego, los narcóticos y los sistemas de «protección» extorsionista, ascendía a incontables centenares de millones de dólares. Solamente los ingresos de las pandillas de Chicago, en la culminación de su poder, se calcularon entre 100 y 300 millones de dólares.

Aunque parezca extraño, el F. B. I. era impotente para actuar contra estos imperios del hampa, a menos que violasen una ley federal, como la ley antitrusts, que prohíbe entorpecer el comercio entre los Estados de la Unión.

Capone no había llegado a los treinta años cuando asumió el mando supremo del hampa de Chicago. Y aún después de «retirarse» a su opulenta finca de Palm Island, cerca de Miami, Florida, lo que ocurrió en 1927, siguió dirigiendo las pandillas y fue siempre un símbolo del terror y del mal. Le bastaba dar una orden para que un hombre fuese muerto.

Capone fue virtualmente intocable durante años. Mas al fin cometió un error, y el F. B. I. se lanzó tras él. En 1929 alegó enfermedad como excusa para eludir una citación judicial que reclamaba su testimonio en un proceso por violación de la «ley seca» ventilado en Chicago. Alegó que había estado en cama seis semanas, atacado de bronconeumonía, y exhibió un testimonio médico como prueba de que no estaba en condiciones de viajar.

Los agentes del F. B. I. indagaron en la versión de Capone. Y descubrieron que durante ese período en que presuntamente estuvo enfermo y en cama había ido a las carreras de caballos, realizado un viaje en yate, volado a las islas Bahamas y visitado lugares de diversión, con el aspecto más saludable y reluciente.

A consecuencia de esta investigación, Capone fue citado por desacato a la justicia, y se le ordenó comparecer ante un gran jurado federal de Chicago. Arrestado en Florida, el 27 de marzo de 1929, salió en libertad mediante el pago de una fianza de 5.000 dólares. Dos meses más tarde, Capone fue detenido en Pensilvania y condenado por llevar un arma oculta. Al expirar la sentencia de un año, se lo procesó por desacato a la justicia y fue a la cárcel seis meses más. Mientras cumplía esta sentencia, agentes de la Oficina de Impuestos a los Réditos examinaron prolijamente las finanzas de Capone. Fue acusado por evasión de impuestos. El ex mensajero de burdel no pudo eludir ese cargo. Lo mandaron a la cárcel por diez años.

Las causas que provocaron el auge del gangsterismo a partir de 1920 todavía se discuten. Pero todos admiten que coincidió con la depresión nacional que se produjo después de la guerra y con la ley de prohibición.

La llamada «ley seca» empezó a regir oficialmente en todo el país el 16 de enero de 1920. En Norfolk, Virginia, el evangelista Billy Sunday rezó un funeral por «John Barleycorn»⁽¹⁾. Un tronco de caballos arrastró un carro fúnebre hasta el templo. Del coche fúnebre fue descendido un ataúd de veinte pies de largo y paseado entre los asistentes. De él tiraba un comparsa con figura de diablo acongojado. Billy Sunday: gritó: «¡Adiós, John! Has sido el peor enemigo de Dios. Has sido el mejor amigo del Demonio. Te odio con un odio perfecto...».

Pero «John Barleycorn» se negó a ser sepultado. Millones de norteamericanos no querían la Prohibición. Entonces nació el «bootlegger», el contrabandista de licores, dispuesto a satisfacer la demanda. Buques extranjeros empezaron a traer cargamentos de whisky de Inglaterra, Francia, Bermudas y otros lugares. Anclaban en aguas internacionales, fuera del límite de tres millas, y transbordaban su mercadería a las poderosas lanchas de motor de los «rumrunners». Estas lanchas se deslizaban a veces en el silencio nocturno a través de las defensas de la Guardia Costera; otras intentaban abrirse camino entre el tableteo de las ametralladoras. El riesgo era grande, pero grande era la ganancia. Un cajón de whisky

(1) Símbolo del bebedor o de la bebida; *barleycorn* es el grano de cebada que sirve para preparar ciertas bebidas fuertes.

comprado al por mayor en 15 dólares podía revenderse a 70 u 80. Un barril de cerveza adquirido por 3 dólares se negociaba a 60. En una oportunidad se calculó que los buques anclados fuera del puerto de Nueva York, en la zona llamada «Rum Row», traían cargamentos de whisky por valor de 225 millones de dólares. Y a través de la frontera canadiense, el whisky, la cerveza y el alcohol fluían literalmente a raudales.

El Congreso delegó en el Departamento del Tesoro la responsabilidad de hacer cumplir la Prohibición. Y ese departamento no tardó en desplegar en 105 delegaciones un pequeño ejército de 4.000 agentes.

Los «gangsters», sin embargo, disponían de fondos casi ilimitados para corromper y sobornar a funcionarios municipales, policías y agentes del gobierno federal. En la época de la Prohibición, un agente cuyo sueldo era de 44 dólares semanales podía ganar centenares de dólares con sólo hacer la vista gorda en el momento adecuado. En Nueva Jersey, un funcionario federal encargado de vigilar el cumplimiento de la «ley seca» llegó a afirmar que todos los empleados de su dependencia, salvo tres, aceptaban coimas; y agregó que él no podía «conducir un ejército a la batalla» cuando la mayoría de sus soldados estaban a sueldo del enemigo. En 1925, un grupo de cuarenta fiscales de los Estados Unidos recomendó que todos los agentes de la Prohibición fueran despedidos y reemplazados por hombres cuidadosamente seleccionados. En 1927 Seymour Lowman, ayudante del secretario del Tesoro, denunció que «...el soborno pulula... Hay días en que se me cansa el brazo de tanto firmar cesantías de delincuentes e incapaces». Otro funcionario de la Prohibición informó que un consorcio de destiladores había ofrecido una coima de 300.000 dólares semanales para que los agentes los dejaran actuar en libertad. En muchas ciudades, empleados y funcionarios honestos debían realizar milagros para no enfangarse en la ciénaga de corrupción y lucro.

La verdad era que, en general, el público se mostraba apático ante el delito, a pesar de que en 1926 el índice de homicidios había llegado a la calamitosa cifra de 12.000 por año. Los asesinatos en masa en el mundo del hampa eran cosa frecuente. Solamente en la zona de Chicago, durante treinta meses de 1924 a 1926, hubo noventa y dos asesinatos en los bajos fondos; y en un 90 por ciento quedaron sin esclarecer. Los perjuicios ocasionados por la delincuencia ascendían a miles de millones de dólares. La política estaba corrompida, porque sus organizaciones se confabulaban en todo el país con los pistoleros. El gobierno sólo podía investigar aquellos crímenes que violaban leyes federales, y por lo tanto la represión del delito corría principalmente por cuenta de las

autoridades locales. Y la indignación del público contra las prácticas tolerantes o corrompidas de los custodios del orden tardó mucho en manifestarse.

A comienzos de 1925 el F. B. I. recibió informes de que en Cincinnati imperaba el peculado como norma. La policía estaba confabulada con el hampa. A dos cuadras del Edificio Federal, sin el menor disimulo, funcionaban garitos. El tráfico de narcóticos alcanzaba niveles alarmantes. La situación se hizo tan grave que por último empleados de la comuna debieron pedir ayuda al Departamento de Justicia.

Hoover discutió la situación con el procurador general Stone y, con la aprobación de éste, mandó a Cincinnati un grupo especial de investigadores. En dos días, los agentes descubrieron indicios de una pandilla de coimeros dentro de la policía de la ciudad, lo que implicaba ciertas violaciones de las leyes federales. Metódicamente, interrogaron a centenares de testigos y empezaron a recoger declaraciones firmadas. Un traficante de narcóticos confesó que había redondeado 455.056 dólares en treinta meses, y que había pagado 18.000 dólares como tarifa de «protección». El propietario de una taberna que embolsaba 3.500 dólares diarios por venta de licores admitió que en el transcurso de tres años había pagado a la policía 200.000 dólares.

En localidades próximas a Cincinnati, los investigadores del F. B. I. descubrieron que llamados «agentes secos» (es decir, funcionarios encargados de hacer cumplir la Prohibición) habían montado un sistema extorsionista en complicidad con los jueces de paz. A esos «agentes secos» se les pagaba según el número de arrestos efectuados y el monto de las multas aplicadas.

En menos de tres meses, los agentes del F. B. I. estuvieron listos para actuar. Se reunió un gran jurado federal y se presentaron acusaciones contra cuarenta y ocho policías de Cincinnati y veintitrés «agentes secos» de localidades vecinas, por conspiración para violar la Prohibición y las leyes federales de tráfico de narcóticos. Algunos de los acusados huyeron. El F. B. I. les siguió el rastro hasta Miami, Los Angeles y Syracuse (Nueva York), y los trajo a presencia de sus jueces. De los setenta y un acusados, se juzgó a setenta y se condenó a sesenta y dos. Uno escapó a Montreal, Canadá.

La investigación abrió el camino para un movimiento de reforma en Cincinnati; los viejos politiqueros fueron barridos de la comuna, junto con policías corrompidos que, según los testimonios presentados, habían percibido en tres años unos 348.000 dólares en concepto de comisiones.

Poco después de esta limpieza, Hoover recibió la alarmante noticia de que el agente del F. B. I. Edward B. Shanahan

había sido muerto a tiros por un ladrón profesional de automóviles, llamado Martin James Durkin. Era la primera vez que un agente del F. B. I. caía en acto de servicio.

Hoover llamó a un ayudante.

—Tenemos que atrapar a Durkin —dijo—. Si matan a un hombre del Servicio y permitimos que el asesino escape, nuestros agentes nunca estarán a salvo. No podemos dejar que la saque de arriba.

El F. B. I. buscaba a Durkin por el robo de un automóvil, y Shanahan le había encontrado el rastro. Pero, cuando pudo localizarlo y se dirigió a él para detenerlo, Durkin tomó una pistola automática que llevaba a su lado en el asiento del automóvil y le pegó un tiro en el pecho.

El F. B. I. se lanzó a la caza de Durkin.

En Chicago, Durkin mató a un policía e hirió a otro. El F. B. I. lo rastreó hasta California. La pista se hizo más visible cuando del salón de ventas de una agencia de San Diego robaron un automóvil. El «trabajo» tenía todas las características de los realizados por el pistolero. Un vendedor identificó a Durkin a través de una fotografía. El rastro atravesaba a California, Arizona, Nuevo México, Texas. Fue recogido, extraviado y recogido nuevamente. El sistema de cooperación entre las policías estatales y el F. B. I. no estaba por entonces muy avanzado. Esto ayudó a Durkin.

Sin embargo, el delincuente estuvo a punto de ser atrapado en Pecos, Texas. Un «sheriff» suspicaz se acercó a inspeccionar un automóvil estacionado en la calle y vio una pistola sobre el asiento, junto al conductor. El joven que empuñaba el volante contó una historia bastante verosímil. Dijo que era «sheriff» delegado en California, que estaba de vacaciones, y que por eso llevaba el arma. Podía probarlo, añadió, si el «sheriff» le permitía llegar a su hotel y traer sus documentos de identidad. El «sheriff» accedió. Durkin apretó el acelerador y se internó en el desierto. Iba con una mujer.

El «sheriff» de Pecos informó sobre el incidente, por carta, a la delegación del F. B. I. en El Paso, dando una descripción que coincidía con la de Durkin. «Pensé que a lo mejor ustedes tienen algo contra este pájaro», escribió.

Ahora el rastro era fresco. Agentes del F. B. I. rastrearon el desierto. Encontraron el Cadillac, destrozado y abandonado en un matorral de algarrobos. Era el mismo que habían robado en San Diego. Un propietario rural de las inmediaciones recordó que un hombre y una mujer habían llamado a su puerta, pidiéndole que los condujera a la estación ferroviaria más próxima.

—Los llevé a Girvin —dijo el campesino—. Hablaron de ir a Alpine para tomar un tren.

El pueblo de Alpine estaba cerca de la frontera mexicana. Los agentes del F. B. I. calcularon, sin embargo, que Durkin jamás iría a México, y tampoco seguiría internándose en el desierto. Amaba demasiado las ciudades y la vida nocturna. Interrogaron al boleterero de Alpine, describiendo a Durkin y su compañera.

—Ahora que lo pienso —dijo el empleado—, un hombre joven y una mujer que según él era su esposa tomaron el 110 anteanoche. Sacaron boletos para San Antonio.

A través de guardas, ventanilleros y changadores, los agentes averiguaron, durante la mañana del 20 de enero de 1926, que Durkin y su amiga habían tomado el «Especial de Texas» de la M. K. & T., que debía llegar a St. Louis a las once de esa misma mañana. Se realizaron urgentes llamadas telefónicas a la delegación del F. B. I. en St. Louis, suministrando el número del vagón y del compartimiento en que iba Durkin.

Los agentes de la delegación de St. Louis se comunicaron con la policía local y explicaron la situación. Aunque pareciera extraño, el gobierno no podía procesar a Durkin por el asesinato de Shanahan, porque matar a un funcionario federal no constituía una violación de las leyes federales. Sólo podía ser juzgado por asesinato ante los tribunales del Estado en que había cometido el crimen.

Contando con la ayuda de la policía local y de las autoridades ferroviarias, se hizo parar el «Especial de Texas» en una pequeña localidad de las afueras de St. Louis. Si Durkin intentaba huir, tendría que atravesar campos abiertos y arados; un tiroteo no causaría víctimas inocentes. Cuando el «Especial de Texas» se detuvo, agentes del F. B. I. y pesquisas de la policía local subieron al tren y desfilaron apresuradamente por entre los sorprendidos pasajeros. Irrumpieron en el compartimiento de Durkin antes que pudiera desenfundar las pistolas que llevaba en el sobretodo. Lo bajaron esposado.

Martin Durkin, ladrón y asesino, fue capturado tres meses y días después de matar al agente Shanahan. Se declaró culpable del crimen. Tenía veinticinco años de edad al concluir su carrera de delincuente. Jueces locales y federales lo condenaron a un total de cincuenta años de cárcel: treinta y cinco por matar a Shanahan, y quince por una larga serie de robos de automóviles. Durkin ingresó en la cárcel con la desagradable perspectiva de no salir hasta que cumpliera setenta y cinco años, si acaso vivía tanto. Sin embargo, sólo pasó veintiocho años en presidio. Fue puesto en libertad en 1954⁽¹⁾.

(1) Durkin ingresó en el presidio del Estado de Illinois el 9 de noviembre de 1926, y salió en libertad el 8 de agosto de 1945. Después fue tomado en custodia por la policía local y enviado al presidio federal de Leavenworth. Tenía cincuenta y tres años cuando salió de Leavenworth el 28 de julio de 1954, al expirar su sentencia.

Uno de los casos más extraños que debió enfrentar el F. B. I. en esta época fue ajeno a las prácticas de corrupción y cohecho que por entonces constituían la mayor de sus preocupaciones. Aquí se trató de capturar todo un ejército, incluyendo su estado mayor, infantería, equipos blindados, artillería, munición y fuerza aérea.

Ocurrió en 1926. Según una denuncia recibida por el F. B. I. el mayor general Enrique Estrada, que había sido ministro de Guerra mexicano durante la presidencia de Obregón, estaba reclutando y adiestrando en territorio norteamericano un ejército con el que pensaba invadir a México. El general había huido de México a California en 1924, tras una fracasada intentona para derrocar al gobierno de Obregón. Muchos de los que habían equivocado el pronóstico en esa revuelta encontraron refugio en Los Angeles, ciudad donde reinaba una singular tolerancia, aun en aquellos tiempos.

Estos exilados se reunían con cierta frecuencia para planear medios y procedimientos que les permitieran regresar a México con un ejército de conquista y ganar el poder. En la primavera de 1926 tales planes comenzaron a asumir formas concretas. El general Estrada no podía contar con los grandes fabricantes de municiones para obtener las armas que necesitaba, pero en cambio logró el apoyo de una firma ferretera local.

Los artículos de «ferretería» que adquirió el general Estrada incluían, al principio, 400 fusiles Springfield y 150.000 balas de calibre treinta. Después el general y sus amigos compraron dos ametralladoras Marlin, 5.000 proyectiles para las mismas, 300 libras de dinamita y caños y hierro laminado para fabricar improvisadas bombas de aviación. Al término de sus preparativos —que le costaron 62.400 dólares— el general Estrada y su estado mayor contaban con una fuerza aérea de cuatro monoplanos Ryan y tres pilotos; una fuerza motorizada compuesta por dos camiones blindados de dos toneladas y media, y un tren de suministros de cinco camiones usados.

Los oficiales de reclutamiento de Estrada —además de él, había cuatro generales— se dirigieron a la colonia mexicana de Los Angeles para reclutar la infantería.

—Vengan con nosotros —decían los reclutadores—. Les pagaremos generosamente. Entrarán como soldados, pero ascenderán rápidamente. Y cuando la revolución triunfe, les daremos tierras y buenos empleos en la California mexicana.

Todo marchaba perfectamente. Ya habían llegado las armas, las municiones y los aeroplanos. El primer grupo de la fuerza invasora salió de Los Angeles la tarde del sábado 14 de agosto. Estaba compuesto por dos camiones cargados

de municiones y armas, y un automóvil. Pero tras ellos, disimulados en el tránsito de vehículos, iban tres automóviles con agentes del F. B. I., cuatro oficiales de la policía de Los Angeles y dos agentes de una firma aseguradora: la Pacific Coast Auto Underwriters. Este convoy pernoctó en Santa Ana.

Al día siguiente, en Los Angeles, se congregó el grueso del ejército de Estrada. A los soldados —alrededor de 115— se les dieron cantimploras, tabaco y cigarrillos. Fueron cargados en los camiones que quedaban, o en automóviles alquilados por familiares o de propiedad de los conductores, y la caravana se puso en marcha hacia el punto de concentración, fijado cerca de la frontera mexicana; mientras tanto, los agentes del F. B. I. James G. Finlay y A. A. Hopkins ⁽¹⁾ vigilaban los movimientos de la columna.

El plan revolucionario consistía en invadir a México en las proximidades de Engineer Springs, y después del anochecer tomar por asalto la guarnición mexicana de Tecate. Entonces, calculaban los rebeldes, el movimiento ganaría apoyo y adherentes hasta convertirse en una poderosa fuerza que marcharía sobre la ciudad de México. Pero los agentes del F. B. I. en San Diego habían alertado a las patrullas fronterizas de los Estados Unidos, así como al «sheriff» de San Diego. Y estas fuerzas también estaban en marcha.

El tren de municiones llegó al punto de concentración a la hora fijada, y esperó el arribo del estado mayor y las tropas. Pero el «enemigo», infiltrándose y atacando por retaguardia, flanqueó la columna sin disparar un solo tiro. En las agitadas horas que siguieron, agentes del F. B. I., oficiales de las patrullas fronterizas, empleados del «sheriff» de San Diego y policías de Los Angeles capturaron las fuerzas de tierra, la columna motorizada y la aviación del general mexicano; el propio Estrada fue arrestado por los agentes Findlay y Hopkins.

Los deprimidos generales y sus tropas fueron alojados en custodia en la base de infantería de marina de San Diego. El general Estrada, que vestía ropas civiles sobre su uniforme militar, no tenía un aspecto muy elegante. Sus oficiales fueron condenados a penas que oscilaban entre doce y veintiún meses de cárcel, y de 1.000 a 10.000 dólares de multa, por organizar una expedición militar en territorio norteamericano.

(1) El agente James G. Findlay nació en Eldon, Missouri, el 20 de mayo de 1882. Entró en funciones como agente especial el 29 de agosto de 1911. Es el empleado más antiguo del F. B. I. En los últimos años, ha actuado en la delegación de Los Angeles; antes estuvo en Kansas City, San Francisco y Birmingham. Findlay, que es abogado, egresó del Knox College, Galesburg, Estado de Illinois, en 1906. En 1955 recibió la Distinción al Mérito de los Alumnos de Knox, como reconocimiento por su larga y distinguida carrera al servicio del gobierno.

El agente Arthur A. Hopkins ingresó en el Servicio de Investigación el 19 de julio de 1919. Renunció voluntariamente el 3 de octubre de 1927. Murió el 18 de enero de 1944 en Los Angeles, California, a la edad de sesenta y siete años.

no. Los soldados la sacaron más barata: en su mayoría fueron puestos en libertad. Y de esta manera terminó un sueño revolucionario.

Fue éste un divertido interludio. Pero la situación que debía enfrentar el país en el campo del delito era grave y no tenía nada de divertido.

En 1929 el presidente Herbert Hoover estaba tan preocupado por el auge de la criminalidad, que designó una comisión nacional para el estudio del cumplimiento y aplicación de las leyes, que debía analizar la situación e informar sobre lo actuado. El Congreso asignó 250.000 dólares a la comisión «para investigar minuciosamente el problema que presenta la vigencia de la Prohibición... y la aplicación de otras diversas leyes».

Este grupo de estudio fue conocido con el nombre de Comisión Wickersham, porque estaba encabezado por el ex procurador general George W. Wickersham. Durante dos años indagó en los problemas que planteaba la necesidad de hacer cumplir las leyes, cubriendo un campo mucho más amplio que el de la Prohibición. El presidente declaró que esa tarea constituyó el primer esfuerzo oficial por enfocar el problema del delito como un problema nacional.

El informe de la comisión era, en efecto, una filípica que repartía las culpas de la situación imperante entre la policía, los políticos, el Congreso, los delincuentes y el público. Provocó grandes controversias en todo el país. Pero sin duda logró que se dedicara más atención a la represión del delito. La *Michigan Law Review* lo comentó de este modo: «Su verdadera importancia reside en su utilidad como punto de vista para seguir discutiendo los problemas que plantea el cumplimiento de las leyes penales».

Indirectamente, el informe Wickersham desempeñó un importante papel en el destino del F. B. I., porque subrayó los alcances nacionales del delito. Y cuando por fin se produjo la reacción del público contra el crimen y el gangsterismo, fue el F. B. I. quien recibió del Congreso la misión de efectuar una limpieza.

Pero antes de llegar a ese punto circularon rumores de que el F. B. I. sería abolido; y también de que sería fusionado con el Servicio para el Cumplimiento de la Prohibición (*Prohibition Enforcement Bureau*). Estos rumores coincidieron con la «nueva política» (*New Deal*) iniciada por Roosevelt en 1933. El mandatario saliente se enteró de los rumores, y mientras participaban juntos de las ceremonias de la transmisión del mando, Herbert Hoover señaló a Roosevelt que el Servicio había sido reorganizado y regido sobre una base apolítica y que esperaba que siguiera en manos de su joven homónimo,

J. Edgar Hoover. Roosevelt dijo que estudiaría la situación antes de obrar ⁽¹⁾.

Un periódico, en su columna de «chismes de Washington», adelantó que J. Edgar Hoover sería relevado como director del F. B. I. y transferido a alguna repartición no mencionada del interior; una especie de exilio siberiano en las inmensas latitudes exteriores a Washington.

Esta crónica decía en parte:

El Servicio de Prohibición y el... Servicio de Investigación están por desaparecer de la vida pública... El Servicio de Investigación, departamento poco conocido para el público en general, será abolido, y su lugar será ocupado por una pequeña, compacta y eficiente organización encargada de realizar toda clase de investigaciones para los diversos departamentos gubernamentales. En lugar de los 800 investigadores que actúan ahora a las órdenes de J. Edgar Hoover, jefe del Servicio, es probable que el personal de investigaciones se reduzca a 350 ó 400...

En esa época, en realidad, el F. B. I. sólo tenía 266 agentes especiales y 60 contadores, es decir, un total de 326 investigadores. Esta fuerza había permanecido prácticamente inalterada durante los primeros nueve años de la administración de J. Edgar Hoover.

Los rumores circulantes en junio quedaron desmentidos en julio. El presidente Roosevelt, lejos de desterrar a Hoover, lo dejó al frente del F. B. I., y además le encargó velar por el cumplimiento de la Prohibición. El Servicio de Prohibición había pasado del Departamento de Justicia al Departamento del Tesoro en 1930, pero siempre había actuado en forma independiente del F. B. I. y de Hoover.

Por decreto fechado el 10 de junio de 1933, el presidente Roosevelt ordenó que el Servicio de Prohibición y el Servicio de Investigación se fusionaran, formando una División de Investigación dependiente del Departamento de Justicia.

La sola idea de unificar ambos servicios resultaba abrumadora para Hoover. El Servicio de Prohibición era un organismo descentralizado y difuso, con una actuación previa que apestaba a soborno, corrupción e ineficacia. Hoover, en cambio, había trabajado nueve años para moralizar las prácticas administrativas del F. B. I., adiestrar científicamente a sus hombres y suprimir toda posibilidad de escándalo. Estaba convencido de que, si los 326 agentes del F. B. I. se mezclaban con los 1.200 agentes del Servicio de Prohibición, el

(1) El ex presidente Herbert Hoover recordó en sus memorias: «...Yo tuve cierta responsabilidad en el nombramiento de J. Edgar Hoover como jefe del Servicio Federal de Investigación, pues fui yo quien lo recomendó al procurador general Stone. Ocupó el cargo durante toda mi presidencia y contribuyó grandemente a la recuperación del Servicio...»

F. B. I. perdería su idiosincrasia y su razón de ser. El esfuerzo de tantos años sería desperdiciado.

Hoover planteó el problema al procurador general del presidente Roosevelt, Homer S. Cummings. Expresó sus temores y sugirió que el F. B. I. permaneciera separado del Servicio de Prohibición, sin unificar las tareas investigativas, las oficinas, el personal y los archivos. Argumentó que tal separación podía mantenerse aun cuando ambas reparticiones fuesen colocadas bajo una sola administración.

En el memorándum presentado a Cummings, Hoover alegó también lo siguiente:

Siendo inminente la derogación de la decimoctava enmienda es forzoso que el Servicio de Prohibición disminuya en tamaño e importancia... Por lo tanto, no será necesario mantener un organismo investigador de la magnitud del Servicio de Prohibición...

Hoover recomendó que las delegaciones regionales del Servicio de Prohibición fueran inmediatamente reducidas de 105 a 23, y el organismo puesto en manos de un jefe que se hiciera responsable de las actividades del Servicio y de la conducta del personal.

Hoover ganó la controversia, quizá la más importante desde que asumió su cargo en 1924. El procurador general Cummings aprobó su plan de organización y accedió a mantener la independencia del F. B. I. Hoover notificó lo resuelto a sus agentes, ordenándoles que girasen al Servicio de Prohibición todo asunto relacionado con el cumplimiento de la «ley seca». Y dejó claramente establecido su deseo de que la separación de ambos organismos fuese no sólo física, sino también espiritual.

Esta época, comienzos de la cuarta década del siglo, fue para el F. B. I. tan turbulenta como para el resto del país, sumergido en la depresión.

XI. - REBELION CONTRA EL CRIMEN

Un secuestro seguido de asesinato en Nueva Jersey, una matanza de pistoleros en Missouri y otro secuestro en Oklahoma fueron los crímenes que en 1932 y 1933 escandalizaron a los Estados Unidos, provocando una reacción en cadena cuyo resultado último fue enfrentar al F. B. I. contra las fuerzas armadas del hampa en una extraña guerra de guerrillas.

De 1920 a 1930 la mayor parte del país había contemplado el crecimiento del delito y del gangsterismo con una actitud de indiferencia. Los pandilleros, pensaba mucha gente, no eran peores que los ladrones de guante blanco que corrompían los gobiernos federales, estatales y comunales; prácticamente la única diferencia era que unos usaban pistolas y otros no. Esta actitud de tolerancia fue luego reemplazada por furiosas exigencias: había que hacer algo contra la amenaza de los «gangsters» y los pandilleros. Es posible trazar con bastante exactitud las coordenadas de lugar y de tiempo que señalan dicho cambio en la opinión pública.

La historia empezó el 1º de marzo de 1932, cerca de la aldea de Hopewell, Nueva Jersey, entre las ocho y las diez de la noche, cuando un secuestrador se dirigió a través de la oscuridad hacia el hogar del coronel Charles A. Lindbergh y su esposa, un lugar retirado en las estribaciones de los montes Sourland.

El intruso apoyó silenciosamente contra la casa una escalera de fabricación casera. Trepó a la ventana de la «nursery», situada en el segundo piso, donde la nodriza del pequeño Charles A. Lindbergh, de veintiún meses de edad, acababa de acostarlo y arroparlo en su cuna. El hombre entró en el cuarto, sacó de la cuna a la criatura —un chico rubio, de ojos azules— y bajó con él la escalera. Después el raptor y su víctima se perdieron en la noche.

En el antepecho de la ventana, Lindbergh encontró más tarde un mensaje que decía:

Estimado señor: Tenga 50.000 dólares preparados, 25.000 en billetes de 20, 15.000 en billetes de 10 y 10.000 en billetes de 5. Dentro de 2 a 4 días le informaremos dónde debe entregar el dinero. Le prevenimos que no diga nada ni dé aviso a la policía. El chico está bien cuidado. El signo de estas cartas es la firma (1).

La «firma» era una especie de símbolo constituido por dos círculos entrelazados en los que se habían perforado tres agujeros.

En los días subsiguientes, un director de escuela jubilado, el doctor John F. Condon, se ofreció para actuar de intermediario por parte de los Lindbergh, publicó un anuncio en ese sentido en el diario *Home News* de Bronx, Nueva York, y trabó contacto con el secuestrador.

En el curso de las negociaciones, Condon se convirtió en

(1) Como la redacción y la ortografía del mensaje tuvieron cierta importancia para resolver el caso, damos el texto original, en inglés contaminado de alemán: «Dear Sir! Have 50,000 \$ ready 25,000 \$ in 20 \$ bills 15,000 \$ in 10 \$ bills and 10,000 in 5 \$ bills. After 2-4 days we will inform you where to deliver the money. We warn you for making anything public or for notify the police. The child is in good care. Instruction for the letters are signature». (N. del T.)

«Jafsie», mientras el secuestrador se hacía llamar «John». El 2 de abril, en el cementerio de St. Raymond, en el Bronx, Condon entregó 50.000 dólares en efectivo a un hombre que se identificó como «John», y obtuvo un recibo e instrucciones para encontrar al chico: estaba, según esas instrucciones, en una barca llamada «Nellie», cerca de Martha's Vineyard, Estado de Massachusetts.

La realidad es que, mientras se desarrollaba esta escena en el cementerio, el «baby» Lindbergh estaba muerto y enterrado en una fosa poco profunda, a sólo seis kilómetros y medio del sitio en que había sido raptado. El cadáver fue descubierto el 12 de mayo de 1932 en la forma más accidental, por el ayudante de un camionero. Al parecer el chico había muerto poco después de ser raptado. Un golpe le había roto el cráneo.

El brutal asesinato despertó en el país una ola de cólera mucho más vasta que cualquier otro crimen en muchos años, inclusive las matanzas del hampa. Tres meses después del secuestro, el Congreso aprobó una ley, llamada Ley Lindbergh de Secuestros (*Lindbergh Kidnap Law*), que, con enmiendas posteriores, establecía la pena de muerte por el delito de llevar una persona secuestrada a través de una frontera estatal.

La investigación del caso Lindbergh fue dirigida por la policía estatal de Nueva Jersey, por motivos de jurisdicción. Pero en realidad se efectuó un trabajo de equipo entre la policía de Nueva Jersey, la de Nueva York y el F. B. I. La pista decisiva fue descubierta el 15 de septiembre de 1934 —dos años, seis meses y catorce días después del secuestro—, cuando un automovilista compró cinco galones de gasolina en una estación de servicio en las afueras del Bronx y pagó con un billete de diez dólares oro.

Después de entregarle el cambio, el empleado escribió en el billete el número de la patente del automóvil: 4U-13-41. Naturalmente, no sospechaba que el conductor estuviese complicado en el caso Lindbergh, pero le llamó la atención el billete oro, porque esa clase de dinero había sido retirada de la circulación por el presidente Roosevelt en abril de 1933, cuando los Estados Unidos abandonaron el patrón oro.

Tres días más tarde, un cajero de una firma bancaria, el Corn Exchange Bank and Trust Company, identificó el billete como perteneciente al rescate del «baby» Lindbergh. Dio cuenta al F. B. I., y el billete fue entregado a uno de los equipos de investigación organizados por el F. B. I., la policía de Nueva Jersey y la policía de Nueva York para esclarecer el caso. El Registro de Patentes de Automotores informó que el número anotado por el dependiente de la estación

de servicio correspondía al automóvil de un tal Bruno Richard Hauptmann, domiciliado en East 222nd Street, número 1279, Bronx.

Hauptmann fue arrestado. En el bolsillo le encontraron otro billete de veinte dólares oro, perteneciente al rescate. Trece mil dólares más de la misma procedencia fueron descubiertos en su garaje. El doctor Condon identificó a Hauptmann como el «John» a quien había pagado el rescate. Las pruebas se fueron acumulando. Hauptmann fue condenado al cabo de un proceso sensacional, y el 3 de abril de 1936 lo electrocutaron por el asesinato del pequeño Charles A. Lindbergh.

El caso Lindbergh tuvo un curioso episodio lateral, que permitió al F. B. I. encontrar una vez más la pista de aquel singular individuo de quien ya hemos hablado: Gaston B. Means. En 1932 Means estaba ya tan desacreditado que parece imposible que aún quedara alguien capaz de creer en sus embustes. Alguien quedaba, sin embargo. El propio Means debió sorprenderse cuando tres días después del secuestro la adinerada señora Evelyn Walsh McLean, de Washington, lo mandó llamar.

La señora McLean sabía que Means era un delincuente. Pero, por ese mismo motivo, se preguntó si no tendría contactos con el hampa que permitieran salvar al «baby» Lindbergh. Y planteó la cuestión a Means. Por lo que se desprende de los testimonios, Means ni siquiera parpadeó; no se le movió un músculo, no tuvo un gesto capaz de delatar el engaño que en ese mismo momento estaba tramando. Una situación como aquélla era, para él, el pan de cada día. Con la mayor solemnidad, declaró que el solo hecho de que la señora McLean hubiera acudido a él era ya una singularísima coincidencia. Porque había querido el destino que pocos días antes, hallándose en un «cabaret» de Nueva York, se encontrara con un viejo amigo a quien había conocido en la penitenciaría de Atlanta. Este ex presidiario pretendió embarcarlo en un sensacional secuestro, pero por supuesto —dijo Means— él se había negado.

Cuando leyó en los diarios que habían raptado al «baby» Lindbergh, Means comprendió que ése era el «gran golpe» que le había propuesto su amigo. Pero Means fue aún más lejos, según él. Llegó a verificar y confirmar sus sospechas. Aquel ex presidiario era miembro de la pandilla que retenía al chico, y él estaba seguro de poder localizarlos. Cuando Means terminó de relatar su fábula, la señora McLean abrigaba la extraordinaria ilusión de haber descubierto el gran secreto del rapto.

Means, por supuesto, no tuvo la menor dificultad, en ató-

mar contacto» con los secuestradores. Entonces informó a la señora McLean que el pequeño estaba bien, y que la banda exigía un rescate de 100.000 dólares. Seis días después del secuestro, la señora McLean entregó el dinero a Means. Y él, sin inmutarse, prometió no pagar un céntimo a los raptos hasta que el niño estuviera sano y salvo en brazos de la señora McLean. Para comunicarse con ella, elaboró un complicado código secreto. El niño era «El Libro». Means era «El Número 27». La señora McLean se convirtió en «El Número 11». Y el jefe de la banda era «El Número 19», o «El Zorro».

Las semanas subsiguientes fueron una cruel pesadilla para la mujer que había confiado en Means. Tanto de éste como de «El Zorro» recibía misteriosas llamadas telefónicas. En una oportunidad, «El Zorro» se presentó en el «cottage» de la señora McLean, en Aiken (Carolina del Sur) para discutir los detalles de la entrega del niño. Usaba guantes de cabritilla gris, y limpiaba cuidadosamente todas las superficies lustradas que tocaba, como si temiera dejar impresiones digitales a través de los guantes... Siempre la pandilla estaba a punto de «burlar la vigilancia policial» y entregar al niño, pero siempre ocurría algo para impedirlo. La señora McLean pagó 4.000 dólares más a Means. Estaba por empeñar sus joyas para reunir otros 35.000 dólares cuando su abogado descubrió lo que pasaba. Resuelto a poner punto final al fraude, llamó al F. B. I.

El problema principal del F. B. I. era descubrir al cómplice de Means, «El Zorro». Los agentes compulsaron las llamadas telefónicas de larga distancia recibidas por Means y la señora McLean. En su mayor parte, procedían de teléfonos públicos de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Nueva York. Pero «El Zorro» había cometido un error al llamar desde una misma zona, a su propia residencia y a la de Means.

En ambos casos, la persona que llamaba había declinado dar su nombre a la operadora; era posible que las dos llamadas, hechas desde un mismo barrio, no tuvieran la menor relación entre sí. Pero, al examinar las llamadas dirigidas a la residencia de «El Zorro», apareció el nombre de Norman T. Whitaker. Los archivos del Servicio demostraron que Whitaker era un abogado expulsado del foro y ex presidente.

Whitaker era «El Zorro». Fue identificado por la señora McLean y algunos de sus criados. Means y «El Zorro» fueron condenados por estafa, y sentenciados a quince años y dieciocho meses, respectivamente, de cárcel.

Hoover estaba presente en el tribunal cuando Means prestó testimonio en su descargo, insistiendo en que había hecho desesperados esfuerzos por encontrar al niño desaparecido.

Por fin bajó de la tarima de los testigos y tomó asiento junto a Hoover.

—Bueno, Hoover —murmuró—, ¿qué le pareció mi declaración?

—Es un hatajo de mentiras —replicó Hoover.

Means parpadeó.

—Puede ser —dijo—, pero debe usted admitir que es una bonita historia.

Lo que para Means era «una bonita historia», para la mayoría de la gente constituía un cruel engaño. A raíz de la conmoción provocada por el caso Lindbergh, el país y el Congreso comprendieron que las leyes federales eran penosamente débiles para reprimir el crimen. Los delincuentes «trabajaban» con veloces automóviles, coches blindados, fusiles de gran potencia, ametralladoras y armas superiores a las que utilizaban los representantes del orden. El crimen no era un mal localizado en ciertos puntos. Una pandilla podía operar en media docena de Estados distintos. Y era el caso más frecuente.

En 1933 los asaltos a los bancos se producían a razón de dos por día. El número de secuestros había aumentado en forma alarmante, a pesar de la ley Lindbergh. El procurador general aconsejó a la población denunciar cualquier caso de secuestro al F. B. I., llamando al número telefónico previsto para ese fin: National 8-7117, Washington.

Muchos de los delitos cometidos por las pandillas no constituían violaciones de las leyes federales. En esas leyes, por otra parte, había curiosas incongruencias. Un empleado de banco que defraudara entre 50 y 50.000 dólares a un banco federal, por ejemplo, violaba una ley federal. Pero una pandilla de pistoleros podía robar 100.000 dólares a ese mismo banco, ametrallar a sus empleados y huir a un Estado vecino sin transgredir un solo estatuto federal. Y los delincuentes podían estar razonablemente seguros de que la persecución terminaba en la frontera estatal.

Hacia 1933, los agentes del F. B. I. podían efectuar un arresto como podía efectuarlo cualquier ciudadano, pero carecían de la plena autoridad policial con que contaban las policías comunales y estatales. El resultado era que a menudo los hombres del F. B. I. debían solicitar la ayuda de la policía local para realizar allanamientos y capturas, arriesgando así la fuga de los delincuentes. En la mayoría de los casos, esa cooperación era inestimable, y las policías locales brindaban toda la ayuda que se les pedía. Pero en algunas ciudades el F. B. I. descubrió que confiar sus planes a los funcionarios locales era como verter agua en un colador. Los planes se «filtraban» hasta llegar a oídos de los malhechores,

pitosos segundos, cuatro representantes de la ley fueron asesinados, y dos heridos. Los matadores subieron a un automóvil y escaparon (1).

¿Y Nash, el hombre a quien los pistoleros querían salvar? Murió con una bala en el cerebro, una bala disparada por alguno de sus «libertadores» (2).

El asombroso desafío a la autoridad que representaba la «Matanza de Kansas City» despertó un clamor público que exigía leyes más severas en el ámbito local y federal. Aún no se habían apaciguado tales protestas, cuando los «gangsters» volvieron a reírse de la justicia secuestrando a un magnate petrolero de Oklahoma. Este caso, sin embargo, demostró que algo podía hacerse contra la amenaza del gangsterismo.

Poco después de medianoche, hora de Washington, del 23 de julio de 1933, se encendió en el conmutador telefónico del F. B. I. una lucecita que indicaba una llamada a la línea especial reservada para casos de secuestros. El operador pasó la comunicación a la casa particular del director Hoover.

El teléfono despertó a Hoover. Tomó el receptor, y en el acto la esposa de Charles F. Urschel, de Oklahoma City, le explicó que su marido y un amigo, Walter R. Jarrett, habían sido secuestrados minutos antes.

Agregó que ella y su marido estaban jugando al bridge con los esposos Jarrett, en la galería de su casa, cuando dos hombres, armados con una ametralladora y una pistola, abrieron la puerta de alambre tejido y entraron.

—¿Cuál de ustedes es el señor Urschel? —preguntó uno de los pistoleros.

Al ver que ni Urschel ni Jarrett contestaban, el secuestrador dijo:

—Bueno, los llevamos a los dos.

Los malhechores previnieron a las mujeres que no usaran

(1) La ráfaga de balas de Richetti, Floyd y Miller mató en el acto al agente Raymond J. Caffrey, junto con los oficiales W. J. Grooms y Frank Hermanson, del Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, y también a Otto Reed, jefe de policía de McAlester, Oklahoma. Reed E. Vetterli, en ese momento jefe de la delegación del F. B. I. en Kansas City, recibió una herida en el brazo. El agente F. J. Lackey, de la delegación del F. B. I. en Kansas City, quedó malamente herido. Dos balas de calibre cuarenta y cinco se alojaron en su médula espinal, y una tercera cerca del hueso de la pelvis. Estas heridas lo tuvieron hospitalizado más de dos meses, y finalmente lo obligaron a pedir el retiro. El agente Frank Smith, de la delegación del F. B. I. en Kansas City, ahora jubilado, salió ileso.

(2) Mientras el F. B. I. buscaba a Vernon Miller, se encontró su cadáver acorralado a tiros en las afueras de Detroit, Michigan, el 29 de noviembre de 1933. Al parecer fue víctima de la lucha entre las pandillas de «gangsters». Adam Richetti fue capturado por la policía local en las proximidades de Wellsville, Ohio, el 21 de octubre de 1934. Procesado por asesinato con premeditación y alevosía, fue ejecutado en la cámara de gas de la penitenciaría del Estado en Missouri, en Jefferson City, Missouri, el 7 de octubre de 1938. El 22 de octubre de 1934 «Pretty Boy» Floyd fue localizado por agentes del F. B. I. y oficiales del Departamento de Policía de East Liverpool, Ohio, en una granja situada entre Sprucevale y Clarkson, Estado de Ohio. Floyd prefirió tirotearse con los agentes y oficiales de policía, y resultó mortalmente herido.

el teléfono. Pero cuando la señora Urschel oyó que se alejaba el automóvil de los secuestradores, llamó al F. B. I.

Hoover telefoneó inmediatamente a la delegación de Oklahoma, ordenando que alguno de sus hombres se hicieran presentes en la residencia de los Urschel. También les indicó que dieran aviso a la policía de Oklahoma City. En el plazo de una hora, numerosos agentes del F. B. I. convergían sobre Oklahoma desde los cuatro puntos cardinales. Llevaban instrucciones de cooperar con la familia, y no hacer nada que dificultara el regreso del magnate secuestrado. El F. B. I. siempre ha tenido por norma no aconsejar a los familiares de una persona secuestrada sobre si deben o no pagar rescate. Tal decisión queda reservada a la familia.

Unas dos horas después del secuestro, regresó Jarrett a la casa de los Urschel, desmelenado y aturdido. Dijo que los delincuentes los habían conducido a un punto situado dieciséis o dieciocho kilómetros al nordeste de la ciudad; allí le sacaron 50 dólares, lo bajaron del automóvil y siguieron rumbo al sur, con Urschel.

Cuatro días más tarde, J. G. Catlett, de Tulsa (Oklahoma), amigo de los Urschel, recibió un paquete entregado por un mensajero de la Western Union. El paquete contenía cuatro cartas. Una de ellas estaba escrita por Urschel. Otra, dactilografiada, iba dirigida a E. E. Kirkpatrick, de Oklahoma City, también amigo de los Urschel. Exigía 200.000 dólares para que el cautivo fuese devuelto sano y salvo. Para indicar que se aceptaba tal condición, debía publicarse un anuncio clasificado en el *Daily Oklahoman's*.

El inocente aviso apareció publicado en estos términos:

EN VENTA — Terreno, 160 acres, buena casa, cinco habitaciones, pozo profundo. También Vacas, Herramientas, Maíz y Alfalfa. 3750 dólares a comprador inmediato... Tratar... Casilla H-807.

Una carta despachada desde Joplin, Missouri, trajo nuevas instrucciones. Kirkpatrick salió de Oklahoma City llevando un portafolios con 200.000 dólares en billetes de veinte. Las instrucciones de los secuestradores fueron seguidas al pie de la letra, salvo que el F. B. I. registró los números de serie de los billetes.

Kirkpatrick se alojó en el Hotel Muehlebach de Kansas City, Missouri, el 30 de julio. Aguardó en su cuarto la llamada telefónica que iba a darle nuevas instrucciones. Finalmente se produjo.

Al anoecer, Kirkpatrick tomó un taxímetro que lo condujo al hotel La Salle. Bajó, pagó al conductor y caminó hacia el oeste. Había recorrido poco trecho cuando se le acercó un desconocido que le dijo:

—Señor Kincaid, permítame esa maleta.

Kirkpatrick protestó que debía llevar algún mensaje a la señora Urschel. El desconocido dijo:

—El título de propiedad de la granja será entregado en el plazo de doce horas.

Tomó la maleta de manos de Kirkpatrick y se alejó con el dinero.

Urschel regresó a su casa la noche siguiente, ileso pero exhausto. Después de descansar, relató a los agentes del F. B. I. la historia de su secuestro, con asombrosa prolijidad de detalles. Una vez liberado su amigo Jarrett, los delincuentes le vendaron los ojos con algodón, gasa y tela adhesiva. Ya de día, probablemente, el automóvil entró en un garaje o granero. Urschel fue trasladado a un coche más grande, que por su tamaño juzgó era un Buick o un Cadillac. Lo colocaron en la parte posterior del vehículo, sobre un jergón tendido en el piso.

El automóvil se puso en marcha, y unas tres horas más tarde paró ante una estación de servicio, donde una mujer llenó el tanque de gasolina sin advertir nada fuera de lo normal.

—¿Cómo andan las cosechas? —preguntó a la mujer uno de los secuestradores.

—En esta zona se han secado todas —repuso ella—, pero es posible que cosechemos un poco de sorgo.

La próxima detención se produjo en otro garaje o granero, y uno de los secuestradores observó que eran las dos y media de la tarde. Dieron a Urschel un sandwich de jamón y una taza de café. Permaneció en ese lugar hasta el anochecer. Después lo llevaron a pie hasta una casa próxima, donde pasó la noche. Al día siguiente lo condujeron a otra casa, que estaba a unos veinte minutos de automóvil de la primera. Dedujo que era una granja o una estancia, porque escuchó sonidos familiares: piar de pollos, mugidos de vacas y gruñidos de cerdos. Oyó sacar agua de un pozo que, según sus cálculos, estaba al noroeste de la casa. Bebió de un jarro de lata sin asa, y el agua tenía cierto gusto mineral. Fue en esta casa donde escribió la carta dirigida a Catlett.

Con las manos encadenadas, Urschel pudo, sin embargo, aflojar la venda que le tapaba los ojos lo suficiente para atisbar su reloj. Recordó que todas las mañanas alrededor de las 9.45 y todas las tardes alrededor de las 17.45 se escuchaba el ruido de un avión que pasaba sobre la casa. Pero el domingo 30 de julio cayó un chaparrón y no pasó el avión de la mañana. Al día siguiente lo condujeron en automóvil a un punto cerca de Norman, Oklahoma, y lo dejaron en libertad.

Los agentes del F. B. I. analizaron los recuerdos de Urschel y llegaron a la conclusión de que el dato más seguro para localizar la casa era aquel avión que no había pasado sobre el lugar del cautiverio la mañana en que se desató una tormenta. La mujer de la estación de servicio había mencionado una sequía; por lo tanto, cualquier zona beneficiada por un chaparrón reciente merecía ser investigada. Se efectuó un estudio minucioso de las rutas aéreas regulares que pasaban a menos de novecientos cincuenta kilómetros de Oklahoma; al mismo tiempo, se investigaron los informes meteorológicos de la época en que Urschel estuvo prisionero.

No tardaron en encontrar la pista. El domingo 30 de julio un avión de la American Airways que efectuaba el servicio regular de Fort Worth a Amarillo había tenido que desviarse de su ruta normal para eludir una tormenta. En Dallas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que toda esa zona estaba padeciendo de sequía y que el maíz comenzaba a marchitarse, hasta que se produjo la lluvia del 30 de julio. Un pequeño cálculo demostró que el avión matinal de la American Airways que salía de Fort Worth y el vespertino que salía de Amarillo pasaban sobre un punto cercano a Paradise (Texas) aproximadamente a las horas señaladas por Urschel.

Encontraron la casa descripta por Urschel. Era una granja perteneciente a R. G. Shannon y su esposa, que eran el padrastro y la madre de Kathryn Kelly. Y Kathryn Kelly era la mujer del célebre «Ametralladora» Kelly, un pistolero que, según las versiones circulantes, era capaz de derribar con su ametralladora una hilera de nueces colocada sobre un seto a veinticinco metros de distancia.

Urschel identificó la casa de los Shannon. Los agentes encontraron el pozo, el jarro de lata sin asa, la cadena a la que estuvo atado el prisionero. Urschel dijo que nunca olvidaría el gusto mineral de esa agua...

Los Shannon confesaron que habían ocultado a Urschel. Y agregaron lo que ya sospechaban los agentes del F. B. I.: los raptos eran el propio Kelly (yerno de la señora Shannon) y Albert L. Bates.

Los hombres del F. B. I. siguieron la pista a Bates y lo arrestaron en Denver, Colorado. El rastro de Kelly y su mujer concluía en una casa de Memphis, Estado de Tennessee, donde Kelly había sido antaño contrabandista. En la madrugada del 26 de septiembre de 1933, agentes del F. B. I. y policías de Memphis allanaron el refugio de Kelly. Sorprendido sin la ametralladora en sus manos, Kelly se «achicó» ante los oficiales y entró a suplicar:

—¡No tiren, G-Men! ¡No tiren, G-Men!

G-Men, como ya se ha señalado, era la abreviatura de *Government Men*, es decir, hombres del gobierno. El sobre nombre inventado por Kelly para los agentes del F. B. I. les quedó grabado muchos años. Para los diarios, revistas, el cine y aun la radio, se convirtieron en «G-Men», los protagonistas de una ola de publicidad que iba a resultar útil... y al mismo tiempo algo molesta.

El carácter interestatal del gangsterismo quedó claramente de relieve en el caso Urschel. El magnate petrolero fue secuestrado en Oklahoma City, Estado de Oklahoma. Estuvo cautivo cerca de Paradise, Estado de Texas. La demanda de rescate fue despachada por correo desde Joplin, Estado de Missouri. El dinero del rescate circuló en St. Paul, Estado de Minnesota, aunque parte del mismo se encontró también en el Estado de Oregón. Otra porción de dinero fue enterrada en un algodonal de Texas. Uno de los raptos fue detenido en Denver, Colorado, y el otro en Memphis, Tennessee (1).

Por esa época, Hoover debió enfrentar otra lucha, esta vez contra una medida propuesta por el senador Royal S. Copeland, de Nueva York, en la que Hoover veía una amenaza contra el F. B. I. Copeland era partidario de expandir el F. B. I., permitiendo que el gobernador de cada Estado propusiera candidatos que serían designados agentes del Servicio por orden del procurador general. Los hombres propuestos por los gobernadores seguirían un curso de adiestramiento en el F. B. I., y después pasarían a desempeñar funciones dentro de sus respectivos Estados, «en comisión», velando por el cumplimiento de las leyes federales y estatales.

Hoover elevó un vigoroso memorándum de protesta al procurador general Cummings, sosteniendo que el plan de Copeland destruiría los fundamentos del éxito del F. B. I., que eran éstos: selección apolítica de los agentes, disciplina y fiscalización administrativa centralizada.

«Tales agentes, propuestos por los gobernadores estatales —afirmó Hoover—, deberían sus cargos, por lo menos en parte, a dichos gobernadores... lo que tendería a colocar la organización sobre una base puramente política.»

El plan de Copeland era un reflejo de las insistentes demandas que por esa época se efectuaban en pro de enérgicas medidas gubernamentales contra la delincuencia. Hubo quien sugirió que se implantara la ley marcial, y que el Ejército

(1) El F. B. I. barrió con todos los secuestradores, cómplices, abogados corrompidos y pasadores de dinero complicados en el caso Urschel. Se condenó a veintiuna personas. Entre ellas, las siguientes recibieron penas de prisión perpetua: Robert O. Shannon; su esposa, Ora Lillian Shannon; su hija, Kathryn Thorne Kelly; George «Ametralladora» Kelly; Albert L. Bates y Harvey J. Bailey. Los restantes implicados merecieron condenas que oscilaron entre catorce meses y diez años de cárcel. George Kelly y Bates han muerto. La pena de Robert G. Shannon fue reducida a treinta años.

entrara en acción para librar al país de malhechores. Y también se propuso reformar la Constitución y transferir al gobierno federal todas las facultades de policía.

Cummings, sin embargo, coincidió con Hoover en que la responsabilidad de combatir el delito recaía, primariamente, sobre las policías locales. El procurador general declaró ante el Congreso:

Es evidente que la tarea de preservar la paz y el orden en las distintas comunidades que forman nuestra nación no corresponde, en términos generales, al gobierno federal... Sin embargo, necesitamos extender el alcance de las leyes penales federales, de suerte que abarquen las actividades ilegítimas de quienes, para perpetrar sus delitos, aprovechan deliberadamente la protección que en la actualidad les brindan las fronteras entre los Estados de la Unión.

Cummings presentó al Congreso nueve proyectos de ley, destinados a reforzar el poder del gobierno federal en la lucha contra el crimen. El *Post-Dispatch*, diario de St. Louis, comentó dicho programa en los siguientes términos:

El procurador general está dispuesto a lanzar un poderoso ataque contra el hampa. El país ha aguardado este momento con la paciencia de Job. Un Departamento de Justicia resuelto, apoyado en los recursos del gobierno nacional, constituirá un enemigo invencible para los «gangsters».

El Congreso aprobó rápidamente los proyectos, y en mayo y junio de 1934 Roosevelt les dio fuerza de ley.

Estas leyes abrían al F. B. I. nuevas vías de ataque contra los criminales. A partir de entonces, agredir o matar a un funcionario federal era un delito federal. También lo era asaltar un banco federal. Y ya no se podía huir de un Estado a otro para eludir un proceso, o para no prestar testimonio en ciertos casos. Cualquiera que atravesara una frontera estatal llevando bienes robados por valor de más de 5.000 dólares incurría en delito penado por una ley federal. Usar comunicaciones interestatales, como el teléfono y el telégrafo, con fines de extorsión, era ilegal. Y la ley de secuestros fue enmendada de suerte que conducir una persona de un Estado a otro, contra su voluntad, configuraba delito penado por ley federal, aun cuando no se exigiera rescate o recompensa.

Hasta esa época, los agentes del F. B. I. sólo estaban autorizados para portar armas en ocasiones especiales. Ahora el Congreso aprobó leyes que daban a los agentes plenas facultades para efectuar arrestos, y plena autoridad legal para estar armados en el cumplimiento de sus funciones.

A partir de entonces el F. B. I. entró francamente en guerra con el hampa.

XII. - LA REDADA

John Herbert Dillinger fue el jefe de una banda de frenéticos asesinos que asoló el Medio Oeste desde septiembre de 1933 hasta julio de 1934, dejando tras sí una estela de diez hombres asesinados, siete heridos, cuatro bancos asaltados, tres ataques contra arsenales de policía y tres fugas de prisioneros (1).

Pero no fueron los asesinatos, los robos ni las evasiones los que lanzaron al F. B. I. en pos de Dillinger, porque ninguno de esos delitos constituía una violación de las leyes federales. Dillinger debió hacer frente a los «G-Men» a partir del momento en que se le ocurrió atravesar una frontera estatal con un automóvil robado.

Dillinger era buscado en Indiana por el asesinato de un vigilante de East Chicago. Tenía la captura recomendada en todo el país. Fue reconocido en Tucson, Arizona, y arrestado con tres miembros de su pandilla. En el escondite de Dillinger, la policía de Tucson encontró, entre otras cosas, tres fusiles ametralladoras Thompson, dos fusiles Winchester montados como ametralladoras, cinco chalecos a prueba de balas y más de 25.000 dólares, que en parte procedían del asalto de un banco en East Chicago.

Dillinger fue conducido a Indiana y recluso en la cárcel condal de Crown Point —que gozaba fama de inexpugnable—, a la espera de ser procesado por el asesinato de East Chicago. Pero escapó el 3 de marzo de 1934. Siempre sostuvo que intimidó a los guardianes de la cárcel con un revólver de madera, que él mismo había tallado utilizando una navaja, para entretenerse en su encierro. Los avergonzados guardianes alegaron que Dillinger los encañonó con una pistola 45 auténtica que alguien le hizo llegar.

El hecho es que Dillinger obligó a un guardián a abrir la puerta de su celda, se apoderó de dos ametralladoras, encerró a los guardianes, robó el automóvil del «sheriff» y se dirigió a Chicago. En el preciso instante en que cruzó el linde entre Indiana e Illinois transgredió una disposición federal: la ley nacional de robo de automotores, comúnmente llamada ley Dyer, que prohíbe conducir un automotor robado a través de una frontera estatal.

(1) En mayo de 1933, Dillinger había salido en libertad condicional del presidio del Estado de Indiana, después de cumplir ocho años y medio sobre sentencias concurrentes de dos a catorce años y de diez a veinte años, por asalto y lesiones con propósito de robo y por «conspiración para cometer felonía».

Hasta entonces Dillinger sólo había violado leyes estatales y comunales. Ahora el F. B. I. tenía el derecho y el deber de perseguirlo como transgresor de una ley federal. Y sus agentes iniciaron la caza.

Después de su fuga del presidio, Dillinger dio en burlarse de «la ley» que es el término con que designan los pistoleros a la policía en general. Escribió a su hermana diciendo que no se preocupara por él, porque nada ganaría con eso, «y además, me estoy divirtiendo mucho». Después agregaba:

Lo que dicen, que yo tenía una verdadera cuarenta y cinco, no es más que un montón de mentiras para cubrirse, porque no quieren reconocer que yo solo, con una pistola de madera, encerré ocho agentes y una docena de guardianes antes de apoderarme de las dos ametralladoras. Después que agarré las ametralladoras, les mostré a todos la pistola de madera. ¡Les hubieras visto las caras que pusieron! ¡Ja, ja, ja! Ese chiste vale por diez años de mi vida. ¡Ja, ja, ja!

En realidad, la fuga costó a Dillinger algo más que diez años de su vida. Sólo le quedaban unas pocas semanas de existencia cuando escribió esta carta.

En dos oportunidades, los agentes del F. B. I. creyeron tener cercado a Dillinger. Pero las dos veces escapó entre un diluvio de metralla. Sin embargo, el círculo se iba estrechando (1).

El 1º de junio, dos semanas después que el presidente Roosevelt firmara las nuevas leyes de represión del crimen, Hoover llamó a su despacho al agente Samuel P. Cowley (2) para confiarle una misión especial. Cowley era un corpulento abogado de Utah, de treinta y cuatro años, que había servido como misionero en la iglesia mormónica antes de incorporarse al F. B. I. Debía encargarse de la búsqueda de Dillinger.

Según recordaría Cowley más tarde, Hoover le dijo:

—Ocupese exclusivamente de Dillinger. Siga su rastro a cualquier parte. Interrogue a cualquier persona que haya estado vinculada, siquiera remotamente, a la pandilla. Captúrelo vivo, si puede, pero protéjase.

La búsqueda iniciada por Cowley lo condujo a Chicago. Se decía que Dillinger estaba oculto en algún lugar de esa ciudad, convaleciendo de una operación de cirugía plástica des-

(1) En abril de 1934, la pandilla de Dillinger fue localizada en Little Bohemia Lodge, recreo veraniego situado unas cincuenta millas al norte de Rhinelander, Wisconsin. El ladrido de los perros delató la proximidad de los agentes del F. B. I. Dillinger y sus acompañantes huyeron. A poca distancia del albergue, Lester Gills, alias «Baby Face» Nelson, miembro de la pandilla Dillinger, mató al agente W. Carter Baum e hirió a otro agente y a un policía local. Antes, en marzo, Dillinger había huido de St. Paul, Minnesota, tras un tiroteo.

(2) Cuando se le encomendó la «misión Dillinger», Cowley era ayudante de Harold Nathan, director auxiliar a cargo de las investigaciones. El puesto de Cowley en la oficina central del F. B. I. fue ocupado por Edward A. Tamm, que había sido jefe de la delegación de Pittsburgh. Tamm era ayudante de director cuando en 1940 fue nombrado juez de distrito federal en Washington.

tinada a cambiarle el rostro. Cowley y Melvin Purvis, jefe de la delegación de Chicago, trabajaron en estrecha colaboración con dos policías de East Chicago, el capitán Timothy O'Neill y el sargento Martin Zarcovich, investigando las decenas de rumores e informes de personas que creían haber reconocido a Dillinger. Casi diariamente, O'Neill y Zarcovich cambiaban información con los agentes del F. B. I.

La oportunidad decisiva se presentó la noche del 21 de julio. O'Neill y Zarcovich trajeron al F. B. I. a una mujer morena, de mediana edad. Era Ana Cumpanas, que había llegado a los Estados Unidos en 1914, procedente de una aldea rumana. Ahora se hacía llamar Anna Sage.

Ana Cumpanas estaba en dificultades y venía a proponer un arreglo. El Servicio de Inmigración y Naturalización quería deportarla como extranjera indeseable, porque regenteaba un burdel en Gary, Indiana. El trato que ofrecía la mujer era éste: ella entregaría a John Dillinger al F. B. I., pero deseaba una recompensa y también la promesa de que se le permitiría permanecer en los Estados Unidos.

Purvis le prometió la recompensa y agregó que haría lo posible por ayudarla, intercediendo ante el Departamento de Trabajo, pues era éste —y no el Departamento de Justicia— quien manejaba los casos de deportación en aquella época.

Ana Cumpanas reveló que John Dillinger pensaba ir con ella y con su amiga Polly Hamilton a una función de cine, la noche siguiente. No sabía con certeza cuál era el cine al que iban, pero probablemente sería el «Marbro», de Chicago. Quedó en confirmar la noticia. ¿Cómo identificarían a Ana Cumpanas los otros agentes del F. B. I. que no la habían visto? Ana explicó que iría vestida de rojo.

Cowley y Purvis reunieron un pelotón de agentes, junto con policías de East Chicago, y se preparó la trampa para Dillinger.

Ana Cumpanas cumplió su palabra. Llamó por teléfono la tarde del 22 de julio. Ignoraba aún cuál era el cine a que iría Dillinger. Podía ser el «Marbro» o el «Biograph». Por lo tanto, había que poner vigilancia en ambos.

Estas fueron las instrucciones finales, según las recordó un agente en un informe presentado después de los hechos:

Señores, todos ustedes conocen el carácter de John Dillinger. Si lo encontramos y huye, será una vergüenza para el Servicio. Es posible que Dillinger vaya al cine solamente con esas mujeres, y desarmado. Pero también es posible que aparezca armado y con otros miembros de su pandilla. La captura de Dillinger ofrece un elemento de peligro difícil de calcular. Esperamos apresarlos vivos, si es posible, y sin bajas entre nuestros agentes... Sin embargo, señores, ésta es la oportunidad que todos hemos estado esperando,

y hay que capturarlo. No arriesguen ustedes la vida sin necesidad. Si Dillinger ofrece resistencia, cada hombre actúe por su cuenta. Cada uno de ustedes deberá protegerse como crea conveniente mientras intenta capturar a Dillinger.

Dillinger decidió ir al «Biograph», donde exhibían una película cuyo protagonista era Clark Gable: «Manhattan Melodrama». Los agentes del F. B. I. y los policías reconocieron a Dillinger cuando entró en el cine, esa cálida noche de junio, acompañado de Polly Hamilton y Ana Cumpanas⁽¹⁾, «La Mujer de Rojo», como la llamaron los diarios. A pesar de la cirugía plástica, el pistolero fue identificado con absoluta certeza. Cowley llamó por teléfono a Hoover, que en ese momento paseaba nerviosamente por la biblioteca de su casa, en Washington. Se decidió arrestar a Dillinger cuando saliera del cine, para evitar un tiroteo dentro de la atestada sala.

Al salir el trío, Purvis encendió un cigarro. Era la señal convenida. La trampa comenzó a cerrarse. Dillinger debió olfatear algo raro. Miró por encima del hombro y vio que se le acercaba un agente. Corrió hacia una calleja próxima, buscando a tientas una pistola en el bolsillo del pantalón. Pero antes que pudiera utilizar el arma tres agentes del F. B. I. dispararon cinco balazos que dieron en el cuerpo de Dillinger. Este cayó de bruces: la caza había terminado.

Al día siguiente, Hoover escribió a Cowley: «Desde anoche he deseado escribirle y expresarle mi satisfacción y mis felicitaciones por el excelente resultado que usted ha obtenido... Su persistencia, paciencia y energía han hecho posible alcanzar este éxito, y me siento orgulloso de usted y agradecido». En recompensa, Hoover ascendió a Cowley a inspector.

Pero Cowley no vivió lo bastante para sacar mucho partido de su nueva jerarquía. Cuatro meses después de la muerte de Dillinger, Cowley y el agente Herman E. Hollis se toparon inesperadamente con dos integrantes de la vieja pandilla de Dillinger, que iban en automóvil por una ruta próxima a Barrington, Illinois. Eran John Paul Chase y «Baby Face» Nelson⁽²⁾, asesino bautizado por los diarios como el «Enemigo

(1) El inspector Cowley pagó a Ana Cumpanas 5.000 de los 10.000 dólares que el gobierno federal había fijado como precio a la cabeza de Dillinger. Los dos policías de East Chicago recibieron 2.500 dólares cada uno. Melvin Purvis hizo lo que pudo para impedir que Ana Cumpanas fuera deportada. Pero un juez federal dictaminó que, aun cuando Cowley y Purvis hubieran prometido que la demanda de deportación sería retirada —como alegó el abogado de la mujer—, semejante promesa no podía ser formulada por un funcionario ajeno al Departamento de Trabajo. Cuando en 1936 Ana Cumpanas embarcó en la nave que la restituiría a su país, reporteros de Nueva York le preguntaron «si se sentía traicionada por el gobierno en la causa de deportación». Respondió: «Nunca he pensado semejante cosa». Murió de una enfermedad hepática en 1947, en la pequeña aldea rumana de Timisoara.

(2) La carrera delictiva de Gillis comenzó en 1922. Fue arrestado en Chicago por el robo de un automóvil y recluso en un reformatorio de jóvenes. Saló bajo libertad condicional en abril de 1924. En septiembre del mismo año lo encerraron de nuevo, por violar las condiciones de su excarcelación. Pero en julio obtuvo una

Público Número 1», cuyo nombre verdadero era Lester J. Gillis. La esposa de Nelson, Helen, estaba con él. Los agentes del F. B. I. y los «gangsters» saltaron de sus respectivos automóviles, y en el tiroteo que se produjo Cowley⁽¹⁾ y Hollis resultaron muertos, y Nelson herido de muerte. El pistolero falleció horas más tarde; su esposa y Chase dejaron su cadáver en una zanja, al borde del camino.

En virtud de una extraña rebeldía contra la lógica, muchas personas consideraron a Dillinger y Nelson como los héroes de estos dramas, atribuyendo el papel de villanos a los agentes del F. B. I.

El director de un diario de Virginia calificó la muerte de Dillinger como obra de cobardes, que habían tenido miedo de arrestarlo en el teatro. «Cualquier hombre valeroso —decía el editorial— se hubiera internado en el pasillo del cine para detener a Dillinger... ¿Por qué había allí tantos cobardes, temerosos de un solo hombre? La respuesta es que los agentes federales son en su mayor parte cobardes».

Una muchacha escribió lo siguiente a un diario de Chicago: «Siento compasión por el padre de Dillinger, y si yo fuera hombre y perteneciera a la banda de Dillinger, ciertamente vengaría su muerte».

La amiga de Dillinger, Evelyn Frechette⁽²⁾, se incorporó a un conjunto circense al salir de la cárcel. Ante boquiabiertas multitudes, relataba su vida con Dillinger.

—Le gustaba bailar y le gustaba cazar —decía—. Donde ponía el ojo, ponía la bala... Le gustaba la música, pero nunca cantaba. Creo que lo que más le gustaba era la salsa. Le gustaba el pan con salsa.

Los espectadores escuchaban semejantes revelaciones con los ojos abiertos de asombro.

Cuando otros dos pistoleros cayeron en sendos tiroteos, un periódico de Baltimore publicó esta carta:

segunda libertad condicional. En octubre de 1925 regresó al reformatorio. En julio de 1926 salió en libertad condicional por tercera vez.

Más tarde lo condenaron a presidio por el asalto a un banco, y empezó a cumplir su sentencia en la penitenciaría del Estado de Illinois. En 1932 lo condujeron a Wheaton, Illinois, para procesarlo por otro asalto. Al regresar, escapó de manos del guardián que lo custodiaba. Mientras estuvo fugitivo, mató a tres agentes del F. B. I.

(1) Después de la muerte de Cowley, Earl J. Connelley, entonces jefe de la delegación de Cincinnati, Ohio, se hizo cargo de la Brigada Especial de Chicago. Ayudó a perseguir a los pistoleros de Dillinger y Barker-Karpis, así como a los que intervinieron en la matanza de Kansas City y otros casos importantes. Ingresó en el Servicio en 1920, ascendió a inspector en 1936 y después fue director auxiliar desde 1944 hasta jubilarse en 1954; una carrera de treinta y cuatro años.

(2) La banda de Dillinger fue completamente destruida. Frechette cumplió dos años de cárcel y pagó una multa por dar refugio a Dillinger; Homer Van Meter fue muerto por oficiales del Departamento de Policía de St. Paul, el 23 de agosto de 1934, al resistirse al arresto; John Paul Chase fue capturado en California y sentenciado a prisión perpetua; John Hamilton murió a consecuencia de las heridas sufridas en el tiroteo de Little Bohemia. Su cadáver fue descubierto más tarde por agentes del F. B. I. Estaba enterrado en las cercanías de Oswego, Illinois.

Esos pobres, infortunados muchachos... debieron ser detenidos y sermonados. Para dar un verdadero ejemplo cristiano, los «G-Men» debieron decirles que se fueran y no pecaran más... No hemos tenido semejantes escándalos bajo la sabia guía de nuestro Mr. Harding, temeroso de Dios, o del cristiano Mr. Coolidge, o de nuestro amado Mr. [Herbert] Hoover. Tenían que ser los ruines demócratas quienes arrebataran la sagrada vida humana. Firmado: Una madre.

Una de las crónicas más empalagosas fue un reportaje a la viuda de «Baby Face» Nelson. Un párrafo de ese artículo decía: «Baby Face murió en brazos de su esposa, con una sonrisa en los labios, pero con lágrimas en los ojos ante el recuerdo de sus dos hijitos. Este es el punto crucial de la emocionante historia relatada por la bonita viuda de Nelson, en que describe acongojadamente su muerte a manos de los agentes federales».

La viuda era descripta por la hermana de Nelson como «una de las madres más abnegadas que he conocido», a pesar de que ella y Nelson habían abandonado a sus hijos, y que éstos conocían a la madre como una ocasional visita a quien llamaban «Tía Helen». De los agentes asesinados, Cowley y Hollis, apenas había una mención.

El grueso de la opinión pública estaba de parte de Hoover y del F. B. I. Sin embargo, las condolencias por los «gangsters» muertos y las críticas contra el F. B. I. exacerbaban el concepto presbiteriano del bien y del mal que anida en Hoover. Para él, los criminales eran «la hez de la olla hirviente del hampa», «bestias cobardes», «ratas públicas», «gusanos» y «buitres». Ascendió a las tribunas de clubes cívicos, aulas universitarias y congresos de educación para martillar sobre el concepto de que los criminales y los que deliberadamente se asociaban con ellos eran los verdaderos enemigos públicos. Criticó a los «políticos venales» que se aliaban con el hampa y a los abogados que daban un aspecto respetable a las actividades de las pandillas. Denunció a los policías corrompidos, y calificó de «lloronas» y de «charlatanes sentimentales» a quienes, aprovechando los sistemas de libertades condicionales que imperaban en ciertos Estados, soltaban periódicamente a los criminales consuetudinarios, para que pudieran cometer nuevos delitos.

Hoover tenía motivos para denunciar amargamente la tibia y la corrupción en la represión del delito, porque nadie mejor que él conocía las actividades de pandillas como la de los célebres pistoleros Barker y Karpis, cuyos miembros mataron a diez personas, hirieron a cuatro y obtuvieron casi 1.000.000 de dólares en efectivo, acciones y otros bienes, en el plazo comprendido entre 1931 y 1936. Los peores integran-

tes de esta pandilla eran presidiarios puestos en libertad condicional; tanto ellos como otros encontraban protección en ciudades cuyas condescendientes autoridades policiales daban la impresión de no reconocerlos, a pesar de que sus fotos con la correspondiente indicación de «captura recomendada» engalanaban todas las comisarías.

A su debido momento, el lugar de «Enemigo Público N° 1» en la galería de delincuentes fue ocupado por Alvin Karpis, a quien se buscaba como autor del secuestro, seguido de extorsión por 100.000 dólares, cometido en la persona de William Hamm (hijo), de St. Paul, Minnesota, además de las acusaciones de asesinato que pesaban contra él ante tribunales locales. En los ambientes del hampa se le conocía por el mote de «el Viejo Escurridizo». Hoover acostumbraba decir que era «una rata», y parece que semejante calificativo terminó por irritar a Karpis. Lo cierto es que hizo anunciar a Hoover que pensaba matarlo del mismo modo en que los agentes del F. B. I. habían muerto a Kate Barker («Mamá Barker») y a su hijo Fred, en el transcurso de un tiroteo con ametralladoras y fusiles ocurrido en Florida⁽¹⁾.

Hoover ordenó a sus agentes que le comunicaran en el acto cualquier noticia sobre el paradero de Karpis, para encabezar en persona su búsqueda. Los hombres del F. B. I. bautizaron mentalmente a Karpis como «el Hombre del Jefe».

En marzo de 1936 se le presentó a Hoover la oportunidad que buscaba. Encontrándose en Nueva York, le informaron que Karpis estaba oculto en algún lugar de Hot Springs, Arkansas. Hoover tomó un avión especial que lo condujo a Washington. En el aeropuerto se le unió un pelotón de agentes. Eran tantos los hombres del Departamento Central del F. B. I. que deseaban acompañarlo que finalmente Hoover se vio en la necesidad de ordenar a muchos que volvieran a sus tareas específicas. En el aeropuerto, Hoover y sus acompañantes aguardaron nuevos informes de Hot Springs. Pero finalmente llegó la decepcionante noticia de que Karpis había escapado. Al parecer, funcionarios de la policía local de Hot Springs acababan de pasarle el dato de que el F. B. I. iba a buscarlo.

Si Hoover hubiera detenido a Karpis en marzo, se habría

(1) «Mamá Barker», nacida en la zona de Missouri Ozark, crió cuatro hijos, todos delincuentes. Ella misma les enseñó a tirar, usando como blancos latas colocadas sobre una cerca. Era ella quien dictaba todos sus movimientos. Así se convirtió en el cerebro de la banda. Ella y su hijo Fred murieron en el tiroteo de 1935 con agentes del F. B. I. Arthur, sentenciado a cadena perpetua después que el F. B. I. lo capturó en Chicago, fue muerto en 1939 cuando pretendía huir del presidio de Alcatraz. Herman, el mayor, que estaba acusado de asesinato, se suicidó en 1927 antes que entregarse; Lloyd no pudo formar parte de la banda porque desde 1932 estaba en la penitenciaría de Leavenworth, cumpliendo una condena de veinticinco años por asalto al correo. Al salir de la cárcel, se empleó en un restaurante de Colorado. Su esposa lo asesinó en 1949.

ahorrado, por lo menos en parte, la interpelación —muy comentada periodísticamente— a que lo sometió en abril el senador K. McKellar, de Tennessee, ante la subcomisión de presupuesto del Senado.

McKellar interrogó a Hoover sobre sus antecedentes y experiencia en el campo de la investigación criminal, subrayando el hecho de que el director del F. B. I. nunca había efectuado en persona un arresto. Esto equivalía a preguntar a un comandante en jefe por qué no peleaba en un trinchera armado con un fusil, en vez de ocupar su puesto de comando.

Pero la insinuación del senador era bastante clara: el director del F. B. I. no valía gran cosa como sabueso, puesto que nunca había practicado un arresto⁽¹⁾.

Hoover enrojeció de ira, pero supo dominarse. Nada dijo del fallido arresto de Karpis, ni de las órdenes impartidas con respecto a ese pistolero. Comprendía, sin embargo, que se estaba poniendo en duda públicamente su valor personal, y que implícitamente se le acusaba de imponer a sus hombres riesgos que él no estaba dispuesto a afrontar.

La tarde del 30 de abril Hoover estaba en Nueva York, cuando supo que sus agentes habían seguido el rastro de Karpis desde Hot Springs (Arkansas) hasta Corpus Christi (Texas), y de ahí a Nueva Orleans, donde se alojaba en una casa de departamentos en Canal Street. Se dirigió en avión a Nueva Orleans con un pelotón de agentes, sin notificar a la policía local. Esta vez no se producirían «filtraciones».

Cuando Hoover y sus hombres se acercaban en automóvil, Karpis y un secuaz aparecieron inesperadamente en la puerta del edificio. Durante unos tensos segundos, los vehículos del F. B. I. quedaron bloqueados por un hombre que, jinete en un caballo blanco, transitaba por la calzada. Después el caballo se alejó. Karpis trepó a su automóvil. Hoover corrió hacia la portezuela izquierda del auto, y Earl Connelley —subdirector del F. B. I.— hacia la portezuela derecha. Hoover introdujo el brazo en el coche y sujetó a Karpis antes que pudiera apoderarse de un fusil que llevaba en el asiento trasero.

(1) Los ataques del senador McKellar contra Hoover han recibido amplia publicidad en el transcurso de los años, pero pocos conocen el epílogo del incidente. El 10 de abril de 1943, Jack Carley, director asociado de un periódico de Memphis, el *Commercial Appeal*, y profesor de la Academia Nacional del F. B. I., invitó al senador McKellar a presenciar los exámenes finales del curso de la Academia. Hoover presentó al senador, que inesperadamente se puso de pie y pronunció un discurso en el que dijo cosas como éstas: «Respaldemos todos... este gran instrumento de la ley y del orden creado por ese hombre extraordinario que es vuestro director. El cree en la Constitución, él cree en las leyes de este país; apoyémoslo, entonces». Hablando con un amigo, comentó Hoover: «Me quedé tan sorprendido que miré a mi alrededor para ver si realmente se refería a mí». En los años posteriores, McKellar, como presidente de la comisión de presupuesto del Senado, se convirtió en un firme defensor del F. B. I.

—Pónganle las esposas —ordenó Hoover.

Pero nadie se había acordado de traer esposas. Un agente se quitó la corbata, y acercándose a Karpis le ató las manos detrás de la espalda. El «Viejo Escurridizo» ya no fanfarroneaba. Ceniciento de miedo, lo subieron a un avión con destino a St. Paul, Minnesota, donde sería procesado por el secuestro de Hamm.

El aparato acababa de despegar, cuando Hoover observó la palidez de Karpis.

—¿Qué le pasa? ¿Está descompuesto? —preguntó.

—¡Terminen de una vez! —barbotó Karpis—. ¡Vamos, cuanto antes mejor!

—¿De qué habla?

Karpis miró a Hoover con ojos extraviados.

—Sé lo que piensan hacer. Me van a tirar del avión y después dirán que fue un accidente.

—No sea estúpido —replicó Hoover—. No acostumbramos hacer esas cosas. Lo llevamos a St. Paul; ahí lo procesarán. Nadie le hará daño mientras vaya con nosotros.

Karpis había reconocido a Hoover apenas lo vio.

—¿Cómo supo que era yo? —preguntó Hoover.

Karpis repuso:

—Vi una foto suya en el diario. Lo fotografiaron pescando un pez vela. Tiene usted más suerte que yo. Hace tres años que trato de pescar un pez vela, y nada.

Fue un vuelo cansador. Cuando el avión hizo escala en Kansas City para reabastecerse de combustible, los pasajeros compraron sándwiches y los diarios de la mañana. Un titular decía: «Karpis asalta un banco en Michigan».

Karpis comentó:

—Por lo menos esta vez tengo una coartada perfecta.

La coartada no le sirvió de mucho. Lo condenaron a cadena perpetua por el secuestro de Hamm.

Y así fue como el jefe del F. B. I. realizó su primer arresto, seguido de otros no menos espectaculares.

Uno de ellos fue el del célebre Louis (Lepke) Buchalter, jefe de una pandilla de extorsionistas, que en un solo gremio —el de patronos panaderos— cometió exacciones por valor de 1.000.000 de dólares en concepto de «protección».

Mientras el F. B. I. cerraba el cerco sobre Buchalter, el célebre comentarista radial Walter Winchell propaló un llamado de rendición dirigido al delincuente, prometiendo que el F. B. I. respetaría sus derechos civiles. Inmediatamente comenzaron las negociaciones entre intermediarios de Buchalter y Winchell y finalmente se llegó a un acuerdo.

La noche del 24 de agosto de 1934, el director Hoover caminó solo por las calles de Nueva York hasta la esquina de

28th Street y Fifth Avenue. Y allí se le rindió el hombre perseguido. El F. B. I. se quedó con Buchalter, y Walter Winchell obtuvo un reportaje exclusivo. Buchalter fue entregado a las autoridades estatales, y más tarde ejecutado por asesinato.

En la lucha contra la delincuencia, el F. B. I. llevó a cabo lo que podría llamarse una política de tierra arrasada. Los agentes no sólo persiguieron a los «gangsters» y secuestradores que eran los ejecutores materiales de los delitos cometidos, sino también a la periferia del hampa compuesta por médicos, abogados y policías corrompidos, y por aquellos que conscientemente daban refugio a los malhechores.

Los «G-Men» fueron idealizados por una ola de publicidad que abarcó todo el país, comparable a la que más tarde se realizaría en torno a «Davy Crockett». Hollywood reemplazó las películas de los «gangsters» en que el hombre malo era el héroe por otras en que los «G-Men» siempre vencían en la lucha contra el delito. Revistas y periódicos se sumaron al coro laudatorio⁽¹⁾. Cualquier cosa que Hoover decía era una noticia. Si asistía a un «night club», a una pelea de box o a las carreras de caballos, todos lo comentaban.

La opinión pública estaba con él. Pero, al mismo tiempo, su notoriedad lo convertía en blanco de frecuentes ataques. Antes lo habían criticado por no arrestar personalmente a los criminales. Ahora le achacaban un afán de figuración: los procedimientos encabezados por él no eran más que tretas publicitarias. Un comentarista dijo:

Debe recordarse que jamás hizo un arresto ni siguió la pista a un bandido, hasta que sus aptitudes policíacas fueron sometidas a una inquisición senatorial. A partir de entonces utilizó la aviación para estar en todas partes donde fuese inminente una captura. El fin perseguido es borrar la mancha que deslucía la corona del «G-Man» N° 1, y prevenir ulteriores incomodidades en sus futuras visitas a la colina del Capitolio.

Otro cronista se burlaba del F. B. I. por su costumbre de movilizar cinco, diez y hasta quince agentes para cerrar posibles vías de escape al arrestar a un delincuente peligroso, diciendo que Hoover utilizaba «una maza para matar una mosca sobre la nariz de un bebé...».

Un tercer comentarista opinó: «Nosotros, los norteamericanos, apenas erigimos un héroe, nos disponemos a derribarlo». Y era cierto.

(1) Entre los primeros productores de Hollywood que popularizaron la obra del F. B. I. y cesaron de idealizar el gangsterismo se contaban Harry Warner y sus hermanos, que produjeron «G-Men», con James Cagney como protagonista. Otra película en la que cooperó el F. B. I. fue «You Can't Get Away with It», del sello Universal, premiada como el mejor «corto» en 1937.

Por aquella época, dos dirigentes del Ku Klux Klan abordaron a un senador para pedirle que gestionara la cesantía de Hoover. También circuló ampliamente el rumor de que «importantes figuras del gobierno» buscaban la destitución de Hoover como director del F. B. I. porque «elementos liberales muy encumbrados en la Administración contemplan con gran inquietud a Hoover y al poder de que se jacta».

Versiones similares habían corrido en 1933. Al iniciar su gobierno, Franklin D. Roosevelt designó procurador general al senador Thomas Walsh. Pero Walsh murió poco antes de asumir el cargo. Entonces se murmuró que una de las primeras medidas oficiales que pensaba tomar Walsh era despedir a Hoover. Pero el mismo día en que apareció publicado el chisme lo desmintió un sobrino de Walsh, Johan Wattawa, abogado en Washington, quien escribió al *Herald* de Washington diciendo que el rumor era «un grosero infundio»⁽¹⁾.

El ataque desencadenado en 1936 contra Hoover y el F. B. I. llegó a su culminación cuando trascendió que agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos estaban investigando la muerte de John Dillinger y la de un miembro de su pandilla, Eddie Green, ocurrida dos años antes a manos del F. B. I. La prensa en general interpretaba esta investigación como un esfuerzo para desacreditar a los «G-Men», haciéndolos aparecer como aficionados, muy proclives a apretar el gatillo. En la indagatoria que siguió a la muerte de Green, los agentes del F. B. I. declararon que hicieron fuego contra él cuando salió corriendo de una casa en St. Paul, ignoró una orden de alto y llevó la mano a la cadera en ademán de sacar una pistola. Se descubrió en seguida que Green estaba desarmado, pero el tribunal dictaminó que la conducta de los agentes estaba justificada.

Por esa época se realizaba en el Congreso una infructuosa tentativa de unificar todos los organismos investigadores del Tesoro: Servicio Secreto, Oficina de Impuestos a las Bebidas Alcohólicas, Servicio de Narcóticos, Sección de Vigilancia de Impuestos a los Réditos, Servicio de Aduana y Guardia Costera, creando con ellos una sola repartición que hiciera sombra al F. B. I.

El procurador general Cummings acudió en defensa de Hoover. Anunció públicamente: «El que tire contra Hoover, tira contra mí. Hoover goza de toda mi confianza, y si hay alguien que piensa sacarlo de su cargo, antes deberá sacarme a mí».

(1) Wattawa decía en su carta: «Soy sobrino del difunto senador Walsh, con quien me unía una estrecha vinculación. Poco antes de asumir el cargo de procurador general, comenté con su hermano, Mr. John Walsh, y conmigo, que tras cuidadosa reflexión había decidido mantener a Mr. Hoover como director del Servicio de Investigación».

El secretario del Tesoro, Morgenthau, escribió a Cummings una carta donde le presentaba sus excusas por el incidente y ordenó la destitución de dos funcionarios del Servicio Secreto, diciendo: «Desapruebo enérgicamente la actitud de estos hombres y no toleraré otras similares...».

Fue ésta, en realidad, una época difícil para el F. B. I. y para su director. Hoover seguía protestando contra el abuso de los sistemas de libertad condicional (*probation*), y los presidios gobernados por alcaides «sentimentales», que se convertían en «country clubs» y mimaban a los presidiarios.

Una institución que defendía el sistema de libertad «a prueba» para ciertos presidiarios, la National Probation Association, trató de «amordazar» a Hoover solicitando al presidente Roosevelt y al procurador general que lo obligaran a «abstenerse de formular declaraciones que desacreditan y entorpecen el progreso de la libertad a prueba».

Hoover escribió al procurador general: «Si bien es cierto que de tiempo en tiempo, en mis declaraciones públicas, he criticado la forma en que se llevan a la práctica los sistemas de libertad bajo caución juratoria y libertad a prueba (*parole and probation system*), nunca he objetado ni denunciado la teoría o el principio en que se basan dichos sistemas».

Hoover se mantenía en sus trece. En su carta a Cummings agregaba: «Yo hablo de la forma en que son administrados esos sistemas por políticos venales, por influyentes ineptos y corrompidos, en algunos de nuestros Estados, y puedo ofrecer no docenas, sino centenares y hasta millares de casos en prueba de mis argumentos. Por otra parte, me parece que no puedo permanecer callado ante las críticas que se me hacen...».

Hoover contó con fuerte apoyo. La Asociación Internacional de Jefes de Policía condenó la tentativa de amordazarlo, calificándola de esfuerzo por acallar «una crítica constructiva de los abusos en que incurre el sistema de libertad a prueba». El *Times* de Oklahoma City sintetizó la opinión de muchos diarios al afirmar: «El auge de la delincuencia que soporta el pueblo de los Estados Unidos obedece al vergonzoso y sentimental sistema de clemencia con los malhechores».

El director del F. B. I. no se dejó intimidar, y el presidente Roosevelt y el procurador general Cummings ni siquiera lo intentaron. Hoover siguió luchando en pro de un sistema de libertades condicionales que estuviera libre de abusos.

Las repetidas versiones de que personas influyentes en la Casa Blanca se proponían derrocar a Hoover siempre olvidaban que éste también tenía amigos en las esferas más próximas a Roosevelt. Entre ellos, el secretario de prensa Steve Early; el secretario del presidente, mayor general

Edwin M. Watson («Papá Watson»), y sobre todo, el propio Franklin D. Roosevelt.

Los ataques fracasaron. Hoover seguía sólidamente atrincherado en su puesto de director del F. B. I. y su popularidad iba en aumento.

XIII. - ASESINATO POR PROCURACION

El banquero William K. Hale, de Fairfax, Oklahoma, había ido a la exposición anual de ganado que se celebraba en Texas. Cuando regresó a su pueblo natal, lo encontró dominado por la excitación y el temor.

Mientras se alejaba de la estación, caminando por Main Street, sus amigos lo paraban para contarle la noticia. Eran versiones confusas y contradictorias, pero de todas ellas Hale dedujo que, mientras él estaba en Fort Worth, una tremenda explosión había sacudido al pueblo. Las pocas personas que andaban por la calle a las tres de la madrugada habían visto una llamarada que envolvía la casa de Bill Smith... y después el estallido que hizo añicos la vasta mansión.

—Rita y la mucama murieron y Bill está agonizando... —decían los comentarios—. Volaron en pedazos... De la casa no queda nada más que una pila de escombros...

Algunas personas recordaron haber oído un automóvil que atravesaba el pueblo pocos minutos antes de la explosión. Pero nadie pudo describir el automóvil o al conductor.

A pesar de la confusión, Hale supo de qué se trataba. Era un asesinato. El banquero se detuvo a charlar con su amigo, el alcalde, sobre la terrible catástrofe.

Hale salió del despacho del alcalde y siguió caminando. Pensaba en Bill Smith. Conocía a Bill y a su esposa Rita, de muchos años atrás. Hasta poco antes vivieron en el campo; por fin decidieron mudarse a la ciudad. La hermana de Rita, Mollie, estaba casada con uno de los sobrinos de Hale. De modo que había una cierta relación de parentesco.

Hale seguía pensando en la muerte de los Smith, días más tarde, cuando mandó llamar a Asa Kirby, un hombre que solía hacer algunas changas para él. Hablaron un rato y Kirby salió de la casa de Hale.

Poco después, Hale se dirigió al centro del pueblo. Entró en uno de los negocios de Main Street y charló confidencialmente con el propietario. En el vecindario circulaba el rumor de que el dueño del negocio guardaba en su caja fuerte una valiosa colección de brillantes.

Esa noche el comerciante no fue a su casa. Se encerró en la tienda y esperó armado de una escopeta. Eran aproximadamente las dos y media de la madrugada, cuando oyó que estaban forzando una ventana trasera del edificio. Después una silueta oscura se recortó en la ventana.

Tronó la escopeta, barriendo de la ventana a «Ace» Kirby, mortalmente herido. Los muertos no hablan, y Kirby ya nunca podría nombrar al hombre que lo había contratado (a él y a un cómplice) para volar la casa de Bill Smith.

Esto sucedía en marzo de 1923 en Osage County (Estado de Oklahoma), uno de los más oscuros y sangrientos cotos de caza que hayan existido; y el cazador más astuto en aquel reino de indios y yacimientos de petróleo era este William K. Hale, banquero, ganadero, comerciante, político y asesino por procuración.

En la década de 1920 a 1930 no hubo caso más extraño que el de Hale, que llegó a ser conocido con el mote de «Rey de los Cerros de los Osages».

Durante veinte años, Bill Hale fue una potencia por encima de la ley en Osage County. Tras una fachada de respetabilidad, enriqueció mediante el fraude y el crimen. Bill no mataba con sus propias manos: alquilaba asesinos. Si alguien hablaba demasiado... siempre había medios de hacerlo callar. Y nadie podía probar nada contra Bill Hale.

A fines del siglo pasado, Bill Hale había abandonado la finca rural de su familia, en las proximidades de Greenville (Texas) e internándose en los «cerros de los bandidos» de Osage County. Era una comarca abrupta y salvaje, en cuyas grutas y gargantas encontraban abrigo los perseguidos por la justicia. Hale no tuvo dificultad en hacer amigos.

Por un tiempo vivió en una carpa. Se ganaba la vida comerciando con los indios. Singular coincidencia: cada vez que un indio extraviaba ganado, Hale aparecía a varias leguas de distancia vendiendo grandes cantidades de carne fresca.

Una vez Hale fue a cobrar una pequeña deuda a un cliente indio, y cuando llegó, el hombre acababa de morir. Esto no fue una desgracia para Hale, sino una oportunidad, la primera oportunidad.

Hale consultó a un abogado y trabó embargo contra casi todos los bienes del indio, incluyendo tierras, ganado y casa. Era un vulgar robo, y los parientes del indio se dispusieron a resistir la demanda. Pero entonces bajaron de los cerros los amigos de Hale, jurando que el indio debía mucho dinero a Hale. Más de una vez —afirmaban— habían oído a Hale reclamar al indio que le pagara. Por otra parte, el indio había reconocido la deuda. No había un solo documento que lo probara, pero Hale ganó el pleito.

A partir de entonces todo resultó fácil. Cada vez que moría un indio, Hale o algún otro hombre blanco trababa embargo sobre sus propiedades.

Después se produjo el diluvio de la fortuna para Osage County. Alguien descubrió petróleo, y del día a la noche los indios osages se convirtieron en los hombres más ricos del planeta. En virtud de los «derechos de familia» otorgados por el gobierno federal a unos 2.200 indios osages de pura sangre, tenían derecho a compartir las regalías obtenidas por cada galón de petróleo que se extrajera de su reserva. Además cobraban bonificación por las concesiones. Al morir un indio osage, su «derecho de familia» pasaba a sus herederos. Y así fue como algunos indios llegaron a tener más de una porción de los ingresos conjuntos de la tribu.

De pronto aquellos indígenas que hasta entonces habían vivido en la pobreza se vieron fabulosamente ricos. Compraban enormes casas, aunque después prefiriesen levantar una tienda en el patio del fondo e instalarse allí. No era extraño que una sola familia pagara cuentas de almacén superiores a los 1.000 dólares mensuales. Competían por tener el automóvil más grande. Un indio fue a Oklahoma City y compró un largo y reluciente coche fúnebre, con vidrios a los costados. Sumergido en un cómodo sillón hamaca, le gustaba pasear por el campo y contemplar el paisaje. Se hacía llevar por un chofer de librea.

Los osages eran como niños en el inmenso y recién descubierto país de las maravillas. Pero en pos de la fortuna vendría la desgracia, y aun la muerte.

Estafadores, tahures, prostitutas, delatores y «redoblones» acudieron en masa a compartir la riqueza de los osages. Hombres blancos se casaban con indias por el interés del dinero. A otros les nacía una repentina «preocupación» por el bienestar de los osages y se hacían nombrar tutores legales de los indios para robarles su fortuna. Los usureros cobraban intereses exorbitantes. Los comerciantes vendían a precios escandalosos. Algunos indios protestaron amargamente. Pero no había quien los escuchara.

La prosperidad de los indios se hizo extensiva a Bill Hale. En 1920, el ex vaquero había abandonado su tienda en los cerros y era dueño de una finca rural de 50.000 acres, poblada de ganado y caballos de raza. Tenía un banco en Fairfax, y era dueño en sociedad de un almacén y una empresa de pompas fúnebres. Cada vez que moría un indio osage puro, Bill Hale prosperaba.

Ya eran varios los indios que habían muerto misteriosamente. A Charlie «Cuerno Blanco» lo encontraron con dos balas en la frente. Joe «Caballo Amarillo» murió soltando

una extraña baba por la boca. Otros dos osages de pura raza, Bill Stetson —gran cazador— y Nina Smith, perecieron violentamente. El comentario afirmaba que habían bebido whisky envenenado.

El escandaloso trato dispensado a los indios, sus amigos, enfureció a Barney McBride, hombre blanco que trabajaba en la explotación del petróleo. Los jefes tribales acudieron a él para que terminase con los robos y los crímenes. McBride emprendió viaje a Washington con el propósito de formular una denuncia. Su cadáver, horriblemente mutilado, apareció metido en una alcantarilla cerca de Meadows, Maryland. Murió antes de radicar la denuncia.

Joe Bates (apodado «Caballo Gris») también murió, y Bill Hale presentó un título de propiedad sobre sus tierras. Cuando falleció George «Gran Corazón», al pie de su lecho de muerte se originó una controversia entre su abogado y Hale. Este afirmaba que George le había transferido sus bienes. El abogado sostuvo que tal cesión era fraudulenta. Tiempo después cayó, o fue arrojado de un tren, cuyas ruedas lo hicieron picadillo.

Fue entonces cuando el «Rey de los Cerros Osages» concibió la idea más brillante de su vida. Lo sorprendente es que el plan no se le hubiera ocurrido antes. El petróleo fluía de los pozos de la zona en cantidades cada vez mayores. Los «derechos familiares» de los indios eran verdaderas minas de oro al alcance de cualquiera que tuviese un poco de audacia e imaginación.

Ahí estaba, por ejemplo, la vieja Lizzie Q., india pura cuya fortuna ascendía ya a 330.000 dólares; era difícil prever a cuánto llegaría en pocos años más. La vieja era titular de tres «derechos familiares»; y sus hijas, de uno y un sexto.

Pues bien —razonó Hale—, supongamos que la vieja Lizzie Q. muera. Y que dos de sus hijas, Anna Brown y Rita Smith, mueran junto con el esposo de Rita. ¿Quién heredará ese dinero, medio millón de dólares o acaso más?

La respuesta era simple. El grueso de la fortuna pasaría a la tercera hija, Mollie. Y Mollie estaba casada con el sobrino de Hale, Ernest Burkhart. Entonces, si Mollie pasaba a mejor vida, no habría dificultad en manejar a Ernest, que era un palurdo débil de carácter.

Un día de mayo de 1921, algunos cazadores encontraron el cadáver ya descompuesto de Anna Brown en un precipicio cercano a Fairfax. Tenía un tiro en la cabeza. Dejó una herencia de 100.000 dólares. La vieja Lizzie Q. murió dos meses más tarde, al parecer por causas naturales. Su fortuna se repartió entre Rita Smith y Mollie Burkhart. Y como dice la canción popular, ahora sólo quedaban dos indiecitos.

Hale era un hombre metódico. No tenía prisa por embolsar la herencia de Lizzie Q. Antes de insistir en esa dirección, había que realizar otro trabajo.

Anna Brown tenía un primo, un pintoresco osage llamado Henry «Caballo Ruano», que llevaba el cabello recogido en trenzas a la espalda. El 6 de febrero de 1923, el cadáver de Henry «Caballo Ruano» apareció en el asiento delantero de su automóvil, en las afueras de Fairfax. Alguien le había hecho saltar la tapa de los sesos, por motivos que sólo conocía Hale.

Dos meses más tarde, mientras Hale asistía a la exposición rural de Texas, el pueblo de Fairfax fue sacudido por la explosión que mató a Bill y Rita Smith, además de la mucama. Ahora sólo quedaba una indiecita: Mollie Burkhart.

Pero la explosión que conmovió a Fairfax también estremeció al consejo tribal de los osages, impulsándolo a actuar. Desesperados, los indios apelaron a Washington. Un abogado redactó la resolución, que decía:

Considerando, que varios miembros de la tribu de los osages han sido asesinados... y muchos otros crímenes cometidos contra miembros de la tribu...

Se resuelve... pedir al honorable secretario del Interior que obtenga los servicios del Departamento de Justicia para capturar y procesar a los asesinos de los miembros de la tribu osage...

La petición fue transmitida al F. B. I. Se ordenó una investigación que iba a durar tres años, y que se convirtió en un ejemplo clásico dentro de la lucha contra el crimen.

Agentes del F. B. I. se trasladaron a Fairfax y encontraron un muro de temor casi impenetrable. La gente temía hablar y los testigos capaces de dar información habían desaparecido mucho tiempo atrás. Circulaban rumores que hacían perder a los agentes días enteros en pos de pistas falsas. Comprendieron que alguien, deliberadamente, fraguaba esas historias para despistarlos. Pero la búsqueda prosiguió.

Nadie, en Fairfax, se sorprendió demasiado cuando cuatro desconocidos fueron llegando uno por uno al pueblo: un comprador de ganado, un corredor de seguros, un explorador de petróleo y un curandero indio. Los recién venidos, por otra parte, se ocupaban en sus propios asuntos sin llamar la atención de nadie.

Transcurrieron varias semanas sin acontecimientos de importancia. A una señal convenida, los cuatro desconocidos se reunieron una noche en un lugar de la montaña para intercambiar los informes recogidos y planear sus próximos movimientos. El «comprador de ganado» era el más viejo, y el que estaba al frente de este equipo del F. B. I.

Después de escuchar los informes, resumió la situación de esta manera:

—Anna Brown fue asesinada en territorio ajeno a la reserva, es decir, no gubernamental. Lo mismo cabe decir de Bill y Rita Smith. Ahí no tenemos jurisdicción. Pero Henry «Caballo Ruano» fue muerto en zona del gobierno. Ese es el caso que debemos atacar. Si lo resolvemos, creo que descubriremos a todos los asesinos.

Sus acompañantes se mostraron de acuerdo.

Pasaron varios meses. Los cuatro desconocidos se reunían a menudo bajo las estrellas, en los Cerros Osages. Cada vez contaban con más información. Gradualmente el panorama iba asumiendo formas concretas. Y el hombre que asomaba en él era William K. Hale. Hasta que por fin el jefe del grupo pudo anunciar a sus hombres:

—No hay duda de que Hale es el asesino. Era beneficiario de una póliza de 25.000 dólares contratada por Henry «Caballo Ruano». Y parece que estuviera trabajando para apoderarse de la herencia de Lizzie Q. y de sus hijas, por medio de ese sobrino que tiene. Pero hay que probarlo.

Efectivamente, lo probaron. El muro contra el que habían golpeado tanto tiempo se fue derrumbando lenta pero ininterrumpidamente. Alguien informó que un presidiario de la penitenciaría estatal de Oklahoma sabía algo de los asesinatos. Los agentes descubrieron que el presidiario, que odiaba a Hale, estaba dispuesto a hablar.

—Vean a Ernest Burkhart —les aconsejó—. El puede decirles todo lo que quieren saber.

Con esto se redondeó la información acumulada en el transcurso de los meses. Los agentes confrontaron a Burkhart con el material reunido y no ocultaron sus sospechas. El sobrino de Hale era el eslabón más flojo de la cadena. Se derrumbó en seguida y explicó a los agentes que Hale lo había dominado toda su vida. Nombró a los matadores de los Smith y de Henry «Caballo Ruano»; y agregó que su tío había planeado los asesinatos.

Uno a uno confesaron los asesinos. Todos culpaban a Hale. Y así se supo también cómo había sido traicionado «Ace» Kirby después de volar la casa de los Smith.

Pero Hale se defendió con uñas y dientes. Fue el suyo uno de los procesos más peleados en los anales judiciales del Sudoeste. En primera instancia, el Juzgado Federal de Distrito se declaró incompetente por motivos de jurisdicción, pero la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos revocó esa decisión. En el segundo proceso, el jurado se manifestó inhibido después que un testigo de la defensa incurrió en perjurio. El perjurio fue condenado.

El tercer proceso terminó en condena para Hale, pero aún no se había agotado la lucha. El veredicto se declaró nulo cuando la defensa alegó que el juicio se había realizado en un distrito que no correspondía. La cuarta vez, Hale fue condenado y sentenciado a cadena perpetua⁽¹⁾. Era el 26 de enero de 1929.

En Osage County volvió a reunirse el consejo de la tribu, y esta vez adoptó una resolución declarando «nuestra sincera gratitud ante la espléndida tarea realizada para investigar y llevar a la justicia a los asesinos de miembros de la tribu de indios osages...».

Había concluido la sangrienta era del «Rey de los Cerros Osages». El F. B. I. cerró uno de los casos más fantásticos registrados en sus archivos.

El nuevo F. B. I.

XIV. - LOS AYUDANTES DE HOOVER

Durante la lucha contra las pandillas de «gangsters», J. Edgar Hoover se convirtió, para el público, en «Mr. F. B. I.».

El F. B. I., efectivamente, había crecido en el transcurso de los años a imagen y semejanza de las ideas e ideales de este hombre. En ninguna otra dependencia del gobierno federal ha quedado tan claramente estampada la huella de una personalidad.

Hoover es el F. B. I. Pero su posición de fuerza —y la fuerza del F. B. I.— no dependen solamente de la personalidad de un hombre. El verdadero secreto consiste en que Hoover tiene a su alrededor un grupo de grandes jefes salidos de las propias filas del F. B. I. Han ascendido por el camino estrecho, merced a sus propios méritos y no como recomendados políticos. Hoover confía en ellos porque son capaces de tomar una decisión en un momento crítico. Y ellos retribuyen esa confianza con su lealtad, sintiéndose fieramente orgullosos del F. B. I. Aceptan sin discusión el anonimato que los rodea. Sus nombres son muy poco conocidos fuera del F. B. I. Y sin embargo tienen en sus manos gran parte de la seguridad de la nación.

Este círculo interior de la jerarquía está compuesto por nueve hombres, de quienes Hoover ha dicho: «La energía y devoción que prestan al F. B. I. no pueden comprarse con dinero».

Los lugartenientes de Hoover se reúnen todos los lunes y miércoles —y si es necesario, todos los días de semana— a las 10.30, en las llamadas «Conferencias de Jefes del F. B. I.». Preside las reuniones Clyde A. Tolson, que ingresó en el Servicio el 2 de abril de 1928.

Tolson es en el F. B. I. aquel personaje del cuento, «El hombre que vino a cenar». Pensaba quedarse el tiempo indispensable para obtener cierta experiencia y ganar algún dinero; después proyectaba cursar abogacía en Cedar Rapids, Iowa, donde había completado estudios comerciales. Tolson aclaró sus intenciones en la solicitud de ingreso, provocando

(1) Hale salió en libertad condicional en julio de 1947.

la sorpresa de la Oficina de Personal, acostumbrada a que los aspirantes manifestaran el deseo de cumplir toda una carrera dentro de la organización. La extraña carta llegó a manos de Hoover.

—Tómenlo, si aprueba los exámenes —repuso Hoover—. Puede resultarnos útil (1).

Pocos meses después de entrar en el F. B. I. como agente, Tolson pasó a la Jefatura como oficial principal. Y a partir de entonces progresó rápidamente, ascendiendo en 1931 a director auxiliar y cinco años más tarde a ayudante del director. En 1947, Hoover le dio el título de director asociado, lo que equivalía a un reconocimiento formal de que Tolson era el «Hombre Nº 2» en el F. B. I.

Tolson, como Hoover, es soltero. Los dos hombres han trabado una amistad tan estrecha en el curso de los años, que sus amigos dicen que han llegado a pensar lo mismo en todo. Tolson carga con casi todo el peso de lo administrativo, que durante muchos años recayó en Hoover, y es algo así como el jefe de estado mayor de Hoover.

«El Hombre Nº 3» en la jerarquía del mando es Louis B. Nichols, que alivia a Hoover de innumerables tareas menores, además de dirigir la División de Archivos y Comunicaciones y de representar al F. B. I. en los asuntos que Hoover no maneja personalmente. Nichols ostenta el título de ayudante del director, como así también el «Hombre Nº 4», Leiland V. Boardman (2).

Por debajo de Tolson, Nichols y Boardman, actúan seis directores auxiliares, que son los jefes de las Divisiones de Identificación, Adiestramiento e Inspección, Administrativa, Inteligencia Interna, Investigativa y de Laboratorio (3).

Estos hombres no han llegado a los puestos que ocupan

(1) Tolson cuenta en la actualidad cincuenta y seis años. Nació en Laredo, Missouri. A los dieciocho años llegó a Washington, procedente de Cedar Rapids, Iowa, para emplearse en el Departamento de Guerra. A los diecinueve años despachaba la correspondencia rutinaria del secretario de Guerra, Newton D. Baker. Tolson pensaba que Baker era uno de los hombres más brillantes que jamás había conocido. En cierta oportunidad dijo a un amigo: «Con dos pulgadas más de estatura, creo que Baker hubiera sido presidente de los Estados Unidos». Baker, por su parte, apreciaba tanto a Tolson que lo nombró su secretario privado. Durante ocho años, Tolson fue también secretario privado de los secretarios de Guerra John Weeks y Dwight Davis. Durante ese período asistió a cursos nocturnos de la Universidad George Washington, graduándose de bachiller en artes en 1925 y de abogado en 1927.

(2) Nichols tiene cincuenta años. Ingresó en el F. B. I. como agente, en 1934. Concurrió al Kalamazoo College, de Michigan, y en 1934 obtuvo el título de bachiller en leyes en la Universidad George Washington. Nació en Decatur, Illinois. Boardman tiene cuarenta y siete años, entró en el Servicio como agente en 1934. Cursó estudios en la Universidad de Minnesota, graduándose en 1929 de bachiller en artes, y en 1934 de bachiller en letras.

(3) Estos seis hombres, con sus respectivas fechas y lugares de nacimiento y fechas de ingreso en el F. B. I. son: *Identificación*: C. Lester Trotter, n. 13-XI-1915, en Charles County, Maryland; 1934. *Adiestramiento e Inspección*: Quinn Tamm, n. 10-VIII-1910, en Seattle, Washington; 1934. *Administrativa*: John P. Mohr, n. 20-IV-1910, en West New York, Nueva Jersey; 1939. *Inteligencia Interna*: Alan H. Belmont, n. 22-I-1907, en Nueva York; 1936. *Investigativa*: Alex Rosen, n. 14-IX-1905, en Nueva York; 1933. *Laboratorio*: Donald J. Parsons, n. 21-V-1909, en Washington; 1934.

haciendo ostentación de servilismo. Han llegado porque siempre estuvieron dispuestos a trabajar duro, adoptar decisiones y aceptar responsabilidades, con olvido de sus intereses personales. Exigen de sí mismos más de lo que exigen de sus subordinados. No es extraño verlos trabajar doce a quince horas diarias. Lo hacen porque es necesario, y el trabajo es para ellos lo primero.

En la sala de conferencias, cada jefe dice lo que piensa, tanto si el problema planteado se refiere a su jurisdicción como si corresponde a la de otro. Pero debe estar dispuesto a defender con buenas razones la posición que asume. Estos son hombres voluntariosos, y a veces hay choques de ideas. Si lo que está en juego es un principio orgánico del Servicio, o un problema grave, la conferencia deja la decisión en manos de Hoover, aunque siempre recomienda el curso más adecuado. Si hay desacuerdo, se eleva también una recomendación alternativa, y Hoover decide.

Pero cuando estos hombres salen de la sala de conferencias, desaparecen las distancias entre ellos. Se han tomado todas las decisiones, y cada uno sabe adónde va y qué tiene que hacer. El solidario trabajo de equipo es una de las claves que han permitido al F. B. I. adquirir fama de unidad y eficiencia.

A ninguno de estos hombres le parece inusitado aceptar el anonimato como parte de su función. Cualquiera de ellos podría renunciar al Servicio e ingresar en la actividad privada duplicando su salario. Sin embargo, permanecen fieles al F. B. I.

Tolson lo ha explicado de este modo:

—Creo que la mayoría se quedan por el mismo motivo que yo. Trabajando para el F. B. I. se obtiene algo más importante que el dinero.

Otro de los factores que contribuyen a la eficiencia del Servicio es la minuciosa atención que se presta a los pequeños detalles. Se tiene en cuenta hasta el error que comete una dactilógrafa al escribir una palabra o un número; y el que lo pase por alto también se hace acreedor al reproche.

Este afán de exactitud, que alcanza al detalle, resulta dispendioso, y hasta es posible que en la actividad privada fuese considerado como una pérdida de tiempo y energía. Para el F. B. I., en cambio, semejante prolijidad es la esencia misma de su función. Tolson ha dicho:

—La virtud cardinal de un organismo investigador es la precisión. Son muchos los criminales condenados, y los inocentes absueltos, gracias a que alguien se tomó la molestia de registrar con exactitud «un detalle sin importancia».

En otras actividades, los agentes del F. B. I. encontrarían

menos exigencias y trabajo más fácil. Mas a pesar de la estricta disciplina, la supervisión constante y el rendimiento superior a lo normal que se les pide, las bajas de personal son asombrosamente reducidas⁽¹⁾. Más de la cuarta parte de sus 14.000 empleados han permanecido en el Servicio diez años o más. Y más de un tercio de los agentes han estado por lo menos diez años.

En este aspecto, son de interés algunas estadísticas:

Durante 1955, las bajas de personal de todas las dependencias del gobierno federal, tomadas en conjunto, ascendieron al 1,8% mensual; en la actividad privada, fueron del 3,3%. Entre los agentes especiales del F. B. I., las bajas resultaron inferiores al medio por ciento mensual; es decir, unos 27 sobre un total de 6.200 agentes. Mientras que 334 agentes salieron del Servicio (nueve de ellos involuntariamente), se recibieron solicitudes de reincorporación de setenta ex agentes. Y un total de 431 ex empleados administrativos solicitaron ocupación.

Tradicionalmente, no se considera a los norteamericanos un pueblo disciplinado. Pero la verdad es que los norteamericanos aceptan la disciplina cuando la ven necesaria, y cuando una conducción vigorosa señala el camino que se debe recorrer y las ventajas de la disciplina. Por eso se acepta la disciplina en el F. B. I.

¿Qué clase de hombres son estos agentes especiales del F. B. I.? ¿Por qué se quedan en el F. B. I. cuando fuera de él podrían ganar más dinero y llevar una existencia más fácil?

En primer término, corresponde aclarar que no existe un «típico» agente del F. B. I. así como no existe un norteamericano «típico». Cada uno es un individuo, que difiere de los demás como todos los hombres difieren entre sí.

Pero, si cotejamos los datos biográficos de estos agentes, aparece cierta afinidad de carácter y cierta semejanza de experiencias previas. De ese cotejo puede salir la imagen aproximada del agente medio, a quien llamaremos John Jones.

John Jones tiene treinta y cuatro años de edad. Es casado y con dos hijos. Su padre es un hombre de negocios con un buen pasar, que no llega a ser rico. Tanto su padre como su madre son algo «anticuados»: es decir, esa clase de gentes que pronuncian una oración antes de sentarse a la mesa y enseñan a sus hijos a rezar cuando se acuestan. John Jones y sus hermanos han aprendido —por el rigor a veces— a respetar la autoridad investida de justicia. También se les ha

(1) Desde el 25 de marzo de 1918 Helen W. Gandy ha sido secretaria de Hoover, y en 1939 fue nombrada auxiliar ejecutiva del director. Cuando la señorita Gandy cumplió treinta y cinco años de servicio, Hoover, al hacerle entrega de un pergamino, la llamó «la única persona realmente indispensable del F. B. I.».

enseñado que el patriotismo, el honor y el deber sustentaron las hazañas de los próceres de su país, y que el sentido de esas palabras no podía discutirse.

En la escuela secundaria, John Jones mereció calificaciones superiores al término medio. Sobresalió en la práctica de los deportes, intervino en debates y polémicas, actuó en fiestas y reuniones juveniles. Ingresó en la Universidad del Estado, trabajando a veces durante las vacaciones para contribuir a pagar sus estudios. Obtuvo título de bachiller universitario y entró en la escuela de leyes, o Facultad de Derecho.

Más tarde John decidió incorporarse al F. B. I., en parte porque le atraía el animado e interesante trabajo de investigación, y en parte porque deseaba hacer algo útil en un organismo del que podría sentirse personalmente orgulloso. Aprobó las rigurosas pruebas físicas y los exámenes preliminares de competencia⁽¹⁾. Su lealtad e integridad personal fueron investigadas minuciosamente.

Pero esto fue apenas el principio. John Jones, antes de convertirse en agente especial, debió sobrevivir a un severo período de adiestramiento —dieciocho semanas— cumplido en la Jefatura del Servicio y en el centro de adiestramiento de Quantico, Virginia. Le enseñaron a redactar un informe y a iniciar una investigación. Lo instruyeron en los aspectos técnicos y funcionales de la custodia de las leyes: identificación dactiloscópica, pesquisas, preservación de las pruebas materiales en el escenario de un crimen, y otros fundamentos necesarios para realizar un trabajo eficaz. Aprendió a manejar las cuatro armas básicas usadas por el F. B. I.: pistola, pistola ametralladora, escopeta de repetición y fusil.

John Jones aprobó todos los exámenes, llenó todos los requisitos y se convirtió en agente especial. Se le dió destino, con un salario inicial de 5.915 dólares al año, más los 816 dólares de bonificación por horarios extras que perciben la mayoría de los agentes. Como novato que era, trabajó varias semanas en compañía de un agente experimentado. Después quedó librado a sus propios medios. Poco tardó en descubrir, sin embargo, que su adiestramiento no terminaría nunca mientras perteneciera al F. B. I. Y su labor estaría siempre sujeta al examen microscópico de sus superiores⁽²⁾.

(1) De cada cien aspirantes a puestos de agentes, ingresan siete.

(2) El director Hoover atribuye principalmente la eficacia del F. B. I. a la selección y adiestramiento de los agentes. En el transcurso de los años, el adiestramiento ha estado a cargo de los siguientes funcionarios del F. B. I.:

Inspector John M. Keith, hombre de amplia experiencia práctica, ha sido uno de los mejores investigadores del Servicio. Fue jefe de la delegación de Washington, y hasta 1930 dictaba gran parte de las conferencias para agentes recién ingresados. Renunció el 1º de diciembre de 1936 para dedicarse a la industria privada y murió en 1938.

T. Frank Baughman, precursor en el adiestramiento de tiro y en la creación de reglamentos y técnicas para el uso de armas de fuego en general. Baughman entró

Cada vez que un agente entra en su oficina o sale de ella firma un registro y anota la hora. Y esto sucede tanto en Nueva York como en Honolulu o Chicago. Las normas son las mismas para todas las delegaciones del F. B. I. Cuando está de servicio, el agente debe telefonar a su oficina cada tres horas, para recoger cualquier mensaje o recibir instrucciones. Informa sobre el lugar donde está y lo que piensa hacer, y de todo ello queda constancia. En cualquier momento, el jefe de una delegación puede consultar la ficha de un agente en la sección comunicaciones y saber dónde se encuentra y en qué caso está trabajando.

Estas fichas de actuación son revisadas todos los meses. Cada cuarenta y cinco días, término medio, el agente debe presentar un informe escrito sobre el caso en que está trabajando. Si deja de informar a tiempo, se convierte en «moroso» y es llamado a dar explicaciones. Toda investigación en sí tiene algo de animado y excitante. Redactar un informe, en cambio, es más aburrido.

Cuando el trabajo se atrasa más de lo normal en cualquier delegación, la sede central en Washington pregunta qué ocurre.

—Empiezan a pincharnos —comentó un funcionario de una de estas delegaciones—. Y nosotros pinchamos a los que demoran sus informes.

Si un agente llevara a su casa un automóvil de la dependencia la noche antes de empezar un trabajo, para tenerlo a mano la mañana siguiente, cualquiera pensaría que es razonable. Tal cosa, sin embargo, no ocurre en el F. B. I. El agente no puede llevarse el automóvil a su casa. Si es necesario, a la mañana siguiente saldrá una hora antes para retirar el coche del garaje central. Y cuando haya terminado su tarea, deberá restituirlo en el acto. Esta reglamentación tiene sus motivos. Hoover insiste en que sus hombres no pueden tener vehículos de la dependencia estacionados frente a sus casas, porque nunca faltará quien comente: «Mira ese agente del F. B. I., que usa un automóvil del gobierno para sus ac-

al Servicio en 1919 y fue uno de los más íntimos colaboradores de Hoover. Designado jefe de la sección de física y química del laboratorio técnico del F. B. I., era considerado uno de los más grandes expertos en balística. Se jubiló en 1948.

Hugh H. Clegg ingresó al Servicio como agente el 31 de agosto de 1926. Fue jefe de delegación y pasó después al personal de jefatura como inspector. A fines de 1932 fue nombrado director auxiliar. Más tarde quedó a cargo de la División de Adiestramiento e Inspección, puesto que ocupó hasta la fecha de su retiro, el 31 de enero de 1954.

W. H. Drane Lester, *scholar* de la universidad de Rhodes, se incorporó al Servicio en 1932. Un año más tarde se le asignaron funciones de adiestramiento, y antes de tres años fue ascendido a inspector. Lester dejó el Servicio el 3 de septiembre de 1940 para dedicarse a negocios particulares. Murió a consecuencia de un accidente automovilístico el 4 de junio de 1941.

Rolf T. Harbo entró en el F. B. I. en marzo de 1932. En noviembre de ese año pasó al personal de jefatura. Ascendió a inspector y estuvo al frente del laboratorio del F. B. I. antes de dirigir la División de Adiestramiento e Inspección con el grado de director auxiliar.

tividades particulares». Hoover ha dicho: «No basta ser honestos. Para evitar las críticas, debemos serlo y parecerlo en todo sentido».

Nunca se da el caso de que un agente del F. B. I. llegue a su oficina por la mañana y pregunte: «¿Qué debo hacer hoy?». Ya sabe lo que tiene que hacer, porque la noche anterior ha trazado su plan de trabajo. Y si no lo hizo, deberá suplir la omisión acudiendo a su oficina antes de hora. Este anticipado planeamiento de las operaciones abarca todo, inclusive el dictado de informes.

El día antes de redactar un informe, el agente debe notificar al jefe de taquígrafos y convenir con él la hora a que desea empezar, y hasta la posible duración del trabajo. El agente debe traer su material organizado de tal suerte que pueda empezar a dictar apenas llegue el taquígrafo.

El sistema da a los taquígrafos la oportunidad de convertirse en «críticos» de sus jefes. A intervalos regulares, cada uno debe informar si el agente X o Y organiza adecuadamente su material, si dicta demasiado rápido o demasiado despacio, y qué debe hacer para mejorar su técnica en el dictado.

Los informes que dicta el agente son verificados, criticados y comentados por un superior, que luego los firma y los eleva a la oficina central en Washington.

El agente sólo en teoría cumple un horario regular, puesto que criminales y elementos subversivos actúan sin interrupción, de día y de noche. La vida de un agente no le pertenece: debe estar dispuesto a ir a cualquier parte en cualquier momento. Los recargos de tarea son cosa de todos los días. En el año fiscal 1956 cada agente trabajó, término medio, más de dos horas extras por día. El Servicio pagó horas extras por valor de 5.000.000 de dólares adicionales, pero el equivalente de 6.000.000 quedó sin compensación. El F. B. I. no dilapida el dinero de los contribuyentes.

—Una cosa se puede dar por cierta —declara un funcionario del Servicio—. Lo que se nos paga, lo ganamos. Cada hombre trabaja honestamente su jornada, y después un poco más.

Este «poco más» que se exige a los empleados suscita críticas de tanto en tanto, pero en realidad el F. B. I. brinda a su personal más ventajas que cualquier otro organismo del gobierno, en concepto de seguridad, entretenimiento y satisfacciones personales.

Lo prueba el hecho de que no haya dificultad para reclutar agentes o empleados administrativos. De todas partes del país, y aun de sus territorios de ultramar, afluye un río de solicitudes de ingreso. Acude al F. B. I. gente que ha leído

algo sobre sus actividades, o que está influida por el cine, la televisión, la radio o los comentarios de amigos. Muchos candidatos son recomendados por hombres y mujeres que ya trabajan en el F. B. I. Son numerosos los casos en que actúan en el Servicio padres e hijos, hermanos y hermanas, o madres e hijas. Ya empiezan a entrar los nietos de viejos empleados. Uno de los primeros agentes del F. B. I. fue Edward J. Brennan, que prestó servicios desde 1908 hasta 1925. Su hijo, John, ingresó en 1919. Y ahora el joven Edward J. representa a la tercera generación de Brennan que actúa en el F. B. I.

En sus recorridas por pueblos y ciudades de todo el país, los agentes del F. B. I. son abordados por muchachos de colegios secundarios y universidades que tienen interés en incorporarse al Servicio. Y a la oficina central llegan centenares de cartas de jóvenes que piden datos sobre las condiciones de ingreso.

Para algunos críticos, las normas de trabajo del F. B. I. son un ejemplo de «paternalismo» conducente a la explotación del empleado. El F. B. I. en cambio considera esas normas como las más adelantadas y prudentes que están en vigor en cualquier organismo gubernamental. Lo mejor, tal vez, será que el lector juzgue por el caso hipotético de Mary Smith, que llegó a Washington, bastante desconcertada y un poco temerosa, para ocupar un puesto administrativo en el F. B. I. El caso de Mary Smith no es en modo alguno inusitado.

Mary traía en el bolso el número telefónico del F. B. I. y llamó a la Sección de Personal. Inmediatamente el Servicio la tomó bajo su protección. Una empleada de la Sección Alojamiento la ayudó a encontrar albergue en una de las pensiones aprobadas por el F. B. I., donde compartiría un cuarto con otra colega.

—Si encuentra alguna dificultad, o podemos ayudarla en algo —informaron a Mary—, no tiene más que llamar, de día o de noche. Siempre hay alguien de guardia para atender estas cosas.

El lunes siguiente, Mary se presentó a trabajar, y a partir de entonces estuvo siempre demasiado ocupada para sentirse sola o inquieta. Los dos primeros días asistió a conferencias de orientación, donde supo qué era el F. B. I. y cuáles las funciones que desempeñaba en resguardo de la ley y de la seguridad nacional. Le explicaron qué esperaban de su trabajo y de su conducta personal, le informaron dónde podía comer bien a precios razonables; cuál era la iglesia más próxima a su albergue; dónde podía entretenerse y divertirse. Una enfermera del Servicio Sanitario del F. B. I. le explicó cuáles eran los servicios médicos a que tenía derecho.

El tercer día, Mary fue presentada al director auxiliar a cargo de su división. Más tarde se enteró de las normas burocráticas referentes a los períodos de descanso, horas de trabajo, salidas para almorzar, cuidado que debía dispensar a los bienes y suministros del Servicio y precauciones que debía adoptar en el trámite de la información que pasara por sus manos.

Durante una semana, Mary salió a almorzar con una colega que la presentó a otros empleados. El nombre de Mary y el de su pueblo natal aparecieron en los boletines murales; así conoció a otras chicas comprovincianas, que la aconsejaron y la alentaron. Al cumplir diez días en el Servicio, Mary fue llamada al despacho de la supervisora, que conversó con ella y le dijo que se estaba desenvolviendo muy bien.

Al cabo de dos meses, Mary tuvo oportunidad de leer un informe escrito sobre su trabajo. Se le dijo cómo podía mejorar su rendimiento, y cuáles eran sus posibilidades para futuros ascensos y cargos de mayor responsabilidad, si continuaba progresando. Se le hicieron notar sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

A partir de entonces, Mary asistió cada seis meses a una conferencia divisional, en compañía de sus camaradas. Allí se les decía cómo estaba marchando la división en conjunto. La familia de Mary empezó a recibir cartas del Servicio, donde se la informaba de sus adelantos y se la invitaba a visitar el F. B. I. Cuando Mary contrajo una breve enfermedad, el F. B. I. dio aviso a su familia y el Servicio Sanitario le prestó atención médica diaria.

Mary Smith es sólo una entre los 8.000 empleados administrativos del F. B. I., pero todos reciben la misma estrecha supervisión y —cuando la necesitan— la misma ayuda.

El F. B. I. tiene un sistema de recompensas que le permite poner en práctica las ideas útiles de sus empleados, y de ese modo aumentar su eficacia y ahorrar dinero. También se premian los actos meritorios de servicio. Tal el caso de un agente que hizo frente a las balas de un pistolero perseguido por un policía local, y logró capturarlo. Su recompensa fue de 500 dólares. Durante el año fiscal 1956 se otorgaron a empleados del F. B. I. 486 premios de estímulo por un total de 77.005 dólares. El F. B. I. puso en práctica este sistema de incentivos muchos años antes de que lo adoptara el gobierno federal. Ahora el programa del F. B. I. forma parte del sistema federal, aunque sus características no han variado mayormente.

El F. B. I. tiene una revista interna, llamada *The Investigator* (El Investigador), que recoge las actividades deportivas, sociales, etc., de sus empleados, y da cuenta de ascensos

y recompensas. Y también cuenta con una asociación recreativa, la F. B. I. R. A. (*F. B. I. Recreation Association*), encargada de organizar actividades externas, como bailes, excursiones, cruceros marítimos, competencias deportivas, espectáculos. Asimismo hay pequeños clubes para los aficionados a la fotografía, el teatro, la aviación, la literatura y el tiro al blanco. Más de 13.000 empleados del F. B. I. son socios de la F. B. I. R. A.; cada uno paga una cuota anual de un dólar y medio.

Un aspecto del F. B. I., que pocos de afuera conocen, es la solidaridad que se manifiesta cuando algún empleado experimenta una desgracia. No hace mucho, un agente —casado y padre de dos hijos— contrajo una grave poliomielitis bulbar. Las esposas de sus colegas se pusieron de acuerdo para ayudar a su mujer en las tareas de la casa y el cuidado de los niños. En el cuarto que ocupaba el enfermo en el sanatorio se instaló un aparato de televisión. Enfermeras del Servicio Sanitario del F. B. I. iban a interesarse por él todos los días. Sus amigos le instalaron un equipo de aire acondicionado en su habitación.

Al regresar de una visita al sanatorio, un agente informó que el enfermo comenzaba a preocuparse por su empleo. Hoover fue a verlo y le dijo:

—No se haga problemas. Siempre le encontraremos algo que usted pueda hacer. Ahora su obligación es sanar.

Llegó el momento, sin embargo, en que el agente agotó el plazo estipulado para casos de enfermedad y también su período de vacaciones. La contaduría suspendió el pago de haberes. Empezó a revistar en situación de licencia sin goce de sueldo. Entonces sus amigos calcularon que si cada empleado de la Jefatura aportaba sesenta céntimos diarios, el colega enfermo seguiría percibiendo su sueldo. La Conferencia de Jefes aprobó el plan. Los días de pago se colocaron alcancías en cada sección. No se llevó cuenta de quienes contribuían y de quiénes no. Pero el agente siguió percibiendo su salario íntegro⁽¹⁾.

Este espíritu de cuerpo no es nuevo en el F. B. I. Se ha desarrollado durante más de treinta años, y los archivos contienen decenas de casos similares. Cuando un agente casado muere en acto de servicio, su esposa sabe que ella o sus hijos pueden ingresar al F. B. I. siempre que reúnan los requisitos mínimos. Es lo que ocurrió en el caso del agente W. Carter Baum, asesinado en 1934 en Spider Lake (Wisconsin) por

(1) Además de estas donaciones voluntarias de tiempo y dinero, el F. B. I. instituyó en 1953 un Fondo de Ayuda a Empleados que efectúa una sola campaña anual de colecta, en lugar de una serie de actos individuales. La última campaña produjo un total de 98.315,91 dólares. En vista de su éxito, otras dependencias del gobierno han adoptado el sistema de la «campaña anual» de beneficencia.

el pistolero «Baby Face» Nelson. Baum tenía veintinueve años y era padre de dos hijos. Su viuda aceptó un empleo, a propuesta de Hoover. Y permaneció en el Servicio hasta 1944, en que se retiró voluntariamente.

También la viuda de Sam Cowley, muerto en un tiroteo con el mismo «Baby Face» Nelson, ingresó en el F. B. I. Se retiró voluntariamente en 1948, para poder dedicar más tiempo a sus dos hijos.

A pesar de los severos requisitos físicos que exige el F. B. I. a los aspirantes a ingreso, hay numerosas personas parcialmente impedidas que han logrado emplearse en forma permanente, gracias a la decisión con que superaron sus dificultades.

Elegimos al azar el caso de Jane X. Cuando era niña, en Misisipí, Jane se lesionó el brazo izquierdo, que debió serle amputado a la altura del codo. La muchacha no permitió que esa tragedia arruinara su vida. En la escuela secundaria se convirtió en una de las mejores dactilógrafas de su clase. El valor de la joven impresionó a tal extremo a un agente que le aconsejó visitar el F. B. I., aprovechando una gira que realizaba a Washington en compañía de sus discípulos. Jane se presentó al F. B. I. y solicitó empleo. Altivamente declaró:

—Soy capaz de hacer lo que hacen todas las demás.

Jane obtuvo el empleo después de terminar sus estudios secundarios. Conquistó un ascenso tras otro. A pesar de que le faltaba una mano, era una de las más veloces y prolizas dactilógrafas de su sección. Pero esta historia tiene un epílogo feliz. Jane encontró al hombre de su vida y se casó.

Los empleados del F. B. I. no están incluidos en el escalafón del Servicio Civil, pero tienen derecho a los mismos beneficios y privilegios de que gozan otros empleados del gobierno. Y aquí, como en todas las cosas, el F. B. I. trata de ir un poco más lejos. Estas son algunas de las facilidades y ventajas que otorga a su personal:

Licencia por enfermedad, a razón de trece días hábiles anuales. Estas licencias, cuando no se toman, pueden acumularse sin límite. Hay empleados que ya tienen a su favor hasta 1.000 horas, es decir, unos 125 días.

Vacaciones anuales. Los empleados con menos de tres años de servicio gozan de trece días hábiles al año. A los que tienen entre tres y quince años, les corresponden veinte días hábiles; y a los que tienen más de quince años de servicio, veintiséis días.

Seguro de vida. Dentro del sistema de seguros de vida establecido para los empleados federales, un miembro del F. B. I. tiene opción a solicitar seguro a un costo de 6,50 dólares anuales por cada 1.000 dólares contratados, y en todos los casos la indemniza-

zación abarca el salario anual más lo que falte para completar una suma redonda en miles de dólares. Se puede contratar un seguro mutuo para cualquier tipo de muerte accidental.

Fondo de seguro para agentes. Sólo es accesible a los agentes del F. B. I. y funciona mediante contribuciones realizadas por ellos mismos. Provee, además del seguro para empleados, un pago adicional de 10.000 dólares en caso de muerte por cualquier causa. Las primas se integran mediante contribuciones voluntarias de los agentes miembros. Pagan además una tasa de diez dólares cuando el fondo de reserva lo exige. A partir de noviembre de 1943, esta tasa ha sido inferior a 15 dólares anuales.

Mutualidad de agentes (S. A. M. B. A., *Special Agents Mutual Benefit Association*). Este es otro programa de seguro colectivo para los agentes⁽¹⁾; prevé una indemnización máxima de 5.000 dólares, más gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y tratamiento contra la polio. Se paga una prima mensual mínima. No se exige examen médico al agente ni a familiares a su cargo, siempre que la solicitud se presente dentro de los sesenta días del nombramiento del agente.

Compensación. Todos los empleados están protegidos por la ley de compensación para los empleados federales, que en caso de lesiones sufridas en actos de servicio, les da derecho a atención médica y hospitalaria, y también a una indemnización por haberes no percibidos.

Jubilaciones y pensiones. Un agente puede retirarse a los cincuenta años de edad si tiene veinte de servicio. Entonces percibe aproximadamente el 40 por ciento del salario medio anual que cobró en los cinco años consecutivos más favorables de su carrera. La jubilación máxima es del 80 por ciento al cabo de 40 años de servicio.

Tienen derecho a pensión la viuda y los hijos menores de dieciocho años de un empleado con cinco años, por lo menos, de servicio civil.

El descuento para todos los derechos jubilatorios equivale al 6,5 % del salario del empleado.

Para ilustrar sobre los beneficios que recibe la familia de un agente, tomemos el caso del agente M., muerto en un tiroteo a manos de un ex presidiario, a quien la justicia de California buscaba por asesinato. La viuda del agente recibió un total de 23.905 dólares, a saber:

Fondo de seguro para agentes, 10.000 dólares; fondo «Charles S. Ross»⁽²⁾, 1.500; mutualidad de agentes, 5.000; licencia anual

(1) En febrero de 1956 la Mutualidad se hizo accesible a los empleados administrativos del F. B. I. Tienen los mismos beneficios que los agentes, salvo en lo relativo a los seguros de vida, que para los agentes son de 5.000 dólares, y para los empleados de 1.000 dólares. Prima: agentes con familiares a su cargo, 11,50 dólares mensuales; sin familiares a su cargo, 6 dólares; empleados administrativos, 9,50 y 4 dólares, respectivamente.

(2) Fondo creado por la viuda de Charles S. Ross, que fue muerto por el secuestrador John Henry Seadlund. Seadlund fue capturado por el F. B. I., condenado y ejecutado. La señora Ross quiso demostrar su gratitud creando este fondo destinado a los familiares de los agentes muertos en actos de servicio.

acumulada y haberes impagos, 3.294; gastos fúnebres pagados por el Servicio de Compensación, 400; reembolso de la Caja de Jubilaciones del Servicio Civil, 3.711. Total, 23.905 dólares.

Además, de acuerdo con la ley de compensación para los empleados federales, la viuda y sus tres hijos recibirán una compensación anual de 6.300 dólares⁽¹⁾.

XV. - IMPRESIONES DIGITALES

En 1893 Mark Twain escribió un cuento cuyo personaje central era un notable abogado de Missouri, David Wilson. Este Wilson venía cultivando durante muchos años un «hobby» en apariencia bastante absurdo: registrar sobre un vidrio las huellas digitales de amigos y vecinos. Cuidadosamente identificaba cada huella con el nombre de su propietario, anotaba la fecha en que la había tomado y la archivaba. Todo el mundo apreciaba a Wilson, pero la gente del pueblo admitía que no era el hombre más listo del mundo, y su «rareza» confirmaba ese juicio. Por eso lo llamaban «Pudd'nhead»⁽²⁾.

Pero un día el pueblo debió rever su opinión sobre la inteligencia de Wilson y su extraño «hobby». Y ello ocurrió cuando «Pudd'nhead», en una dramática escena ante un tribunal, demostró por medio de las impresiones digitales que: a) dos mellizos acusados de un asesinato eran inocentes; b) que el verdadero asesino era alguien de quien nunca se había sospechado; y c) que la tragedia se había originado en el momento en que una criada deliberadamente confundió la identidad de dos criaturas, cambiándolas en sus cunas.

Probablemente —admiten los expertos— no existe mejor descripción de las impresiones digitales como elemento de identificación que la que el personaje de Mark Twain, «Pudd'nhead Wilson», dio al jurado:

Todo ser humano lleva consigo desde la cuna hasta la tumba ciertas marcas físicas que no cambian de carácter, y por las cuales puede siempre ser identificado sin la menor sombra de duda. Estas marcas son su firma, su autógrafo fisiológico, por así decirlo, y ese autógrafo no puede ser falsificado, ni puede su poseedor disfrazarlo u ocultarlo en modo alguno, ni pueden tornarlo in-

(1) El máximo permitido es el 75 por ciento del salario corriente del agente M. (siempre que no exceda de 525 dólares mensuales). De esta suma, el 40 por ciento se otorga a la viuda del agente, y el 35 por ciento restante a sus tres hijos. El derecho a la pensión caduca con la muerte o nuevo casamiento de la viuda. En el caso de los hijos, con la muerte, casamiento o mayoría de edad. Todos estos haberes están liberados de impuestos.

(2) Término despectivo: *pudding head*, cabeza de budín. Es decir, cabeza de ehorlo, (N. del T.)

visible el desgaste y las mutaciones del tiempo... Ese autógrafo está formado por las delicadas líneas o pliegues con que la Naturaleza marca las palmas de las manos o de los pies. Si observan ustedes las yemas de sus dedos advertirán que esas finísimas líneas curvas están muy juntas, como las que señalan los bordes de los océanos en los mapas, y que forman dibujos claramente definidos, como arcos, círculos, curvas alargadas, verticilos, etc., y que esos dibujos difieren según los distintos dedos... Si consideramos dos hermanos mellizos, las marcas de uno jamás son iguales a las del otro... Ustedes habrán oído hablar a menudo de mellizos tan idénticos que, vestidos del mismo modo, ni sus propios padres podrían diferenciarlos. Y sin embargo nunca ha nacido un hombre mellizo o no de otro que no llevara consigo desde el nacimiento hasta la muerte algo capaz de identificarlo con toda certeza: ese misterioso y maravilloso autógrafo natal.

El crimen esclarecido por impresiones digitales era una pura ficción de Mark Twain. Pero la ficción se ha repetido en la realidad, en todo o en parte, centenares y centenares de veces, como lo demuestran los archivos de la División de Identificación del F. B. I. Mas no sólo para aclarar asesinatos ha servido la dactiloscopia, sino para capturar fugitivos de la justicia y desertores militares; para encontrar personas extraviadas y reunir familias divididas; y para salvar a muchos hombres de la sospecha, de la cárcel y aun de la muerte.

Uno de los casos más extraños en los anales de la dactiloscopia tuvo su comienzo la mañana del 23 de mayo de 1928, cuando cuatro hombres irrumpieron audazmente en el First National Bank de Lamar (Colorado) y súbitamente desenfundaron sus pistolas.

—¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! —gritó el jefe del grupo.

Aterrados clientes y funcionarios del banco obedecieron. Los asaltantes recogieron 219.000 dólares en efectivo y en acciones.

De pronto A. N. Parrish, el anciano presidente del banco, sacó un revólver del cajón de un escritorio y disparó al rostro de un bandido. De la herida brotó un chorro de sangre. El asaltante hizo fuego y Parrish cayó. El hijo del presidente del banco corrió hacia su padre. El también fue derribado de un tiro.

Los pistoleros se llevaron como rehenes al cajero E. A. Lungren y a su ayudante Everett A. Kessinger, los obligaron a subir al automóvil que esperaba afuera y escaparon a toda velocidad con el botín. Todo ocurrió en pocos minutos.

El «sheriff» Lloyd E. Alderman, armado solamente de una pistola, salió a perseguirlos. Los malhechores arrojaron a Lungren del automóvil, pero retuvieron a Kessinger, usán-

dolo como escudo en su tiroteo con el «sheriff». Los disparos de fusil de los delincuentes averiaron el auto del «sheriff», que les perdió el rastro.

Pocas horas más tarde, en el pueblo de Dighton, Kansas, a 155 millas de Lamar, llegó un hombre a casa del doctor W. W. Weininger. Informó al médico que un amigo suyo se había herido en un accidente con un tractor y necesitaba asistencia. El desconocido se alejó con el médico en el automóvil de éste.

Una partida de rescate encontró el cadáver de Kessinger, el rehén. Acribillado a tiros, lo habían dejado en una choza abandonada. Al doctor Weininger lo encontraron muerto en un zanjón, cerca de su automóvil destrozado. Evidentemente, tras sacarlo de su casa para curar al delincuente herido en el asalto, lo habían asesinado.

Un experto en impresiones digitales, R. S. Terwilliger, del Departamento de Policía de Garden City, Kansas, inspeccionó cuidadosamente el maltrecho automóvil del médico en busca de alguna huella dactilar. La tentativa parecía de antemano condenada al fracaso, porque según todos los indicios los asesinos habían limpiado dichos rastros con un trapo húmedo.

Terwilliger examinó el automóvil pulgada por pulgada. Hasta que al fin encontró lo que buscaba: una impresión digital fragmentaria, latente en el cristal de la portezuela trasera derecha. Retiró el cristal y lo llevó a Garden City, para «levantar» el rastro.

Dos meses más tarde, la División de Identificación del F. B. I. recibió fotos ampliadas del rastro aislado y fragmentario. Los archivos de la División están clasificados por el sistema decadactilar; habría sido tarea imposible cotejar dos millones de fichas, existentes entonces, con el rastro único descubierto. Los expertos en dactiloscopia del F. B. I. llevaron el problema a Hoover.

—Es una remota posibilidad —dijo finalmente Hoover—, pero quiero que ustedes memoricen ese rastro. Grábenlo en su memoria, puede que algún día vuelvan a tropezar con él. Sé que es improbable, pero no hay otra alternativa.

En los meses subsiguientes, cuatro hombres fueron arrestados y acusados de los asesinatos. Sesenta vecinos de Lamar se presentaron a identificar a los sospechosos como los asesinos. Pero algunos funcionarios no estaban tan seguros de su culpabilidad, y el proceso se postergaba.

Había transcurrido más de un año, cuando el experto en dactiloscopia del F. B. I., Albert B. Ground (ahora jubilado), estaba un día ante su escritorio de la División de Identificación, realizando un cotejo de rutina sobre una ficha que acababa de recibir. Esta ficha procedía del «sheriff» de

Stockton, California, y estaba extendida a nombre de William Harrison Holden, arrestado como sospechoso de asalto a un tren. Pero revisando los archivos se había descubierto que las impresiones digitales de Holden coincidían con las de un tal Jake Fleagle. Fleagle había ingresado en 1916 en la penitenciaría del Estado de Oklahoma, para cumplir una sentencia de un año por robo.

Ground verificó la identificación y puso la ficha a un lado. Pero entonces algo, como una pequeña campana de alarma, resonó profundamente en su memoria. Recogió de nuevo la ficha y comenzó a estudiarla. El rastro del índice derecho le resultaba vagamente familiar. ¿Dónde lo había visto antes?

Como un cartógrafo que estudia un fragmento de costa arrancado de un mapa y busca en la memoria su exacta ubicación geográfica, Ground trató de dar con el rastro. Acudió siete veces al archivo. Fueron otros tantos fracasos. Y de pronto recordó. ¡La huella parcial levantada en ocasión de los crímenes de Colorado y Kansas! Corrió otra vez al archivo, cotejó la ficha con el rastro aislado... ¡Ahí estaba! El rastro pertenecía a Jake Fleagle, alias «William Harrison Holden».

En aquella época, asaltar un banco nacional no era delito penado por las leyes federales. El caso competía a las autoridades locales de Colorado y California, que fueron notificadas del hallazgo. Fleagle había sido puesto en libertad en Stockton, antes que su ficha llegara al Servicio. Pero ya la justicia le seguía el rastro.

El resultado fue que los cuatro asaltantes de Lamar fueron identificados, y uno confesó. Jack Fleagle murió en un tiroteo con oficiales de policía, y sus tres cómplices fueron ahorcados. Los cuatro inocentes quedaron en libertad.

Este ejemplo de cooperación entre policía local y federal se hizo tan corriente que llegó a considerarse cosa de rutina. La lucha para llegar a semejantes resultados, sin embargo, había sido larga y a menudo difícil. Y como en el cuento de Mark Twain, todo había girado en torno a la impresión dactilar, el «autógrafo natal» de «Pudd'nhead» Wilson.

Hace ya muchos siglos, los hombres advirtieron las diferencias entre los dibujos papilares. En la antigua China, la huella de un pulgar estampada en arcilla servía de sello identificador. Huellas semejantes aparecen en primitivos documentos jurídicos chinos y japoneses. Reyes y potentados orientales usaron las impresiones digitales como sellos. En un museo británico se conserva una tableta de arcilla donde se detallan las órdenes recibidas por un oficial de justicia babilonio, encargado de confiscar propiedades, efectuar arrestos y obtener las impresiones digitales de los acusados.

Quizá la primera aplicación práctica de las impresiones digitales en los Estados Unidos ocurrió en 1822, cuando un geólogo que trabajaba en Nuevo México estampó sus huellas papilares sobre sus órdenes y las atravesó con su firma, para evitar falsificaciones.

Sin embargo, el primer método de identificación criminal que se popularizó en Europa y en los Estados Unidos fue el creado hacia 1880 por un francés, Alphonse Bertillon. El sistema Bertillon se basaba en complejas mediciones corporales, como la longitud y ancho de la cabeza, longitud del pie izquierdo, brazo izquierdo, meñique izquierdo, etc. Estos datos se reunían en una ficha junto con la fotografía del sospechoso. El principio del sistema era que no existían dos personas del mismo aspecto y de iguales dimensiones físicas.

Pero el sistema Bertillon se vino abajo un día de 1903, en la Penitenciaría Federal de Leavenworth, Kansas, cuando un negro, Will West, compareció ante el jefe del fichero para ser medido y fotografiado.

—Te he visto antes —dijo el funcionario policial—. ¿No tenemos ya tus medidas?

—No, señor —dijo Will West—. Nunca he estado aquí.

El empleado midió al preso según el sistema Bertillon y registró su archivo. No tardó en encontrar una ficha a nombre de «William West». Las mediciones eran virtualmente idénticas a las que acababa de efectuar. El rostro de la fotografía parecía la imagen exacta del hombre parado ante él. Will West, según el testimonio de la foto y de las mediciones, era William West.

—Se parece a mí, sin duda —dijo Will West cuando le mostraron la foto—. Pero yo nunca he estado en esta cárcel.

En seguida se comprobó que Will West decía la verdad. Porque en ese mismo momento su doble, William West, estaba en otra celda de la misma penitenciaría de Leavenworth, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por asesinato.

El caso de Will West provocó en los Estados Unidos una corriente a favor de la dactiloscopia como procedimiento infalible de identificación criminal. Ya la policía inglesa, Scotland Yard, había reemplazado en 1902 el sistema Bertillon por la dactiloscopia, después que sir E. R. Henry elaboró un método para clasificar las impresiones digitales.

Ya en aquellos primeros tiempos la Asociación Internacional de Jefes de Policía (I. A. C. P., *International Association of Chiefs of Police*) había reconocido la necesidad de un organismo central que permitiera a las distintas policías cambiar informes sobre el delito y los delincuentes. La I. A. C. P. opinaba que esta tarea debía ser realizada por el Departamento de Justicia, pero el plan fue rechazado por el procu-

rador general Judson Harmon. En consecuencia, la I. A. C. P. decidió organizar su propio Servicio Nacional de Identificación Criminal. Primero tuvo su sede en Chicago; después se trasladó a Washington.

La dactiloscopia comenzó a ganar popularidad. El Estado de Nueva York la adoptó para el presidio de Sing Sing en 1903, y más tarde para los de Napanoch, Auburn y Clinton. La primera ciudad norteamericana que reemplazó el sistema Bertillon por la dactiloscopia fue St. Louis en 1904. Ese mismo año, el Departamento de Justicia autorizó al alcaide de Leavenworth, R. W. McClaughry, a «gastar una suma no superior a 60 dólares» para instalar el sistema.

En 1905 el Ejército comenzó a fichar por el método dactiloscópico a su oficialidad y personal de tropa. Más tarde lo imitaron la Armada y la Infantería de Marina. En el Departamento de Justicia se organizó un servicio dactiloscópico destinado a colaborar con institutos penales, pero dos años más tarde fue trasladado al presidio de Leavenworth, donde utilizando a los reclusos se efectuó la misma tarea en forma más económica.

Año tras año, la I. A. C. P. continuó su campaña en pro de un servicio de identificación centralizado que sirviera a todos los órganos de policía: federales, estatales y comunales. Por otra parte, el trabajo realizado en Leavenworth provocaba descontento. Los archivos estaban en manos de presidiarios, y se decía que fraguaban los datos de algunas fichas.

La I. A. C. P. recibió por fin el apoyo de la Comisión Especial de Aplicación de las Leyes, del Colegio de Abogados norteamericano, que en 1922 sugirió «establecer, bajo la fiscalización del Departamento de Justicia de Washington, un Servicio Federal de Archivos y Estadísticas, con el fin de que las personas encargadas de hacer cumplir las leyes penales puedan obtener en el acto las impresiones digitales y otros datos de los malhechores... Sin un cabal conocimiento de la situación, será imposible diagnosticar o corregir eficazmente los problemas que nos presenta la delincuencia».

En noviembre de 1921 el procurador general Daugherty se reunió con representantes de la I. A. C. P., accediendo a crear una sección de identificaciones dentro del Servicio de Investigación e incorporar a la misma los archivos de la I. A. C. P. Con el apoyo de Daugherty y del Colegio de Abogados norteamericano, pareció que los jefes de policía llegaban al término de su larga lucha.

Pero entonces se produjo un intento de oposición, de fuente inesperada. El comisionado de Policía de Nueva York, R. E. Enright, obtuvo el apoyo de congresales neoyorquinos para un proyecto de ley que creaba un servicio nacional de iden-

tificación dependiente del Departamento del Interior. Enright era presidente de la Conferencia Internacional de Policía (I. P. C., *International Police Conference*), organizada por él en 1920.

Para la I. A. C. P., tanto Enright como su organización eran simples advenedizos que trataban de aprovechar el plan preconizado desde 1896 por la I. A. C. P. Pertenecían a la I. A. C. P. jefes de policía de cuarenta y siete Estados, que formaban una fuerte corriente favorable a la centralización de los archivos dactiloscópicos dentro del Servicio de Investigación. Ambos bandos llevaron sus puntos de vista al Congreso, presentando sendos proyectos de ley. El problema básico era si el organismo de inminente creación dependería del Departamento de Justicia o del Departamento del Interior.

Mientras arreciaban las discusiones, el procurador general Daugherty resolvió que tenía autoridad para decidir antes que se dictara la legislación correspondiente. En consecuencia, los archivos dactiloscópicos y Bertillon de la I. A. C. P. ingresaron en el Departamento de Justicia, y los ficheros de Leavenworth fueron transferidos a Washington. Pero entonces surgió otro obstáculo. El contralor general de los Estados Unidos se negó a aprobar las cuentas de gastos de este servicio, porque el Congreso no había autorizado específicamente tales inversiones.

Y así fue como durante ocho meses el sistema de identificación criminal del país estuvo paralizado por falta de fondos.

Cuando J. Edgar Hoover se hizo cargo del F. B. I. el 10 de mayo de 1924, la situación era caótica. Había que hacer algo para poner en marcha nuevamente un sistema de identificaciones. Unas 800.000 fichas dactiloscópicas estaban apiladas en depósito, junto con 200.000 fichas Bertillon. Algunas dependencias policiales, exasperadas, aconsejaron mandar todo de nuevo al presidio de Leavenworth. El trabajo de los reclusos estaba expuesto a toda clase de suspicacias; pero, argumentaban algunos, la inactividad total era aún peor.

Hoover abordó el problema. Contaba con el apoyo del procurador general Stone, y en el Congreso, con el firme sostén de los representantes William B. Oliver, de Alabama, y Carl Hayden, de Arizona, más tarde senador, que había sido «sheriff» y conocía por experiencia la necesidad de un organismo centralizado de identificación criminal.

El 1º de julio el Congreso autorizó los gastos necesarios —56.320 dólares— y sesenta días más tarde el servicio estaba nuevamente funcionando. El comisionado Enright prosiguió su lucha hasta 1925, año en que quedó cesante al pro-

ducirse una renovación de autoridades en la ciudad de Nueva York. En junio de 1930 el Congreso resolvió definitivamente la dependencia del servicio, al crear por ley, con carácter permanente, una División de Identificación e Información, dentro del F. B. I., que debía registrar las impresiones digitales, no sólo de malhechores, sino también del público en general.

Las tareas de identificación se intensificaron con ritmo acelerado. El número de dependencias policiales que cooperan en este programa ascendió de 987 en 1924 a 4.712 en 1933; en 1956 había llegado a más de 12.000. Mediante acuerdos con las policías europeas, Hoover dio a su programa alcances internacionales.

Una valiosa contribución a la lucha científica contra el crimen fue la creación, en 1931, de un archivo monodactilar donde se clasificaron individualmente las impresiones digitales de los delincuentes más peligrosos del país. El fin de esta sección, dirigida por expertos, es levantar huellas latentes (papilares completas o parciales, palmares y hasta plantares) que aparezcan en el escenario de un crimen o sobre un objeto utilizado en un crimen. Rastros casi invisibles sobre un vidrio, un picaporte, una mesa o cualquier superficie lisa se descubren al ser rociados con un polvo especial. Después se «levantan» esos rastros mediante una especie de tela adhesiva. El polvo se adhiere a la tela y reproduce las diminutas crestas de la piel. Entonces esa huella puede ser fotografiada (1).

Los archivos del F. B. I. comenzaron a crecer desmesuradamente en el año fiscal 1933, cuando la Comisión de Servicio Civil entregó más de 140.000 fichas de empleados y aspirantes a empleados del gobierno. Por aquella época, Hoover creó una Sección de Identificación Civil para el manejo de esa documentación, que se mantuvo separada de los archivos criminales.

El F. B. I. alentó a los ciudadanos en general a registrar sus impresiones digitales, como medida de protección contra el fraude, la pérdida de la memoria o la pérdida de la propia identidad a consecuencia de un accidente mutilante. Entidades civiles y comerciales organizaron campañas en favor del sistema dactiloscópico, combatiendo el prejuicio de que sólo los delincuentes debían fichar sus impresiones dactilares.

Unos pocos entusiastas de la dactiloscopia abogaron por el registro compulsivo de todos los habitantes de los Estados

(1) Entre 1933 y mediados de 1956, expertos de la sección de impresiones digitales latentes prestaron testimonio en 642 juicios, de los que resultaron 31 sentencias de muerte, 41 condenas a perpetuidad, un total de 2.494 años de cárcel y multas por valor aproximado de 100.000 dólares.

Unidos, criminales o personas honestas, y con el transcurso de los años fue ganando apoyo la idea de un gran archivo nacional de impresiones digitales. Pero también hubo quienes pretendieron ver en el programa de registro dactiloscópico voluntario una sutil maniobra de Hoover para conducir el país a la regimentación y la supresión de los derechos civiles.

Uno de los ataques más violentos se produjo en 1938. Asumió la forma de un libelo (1) titulado «¡Pulgares abajo!» (*Thumbs Down!*), que condenaba el programa de identificación dactiloscópica voluntaria del F. B. I. como «parte de un plan general para regimentar compulsivamente a toda la población», agregando que «en cuanto tal, debe ser rechazado».

Otros pasajes del panfleto decían:

Si los defensores del registro dactiloscópico hubieran sido más astutos en sus movimientos iniciales, probablemente habrían logrado imponer al país medidas drásticas, retaceando las libertades civiles. Sus tentativas, sin embargo, fueron groseras, esporádicas y descentralizadas. Hasta la aparición de J. Edgar Hoover.

Dirigiendo personalmente la campaña, Hoover le infundió un nuevo y siniestro ímpetu... El creó toda una estrategia nueva... de registro dactiloscópico «voluntario»... que constituye un paso avanzado y eficaz hacia la total regimentación del pueblo.

Un año más tarde se produjo otra ola de protestas, cuando el coronel Brehon Somervell, administrador de la W. P. A. (*Works Progress Administration*) de la comuna de Nueva York ordenó sacar impresiones digitales a su personal de maestros, guardianes y otros. Somervell sostuvo que aquellos empleados que tenían que trabajar con niños, o proteger la propiedad, debían carecer de antecedentes policiales, y que para comprobarlo era preciso examinar su prontuario.

A pesar de las protestas, el programa de identificación dactiloscópica se llevó a cabo, y en un plazo de dos años el F. B. I. cotejó con sus archivos un total de 46.663 fichas de la W. P. A. El resultado: 4.205 de esas personas tenían antecedentes en los archivos criminales del F. B. I.; y entre ellas, 2.506 estaban prontuarias por delitos graves. Entre los aspirantes a cargos de cuidadores o celadores de niños había alrededor de 50 con antecedentes de perversiones sexuales.

La División de Identificación del F. B. I. se fue convirtiendo en uno de los más vigorosos factores de colaboración entre los diversos organismos policiales, y también en fuerza poderosa de la lucha contra el crimen. Pero su influjo no

(1) Libelo preparado por Maxwell Lehman para ser distribuido por la Unión de Libertades Civiles Americanas.

terminó ahí: en un número asombroso de casos debió salir en defensa de los derechos civiles amenazados.

Algo de esto ocurrió en torno a John Stoppelli, alias «El Escarabajo» (*The Bug*), notorio traficante de drogas. «El Escarabajo» fue condenado por contrabando de narcóticos en San Francisco en 1949. Un presunto experto en impresiones digitales declaró que una huella parcial en un sobre que contenía heroína coincidía con una impresión dactilar de Stoppelli.

El abogado de Stoppelli creyó que «El Escarabajo» decía la verdad al negar su culpa. Y protestó con tanta insistencia que al fin se solicitaron los buenos oficios del F. B. I. para que cotejase el rastro del sobre con las impresiones papilares de Stoppelli. El F. B. I. informó que la huella del sobre no pertenecía a Stoppelli.

Un funcionario declaró en aquella oportunidad:

—Por ruin que sea un hombre, sus derechos civiles deben ser respetados. Por eso hemos elevado el informe del F. B. I. al fiscal nacional en San Francisco.

El resultado fue que el presidente Truman conmutó la sentencia de Stoppelli.

Al principio, el F. B. I. debió llevar una lucha sin cuartel contra los explotadores inescrupulosos de la dactiloscopia, resolviendo casos que iban desde la «falsificación» de impresiones digitales hasta el falso testimonio de «expertos». Al sospecharse cualquier manipulación extraña con huellas papilares, el F. B. I. investigaba. Y en adelante negaba toda colaboración al culpable, y notificaba a sus superiores, si se trataba de algún funcionario del gobierno. Con el tiempo, tales prácticas se volvieron raras.

En un caso ocurrido en 1937, el F. B. I. recibió una carta de Tennessee, incluyendo la foto de lo que pretendía ser una impresión digital latente. En el mismo sobre venían las huellas digitales de un sospechoso. Los expertos del F. B. I. descubrieron el fraude. El presunto rastro latente, que correspondía a un dedo medio derecho, era en realidad una foto de la huella papilar impresa en tinta sobre la ficha dactiloscópica del sospechoso. En otros términos: algún funcionario de la policía de Tennessee había fotografiado una de las impresiones de la ficha dactiloscópica del propio sospechoso, y pretendía hacerla pasar como un rastro «levantado» en el escenario de un crimen. El fin perseguido era que el F. B. I. declarase la culpabilidad de un inocente.

La identificación dactiloscópica es un drama de innumerables episodios. Cada caso tiene su pequeña, o grande, historia. He aquí algunos ejemplos:

En 1944, durante la segunda guerra mundial, apareció en

la costa, ocho kilómetros al norte de Bari (Italia), el cadáver de un hombre. Carecía de documentos de identidad. El ejército norteamericano remitió sus impresiones digitales al F. B. I. Fue identificado como un marinero de origen británico, que varios meses antes se había registrado como extranjero en la ciudad de Nueva York. La explicación era sencilla: acababa de perecer en el naufragio de su buque.

El 12 de marzo de 1956 una mujer entró en una comisaría de South Bend, Indiana. Había olvidado su nombre, su pasado y cualquier otro dato que pudiera servir de clave para establecer su identidad. Era una víctima de la amnesia, perdida en un mundo que súbitamente se había convertido en un lugar inhóspito y sin amigos.

La policía de South Bend envió sus huellas digitales al F. B. I. Concordaban con las de una mujer que había llenado su ficha dactiloscópica al solicitar un empleo durante la segunda guerra mundial en Mishakawa, Indiana.

Merced a esa identificación, la mujer recuperó el mundo que había perdido.

En julio de 1948, Hoover recibió una carta en que un hombre de Wisconsin solicitaba su ayuda para localizar a un hermano a quien no había visto en treinta y tres años. El registro de los archivos de identificación personal permitió localizar la ficha dactiloscópica de un hombre que oportunamente había solicitado trabajo en una fábrica de material bélico. La ficha incluía sus señas en Milford, Connecticut, que fueron enviadas al hombre de Wisconsin. Poco más tarde llegó una carta de éste: «Ensayé una llamada telefónica de larga distancia al número señalado... Atendió mi propio hermano. Era la primera vez, en treinta y tres años, que escuchaba su voz... Ustedes han hecho más por mí, en un solo día, que lo que pude yo lograr en años de averiguaciones, siguiendo pistas que nunca conducían a ninguna parte».

En 1948, un hombre solicitó empleo como subjefe de contaduría en la Comisión de Energía Atómica. Los antecedentes que mencionaba era notables. Pero su ficha dactiloscópica permitió descubrir su frondoso prontuario policial, que incluía varias condenas por robo y tentativa de robo. La solicitud fue rechazada.

El 29 de octubre de 1943, la policía de Miami Beach remitió al F. B. I. las impresiones digitales de una mano derecha encontrada en el estómago de un tiburón capturado en la zona. Se cotejaron esas huellas con las del personal de dos buques tanques hundidos frente a Florida. Así se comprobó que pertenecían a un joven tejano alistado en la Reserva Naval de los Estados Unidos. Su buque había zozobrado, causando varias víctimas.

Pero casos como éstos son innumerables, y día a día se producen otros nuevos. En 1955, más de 13.600 fugitivos de la justicia fueron identificados por sus impresiones digitales. Las puertas de la División de Investigación nunca están cerradas. Se trabaja día y noche. Cuando la policía necesita una identificación con suma urgencia, utiliza un aparato llamado «Velofoto Transceptor» (*Speedphoto Transceiver*), que permite transmitir al Servicio la imagen de las impresiones digitales de la misma manera que los servicios noticiosos transmiten telefotos a los diarios. En pocos minutos, el F. B. I. está en condiciones de suministrar fotos y copias de las fichas dactiloscópicas correspondientes.

A mediados de 1956, el F. B. I. tenía archivadas 141.231.773 impresiones digitales; entre ellas, 29.215.596 (correspondientes a 11.336.712 personas) en el archivo de delincuentes. En la sección de identificación civil había 112.016.177 fichas correspondientes a 60.753.062 personas. Una de ellas, particularmente interesante, tiene esta clasificación:

15 M 9 R 000 18
L 19 W 000

Es la ficha dactiloscópica del presidente Eisenhower.

XVI. - EL LABORATORIO DEL F. B. I.

El jefe de policía de la localidad de Nome, en Alaska, tenía entre sus manos un enigma criminal. Las cosas ocurrieron así:

A mediados de marzo de 1936 un temporal azotó el Norte. Helados vientos barrieron montañas y llanuras de Alaska, obligando a hombres y animales a buscar refugio. Y así fue como John Nilima, veterano cateador y comerciante, se retiró a su cabaña de troncos, en una zona remota llamada Old Buckland Village. La cabaña de Nilima le servía al mismo tiempo de vivienda y almacén donde negociaba con los esquimales, comprándoles pieles; y era su base de operaciones cuando salía a buscar oro por cerros y cañadas.

En plena tormenta, un hombre llegó a la choza. A través de una ventana espía a Nilima, que estaba sentado en su catre. El hombre alzó un fusil, apuntó cuidadosamente y mató a Nilima de un balazo en la cabeza. Rápidamente abrió la puerta y entró. Examinó a Nilima para comprobar que estaba muerto. Se apoderó del cofre donde el comerciante

guardaba el dinero y escapó, desapareciendo al abrigo de la tormenta. La nieve no tardó en cubrir sus pisadas.

Cuando los pobladores de la zona encontraron el cadáver, hicieron la denuncia al «marshall» (jefe de policía) de Nome, que registró la cabaña, pero no halló más indicio que el proyectil homicida, que después de atravesar la cabeza de Nilima se había incrustado en un tronco.

En los días siguientes el funcionario policial detuvo a dos sospechosos. El primero era un ex presidiario, enemigo reconocido de Nilima, que en cierta oportunidad había amenazado matar al comerciante, tras una disputa en torno a la propiedad de un yacimiento. El «marshall» observó que tenía en las medias manchas que parecían de sangre seca.

—¿Eso es sangre? — le preguntó.

—Sí —repuso el ex presidiario—. Maté un reno, y mientras lo arrastraba a casa, me manché las medias con sangre.

El policía buscó el cadáver del reno, pero no pudo encontrarlo en la nieve.

—Tal vez se lo llevaron los lobos — dijo el ex presidiario.

El policía se encogió de hombros. Revisó el fusil calibre 30 del sospechoso. Alguien había hecho fuego con él en época reciente, sin limpiarlo después. A pesar de sus protestas de inocencia, el hombre estaba en situación comprometida.

El «marshall» sabía que el F. B. I. contaba con un laboratorio en Washington, donde se examinaban por medios científicos los indicios materiales de cualquier delito. El no estaba muy acostumbrado a esas cosas, pero valía la pena probar... Cuidadosamente hizo un paquete con el fusil del ex presidiario, las medias manchadas de sangre y la bala mortal. Despachó todo al F. B. I.

El segundo sospechoso era un joven esquimal que había gastado más dinero de lo habitual en una factoría próxima a su aldea. Más tarde lo capturaron en una huella que iba al nordeste. Parecía huir... Pero él también insistió en que era inocente, y se negó con tenacidad a revelar el origen de su dinero. El policía secuestró el fusil calibre 35 del esquimal y lo mandó igualmente al F. B. I. Después aguardó la respuesta.

El laboratorio tenía menos de cuatro años de existencia. Fueron sus mismos creadores los encargados de investigar aquellos indicios materiales. Analizaron las medias del ex presidiario y examinaron los fusiles y la bala. Las manchas no eran de sangre humana. Y el experto en balística determinó que el fusil calibre 30 no había disparado la bala homicida. Ambos informes eran negativos, pero corroboraban las afirmaciones del ex presidiario.

A continuación, con el fusil del esquimal se efectuó un

disparo de prueba contra una caja llena de algodón. La bala fue recuperada y puesta bajo un microscopio junto al proyectil mortífero. Después se los hizo girar lentamente hasta que el ojo del experto observó que las estrías de ambos concordaban perfectamente.

No hay dos cañones de armas de fuego que sean idénticos en su interior. El metal de cada uno tiene sus propias menudas imperfecciones que dejan sus huellas en los proyectiles disparados a través de él. Puede decirse que esas huellas son el «autógrafo personal» de cada arma de fuego.

Cuando los expertos descubrieron las mismas crestas y estrías en ambas balas, dictaminaron que la causante de la muerte de John Nilima sólo podía haber sido disparada por uno de los fusiles: el del esquimal.

El ex presidiario salió en libertad. El esquimal, atrapado por métodos de policía científica que ahora se consideran rutinarios, se confesó autor del crimen y fue sentenciado a veinte años de cárcel.

En el transcurso de un cuarto de siglo, los métodos científicos utilizados por el F. B. I. en la lucha contra la delincuencia y la subversión se han tornado cada vez más complejos y más eficaces. Desde aquella lejana época del asesinato de John Nilima, las aplicaciones de la química, la física, la metalurgia, la electrónica y otras ramas de la técnica y la ciencia han crecido hasta trascender, en parte, el conocimiento público.

No todos saben, por ejemplo, que una pizca de barro del tamaño de una cabeza de alfiler, adherida al zapato de un hombre, puede bastar para identificarlo como saboteador, espía o asesino. Son ya numerosos los casos en que expertos del F. B. I., utilizando partículas de tierra extraídas del calzado o la vestimenta de un sospechoso, han podido demostrar su presencia en el escenario de un delito.

El procedimiento típico para tales investigaciones es el que sigue. La mota de tierra procedente del zapato de un sospechoso y otra sacada del escenario del delito se colocan en hornos gemelos. A medida que sube la temperatura en dichos hornos, ambas muestras experimentan ciertos cambios físicos mensurables que se registran automáticamente en un gráfico. Si los gráficos coinciden, ello significa que las muestras han experimentado simultáneamente idénticas variaciones a la misma temperatura. Y esa identidad prueba que ambas partículas tienen la misma composición mineral y por lo tanto proceden del mismo sitio.

En más de una oportunidad, el laboratorio del F. B. I. ha prestado su colaboración a las fuerzas armadas. Tomemos, por ejemplo, el caso de aquel piloto de prueba de la Armada

que subió a un aparato de extraño aspecto y fue proyectado a la estratosfera. El aerodinámico proyectil era un caza a chorro en su etapa de ensayo. Debía ser probado de cien maneras diferentes antes de encarar su producción en serie.

Tan rápido era este avión que, cuando su piloto lo condujo a las heladas y tenues capas del espacio superior, hizo saltar todos los «records» de velocidad existentes hasta entonces. Entretanto, sensibles instrumentos registraban automáticamente presiones, temperaturas, velocidades y muchos otros datos vitales para retener la supremacía de la aviación naval norteamericana.

Hasta que de pronto algo falló... La máquina pareció enloquecer en ese enloquecido mundo que está más allá de la barrera del sonido, donde, según cuentan los pilotos, hay fuerzas capaces de sacudir y zarandear un avión con potencia diabólica. La voz del piloto llegó nítida a quienes escuchaban por radio:

—¡Tengo que saltar!

Después las palabras se fundieron en una masa incoherente de sonidos. Y luego, silencio.

Las patrullas de rescate encontraron fragmentos del avión y de su tripulante. Pero nadie pudo descifrar las últimas palabras del aviador mientras la máquina se precipitaba aullando a tierra. Y esas palabras pronunciadas en la cabina del aparato eran importantes. Cualquier indicio que enerraran podía resultar de inapreciable valor.

Por fin, la grabación fue remitida al laboratorio del F. B. I. Los expertos comenzaron a trabajar en ella. En primer término, prepararon una copia exacta del alambre grabado, para preservar el original y determinar la velocidad justa a que se había efectuado la grabación original.

Todas las palabras del piloto eran comprensibles hasta aquel momento en que, evidentemente, la máquina había encontrado dificultades imprevistas. Pero, a partir de ahí, el mensaje final era un parloteo sin sentido alguno.

Uno de los expertos que ayudaron a resolver el misterio explicó más tarde, con estas palabras, la tarea realizada:

Encontramos un nivel de sonido extremadamente alto en el fondo de la voz del piloto. Supusimos que era el silbido provocado por la «picada» de la máquina. Tras una serie de ensayos, logramos filtrar las frecuencias de sonido situadas por encima y por debajo de las frecuencias normales de la voz, y al mismo tiempo amplificar esas frecuencias de la voz humana.

De este modo adelantamos grandemente, pero las palabras del piloto aún resultaban ininteligibles. Ensayamos otro recurso. Vertimos la grabación mejorada (en alambre) a un disco, y así pudimos modificar la velocidad a gusto.

Ustedes probablemente habrán observado que al reducir la velocidad de un disco fonográfico baja el tono de la voz o la música. En cambio, si se aumenta demasiado la velocidad, se obtiene un tono agudo, chillón. En ambos casos se produce una distorsión de sonido.

Nuestro problema era encontrar el tono adecuado. Pensamos que, si lográbamos esto, quizá las palabras del piloto se volverían comprensibles.

Utilizamos un instrumento llamado «Sono-Tensor» (*Sona-Stretcher*), que nos permitió aumentar o reducir la velocidad sin alterar el tono. Así pudimos lograr que la voz hablara más lento, pero en el mismo tono. Sabíamos que nos estábamos acercando, pero la voz del piloto aún no resultaba lo bastante clara.

Entonces comenzamos a variar la velocidad durante la transmisión misma. Es decir, empezamos a aumentar y disminuir la velocidad mientras giraba el disco. Esa fue la solución, y por fin logramos reproducir la voz del piloto.

Una ola de excitación recorrió el laboratorio cuando los técnicos pusieron en marcha la grabación definitiva. La voz del piloto, filtrada a través de todos los ruidos de una máquina que se precipita a tierra, clamaba:

—No puedo... salir... de la cabina... ¡No puedo salir!

Estas fueron las últimas palabras de un valeroso piloto naval que a la velocidad del rayo se encaminaba a la muerte. Pero esas pocas, terribles palabras suministraron un indicio que permitió descubrir una falla en el modelo ensayado, y de ese modo resguardar la vida de otros hombres.

El laboratorio del F. B. I. ha encontrado la manera de utilizar la energía atómica en la lucha contra el delito. El primer indicio de que el átomo se incorporaba al arsenal policial lo dio Lewis L. Strauss, presidente de la Comisión de Energía Atómica, al declarar ante los egresados de la Academia Nacional del F. B. I. en noviembre de 1954: «Algunos isótopos radiactivos y partículas subatómicas que hace pocos años la ciencia ni siquiera conocía, se utilizan ya para hacer más eficaz el trabajo del Servicio».

Durante la segunda guerra mundial se confió al laboratorio del F. B. I. la tarea de realizar minuciosas inspecciones técnicas de materiales pesados de guerra, desde redes anti-submarinas hasta torrecillas blindadas de tanques. Ciertas fallas de construcción dieron origen a sospechas de sabotaje, que el F. B. I. debió investigar. Tales inspecciones se efectuaron utilizando los rayos gamma del radio, capaces de perforar gruesos metales y «fotografiar» sobre una película las fallas internas de los mismos.

El empleo del radio se tornó anticuado cuando los reactores nucleares comenzaron a producir isótopos radiactivos. Estos isótopos eran verdaderos instrumentos de trabajo cu-

yas características podían adaptarse a las necesidades específicas del F. B. I. Los más variados objetos, desde billetes de banco hasta muestras de gasolina, podían ser «sensibilizados» mediante los isótopos, y luego identificados infaliblemente. Pero el laboratorio encontró otros procedimientos más simples, e igualmente eficaces, para marcar dichos objetos y proceder a su ulterior identificación.

El F. B. I. cuenta con su propia red de comunicaciones, de escala nacional. De ahí que no exista en el mundo entero un organismo dotado de mayor movilidad en la lucha contra el crimen. Gran parte de los equipos han sido diseñados y contruidos por los propios expertos del F. B. I. que los adaptan a las necesidades especiales del Servicio.

Además de los circuitos telefónicos y de teletipos, la red radial del F. B. I. enlaza las 52 delegaciones regionales, que a su vez tienen comunicación directa con la sede central en Washington. Cada delegación es como el cubo de una rueda que irradia sus comunicaciones en los cuatro puntos cardinales a los automóviles patrulleros, y aun a agentes de a pie provistos de diminutos receptores portátiles. Los radiorreceptores de los automóviles tienen longitudes de onda preestablecidas, de suerte que pueden comunicarse con la delegación más próxima, y luego, haciendo girar un conmutador, ponerse en contacto directo con otros agentes. Aun sin verse, los hombres del F. B. I. han aprendido a trabajar como un equipo bien organizado.

Este sistema permite ahorrar tiempo y energías. Puede darse el caso de que un agente que vigila a un sospechoso lo siga hasta un edificio que tenga, digamos, diez vías de acceso. Si no existiera la intercomunicación, harían falta diez agentes para cubrir otras tantas salidas. En cambio, por medio de la radio, un agente situado dentro del edificio puede alertar a dos o tres que están afuera, cuando el sospechoso se dirige a una salida determinada. Y entonces es posible proseguir la vigilancia sin interrupción.

—Nuestro problema —ha dicho uno de los ingenieros del laboratorio— consiste en derrotar al delincuente desde el punto de vista de la movilidad. Y lo estamos consiguiendo.

El sistema de radiocomunicaciones del F. B. I. fue ideado por el director Hoover cuando los bombarderos alemanes atacaban salvajemente las ciudades inglesas, en el transcurso de la llamada «Batalla de Gran Bretaña». Los informes de los servicios de inteligencia revelaban que uno de los problemas más críticos que se planteaba a los ingleses era el de las comunicaciones cuando las bombas destrozaban las líneas terrestres y bloqueaban el tráfico telefónico y telegráfico.

Hoover discutió el caso con algunos de sus ayudantes.

—Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos —declaró Hoover—. Nuestras propias costas pueden ser bombardeadas, y entonces las comunicaciones estarán en peligro. No podemos quedar inmovilizados en una emergencia.

En las ciudades costeras se instalaron entonces estaciones de radio con equipos motores de emergencia. En lugares estratégicos del interior —sobre una colina, un tanque de agua o un hangar de aviación— se montaron estaciones retransmisoras y repetidoras automáticas para recoger las transmisiones de los agentes y ampliar el radio de las comunicaciones. Gracias a estas medidas previsoras, el sistema radial del F. B. I. estaba en pleno funcionamiento el 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron a Pearl Harbor. Su papel fue importantísimo durante la segunda guerra mundial.

Los perfeccionamientos científicos de la lucha contra el crimen han surgido, en gran parte, de las necesidades del servicio cotidiano. Y cuando los expertos del laboratorio del F. B. I. se reúnen con el agente que trabaja en la calle, para discutir un problema, comprenden perfectamente qué es lo que éste les pide, porque ellos también son agentes. Y no es un simple título de cortesía que se les dispensa: el químico, el físico o el ingeniero electrónico, todos han seguido el mismo adiestramiento básico y han intervenido en la rutina práctica de la investigación.

El afán de perfeccionar los métodos existentes nunca se agota. Y a menudo se encuentra algún nuevo recurso, simple pero eficaz. Mencionaremos un ejemplo. Un criminal está acorralado, cercado por todas partes, sin posibilidad de escape. Si alguien pudiera decírselo, quizá se entregaría ahorrando muertes inútiles. Pero nadie puede acercarse lo bastante para hablarle, sin exponerse peligrosamente a sus balas... El caso se había presentado a muchos investigadores del F. B. I., que al fin lo plantearon al laboratorio. La solución fue un amplificador portátil, alimentado a batería, capaz de amplificar una voz y hacerla claramente audible a centenares de metros.

La aplicación de la ciencia a la lucha contra el delito por parte del F. B. I. no se desarrolló en un día. Hacia 1920, los organismos policiales norteamericanos en general hacían muy poco uso de métodos científicos. En algunos colegios y universidades se dictaban cursos de ciencias aplicadas a la criminalística, pero la policía en conjunto se mostraba escéptica con respecto al valor de los métodos científicos en la rutina cotidiana.

Casi todos los primitivos expertos eran calígrafos. A cambio de generosos honorarios, prestaban sus servicios ante los tribunales. A veces trabajaban para la defensa, otras para

la acusación. Por lo general, cada una de las partes se presentaba con sus propios expertos.

En los archivos del F. B. I., una de las primeras muestras de interés por el examen científico de las pruebas es una carta dictada por Hoover, en 1922, solicitando a sus agentes una nómina de peritos calígrafos dignos de confianza. El jefe de la delegación de Baltimore mencionó a un hombre «que me parece de confianza», y el de Nueva York nombró a dos. Las otras delegaciones del F. B. I. en el interior del país sólo aportaron los nombres de unas pocas personas consideradas competentes. En muchas zonas no había ninguno.

El interés por la policía científica aumentó en 1929. Ese año el F. B. I. comenzó a formar una biblioteca compuesta por libros y monografías sobre temas de investigación criminal, tales como el análisis de drogas y sangre y el examen de cabellos. Aunque parezca extraño, una matanza de elementos del hampa ocurrida en Chicago aguijoneó ese interés. Fue la llamada «Matanza de San Valentín».

Este asesinato en masa se produjo el 14 de febrero de 1929, día de San Valentín. Miembros de la pandilla de Al Capone, disfrazados de policías, acorralaron en un garage a siete personas, una de las cuales era al parecer el pistolero «Bugs» Moran. Colocaron a las víctimas contra la pared y las segaron con fuego de ametralladoras. La indagatoria estuvo a cargo de un jurado presidido por el «coroner». Uno de los miembros de ese jurado preguntó con qué fin se guardaban los proyectiles recogidos en el garage. La policía de Chicago explicó que los expertos en balística podían determinar cuáles eran las armas utilizadas para disparar esos proyectiles, aunque el Departamento de Policía de Chicago no tenía laboratorio capaz de realizar ese trabajo.

La explicación interesó particularmente a dos miembros del jurado: Walter E. Olson, fabricante de alfombras, y Burt A. Masee, gerente de una fábrica de jabones. Ambos eran hombres de fortuna, y decidieron financiar un laboratorio, dependiente de la Northwestern University, que sirviera a la policía de Chicago. Este fue el origen del laboratorio Criminológico de la Northwestern University.

Mientras se llevaba a cabo esa empresa, Hoover destacó a uno de sus hombres para que efectuase una gira a las universidades de todo el país y observara qué estaban haciendo dentro de ese campo. Al mismo tiempo, otros agentes estudiaban el funcionamiento de laboratorios privados que efectuaban pericias en casos criminales. Se realizaron consultas con expertos en microscopía, fotografía, patología, bacteriología y otras ramas de la ciencia.

Por fin, el 24 de noviembre de 1932, el F. B. I. inauguró

oficialmente su propio laboratorio⁽¹⁾, que contaba con un microscopio prestado, una lámpara de rayos ultravioleta, un dispositivo para examinar cañones de armas de fuego y otros aparatos. Ahora ese laboratorio vale millones de dólares y se ha convertido en un modelo en su género, que presta servicios gratuitos a todas las instituciones policiales norteamericanas⁽²⁾. El camino recorrido estuvo sembrado de dificultades. Desde el primer momento, los laboratorios privados que prestaban servicios a las policías locales protestaron que el F. B. I. les hacía una competencia desleal. Hoover replicó que el F. B. I. se limitaba a retribuir la ayuda que le prestaban dichas dependencias en otros campos. La verdad es que una de sus intenciones era eliminar al «experto» aficionado que intervenía en los juicios criminales y civiles⁽³⁾.

El F. B. I. ha procurado siempre que sus expertos hablen un lenguaje claro, sin las ampulósidades de la jerga científica, y que sean capaces de presentar sus conclusiones, ante un juez o un jurado, por medio de planos, fotografías u otros medios fácilmente interpretables y admisibles como probanzas⁽⁴⁾.

El laboratorio del F. B. I. se divide en numerosas secciones y unidades. Por ejemplo, la Sección de Física y Química consta de «unidades» que realizan análisis de sangre o tóxicos, fibras o cabellos, pericias balísticas, exámenes metalográficos, petrográficos y espectrofotométricos; la Sección Documentos investiga escrituras a mano o a máquina, falsificaciones, cheques fraudulentos, escrituras borradas, mensajes de extorsión, tintas, papeles, documentos quemados, etc.; la Sección Electrónica proyecta y crea nuevos equipos elec-

(1) Las pericias oficiales en el laboratorio del F. B. I. comenzaron en agosto de 1933. En los primeros once meses de funcionamiento activo, hasta el 30 de junio de 1934, se realizaron un total de 963 pericias. Durante el año fiscal 1956 el laboratorio examinó más de 140.000 elementos de prueba presentados por sus agentes o por policías locales.

(2) El agente Charles A. Appel (h.) ahora retirado, fue el pionero del laboratorio. No tardaron en acompañarlo Donald J. Parsons, actual director auxiliar a cargo del laboratorio del F. B. I.; Edmund P. Coffey, que dejó el Servicio en 1945; T. Frank Baughman, jubilado; Walter G. Blackburn, jubilado; Ivan W. Conrad; Fred M. Miller; George W. Dingle; Edwin R. Donaldson; Richard L. Millen; Ted D. Beach; y Robert F. Pfafman. Todos estos hombres tienen por lo menos un título universitario y algunos son doctores en química, física, ingeniería eléctrica, biología y otras especialidades físicas o biológicas. Actualmente el personal asciende a más de setenta agentes y noventa empleados.

(3) Las instalaciones del laboratorio del F. B. I. están disponibles para todas las dependencias federales, fiscales de la Nación, tribunales militares, etc., tanto para causas civiles como criminales, y para todas las policías oficiales en el orden estatal, condal y municipal en todo el territorio de los Estados Unidos. El laboratorio no cobra sus servicios ni el testimonio de sus expertos cuando comparecen como testigos en causas criminales.

(4) Los hombres de ciencia del laboratorio deben tener por lo menos un título emanado de universidad o colegio superior. Deben satisfacer los mismos requisitos físicos que los demás agentes, y sus antecedentes son investigados con la misma minuciosidad. Siguen los cursos regulares de adiestramiento, y después «en la calle» para familiarizarse por experiencia personal con los problemas de la investigación. Cuando se los destina al laboratorio, se les imparte adiestramiento intensivo en temas especializados.

trónicos y mantiene una red de radioemisoras para casos de emergencia.

Entre los elementos auxiliares de laboratorio, importantes para la lucha contra el crimen, se encuentran los «archivos de consulta», que incluyen copias fotográficas de cheques fraudados y cartas anónimas; muestras de escritura de casi todas las marcas de máquinas de escribir; pelos de animales, hasta los más raros; tacones de goma y rastros de cubiertas de automóvil; muestras de pinturas de automóvil, y unas 42.000 muestras de filigranas de papel. Día tras día, estos heterogéneos archivos suministran la clave que permite esclarecer un delito.

Por ejemplo, al experimentar con rayos X de cinco kilovoltios (los llamados rayos X blandos), los hombres de ciencia descubrieron que podían obtener nítidas imágenes radiográficas de filigranas ocultas por la escritura a mano o a máquina, o por otras marcas. Así se obtuvo un valioso criterio para establecer si una filigrana era auténtica o falsa.

A menudo, en el escenario de un crimen o sobre la persona de un sospechoso se encuentra alguna sustancia desconocida, tal como un tóxico, una droga o algún otro compuesto que puede ser importante para la solución de un problema. Entonces se apela nuevamente a la magia de los rayos X. Un estrecho haz de rayos X bombardea la sustancia y un contador Geiger registra la desviación, o difracción, de los rayos. Puesto que toda sustancia cristalina desvía esos rayos según ángulos específicos conocidos, puede identificarse el material sin destruirlo ni consumirlo en todo o en parte.

En lo que atañe al estudio del cabello humano, factor importante en muchas pesquisas, los científicos y técnicos del F. B. I. han realizado investigaciones profundas. El laboratorio del F. B. I. ha contribuido en forma decisiva al perfeccionamiento de esta rama criminalística. Actualmente es posible, mediante el examen de un cabello, determinar la raza de su dueño, calcular su edad y su sexo, establecer en qué forma fue cortado o separado el cabello, si es natural o teñido, ondeado natural o artificialmente, si ha sido o no quemado, y la parte del cuerpo de donde proviene. Con estos datos, el experto dictamina si dos cabellos proceden o no de una misma persona.

Separar al inocente del culpable es una de las funciones básicas —aunque no siempre reconocidas en todo su valor— del laboratorio del F. B. I.

En enero de 1952, por ejemplo, el F. B. I. pudo rectificar un grave error judicial. Un jurado declaró a Henry George Anderson culpable de falsificar un cheque por la suma de 93,80 dólares y lo sentenció a no menos de diez años de cárcel

en la penitenciaría del Estado de Minnesota. El testimonio decisivo contra Anderson provino de un titulado «perito» calígrafo que actuó por la parte acusadora.

Anderson insistió en negar su culpa, y finalmente se pidió al F. B. I. que examinara el cheque en cuestión. Los agentes del F. B. I. descubrieron que había sido firmado, no por Anderson, sino por George Lester Belew, un «artista» de la falsificación de cheques, algunas de cuyas obras maestras estaban archivadas en la Sección Documentos del laboratorio, y que más tarde integraría la lista de los diez hombres más buscados por el F. B. I.⁽¹⁾ El F. B. I. comunicó su hallazgo a las autoridades de Minnesota, y el 19 de julio de 1953 la Junta de Indultos y Libertades Condicionales de dicho Estado otorgó pleno indulto a Anderson.

Apenas pasa un día sin que el Laboratorio del F. B. I. expida un informe diciendo, poco más o menos: «Este proyectil no fue disparado por esta arma». Lo cual significa, en la mayoría de los casos, que alguien ha dejado de ser sospechoso, en la medida en que el dictamen negativo establece su inocencia.

La llamada evidencia circunstancial es a veces causante de trágicos errores. Citaremos un caso. La noche del 13 de febrero de 1950, la esposa de Robert F. Parks salió corriendo de su casa en Luray, Virginia, y llamó desesperadamente a la puerta de un vecino. Parecía histérica, al borde de un colapso nervioso. Explicó que alguien había herido de bala a su esposo. Pidió ayuda. Los vecinos llamaron a la policía.

Pocos minutos tardó la policía de Luray en llegar al escenario del hecho. Encontraron a Parks, capitán retirado del ejército, muerto en el dormitorio de la casa, que comunicaba con el comedor. Una bala le había perforado el brazo derecho y desgarrado el corazón, tras lo cual se había alojado en el flanco izquierdo del cuerpo. En el comedor, contra la pared más alejada del dormitorio, la policía encontró una pistola automática. Tenía una cápsula atascada.

No había deflagraciones de pólvora, y parecía evidente, por la trayectoria del proyectil, que Parks no podía haber empuñado él mismo el arma.

Cuando la señora Parks se tranquilizó lo suficiente para hablar, la interrogó la policía. Lo que les dijo, en resumen, fue esto:

(1) A partir de 1947, la Associated Press, la United Press y el International News Service comenzaron a distribuir notas periodísticas sobre los criminales «más importantes» buscados por el F. B. I. En 1950, el I. N. S. popularizó este programa con el título de «Los diez criminales más buscados», y el F. B. I. empezó a confeccionar una lista permanente para que fuese divulgada por los periódicos, las revistas, la radio y la televisión. Cuando uno de los prófugos era capturado, se reemplazaba su nombre por otro. De los 98 criminales incluidos hasta ahora en esa lista, 88 han sido capturados.

—Me hallaba en la cocina cuando escuché el balazo. Corrí al dormitorio y vi a Bob, parado. Me miró y me dijo: «Querida, se escapó un tiro». Y después cayó.

La policía averiguó que los esposos Parks solían tener violentas discusiones. Algunos testigos declararon que dos o tres semanas antes del hecho la señora Parks había telefoneado a San Francisco. La oyeron pedir a alguien un billete de ómnibus que le permitiera viajar a San Francisco. Toda la evidencia circunstancial incriminaba a la señora Parks. Fue arrestada y acusada de asesinato.

Pero la investigación continuó. Al tercer día, un policía observador notó que una rejilla de metal que cubría un radiador de calefacción sobre la puerta que separaba el dormitorio del comedor tenía una pequeña abolladura brillante. Algo había desprendido un fragmento de pintura parda. Los pesquisas se preguntaron si la abolladura podía haber sido causada por la pistola que encontraran en el piso del comedor. En la culata de la misma había vestigios de pintura parda. Resolvieron mandar todo —rejilla, pistola, proyectil y cargador— al laboratorio del F. B. I.

La pericia balística demostró que el proyectil había sido disparado por la pistola encontrada en el cargador. La pintura de la rejilla era similar en color y textura a la hallada en la pistola. Se estableció que ésta podía dispararse por su cuenta al caer sobre el percutor.

Las abolladuras de la rejilla habían sido causadas por la mira trasera y el percutor de la pistola. Haciendo coincidir estas partes del arma con las señales de la rejilla, la pistola quedaba apuntando hacia el lugar en que estaba parado Parks cuando cayó.

El esfuerzo combinado de la policía de Luray y el laboratorio del F. B. I. señaló la gran posibilidad de que Parks se hubiera matado accidentalmente. Los investigadores razonaron que Parks, en un acceso de cólera, había lanzado la pistola contra la rejilla; salió el disparo; el seguro se atascó en el choque con la rejilla, impidiendo la expulsión de la cápsula, y la pistola cayó al piso y patinó hacia el comedor. La acusación de asesinato contra la señora Parks fue levantada.

—En este trabajo, nunca se sabe lo que puede ocurrir —declara un laboratorista del F. B. I.—. Por eso me gusta. Todos los días hay un problema nuevo que resolver.

XVII. - LA ACADEMIA DEL F. B. I.

Si J. Edgar Hoover hubiera soñado alguna vez con dirigir un inmenso sistema de policía federal, encargado de custodiar las leyes en todas las ciudades y aldeas del país, tal objetivo pudo haberlo cumplido en los años inmediatamente posteriores a 1930.

Ese período fue una pesadilla en la historia del delito en los Estados Unidos. Una pesadilla en la que reinaba un ejército de delincuentes provistos de mejores armas, automóviles más rápidos, mayor autonomía de movimiento y mucha más influencia política que las policías locales, atacadas de pobreza crónica.

Fue en esa época cuando la opinión pública empezó a reclamar una policía nacional que reemplazara a las organizaciones locales. Se llegó a proponer que las policías locales, junto con todos los organismos de investigación, inclusive los servicios de inteligencia del Ejército y la Armada, se fundieran en una gigantesca fuerza policial dirigida por un solo jefe. También hubo quien exigió que el Ejército se lanzara a la lucha contra la delincuencia, como si los criminales fueran a ordenarse en regimientos y divisiones para ofrecer batalla a campo abierto...

En medio de este tumulto, Hoover defendió el principio de que la custodia de la ley, en una democracia, compete primariamente a las autoridades locales, y no al gobierno federal. El pensaba que la solución al problema de la delincuencia consistía en separar la tarea policial de la política, y en adiestrar científicamente a todas las fuerzas del orden.

Por aquella época, la mayor parte del personal policial no recibía adiestramiento alguno. Se les daba una chapa y una pistola y se los mandaba a la calle. Eran pocas las ciudades con programas de adiestramiento para los oficiales de policía. En general se pensaba que tal cosa no era necesaria.

Un jefe de policía al mando de una dependencia con más de cien hombres rechazó la idea de adiestramiento policial científico con este curioso comentario: «Lo único que un policía necesita saber son los diez mandamientos». El alcalde de una gran ciudad del Medio Oeste abrigaba una idea distinta sobre los requisitos para ser policía. Al presentar su jefe de policía a una asamblea de colegas de éste, declaró: «Sé que este hombre será un buen jefe, porque ha sido mi sastre durante veinte años. Sabe hacer buena ropa; será un buen jefe».

Una y otra vez —en cartas, artículos, discursos e informes— Hoover sostuvo que en una democracia la custodia de las leyes recae básicamente en las policías locales, y que era necesario mantener ese ordenamiento. En una carta dirigida en 1936 al diario *Daily Capital*, de Topeka, Kansas, afirmaba Hoover:

El Servicio Federal de Investigación cree que el secreto de la lucha contra la delincuencia reside, no en organizar una policía nacional, sino en la solidaridad y el esfuerzo combinado de todas las dependencias existentes. Este Servicio aboga por una estrecha cooperación, de suerte que cada organismo sea capaz de encarar sus propios problemas, pero que al mismo tiempo pueda en caso necesario aunar fuerzas con los demás y concentrar el ataque contra los elementos criminales del país...

En otra oportunidad expresó sus intenciones de este modo:

Quiero que nuestra actividad se convierta en una auténtica carrera, una profesión capaz de atraer a jóvenes decentes, honorables y respetables, que quieran hacer algo útil en su vida, y no, como ha sido a menudo, el receptáculo que usan los politiqueros para cumplir sus compromisos con sus partidarios.

Hoover discutió sus ideas con el procurador general Cummings. Ante la Conferencia Criminológica organizada por la procuración general en diciembre de 1934, presentaron una propuesta conjunta para la creación de una escuela de policía. Hoover informó a la asamblea:

La importancia de un adecuado adiestramiento ya ha sido demostrada en las escuelas donde este Servicio instruye a su personal... Con unos pocos reajustes, los institutos ya existentes podrían extender sus beneficios a todas las policías locales del país.

La asamblea recomendó fundar la escuela, y el 29 de julio de 1923 veintitrés oficiales de policía asistieron a la primera clase de un programa de estudios de doce semanas⁽¹⁾. Este

(1) Alumnos del primer curso de la Academia Nacional. En servicio activo: Ralph W. Alvis, alcalde de la penitenciaría del Estado de Ohio, Columbus, Ohio; Matthew J. Donohue, jefe del Departamento de Policía del condado de Bergen, Hackensack, Nueva Jersey; coronel Earl J. Henry, comisionado de la Policía del Estado de Pensilvania, Harrisburg, Pensilvania; Camille Marcel, capitán, del Departamento de Policía de Pittsfield, Massachusetts; Harry T. Riddell, capitán, del Departamento de Policía de Dallas, Texas; Clarence Smith, teniente, del Departamento de Policía de Stamford, Connecticut. Jubilados: William Adams, subjefe de policía, del Departamento de Policía de Cincinnati, Ohio; Claude Broom, inspector, del Departamento de Policía de Detroit, Michigan; Francis X. Latulipe, director, Servicio de Criminología, Departamento de Policía de San Francisco, California; Fred J. Manning, inspector, del Departamento de Policía de Miami, Florida; Leo J. Mulcahy, capitán, Policía del Estado, Hartford, Connecticut; C. W. Ray, capitán, Policía del Estado de West Virginia, Charleston, West Virginia; James B. Nolan, sexto comisionado delegado de Policía del Departamento de Policía de Nueva York. Dedicados a otras actividades: Charles R. Blake, teniente, Policía del Estado de Rhode Island, Providence, Rhode Island; L. E. Goodrich, investigador especial dependiente del gobernador de Florida, Tallahassee, Florida; Morgan J. Naught, detective, Departamento de Policía de Elizabeth, Nueva Jersey; Norman R. Purnell, superintendente, Policía

La Academia Nacional del F. B. I. ha sido quizá el más importante factor de acercamiento entre el Servicio y las policías locales. Los alumnos de la Academia traban relación con los agentes y llegan a un mejor conocimiento de sus respectivos problemas. Los instructores del F. B. I. han ido al fondo del asunto, al planear escuelas de instrucción destinadas a satisfacer las necesidades específicas de una zona o comunidad. La cooperación entre el F. B. I. y las policías locales se ha convertido en asunto tan rutinario y cotidiano que lo que puede sorprender es que falte dicha colaboración en algún caso particular.

Hoover ha establecido estas reglas básicas sobre cooperación:

El F. B. I. está dispuesto a cooperar con todos los organismos policiales. Las únicas excepciones se plantean en el trato con funcionarios corrompidos o influidos por políticos venales; o con quienes son incapaces de guardar un secreto y responder a la confianza que se les presta; o con aquellos que son tan incompetentes que colaborar con ellos equivale a poner en peligro nuestras finalidades.

La Academia Nacional del F. B. I. ha contribuido a destruir muchos factores de incomprensión. Los oficiales de otras organizaciones aprendieron a ver a los hombres del Servicio bajo un aspecto distinto, y a su vez los agentes del F. B. I. ampliaron su perspectiva al tener conocimiento directo de los problemas de sus colegas.

En cierta oportunidad llegó a la Academia un corpulento policía del interior que desde el primer instante se mantuvo alejado de todos, rehuyendo la compañía de los instructores y de los demás alumnos en las horas libres. Estaba excedido de peso cuando empezó el curso, pero luego fue perdiendo kilos a ritmo alarmante. Sin embargo, no se quejaba. A mediodía y al anochecer desaparecía. Se convirtió en el «lobo solitario» de la Academia.

Al terminar el curso, el «lobo solitario» se presentó en el despacho del director auxiliar del F. B. I. a cargo del adiestramiento. Durante unos segundos, estuvo haciendo girar el sombrero entre las manos. Después barbotó:

—Sé que usted y los demás me han tomado por un bicho raro, por mi forma de actuar. Quiero que sepan el motivo. Tuve que hipotecar mi casa para venir aquí y al mismo tiempo mantener a mi familia. Después que pagué el boleto del ferrocarril y aparté el dinero para el hotel, me quedaron 35 céntimos diarios para comida. No podía comer con los demás. Por eso he preferido andar solo, y por eso he perdido tantos kilos.

—Pero ¿por qué no me lo dijo? —preguntó el director del curso—. Podríamos haber buscado algún arreglo.

El oficial de policía se encogió de hombros.

—Orgullo, supongo. Creo que me daba vergüenza hablar de eso. Pero valía la pena y me siento orgulloso de lo que hice.

Estrechó la mano al director y se fue.

Este, naturalmente, es un aspecto de la vida del policía que el público rara vez advierte. Comentando el caso con un amigo, decía Hoover:

—He visto tantas de estas cosas que a veces me siento enfermo. La gente clama por una policía honesta, eficaz, inteligente, capaz de proteger a la sociedad contra los malhechores dentro del más escrupuloso respeto a las libertades civiles. Muy bien, pero cuando tienen que pagarle a un vigilante son capaces de ofrecerle 1.770 dólares al año, mientras que un mensajero al servicio del gobierno federal cobra un sueldo inicial de 2.960 dólares. En una ciudad del Este, un policía que recién empieza gana 3.725 dólares anuales; y un barrendero, 3.950 dólares. Es una vergüenza.

Hay lugares donde se paga bien a la policía, y lugares donde se le paga mal. Pero el problema práctico es siempre el mismo, y gira en torno a la mejor manera de proteger el orden y las leyes. Esta tarea requiere a veces el concurso de informantes confidenciales, práctica que ha sido objeto de reiterados ataques por parte de ciertos círculos, aunque esté desde hace mucho tiempo sancionada por la legislación y la jurisprudencia.

Utilizar informantes o delatores equivale, en términos bélicos, a tener espías en el campo enemigo. En la lucha contra el delito, el sistema de informantes es un servicio de inteligencia que opera en el hampa. Los informantes, en general, no pueden considerarse modelos de virtud, pero el hecho básico es que prestan a la represión del delito el mismo servicio que los agentes secretos del país cumplen en pro de la seguridad nacional. En ambos casos la función es la misma: obtener datos sobre las actividades de un enemigo.

Hoover ha expresado de este modo la posición del F. B. I. con respecto a los informantes: «El confidente es tan viejo como la humanidad y se utiliza como instrumento para establecer la verdad». Para Hoover, no hay mayor diferencia entre el empleo de informantes por parte del F. B. I. y el legítimo recurso a «fuentes confidenciales» que utilizan los periódicos para obtener noticias, las instituciones de crédito para establecer la solvencia de sus clientes o los patronos para elegir sus empleados.

La primitiva legislación inglesa otorgó reconocimiento legal al confidente pago, y ese reconocimiento se incorporó por primera vez a las leyes norteamericanas en 1789. Durante 1956, los informes suministrados al Servicio por confidentes permitieron arrestar a 1.211 malhechores y recuperar 149 automóviles. Información de la misma procedencia, transmitida a otras dependencias, se tradujo en el arresto de 790 personas. Se recuperó más de un millón y medio de dólares en bienes robados.

Una de las reglas básicas del F. B. I. en la investigación de casos criminales es la siguiente:

No es posible emprender acciones judiciales de ninguna especie sobre la sola base de información suministrada por confidentes. El éxito procesal depende enteramente de las pruebas aportadas por testigos capaces de comparecer ante los jueces.

Los datos de los informantes se utilizan como pistas, y por otra parte el Servicio investiga en forma permanente la veracidad de sus fuentes de información.

Otro motivo de furiosas polémicas ha sido el recurso a la interferencia telefónica (*wire tapping*) en la tarea policial. En los primeros tiempos de la gestión de Hoover, una de las reglas del Servicio era ésta: «La interferencia telefónica... no será tolerada por el Servicio».

Hoover consideraba el espionaje telefónico como el método preferido del haragán para obtener informes, y creía que su uso inmoderado era una rémora para «el desarrollo de una técnica de investigación ética, científica y correcta».

Aun después que la Suprema Corte aprobó, en 1928, el sistema de interferencia telefónica, dictaminando que las pruebas obtenidas por ese medio podían ser aceptadas por los tribunales federales, Hoover se atuvo a su reglamentación adversa a dicha práctica.

Sin embargo, en enero de 1931, el procurador general William D. Mitchell, al comparecer ante una comisión de la Cámara de Representantes norteamericana, explicó que, si bien el F. B. I. no permitía la interferencia telefónica, el Servicio de Prohibición, entonces dependiente del Departamento de Justicia, la estaba utilizando. «No podemos tener un servicio que permita la interferencia telefónica —dijo Mitchell— y otro que no la permita. Las mismas reglas deben aplicarse a todos».

Después de presentar su testimonio, Mitchell ordenó modificar la reglamentación del F. B. I., reemplazando el texto anterior por éste: «...no han de interferirse las comunicaciones telefónicas o telegráficas, sin previa autorización del director del Servicio».

A pesar de las nuevas instrucciones, Hoover no autorizó la interferencia telefónica hasta que se produjo, en 1932, la ola de secuestros, y aun entonces la mantuvo limitada a aquellos casos en que se consideraba una vida en peligro, o en que estaba comprometida la seguridad nacional.

A fines de 1939, la Suprema Corte revocó su fallo anterior, disponiendo que los jurados federales no podían admitir pruebas obtenidas merced al sistema de interferencia telefónica. Tal decisión se basó en la ley de comunicaciones federales de 1934, que prohibió la interceptación y divulgación de comunicaciones. El Departamento de Justicia informó a Hoover que el fallo judicial no afectaba las prácticas del F. B. I., porque la ilegalidad de la interferencia telefónica residía en la divulgación de los datos obtenidos, y no en la interceptación propiamente dicha.

Ante la insistencia de Hoover, en 1940 se colocó en manos del procurador general la facultad de autorizar la vigilancia telefónica. Tanto de las solicitudes como de las autorizaciones queda constancia escrita, para que en cualquier momento sea posible deslindar responsabilidades. A mediados de 1956, el F. B. I. tenía menos de 90 teléfonos vigilados. En todos estos casos estaba de por medio la seguridad nacional.

Sólo unas pocas personas, entre los 14.000 empleados del F. B. I., están al tanto de una interferencia telefónica determinada: acaso cinco o seis en la zona de operaciones, y otras tantas en la oficina central en Washington.

Tanto el presidente Roosevelt como los gobiernos posteriores dieron su aprobación a las interceptaciones telefónicas realizadas por el F. B. I. A partir de 1933, ocho procuradores generales sucesivos, tres de los cuales integraron posteriormente la Suprema Corte, dictaminaron que el F. B. I. procedía con arreglo a las leyes al practicar el sistema de interferencia telefónica.

Roosevelt y el F. B. I.

XVIII. - EL ENEMIGO INTERIOR

En el verano de 1936 las fuerzas del miedo y la subversión estaban en pleno ascenso. Adolfo Hitler, el ex pegador de carteles austriaco, había conquistado el poder en Alemania, y mientras hablaba de paz, planeaba la guerra. Los amos belicistas del Japón avasallaban a Corea y Manchuria, y con sangrientas espadas amenazaban toda el Asia. El jerarca fascista, Mussolini, construía en Africa su nuevo imperio romano. Una cruel guerra civil desgarraba a España, enfrentando hermano contra hermano, fascistas contra comunistas. En la Rusia soviética, Stalin proseguía sus purgas sangrientas, agregando nuevas víctimas a los millones ya aniquilados por las armas o por el hambre. Y en los Estados Unidos caminaban por las calles nueve millones de desocupados, mientras las fuerzas reaccionarias del fascismo y del comunismo ganaban adeptos.

Este, en desnuda síntesis, era el triste estado del mundo aquella mañana del 24 de agosto, cuando J. Edgar Hoover, director del F. B. I., fue llamado a la Casa Blanca para intervenir en una conferencia, la primera de una serie de tres que han permanecido secretas hasta el presente momento⁽¹⁾.

Hoover entró en el despacho del presidente Franklin D. Roosevelt. Eran las 9.15. El presidente alzó los ojos de su trabajo y sonrió.

—Siéntese, Edgar.

Apoyó las manos en su escritorio ovalado y con un leve impulso retrocedió junto con su silla. Encendió un cigarrillo.

—Lo he llamado —dijo— porque quiero que me haga un trabajo confidencial.

Roosevelt explicó entonces que le preocupaban cada vez más las actividades de comunistas y otros grupos subversivos. Necesitaba una información más completa que la que

(1) Esta reconstrucción de las conferencias de 1936 se basa en los apuntes tomados por Hoover inmediatamente después de celebradas, así como en su recuerdo personal de las conversaciones mantenidas.

recibía hasta ese momento. Preguntó si había algún medio de obtener un amplio panorama confidencial de las actividades comunistas y fascistas en relación con la vida económica y política del país.

—Señor presidente —repuso Hoover—, no hay ningún organismo del gobierno encargado de recopilar esa información general. Por otra parte, pertenecer al Partido Comunista no es una violación de la ley, y no tenemos autoridad específica para realizar una investigación en masa.

—Me parece, Edgar, que tiene que haber algún procedimiento —dijo el presidente—. ¿Se le ocurre algo?

—Sí, existe un recurso —dijo Hoover—. Según la ley de presupuesto⁽¹⁾ que rige nuestro funcionamiento, el F. B. I. tiene autoridad para emprender una investigación por cuenta del Departamento de Estado, cuando lo solicita el secretario de Estado. Podríamos efectuar esa investigación, si el secretario la pidiera al procurador general.

Roosevelt frunció el ceño. Le parecía extraño, dijo, que el presidente no pudiera formular por sí mismo tal solicitud. Agregó que vacilaba en recomendar al Departamento de Estado que elevara una petición formal, por la posibilidad de que se filtrara la noticia. Para deslindar responsabilidades, agregó Roosevelt, depositaría en su caja fuerte un memorándum manuscrito, diciendo que el presidente había indicado al secretario de Estado, Cordell Hull, la conveniencia de pedir al F. B. I. informes sobre las actividades subversivas.

—Vuelva mañana y hablaremos con Cordell Hull —concluyó Roosevelt.

Hoover regresó a la Casa Blanca a las 13.45 del día siguiente. Estaba charlando con el presidente cuando entró el secretario, Cordell Hull. Roosevelt reiteró su inquietud ante la carencia de informes sobre actividades comunistas y fascistas, y su creencia de que el F. B. I. debía emprender una silenciosa investigación.

—Edgar dice que puede hacerla —concluyó el presidente—, pero la solicitud, para ser legal, tiene que provenir de usted.

El alto y elegante secretario de Estado se volvió hacia Hoover.

—Si es por mí, ¡investíguelos no más a esos tal por cual...!

Roosevelt echó atrás la cabeza y soltó a reír.

El presidente explicó en detalle el carácter internacional del comunismo y el fascismo. Señaló que no le agradaba, por ejemplo, el hecho de que Constantine Oumansky (conse-

(1) Mayo 15 de 1936, Cap. 405, tit. II, 49 Stat. 1322. Dice: «...para otras investigaciones de asuntos oficiales que dependan del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, con aprobación del procurador general...». También la Secc. 559, tit. 5, U. S. C., autoriza al Departamento de Justicia a realizar investigaciones para el Departamento de Estado.

jero de la embajada soviética) anduviera recorriendo el país en misteriosas giras; casi nunca estaba en Washington. Dijo que en su opinión el Departamento de Estado tenía el derecho y el deber de averiguar lo que ocurría en casos semejantes.

—¿Quiere que presente la petición por escrito? —preguntó Hull.

Roosevelt meneó la cabeza. Prefería que el asunto fuera tratado confidencialmente, y para esos fines bastaba que estuvieran enterados los tres. Pensaba que el F. B. I. debía coordinar su investigación confidencial con la División de Inteligencia Militar del Departamento de Guerra, la Oficina de Inteligencia Naval y el Departamento de Estado. Pidió que Hoover elevara al procurador general Homer Cummings (cuando éste regresara a Washington de un viaje que había emprendido) un informe sobre las conferencias, puesto que la aprobación de Cummings también era necesaria.

Una semana más tarde, el 1º de septiembre, Hoover y el secretario Hull volvieron a reunirse con el presidente. Se llegó a un acuerdo final y se establecieron las bases para coordinar los informes obtenidos. La investigación debía realizarse únicamente con fines de información; es decir, que su propósito último no consistía en reunir probanzas judiciales⁽¹⁾.

Dentro de los términos de este acuerdo, el 5 de septiembre Hoover remitió a los jefes de delegaciones una circular «personal y confidencial» que decía:

El Servicio desea obtener, de todas las fuentes posibles, información sobre las actividades subversivas realizadas en los Estados Unidos por comunistas, fascistas y representantes o defensores de otras organizaciones o grupos que persiguen el derrocamiento o el reemplazo del gobierno de los Estados Unidos por métodos ilegales. En casos de esta índole, sin embargo, no debe iniciarse investigación alguna sin autorización específica del Servicio...

Cuando el procurador general Cummings regresó a su despacho, el 10 de septiembre, Hoover le presentó un informe sobre las conferencias secretas de la Casa Blanca.

(1) En casos vinculados a la seguridad nacional, el F. B. I. realiza dos clases de investigaciones: una, destinada a obtener pruebas judiciales admisibles, que puedan utilizarse para procesar a un individuo o grupo de individuos ante un juzgado federal; otra, únicamente con fines de «inteligencia» o información. La investigación de «inteligencia» tiende a identificar y establecer las actividades de individuos potencialmente peligrosos para la seguridad nacional; de ese modo se reúnen informes que permiten adoptar medidas de prevención o de contraespionaje. A menudo se requieren métodos clandestinos para descubrir operaciones clandestinas; por ejemplo, cuando se trata de obtener el diario de actividades o los documentos secretos de un espía. Los datos contenidos en un diario personal pueden no ser admisibles como pruebas ante un tribunal federal; pero también pueden servir para reforzar la seguridad nacional. Para condenar a un espía por violación de las leyes norteamericanas, es preciso exhibir pruebas legales, admisibles ante un tribunal.

—Estoy perfectamente de acuerdo —dijo Cummings—. Espero que haya dado usted los pasos preliminares necesarios.

—Sí, señor —repuso Hoover—. He ordenado a los jefes de delegación que inicien discretas averiguaciones. Todo sujeto a su aprobación, naturalmente.

—Bien —dijo el procurador general—. Espero que me tenga al tanto de este asunto.

Al regresar a su despacho, Hoover dictó una circular «estrictamente confidencial» dirigida al personal superior. Decía:

En la fecha he hablado con el procurador general sobre la situación creada por elementos radicales⁽¹⁾. Le informé de la conferencia mantenida con el presidente el 1º de septiembre de 1936, a la que asistió el secretario de Estado, y en la que dicho secretario de Estado, a indicación del presidente, me pidió como representante del Ministerio de Justicia que investigara las actividades subversivas que se desarrollan en el país, inclusive el fascismo y el comunismo. Transmití este pedido al procurador general, quien me ordenó verbalmente llevar adelante la investigación y, como sugiere el presidente, coordinar los informes obtenidos con la División de Inteligencia Militar, la División de Inteligencia Naval y el Departamento de Estado. Tales son, pues, las autoridades responsables de la investigación, que naturalmente debe llevarse a cabo en la forma más discreta y confidencial.

Roosevelt no era el único miembro del equipo gubernamental a quien preocupaban las actividades comunistas y los viajes de Oumansky. El 14 de diciembre William Bullitt, embajador norteamericano en Francia, visitó al procurador general Cummings y a Hoover para discutir los informes obtenidos por él, con respecto a la situación comunista, mientras estuvo en Moscú como embajador norteamericano ante la Unión Soviética. Bullitt habló del peligro que representaba el movimiento comunista en todo el mundo, y particularmente en los Estados Unidos.

Hoover resumió las observaciones de Bullitt en un memorandum dictado inmediatamente después de la conferencia, donde decía:

Dijo saber de primera fuente... que Stalin, jefe del gobierno ruso, es quien imparte instrucciones al jefe de la Tercera Internacional, y por lo tanto, fiscaliza las actividades de la Tercera Internacional.

(1) Leyendo centenares de documentos, se me ha hecho evidente que en aquella época, cuando Hoover o el F. B. I. utilizaban la palabra «radical» (que ya no usan), se referían específicamente a los anarquistas, el I. W. W. y los comunistas, y no a quienes persiguen reformas por medios constitucionales, y tampoco a los no-conformistas. En realidad, el propio Hoover ha sido un radical y un no-conformista, en la medida en que ha transformado los viejos conceptos de la profesión policial.

Le preocupaban particularmente las actividades de Oumansky... y señaló que Oumansky rara vez está en Washington; se pasa el tiempo recorriendo los Estados Unidos...

El señor Bullitt me informó que los líderes comunistas rusos realizan los máximos esfuerzos para infiltrar espías en todas las dependencias gubernamentales de los países extranjeros, y particularmente en aquellos que se ocupan en investigar actividades subversivas. Mencionó el hecho en relación con la posibilidad de que los comunistas infiltraran espías en el propio Servicio Federal de Investigación (1).

En este memorándum decía también Hoover:

Creo que ha llegado el momento de establecer en forma más definida las actividades de Oumansky, visto que el señor Bullitt me informa que es el contacto directo en este país con las organizaciones e individuos comprometidos en el movimiento subversivo contra el gobierno de los Estados Unidos.

Así fue como el F. B. I., en secreto y sin revelar de dónde emanaban sus órdenes, comenzó a investigar las actividades comunistas y a vigilar el crecimiento de los movimientos fascistas en los Estados Unidos. Más tarde estas investigaciones alborotarían un avispero de críticas; se acusaría al F. B. I. de inmiscuirse en las opiniones y creencias políticas de las personas por el solo hecho de abrigar ideas «radicales» contrarias a las del propio Hoover.

Vemos, sin embargo, que esta operación confidencial fue ordenada por Roosevelt. Hacía ya más de tres años, por otra parte, que en diversas oportunidades se venía solicitando el concurso del F. B. I. para investigar a individuos o grupos sospechados de actividades pro nazis. En esa época, el F. B. I. carecía de autoridad y responsabilidad para emprender tales indagaciones sin un previo requerimiento oficial. La investigación se realizaba, por lo general, a pedido del Departamento de Justicia. El F. B. I. elevaba un informe, y con eso terminaba su actuación hasta que surgía un nuevo caso.

La primera de estas investigaciones limitadas surgió de un extraño encadenamiento de circunstancias. En marzo de 1933 la embajada alemana había recibido una carta firmada «Daniel Stern», donde se decía que a menos que el presidente Roosevelt repudiara públicamente al gobierno de Hitler por sus atropellos contra los judíos, «le notifico que iré a Alemania y asesinaré a Hitler».

El 28 de marzo el embajador alemán, F. W. von Prittwitz, dirigió una nota a Cordell Hull, en la que decía:

(1) No sabe que los comunistas han realizado numerosos esfuerzos por infiltrarse en el F. B. I., mas hasta ahora no parecen haberlo conseguido.

Tengo el honor de adjuntar una comunicación recibida en esta embajada, en la que se amenaza asesinar al canciller del Reich, señor Adolfo Hitler. Le agradecería que se realizara una investigación de este asunto, y concluida la misma se me comunicaran los resultados.

Acepte, señor secretario de Estado, la renovada seguridad de mi más distinguida consideración.

Hull mandó la nota del embajador y la amenazante misiva al Departamento de Justicia, que ordenó al F. B. I. iniciar una investigación.

Es probable que el embajador alemán haya lamentado el envío de su nota, porque la carta de «Daniel Stern» fue origen de un engorroso problema diplomático. Aprovechando la coyuntura ofrecida por la gestión del embajador, y so pretexto de buscar a «Daniel Stern», el F. B. I. comenzó a indagar en las andanzas de organizaciones pro nazis. («Daniel Stern», incidentalmente, nunca fue localizado). En esta oportunidad, entonces, el F. B. I. obtuvo sus informes con un procedimiento indirecto, pero de todas maneras los antecedentes recogidos resultaron valiosos cuando el Departamento de Justicia pidió una investigación ulterior. Y Hoover transmitió la información al presidente.

El crecimiento de las organizaciones fascistas preocupaba tanto a Roosevelt que el 9 de mayo de 1934 convocó, en la Casa Blanca, a una conferencia en la que estuvieron presentes el procurador general, Cummings; el secretario del Tesoro, Morgenthau; el secretario de Trabajo, Perkins; Hoover, y el jefe del Servicio Secreto, W. H. Moran. La conferencia acordó realizar una investigación con fines informativos, de esos grupos y sus actividades (1).

Hoover inmediatamente ordenó a sus hombres emprender una investigación intensiva y confidencial del movimiento nazi, y sobre todo de las actividades antinorteamericanas que tuviesen cualquier vinculación con funcionarios del gobierno alemán. Hasta entonces, el F. B. I. había indagado en casos particulares, pero ésta era la primera investigación de alcance general, con fines de información, que efectuaba el gobierno en torno a las actividades fascistas. También ella, sin embargo, fue limitada. Sólo en 1936 el F. B. I. inició una persistente aunque discreta vigilancia que abarcaba por igual actividades fascistas y comunistas.

A fines de la segunda década de este siglo y a comienzos de la tercera las actividades pro fascistas se limitaban en

(1) Funcionarios presentes en esta conferencia expresaron la opinión de que la única ley aplicable era la Ley de Inmigración. El presidente resolvió que el comisionado de Inmigración y Naturalización conferenciara con el jefe del Servicio Secreto y con el director del F. B. I. para concertar los detalles de una investigación sobre las actividades nazis.

general a la propaganda. Pero, a medida que la situación se agravaba en Europa y Asia, también empeoraba en los Estados Unidos; a los propagandistas se unieron entonces los agentes de espionaje. Entre 1933 y 1937, el F. B. I. investigó un término medio de 35 casos de espionaje al año. En el año fiscal 1938, el total ascendió de golpe a 250.

El primer caso importante de esa época giró en torno a Guenther Gustave Rumrich, que había desertado del ejército norteamericano en 1936 y después había entrado al servicio del espionaje alemán.

Funcionarios del servicio de inteligencia del Departamento de Guerra solicitaron la cooperación del F. B. I. en el caso Rumrich cuando el agregado militar norteamericano en Londres previno que se realizaría un esfuerzo por substraer los planes secretos de defensa de la costa este de los Estados Unidos. Tanto las autoridades militares como el F. B. I. ignoraban la identidad del agente extranjero encargado de dicha misión.

Poco después de recibirse esta advertencia, detectives de la ciudad de Nueva York y agentes especiales del Departamento de Estado arrestaron a un hombre que había intentado obtener formularios de pasaportes norteamericanos, haciéndose pasar por el secretario de Estado Cordell Hull en una llamada telefónica dirigida a la Oficina de Pasaportes de Nueva York. Este hombre era Guenther Gustave Rumrich. Tenía en el bolsillo una nota escrita a lápiz que permitió identificarlo como el agente que pensaba robar los planes de defensa costera.

Rumrich fue entregado al F. B. I., y a través de sus confesiones los agentes descubrieron un plan nazi para obtener información sobre el poderío militar y planes defensivos norteamericanos, así como también sobre los secretos del nuevo portaaviones, el *Enterprise*. Infortunadamente, alguien dejó filtrar a periódicos neoyorquinos la noticia del arresto de Rumrich, y sus cómplices se desbandaron. Se encausó a dieciocho personas, pero sólo cuatro fueron condenadas⁽¹⁾. Los otros fueron declarados prófugos de la justicia.

El F. B. I. colaboró con la Oficina de Inteligencia Naval para capturar a otro espía, John Semer Farnsworth, egresado de la Academia Naval de los Estados Unidos, que en 1927 fue exonerado de la Marina, y entre 1933 y 1936 se convirtió en espía a sueldo de los japoneses. El primer indicio de las actividades de Farnsworth procedió de Fulton Lewis (h.), periodista que escuchó a Farnsworth, en estado de embria-

(1) El 2 de diciembre de 1938 Johanna Hoffman fue sentenciada a cuatro años; Otto Voss, a seis años; y Erich Glaser y Rumrich, a dos años cada uno.

guez, hablar de sus hazañas. Lewis pudo explotar el caso como primicia periodística exclusiva, pero prefirió denunciar los hechos al F. B. I., actitud que en años posteriores siguieron otros reporteros en casos que afectaban la seguridad nacional. Así fue como el F. B. I. averiguó que Farnsworth había recibido de los japoneses unos 20.000 dólares a cambio de planos, códigos, libros de señales, croquis de buques y de maniobras navales, amén de otros informes robados a la Marina.

En marzo de 1937 otro periodista, Heywood Broun, provocó conmoción en los medios oficiales de Washington al denunciar en su diario que las actividades del *Bund* germanoamericano habían llegado a tal extremo que «se están reclutando voluntarios, y ya existe aquí, en los Estados Unidos, todo un cuerpo de tropas de asalto». Esas tropas de asalto filonazis, escribió Broun, se estaban adiestrando y realizando prácticas de tiro con fusil, «y es palpable que profesan lealtad a Hitler y a su tierra de origen».

El presidente Roosevelt leyó la columna de Broun, y la mandó al secretario de Guerra, Harry H. Woodring, con una acotación que decía: «Me parece que G-2 debe investigar este asunto». El Departamento de Guerra transmitió la nota del presidente al Departamento de Justicia, comentando que ése era un caso para las autoridades civiles, y no para los organismos militares.

El Departamento de Justicia abordó tímidamente el problema, preguntando al F. B. I. si podía efectuar una investigación, silenciosamente y sin mucha publicidad, a pesar de que a esa altura de las cosas la conducta del *Bund* era un abierto escándalo, si no una violación de las leyes. El F. B. I. explicó a funcionarios de Justicia que difícilmente pudiera emprenderse tal investigación sin que alguna de las organizaciones pro nazis pusiera el grito en el cielo. Finalmente, sin embargo, el Departamento resolvió ordenar las averiguaciones necesarias.

Los agentes del F. B. I. estudiaron entonces las actividades del *Bund*, identidad de sus miembros, enseñanzas políticas, organización, afiliaciones y programa de adiestramiento paramilitar. A comienzos de 1938 presentaron un extenso informe al Departamento de Justicia. En él constaba que el *Bund* había surgido de una asociación nacional-socialista fundada en Chicago y conocida con el nombre de «Teutonia». Su jefe era Fritz Kuhn, sucesor de Walter Kappe, quien más tarde reclutaría y adiestraría a ocho saboteadores alemanes que actuaron en los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial.

La investigación del *Bund* terminó en un callejón sin sa-

lida. El Departamento de Justicia concluyó, al parecer, que si bien la doctrina general del *Bund* tenía cierta tendencia a lo subversivo, no violaba leyes norteamericanas.

Ahí quedaron las cosas hasta noviembre de 1938, cuando la Comisión Especial de Actividades Antinorteamericanas de la Cámara de Representantes (conocida entonces con el nombre de «Comisión Dies») pidió que el Departamento de Estado determinara si algunas organizaciones, el Partido Comunista y el *Bund* entre otras, no eran en realidad agentes no declarados de gobiernos extranjeros que operaban en violación de las leyes federales.

La Comisión Dies armó tal escándalo que el presidente Roosevelt discutió sus demandas en una reunión de gabinete celebrada el 4 de enero de 1939. Dos días más tarde, en una conferencia de prensa, el presidente anunció que se había iniciado una investigación. La crónica que dio el *New York Times* empezaba así: «El presidente Roosevelt anunció hoy la decisión del Departamento de Justicia de investigar los cargos formulados por la Comisión Dies sobre presuntas violaciones de las leyes penales por parte de comunistas, fascistas y otras organizaciones que actúan en el país».

Pero, contrariamente al anuncio del presidente, y a sus deseos, los engranajes no habían empezado siquiera a girar cuando el 13 de marzo el subsecretario de Estado, Sumner Welles, dirigió al procurador general Frank Murphy una carta donde resumía lo acordado en la reunión de gabinete celebrada en enero. Dijo Welles:

Recordará usted que... el presidente decidió que debían indagarse inmediatamente algunos de los casos de presunta violación de la ley, y que podría empezarse investigando una organización fascista, una organización comunista y una organización que no estuviera abiertamente bajo la influencia de ninguna ideología extranjera, aunque en realidad padeciera dicha influencia por infiltración. En su conferencia de prensa del 6 de enero, el presidente anunció que la investigación estaba en marcha.

Yo entendí... que su departamento pensaba mandar inmediatamente un investigador para examinar los antecedentes que obran en nuestros archivos con respecto a las organizaciones mencionadas en la carta del señor Dies, y para consultar con funcionarios de este departamento, a fin de resolver cuáles eran las tres organizaciones que debían investigarse en primer término. A partir de aquella conversación, no hemos tenido más noticias del asunto.

La carta de Welles produjo un breve período de actividad. Representantes de los Departamentos de Justicia y Estado consultaron el caso, y decidieron iniciar averiguaciones sobre el *Bund* germanoamericano, el Partido Comunista de

los Estados Unidos y la Liga Americana pro Paz y Democracia; esta última figuraba en la carta de Dies como organización sospechosa.

Entretanto, el F. B. I. aguardaba instrucciones del Departamento de Justicia. Se facilitó a funcionarios del mismo la información disponible. Hasta junio de 1939 no llegaron las instrucciones. El Partido Comunista y el *Bund* germanoamericano debían ser investigados por presuntas violaciones a la ley de registro de agentes extranjeros. El Departamento agregó que dicha ley no alcanzaba a la Liga Americana; en consecuencia, no había que investigarla.

Entretanto, se libraba una batalla para resolver un problema de jurisdicción en las investigaciones de hechos subversivos.

A fines de 1938, el presidente Roosevelt había aprobado una partida de presupuesto de 50.000 dólares para el F. B. I. con destino a investigaciones de espionaje (más tarde el Congreso elevó dicha suma a 300.000 dólares).

Para Hoover, esta asignación de fondos equivalía a reconocer la jurisdicción primaria del F. B. I. en el campo civil. No existía ninguna partida similar para otros organismos investigadores no militares. Como resultado, el F. B. I. y la División de Inteligencia Militar del Departamento de Guerra trazaron un plan conjunto, con la aprobación de la Oficina de Inteligencia Naval, para intercambiar informes en el curso de las investigaciones antisubversivas. Este acuerdo fue aprobado en principio por el nuevo procurador general, Frank Murphy. El 7 de febrero de 1939, el ayudante del procurador general, Joseph B. Keenan, informó sobre el acuerdo a otros organismos investigadores, pidiendo que remitiesen al F. B. I. cualquier información referente a espionaje o actividades subversivas. Hoover explicó a sus agentes que la carta de Keenan significaba que «todas las denuncias relativas a espionaje, contraespionaje y sabotaje, deben ser transmitidas al Servicio, que tiene jurisdicción primera sobre ellas, y por supuesto deben recibir preferente y expeditiva atención».

La carta de Keenan desencadenó una inmediata tormenta. El Departamento de Estado, así como otros departamentos gubernamentales con órganos de investigación, protestaron. El secretario auxiliar de Estado, George S. Messersmith, convocó a una conferencia de representantes del Departamento de Guerra, la Marina, el Tesoro, el Departamento de Correos y el Departamento de Justicia, pero no invitó al F. B. I. Y anunció a los presentes que Roosevelt lo había designado para coordinar y dirigir las investigaciones de actividades subversivas.

El Departamento de Guerra y la Inteligencia Naval defendieron al F. B. I. como organismo coordinador. Hoover terció en la disputa con un memorándum elevado al procurador general Murphy, diciendo que Murphy, en una conferencia posterior, había querido repartir las investigaciones de espionaje entre los distintos organismos. Decía Hoover, entre otras cosas:

Por supuesto, tal sugerencia no puede ser aceptada en lo que al Servicio de Investigación concierne, puesto que... considero que en casos de esta índole la centralización de todos los informes en un solo organismo es absolutamente esencial para llevar a buen término las investigaciones.

Al fin, el presidente Roosevelt apoyó a Hoover. El 26 de junio de 1939 remitió a los miembros del gabinete directivas confidenciales, diciendo que todas las investigaciones en materia de espionaje, contraespionaje y sabotaje debían ser dirigidas únicamente por el F. B. I. y por las Divisiones de Inteligencia del Departamento de Guerra y de la Marina. Los jefes de estos tres organismos debían constituir una comisión coordinadora interdepartamental de inteligencia. El presidente agregó que ninguna otra dependencia gubernamental debía inmiscuirse en este campo; y que todos los restantes organismos debían transmitir a la delegación más próxima del F. B. I. las denuncias sobre actividades subversivas.

Estas instrucciones confidenciales del presidente fijaron por primera vez la jurisdicción. Y fueron muy oportunas porque el 24 de agosto Alemania y Rusia firmaron su pacto de no agresión por diez años, que permitió a los nazis iniciar la guerra sin temor de ser atacados en el frente del Este. El 1º de septiembre, las divisiones blindadas alemanas invadieron a Polonia, y la Luftwaffe convirtió a Varsovia en ruinas humeantes. El 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania.

El 6 de septiembre, el presidente Roosevelt anunció públicamente que había encomendado al F. B. I. «hacerse cargo de las investigaciones relativas a espionaje, sabotaje y violaciones a las normas de neutralidad». Asimismo, pidió a todos los organismos encargados de hacer cumplir las leyes que suministraran al F. B. I. cualquier informe que recibieran sobre actividades subversivas.

Pero mientras en el orden interno se determinaba la esfera de actuación de cada organismo, no había normas claras para las operaciones de información exterior. La urgente necesidad de una resolución en este campo se hizo notoria a medida que transcurrían los meses. Hoover discutió el pro-

blema con los jefes de inteligencia militar, con el presidente Roosevelt y con el secretario auxiliar de Estado, A. A. Berle (h.), que era el más íntimo asesor y consejero del presidente en asuntos de espionaje y contraespionaje.

El 24 de junio de 1940, Berle planteó el problema al presidente y sugirió que podía optar entre el F. B. I., el Ejército y la Marina.

Berle relató su conversación con el presidente en un memorándum dirigido al brigadier general Sherman Miles, de Inteligencia del Ejército; al contraalmirante W. S. Anderson, director de Inteligencia Naval; y a Hoover, con una copia para la Casa Blanca. Berle decía entre otras cosas:

El presidente desea que las tareas se repartan. El F. B. I. debería encargarse de las operaciones de información externa en el Hemisferio Occidental, a pedido del Departamento de Estado. Los organismos existentes de Inteligencia Militar e Inteligencia Naval deben cubrir el resto del mundo, a medida que la situación lo exija.

Quedó establecido que la tarea adicional de información externa que se propone no debe superponerse a la que ya se realiza; y que en circunstancias especiales el Departamento de Estado puede encomendar al F. B. I. misiones especiales fuera del hemisferio americano. Aparte de esto, las funciones de información fuera del hemisferio americano quedan reservadas a los oficiales del Ejército y de la Marina.

Producida esta división de funciones, los tres organismos elaboraron los detalles de un acuerdo que, en términos generales, daba jurisdicción a la Marina para las tareas de información en el Pacífico; colocaba en manos del Ejército la responsabilidad de dichas tareas en Europa, Africa y la Zona del Canal de Panamá; y adjudicaba al F. B. I. idéntica responsabilidad en el Hemisferio Occidental, incluyendo México, América Central (salvo Panamá), el Caribe y América del Sur.

Entretanto, el F. B. I. —por las dudas— realizaba preparativos para una emergencia bélica. Hoover aleccionó a su personal sobre los errores cometidos por el Servicio y por el gobierno, durante la primera Guerra Mundial, al encarar los problemas que plantea la guerra. Recordó las torpezas que dieron origen a la creación de un sistema de «vigilantes» voluntarios para combatir la subversión; la falta de experiencia en la lucha contra espías y saboteadores; las violaciones de derechos civiles perpetradas durante las batidas en masa llevadas contra «rezagados» y ciudadanos extranjeros. Ordenó efectuar estudios con recomendaciones que corrigieran en la mayor medida posible los errores del pasado.

A pedido del Ejército y de la Marina, el F. B. I. inspec-

cionó más de 2.200 establecimientos industriales claves de los Estados Unidos, amén de arsenales y fábricas de aviones. Se recomendaron a las fuerzas armadas y a los administradores de las fábricas procedimientos para reforzar la seguridad. Se estudiaron los métodos de sabotaje y se esbozaron medidas para prevenirlo. Se formularon sugerencias sobre prevención de incendios y refuerzos de guardias contra el sabotaje en los puntos claves de la producción, y se decidió identificar dactiloscópicamente a los empleados para eliminar de los puestos de confianza a quienes tuvieran antecedentes penales.

Aunque parezca tonto, un alto empleado de una fábrica dijo que su firma tenía un frenólogo que podía establecer, por la forma de la cabeza de un hombre y por sus reacciones durante una entrevista, si era o no fiel, deshonesto o inepto para el trabajo.

—Eso es lo que ellos dicen —informó el agente del F.B.I.—, y como la fábrica es de ellos, pues, contrataron al frenólogo...

En 1940 Hoover mandó a Inglaterra un equipo de agentes del F. B. I. para que estudiaran la defensa civil británica y aprovecharan las lecciones de seguridad aprendidas por los ingleses en la llamada Batalla de Gran Bretaña. Después de este estudio, el F. B. I. despachó agentes a todo el territorio de los Estados Unidos, para que instruyeran a las policías locales sobre los problemas que podían plantearse en la eventualidad de ataques aéreos enemigos y los métodos más adecuados para hacerles frente, según la experiencia británica.

A pedido del Departamento de Estado, el F. B. I. mantenía vigilancia sobre los funcionarios consulares alemanes, italianos y japoneses. Los rusos no estaban excluidos. Poco supo la opinión pública de estas cosas, pero el secretario de Estado Cordell Hull aludió a ellas en sus memorias:

En mayo (de 1941) el Servicio Federal de Investigación nos comunicó que había descubierto actividades de espionaje realizadas por el comandante Tachibana, profesor de idiomas del ejército japonés, y preguntó si convenía arrestarlo. El 27 de mayo dimos nuestra conformidad, y Tachibana fue arrestado en Los Angeles. El 14 de junio el embajador Nomura nos solicitó, en interés de las relaciones amistosas entre nuestros dos gobiernos, que accediéramos a deportar inmediatamente a Tachibana sin iniciarle proceso. Estudié cuidadosamente el caso y resolví favorablemente la petición de Nomura.

Este fue un caso entre muchos. Hull autorizó el enjuiciamiento en Hawaii de varios japoneses que no se habían registrado ante el Departamento de Estado como agentes ex-

tranjeros. Por otra parte, el F. B. I. suministró al gobierno pruebas de que las oficinas consulares alemanas e italianas en todo el país eran utilizadas como centros de propaganda y espionaje. En junio de 1941 el Departamento de Estado ordenó la clausura de esas oficinas.

A comienzos de 1940, el F. B. I. intervino en uno de los más extraños dramas de espionaje y contraespionaje que se hayan desarrollado en este país. El primer acto se representó cuando William Sebold, naturalizado norteamericano, al regresar de un viaje a su Alemania nativa acudió inmediatamente al F. B. I. Sebold reveló que la Gestapo había amenazado a sus familiares —su abuelo era judío— a menos que regresara a los Estados Unidos como espía. Sebold accedió, y entonces le enseñaron el manejo de una radio de onda corta, lo proveyeron de un código secreto y le dieron instrucciones microfotográficas para entregar a otros agentes alemanes con quienes debía ponerse en contacto en los Estados Unidos.

William Sebold desempeñó su papel de espía alemán con tanto realismo que la Gestapo y una red de espías que actuaba en los Estados Unidos cayeron en una trampa perfectamente preparada por el F. B. I.

Primero, el F. B. I. hizo que Sebold mandara a Alemania un mensaje en código, informando a la Gestapo que había llegado sin tropiezos. Después los ingenieros del laboratorio del F. B. I. instalaron una estación de onda corta en Centerport, Long Island, y la registraron como estación de aficionados, anticipándose al peligro de que otros devotos de la radiotelefonía en el resto del país la captaran y empezaran a sospechar. A las 19.50 del 20 de mayo se estableció contacto con la estación de la Gestapo en Hamburgo. Entonces comenzó, entre Alemania y los Estados Unidos, un ir y venir de mensajes que gradualmente dio al F. B. I. la pista para capturar la más grande red de espionaje descubierta antes de Pearl Harbor.

Cada mensaje transmitido desde la estación secreta de Long Island, operada por agentes del F. B. I., contenía la información auténtica necesaria para resultar convincente, aunque desde luego no se irradiaba nada sin la previa aprobación de oficiales de inteligencia del Ejército y la Marina. Los alemanes nunca sospecharon el engaño.

El F. B. I. instaló a Sebold en una oficina de Manhattan provista de una cantidad de triquiñuelas. Un espejo en la pared reflejaba la imagen de quien se miraba en él, pero en la sala contigua este espejo se convertía en ventana a través de la cual los agentes filmaban todo lo que ocurría en la oficina de Sebold. Micrófonos ocultos conducían cada pala-

bra pronunciada a un equipo grabador. Sobre el escritorio de Sebold había un reloj (y detrás de él un calendario de pared) que indicaban el momento exacto del día en que Sebold recibía visitas. Y los visitantes ocupaban siempre un sillón situado frente al espejo.

Sebold se puso en contacto con los agentes alemanes y les entregó las instrucciones microfotográficas traídas de Alemania. Al despacho de Sebold entraban y salían personas que iban a recibir instrucciones o a entregar informes para ser despachados a Alemania. Entre los concurrentes se encontraba Fritz Duquesne⁽¹⁾, veterano aventurero y espía alemán cuya carrera databa de comienzos del siglo. Duquesne era el jefe de la banda. El y sus cómplices tenían particular interés en remitir a Alemania informes sobre producción de materiales de guerra, movimientos de buques de y hacia Inglaterra, producción de aviones militares, adiestramiento de la fuerza aérea norteamericana y entrega de aviones a Gran Bretaña. La radioemisora de Long Island despachó y recibió aproximadamente 500 mensajes.

Este juego de gato y ratón prosiguió hasta que el F. B. I. pudo identificar a todos los componentes de la banda. Entonces se produjeron los arrestos. Treinta y tres personas, inclusive el amable Duquesne, fueron acusadas de espionaje o cargos afines.

—Fue como balear peces en un barril — declaró un agente.

A comienzos de octubre de 1940, Hoover fue al despacho de Robert H. Jackson, que entonces era procurador general y más tarde sería miembro de la Suprema Corte de Justicia. Discutieron una propuesta, presentada por el presidente Roosevelt, para que Hoover asumiera la dirección de todos los organismos federales de investigación e inteligencia, coordinando su funcionamiento desde la sede central del F. B. I. o desde una oficina separada.

Esa noche Jackson fue el principal orador en el banquete de la Academia Nacional del F. B. I. celebrado en el Hotel Mayflower. Dijo entre otras cosas:

Hay hombres que tienen el don de ver más allá del presente y calcular lo que encierra el futuro... Vuestro director es capaz de adelantarse a muchos acontecimientos. Semejante facultad me ha impresionado. Esta tarde al hablar con él tuve oportunidad de

(1) Duquesne nació en Sudáfrica en 1877, se educó en la Academia Militar de Bruselas (Bélgica) y, según propia afirmación, actuó como espía al servicio del ejército bóer. En 1902 llegó a los Estados Unidos, y más tarde se naturalizó. Durante la primera guerra mundial Duquesne fue activo germanófilo. En 1918 la justicia federal dictó orden de captura contra él, ante un pedido de extradición presentado por el cónsul general británico en Nueva York; la justicia inglesa lo acusaba de asesinato y de tentativa de hundir y destruir el vapor británico *Tennison*. Duquesne murió en mayo de 1956, en un hospital de caridad de Nueva York, a los setenta y ocho años de edad.

plantarle un ofrecimiento que, en caso de ser aceptado, le habría conferido una dosis de poder aún mayor de la que ejerce. Se supone que la mayoría de los hombres en Washington buscan justamente eso: más poder. Sin embargo, Hoover me respondió: «Señor procurador, ese plan sería muy bueno para este momento, pero en el transcurso de los años resultaría un error».

Entre los que se hallaban en el banquete, sólo Jackson y Hoover sabían qué era lo que este último acababa de rechazar.

XIX. - ROOSEVELT DEFIENDE A HOOVER

En 1940, el presidente Roosevelt y el procurador general Robert H. Jackson salvaron al F. B. I. de ser destruido por uno de los ataques más salvajes que se hayan originado en la jungla de los intereses políticos de Washington. Si alguno de estos dos hombres hubiera titubeado bajo la presión que se ejerció sobre ellos, es posible que el prestigio y la eficacia del F. B. I. hubieran padecido daños irreparables. Pero ninguno de los dos vaciló.

En cierta oportunidad, Hoover confió a un visitante:

—Nadie, fuera del F. B. I. y del Departamento de Justicia, sabe lo cerca que estuvieron de arruinarnos.

¿A quién abarcaba ese plural? La historia consta en los archivos del F. B. I. Es una historia de confabulaciones, intrigas y maledicencias. El comentarista Arthur Krock, del *New York Times*, comentó por aquella época que Hoover era uno de los que «...han pasado por la desagradable experiencia del brulote y la diatriba...».

«Por un tiempo —agregaba Krock— pareció que la autoridad del director del F. B. I. quedaría seriamente lesionada. Pero los cargos importantes contra él fueron rápidamente desvirtuados, y las insinuaciones menores reducidas a su verdadera dimensión. Contrariando las esperanzas de algunos de los críticos del señor Hoover, el procurador general Jackson ha respaldado firmemente al jefe de los *G-Men*.»

El ataque principal se desencadenó después que Hoover compareció ante una subcomisión de presupuesto de la Cámara de Representantes, el 5 de enero de 1940, para rendir cuentas de la actuación del F. B. I. Al discutir la resolución del presidente Roosevelt, del 6 de septiembre de 1939, anunciando una mayor responsabilidad del F. B. I. en la custodia de la seguridad nacional, dijo Hoover:

Cuando se nos asignó esta labor, organizamos... la División de Inteligencia General, encargada de combatir el espionaje, el sabotaje y otras actividades subversivas, así como las violaciones de la neutralidad... También hemos iniciado investigaciones especiales de personas que según nuestros informes participan de actividades subversivas o de movimientos perjudiciales a la seguridad interna. En relación con esto, tenemos en el Servicio un índice general, alfabético y geográfico, de modo que en una emergencia podríamos localizar inmediatamente a esas personas para seguir investigándolas...

La declaración de Hoover fue como la aguja del dentista tocando el nervio de una muela cariada. La reacción fue violenta. El primer ataque provino del representante Vito Marcantonio, congresal izquierdista de Nueva York, que afirmó en la Cámara que las medidas de seguridad de Hoover «sentaban el precedente... para crear una Gestapo en los Estados Unidos». Y agregó:

Esta clase de testimonio... evidencia dos hechos. Primero, que estamos preparando un ataque general contra los derechos civiles, un eclipse de las libertades civiles del pueblo norteamericano, un sistema de terror condensado en fichas como las que utiliza la Gestapo; segundo, que estamos creando una histeria de guerra que es una amenaza para la paz de los Estados Unidos.

Entretanto, un informante denunciaba al F. B. I. una reunión de líderes comunistas efectuada el 6 de febrero, en Washington, donde se trazaron planes para iniciar una campaña contra Hoover y el F. B. I. La denuncia decía:

En la reunión se propuso que la campaña tuviera dos fases principales: primera, un ataque contra el Servicio por violar las libertades civiles, y segunda, un ataque personal contra el director... Esta segunda fase de la campaña se asignó a escritores comunistas. También se planeó en la reunión ganar la buena voluntad de ciertos legisladores, con el fin de imponer restricciones al Servicio por vía parlamentaria.

Por aquella época, el procurador general Frank Murphy renunció al Departamento de Justicia para convertirse en miembro de la Suprema Corte. En Washington circuló el rumor de que Hoover había perdido su más fuerte apoyo, y que el nuevo procurador general, Jackson, de ideas liberales, aprovecharía la primera oportunidad que se le presentara para amordazar a Hoover y al F. B. I.

La tormenta estalló el 6 de febrero cuando agentes del F. B. I. arrestaron a diez hombres y una mujer en Detroit, y a un hombre en Milwaukee, acusados de reclutar volun-

tarios para el ejército republicano español⁽¹⁾. Todos ellos eran comunistas confesos, miembros de organizaciones colaterales pro comunistas, o abiertos simpatizantes del comunismo.

Pero en todo el país se alzaron voces de protesta diciendo que esos arrestos eran un ejemplo de cómo el F. B. I. perseguía a las personas que abrigaban ideas políticas contrarias a las de Hoover. Se acusó al F. B. I. de apremios ilegales (*thirddegree methods*), de violar el domicilio de aterradas víctimas a quienes sólo se acusaba de una transgresión formal de las leyes, y de humillarlas deliberadamente con desprecio de los derechos constitucionales. Se dijo que Hoover era una amenaza mayor que «cualquier nido de espías». El F. B. I. fue descripto como una O. G. P. U., una Gestapo, una siniestra amenaza a la libertad intelectual. Y de este modo se fomentó la duda en gente honesta, que expresó públicamente esa duda antes de conocer la realidad de los hechos.

La verdad era que en 1937, durante la guerra civil española, la delegación del F. B. I. en Detroit recibió denuncias de que la Liga Juvenil Comunista y otras entidades afines estaban reclutando voluntarios para el ejército republicano español. Tales denuncias fueron reiteradas en enero y abril de 1938. El F. B. I. las elevó a la División Criminal del Departamento de Justicia, pidiendo instrucciones. Cuando éstas llegaron, Hoover ordenó a sus agentes en Detroit que suspendieran los procedimientos.

El 1º de septiembre, sin embargo, la División Criminal del Departamento señaló a Hoover que era «muy conveniente» investigar los casos de reclutamiento en Detroit. Pocos días antes el secretario de Estado, Cordell Hull, había pedido al Departamento de Justicia que aclarase las denuncias que culpaban a los comunistas de reclutar voluntarios en Detroit. El F. B. I. completó la investigación y el 22 de abril de 1939 elevó sus conclusiones al Departamento de Justicia. Poco antes, la División Criminal había pedido al F. B. I. que suspendiera las diligencias.

El 28 de julio, el procurador general Frank Murphy ordenó al fiscal nacional en Detroit iniciar acciones judiciales sobre la base del informe presentado por el F. B. I. en abril. Se tomaron las medidas necesarias para ventilar el caso ante un gran jurado de acusación, en el mes de septiembre; pero entonces el fiscal en Detroit recibió nuevas instrucciones, en el sentido de postergar por el momento las actuaciones.

(1) Las acusaciones formuladas por el gran jurado federal de acusación el 3 de febrero de 1940 imputaban a dieciséis personas el delito de conspiración (Secc. 88, tit. 18, Congreso de los Estados Unidos) para violar la ley que prohíbe reclutar personas en los Estados Unidos con el fin de luchar en conflictos exteriores (Secc. 22, título 18, Congreso de los Estados Unidos).

El 18 de diciembre se dispuso nuevamente procesar a los sospechosos. La División Criminal del Departamento despachó un telegrama al fiscal nacional en Detroit, diciendo:

Respecto carta agosto 26 relacionada Philip Raymond. Proceda inmediatamente iniciar acciones judiciales. Mantenga contacto con Departamento. También comuniqué si otros casos requieren procesamiento y en caso afirmativo eleve resumen de cada uno. (Firmado) O. John Rogge.

La decisión del Departamento de Justicia se basaba en testimonios y declaraciones prestados ante el F. B. I., de los que se desprendían estos hechos: Philip Raymond, candidato del Partido Comunista a gobernador de Michigan en 1937, dirigía un programa de reclutamiento en Detroit. Raymond prometía una paga de 300 dólares mensuales a quienes se alistaran voluntariamente en las filas republicanas españolas, además de pagarles todos sus gastos. Los que se enrolaban eran enviados por Raymond a tres médicos del Departamento de Salud Pública de Detroit, para que los examinaran. Pero estos exámenes no eran gratuitos. Y era la Municipalidad de Detroit, y no Raymond, quien pagaba los honorarios de los médicos. Los voluntarios que aprobaban la revisión médica iban a Nueva York, con el viaje pago. Raymond adquiría los boletos de ómnibus y de ferrocarril a una agencia de viajes, la World Tourists Inc., dirigida por Jacob Golos, comunista conocido que más tarde encabezó una red de espionaje soviética. En Nueva York los voluntarios se presentaban a un agente de enlace que les entregaba pasaportes falsos o los embarcaba como polizones en buques que zarpaban con rumbo a Francia o España. La mayoría de los voluntarios norteamericanos en España combatieron en la Brigada Abraham Lincoln. Al regresar a los Estados Unidos, algunos de ellos formaron la Brigada de Veteranos Abraham Lincoln, mientras que los simpatizantes que no habían combatido organizaron una sociedad de Amigos de la Brigada Abraham Lincoln.

Esta, en resumen, fue la evidencia que el fiscal en Detroit presentó al gran jurado federal de acusación. El 3 de febrero de 1940, el jurado dictó órdenes secretas de encausamiento. También en secreto se dictaron órdenes judiciales de captura, autorizando el arresto de los sospechosos y el allanamiento de sus domicilios.

Hoover y sus hombres sabían que una redada de personas que tuvieran relación con las actividades comunistas, aunque no fueran más de una docena, haría llover sobre el F. B. I. acusaciones de persecución política. Por este motivo se tomaron extraordinarias precauciones al practicar los

arrestos. En conferencias telefónicas celebradas entre Hoover, el inspector del F. B. I. Myron E. Gurnea y el jefe de la delegación de Chicago, John S. Bugas⁽¹⁾, se acordó efectuar los procedimientos simultáneamente a las 5 de la madrugada, hora en que probablemente todos los sospechosos estarían en su casa.

Los detenidos serían llevados a la sede del F. B. I. en Detroit. Estaría presente un médico para revisar a cada persona que entrara en la delegación o saliera de ella; así nadie podría alegar que había sido golpeado, maltratado físicamente o «demorado» en caso de enfermedad. Dentro de lo posible, los sospechosos debían ser tenidos en habitaciones separadas (aunque con las puertas abiertas) mientras les tomaban las impresiones digitales, los fotografiaban e interrogaban. Puesto que el juez federal no podría hacerse presente para interrogarlos hasta las 3 de la tarde, habría que servirles el desayuno y el almuerzo. Si alguien pedía alimento o bebida en ese intervalo, los agentes debían procurárselos. Una empleada debía atender a las mujeres detenidas. Al efectuar los arrestos, ningún agente debía quedar solo con una mujer. Los agentes debían mostrarse corteses y evitar discusiones.

Al informar sobre las instrucciones impartidas a los agentes la noche antes de los procedimientos, el inspector Gurnea dijo entre otras cosas:

Se les previno que es una conocida táctica comunista causar a la policía las mayores dificultades posibles durante un arresto. Se les informó que indudablemente las personas arrestadas alegarían en el acto que se estaba violando sus derechos constitucionales, y desconocerían la legitimidad de las órdenes de allanamiento y de los arrestos en general. En ningún caso los agentes debían aludir al comunismo o acusar a nadie de ser comunista o simpatizante de movimientos pro comunistas. Se indicó además que no debía secuestrarse ningún material que indicara simple afiliación al Partido Comunista; la incautación de pruebas debía limitarse a las que tuvieran conexión con el Ejército Republicano Español, la Brigada Abraham Lincoln o los Amigos de la Brigada Abraham Lincoln.

El informe elevado después de los procedimientos decía:

Los arrestos se practicaron simultáneamente, y salvo discusiones en torno a los derechos constitucionales o la autoridad del

(1) Gurnea, nacido en San Francisco, fue nombrado agente en 1934. Después de actuar en las delegaciones regionales y en la jefatura, ascendió a inspector en 1938. Se ahogó en el río Potomac el 19 de agosto de 1950. Bugas, nacido en Wyoming y egresado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Wyoming, ingresó como agente en marzo de 1935. Fue jefe de las delegaciones del F. B. I. en Alaska, Birmingham y Detroit. Renunció al Servicio el 15 de enero de 1944 para entrar en la Ford Motor Company, donde es actual vicepresidente encargado de Relaciones Industriales. Un titular publicado el 22 de diciembre de 1955 en el *Boston Globe* decía: «El F. B. I. pagaba a Bugas 6.500 dólares anuales; la Ford le paga 183.785 dólares».

F. B. I., sólo hubo dificultades en dos casos... En el caso de Harold Hartley hubo que forzar una puerta. Los agentes mostraron a Hartley, a través de una ventana, sus credenciales y la orden de captura, alumbrándolas con una linterna para que pudiese leerlas y comprenderlas. Como a pesar de todo se negó a franquear la entrada, los agentes le dieron cinco minutos para abrir la puerta. Después la forzaron y lo arrestaron. El procedimiento, desde luego, fue perfectamente legal...

En el segundo caso, un agente de la delegación de Milwaukee telefonó al domicilio del doctor X. y le informó personalmente: «Habla el F. B. I. Tenemos una orden de arresto contra usted. Hay agentes apostados junto a su puerta. Abra y déjelos entrar». El doctor X. preguntó: «¿Por qué es el arresto?», a lo que repuso el agente: «Eso se le explicará más tarde». Los agentes encargados del procedimiento en la residencia del doctor X., que estaban allí desde las 4 de la mañana (5 a. m. hora de Detroit), escucharon la campanilla del teléfono y aguardaron hasta que el doctor X. cortó la comunicación. Después llamaron a la puerta, diciendo: «Somos agentes del F. B. I. Tenemos una orden de arresto contra usted. Abra la puerta». El doctor X se negó a abrir la puerta, aunque los agentes repitieron varias veces la intimación. En vista de la continuada negativa, los agentes forzaron la puerta.

Todos los detenidos, salvo una mujer, fueron esposados. El F. B. I. había adoptado esa práctica dos años antes, cuando un sospechoso arrestado por un delito menor, a quien no le habían puesto esposas, se liberó del agente que lo conducía y lo mató de un balazo. Al llegar al edificio del F. B. I. les fueron quitadas las esposas. La mayoría de los detenidos se negaron a hablar, hasta que se les permitió consultar con sus abogados, cosa que ocurrió después del almuerzo. Ante el juez, permanecieron mudos. Se decretó su prisión preventiva, y después el juzgado los entregó a cuatro oficiales de justicia, que los engrillaron a una cadena, sistema que utilizaban los oficiales de justicia en los tribunales de Detroit cuando llevaban a la cárcel a más de un detenido.

Los reporteros fotografiaron a los detenidos rumbo a la cárcel, sujetos a la cadena. Y entonces estalló la tormenta. Se acusó al F. B. I. de usar métodos medievales, humillando a personas que no eran delincuentes. Un diario, comentando la foto de los engrillados, afirmó severamente en su editorial que los arrestos efectuados en plena madrugada, y el esposamiento y encadenamiento de los presos, suscitaban la imagen de «una Gestapo que puede arrastrar a las personas al tribunal y a la cárcel, cubriéndolas de ignominia, imponiendo las condiciones que a los captores se les ocurren, y sin obligación de rendir cuentas...». El F. B. I. negó ser responsable del engrillamiento, pero sus protestas fueron ahogadas por el tumulto que se produjo a continuación.

La sección Detroit de la Defensa Internacional del Trabajo (*International Labor Defense*), cuyo presidente era el acusado Hartley, distribuyó un panfleto, en que acusaba a Hoover de crear una Gestapo, y agregando que el Ejército, la Marina y el F. B. I., al trazar planes de movilización para caso de guerra, se «complotaban» con el fin de derrocar la democracia norteamericana por la fuerza. En el *Daily Worker* apareció un artículo firmado por Hartley en el que acusaba a los agentes del F. B. I. de «tratarlo duramente». Dijo que cuando él mencionó la Declaración de Derechos, un agente le respondió:

—Nosotros sólo recibimos órdenes del jefe del F. B. I., aquí presente, el señor Bugas. La Declaración de Derechos no significa nada.

Otro órgano periodístico, la *New Republic*, en un editorial titulado «La O. G. P. U. Americana», dijo lo siguiente:

En países extranjeros, los gobiernos someten al pueblo a sus respectivas Gestapos. En este país, Hoover tiene el apoyo voluntario de todos los que se deleitan con las películas de «gangsters» y las revistas policiales de diez céntimos... El procurador general Jackson, que iguala en coraje y experiencia a sus antecesores, bien podría imitar lo que algunos de ellos hicieron para combatir la psicosis bélica. Harlan Stone, uno de los más grandes procuradores generales que ha tenido el país, actual miembro de la Suprema Corte, redujo el Servicio a sus dimensiones normales, después que fue inflado por William J. Burns, como lo está ahora por J. Edgar Hoover (1). Cuando fue elegido presidente Herbert Hoover, creó una comisión cuyo logro máximo fue un minucioso estudio de las ilegalidades en que incurren los representantes del orden.

No se decía que era el propio Stone quien había designado a J. Edgar Hoover para el cargo que ocupaba, por recomendación de Herbert Hoover, y que ambos siguieron siendo íntimos amigos del director del F. B. I.

Antes que apareciera publicada la crítica de la *New Republic*, Jackson revocó la orden, impartida por Murphy, de procesar a los implicados en el caso de reclutamiento de voluntarios para el ejército republicano español. El 16 de febrero anunció que había ordenado retirar los cargos. «No veo las ventajas de resucitar en los Estados Unidos, a esta altura de las cosas, los rencores del conflicto español, puesto

(1) En el año fiscal concluido el 30 de junio de 1924, el personal del Servicio totalizaba 657 personas, de las cuales 441 eran agentes y 216 empleados administrativos. Al término del año fiscal inmediato posterior, el personal había disminuido a 501, de los cuales 402 eran agentes y 99 empleados administrativos. Al discutirse el presupuesto correspondiente al año fiscal 1941, quedó constancia de que el número de agentes había aumentado a 4.272, lo que representaba un incremento del 137 por ciento con respecto al año fiscal 1938, mientras que el presupuesto aumentó en un 194 por ciento, y el trabajo realizado en un 327,7 por ciento en el mismo período.

que la guerra civil ha terminado, y en la misma España se están dictando ciertas medidas de amnistía».

Pero el ataque más severo provino de un conocido liberal, el senador George W. Norris, de Nebraska, que, inquieto por el editorial de la *New Republic* y por otras denuncias que le estaban llevando, escribió a Jackson, diciendo que el procurador general sabría mejor que él si «se han violado e ignorado los legítimos derechos y libertades de cualesquiera de nuestros conciudadanos», pero dejó sentado que consideraba bajo sospecha al F. B. I. y sugirió que se investigaran los arrestos de Detroit.

Norris no aguardó a que Jackson respondiera a su carta. El 26 de febrero informó al Senado que reclutar voluntarios norteamericanos para el ejército leal español era simplemente una violación formal de la ley, y no un crimen de «mala fe». Hizo incorporar al Diario de Sesiones del Congreso la crítica del F. B. I. publicada por la *New Republic*, y agregó:

No presento estas cuestiones como hechos de los que yo tenga conocimiento personal, pues no lo tengo. Confío... particularmente en el editorial de la revista *New Republic*, por la que creo que todos abrigamos el más profundo respeto, y que en general! no hace afirmaciones ni formula cargos sin previa investigación.

Muchos enemigos del F. B. I. esperaban que Jackson se pusiera de parte de ellos, contra Hoover y el F. B. I. Pero Jackson les dio una sorpresa. Se puso de parte de Hoover. Los columnistas Joseph Alsop y Robert Kintner explicaron que Jackson había estudiado las actividades del F. B. I., descubriendo «con sorpresa» que el Servicio actuaba de acuerdo con todas las normas legales⁽¹⁾.

El 1º de marzo, Jackson escribió a Norris, diciendo:

Esas órdenes de arresto (en el caso de los voluntarios españoles) fueron entregadas al Servicio para que les diera cumplimiento en circunstancias que hacían presumir que era urgente e importante ponerlas en práctica. Al recibir orden de captura de los implicados, el deber del Servicio era, a todas luces, practicar los arrestos en forma rápida, simultánea y sin evasiones. También

(1) El F. B. I. encontró apoyo en miembros de ambas Cámaras del Congreso, editorialistas y columnistas de periódicos, comentaristas de radio y ciudadanos particulares. Earl Godwin, decano de los comentaristas de Washington, en su audición de la N. B. C., el 13 de marzo de 1940, sintetizó el sentimiento general de los que apoyaban al F. B. I. al decir: «Entretanto, creo que muchos de los ataques que se dirigen contra Hoover no son bienintencionados, sino que resultan de la creencia alarmista y sentimental de que están en juego las libertades civiles... Cada vez que el *Common* choca con el concepto de la libertad civil, está equivocado... Pero cuando los enemigos de este país logran atraer a notorios liberales a una causa que, hoy mismo, con la destrucción de Finlandia iniciada esta mañana, se acerca cada vez más a nuestro suelo, entonces yo afirmo que es hora de despertar. En muchos casos, un ataque contra Hoover es un ataque contra el presidente de los Estados Unidos; y peor todavía, un ataque contra la estabilidad del gobierno».

era su deber hacerlo sin despliegue innecesario de fuerza y sin humillar a los detenidos... He analizado todos los hechos que son de mi conocimiento, y no encuentro ninguno que justifique un cargo de mala conducta contra el Servicio Federal de Investigación.

Norris, sin embargo, se negó a aceptar las seguridades de Jackson. Escribió al procurador general diciendo que había hablado personalmente con Harold Hartley, «una de las infortunadas víctimas», y que tenía en su poder declaraciones firmadas por muchos otros detenidos. Fundándose en estas declaraciones, decía Norris:

Los prisioneros fueron sometidos a apremios ilegales (*third-degree methods*) desde el momento en que se los arrestó hasta las tres de la tarde, hora en que se los llevó al juzgado, métodos que no sólo son vergonzosos e indefendibles, sino que debían tener por única finalidad intimidarlos, asustarlos, colmar su espíritu de temor y ansiedad...

Norris insistió en que Jackson debía realizar una investigación más minuciosa, y agregó que cuando llegara a una conclusión, «yo tendré fe y confianza en esa conclusión».

Jackson ordenó las pertinentes averiguaciones. Henry Schweinhaut⁽¹⁾, jefe de la Sección Libertades Civiles del Departamento de Justicia, se pasó tres semanas interrogando a las presuntas víctimas, sus familiares, agentes del F. B. I., fotógrafos, periodistas, y en general a todos los que tenían alguna vinculación con el caso: noventa y ocho personas en total. Descubrió que los fotógrafos, reporteros, auxiliares del juzgado, ascensorista y otros, concordaban en que el F. B. I. no había engrillado a los prisioneros. En cuanto a los apremios ilegales, Schweinhaut declaró: «Abrigo el convencimiento de que... la conducta de los agentes no está sujeta a críticas justificadas».

Jackson remitió a Norris el informe de Schweinhaut, diciendo: «Naturalmente, tengo tanto interés como usted en que, al custodiar las leyes, no violentemos nuestras libertades civiles tradicionales. Pero estoy seguro de que, si hay alguien en este país que pone en peligro esas libertades, no es el F. B. I.».

Pero si bien Norris, en marzo, estaba dispuesto a aceptar el veredicto de Jackson, en mayo no tenía ya fe ni confianza en dicho veredicto. Dijo que el informe de Schweinhaut era «una engañifa» y calificó a Hoover como «el hombre más ansioso de publicidad en el continente americano».

(1) Por aquella época Henry Schweinhaut era ayudante especial del procurador general y se ocupaba de los asuntos vinculados a los derechos civiles. El 10 de enero de 1945 fue designado juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia.

A comienzos de marzo, un confidente del F. B. I. había informado que el Comité Nacional del Partido Comunista, reunido en la ciudad de Nueva York, había resuelto que estaba «maduro el momento» para convertir los casos de Detroit en un escándalo nacional. Se decidió, según el informante, «pedir a los sindicatos y a todas las organizaciones progresistas del país que exijan una investigación del F. B. I.»⁽¹⁾.

Tales exigencias no tardaron en producirse. Hubo un diluvio de resoluciones mimeografiadas, presuntamente adoptadas por grupos obreros. Decían: «Hay motivos de sobra para creer que J. Edgar Hoover está preparando una repetición de las vergonzosas batidas de Palmer, en las que él participó, con el objeto de atacar y destruir los sindicatos». Pidieron al presidente y al procurador general que suspendieran a Hoover mientras durase la investigación.

Al mismo tiempo un panfleto de setenta y seis páginas, sin firma, se distribuía confidencialmente a ciertos escritores de Washington. Se titulaba «La tarea de investigación del F. B. I. en relación con actividades basadas en ideas u opiniones económicas o políticas». Pero los distribuidores cometieron un error. Entregaron un ejemplar a un prestigioso hombre público liberal, que le echó un vistazo y lo llevó al F. B. I., aunque él mismo, en algunas oportunidades, había criticado al F. B. I.

—Con toda honestidad —dijo—, creo que deben conocer ustedes el origen de algunos de estos infundios. Yo no quiero saber nada.

El panfleto era un alegato abogadil, cuidadosa y hábilmente preparado con el fin de «probar» que el F. B. I. constituía una amenaza contra las libertades civiles, y que Hoover era personalmente responsable del escandaloso funcionamiento del Servicio durante la primera guerra mundial y durante el gobierno de Harding. Se echaba la culpa a Hoover por las «Batidas Rojas» del procurador general Palmer, y se le acusaba de formar un organismo que desafiaba la Constitución y a la Suprema Corte. El panfleto abundaba

(1) Se resucitó la vieja imputación de que en 1920 el Servicio, dirigido por William J. Flynn, ayudó al fiscal de Boston a fraguar cargos de asesinato contra los anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, suprimiendo pruebas que hubieran demostrado su inocencia. En 1927, el procurador general John G. Sargent, el procurador general auxiliar Oscar Luhring y más tarde, el procurador general interino George R. Farnum, revisaron los viejos archivos del Servicio con el director Hoover. No encontraron en ellos nada que estableciera la culpabilidad o inocencia de Sacco y Vanzetti, y determinaron que el Servicio se limitó a investigar la influencia comunista en una campaña publicitaria mundial destinada a obtener la libertad de los condenados. Anteriormente, una comisión asesora designada por el gobernador de Massachusetts, Alvan T. Fuller, e integrada por el presidente de Harvard, A. Lawrence Lowell; el presidente del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Samuel W. Stratton; y el juez Robert Grant, había respaldado el fallo del juez que condenó a los anarquistas. Sacco y Vanzetti apelaron a la Suprema Corte y al presidente Coolidge, pero sin éxito. Fueron ejecutados el 22 de agosto de 1927.

en insinuaciones de actos ilegales cometidos por el F. B. I. bajo el mando de Hoover. El autor nunca reveló su identidad, aunque el F. B. I. llegó a conocerla.

Daniel J. Tobin, presidente de la Fraternidad Internacional de Camioneros, Choferes, Obreros de Caballerizas y Auxiliares Domésticos, escribió a Hoover diciendo que él, Tobin, había sido invitado a una reunión secreta de un grupo que se proponía pedir al presidente Roosevelt, al procurador general Jackson y a miembros del Congreso, una investigación del F. B. I.

Agregaba Tobin: «Comprendo, naturalmente, que todos los hombres que cumplen funciones públicas deben pagar el precio de sus triunfos, y lo pagan con las críticas injustas y adversas que reciben, a veces de hombres que en el fondo son honestos como el senador Norris, pero más a menudo de otros que sienten en sí mismos, directa o indirectamente, el aguijón de la ley». Añadió que él no deseaba participar en la reunión, ni en otras semejantes.

La invitación a que se refería Tobin era una carta con la firma del profesor Franz Boas, de la Universidad de Columbia, presidente del Comité Americano pro Democracia y Libertad Intelectual (*American Committee for Democracy and Intellectual Freedom*), antropólogo de fama internacional. Esa invitación decía entre otras cosas: «Sin duda habrá advertido usted la inquietud con que las personas inteligentes de todo el país han comprobado la índole peligrosa y el vasto alcance de las actividades del F. B. I., recientemente denunciadas por el senador Norris...». Se estaba usando el nombre del profesor Boas para enfrentar a los intelectuales con el F. B. I.

El F. B. I. fue atacado desde otra dirección cuando el Departamento de Justicia aprobó proyectos de leyes que permitirían al Servicio presentar a los juzgados federales —en casos de subversión o delitos contra la vida— pruebas obtenidas por interferencias telefónicas⁽¹⁾.

Como en el caso de Detroit, estos ataques tuvieron un cu-

(1) Es interesante observar que muchos de los que públicamente se oponían a la interceptación telefónica la practicaban en privado. Un diario que la condenaba en sus editoriales obtuvo una primicia a comienzos de la segunda guerra mundial interceptando llamadas con ayuda de una telefonista. El periódico tenía un reportero especial que, según sus propias palabras, «...persuadió a la chica para que me conectara, y si eso no era posible, que escuchase todas las conversaciones y me las repitiese más tarde...». El teléfono así intervenido era el de un alto funcionario del gabinete. El reportero obtuvo los detalles de una conversación entre el presidente Roosevelt y dicho funcionario, «a las 4 a. m., quince minutos después...» que Roosevelt llamó para informar que Polonia estaba en guerra con Alemania. Utilizando el mismo procedimiento, el periódico consiguió otra primicia —la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña— una hora antes de que el primer ministro Neville Chamberlain propalara su discurso radial. ¿Cómo se sabe todo esto? El reportero escribió a su jefe, y la carta fue recogida de un cesto de papeles por alguien que pensó que no era muy limpio eso de interceptar las conversaciones del presidente. El denunciante llevó la carta al F. B. I., que impidió nuevas interferencias.

rioso origen. Nacieron de una denuncia de interferencia telefónica durante la campaña electoral de 1939 en Rhode Island. El Departamento de Justicia ordenó una investigación y el F. B. I. presentó pruebas de que la interferencia había existido, pero el Departamento prefirió no iniciar acciones judiciales⁽¹⁾. Fundándose en lo descubierto por el F. B. I., el senador Theodores F. Green, de Rhode Island, pidió que el Senado investigara las prácticas de espionaje telefónico.

El pedido de Green fue resuelto favorablemente por la Comisión de Comercio Interestatal del Senado, que emitió una declaración condenando redondamente todo sistema de interferencia telefónica. No se mencionaba el F. B. I., pero se murmuró al oído de los reporteros que dicho documento apuntaba contra el Servicio.

En seguida, vastos círculos interpretaron que la comisión pedía que se investigara al F. B. I. El senador Green protestó que su proyecto de resolución solicitando una indagatoria no iba dirigido contra Hoover ni contra el F. B. I. «A decir verdad —declaró Green—, esta investigación del sistema de interferencias telefónicas ha sido, en parte, resultado de pruebas descubiertas por el Servicio Federal de Investigación en el Estado que represento».

Jackson acudió nuevamente en defensa del F. B. I. Dijo: «En una categoría limitada de casos, tales como secuestros, extorsiones, exacciones por parte de raqueteros..., el procurador general opina... que debe autorizarse la vigilancia telefónica, con una adecuada fiscalización». Y agregó: «El criterio en que se fundan las anteriores observaciones, referentes a las actividades del hampa, parece aplicable, con mayor razón, a las actividades de espías, saboteadores y otros elementos que amenazan la seguridad nacional».

En mitad del escándalo producido por el espionaje telefónico, Jackson anunció que por recomendación de Hoover había ordenado que el F. B. I. interrumpiera toda vigilancia de teléfonos. También declaró que el Departamento de Justicia no iniciaría acciones judiciales por cuenta de ningún departamento del gobierno cuando las pruebas se redujesen a informes obtenidos por interferencia telefónica. Pero el presidente Roosevelt tenía otras ideas, y ordenó que el F.B.I.

(1) Las conversaciones telefónicas del intendente de Pawtucket (Rhode Island) eran interceptadas por sus adversarios políticos. J. Howard McGrath, entonces fiscal nacional y más tarde senador nacional y procurador general, exigió —a pedido de la Comisión de Comunicaciones Federales— que el F. B. I. emprendiera una investigación. Pero, cuando el Departamento de Justicia renunció a iniciar acciones judiciales, el Senado resolvió tratar el incidente. Fue entonces cuando los mismos culpables de interceptación telefónica denunciaron la ingerencia del F. B. I., calificándola de «policea secreta».

reanudara la vigilancia telefónica en casos aprobados por el procurador general⁽¹⁾.

El tema central de todos los ataques contra el F. B. I. era que Hoover había dirigido las «Batidas Rojas» de Palmer en 1919, en cuyo transcurso se violaron las libertades civiles, y que el F. B. I. estaba volviendo a esas mismas prácticas⁽²⁾. El columnista Ralph McGill predijo: «Envidiosos políticos y comunistas coligados (contra Hoover y el F. B. I.) no irán muy lejos».

Emanuel Celler, miembro de la Cámara de Representantes por el Estado de Nueva York, estaba entre los defensores de Hoover. En un programa radiotelefónico recordó que Hoover no había tenido responsabilidad alguna en los «raids» de Palmer, agregando: «En esa época Hoover era ayudante especial del procurador general, y actuaba de acusador en muchos casos judiciales. Pero nada tenía que ver con el arresto o la presunta persecución de individuos. Se limitaba a tramitar ante los tribunales los casos que le encomendaban». Celler pidió apoyo para un proyecto de ley que acababa de presentar, con aprobación de Jackson, y que en ciertos casos permitiría no sólo interceptar conversaciones telefónicas, sino ofrecerlas como pruebas ante los tribunales.

Uno de los oyentes de Celler era el abogado Morris Katzeff, que entonces vivía en Boston, y que fue uno de los defensores de los detenidos durante las batidas de Palmer. Katzeff escribió a Hoover:

Recordé inmediatamente los casos de 1919 y también recordé que usted no tuvo nada que ver con las irregularidades y malos tratos dispensados a extranjeros sospechosos de comunismo; también recuerdo una audiencia ante el entonces Secretario de Trabajo, Mr. Wilson, en Washington, a la que asistieron Charles Recht, de Nueva York, Mr. Bachrach, de Chicago, y yo, pues en ella usted deploró con tanta sinceridad como nosotros los incidentes ocurridos durante el arresto de extranjeros en Nueva Inglaterra. Y también recordé la impresión de auténtica sinceridad que usted

(1) Las nuevas reglas para cumplir la orden de Roosevelt, recomendadas por Hoover, exigían que cada caso de interferencia telefónica se justificara por escrito ante el procurador general, que aprobaría o no dicha medida; en su ausencia, el procurador general sustituto podía otorgar al F. B. I. esa autorización. El director del F. B. I. es el único jefe de organismos federales de inteligencia o investigación que no está facultado para disponer interferencias telefónicas por propia voluntad.

(2) El extinto secretario del Interior Harold L. Ickes, al ocuparse de una interferencia telefónica dispuesta por el F. B. I. en un caso de espionaje, la criticó en estos términos: «Equivale a pegar el ojo a la cerradura, o el oído a la hendidura de la puerta, para recoger chismes envidiosos o maliciosos, y utilizarlos contra los empleados del gobierno y otros que no tienen el derecho constitucional a la defensa». Pocos años antes, Louis R. Glavis, que fue jefe del personal de investigación del Departamento del Interior, había declarado ante la Comisión de Tierras Públicas del Senado que en el propio Departamento del Interior estuvieron intervenidos los teléfonos por orden del secretario Ickes... después que éste y Glavis convinieron en la necesidad de poner fin a ciertas filtraciones de informes confidenciales. Al comparecer ante la Comisión, sin embargo, Ickes declaró que suspendió las interceptaciones apenas tuvo noticia de ellas.

me causó, y la corrección con que presentó sus argumentos. Y por eso, siendo yo uno de los poquísimos hombres que no teniendo compromiso alguno pueden, por conocimiento personal de los hechos, acudir en defensa de alguien injustamente agraviado, he considerado mi deber hacerlo.

Los ataques contra Hoover y el F. B. I. se prolongaron todo el año 1940. Empezaron a disminuir y perder fuerza después de un episodio ocurrido durante el banquete que ofrecieron los periodistas de la Casa Blanca, el 16 de marzo de 1940, reunión anual de gala a la que asisten generalmente altos funcionarios, líderes políticos y magnates financieros.

El presidente Roosevelt, como invitado de honor, ocupaba la cabecera de la mesa, sobre una plataforma elevada para que los centenares de comensales pudieran ver al jefe del gobierno. Roosevelt descubrió a Hoover entre los asistentes.

—Oye, Edgar —le gritó—, ¿qué quieren hacerte en la Colina? (Se refería a la llamada «Colina del Capitolio», *Capitol Hill*; es decir, al Parlamento).

Hoover meneó la cabeza y repuso:

—No lo sé, señor presidente.

Roosevelt sonrió y puso los pulgares verticales sobre la mesa.

—Esto es para ellos — dijo.

No tardó en saberse en Washington que Roosevelt se había puesto en contra de los atacantes de Hoover y del F. B. I.

La segunda guerra mundial

XX. - EL F. B. I. VA A LA GUERRA

La flota incursora japonesa zarpó silenciosamente de la bahía Hitokappu, en las islas Kuriles, el 25 de noviembre de 1941. Los destructores zigzagueaban nerviosamente a los flancos de la columna, tejiendo blancas cintas de espuma en torno a los seis portaaviones, los dos poderosos acorazados, los dos cruceros pesados y el tren de suministros. Todas las radios callaban mientras la jauría se deslizaba hacia el Este, en dirección a Hawaii.

Los incursores estaban a siete días de navegación de la bahía Hitokappu, cuando recibieron el mensaje inalámbrico: «Niita Kayama Nobore!» (Escalad el Monte Niitaka, es decir: ¡Al ataque!). Se apagaron todas las luces de los buques.

En la sala de radio del buque insignia, el comandante Ono escuchaba atentamente las transmisiones comerciales de las emisoras KGU y KGMB de Honolulu. Hora tras hora estuvo alerta para captar cualquier señal de alarma, cualquier cambio en la rutina de los programas. Pero no escuchó nada anormal.

Oficiales japoneses observaban a sus radiotelegrafistas trazar el derrotero de los aviones de reconocimiento norteamericano con base en la isla de Oahu, donde una desprevenida flota permanecía anclada en Pearl Harbor. Los pilotos charlaban entre sí por la radio, y eso permitía establecer sus movimientos. La carta donde los mismos quedaban registrados tenía un aspecto muy promisorio para los japoneses. Todos los reconocimientos se efectuaban en dirección sudoeste.

Poco antes del amanecer del 7 de diciembre, los incursores habían llegado, sin ser vistos, a un punto situado a doscientas millas al norte de Oahu. Al alba, los aviones de guerra despegaron rugiendo de las plataformas como grandes halcones armados para la muerte.

Los aviones en picada y torpederos atacaron en primer término la flota de Pearl Harbor. Después iban los bombarderos horizontales, y tras ellos una tercera ola de bom-

barderos en picada. Desde las 7.55 hasta las 9.45 —110 minutos en total— descargaron sus bombas sobre la flota y ametrallaron a baja altura las proliferas hileras de aviones del ejército, marina e infantería de marina que reposaban en el cinturón de aeródromos cercanos⁽¹⁾.

Aún no había cesado el bombardeo, cuando el jefe de la delegación del F. B. I. en Honolulu, Robert L. Shivers⁽²⁾, llamó a la sede central en Washington. Sólo hubo una breve demora para conseguir la comunicación a través de 5.000 millas de océano y tierra. En Washington era aproximadamente las 14.30.

La telefonista en Washington traspasó la urgente llamada a New York City, donde J. Edgar Hoover estaba pasando el fin de semana. Después llamó al Griffith Stadium, donde otros altos funcionarios del F. B. I. presenciaban el partido profesional de fútbol entre el equipo de Redskins, de Washington y el de Eagles, de Filadelfia. La mesa de información del Centro de Comunicaciones sabía cuál era el palco que ocupaban los altos jefes del Servicio; un mensajero informó al ayudante del director, Edward A. Tamm, que había una urgente llamada telefónica para él.

Tamm llegó al teléfono a tiempo para escuchar a Shivers, que decía a Hoover:

—Los japoneses están bombardeando a Pearl Harbor. No hay la menor duda: esos aviones son japoneses. Es la guerra. Usted mismo podrá oír las explosiones. ¡Escuche!

Shivers acercó el teléfono a una ventana abierta y Hoover y Tamm escucharon el estallido de las bombas.

Shivers dio a Hoover un resumen de los informes que había recogido con respecto a daños y víctimas. Y el director del F. B. I. ordenó a Shivers y Tamm que pusieran en práctica inmediatamente los planes para caso de guerra elaborados varios meses antes.

Tamm corrió al palco del estadio y murmuró dirigiéndose a sus colegas:

—¡Los japoneses están bombardeando a Pearl Harbor! ¡Vamos!

En Nueva York, Hoover se dirigió a escape al aeropuerto

(1) El ataque contra Pearl Harbor causó 3.435 bajas entre el personal de las fuerzas armadas. Ocho acorazados, tres cruceros livianos, tres destructores y cuatro buques más fueron destruidos o gravemente dañados. Además, fueron destruidos 138 aviones norteamericanos. Los japoneses perdieron veintinueve aviones y cinco submarinos de bolsillo.

(2) Robert L. Shivers ingresó como agente el 23 de abril de 1920 y renunció voluntariamente el 30 de junio de 1944. Además de la jefatura en Honolulu, fue jefe de las delegaciones de Little Rock, Pittsburgh, Buffalo y Miami. La tensión que debió soportar durante el ataque nipón y después de él fue la causa probable de un ataque cardíaco que sufrió en 1942. Después de su renuncia Shivers fue designado recaudador de aduanas en Hawaii, cargo que ocupó hasta su muerte, ocurrida el 28 de junio de 1950.

de La Guardia, para tomar un avión que lo condujera de regreso a Washington.

Dos días antes, Hoover había ordenado a sus hombres que estuvieran dispuestos para «arrestar inmediatamente a aquellos ciudadanos japoneses residentes en su distrito que han sido señalados para quedar en custodia». Ahora toda la organización del F. B. I. entró en estado de alerta. Cada delegación sabía exactamente lo que debía hacer cuando llegara la orden. Pero Hoover y sus hombres no pudieron tomar iniciativa alguna hasta que el presidente Roosevelt emitió una proclama de emergencia y el procurador general Francis Biddle firmó la autorización para que el F. B. I. actuara. Mientras Hoover regresaba a su despacho desde Nueva York, el procurador general Biddle hacía otro tanto desde Detroit.

El F. B. I. había preparado, en el mayor silencio, una lista de extranjeros de tendencia antinorteamericana o que podrían resultar peligrosos en caso de guerra. La lista incluía 770 japoneses. Las delegaciones regionales del F. B. I. sabían exactamente quiénes eran y dónde encontrarlos. Producida la alerta, los agentes aguardaban con ansiedad la orden de proceder.

El jefe de la delegación de San Francisco, N. J. L. Piper, llamó a Louis Nichols, entonces director auxiliar.

—Los muchachos se están poniendo nerviosos —le dijo—. ¿Nos movemos?

—Todavía no —contestó Nichols—. El presidente tiene que lanzar una proclama, y después hay que esperar que lleguen las órdenes firmadas. No arreste a nadie, pero puede poner vigilancia a las personas de su lista. No los deje escapar, aunque tenga que sentar un agente en cada umbral.

Similares consultas y órdenes similares despachaban otros altos jefes.

Cuando al anochecer de ese domingo el presidente Roosevelt ordenó la detención de ciudadanos de países enemigos y Biddle hubo firmado los papeles necesarios, el sistema de teletipos del F. B. I. transmitió un mensaje urgente:

Coloque inmediatamente bajo custodia a todos los japoneses clasificados en las categorías A, B y C en las instrucciones previamente remitidas a usted. Actúe en forma inmediata e informe regularmente al Servicio, por teletipo, sobre la identidad exacta de las personas arrestadas. Dichas personas deben ser conducidas al funcionario más próximo del Servicio de Inmigración y Naturalización. — Hoover.

En todo el territorio de los Estados Unidos, y también en Hawaii, Alaska y Puerto Rico, agentes del F. B. I. iniciaron la redada, que un día después incluiría a ciudadanos ale-

manes e italianos clasificados como enemigos. Pero esta vez —en agudo contraste con lo ocurrido durante la primera guerra mundial— cada extranjero detenido pudo hacerse escuchar por un tribunal civil y designar abogado defensor. Los agentes del F. B. I. contaron con la ayuda de policías locales que habían estudiado problemas de guerra en las escuelas creadas por el F. B. I. en anticipación de la emergencia.

El procedimiento, por su velocidad y coordinación, fue una notable hazaña. Los cuidadosos preparativos permitieron tomar en custodia 3.846 ciudadanos extranjeros en las primeras setenta y dos horas de la guerra sin que se registraran actos de violencia⁽¹⁾.

Hoover trazó un plan de actividad permanente para las veinticuatro horas del día. Se cancelaron todas las licencias anuales. En la embajada y consulados japoneses se colocaron guardias preventivas. Se ordenó a las compañías de aviación que hasta nuevo aviso no transportaran pasajeros japoneses ni aceptaran encomiendas aéreas despachadas por japoneses, o dirigidas a ellos, en previsión de casos de sabotaje. Las delegaciones del F. B. I. recibieron orden de alertar a las firmas industriales con contratos de guerra, poniéndolas en guardia contra tentativas de espionaje o sabotaje.

A pedido del Departamento de Estado, Hoover ordenó interrumpir los servicios de prensa y otras comunicaciones al Japón y territorio ocupado. La Comisión Federal de Comunicaciones negó a Hoover autoridad para impartir esas órdenes, e informó a las compañías que por el momento no debían tener en cuenta las instrucciones del F. B. I. Pero las compañías obedecieron a Hoover.

En aquellas tumultuosas horas iniciales de la guerra, el presidente Roosevelt ordenó verbalmente a Hoover que se hiciera cargo de la censura. Esa orden fue seguida por un memorándum dirigido a los secretarios de Guerra, Marina, Estado y Tesoro, jefe de Correos y Comisión Federal de

(1) Durante la segunda guerra mundial, se arrestó a 16.062 extranjeros enemigos. 7.043 eran alemanes; de ellos, 1.225 fueron internados; 2.449 salieron bajo caución juratoria; 2.589 fueron puestos en libertad; 691, repatriados, y 47 murieron. Quedaron pendientes de resolución 42 casos. Los japoneses arrestados sumaron 5.428. De ellos, se internó a 1.532; 2.423 salieron bajo caución juratoria; 995 quedaron en libertad; 415 fueron repatriados, y 88 murieron. Quedaron pendientes de resolución 15 casos. Los italianos arrestados fueron 3.567. Se internó a 367; se excarceló bajo caución juratoria a 861; 2.237 fueron puestos en libertad; 87 fueron repatriados, y 14 fallecieron. Quedó un caso pendiente de resolución. Estas cifras incluyen a 802 marineros alemanes y 1.271 marineros italianos detenidos antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra. Además se arrestó a 24 húngaros, búlgaros y rumanos; 8 salieron bajo caución juratoria, y 15 quedaron en libertad. En un caso no hubo resolución.

Se realizaron 25.581 allanamientos de locales pertenecientes u ocupados por ciudadanos de países enemigos, y se secuestraron 3.127 transmisores de radio, 2.240 cartuchos de dinamita, 4.626 armas de fuego, 306.247 proyectiles y otros materiales de tenencia prohibida.

Comunicaciones, diciendo: «En el día de la fecha ordeno a J. Edgar Hoover, director del Servicio Federal de Investigación, que se haga cargo de todos los procedimientos de censura, hasta que yo disponga nuevas medidas. — Franklin D. Roosevelt».

El presidente acudió a Hoover, porque el F. B. I. ya había trazado para la emergencia un plan minucioso, que incluía la censura voluntaria por parte de la prensa y la radio; dicho plan debía ser llevado a la práctica por un organismo autónomo, que dependiera únicamente del presidente. Se basaba en estudios realizados por el F. B. I. en Inglaterra. Quiso la casualidad que el lunes antes del ataque a Pearl Harbor había terminado de imprimirse la carta completa de organización del plan. La idea de Hoover era que el director de Censura debía ser un civil designado por el presidente, y que el ejército, la marina, el F. B. I. y otras organizaciones gubernamentales vinculadas a la censura sólo debían tener facultades asesoras.

El lunes 8 de diciembre, Hoover convocó a una conferencia de representantes de los departamentos de Estado, Correos, Tesoro, Guerra, Marina, Comisión Federal de Comunicaciones y Oficina de Datos y Estadísticas. Ante ellos expuso su plan. El representante del Tesoro formuló una objeción. El secretario del Tesoro, Morgenthau —dijo—, quería conservar el derecho de «ejercer la censura sobre todas las comunicaciones tangibles, salvo la correspondencia». El argumento para asignar dicha función al Tesoro era que durante la primera guerra mundial el presidente Wilson había delegado en dicha repartición la facultad de censura.

Pero Hoover se opuso. Sugirió que debía considerarse la posibilidad de «obtener de la prensa y la radio una censura voluntaria...». Dijo que en su opinión ningún programa de censura podía tener éxito sin el apoyo del público, y que el mejor procedimiento para obtener ese apoyo era solicitar la colaboración y el asesoramiento de la prensa y la radio.

La posición de Hoover fue respaldada por otros, y la comisión de reglamentos de la conferencia aprobó una recomendación que decía:

La Dirección de Censura y la organización de la censura no deben depender de ninguna de las oficinas gubernamentales existentes, y deben estar libres de toda fiscalización militar, naval o de entidades civiles que existen en la actualidad, puesto que muchos departamentos gubernamentales serán «clientes» de la organización de censura (o sea, estarán sujetos a ella), y ningún «cliente» debe fiscalizar la administración del organismo. La experiencia en Inglaterra ha demostrado particularmente que la censura debe estar libre de la fiscalización militar y naval.

La Conferencia aprobó también la sugerencia de Hoover: que el director de Censura fuese un «ejecutivo» vinculado al periodismo. Se recomendó «designar lo antes posible un director permanente de Censura, civil, preferiblemente con experiencia periodística y, como condición indispensable, con capacidad ejecutiva». La descripción parecía hecha a la medida de Byron Price, director ejecutivo de Noticias de la Associated Press. El presidente Roosevelt lo designó para el cargo el 16 de noviembre.

Byron Price organizó la censura sobre la amplia base de la cooperación voluntaria. Debía ser la suya una dependencia susceptible de ser desmontada (como sucedió) apenas concluido el estado de emergencia⁽¹⁾.

Las graves responsabilidades en el campo de la seguridad nacional impuestas por la guerra al F. B. I. obligaron a Hoover a suavizar temporariamente los requisitos de ingreso al Servicio. Hasta entonces, sólo podían ingresar quienes tuvieran título de procurador, abogado o contador. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, los efectivos totales del Servicio sumaban 7.420; de los cuales 2.602 eran agentes. Hoover ordenó inmediatamente a las delegaciones regionales entrevistar a egresados de la Academia Nacional del F. B. I. que reunieran todas las condiciones, salvo experiencia forense. El F. B. I. necesitó agrandarse para cumplir un inmenso trabajo. El número de agentes ascendió a 5.072⁽²⁾. Dos años después de estallada la guerra, los efectivos totales en servicio activo eran 13.317.

Nada más que para investigar el diluvio de rumores sobre casos de espionaje y sabotaje hacían falta decenas de agentes. Algunos rumores llegaban al absurdo, por ejemplo: en los cañaverales de Hawaii obreros japoneses habían cortado enormes flechas que apuntaban a los objetivos militares; pesqueros japoneses en Hawaii suministraban provisiones y combustible a submarinos enemigos; en la costa oeste de los Estados Unidos la quinta columna preparaba un alzamiento que coincidiría con el desembarco de un ejército de invasión; norteamericanos de origen japonés planeaban envenenar los depósitos de agua de la costa oeste; jardineros japoneses cargaban en sus camiones flores y hortalizas impregnadas de arsénico.

(1) La Oficina de Censura dejó de funcionar y fue clausurada el 15 de agosto de 1945.

(2) Los secretarios de Guerra y de Marina se dirigieron por carta a todos los agentes y funcionarios del Servicio que formaban parte de la oficialidad de reserva para solicitarles que renunciaran a pedir destino militar, «pues lo que importa... es utilizar cada hombre en el puesto en que más pueda contribuir a la defensa nacional...». Entre ellos se contaban Hoover, teniente coronel de la reserva, y Tolson, comandante de la reserva. El F. B. I. sólo pidió exención militar para aquellos hombres cuyos servicios consideraba vitales.

El F. B. I., funcionarios de inteligencia militar y policías locales seguían la pista a los rumores y descubrían su falsedad. No hubo sabotaje enemigo después de Pearl Harbor. Los saboteadores potenciales fueron detenidos demasiado rápido. Pero había que investigar cada denuncia.

Aún no se había disipado la agitación producida por el estallido de la guerra, cuando apareció en Washington un panfleto titulado «¿Duerme el F. B. I.?». Tanto en apariencia como en contenido tenía una notable semejanza con otro panfleto anónimo de cincuenta y seis páginas que en la primavera de 1941 llegó a manos de algunos periodistas. Aquél se titulaba: «¿Deben los Estados Unidos tener un sistema permanente de espionaje en gran escala?». La nueva publicación sugería que el F. B. I. era culpable de la falta de previsión que permitió el ataque contra Pearl Harbor.

«La imprevisión de las fuerzas armadas en Pearl Harbor fue un descuido de un momento —decía el panfleto—. Pero el fracaso de nuestras fuerzas de contraespionaje fue una falla de veintiséis meses... Los hechos, sin embargo, no serán conocidos en toda su plenitud, a menos que el gobierno decida investigar la actuación del F. B. I., organismo que depende del presidente y que tiene por función vigilar a la quinta columna en nuestro territorio; eso, por lo menos, es lo que creen el Congreso y la opinión pública»⁽¹⁾.

La verdad era que en 1940 Hoover había rehusado asumir plena responsabilidad en la investigación de actividades de espionaje, sabotaje y subversión en Hawaii, porque la sede del F. B. I. en Honolulu carecía de personal y aun de la experiencia necesaria para una tarea de ese tipo. En el transcurso de una conferencia celebrada con el almirante Walter Anderson, director de la Oficina de Inteligencia Naval, y el brigadier general Sherman Miles, subjeefe de estado mayor de la División de Inteligencia del Ejército, Hoover propuso una responsabilidad conjunta, es decir, que la Marina seguiría realizando esas tareas hasta que el F. B. I. pudiera hacerse cargo de ellas. Su recomendación fue aprobada. Por aquella época, el F. B. I. sólo tenía en Honolulu nueve agentes y cinco taquígrafos, mientras que la Marina contaba con un servicio de inteligencia formado por más de cien intérpretes, traductores y oficiales. Evidentemente, habría sido

(1) El 23 de enero de 1942, la comisión encabezada por el ministro de la Suprema Corte Owen J. Roberts comunicó al presidente Roosevelt el resultado de las audiencias celebradas para deslindar responsabilidades en relación con el ataque a Pearl Harbor. El informe decía: «El Servicio se esforzó por descubrir las actividades de espionaje en Hawaii...». Sin embargo, «...las restricciones imperantes no permitieron utilizar ciertos métodos para interceptar las comunicaciones telefónicas o radio-telegráficas servidas por las líneas comerciales que operaban entre Oahu y Japón». El informe agregaba que el F. B. I. y los servicios de inteligencia del Ejército y de la Marina no pudieron obtener datos importantes sobre los planes de guerra japoneses antes del 7 de diciembre de 1941.

una locura que el F. B. I. asumiera dicha responsabilidad.

En diciembre de 1940, Hoover escribió al agente Shivers: «En este momento, el Servicio no considera conveniente ni deseable que su delegación asuma la responsabilidad de dirigir las investigaciones de espionaje japonés en territorio de Hawaii.» Meses más tarde, en otra carta enviada a Shivers, el director del F. B. I. subrayó ese planteo: «El Servicio aún no está preparado para fiscalizar en forma exclusiva la investigación de actividades japonesas en tierra firme; por lo tanto, el Servicio no puede autorizar que su delegación asuma jurisdicción exclusiva en asuntos relativos a las actividades japonesas en las islas Hawaii».

El problema de la jurisdicción fue reconsiderado a comienzos de 1941 por el Ejército, la Marina y el F. B. I., formulándose esta recomendación: «...que el actual programa de operaciones conjuntas contra el espionaje japonés siga desarrollándose, y que el Servicio Federal de Investigación siga extendiendo sus operaciones en este campo». Este era el acuerdo que se encontraba en vigor el 7 de diciembre, al producirse el ataque japonés.

Pero, mientras dichos organismos arribaban a un plan conjunto de trabajo, entre bastidores se desarrollaba una sorda lucha entre el F. B. I. y la Comisión de Comunicaciones Federales (*Federal Communications Commission, F. C. C.*), que disputaba al F. B. I. el derecho de fiscalizar los mensajes en código despachados a Tokio, Berlín, Roma, Moscú y capitales de otros países. La divergencia surgió en septiembre de 1939, cuando Hoover sugirió al presidente de la F. C. C., James Lawrence Fly, la necesidad de un acuerdo que permitiera al F. B. I. fiscalizar esas comunicaciones, puesto que el presidente de los Estados Unidos había encomendado al F. B. I. coordinar las tareas de seguridad.

El nudo de la controversia era el criterio, sustentado por la F. C. C., de que la interferencia telefónica, o cualquier interceptación de mensajes, aun cuando se ejerciera en nombre de la seguridad nacional, era ilegal; esta interpretación de las leyes no era compartida por el Departamento de Justicia, que sostenía que las interceptaciones autorizadas eran enteramente legales, siempre que la información obtenida no fuese divulgada a personas ajenas⁽¹⁾.

(1) El F. B. I. nunca dudó de su posición legal en el asunto de las interceptaciones telefónicas, teniendo en cuenta el pronunciamiento de autoridades judiciales en el sentido de que el presidente de la Nación está facultado para ordenar dichas interceptaciones al F. B. I. Entre esas autoridades judiciales se cuentan los extintos ministros de la Suprema Corte Frank Murphy y Robert H. Jackson; el ex juez de la Cámara de Apelaciones de Circuito, Francis Biddle; el juez de Circuito Charles Fahy; el ministro de la Suprema Corte Tom C. Clark; el ex fiscal general, senador y procurador general J. Howard McGrath, y el ex juez federal James P. McGranery. Todos estos fallos sobre interceptación telefónica coinciden con el pensamiento del procurador general Herbert Brownell (h.).

A mediados de 1941 el F. B. I. y la F. C. C. no habían llegado a un acuerdo. Entonces Hoover apeló al procurador general Robert Jackson, pidiendo que se sometiera al presidente Roosevelt un proyecto de resolución que permitiera al F. B. I. vigilar las comunicaciones internacionales. La Casa Blanca aseguró a Hoover que dicha resolución sería aprobada, y los abogados del Departamento de Justicia estaban redactando el borrador final, cuando los japoneses atacaron a Pearl Harbor. Y entonces el proyecto ya no fue necesario.

La disputa sobre la supervisión de los mensajes en código era apenas una parte del conflicto planteado por aquella época entre el F. B. I. y la F. C. C. Había otros motivos de fricción. La F. C. C. se negaba a entregar al F. B. I. las fichas dactiloscópicas de sus 200.000 radiooperadores y empleados de comunicaciones. El presidente de la Comisión, Fly, alegaba que el fin de las fichas era simplemente establecer la ciudadanía de los empleados y que «... éstos podrían considerar que la entrega en bloque de sus fichas dactiloscópicas al F. B. I. constituye una grave violación de compromiso por parte de la Comisión». Argumentó asimismo que transferir esas fichas al Servicio equivalía a entregar mensajes telegráficos privados a personas no autorizadas. Y además, los dirigentes sindicales del gremio se oponían a la transferencia.

Ya estallada la guerra, intervino el procurador general Biddle. El 2 de enero de 1942, escribió a Fly:

La situación material ha cambiado en días recientes. Hay fuertes indicios de que se han transmitido mensajes radiales subrepticios a nuestros enemigos, y de que por ese medio pueden facilitarse ataques militares contra el territorio de la Nación... Le ruego que medite sobre esto; lamentaría que sucedieran cosas graves, que fácilmente pueden evitarse.

Fly repuso que la Comisión aceptaba que el F. B. I. examinara las fichas dactiloscópicas. Pero insistió en que ellas no debían engrosar los archivos permanentes del F. B. I., pues «sería lamentable que los empleados quedaran expuestos al descubrimiento de pasadas faltas, o aun delitos, que no tuvieran nada que ver con la seguridad nacional».

Biddle no aceptó la transacción; las fichas dactiloscópicas debían pasar con carácter permanente a los archivos del F. B. I. Escribió a Fly, diciendo: «Si hay alguien, en el actual estado de cosas, que puede causar verdadero daño, es un operador de radio. Considero mi deber no descuidar ninguna fuente de información relacionada con la seguridad nacional, y haré todo lo posible por que tales descuidos no se produzcan». Biddle observó también que, a menos que el F. B. I. archivara permanentemente los prontuarios, podía darse el

caso de que una dependencia gubernamental dejara cesante a un empleado desleal, y otra dependencia, ajena al asunto, volviera a darle empleo.

Casi un año después de iniciada la polémica, la F. C. C. transfirió al F. B. I. sus fichas dactiloscópicas.

Eran éstos días de conflictos y presiones. Los hombres, con los nervios tensos, se agotaban hasta quedar exhaustos. El temor engendraba la histeria, y la histeria —como en la primera guerra mundial— trastornaba el juicio de muchos.

Algo de esto hubo cuando se resolvió arrancar de sus casas y sus granjas a 120.000 norteamericanos de origen japonés, residentes de la costa oeste, y trasladarlos a centros de reubicación. Fue un desplazamiento trágico. Hoover lo consideró el resultado de una mezcla de politiquería e histeria, y no una medida urgente de defensa nacional.

El director del F. B. I. se enteró del proyecto de evacuación la tarde del 10 de diciembre, cuando fue llamado al despacho del secretario del Tesoro, Morgenthau, para entrevistarse con éste y con otros dos funcionarios de la misma repartición. En un memorándum dirigido al procurador general Biddle, Hoover resumió lo tratado:

El secretario dijo que se había puesto en contacto con sus representantes en San Francisco, y que así pudo comprobar que la tarea que estaban desarrollando (congelamiento de capitales e inversiones japoneses) era inmensa, a tal punto que en su opinión debían tomarse medidas más drásticas para cumplirla en su totalidad. Después el secretario llamó telefónicamente al señor X, uno de sus representantes en San Francisco; todos los que estábamos en el despacho escuchamos la conversación... El señor X opinaba que era necesario arrestar a todos los japoneses de San Francisco, Los Angeles, ciudades de la bahía de San Francisco y ciertas secciones del valle de San Joaquín... El secretario me preguntó si esto era factible...

Le sugerí que lo llamara a usted por teléfono. Y agregué que en mi opinión usted se mostraría poco dispuesto a aprobar semejante proyecto, a menos que se basara en hechos capaces de justificarlo, pues yo pensaba que usted se opondría a procedimientos de arresto en masa. Señalé que en los arrestos ya efectuados de ciudadanos japoneses, alemanes e italianos, fue necesario preparar para cada caso individual una acusación fundamentada en hechos concretos, antes del arresto, y que dichas demandas debieron ser aprobadas por el procurador general; y también, naturalmente, que no se había arrestado a ciudadanos de los Estados Unidos, puesto que la facultad de arrestar abarcaba solamente a ciudadanos de países enemigos; y que a menos de existir actos específicos que permitieran fundamentar una demanda criminal, usted no habría aprobado el arresto de ningún ciudadano de los Estados Unidos.

Entonces el secretario lo llamó a usted por teléfono... y usted

acordó seguir discutiendo el asunto, pero dejando aclarado que por el momento no debía tomarse medida alguna similar a las que recomiendan los agentes del Tesoro en San Francisco...

Sin embargo, la bola de nieve había empezado a crecer. Además de la histeria, jugaban los fríos cálculos de hombres que perseguían el desplazamiento de los japoneses por razones económicas o por prejuicios raciales. La decisión de evacuar se tomó en las altas esferas del gobierno. Y así fue como decenas de millares de leales ciudadanos norteamericanos de origen nipón emprendieron un triste viaje, arrancados a sus hogares. La resolución fue cumplida por las autoridades militares.

Pero fue Hoover quien señaló el motivo real de la evacuación, en un memorándum elevado a Biddle:

La necesidad de la evacuación en masa surge primariamente de la presión pública y política, más que de los hechos reales. La histeria colectiva, y en algunos casos los comentarios periodísticos y radiales, han acumulado una presión inmensa sobre el gobernador Olson, el procurador general del Estado, Earl Warren, y las autoridades militares. Es interesante observar lo poco que se ha hablado de la evacuación en masa de extranjeros enemigos.

En la última frase, Hoover aludía al procedimiento múltiple efectuado por el F. B. I. a las 6.30 del 8 de diciembre. Coronando muchos meses de investigación, se había arrestado simultáneamente en todos los rincones del país a 733 ciudadanos japoneses que —éstos sí— eran peligrosos para la seguridad nacional. La evacuación, en cambio, en la costa oeste solamente, barrió a 120.000 personas de origen nipón, en su mayoría ciudadanos norteamericanos.

Durante este acceso de histeria, Hoover debió rechazar una ola de ofrecimientos de ciudadanos y grupos civiles de todo el país que deseaban resucitar la vieja Liga Protectora Americana de la primera guerra mundial. En opinión del director del F. B. I., el «vigilantismo» no tenía función alguna que cumplir en la segunda guerra mundial.

XXI. - ESPIONAJE, LIMITADO

Mientras las aceitosas nubes negras de la destrucción crecían como hongos sobre la flota aniquilada en Pearl Harbor, otra delgada columna de humo gris brotaba del patio del consulado japonés en Honolulu. Ardía allí una pequeña fogata alimentada por el cónsul general, Nagao Kita, y su vicecónsul, Atojiro Okuda. Estaban quemando los códigos secre-

tos y los mensajes cambiados entre Kita y el ministro japonés de Relaciones Exteriores, Togo, en aquellos días finales en que la traición alcanzó su incendiario epílogo.

Nagao Kita. Es un nombre para la historia del espionaje en la segunda guerra mundial. Si cabe señalar a un solo hombre como el agente enemigo más eficaz en la preparación del ataque contra Pearl Harbor, ese hombre es Kita. Tras la cortina de la inmunidad diplomática, fue él quien suministró a Tokio información de último minuto sobre los movimientos de buques en Pearl Harbor. Descargado el golpe, trataba de destruir las pruebas.

Pero una masa muy grande de papeles arde lentamente. Mientras Kita y Okuda alimentaban las llamas en el Consulado, el jefe de la delegación del F. B. I., Shivers, pidió al Departamento de Policía de Honolulu que colocara un guardián frente al Consulado. El guardián vió la fogata de papeles. Entró corriendo y arrebató a los airados japoneses un código y una pila de mensajes. Estos documentos fueron entregados a Shivers, que los pasó a la Marina para ser descifrados, junto con mensajes del Consulado obtenidos de las compañías comerciales de comunicaciones; dichos mensajes habían sido negados al F. B. I. hasta que los japoneses descargaron el golpe⁽¹⁾.

Cuando Shivers leyó los mensajes descifrados, exclamó, dirigiéndose a otro agente:

—¡Santo Dios! ¡Si hubiéramos tenido esto antes!
He aquí lo que decían:

*0245 (1) «PA»

Diciembre 3, 1941

De: KITA

A: MINISTRO DEL EXTERIOR, TOKIO

(Mensaje militar secreto N.º...) (Por jefe de Códigos del Consulado).

A: Jefe de Tercera Sección, Estado Mayor General Naval

DE: FUJII

Referente señales deseo simplificar comunicaciones como sigue:

(1) En las investigaciones de Pearl Harbor, el presidente de la F. C. C., Fly, explicó la posición del organismo en un memorándum que decía: «Los Estados Unidos estaban en paz con el Japón antes del ataque del 7 de diciembre de 1941, y la ley de comunicaciones de 1934 que dispuso la organización de la Comisión de Comunicaciones Federales, y de donde derivan sus atribuciones, prohibió la interferencia telefónica o telegráfica, u otra interceptación de mensajes transmitidos entre cualquier lugar de los Estados Unidos, incluso sus territorios, y un país extranjero. Puesto que esa prohibición no estaba en modo alguno derogada, la Comisión no interceptó mensajes radiotelegráficos, cablegráficos o radiotelefónicos entre los Estados Unidos (Inclusivo Hawaii) y el Japón antes del 7 de diciembre de 1941». En los casos judiciales donde ha surgido el problema de la interceptación telefónica, ningún tribunal ha fallado hasta ahora que la primitiva resolución sobre interceptaciones telefónicas, dictada por Franklin D. Roosevelt, era inconstitucional. La ley de comunicaciones reprime la interceptación y divulgación de mensajes, pero los penalistas sostienen que no existe divulgación, en sentido legal, cuando un agente del F. B. I. transmite información obtenida por interferencia telefónica, siempre que lo haga únicamente a sus superiores o a autoridades del ejecutivo gubernamental.

1. Código (siguiendo tabla sección 3 línea 8)

1. Escuadra de combate, incluyendo fuerza de patrullaje, está por zarpar.
2. Varios portaaviones se preparan para zarpar.
3. Toda la escuadra de combate ha zarpado del 1 al 3.
4. Varios portaaviones han zarpado (1 al 3).
5. Todos los portaaviones han zarpado (1 al 3).
6. Toda la escuadra de combate ha zarpado del 4 al 6.
7. Varios portaaviones han zarpado (del 4 al 6).
8. Todos los portaaviones han zarpado (del 4 al 6).

2. Señal

Luz de noche en casa de playa Lanikai.

1. Una luz de 8 a 9 p. m. indica «1». De 9 a 10 p. m., «2». Las señales de abajo hasta medianoche indican 3 y 4. Dos luces, según la hora, indican 5, 6, 7, 8. No estando de acuerdo con las (luces) de arriba, un faro de automóvil plenamente encendido y otro encendido a medias indican 1, 2, 3, 4. Dos faros plenos indican 5, 6, 7, 8.
2. En la costa de Lanikai durante el día, desde las 8 a. m. hasta mediodía, cada hora, 1 sábana indica 1, 2, 3, 4. Dos sábanas indican 5, 6, 7, 8.
3. En la bahía de Lanikai durante el día, frente al puerto, una barca con una estrella en la vela indica 1, 2, 3, 4; una estrella y signo «III» indican 5, 6, 7, 8.
4. Luz en la ventana alta de la casa de Kalama de 7 p. m. a 1 a. m., cada hora, indica 3, 4, 5, 6, 7, 8...

Diciembre 3, 1941.

De: MINISTRO DEL EXTERIOR
A: KITA, CONSUL, HONOLULU

ESTRICTAMENTE SECRETO

DESEO SE ATENGA A SU LISTA DE PALABRAS EN CODIGO (INCLUSIVE LAS USADAS EN TRANSMISIONES DE RADIO) HASTA ULTIMO MINUTO. CUANDO LLEGUE EL MOMENTO QUEME INMEDIATAMENTE Y RADIOGRAFIE AL EFECTO.

TOGO

Diciembre 5, 1941.

DE: KITA
A: MINISTRO DEL EXTERIOR, TOKIO

1. Los tres acorazados mencionados en su X239 de la mañana del viernes 5, entraron a puerto. Se disponen a zarpar el 8.
2. El mismo día zarparon el «LEXINGTON» y cinco cruceros pesados.

3. Los siguientes buques de guerra estaban anclados la tarde del 5:
 8 acorazados
 3 cruceros livianos
 16 destructores

Venían en camino 4 cruceros de la clase Honolulu y 2 destructores.

KITA

Diciembre 6, 1941

DE: TOGO, MINISTRO DEL EXTERIOR

A: CONSUL, HONOLULU

POR FAVOR INFORME INMEDIATAMENTE RUMORES DE MOVIMIENTO DE BUQUES DESPUES DEL 4.

TOGO

Allí estaban todas las pruebas del espionaje. El radiograma enviado por Kita a Tokio el 3 de diciembre demostraba que que Kita tenía un cómplice que por medio de señales recogidas por submarinos japoneses suministraba informes sobre la flota norteamericana. Las sospechas recayeron en Bernard Julius Otto Kuehn, porque Kuehn tenía una casa en Lanikai, una casa en Kalama, con una ventana en el piso alto, y una barca con una estrella en la vela.

Otto Kuehn, ciudadano alemán, llamó por primera vez la atención del F. B. I. en 1939, pues siendo un hombre sin profesión o negocios conocidos, circulaban persistentes rumores de que contaba con exagerados ingresos. En una población reducida, como la de Honolulu, tales versiones circulan con suma rapidez. Y no era un secreto para el F. B. I. que entre 1936 y 1939 Kuehn había depositado más de 70.000 dólares en un banco de Honolulu. Antaño había sido miembro del partido nazi.

Kuehn explicaba a sus amigos que su renta provenía de herencias familiares, pero al seguir el rastro del dinero el F. B. I., comenzó a sospechar que había llegado a manos de Kuehn de fuentes japonesas en Berlín. Estas sospechas se agravaron cuando el Ejército informó al F. B. I. que, según datos fidedignos, el cónsul general japonés había preguntado a su Ministerio de Relaciones Exteriores si una pareja de apellido «Friedell», en Hawaii, merecía confianza.

El F. B. I. no pudo encontrar a nadie que se llamara «Friedell». Pero los agentes observaron que el primer apellido de la señora de Kuehn era Friedel, con una sola I. Esta semejanza era algo más que una simple coincidencia, sobre todo porque la información del Ejército llegó al F. B. I. poco después que la señora de Kuehn regresara de un viaje a Tokio.

Aun así, no había contra Kuehn pruebas tangibles de espionaje, hasta que se tradujeron los mensajes del Consulado. Entonces Kuehn confesó. Admitió ser el creador del código, pero sostuvo que dicho código no llegó a utilizarse.

Kuehn declaró ante los agentes:

También quedó convenido (con Kita) que ese mismo sistema de señales podía utilizarse para emisiones radiales en onda corta, y se estableció que si el Consulado quería comunicarse conmigo, enviaría una tarjeta postal firmada «Jimmie» a la Casilla de Correos N° 1476 de Honolulu... Al entregar al Consulado este sistema simplificado de señales, informé asimismo que había en aguas de Hawaii siete acorazados, seis cruceros, dos portaaviones, cuarenta destructores, y veintisiete submarinos, o alguna cifra similar... (1)

Kuehn admitió que en 1940 y 1941 había recibido en Tokio alrededor de 30.000 dólares, pero sostuvo que eran transferencia de réditos producidos por sus bienes en Alemania. Dijo que el último pago de 14.000 dólares le fue entregado por un japonés desconocido, y que su esposa ocultó todo el dinero.

—No sé dónde lo ha escondido —dijo Kuehn.

Pero había testimonios de que el desconocido que entregó a Kuehn los 14.000 dólares era un colega del vicecónsul Okuda, el secretario del Consulado, Tadasu Morimura.

Un tribunal militar facultado para aplicar la ley marcial escuchó la declaración de Kuehn y lo condenó a ser fusilado. Más tarde, sin embargo, el gobernador militar conmutó la sentencia por cincuenta años de trabajos forzados (2).

Kuehn fue una de las noventa y nueve personas condenadas por espionaje contra los Estados Unidos entre 1938 y 1945. Pero lo vergonzoso es que, entre esas personas, sesenta y cuatro eran ciudadanos norteamericanos que traicionaban a su propio país. En su mayoría, actuaron para el gobierno de Hitler por lealtad hacia Alemania. Otros eran simples aventureros. Unos pocos cedieron ante amenazas de muerte contra seres queridos que estaban en manos de los nazis. Y un reducido número se dedicó al espionaje porque creyó ver en él un método para ganar dinero con facilidad.

(1) El jefe de la delegación del F. B. I. en Honolulu, Shivers, informó a la Comisión Roberts, que tuvo a su cargo la primera investigación del caso Pearl Harbor: «Si hubiéramos podido obtener los mensajes despachados al Japón por el cónsul japonés, habríamos sabido, o podríamos haber imaginado, que el ataque se desencadenaría alrededor del 7 de diciembre; porque ustedes recordarán que el sistema de señales creado por Otto Kuehn para el cónsul general japonés incluía el período comprendido entre el 1 y el 6 de diciembre».

(2) Kuehn estuvo preso en la penitenciaría de Leavenworth desde el 19 de diciembre de 1942 hasta el 6 de junio de 1946, cuando le conmutaron la pena para deportarlo a Alemania. Quedó confinado en Ellis Island, Nueva York, hasta que el 29 de julio de 1948 se ordenó su libertad bajo caución juratoria. El 3 de diciembre de 1948 emigró voluntariamente de los Estados Unidos, con destino a Buenos Aires, República Argentina.

Los nazis trataron desesperadamente de montar en los Estados Unidos una maquinaria de espionaje comparable a la que habían organizado durante la primera guerra mundial von Bernstorff, von Papen y Boy-Ed. Pero esta vez el F. B. I. estaba alerta. Aun antes de estallar la guerra, por el esfuerzo de sus propios agentes y con la ayuda de los servicios de inteligencia militares británico y norteamericano, el F. B. I. tenía un cuadro exacto de los métodos nazis de espionaje.

La mayoría de los espías nazis adiestrados en la escuela de Klopstock Pension, Hamburgo, ingresaron a los Estados Unidos en 1939 y comienzos de 1940, antes que el país entrara en guerra. Algunos eran ex oficiales del ejército. Otros tenían experiencia profesional en ingeniería, medicina, finanzas, fotografía y educación.

Uno de los agentes de preguerra a quien los nazis dispensaban más confianza era Kurt Frederick Ludwig, nacido en Fremont, Ohio, pero que había pasado la mayor parte de su vida en Alemania. Ludwig era amigo de Robert Ley, el «maestro del sindicalismo alemán» en la era hitleriana. Lo mandaron a los Estados Unidos en 1940 para organizar una red de espionaje.

Ludwig era el hombre de los cien apellidos falsos. El F. B. I. le encontró el rastro cuando los censores británicos en Bermuda interceptaron, en enero de 1941, una carta sospechosa dirigida a una persona en España. En el revés de la carta se descubrió un mensaje en tinta invisible, dando informes sobre los suministros que se embarcaban con destino a Inglaterra. Estaba firmado por «Joe K.».

El problema del F. B. I. era localizar al misterioso «Joe K.» entre los millones de habitantes de los Estados Unidos, y ese nombre era la única clave. El caso parecía insoluble hasta que se interceptó otra carta diciendo que «Phil» había sufrido un fatal accidente de tránsito el 18 de marzo, y había fallecido en el St. Vincent's Hospital de Nueva York.

A partir de entonces los agentes tuvieron una pista concreta. Averiguaron que un tal Julio López Lido fue víctima de un accidente de tránsito el 18 de marzo, y los testigos declararon que un hombre que lo acompañaba se apoderó del portafolios del herido y huyó de la escena del accidente. Más tarde, los investigadores del F. B. I. descubrieron que el verdadero nombre de Lido era Ulrich von der Osten, y entre los papeles de von der Osten encontraron aquí un nombre, allá una dirección o un número telefónico, y con esos elementos se estableció que el autor de las cartas firmadas por «Joe K.» era Ludwig.

Los agentes del F. B. I. capturaron a Ludwig en la costa del Pacífico, cuando pretendía embarcarse en un buque. El

rastro descubierto a partir de Ludwig condujo hacia otros espías, uno de los cuales era Paul T. Borchardt, erudito ex oficial del ejército alemán que en el Seminario Geográfico Militar de Alemania había dictado cátedra de geopolítica ante jóvenes oficiales nazis. En 1940 llegó a los Estados Unidos y se convirtió en asesor de Ludwig, evaluando el aspecto militar, económico y político de la información obtenida por éste, antes de enviarla a Alemania⁽¹⁾.

Un caso extraño fue el de la intrigante «mujer de las muñecas», que se pasaba la vida escribiendo dulces y conmovedoras cartas sobre sus muñecas. Pero un día una de esas cartas fue devuelta desde Buenos Aires, con esta anotación del Correo argentino: «No la conocen en esa dirección». El cartero llevó la carta a la señora Sara G., de Portland, Oregón, que figuraba como remitente en el sobre. La epístola estaba fechada el 20 de mayo de 1942. La señora G. la entregó al F. B. I.

—Es la primera vez que la veo —dijo la señora G.—. Y no conozco a nadie en Buenos Aires.

La misiva parecía bastante inocente. Decía, entre otras cosas:

Acabo de procurarme una hermosa Bailarina Ritual Siamesa; estaba deteriorada, es decir, rota en el centro. Pero ya está arreglada y me gusta mucho. No pude conseguir una pareja para esta bailarina siamesa, así que estoy convirtiendo una muñeca común en una segunda muñeca siamesa...

La censura interceptó otras cartas de este tenor, aparentemente escritas por la misma persona. En el laboratorio del F. B. I., los criptógrafos estudiaron los textos y finalmente llegaron a la conclusión de que «Bailarina Ritual Siamesa» significaba «portaaviones», y «muñeca» equivalía a «buque de guerra». Entonces toda aquella chachara sobre muñecas asumió un siniestro significado:

Acabo de procurarme información sobre un hermoso portaaviones; estaba averiado, es decir, torpedeado en el centro. Pero ya está reparado y me gusta mucho. No pudieron conseguirle un gemelo, así que están convirtiendo un buque de guerra común en un segundo portaaviones...

Los agentes observaron que la carta había sido escrita pocos días antes de que el portaaviones norteamericano *Saratoga* zarpara de Puget Sound rumbo a San Diego.

(1) El 13 de marzo de 1942 Ludwig y sus ocho cómplices fueron condenados por la Corte Nacional de Distrito de la ciudad de Nueva York. Ludwig, Borchardt y René C. Froehlich fueron sentenciados a veinte años de cárcel. Condenas de quince años se aplicaron a Helen Pauline Mayer, Karl Victor Mueller y Hans Helmut Pagel. Frederick Edward Schlosser fue condenado a doce años, y Carl Hermann Schroetter, a diez. Lucy Rita Boehmler fue penada con cinco años de cárcel.

Pero la encantadora amante de las muñecas cometió un error. En un momento de despecho utilizó como dirección de la remitente la de una mujer con quien había tenido una riña, la señora M. Cuando un agente del F. B. I. visitó a la señora M. para interrogarla, ella dijo que no sabía nada acerca de la carta. Estaba segura de no haberla escrito.

—¿No se le ocurre quién podría estar usando su nombre? —preguntó el agente.

La señora M. reflexionó un instante. Después sus ojos parecieron arder.

—Apuesto a que es Velvalee Dickinson. Vive en Nueva York. Yo le compré algunas muñecas, y como no pude pagarle en seguida, me ha estado persiguiendo con algunas cartas muy desagradables.

Para el F. B. I., la intuición femenina no era el instrumento más adecuado en la lucha contra el espionaje. Pero esta vez los agentes aprendieron una lección: que nunca conviene subestimar la capacidad de una mujer.

Varias cartas escritas por Velvalee Dickinson fueron cotejadas con una de las remitidas a Sudamérica. Habían sido dactilografiadas con la misma máquina.

Se descubrió que Velvalee Dickinson acostumbraba retirar de una caja fuerte bancaria considerables sumas en billetes de cien dólares. Pero ella alegó que había recibido ese dinero en herencia de su esposo. Más tarde cambió su versión de los acontecimientos, diciendo que el 26 de noviembre de 1941 el agregado naval japonés Ichiro Yokohama había pagado a su difunto esposo 25.000 dólares con el fin de que suministrara informes a los japoneses. Insistió en que ella misma no había pasado dato alguno, aunque todas las pruebas en poder del F. B. I. indicaban que la verdadera culpable era la señora Dickinson, y no su marido.

La señora Dickinson fue acusada judicialmente de espionaje, pero sólo se declaró culpable de violar la censura, y el fiscal nacional que entendió en la causa decidió aceptar dicha declaración, fundándose en que las pruebas eran «circunstanciales». Al dictar sentencia, dijo el juez Shackelford Miller:

Resulta difícil creer que algunas personas no comprendan que nuestra nación está empeñada en una lucha de vida o muerte... Es indudable que usted ha realizado actividades de espionaje. Afortunadamente para usted, el gobierno no la ha procesado por ellas. Le hubiera correspondido pena de muerte o prisión perpetua...

Investigando las actividades de los espías, el F. B. I. encontró instrumentos de espionaje capaces de entusiasmar a

cualquier ilusionista. Un agente enemigo fue sorprendido con una cajita de cerillas comunes. La mayoría de las cerillas no eran más que eso, pero cuatro resultaron ser diminutos lápices que escribían con rasgos invisibles. A otro espía le encontraron una lapicera estilográfica con un mensaje soldado en su interior; para sacarlo, hubo que romper el depósito de la tinta. Libros y revistas con ciertas letras perforadas por diminutos alfileres encerraban mensajes en clave.

Pero el F. B. I. cumplió una de sus mayores hazañas al aclarar el secreto nazi de los «micropuntos», la más astuta, probablemente, de las armas de espionaje utilizadas en la segunda guerra mundial.

A comienzos de 1940, un «agente doble» informó al F. B. I. que los alemanes estaban perfeccionando un nuevo sistema para extraer informes de los países aliados. Dijo que había asistido a la escuela de espionaje de Klopstock Pension, y que allí había escuchado al doctor Hugo Sebold, director de la escuela, quien al clausurar los cursos del año dijo lo siguiente:

El problema mayor para los agentes del Führer en la América del Norte y del Sur es mantenerse en contacto con nosotros... Pero antes de mucho podremos comunicarnos en todas partes del mundo con absoluta impunidad...

El agente afirmó que el método se basaba en un nuevo proceso fotográfico que permitía transcribir, por medio de puntos no mayores que una cabeza de alfiler, mensajes que normalmente ocuparían una página. Hasta le habían mostrado uno de esos puntos al microscopio, diciéndole que estuviera alerta para descubrirlos en el material que le enviarían. Pero no supo agregar más datos.

Tiempo después llegó a Nueva York, procedente de Sudamérica, un joven balcánico. Se dirigió a un hotel, alquiló una habitación y no pareció sorprendido cuando al entrar en ella encontró a dos agentes del F. B. I. que lo esperaban. En realidad no tenía motivos para sorprenderse, porque si bien lo habían reclutado los alemanes como agente de espionaje, ahora puede revelarse que trabajaba para el F. B. I.

—¿Trajo eso? —preguntó un agente.

El joven sacó del bolsillo cuatro formularios telegráficos en blanco. En el laboratorio del F. B. I., en Washington, un técnico los puso bajo una lámpara fluorescente y descubrió diminutos puntos negros interpolados en el papel. Arrancó uno de ellos. No era más grande que el que señala el fin de esta frase.

Bajo el microscopio que agrandaba aquella partícula a doscientas veces su tamaño natural, el técnico descubrió un

mensaje que normalmente ocuparía una página. Arrancó otros micropuntos y comprobó que todos encerraban mensajes reducidos a ínfima escala⁽¹⁾.

Este era el secreto nazi, una verdadera hazaña de la microfotografía.

El descubrimiento de los micropuntos permitió al F. B. I. encontrar el rastro de numerosos espías y sus cómplices, buscarlos en los Estados Unidos y Sudamérica, y finalmente, con la cooperación del gobierno mexicano, destruir en México una red de espionaje alemán.

Uno de los agentes dobles más capaces del F. B. I. tenía el nombre de código de ND98. Administraba un negocio de importación y exportación en Alemania cuando los nazis lo reclutaron como espía. Le enseñaron telegrafía, códigos, escrituras secretas, y le entregaron instrucciones microfotográficas.

Un día de 1941, ND98 fue llamado a la oficina de la Abwehr⁽²⁾ en Hamburgo. Un funcionario nazi le dijo:

Irá usted al Uruguay e instalará un transmisor de radio. Aquí tiene los nombres de tres personas que le mandarán desde los Estados Unidos informes sobre producción de guerra e instalaciones militares. Póngase en contacto con nosotros cuando haya montado la radio. Aquí tiene sus papeles e instrucciones.

ND98 realizó un agradable viaje a Montevideo. Pero apenas estuvo seguro de que no lo vigilaban, se entrevistó con un funcionario del Departamento de Estado norteamericano. ND98 estaba dispuesto a vender sus servicios. ¿Interesaba la propuesta a los Estados Unidos?

Pocos días más tarde ND98 informó a sus jefes nazis:

Imposible instalar radio y obtener informes deseados. Viajo a los Estados Unidos, donde podré operar más libremente. Me comunicaré.

Y se dirigió a Nueva York, donde el F. B. I. lo cobijó bajo sus alas.

Ayudado por el F. B. I., ND98 estableció contacto radial con Alemania el 20 de febrero de 1942 desde una estación

(1) Uno de los micropuntos traídos por el agente bálcánico encerraba este mensaje: «Hay motivo para creer que las tareas científicas para la utilización del núcleo atómico que se realizan en los Estados Unidos se basan, al menos en parte, en el empleo del helio. Necesitamos información permanente sobre los ensayos realizados, y particularmente: 1, qué proceso se usa en los Estados Unidos para el transporte del uranio pesado; 2, dónde se realizan ensayos con uranio (Universidades, laboratorios industriales, etc.), y 3, qué otras materias primas se usan en estos ensayos. Confiar sólo en los mejores expertos en este campo».

(2) La Abwehr era el departamento de inteligencia del Estado Mayor General nazi. Tenía en sus manos tareas de espionaje, sabotaje y subversión, contraespionaje y seguridad. Su jefe fue el almirante Wilhelm Canaris, hasta que Hitler lo destituyó en febrero de 1944. La Abwehr fue entonces incorporada a la organización de Policía Nacional dirigida por Heinrich Himmler.

secreta instalada en Long Island, similar a la que veintinueve meses antes había empezado a operar el agente doble William Sebald. Los nazis solicitaron informes urgentes sobre producción de aviones, barcos y armas, movimientos de tropas y cargas, y fabricación de armas nuevas⁽¹⁾.

Tras un intervalo prudente, la estación de Long Island despachó un mensaje a través del Atlántico. La estación alemana de Hamburgo acusó recibo. Y ND98 empezó a suministrar «informes» a los nazis..., informes cuidadosamente preparados por el F. B. I. y por el Control Conjunto de Seguridad dependiente del Estado Mayor Conjunto.

La operación marchaba tan bien que el F. B. I. decidió lanzar un «globo sonda» con el fin de atrapar a otros espías nazis. ND98 despachó este radio: «Necesito urgente ayuda. ¿Pueden asignarme agentes de confianza?».

La treta no dio resultado. La estación de Hamburgo repuso: «Usted y su trabajo demasiado valiosos para que lo identifiquen con nadie más».

Pero en agosto de 1943 la estación de Hamburgo empezó a protestar, diciendo que, si bien los informes de ND98 eran buenos, resultaban demasiado caros. Para ese entonces los nazis le habían pagado ya aproximadamente 34.000 dólares, que fueron entregados al custodio de la Propiedad Enemiga⁽²⁾.

ND98 respondió: «Lamento consideren información demasiado cara. Si no están satisfechos, encantado de retirarme, pues peligro y tensión son grandes». La Abwehr aseguró precipitadamente a ND98 no sólo que su trabajo era satisfactorio, sino que a su debido tiempo recibiría 20.000 dólares más.

En noviembre, ND98 acusó recibo de la promesa, insinuando en términos muy generales que los Estados Unidos planeaban un ataque en gran escala contra las islas Kuriles del Norte. El mensaje, según informaron al F. B. I. los jefes del Estado Mayor Conjunto, se acercaba peligrosamente a la verdad... El ataque a las Kuriles, sin embargo, sería simplemente una finta, puesto que el grueso de la fuerza norteamericana golpearía en las islas Marshall. Tal como se espe-

(1) La primera estación de Long Island fue instalada el 4 de diciembre de 1941. El último contacto con Alemania se realizó el 8 de mayo de 1945. En ese intervalo, fueron despachados a Alemania 2.892 mensajes con informes firmados por los numerosos «agentes dobles» implicados en esta operación. Los alemanes despacharon 824 mensajes.

(2) Para financiar sus actividades de espionaje, los nazis enviaron a los Estados Unidos dinero, anillos de brillantes, costosos relojes y otros objetos de valor. La esposa de un espía intentó pasar de contrabando 10.000 dólares ocultos en su faja. A un marinero que actuaba como correo se le encontró un billete de banco en el interior de su dentadura postiza. Todos los objetos de valor secuestrados por el F. B. I. se entregaron a W. R. Glavin, entonces director auxiliar de la División Administrativa del F. B. I., cuyo balance final reveló que se había confiscado a los agentes alemanes un total de 366.125 dólares en efectivo y valores. El destinatario último de esa suma fue el Departamento del Tesoro. Glavin se jubiló en 1954, después de veintitrés años de servicios.

raba, los alemanes transmitieron el informe a los japoneses. Tiempo después el Estado Mayor Conjunto hizo saber al F. B. I. que había motivos para pensar que el dato enviado a través de ND98 había contribuido al éxito del ataque contra las Marshall, desencadenado en febrero de 1944.

Entre las últimas bromas jugadas a los nazis, se contaron una serie de mensajes despachados poco antes de la invasión aliada a Normandía, que empezó el 6 de junio de 1944. Se informó a los alemanes que los planes de invasión quedaban postergados por un déficit en la producción de lanchas de desembarco; y que de Nueva York acababan de zarpar transportes de tropas con destino al Mediterráneo.

Cinco días antes de la invasión a Normandía, ND98 radiografió a Hamburgo:

Nevi informa que los transatlánticos *Ile de France* y *New Amsterdam* zarparán del puerto de Nueva York en los próximos días rumbo a un punto no determinado del Mediterráneo.

El movimiento parece de máxima importancia y probablemente indica un cambio de planes.

Parece que una fuerza consistente en numerosas divisiones de infantería y blindadas con destino original al Reino Unido se desvían para una operación especial. Haré lo posible por averiguar nuevos detalles.

De este modo ND98 contribuyó al desconcierto de los alemanes, que recibían de todas partes informes contradictorios —verdaderos y falsos— sobre los planes aliados de invasión. Su «campana de guerra» le reportó al agente doble ND98 32.000 dólares en concepto de salarios, bonificaciones y viáticos. Los 55.000 dólares aportados por los alemanes cubrieron con creces el costo total de la operación⁽¹⁾.

El éxito de la operación se refleja en el libro de mensajes de la estación de Long Island, que revela que los alemanes obstinadamente mantuvieron contacto con ND98 hasta el preciso momento en que los británicos ocuparon a Hamburgo, el 2 de mayo de 1945⁽²⁾.

(1) Durante los años de la guerra, los casos de espionaje, sabotaje y seguridad interna fueron investigados por la División de Inteligencia Doméstica, encabezada por D. M. Ladd, que entró en el F. B. I. después de egresar de la Escuela de Leyes George Washington, en 1928. Ladd fue designado ayudante del director en 1949 y se jubiló en 1954, con veintiséis años de servicios. Era hijo del senador Ladd, de North Dakota. Cuando Ladd fue colocado al frente de la División de Inteligencia Doméstica, lo sucedió Stanley J. Tracy como director auxiliar de la División de Identificación. Tracy se incorporó al F. B. I. en 1933 y se jubiló en 1954.

(2) En 1945, Spyros Skouras, presidente de la Twentieth Century Fox, cooperó con el productor Louis de Rochemont en la realización de una película documental de largo metraje titulada *The House on 92nd Street* (La Casa de la Calle 92), que tomó el episodio de la radio de Long Island para ilustrar la lucha del F. B. I. contra el espionaje enemigo durante la segunda guerra mundial.

XXII. - POR QUE FRACASARON LOS SABOTEADORES

En 1940 Hitler se jactaba de que sus ejércitos y su aviación eran imbatibles. Pero, aún en el apogeo del poder nazi en Europa, secretas preocupaciones agitaban al Alto Comando Alemán. El mariscal del aire Hermann Goering y el jefe de las S. S., Heinrich Himmler, entre otros, se quejaban amargamente de la incapacidad de la Abwehr para infiltrar agentes de confianza en los Estados Unidos.

Los jefes de la Abwehr estaban en una posición embarazosa. El contraespionaje norteamericano atrapaba a sus agentes de a uno o en grupos. Había que hacer algo para reemplazarlos, y también para derrengar al gigante industrial yanqui, por medio del sabotaje, antes que se convirtiera en una amenaza demasiado grande. Todo lo que el Führer necesitaba era tiempo para consolidar sus conquistas en Europa... y entonces sería demasiado tarde para que intervinieran los Estados Unidos. Así razonaban los nazis.

La Abwehr se decidió por una maniobra audaz. Seleccionaría hombres que hubieran residido en Norteamérica, que conocieran bien el país y sus costumbres. Algunos se especializarían en sabotaje, otros en espionaje. Después, provistos de suficiente dinero y elementos para aguantar dos años, se los llevaría a los Estados Unidos por medio de submarinos.

El plan fue sometido al almirante Doenitz, quien finalmente accedió a cooperar, con la condición de llevar solamente a los espías más capaces, y siempre que éstos suministraran informes de valor a la Marina alemana, especialmente a los comandantes de submarinos⁽¹⁾.

La Abwehr aceptó las condiciones de Doenitz y encomendó la tarea de reclutar dos equipos de saboteadores al teniente Walter Kappe, hombre regordete, de cuello de toro; el mismo Walter Kappe que había despertado el interés del F. B. I. después de 1930, cuando ayudaba a organizar en Chicago la asociación «Teutonia», y más tarde el *Bund* germanoamericano. Kappe había regresado a Alemania en 1937. Al estallar

(1) El Alto Mando alemán estaba muy preocupado por la liquidación de su sistema de espionaje en los Estados Unidos y por el fracaso de los saboteadores que desembarcaron de los submarinos. El F. B. I. conoció la historia completa de tales inquietudes después de la guerra, de labios de Hermann Goering, el teniente de navío Heinrich Dietrich Wilhelm Ahlrichs, un jefe de la Abwehr y otros oficiales alemanes. Estos testimonios llenaron las lagunas que existían en las declaraciones prestadas por los propios saboteadores.

la guerra, se incorporó como especialista en asuntos norteamericanos al servicio de inteligencia alemán.

Entre un grupo de candidatos minuciosamente investigados y aprobados por la Abwehr, Kappe eligió ocho hombres. El más viejo era George Dasch, de treinta y nueve años, que trabajaba como monitor de radio en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reich. En septiembre de 1939, Dasch podía haberse convertido en ciudadano norteamericano, si hubiera formalizado la última etapa del trámite de naturalización: el juramento de fidelidad al país de adopción. Pero antes que el juzgado federal de Nueva York lo citara para la ceremonia de juramento, prefirió regresar a Alemania. Y su regreso fue financiado por el gobierno alemán.

Dasch y sus siete compañeros de equipo, que también conocían los Estados Unidos, ingresaron en la escuela nazi de sabotaje, situada sobre el lago Quentz, cerca de Berlín, en abril de 1942. Se les enseñó el manejo teórico y práctico de explosivos, sustancias incendiarias, detonadores y mecanismos de tiempo. Aprendieron a paralizar maquinarias y motores industriales con elementos abrasivos, y a colocar una carga explosiva de suerte que causara los máximos daños en un puente o una fábrica. Cada hombre memorizó los planos de los objetivos, que en su mayoría eran establecimientos productores de aluminio, esclusas del río Ohío e instalaciones ferroviarias. Así como un actor de teatro aprende de memoria su papel, ellos ensayaban el relato de ficticias biografías personales..., documentadas con certificados de nacimiento y de excepción militar, carnets de Seguridad Social, licencias de conductores de automóviles, etc. Todo falso, naturalmente.

Por fin concluyó el adiestramiento. El teniente Kappe condujo a sus alumnos a la base de submarinos de Lorient, en Francia, donde se realizaron los preparativos finales. Dasch era el jefe del equipo número 1, que incluía a Ernest Burger, de treinta y cinco años; a Heinrich Heinck, de treinta y cuatro, y a Richard Quirin, de treinta y cuatro. El equipo número 2 estaba al mando de Edward Kerling, de treinta y dos años. Lo acompañaban Herman Neubauer, de treinta y dos; Werner Thiel, de treinta y cinco, y Herbert Haupt, de veintidós.

A cada jefe de equipo Kappe entregó 50.000 dólares como fondo general, además de otros 20.000 que debían ser divididos equitativamente entre los hombres a medida que fuera necesario. Por otra parte, cada hombre en particular recibió un cinturón con 4.000 dólares adentro, además de una billetera con 400 dólares en billetes chicos. En total, los sabotadores llevaban una pequeña fortuna de 175.200 dólares, principalmente en billetes de cincuenta.

Kerling y sus hombres embarcaron en un submarino que zarpó la noche del 26 de mayo. Dos noches más tarde salió de la base el U-202, *Innsbruck*, que conducía a Dasch y su grupo. Cada pelotón llevaba cuatro cajones herméticos con altos explosivos, cargas de T.N.T. moldeadas en forma de briquetas de carbón, espoletas, detonantes y variedad de mecanismos sincronizadores, mecánicos y químicos.

Al llegar a los Estados Unidos, los hombres se dividirían en parejas. Los principales objetivos que debía sabotear el equipo de Dasch eran la fábrica de la Aluminum Company of America, situada en Alcoa, Tennessee; otra fábrica productora de aluminio en East St. Louis, Illinois; la fábrica de criolita de Filadelfia; y las esclusas del río Ohío desde Pittsburgh hasta Louisville, en el Estado de Kentucky. Debían colocar explosivos en la estación de Newark (Nueva Jersey) del Ferrocarril de Pensilvania; volar una sección del puente ferroviario de Hell Gate que cruza el East River en Nueva York; y sabotear las instalaciones del Ferrocarril de Ohío y Chesapeake. No debían ocultar el hecho de que los atentados eran obra de sabotadores. Parte de la misión que llevaban era provocar temor y desorden al mismo tiempo que retardaban los embarques ferroviarios y la producción de metales livianos en particular.

Dieciséis días y dieciséis noches después de zarpar de Lorient, el *Innsbruck* salió a la superficie frente a la localidad de Amagansett, Long Island. Avanzó despacio a través de una espesa bruma, hasta situarse a unos 400 metros de la costa, antes de parar los motores. Faltaba poco para la medianoche del viernes 12 de junio cuando los marineros asomaron a cubierta e inflaron un bote de goma. Los cuatro sabotadores, desarmados y vestidos con uniforme de fajina de la infantería de marina alemana, embarcaron en el bote, que tripulado por dos marineros cabalgó sobre la marejada en dirección a la costa. Los alemanes saltaron a la playa. En un momento de confusión, los marineros dejaron caer los remos y el bote se anegó, pero el equipo fue puesto a salvo. Los marineros lucharon frenéticamente por arrastrar el bote a la playa y achicar el agua, mientras los sabotadores cambiaban sus uniformes por ropas civiles.

Casi al mismo tiempo en que desembarcaban los sabotadores, el marinero de segunda clase John Cullen, de veintinueve años de edad, salía del destacamento de la Guardia Costera de Amagansett para iniciar su ronda nocturna. Iba solo y desarmado, y la bruma se deshilachaba a su alrededor sobre la solitaria playa de arena. El haz de su linterna era un cono blanco en el gris de la niebla. Sólo alcanzaba a ver unos pocos metros en cualquier dirección.

Dasch vio la luz que se acercaba y se quedó aterrado. El intruso no debía ver a los marineros del submarino. Dasch corrió a interceptarlo y reconoció el uniforme de la Guardia Costera.

—¿Qué sucede aquí? —preguntó Cullen—. ¿Quién es usted? —agregó al divisar dos hombres que parecían forcejear con un objeto pesado dentro del agua.

—No pasa nada —repuso Dasch en el tono más casual del mundo—. Somos pescadores. Hemos encallado y vamos a esperar a que amanezca.

Explicó que él y sus amigos habían salido de East Hampton con la intención de ir a Montauk Point, donde se extraviaron en la niebla.

—¿Qué quiere decir? —exclamó Cullen—. ¿East Hampton, Montauk Point? ¿Sabe usted dónde está?

—Imaginé que usted lo sabría —dijo Dasch—. ¿Dónde está su destacamento?

—Muy cerca de aquí. El destacamento de Amagansett.

Dasch, que conocía bien toda la zona de Long Island, comprendió que el capitán del *Innsbruck*, después de atravesar el Atlántico en una extensión de cinco mil quinientos kilómetros, había errado el objetivo perseguido —East Hampton— por sólo cinco kilómetros. Pero ese pequeño error ponía en peligro toda la expedición. Por un instante, Dasch acarició la idea de atraer a Cullen al bote de goma, secuestrarlo y llevarlo a bordo del submarino. Pero antes pretendió sobornarlo.

—Faltan cuatro horas para que amanezca —dijo Cullen—. Será mejor que me acompañen hasta el destacamento.

Dasch asintió y echó a andar por la playa junto al marinero. Mas de pronto se detuvo.

—Un momento —dijo—. No voy.

—Tiene que venir —replicó el joven.

—Escucha, vamos por partes —gruñó Dasch—. ¿Qué edad tienes? ¿Tienes padre y madre? No quiero matarte. No sabes lo que es esto. ¿Por qué no lo olvidas? Aquí tienes un poco de dinero. Anda y diviértete.

—No quiero el dinero —repuso Cullen.

Pero en ese momento surgió de la niebla otro hombre que corrió hacia Dasch y le dijo algo en alemán. Dasch le tapó la boca con la mano, gritando:

—¡Cállate!

Pero Cullen ya estaba más que alarmado. Ignoraba cuántos hombres acechaban en la niebla, y lo que podían hacerle. No tenía cómo defenderse contra un ataque en masa.

Dasch tomó a Cullen del brazo, le puso en la mano un fajo de billetes y lo miró fijamente.

—¡Toma! —dijo—. ¡Mírame en los ojos! ¡Mírame en los ojos! ¿Me reconocerías si volvieras a verme?

—No —repuso Cullen—. Jamás lo he visto.

—¿Y si nos encontramos en East Hampton?

Cullen empezó a retroceder.

—Jamás lo he visto —repitió.

Dio media vuelta y echó a correr en dirección al destacamento. Allí daría la alarma⁽¹⁾.

Dasch se reunió con sus compañeros.

—Bueno —dijo—. Ya arreglé todo.

Los cuatro saboteadores enterraron rápidamente en las dunas las ropas y los cajones con el equipo, marcando su posición por referencia a una tosca cruz de madera cercana: una tabla clavada a un poste hundido en la arena. Caminaron hasta encontrar un camino de macadán. Ocultándose en las dunas cada vez que pasaba un automóvil, aguardaron el amanecer.

En el destacamento de la Guardia Costera, Cullen despertó a cuatro de sus colegas y les contó lo sucedido. Les mostró el dinero: 260 dólares. Los cinco hombres se armaron y volvieron a la playa, pero no encontraron nada. A través de la niebla, sin embargo, llegaba desde el mar el ronroneo de un motor.

«Tres de nosotros nos tendimos al acecho en la playa donde yo había visto a Dasch —relataría Cullen más tarde—. Nos quedamos así un rato y después escuchamos ese ruido de motores en el mar, pero no alcanzamos a ver nada. Pensamos que volvían... Después pararon los motores y ya no oímos nada...»

Los motores eran los del *Innsbruck*, que estaba encallado en un banco de arena. El submarino zafó de la varadura al crecer la marea.

Cuando amaneció, los guardias costeros del destacamento de Amagansett acudieron nuevamente a la playa. Observaron huellas de pasos en las dunas, y al seguirlas descubrieron los equipos y uniformes alemanes enterrados por los saboteadores, que demasiado nerviosos, al parecer, no habían aliado la arena ni disimulado sus rastros.

Mientras los guardias costeros desenterraban los cajones, Dasch y sus acompañantes marchaban a campo traviesa en dirección a las vías del Ferrocarril de Long Island. Llegaron a la estación de Amagansett, pero encontraron la boletería clausurada. Sentados en un andén, esperaron. Eran las 5.30 de la madrugada.

(1) La conversación en la playa entre Dasch y Cullen está extraída de las declaraciones que prestaron ante los agentes del F. B. I.

Por fin un empleado abrió la boletería y Dasch compró cuatro billetes.

—Han madrugado ustedes —comentó jovialmente el empleado.

—Sí —dijo Dasch—. Estuvimos pescando.

Los saboteadores tomaron el tren de las 6.57.

Al llegar a Nueva York, Dasch y Burger se alojaron en el Governor Clinton Hotel; Heinck y Quirin, en el Hotel Martinique, donde se registraron con los nombres de «Henry Kayner» y «Richard Quintas».

La denuncia de que agentes enemigos habían desembarcado en Long Island llegó al F. B. I. a mediodía, casi doce horas después del desembarco. El subjefe de la delegación de Nueva York, T. J. Donegan, recibió una llamada telefónica pidiéndole que fuera a la oficina del capitán de la Guardia Costera, J. S. Bayliss. Allí se enteró de lo ocurrido en la playa y vio los cajones llenos de elementos de sabotaje. Los oficiales de la Guardia Costera y de la Marina, presentes en la entrevista, acordaron que el F. B. I. asumiera la responsabilidad de buscar a los espías. El director Hoover ordenó al F. B. I. entrar en acción.

Hoover recordaba vívidamente la catástrofe de la isla Black Tom, durante la primera guerra mundial, las explosiones de bombas y los incendios que devastaron fábricas de explosivos y productos químicos. Temía que estas cosas pudieran repetirse.

El día después del desembarco, Dasch y Burger conferenciaron en la habitación del hotel. Ya no les entusiasmaba la emoción inicial del peligro. Se sabían buscados, no ignoraban que la pena de muerte era el castigo habitual de espías y saboteadores; su coraje empezaba a disiparse.

Dasch dijo a Burger:

—Yo me presento al F. B. I. Iré a Washington y les contaré todo.

Burger asintió. El también estaba harto.

El domingo por la noche, un agente de la delegación del F. B. I. en Nueva York atendió una misteriosa llamada telefónica.

—Me llamo Franz Daniel Pastorius —dijo una voz masculina—. Quiero anunciarle que me pondré en contacto con el F. B. I. de Washington el próximo jueves o viernes. Tengo una información importante.

—¿De qué se trata? —preguntó el agente.

La única respuesta fue el característico *click* que interrumpía la comunicación. El agente se encogió de hombros. Otro chiflado, pensó. Pero dejó constancia reglamentaria de la llamada.

Eran las diez de la mañana del viernes 19 de junio cuando el presunto Pastorius llamó al Departamento Central del F. B. I. en Washington y pidió hablar con el director Hoover.

—Yo soy el hombre que telefoneó el jueves a la oficina de Nueva York —dijo—. Mi verdadero nombre es George John Dasch. Acabo de llegar de Alemania con informes importantes. Estoy en el Mayflower Hotel, habitación 351.

Pocos minutos más tarde dos agentes del F. B. I. llegaban al hotel. Condujeron a Dasch al Departamento Central, donde relató toda la historia: la escuela de sabotaje, Kappe, el viaje en submarino, el desembarco, el encuentro con Cullen y finalmente la decisión que acababa de tomar, junto con Burger, de renunciar al juego. Habló de Edward Kerling y su equipo, que —suponía— andaban sueltos en algún lugar de los Estados Unidos. Entregó a los agentes un pañuelo donde había escrito con tinta simpática los nombres de las personas con quienes debía ponerse en contacto en los Estados Unidos.

¿Dónde había estado desde que llamó por teléfono al F. B. I. de Nueva York? Pues haciendo compras y jugando al «pinoche» con viejos amigos.

Kerling tuvo más suerte que Dasch al desembarcar. Poco antes del amanecer del 17 de junio él y sus hombres bajaron sin ser vistos en la playa de Pontevedra, unos cuarenta kilómetros al sur de Jacksonville, Florida. Enterraron su equipo en la playa, y alrededor de mediodía tomaron un ómnibus que los condujo a Jacksonville, donde pasaron la noche en distintos hoteles. Kerling y Thiel fueron a Nueva York pasando por Cincinnati; Haupt y Neubauer tomaron el tren a Chicago.

Basados en los sumarios de investigaciones anteriores⁽¹⁾ realizadas en torno a personas que volvieron a Alemania antes de la guerra, los agentes del F. B. I. localizaron a familiares y amigos de los saboteadores, y empezaron a vigilarlos. No tardaron en descubrir a Burger en Nueva York. Lo siguieron sin que él lo advirtiera, y así encontraron también a Heinck y Quirin. Kerling y Thiel fueron capturados en Nueva York, cuando el primero pretendió ponerse en contacto con un sujeto cuyo nombre figuraba en la lista anotada en el pañuelo de Dasch. A Neubauer lo prendieron en un hotel de Chicago, donde se había anotado como H. Nicholas, nombre falso revelado también por Dasch.

(1) Con frecuencia hay quien se pregunta por qué al término de una investigación, el F. B. I. no destruye las constancias de la misma. El caso de los saboteadores nazis y otros similares ocurridos en la segunda guerra mundial ilustran la ventaja de conservar indefinidamente los ficheros. Una carpeta con un expediente puede permanecer archivada diez o veinte años, pero de pronto se hace necesario consultarla para resolver un crimen o para adoptar determinadas medidas de seguridad. En ciertos aspectos, los ficheros del F. B. I. son como los archivos periodísticos a los que recurre el cronista cuando necesita documentarse sobre hechos y personas.

Al advertir que el cerco se iba cerrando, el joven Haupt intentó una maniobra audaz para despistar a los agentes. Un día entró en la sede del F. B. I. en Chicago y pidió hablar con el jefe. Para entonces ya estaba bajo vigilancia.

—Tengo entendido que el F. B. I. está investigando mi situación militar —dijo Haupt—. Hay un error. He viajado a México para eludir un matrimonio forzoso y eso me ha causado dificultades con la junta de reclutamiento que entiende en mi caso. Pero ya he arreglado todo, y quisiera proseguir con mis ocupaciones habituales.

—Su caso ya no nos interesa —respondió el jefe—. Puesto que ha arreglado su situación, puede hacer lo que le plazca. Por lo menos, en lo que a nosotros concierne.

Pero cuando Haupt salió del edificio, lo siguieron. Antes de arrestarlo, el F. B. I. quería saber si había logrado procurarse cómplices o trabar contacto con otros agentes enemigos.

Catorce días después del primer desembarco en Long Island, los ocho sabotadores estaban en manos del F. B. I. El «grandioso» plan de sabotaje nazi había fracasado. En esas dos semanas, los agentes alemanes sólo alcanzaron a gastar 611,38 de los 175.200 dólares que traían.

Apenas supo del desembarco de los sabotadores, Hoover informó a la Casa Blanca y al procurador general. Roosevelt pidió a Hoover que, cuando fuesen capturados, se publicase inmediatamente la noticia, para desalentar nuevas tentativas.

El anuncio de la captura fue un rudo golpe para las esperanzas nazis. Al almirante Doenitz le enfureció tanto haber arriesgado sus submarinos en una empresa tan descabellada⁽¹⁾ que durante muchos meses rehusó escuchar todo plan de la Abwehr que implicara el transporte de espías por sumergibles⁽²⁾.

A fines de 1944, sin embargo, Doenitz debió ceder a las exigencias de la sección de inteligencia política de la Abwehr. En esta oportunidad, uno de sus submarinos condujo a los Estados Unidos a los agentes de espionaje Erich Gimpel, experto en radio, y William Curtis Colepaugh, norteamericano

(1) El juicio contra los sabotadores se llevó a cabo en una aula de clase, en el edificio del Departamento de Justicia; la misma aula utilizada durante muchos años por el F. B. I. para instrucción de sus agentes. El tribunal militar que juzgó el caso estaba presidido por el general de ejército Frank R. McCoy, e integrado por los generales de ejército Walter S. Grant, Blanton Winship y Lorenzo D. Gasser, y los generales de división Guy V. Henry, John T. Lewis y John T. Kennedy. La acusación estuvo a cargo del procurador general Francis Biddle y del fiscal Myron C. Cramer. Actuaron como defensores los coroneles Cassius M. Dowell y Kenneth Royall. El tribunal y la defensa fueron designados por el presidente Roosevelt. Los ocho sabotadores fueron declarados culpables y sentenciados a muerte. Sin embargo, Hoover y Biddle recomendaron al presidente que dispensara clemencia a Dasch y Burger. Dasch fue condenado a treinta años de cárcel y Burger a cadena perpetua.

En 1948, el presidente Truman conmutó las penas de Dasch y Burger, que fueron inmediatamente deportados a Alemania.

(2) El teniente de navío Ahlrichs, en declaraciones prestadas después de la guerra, relató el enojo del almirante Doenitz.

renegado, devoto de la causa nazi. Ambos eran espías avezados, y entre los dos llevaban 60.000 dólares en moneda norteamericana.

Gimpel y Colepaugh fueron desembarcados en Crab Tree Point, Estado de Maine, a las 23 horas del 29 de noviembre, durante una tormenta de nieve. Aunque pareciera extraño, ninguno de los dos se había acordado de traer sobretodo o sombrero. Caminaron tierra adentro, encorvados bajo el soplo del viento, hasta llegar a la ruta 1. Hicieron señas a un automóvil —dio la casualidad de que era un taxi— y el conductor accedió a llevarlos hasta Bangor, Maine, distante cuarenta y cinco kilómetros. Al amanecer del día siguiente, Gimpel y Colepaugh iban en camino a Nueva York.

El F. B. I. encontró el rastro de Gimpel y Colepaugh porque a varias personas (inclusive un joven de dieciocho años, hijo del «sheriff» local) les pareció extraño ver a dos hombres sin abrigo ni sombrero alejarse caminando de la playa en medio de una tormenta de nieve.

En otras circunstancias, tal vez se hubiera restado importancia al incidente. Pero la delegación del F. B. I. en Boston sabía que un carguero británico, el *Cornwallis*, había sido torpedeado y hundido el 3 de diciembre frente a la costa de Maine, cerca de Bar Harbor. Los agentes razonaron que un submarino que estuviese operando en la zona podía fácilmente haber desembarcado espías en la playa; y las sospechas de aquel joven los incitaron a buscar a los dos desconocidos.

Pero Colepaugh, como Dasch y Burger, tiró la toalla en el primer «round». Separándose de Gimpel, se refugió en la casa de un amigo en Richmond Hill, Nueva York. Confesó que era espía, y el 26 de diciembre el amigo llamó al F. B. I.

Colepaugh se mostró locuaz. Dijo que había abandonado a Gimpel y que ignoraba su paradero. Pero recordó que Gimpel acostumbraba comprar periódicos peruanos en un quiosco subterráneo de Times Square. Colepaugh recordó también que Gimpel tenía el curioso hábito de guardar los billetes de un dólar en el bolsillo superior de su chaqueta. Y agregó que utilizaba el nombre falso de «Edward Green».

Cuando se estableció que Gimpel había abandonado el departamento que había ocupado junto con Colepaugh, se envió su descripción a las delegaciones regionales del F. B. I. en todo el país. Los agentes comenzaron a realizar averiguaciones en hoteles, agencias de viajes, compañías aéreas, ventanillas de correos y quioscos de periódicos sudamericanos. En el registro de un hotel de Nueva York encontraron anotado a un «Edward Green», pero el viajero no llegó a ocupar la habitación y dos días más tarde el hotel la cedió a otro huésped.

La búsqueda concluyó en el quiosco de Times Square. Cuatro días después de la confesión de Colepaugh, dos agentes vieron a un hombre que se acercaba al puesto de venta de diarios, que estaba bajo vigilancia continua. El hombre respondía a la descripción suministrada por Colepaugh. Eligió una revista, introdujo la mano en el bolsillo superior de la chaqueta y sacó un billete. Los agentes cambiaron una mirada de inteligencia.

Gimpel trató de eludir el arresto asumiendo aires de gran señor ofendido. Pero fue inútil. Los agentes le encontraron en los bolsillos 10.000 dólares en efectivo y noventa y nueve pequeños brillantes envueltos en papel de seda. En su cuarto del hotel hallaron 44.000 dólares más. Gimpel confesó⁽¹⁾.

En el transcurso de la guerra, el F. B. I. investigó 19.649 denuncias de presunto sabotaje; pero no llegó a probarse un solo caso de sabotaje dirigido por el enemigo. Los alemanes no lograron jamás montar una maquinaria de espionaje y sabotaje como la que tuvieron durante la primera guerra mundial. Los presuntos casos de sabotaje eran, en su mayor parte, accidentes industriales provocados por la fatiga, el descuido, el despecho, un brusco estallido de cólera o bromas pesadas entre obreros. Pero cada accidente que afectara el esfuerzo de guerra debía ser investigado.

En una oportunidad, por ejemplo, descarriló un tren cargado de tropas. La investigación estableció que el descarrilamiento fue causado por tres niños de corta edad con el único fin de «divertirse». Otra vez, en Kalamazoo, un obrero aflojó la cuchilla de su máquina para molestar a un colega del turno de noche que le había dejado la máquina en mal estado. Un enamorado jovenzuelo de diecinueve años, deseoso de salir antes de hora para ver a su novia, empezó a golpear con una maza un horno eléctrico, hasta destruirlo. En una mina de Kentucky, un ex empleado, por vengarse del capataz de la mina, provocó una explosión que arruinó un montacargas. En Arkansas, un obrero despedido incendió una fábrica de cajones. Un inspector naval de veintiún años, destacado en una fábrica de aviones, llegó a cometer 150 actos de sabotaje; le resultaban antipáticos los inspectores de la fábrica y se complacía en causarles dificultades.

Hoover instó al Departamento de Justicia a perseguir judicialmente, por violación de las leyes federales que reprimen

(1) Después de ser entregados a las autoridades militares, por orden del procurador general, William Curtis Colepaugh y Erich Gimpel fueron juzgados por un tribunal militar en Governor's Island, Nueva York. El 14 de febrero de 1945 se les declaró culpables de violar el artículo 82 de la ley de guerra. Les correspondía morir en la horca, pero el presidente conmutó dicha pena por la de prisión perpetua. Colepaugh fue recluso en la penitenciaría de Leavenworth, Kansas. Gimpel salió en libertad condicional y lo deportaron a Alemania en agosto de 1945.

el sabotaje, a todos aquellos que deliberadamente retardaran la producción bélica, pertenecieran o no a sindicatos reconocidos. Argumentó que un acto de descuido o despecho personal que afectara la producción de guerra era en sus efectos idéntico a un acto de sabotaje deliberado. Y citó por vía de ejemplo el caso de un obrero que en un arranque de cólera perforó con una espiga el tanque de combustible de un avión; hecho que, de no ser descubierto a tiempo, pudo costar la vida a toda la tripulación de un bombardero. Hoover opinaba que una política de severidad pondría freno a bromas, torpezas y negligencias. Pero el Departamento de Justicia sostuvo que una actitud dura hacia los obreros de las industrias de guerra causaría más daños que beneficios.

Aun antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra, el F. B. I. —a pedido del Ejército y la Marina— había articulado un sistema de cooperación con el personal obrero, destinado a prevenir actos de sabotaje o descensos de la producción en fábricas afectadas al esfuerzo de guerra. Durante la primera guerra mundial, fue la Marina quien inició un programa de protección de establecimientos industriales para impedir incendios, explosiones, accidentes y fricciones gremiales que afectarían la producción bélica; ese plan de la Marina fue adoptado también por el Ejército y por la Junta de Navegación de Emergencia de los Estados Unidos. En 1931, las autoridades militares acordaron que en otra emergencia dicha tarea debía delegarse en el F. B. I.

El F. B. I. contaba, en las fábricas, con obreros especialmente designados que le suministraban informes, y así fue posible establecer en centenares de casos que daños producidos en materiales, maquinarias y equipos se debían a accidentes, y no a sabotaje enemigo. Los informantes eran voluntarios.

Por indicación del procurador general Robert H. Jackson, el F. B. I. recomendó a los gerentes de fábricas que producían elementos esenciales para el Ejército y la Marina la identificación dactiloscópica de sus empleados. Y Jackson autorizó también al F. B. I. a entregar a las fuerzas armadas copias de los prontuarios de obreros que tuviesen antecedentes penales.

Este mecanismo de fiscalización fue vigorosamente atacado por ciertos círculos, que lo calificaban como sistema de espionaje dirigido contra el movimiento sindical. Sin embargo, las instrucciones impartidas a los informantes rezaban: «Al F. B. I. no le interesan los conflictos que afectan normalmente las relaciones entre empleadores o empleados, sino aquellos problemas que influyen desfavorablemente en la defensa nacional». Mas, a pesar de los desmentidos, no cesaron los ataques.

Lo que no se ha dicho hasta ahora es que Hoover perseguía dos finalidades esenciales al adoptar semejantes precauciones: primero, que no se repitieran las actividades de espionaje y sabotaje de la primera guerra mundial; y segundo, que no surgieran, como entonces, grupos civiles de «vigilantes» que tomaran la ley en sus manos. Todas las constancias existentes en el F. B. I. apoyan esta interpretación tan sencilla.

Producido el ataque contra Pearl Harbor, el F. B. I. debió soportar un diluvio de ofrecimientos de ciudadanos que querían cooperar en el esfuerzo bélico. En Hollywood, el magnate del cine Cecil B. DeMille se ofreció a organizar, dirigir y financiar una «unidad F. B. I.» (*F. B. I. Unit*) dentro de la industria cinematográfica. El ofrecimiento fue transmitido a Hoover por James Roosevelt, el hijo del presidente.

Hoover se comunicó entonces con el jefe de la delegación de Los Angeles. «Agradezco profundamente el muy generoso y patriótico ofrecimiento realizado por DeMille —escribió—, pero en este momento no creemos necesario aceptarlo, pues tenemos perfecto dominio de la situación... No creo que las circunstancias actuales justifiquen la creación de una llamada fuerza auxiliar del F. B. I....».

Hoover sabía que, para mantener el orden y proteger al país contra los elementos subversivos, era necesario contar con buenas fuentes de información, y no con grupos civiles de «vigilantes». Estaba seguro de que, si la policía profesional no llenaba adecuadamente su función, aparecerían los aficionados. Pero éstos, por patriotas que fuesen, y por muy buenas intenciones que abrigaran, carecían de adiestramiento y experiencia para realizar una tarea semejante.

En el verano de 1940, la Legión Americana trazó un plan según el cual sus 11.000 filiales organizarían sus propios órganos de investigación para luchar contra las actividades subversivas. Cada filial designaría dos o más de sus miembros, entregándoles credenciales, una insignia especial y un manual de instrucciones. Esta fuerza investigaría las actividades subversivas y comunicaría a las autoridades locales los resultados obtenidos.

Los dirigentes de la Legión Americana presentaron el plan al procurador general Jackson, pero Jackson opinó que ni particulares voluntarios ni «grupos patrióticos» debían desempeñar tareas de investigación reservadas a profesionales. Y sugirió que cualquier informe de actividades enemigas fuera elevado al F. B. I.

Algunos legionarios creyeron que se les impedía cooperar con la defensa nacional, e iniciaron dentro de la Legión una activa campaña en pro de un organismo investigador. Fue entonces cuando Hoover presentó a la Legión Americana una

contrapropuesta que permitiría a sus miembros prestar la ayuda ofrecida, pero al mismo tiempo impediría la formación de un movimiento de «vigilantes» civiles. El F. B. I. sugirió un sistema de enlaces entre los comandantes de filiales o «fortines» (*post commanders*) de la Legión, por un lado, y los jefes de las delegaciones regionales del F. B. I. por otro. Unos y otros celebrarían reuniones conjuntas a fin de discutir los problemas de la defensa nacional. Cuando un legionario estuviera en condiciones de suministrar información confidencial sobre un problema dado, consultaría con el F. B. I.; pero si era necesario realizar una investigación, la realizaría el F. B. I. y no el legionario.

El ofrecimiento fue aceptado por la Legión Americana en la asamblea que celebró en Indianápolis en noviembre de 1940. De ese modo quedaron sentadas las bases para una eficaz colaboración. Muchas otras organizaciones cívicas, fraternidades y grupos profesionales prestaron al F. B. I. ayuda similar.

El programa nacional de seguridad incluyó también a los miembros de las policías locales, para quienes se dictaron cursos sobre distintos temas, tales como tráfico en convoy, protección de instalaciones públicas, defensa civil, investigación de actos de espionaje, sabotaje y subversión. Las lecciones impartidas se basaban principalmente en la experiencia bélica adquirida por los ingleses. A las escuelas donde se dictaron estas clases asistieron, entre 1940 y 1942, un total de 73.164 representantes del orden.

Dentro de este sistema, pues, el F. B. I. recibía informes procedentes no sólo de los servicios de inteligencia militar, sino también de los obreros de la industria, la Legión Americana, la policía y otras reparticiones movilizadas por el esfuerzo de guerra. Poco pudieron hacer los saboteadores contra este aparato de vigilancia.

Fueron éstos años tensos, excitantes, que dieron origen a extraños episodios. Pero ninguno más extraño que el que permitió al F. B. I. cooperar con la Marina en la persecución de un submarino enemigo.

Dos semanas después del ataque contra Pearl Harbor, operadores de la estación de radio de la R. C. A. C. (*Radio Corporation of America, Communications*) instalada en Point Reyes, unos setecientos kilómetros al oeste de San Francisco, captaron un intercambio de mensajes entre dos estaciones extrañas. Con ayuda del radiogoniómetro, calcularon que la estación más fuerte era probablemente una emisora terrestre situada en el Japón, y que la más débil pertenecía a un submarino no muy alejado de la costa californiana.

Contaron el caso a un agente del F. B. I.

—Cuando no estén ustedes demasiado ocupados —sugirió el agente—, podrían hacer escucha en esa frecuencia. Si captan algo, nos llaman.

Los radiooperadores accedieron.

Poco antes del mediodía del 26 de diciembre, es decir, cinco días más tarde, uno de los operadores de la R. C. A. C. llamó telefónicamente a la delegación del F. B. I. en San Francisco.

—Esa estación está emitiendo de nuevo —dijo—. Parece una unidad móvil naval que transmite en 6.908 kilociclos, y podría estar cerca.

Los agentes del F. B. I. llamaron en seguida a la estación de escucha de la F. C. C. (*Federal Communications Commission*, Comisión de Comunicaciones Federales) instalada en Portland (Oregón), a la sala de radio de la Pan American Airways System en Treasure Island (bahía de San Francisco) y a la estación de escucha de la F. C. C. en Santa Ana, cerca de Los Angeles. Se pidió a esas estaciones colocarse en la frecuencia y tomar una marcación de la estación extraña. Las líneas telefónicas se mantuvieron abiertas.

Los azimutes tomados por las estaciones de la F. C. C. fueron comunicados a la sala de radio de la Pan American. No habían pasado cinco minutos cuando llamó el operador y dijo:

—Según mi trazado, esa estación está emitiendo desde un punto situado a 40 grados 1 minuto de latitud norte y 124 grados 6 minutos de longitud oeste. Es decir, a unos trece kilómetros de la costa de California, frente a Point Mendocine..., unos trescientos kilómetros al noroeste de aquí.

La posición de la estación sospechosa fue comunicada telefónicamente a la sede de la Zona Costera Naval del Pacífico (*Pacific Naval Coastal Frontier office*), que retransmitió la información a un patrullero Catalina. Diez minutos más tarde llamó la Marina para informar que acababa de recibir del avión este mensaje:

—Atacando submarino enemigo Opal 18.

El submarino avistó al Catalina y empezó a sumergirse a toda prisa. El avión lanzó una bomba que cayó detrás del submarino, y otra que estalló a proa en la ruta del mismo. En menos de dos minutos llegaron bombarderos del Ejército que lanzaron cargas de profundidad. Una capa de petróleo afloró a la superficie. La tripulación del bombardero naval informó que, en su opinión, la primera bomba había estallado lo bastante cerca como para desgarrar las planchas del submarino, y que éste probablemente había sido destruido.

Puede ser que sí, puede ser que no. Pero a los hombres del F. B. I. les agrada pensar que ayudaron a hundir un submarino enemigo.

XXIII. - LA PELIGROSA LUCHA AL SUR DE LA FRONTERA

Usted es mejor juez que yo para decidir si ha llegado el momento de relatar la Operación Hemisferio Occidental. Relatada o no, es la historia de un gran trabajo. No creo que se haya realizado nunca una operación similar. Y yo soy testigo personal de sus brillantes resultados.

(De una carta escrita en 1946 por el ex secretario auxiliar de Estado Adolf A. Berle (h.) al director del F. B. I., J. Edgar Hoover.)

Más de dieciséis años de silencio ha guardado el F. B. I. en torno a una asombrosa operación de contraespionaje, en cuyo transcurso numerosos agentes arriesgaron la vida⁽¹⁾ para destruir las redes de espionaje tendidas por los nazis en Centro y Sudamérica durante la segunda guerra mundial.

La historia empezó en 1940, cuando el presidente Roosevelt y otros miembros de su gobierno comprendieron con gran preocupación, ante las pruebas acumuladas en casos de espionaje, que emisarios del Eje habían montado toda una cadena de bases de espionaje desde México hasta el Estrecho de Magallanes.

En realidad, Sudamérica se había transformado en una plataforma de ensayo para introducir espías nazis en los Estados Unidos. Informes sobre los dispositivos de defensa y la producción industrial llegaban a Alemania a través de Sudamérica. Radios clandestinas sintonizadas en Hamburgo, Colonia y Bruselas pasaban datos militares, políticos y económicos al cuartel general del espionaje nazi. Y algunos alemanes habían pasado del ensueño del «*lebensraum*» a la tarea, más práctica, de planear medios e instrumentos que permitiesen conquistar a Sudamérica para Hitler.

Mucho antes que la estrella de Hitler comenzara a surgir, pobladores alemanes habían emigrado a Sudamérica, formando en aquellos países de rápido crecimiento colonias que, en su mayor parte, se aferraban a las costumbres, idioma

(1) Cuatro agentes murieron en actos de servicio; todos ellos, a consecuencia de accidentes de aviación. Eran el director auxiliar Percy J. Foxworth y el agente Harold D. Haberfeld (en la Guayana Holandesa); el agente J. Cordes Delworth (en la Argentina), y el agente Quenton H. Plunkett (en Colombia).

y cultura alemanes. Hacia 1939 residían en el Brasil unos 360.000 alemanes y descendientes de alemanes; 194.000 en la Argentina, y 129.000 en Chile. Las mayores concentraciones se registraban en zonas como la de Santa Catalina en el Brasil meridional, la provincia de Misiones en el norte de la República Argentina, y la región de Valdivia en el sur de Chile.

El movimiento nazi arraigó en estas zonas. Los pobladores alemanes usaban el uniforme de las tropas de asalto y desfilaron con la bandera nazi en sus festividades. Había movimientos juveniles alemanes, un «frente sindical alemán», un Partido de los Trabajadores Alemanes y una organización de veteranos de guerra alemanes.

Ya en 1911 Richard Tannenbergh, en su libro *La Gran Alemania: Obra del Siglo Veinte*, había anunciado que gran parte del Brasil y la Argentina, todo el Uruguay, el Paraguay y Bolivia oriental llegarían a ser una colonia dominada por los alemanes. Y más tarde un ex soldado alemán y líder nazi en Sudamérica, Arnold Fuhrmann, trazó un plan para la conquista del Uruguay por tropas nazis reclutadas en el Uruguay y la Argentina⁽¹⁾.

El F. B. I., ante los informes de su propio sistema de contraespionaje y los suministrados por otros organismos de inteligencia norteamericanos y británicos, llegó a la conclusión de que el mejor método para contener el espionaje nazi en los Estados Unidos era destruir las redes de espías en la América latina. Pero esto sólo podía hacerse con la cooperación de los gobiernos de Centro y Sudamérica. Y la campaña exigiría habilidad y diplomacia, porque debería cumplir sus fines sin poner en aprietos a los Estados Unidos ni a sus vecinos meridionales.

Hoover discutió el problema a comienzos de mayo con el secretario auxiliar de Estado, Adolf A. Berle (h.), y volvió a discutirlo a principios de junio con Berle, el general Sherman Miles (subjefe de Estado Mayor del G-2 del Ejército) y el almirante Walter S. Anderson (director de Inteligencia Naval). De estas entrevistas surgió el proyecto para organizar un Servicio Especial de Inteligencia (S. I. S., *Special Intelligence Service*), que actuaría en el exterior. Berle accedió a someter el plan a la aprobación del Departamento de Estado y del presidente.

Se acordó que el Servicio Especial de Inteligencia actuaría como un organismo auxiliar, suministrando al Departamento de Estado, fuerzas armadas, F. B. I. y otras dependencias

(1) Fuhrmann y otros doce dirigentes nazis fueron arrestados por las autoridades uruguayas. A Fuhrmann lo condenaron a doce años de cárcel. Cinco de sus cómplices sufrieron condenas de cinco a doce años. Los demás quedaron en libertad.

gubernamentales, informes relativos a actividades financieras, económicas, políticas y subversivas que amenazaran la seguridad de los Estados Unidos. Los órganos de inteligencia del Ejército y la Marina seguirían actuando en sus propios campos especializados.

Cuando Berle entrevistó al presidente para pedirle que fijase la esfera de actuación de cada organismo afectado a misiones de inteligencia en el exterior, Roosevelt decidió que Hoover y sus hombres serían responsables de las tareas de inteligencia no militar en el Hemisferio Occidental. El 24 de junio firmó una resolución deslindando jurisdicciones, y antes que transcurriera un mes el F. B. I. empezó a mandar algunos de sus agentes rumbo al Sur. En su mayor parte, eran expertos en policía secreta y viajaban como agentes clandestinos. Más tarde, con la aprobación de los gobiernos latinoamericanos⁽¹⁾, fue posible adscribirlos abiertamente a las embajadas o apostarlos en puntos estratégicos como oficiales de enlace con las policías nacionales y locales.

Un agente secreto fue a Sudamérica como vendedor de jabón de una firma norteamericana que jamás sospechó su vinculación con el F. B. I. En pocos meses el hombre vendió tanto jabón que la compañía tuvo que ampliar su sistema de exportación y distribución y dirimir un pleito sobre la exclusividad de su representación. En efecto, un comerciante local, miembro de una firma que había renunciado a la representación, ahora se desgañaba por recuperarla. Entretanto, el endemoniado vendedor de jabón realizaba valiosos contactos en círculos comerciales y gubernamentales.

Otro joven se instaló como comisionista de valores, se hizo socio de la Bolsa y publicó un informe sobre el mercado bursátil que llamó la atención en círculos financieros argentinos. Mantenía constante comunicación cablegráfica con Nueva York, y no tardó en hacer ganar a sus clientes más de 600.000 dólares operando en la Bolsa de Nueva York. Cobró una buena comisión, pero los informes que elevaba al F. B. I. eran aún más interesantes que los que daba a sus clientes.

A otra ciudad argentina llegó un norteamericano de aspecto casi infantil que iba a trabajar como reportero. Se hizo socio de los clubes locales y empezó a mandar a los Estados Unidos artículos que fueron favorablemente comentados por publicaciones interesadas en asuntos latinoamericanos. Este joven

(1) El F. B. I. creó una escuela para agentes del S. I. S. destinados al extranjero. Los cursos abarcaban elementos de historia y costumbres del país de destino, técnicas básicas de espionaje y sabotaje, nociones técnicas de códigos, cifras y métodos de laboratorio. Al principio se trató de reclutar agentes que hablaran castellano o portugués, pero a medida que aumentaban las necesidades de personal, fue preciso crear escuelas de idiomas donde los agentes seguían cursos acelerados de castellano y portugués.

era un agente del F. B. I., a quien llamaremos George Stevens. Solía frecuentar un hotelito administrado por un hombre cuyos padres vivían en un país conquistado por los nazis, pero que a pesar de ello se había negado a hacer espionaje para los alemanes, resistiendo amenazas y presiones.

Este hombre era el presidente de una organización cuyos miembros tenían importantes intereses comerciales propios y vinculaciones con las empresas de servicios públicos, la banca y las reparticiones gubernamentales. Y parecía ingeniárselas para captar y retener todo lo que en el transcurso del día se conversaba en las mesas de su establecimiento. Stevens decidió obtener su ayuda. Fue al bar del hotel, pidió un café en el mostrador y dijo:

—Me gustaría escribir una serie de artículos sobre las colectividades extranjeras de la ciudad. Quisiera que usted me ayudara a reunir datos.

Clavó los ojos en el hotelero para observar su reacción.

El otro, por su parte, miró al joven yanqui un minuto largo antes de hablar. Luego dijo quedamente:

—Si yo le doy esa información, ¿llegará a quien corresponde?

Stevens asintió con un gesto.

—Sí. Y le prometo que usted no tendrá problemas.

No hubo más acuerdo ni más explicación que éstos. No eran necesarios. Los dos hombres se comprendían perfectamente.

—Nunca he conocido un hombre como ése —recordaría Stevens más tarde—. Su gente le tenía tanta confianza que, si él ordenaba tirarse de cabeza a un precipicio, lo hubieran hecho sin titubear.

«Una vez a la semana, por lo menos, me ponían vigilancia policial. Pero yo siempre me enteraba con anticipación, y ese día crítico era el que aprovechaba para trabajar como reportero. Ese también era siempre el día en que pasaba a visitar al jefe de detectives (*chief of detectives*), diciéndole que estaba ahí de paso e invitándolo a tomar un café conmigo. El pobre hombre debía volverse loco... él y los pesquisas que me seguían. Ignoraban que yo estaba prevenido por el hotelero, que tenía un amigo muy bien colocado en el departamento de policía.

«Un día supimos que dos alemanes sospechosos de espionaje habían pasado en automóvil a un país limítrofe. Yo tenía que averiguar quiénes eran, dónde habían ido, a quién habían visto y si pensaban regresar. Una misión bastante difícil cuando no se conoce siquiera los nombres de los buscados.

«Bueno, acudí a mi amigo. Me dijo que volviera dos o tres días más tarde. Lo hice. Me dijo que volviera más tarde. Volví más tarde. Meneó la cabeza.

«—Esta vez le he pedido demasiado, ¿eh? —pregunté.

«—Vuelva mañana —me dijo.

«Pensé que trataba de ganar tiempo.

«Cuando regresé, me entregó un informe dactilografiado describiendo a los alemanes, que no eran dos, sino tres. Constaban allí el número de la patente del automóvil y el número de serie del motor, el lugar donde iban y hasta un resumen de lo conversado durante el viaje. Los alemanes pensaban reencontrarse más tarde en la Argentina. Pocas veces he leído un informe tan detallado. Nos ayudó a descubrir una red de espionaje.

«—¿Podría decirme cómo averiguó todo esto? —le pregunté.

«Sonrió y dijo:

«—El chofer del automóvil era uno de mis hombres. Cuando esa gente pide un automóvil en esta ciudad, siempre les toca un chofer de mi confianza.»

En una oportunidad, Stevens estuvo a punto de dar por tierra con la amistad del hotelero.

—Era tanto lo que hacía por nosotros —refiere— que en cierta ocasión le ofrecí pagarle. En el primer momento, pensé que me sacaría a puntapiés. Pero después se calmó y dijo:

«—Lo que hago por ustedes lo hago de corazón, no por dinero.

«Finalmente pude salir de tan incómoda situación, diciendo que no le ofrecía una recompensa personal, sino la restitución de los gastos en que incurría. Este hombre fue para mí un buen amigo y un excelente aliado.»

La mayoría de los gobiernos de Centro y Sudamérica cooperaban voluntariamente en el programa de contraespionaje, pero había lugares, como la República Argentina, donde el trabajo resultaba difícil y peligroso por la hostilidad de la policía y de los funcionarios gubernamentales. Los agentes apostados allí a menudo se encontraban bajo vigilancia, y los informantes sorprendidos por la policía hablaban de interrogatorios presididos por la *picana eléctrica* (1), que provoca terribles dolores al ser aplicada en partes sensibles del cuerpo.

Hasta 1944, año en que la República Argentina cortó relaciones con el Eje, el S. I. S. utilizó para algunas de sus actividades una vieja lancha de motor oculta en la zona ribereña del río de la Plata, en las proximidades del puerto de Buenos Aires. A menudo, un agente secreto o un informante buscado por la policía atravesaba las sombras nocturnas a lo largo de la costa hasta llegar a la lancha. Se cruzaban algunas palabras a media voz con el patrón de la barca, que era argen-

(1) En castellano en el original inglés. (N. del T.).

tino. Y luego la «Flota de Crandall» —mote con que bautizaron la lancha los agentes del F. B. I. en honor del que concibió la idea— abandonaba sigilosamente su escondite y, eludiendo la vigilancia de la Prefectura, remontaba el Paraná con el perseguido hasta dejarlo sano y salvo en territorio uruguayo.

Agentes del S. I. S. penetraban en el «infierno verde» de la selva de Chogo, en Colombia, siguiendo el rastro a los contrabandistas de platino. Recorrían las accidentadas costas buscando posibles escondites de submarinos. Exploraban en canoas las fuentes del Amazonas, cuyos tributarios están infestados de pirañas, malignos pececillos devoradores de hombres. Ayudaban a localizar radios clandestinas enemigas; y así, trabajando en colaboración con el Departamento de Estado, los servicios de inteligencia del Ejército y la Marina, el contraespionaje británico y las policías latinoamericanas pudieron desentrañar la asombrosa historia de una de las más grandes redes alemanas de espionaje.

Del cúmulo de informaciones obtenidas surgió un panorama muy claro. El sistema de espionaje nazi en el Hemisferio Occidental operaba principalmente en el Brasil, la Argentina, Chile y México, aunque abarcaba también otros países de Centro y Sudamérica. México era quizá la base más importante, por su proximidad con los Estados Unidos.

Esta era la situación que debían enfrentar los Estados Unidos a medida que las nubes de la guerra se tornaban más espesas. El blando «ombligo» del país estaba amenazado en un momento de crisis, y sólo el esfuerzo conjunto de las Américas podía anular la amenaza.

El Brasil rompió relaciones con el Eje a comienzos de 1942. A partir de ese momento los agentes del S. I. S. unieron fuerzas con las autoridades brasileñas para limpiar los nidos de espías nazis, que solamente en ese país operaban seis radios clandestinas. Hacía ya varios meses que las estaciones de escucha de la F. C. C. y del F. B. I. venían interceptando mensajes cambiados entre esas estaciones y emisoras alemanas en Europa. Se descifraron y analizaron los mensajes, comunicando las claves a los agentes del S. I. S. en el Brasil y elevando al Departamento de Estado la información obtenida. Los norteamericanos conocían ya a la mayor parte de los agentes del Eje, y sus nombres de clave. Sin embargo, cuando se produjo la ruptura de relaciones, ni la policía brasileña ni el S. I. S. habían logrado aún identificar al misterioso jefe de un grupo de espionaje que operaba una radio clandestina conocida por sus letras de llamada: CIT.

El enigmático personaje era Josef Jacob Johannes Starziczny, ingeniero y hombre de ciencia. Los nazis incorporaron a

Starziczny a su sistema de espionaje en 1940 y lo adiestraron en escrituras secretas, códigos y radiotelegrafía. El plan original era lanzarlo con paracaídas en Inglaterra, pero a Starziczny le falló el coraje, y entonces lo mandaron al Brasil, donde llegó con el nombre de Niels Christian Christensen.

Era un hombrecito de gruesos anteojos, con mirada de búho. Desembarcó del vapor *Hermes* en Río de Janeiro el 6 de abril de 1941, y logró pasar de contrabando una maleta negra de cuero con un radiotransmisor, cuatro libros de código e instrucciones microfotográficas. También llevaba una carta de presentación a Otto Uebele, cónsul alemán en Santos y gerente de la firma Theodor Wille y compañía. La carta ordenaba a Uebele que adelantara 5.000 dólares a Christensen y lo ayudara en su misión. Un mes más tarde salió al aire una estación clandestina que se identificaba con la característica CIT y transmitía mensajes a Alemania. Había empezado a actuar Starziczny.

Hay gente que tiene extrañas manías. Algunos guardan piolines; otros, botones. Starziczny, alias Christensen, archivaba como una ardilla cada papel, cada documento que llegaba a sus manos. Tenía orden estricta de destruir cuanto mensaje o carta se relacionaran con su tarea de espionaje, pero el pulcro y ordenado hombrecito archivaba todo.

Esta debilidad por los papeles resultó una bomba de tiempo para el espionaje alemán en el Brasil. Y Starziczny encendió la mecha cuando fue a Santos, Brasil, para instalar un transmisor, y advirtió que necesitaba un medidor de frecuencia. En diciembre de 1941 acudió a comprarlo a un pequeño taller de radio.

—No lo tengo en existencia —dijo el dueño del negocio—; pero si me deja su nombre y dirección, se lo mandaré.

Starziczny escribió en un papel: «O. Mendes, Hotel Santos, Santos».

El comerciante sospechó del señor Mendes. Las autoridades brasileñas habían prevenido a los distribuidores que tuvieran cuidado al vender repuestos y accesorios de radio a desconocidos. El dueño del taller llamó a la policía y entregó el papel con las señas.

En los registros del Hotel Santos, naturalmente, no figuraba ningún «O. Mendes». Pero a mediados de febrero de 1942 el comerciante recibió una llamada telefónica de una firma de Santos. Preguntaban por el medidor de frecuencia encargado por Mendes. El comerciante recordó que esta misma firma había comprado anteriormente un transmisor y un medidor de frecuencia. Informó al S. I. S.

La policía brasileña, en estrecha colaboración con el S. I. S. y el Departamento de Estado, interrogó a un testigo tras

otro, hasta que la descripción de «O. Mendes» empezó a confundirse con la de Niels Christian Christensen, el ingeniero «danés» radicado en Río de Janeiro. Christensen fue arrestado y se descubrió su verdadera identidad. Era Starziczny.

El domicilio de Starziczny y su caja fuerte en un banco eran un verdadero tesoro de información secreta. Había conservado mensajes, códigos, instrucciones..., hasta los nombres de otros agentes. Oculto en un baúl, se encontró un radiotransmisor clandestino.

El arresto de Starziczny fue un golpe para los nazis. Pero el desastre completo fue el descubrimiento de toda una banda de espías vinculados a la estación de radio CEL.

El jefe del grupo CEL era Albrecht Gustav Engels, hombre elegante y educado, que colaboraba estrechamente con la embajada alemana por intermedio de Hermann Bohny, agregado naval alemán en Río de Janeiro.

Engels era director gerente de una compañía de electricidad y tenía muchas vinculaciones importantes en toda Sudamérica. Leal a su país, sintióse inquieto y hasta alarmado cuando, en 1940, regresó de Alemania Erich Leonhardt Immer y le informó que él —Immer— iba a dirigir una operación de espionaje en el Brasil. A Engels le asombró que su gobierno confiara una misión tan importante a un Don Nadie, un hombre a quien él consideraba «un empleado de tercera categoría», aun cuando fuese ingeniero de profesión.

Engels juzgaba duramente a Immer. Pero, desde la altura de su prusiana nariz, había visto lo que Immer era en realidad: un sujeto inepto y poco inteligente que emprendía una tarea que sólo era capaz de llevar a cabo alguien dotado de mayor capacidad intelectual.

Immer cometió su primer error apenas empezó a reclutar agentes. A uno de ellos entregó un micropunto, y el novato lo llevó a un óptico alemán para que lo descifrara con su microscopio. La chapucería alarmó tanto al óptico que inmediatamente denunció el caso a la embajada alemana. Bohny se enfureció con Immer por haber elegido un agente tan poco discreto que ponía en peligro todo el sistema de espionaje.

Poco después de este incidente Immer recibió un mensaje que le ordenaba regresar en el acto a Alemania. Y obedeció, esperando sin duda participar de importantes conferencias y recibir nuevas instrucciones. Sólo podemos imaginar lo que sucedió cuando se presentó a la sede central de la Abwehr en Berlín y fue introducido al despacho de su jefe. La escena se habrá desarrollado en los términos que siguen.

El jefe de Immer lo mira con asombro.

—¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué no está en Río de Janeiro?

—Señor, porque usted me ordenó regresar.

—No sea ridículo. Yo no le ordené tal cosa.

Immer, estupefacto y asustado, saca un papel del bolsillo.

—¡Pero aquí está el mensaje!

El jefe mira el mensaje.

—¡Idiota! ¡Yo no despaché semejante orden!

Tira el papel hacia Immer, que lo mira estúpidamente. El jefe de la Abwehr grita:

—¡Váyase!

Immer, aturdido, sale tropezando con las cosas... Más tarde escribe amargamente a un amigo, diciendo que Engels y Bohny le han jugado una mala pasada.

La combinación Engels-Bohny era poderosa. Por intermedio de ellos, los alemanes estaban al tanto de los asuntos económicos y políticos de las Américas; ellos pasaban informes sobre entradas y salidas de buques en los puertos; y gracias a ellos se enteraron los nazis de la construcción de un gigantesco aeropuerto internacional en Natal, desde el cual se enviarían bombarderos y cazas en vuelo al Medio Oriente.

He aquí algunos de los mensajes cambiados entre los espías y sus jefes.

De A. L. D.
A C. E. L.

7/10/41

ES DE MAXIMO INTERES OBTENCION DE SIGUIENTES PUBLICACIONES NORTEAMERICANAS: «ARMY NAVY JOURNAL», «MARINE ENGINEERING AND SHIPPING REVIEW», «PACIFIC MARINE REVIEW», «MARINE NEWS», «ARMY NAVY REGISTER». EN ELLAS HAY ARTICULOS Y NOTICIAS SOBRE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BARCOS QUE SON DE ESPECIAL VALOR. 63. STEIN.

De C. E. L.
A A. L. D.

29/9/41

«ESKADELEGATE»⁽¹⁾ CON CARGAMENTO DE MINERALES SALIO NOVIEMBRE 28 A LAS 15 HORA BRASILEÑA CON DESTINO INGLATERRA. EN ALTA MAR TOMO RUTA SUDAFRICA. PERFIL MODIFICADO EN SOLO UN MASTIL. ALFREDO.

De C. E. L.
A A. L. D.

11-12/11/41

BUQUE AUXILIAR «BALTAVIA» LLEGO 8/11 ENTRO EN DIQUE 10/11 CON PEQUEÑAS AVERIAS EN LAS MAQUINAS... SALIO CON DESTINO RIO GRANDE. HUMBERTO.

(1) Probablemente el buque británico *Eskadegate*.

De C. E. L.
A A. L. D.

3/12/41

OBJETO INFORMAR VUELOS (DE) NATAL (A) AFRICA. AVIONES SON BOEING B 17 O CONSOLIDATED B 24. CINCO DE ESTOS MODELOS VOLARON DE NOVIEMBRE 16 A NOVIEMBRE 26. DIVERGENCIAS DE IDENTIFICACION OBEDECEN A FALTA DE CONOCIMIENTO DE DICHS MODELOS POR LOS OBSERVADORES. ESTAMOS TRATANDO ELIMINAR DIFICULTADES. ALFRE(DO).

De C. E. L.
A A. L. D.

Febrero 18, 1942.

SERVICIO INTERRUMPIDO Y TRASLADADO AL SER DESCUBIERTO POR AMERICANOS. SEGUNDA ESTACION EN CONSTRUCCION. UN TRANSMISOR EN RESERVA. DOS NUEVAS ESTACIONES PRONTO EN SERVICIO. SALOMON ARRESTADO, PUDIMOS SALVAR SU TRANSMISOR. TRANSMISOR DE FEDERICO DEMASIADO VOLUMINOSO.

Pero en marzo de 1942 —apenas transcurrido un mes a partir de la ruptura del Brasil con el Eje— la policía brasileña, utilizando los informes suministrados por el S. I. S., empezó a cercar a los espías nazis y sus cómplices. Se descubrieron seis radios clandestinas, y ochenta y seis agentes enemigos fueron condenados por tribunales brasileños⁽¹⁾.

La ola de arrestos aplastó la infiltración alemana en el Brasil; pero entonces el centro de operaciones del espionaje nazi se trasladó a la Argentina y Chile. Los agentes del S. I. S. les siguieron la pista. Pero la tarea fue difícil y delicada, principalmente porque los hombres del S. I. S. no podían ordenar arrestos ni entorpecer en modo alguno las actividades de los agentes del Eje. Lo más que podían hacer en algunos casos era reunir las pruebas de esas actividades y elevarlas a los embajadores norteamericanos para que éstos las presentaran a los gobiernos interesados.

En lo que atañe a medidas de seguridad, la mayoría de los países centro y sudamericanos estaban, a comienzos de la segunda guerra mundial, tan desprevenidos como lo estuvo Norteamérica al estallar la primera guerra mundial. Y por ese motivo casi todos agradecieron el ofrecimiento norteamericano de mandar agentes del F. B. I. como instructores de

(1) Inmediatamente de producidos estos arrestos, la radio de Berlín comenzó a atacar al Brasil, amenazando con represalias. En poco tiempo, los submarinos alemanes hundieron cinco barcos brasileños. El 22 de agosto de 1942, el Brasil declaró la guerra a las potencias del Eje.

las policías locales y también para organizar defensas contra el espionaje y el sabotaje⁽¹⁾.

Por lo general, las cosas se desarrollaban así. El S. I. S. preparaba una serie de recomendaciones de seguridad para ser aplicada en alguno de los países incluidos en la política de buena vecindad. Después, un agente presentaba ese plan al primer magistrado del país amigo, que lo estudiaba cuidadosamente. El enviado explicaba los procedimientos que se utilizan en los Estados Unidos para vigilar a los ciudadanos de países enemigos y reforzar las medidas de seguridad.

Entonces el presidente exclamaba:

—En los Estados Unidos sería fácil poner en práctica este programa. Mr. Roosevelt se limitaría a apretar un botón, un edecán correría a su despacho, el presidente le daría una orden, y la orden sería cumplida. Pero aquí, yo aprieto un botón, ¿y qué ocurre? ¡Nada! ¡El timbre ni siquiera suena!

El S. I. S. hizo funcionar los timbres en muchos lugares, a pesar de muchas desinteligencias menores. Un malentendido típico es el que le ocurrió a un agente del S. I. S. cuyo nombre, rostro y apellido eran más irlandeses que el trébol. Se llamaba Kelly.

Al llegar a la frontera de un país latinoamericano, Kelly dio a conocer a la autoridad correspondiente su nombre, ocupación y antecedentes personales. El funcionario no le preguntó su religión. Se limitó a escribir «protestante». Para él, todos los norteamericanos eran protestantes. Kelly se quejó. Entonces el funcionario lo interrogó a fondo sobre los ritos de la Iglesia Católica, y Kelly —cuyo tío era obispo— le dio una lección. El funcionario lo escuchó gravemente, y después, a continuación de la palabra «protestante», escribió: «Pretende ser católico».

Dada la importancia de su trabajo, los agentes del F. B. I. fueron eximidos de la obligación militar, aunque muchos pidieron incorporarse a las filas. Andar sin uniforme era a veces un estorbo; por ejemplo, cuando algún patrioterio ebrio o excesivamente locuaz se mofaba de las ropas civiles.

El caso siguiente es típico. Un agente del S. I. S. que realizaba una investigación de espionaje en México tuvo que ir a un lugar de veraneo en las sierras. Allí, un norteamericano de voz tonante insistía en preguntarle a gritos por qué no estaba de uniforme. Por último, el agente llevó aparte al ebrio y le murmuró al oído:

(1) Los países sudamericanos no estaban preparados para resolver los problemas del espionaje y el sabotaje. La prueba se tuvo cuando las autoridades chilenas decidieron procesar al grupo de espionaje P. Y. L. La única norma legal que podía invocarse para penar las actividades subversivas era la ley de servicios eléctricos, que prohibía la instalación clandestina de un radiotransmisor. La persona que instalaba la estación secreta transgredía la ley. Pero quienes utilizaban dicha estación con fines de espionaje no incurrieron en delito alguno.

—Entre nosotros, me buscan por asesinato. Maté a un hombre en los Estados Unidos. Hacía demasiadas preguntas.

El preguntón se llamó a sosiego.

El S. I. S. trabajaba en estrecho contacto con el Servicio de Inteligencia británico. Esa cooperación resultó particularmente eficaz en la vigilancia del sistema de correos nazis. Esos correos viajaban en barcos españoles, llevando informes de espionaje y contrabandos de platino. Cuando estaba por llegar un emisario de España, los ingleses prevenían al S. I. S. Y cuando el emisario se iba, el S. I. S. informaba a los ingleses. Muchos de estos mensajeros fueron arrestados por los británicos cuando los buques en que viajaban hacían escala en Trinidad.

El S. I. S. logró infiltrar agentes dobles en el sistema de correos, y así fue posible fotografiar más de 500 páginas de mensajes en código y unos 4.000 negativos fotográficos con información económica y política. A menudo estos agentes dobles entregaban mensajes falsos en sustitución de los originales.

En cierta oportunidad, un emisario nazi se disponía a embarcar rumbo a España con 750 gramos de insulina ocultos en su equipaje. Hasta el día de hoy se estará preguntando cómo fue que durante el viaje la insulina se transformó en talco.

El S. I. S. operaba con notable eficacia. Sin embargo, al estallar la segunda guerra mundial se produjo cierta fricción entre el F. B. I. y la Oficina de Servicios Estratégicos (*Office of Strategic Services*). La incidencia amenazaba tener derivaciones graves para el S. I. S. en el preciso momento en que sus agentes estrechaban el cerco en torno a las redes de espionaje en Sudamérica.

Girado el conflicto al presidente Roosevelt, éste dispuso que el F. B. I. siguiera actuando con responsabilidad exclusiva en el contraespionaje civil dentro del Hemisferio Occidental. El Ejército y la Marina actuarían en la esfera del contraespionaje militar.

XXIV. - BURLANDO AL ENEMIGO

A comienzos de 1944 el director del F. B. I., J. Edgar Hoover, recibió de Sudamérica un inquietante informe. Los principales agentes secretos del S. I. S. en la República Argentina corrían grave peligro de ser arrestados y torturados por la policía política del presidente Pedro Ramírez, cuyo gobierno,

si no pronazi, era entusiastamente antinorteamericano. La policía argentina había capturado ya, en secreto, a cinco informantes del S. I. S. y existía la posibilidad de que los mismos delataran a los agentes del S. I. S.

Las relaciones entre los Estados Unidos y la República Argentina se habían agravado a tal extremo que parecía probable una ruptura diplomática. La Argentina se negaba a hacer causa común con las demás repúblicas latinoamericanas, partidarias de los aliados, y el Departamento de Estado informó al F. B. I. que en cualquier momento podía producirse la ruptura con la Argentina.

Era de vital importancia mantener agentes secretos en la Argentina, porque ese país se había convertido en el centro del espionaje nazi. No hacerlo, equivalía a crear una seria brecha en el sistema de inteligencia de los Estados Unidos, que abarcaba todo el Hemisferio Occidental.

El informe elevado a Hoover por uno de los inspectores del F. B. I. decía, entre otras cosas:

Me preocupa... el tremendo peligro de que alguno de nuestros agentes sea capturado en la Argentina y obligado a confesar por medio de torturas. Un hecho semejante sería alegre y eficazmente convertido por el actual régimen argentino en «cause célèbre», con el consiguiente efecto publicitario en todo el mundo. Las repercusiones de semejante incidencia podrían ser aterradoras en lo que atañe a las relaciones latinoamericanas. Agregaría enorme prestigio y vigor a la actual posición argentina, y colocaría al Servicio en la desgraciadísima situación del tradicional «chivo emisario»; ése es invariablemente el destino del que se deja sorprender y queda por lo tanto expuesto al ridículo y a la crítica. Me parece que no podemos pasar por alto la abrumadora evidencia de que los agentes alemanes están trabajando en estrecha colaboración con el actual régimen argentino, y sin duda tendrían el máximo placer en aprovechar las circunstancias para perturbar de la manera más eficaz al gobierno de los Estados Unidos... Si se produjera una ruptura de relaciones diplomáticas, creo que virtualmente todos los norteamericanos residentes en la Argentina que carecen de protección diplomática quedarían expuestos a muy malos ratos...

Los agentes estaban dispuestos a aceptar cualquier peligro. Pero Hoover, como el oficial antes de mandar sus tropas al combate, debió sopesar los posibles beneficios y las pérdidas potenciales, antes de tomar una decisión. Y ordenó el traslado a otras misiones de los cinco agentes que estaban en peligro inmediato. De Buenos Aires llegó un mensaje en código que decía:

REFERENTE SU RADIOGRAMA 772. SE ESTAN REALIZANDO TODOS LOS PREPARATIVOS NECESARIOS PARA INMEDIATA PARTIDA A MONTEVIDEO DE 241, 243, 582, 361 Y 363.

Utilizando los buenos oficios de la organización subterránea prevista para tales emergencias, los agentes del S. I. S. fueron escapando uno a uno de Buenos Aires. La «Flota de Crandall» los condujo a través del río de la Plata y los desembarcó en el territorio amigo de Uruguay. Y así terminó, al menos para estos cinco, un emocionante capítulo de la lucha contra el espionaje nazi en la Argentina. Pero esos hombres fueron reemplazados por otros, y para éstos continuó el peligroso juego.

Era un juego interminable. A veces asumía la forma de una incruenta guerra económica. Había que aplastar a los que cooperaban con el enemigo... para que no nos aplastasen a nosotros. Y así fue como las firmas comerciales e individuos que se pusieron de parte del Eje se vieron enfrentados al desastre económico, cuando el gobierno norteamericano publicó su temida «lista negra», que ostentaba un inofensivo título oficial: «*The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals*» (en castellano, algo así como «lista oficial de intereses bloqueados e interdictos»). Los británicos tenían una lista similar, y también los franceses, hasta la caída de Francia.

Las personas o firmas incluidas como colaboradoras del Eje en la lista negra de los Estados Unidos no tardaban en descubrir los inconvenientes de esa inclusión. Significaba que el gobierno de los Estados Unidos no tendría trato comercial alguno con ellas, y, de ser posible, no permitiría que otros lo tuviesen. La «lista negra» fue una poderosa arma económica para impedir que particulares o empresas comerciales estrecharan lazos amistosos con agentes enemigos.

Algunas firmas se esforzaron por eludir el bloqueo. Por ejemplo, una compañía venezolana perteneciente a la órbita de la I. G. Farbenindustrie, empresa alemana, necesitaba con urgencia determinados productos farmacéuticos. Si no lograba contar con ellos, sus competidoras empezarían a adueñarse del mercado. Entonces la compañía realizó gestiones para despachar desde la Argentina mercaderías por más de 23.000 dólares facturadas a un consignatario falso en Venezuela.

El agente del S. I. S. en Caracas informó a la embajada norteamericana, que a su vez notificó a la policía de Venezuela. Cuando llegó el embarque a bordo del *Río Grande*, la policía prohibió la descarga. El buque siguió viaje a San Juan de Puerto Rico, donde el cargamento fue confiscado por funcionarios aduaneros norteamericanos, en cumplimiento de órdenes dictadas por el custodio de la Propiedad Enemiga.

A medida que la lucha contra el espionaje se desplazaba del Brasil a Chile, en la primavera de 1942, el S. I. S. fue reuniendo pruebas de la existencia de un grupo de espionaje centrado en torno a una emisora clandestina conocida por

su característica P. Y. L. La pandilla había empezado a actuar bajo la dirección del general Friedrich Wolf, agregado militar alemán en Chile. Cuando Wolf fue trasladado de Chile a la Argentina, lo sucedió el mayor Ludwig von Bohlen, veterano de la primera guerra mundial. Von Bohlen era nativo de Chile, y en cierta oportunidad había sido secretario de un alto funcionario del gobierno chileno. De ahí que tuviera muchas importantes conexiones, aun antes de que los nazis lo reclutaran como espía.

El grupo P. Y. L. empezó a actuar a comienzos de 1941. Allí se filtraban, evaluaban y retransmitían los informes recogidos por los agentes alemanes a lo largo de la costa del Pacífico, de Chile a México. El transmisor de P. Y. L. estaba oculto en una pequeña construcción, en una granja en las afueras de Quilpue, cerca de Valparaíso, y operó durante meses sin interrupciones serias. Pero el S. I. S. vigilaba su funcionamiento.

Después de la destrucción de los grupos de espionaje del Brasil, el S. I. S. reunió un cúmulo abrumador de pruebas contra el grupo P. Y. L. Esas pruebas fueron elevadas al Departamento de Estado, quien notificó de lo que ocurría al ministro chileno de Relaciones Exteriores. La estación P. Y. L. cesó de transmitir. Pero Chile no hizo nada contra la pandilla hasta que el Departamento de Estado protestó oblicuamente por la actitud tolerante hacia los agentes del Eje.

En un discurso pronunciado el 8 de octubre de 1942 el secretario interino de Estado, Sumner Welles, dijo lo siguiente:

No puedo creer que esas dos Repúblicas (Argentina y Chile) sigan permitiendo durante mucho tiempo que sus hermanos y vecinos de las Américas, comprometidos como están en una lucha de vida o muerte por preservar la libertad y la integridad del Nuevo Mundo, sean apuñalados en la espalda por emisarios del Eje que actúan en sus territorios...

El discurso de Welles fue un acicate para que el gobierno chileno entrara en acción, mas para entonces la mayoría de los miembros de P. Y. L. habían huido a la Argentina.

Chile rompió relaciones con el Eje en enero de 1943. En esta decisión influyó mucho el escándalo periodístico producido por el descubrimiento de las actividades del grupo P. Y. L. Pero en abril las estaciones de escucha del F. B. I. y de la F. C. C. captaron mensajes de otra estación clandestina que operaba desde algún punto de Santiago de Chile con la característica P. Q. Z.

Y así recomenzó la búsqueda. Esta vez el S. I. S. se topó con una de las redes de espionaje mejor montadas en toda Sudamérica. Contaba con agentes no sólo en Chile, sino tam-

bién en Perú, Bolivia y Brasil. La había organizado von Bohlen, que permaneció en Chile hasta septiembre de 1943, a pesar de que la ruptura de relaciones se produjo en enero.

Cuando von Bohlen salió del país con destino a Alemania, entregó el manejo de las operaciones —y 200.000 dólares— a Bernardo Timmerman, uno de sus principales secuaces.

Poco a poco se fueron desentrañando también las actividades del grupo P. Q. Z. Una carta interceptada de un espía permitió localizar a otro. Informes recogidos por un funcionario del Departamento de Estado, unidos a otros del S. I. S., llenaron las lagunas de las investigaciones policiales chilenas. Y por fin, en febrero de 1944, el rastro concluyó en Timmerman. El grupo P. Q. Z. fue liquidado.

Aunque parezca extraño, el mayor von Bohlen era otro de los espías alemanes que no podían resistir la tentación de dejar pruebas escritas, aunque criticara esa negligencia en otros. Después de la disolución del grupo P. Y. L. estudió cuidadosamente las debilidades del mismo y escribió un memorial titulado «Experiencias adquiridas en el proceso de Valparaíso». Allí decía:

1. El error básico fue la insuficiencia de la clave original y la transmisión de la segunda clave junto con la primera. Si no hubiera sido descifrada la palabra que servía de santo y seña para las comunicaciones, no se hubiera revelado el código.

2. Aunque después del recibo del memorándum hubo semanas y hasta meses para esconder todas las pruebas, no se tomaron las medidas necesarias para ello, a pesar de las estrictas órdenes vigentes. Por ejemplo, se encontraron fragmentos en Quilpue, y notas taquigráficas en un baúl perteneciente a Sz... En relación con esto, Bl. nos desengañó por su falta de autodisciplina, y Sz. por conservar innecesariamente su diario taquigráfico. Sz. había mandado también papeles a otro lugar, para que se los guardaran, pero pudimos recuperarlos a tiempo. No sólo eran perjudiciales a la causa sus apuntes taquigráficos, sino que por culpa de ellos complicó a algunos de sus colaboradores, y al final su ex prometida y otra dama se vieron envueltas en el asunto...

Los papeles de von Bohlen resultaron sumamente valiosos para descubrir a otros espías...

El peligro de las radios enemigas para la causa aliada se hizo evidente en un episodio que giró en torno al gran transatlántico *Queen Mary*, convertido en transporte de tropas y presa favorita de los submarinos enemigos.

La inmensa nave llegó a Río de Janeiro el 6 de marzo de 1942, llevando 10.000 soldados con destino a ultramar. Ese mismo día la estación de escucha del F. B. I. interceptó un mensaje de la emisora nazi C. I. T., que decía: «*Queen Mary* llegó hoy a las 10.00... debe (ir) al sótano».

Dos días más tarde, a las 10.52 hora de Greenwich, C. E. L. informó a la estación A. L. D. de Hamburgo: «*Queen Mary* zarpó marzo 8, 18 hora local».

Al día siguiente el operador del C. I. T. envió este mensaje: «Con *Queen Mary* cae Churchill... Buena suerte».

La voz de alerta llegó a los sumergibles alemanes: el *Queen Mary* andaba suelto en el Atlántico, con un cargamento cuya pérdida resultaría un golpe demoledor para los aliados. Y no navegaba en convoy.

El F. B. I. entregó los mensajes interceptados al Departamento de Estado, la Oficina de Inteligencia Naval y el Servicio de Inteligencia del Ejército. El 10 de marzo la policía brasileña arrestó a Josef Jacob Johannes Starziczny —el mismo que atesoraba sus papeles secretos— y encontró copia de un mensaje despachado por la estación C. I. T. describiendo los movimientos del *Queen Mary*. La embajada norteamericana hizo entrega del mensaje a su similar británica en Río de Janeiro.

El 15 de marzo, la agencia noticiosa oficial italiana, Stefani, transmitió esta información:

En círculos marítimos argentinos se afirma que el transatlántico británico *Queen Mary*, que zarpó de Río de Janeiro hace pocos días con 10.000 soldados norteamericanos a bordo, con destino desconocido, fue torpedeado. El buque resultó con graves averías y trató de llegar a la base británica de las islas Falkland.

Pero el *Queen Mary* había eludido a los submarinos, salvado por la rápida advertencia originada en la interceptación de mensajes.

En el apogeo de su actuación, el S. I. S. contó con 360 hombres. Nueve de las diez repúblicas sudamericanas le solicitaron agentes adscriptos como consejeros técnicos en asuntos de policía y contraespionaje. En tal condición, inspeccionaron más de 150 establecimientos industriales, instalaciones de servicios públicos y otros centros neurálgicos considerados de especial importancia para el esfuerzo de guerra aliado, aconsejando las medidas necesarias para reforzar la seguridad e impedir el sabotaje.

Pero la hazaña máxima del S. I. S. fue, probablemente, la batalla de ingenio contra los contrabandistas de platino. Como se sabe, el platino es un metal esencial para el equipamiento y mantenimiento de la maquinaria bélica de un país⁽¹⁾.

Sólo cinco países en el mundo producen platino en cantidad apreciable: Colombia, Canadá, Rusia, los Estados Unidos y

(1) Se usa en los sistemas de ignición, en la fabricación de explosivos y en equipos eléctricos. También es un elemento esencial para obtener el máximo rendimiento en sistemas eléctricos y encendidos de aviones, tanques, camiones automotrices y otros vehículos automotores.

la Unión Sudafricana. Los alemanes necesitaban platino con urgencia para sus fábricas bélicas, y pusieron los ojos en Colombia porque era el único país productor de platino que en 1942 no estaba en guerra con el Reich.

Unas 22.850 onzas troy de la producción anual colombiana de platino procedían de los grandes yacimientos de la Choco Pacific Company, y otras 12.150 onzas eran producidas por unos 30.000 mineros nativos, que «lavaban» el mineral de los arroyos, del mismo modo que lavaban el oro los mineros de Klondike.

Entre 1936 y 1941 un alemán llamado Theodore G. Barth había prácticamente monopolizado la producción «nativa» de platino en Colombia, con el simple recurso de pagar del 20 al 30 por ciento sobre la cotización oficial del mercado. Pero el monopolio de Barth se derrumbó en junio de 1941, cuando los Estados Unidos congelaron los capitales alemanes. Entonces aparecieron los contrabandistas.

En agosto de 1942 el precio del platino había subido a 2.338,10 dólares en el mercado negro: casi cuatro veces el precio oficial. Un cubo de once centímetros y medio de lado de platino de buena ley, con un peso de treinta kilogramos, valía 154.314,60 dólares.

Los Estados Unidos, en virtud de un acuerdo firmado con el gobierno colombiano, tenían prioridad para adquirir toda la producción de platino del país, cualquiera fuese su procedencia. No había dificultad con la Choco Pacific Company, porque toda su producción pasaba automáticamente a la agencia recaudadora del gobierno, pero conocer la producción «nativa» resultaba difícil; y al mismo tiempo era el único procedimiento para impedir la evasión de platino a los alemanes. Los indígenas de la selva vendían por lo general al mejor postor. El gobierno colombiano dictó decretos imponiendo severas penas a los que no entregasen el platino al gobierno, pero faltaban los medios para hacer cumplir dichas medidas, y los contrabandistas lo sabían. Entonces intervino el S. I. S.

El rastro del contrabando nacía en la salvaje e impenetrable selva colombiana y terminaba en la lujosa residencia de un contrabandista, vecina a los verdes prados del Country Club de la península de Monterrey, en California.

Un día de marzo de 1943 el radiooperador del F. B. I. en Quito, Ecuador, despachó un largo mensaje a la sede central del F. B. I. en Washington, aludiendo a un «probable contrabando de platino» por parte de un tal Harold Ebury, presunto ciudadano británico, y de un austriaco que no se mostró tan discreto como él creía cuando empezó a sondear las posibilidades de comprar platino en el mercado negro. Los agentes del S. I. S. descubrieron que el austriaco era socio

de Ebury y que iba con frecuencia a Ecuador pretextando ser comerciante en trigo.

Al recibir el mensaje, el F. B. I. compulsó sus archivos. Apareció una declaración prestada por Ebury al llegar a Seattle, de Oriente, con una considerable cantidad de dinero japonés que había remitido a la Argentina antes de la guerra. Ebury se presentaba como banquero internacional, pero los ingleses informaron al F. B. I. que era sospechoso de contrabando.

Los agentes del S. I. S. en Quito recibieron orden de otorgar al caso Ebury «preferente atención». Investigaron las andanzas del misterioso Mr. Ebury y sus colaboradores sudamericanos, y descubrieron que integraban una pandilla dedicada a contrabandear platino de Colombia a la Argentina, pasando por Ecuador. El rastro, por lo que en esa época pudieron deducir los agentes, terminaba en una sastrería de la calle Florida, en Buenos Aires. Averiguaron que el dueño de la sastrería había recibido un cablegrama de Ebury, diciendo que llegaría pronto desde Quito.

A medida que se sumaban los informes hízose evidente que Ebury, domiciliado en California, dirigía las operaciones de contrabando en Sudamérica. Investigadores del S. I. S. siguieron a un contrabandista desde Ecuador hasta la República Argentina, a través de Bolivia, para determinar las rutas del contrabando. Lo dejaron vender el metal y supieron que el destinatario último del mismo era una firma refinadora de nombre alemán.

El F. B. I. echó el guante a Ebury el 17 de julio de 1943. Los agentes lo encontraron en su casa de la península de Monterrey. Los hizo pasar al «living room» y con la mayor serenidad les habló de sus viajes por el mundo y de sus planes de fundar en Ecuador una compañía importadora y exportadora. Ellos le pidieron más detalles de sus actividades comerciales, y Ebury no tardó en comprender que sabían más de lo que él imaginaba.

Por fin sonrió, reclinándose en el sillón, y dijo:

—Pues, sí, caballeros; he contrabandeado platino a Buenos Aires en dos oportunidades. Les contaré todo. ¿Por dónde quieren que empiece?

Ebury calculaba que durante su carrera de contrabandista había pasado por sus manos alrededor de media tonelada de platino. Admitió que en su correspondencia la palabra «tela» equivalía a platino, y que la cifra \$ 1.300 significaba 1.300 gramos de platino. Pero dijo no saber que el metal iba destinado a los países del Eje. Admitió ante la Corte haber contrabandeado platino desde Ecuador a la República Argentina, pero dicho proceder no implicaba delito alguno come-

tido en los Estados Unidos. Se declaró culpable, sin embargo, de violar la censura utilizando códigos en su correspondencia, y fue sentenciado a dieciocho meses de cárcel.

Pero mientras los agentes del S. I. S. cerraban el caso Ebury, iniciaban otros diecinueve, como resultado de indicios y pistas surgidos de aquella investigación. Los contrabandistas se llamaron a sosiego por un tiempo, pero después empezaron a actuar nuevamente. En 1944, Hoover envió a Colombia seis agentes más del S. I. S. con la misión de cooperar en la lucha emprendida. Los agentes conferenciaron con el presidente de Colombia, Alfonso López, y le presentaron un proyecto de decreto.

—Lo redactamos en términos enérgicos —recordó más tarde un agente—. Pensamos que tendríamos suerte si conseguíamos el cincuenta por ciento de lo que buscábamos. Pero, después que leyó el proyecto, le puso un encabezamiento, lo firmó, y el decreto quedó como suyo.

Los agentes dividieron el país en cuatro zonas de operaciones y empezaron a trabajar. A uno de ellos, George Stevens, le tocó una zona de selvas vírgenes al pie de los Andes.

—Contraté al piloto de un viejo avión Ford trimotor —recordaría Stevens—. Carecíamos de brújula y de radio. El avión estaba equipado con pontones. En el aterrizaje el piloto lo hacía patinar sobre el agua o el barro. Le pregunté: «¿Cómo encontrará la ruta a Barranquilla sin compás ni radio?» Sonrió y dijo: «Seguiré el río hasta la costa y doblaré a la derecha. No puedo fallar». Yo dije: «¿Y si viene una tormenta?» Respondió: «Oh, me recuesto en el río, ato el pájaro y pesco».

«Por fin le consiguieron un avión flamante, una belleza. Pero lo hizo polvo. La última noticia que tuve de él fue que había vuelto a volar en su viejo Ford trimotor. Y es posible que siga volando.

«No tardamos mucho en descubrir que los contrabandistas acostumbraban mandar un emisario a los indígenas para recolectar el platino lavado por cada uno. El emisario cruzaba las montañas con su carga, se internaba en Ecuador, y de allí salía el contrabando. Mientras mis compañeros trabajaban en otras zonas, yo conseguí algunos contactos útiles entre los indios».

Stevens averiguó que un grupo de contrabandistas utilizaba como emisario a un camionero español. Le mandó decir que quería verlo.

«Cuando vino, puse mis cartas sobre la mesa —recuerda Stevens—. Le dije que el reciente decreto del gobierno penaba con cárcel o destierro al extranjero que incurriese en contrabando de platino. Siendo español, lo más probable era que no sólo lo deportasen, sino que perdiera todo lo que tenía.

«—Elija usted —agregué—. O trabaja para nosotros, o ya sabe...

«Trabajó para nosotros, conservando su empleo de emisario. Gracias a él, pudimos impedir que otra pandilla de contrabandistas tomara vuelo».

Desde comienzos de 1942 hasta julio de 1944, los agentes del S. I. S. determinaron el origen y el destino final de toda la producción de platino, salvo unas 2.507 onzas troy. Es posible que esa cantidad haya llegado a Alemania. Pero la maquinaria de guerra alemana en ese mismo período requirió 137.500 onzas troy de platino, según cálculos oficiales. Las barreras impuestas por el gobierno colombiano, válido de informes suministrados por el S. I. S., restringieron el consumo de platino de la industria nazi a menos del 2 por ciento de sus necesidades reales.

La batalla contra el espionaje y contra los contrabandistas de platino estaba en pleno apogeo a comienzos de 1944, cuando el director del F. B. I., Hoover, recibió del Pentágono y del Departamento de Estado informes que lo alarmaron. Esos informes procedían de fuentes demasiado serias para ponerlas en duda, y en ambos casos la historia era la misma: la N. K. V. D., policía secreta comunista, realizaba gestiones para instalar una oficina en Washington.

Sin previa autorización de la Casa Blanca, el secretario de Estado Cordell Hull o el Estado Mayor Conjunto, la Oficina de Servicios Estratégicos había convenido con el ministro ruso de relaciones exteriores, Molotov, un intercambio de misiones que permitiera a los hombres de la O. S. S. (*Office of Strategic Services*) ir a Moscú, y a los hombres de la N. K. V. D. venir a Washington.

En principio, cada organismo actuaría sólo como agente de enlace para el intercambio de información de «inteligencia». Pero Hoover sabía que todos los países que intentaban colaborar en ese campo con los rusos se veían después en figurillas para contrarrestar el espionaje de la propia N.K.V.D.

Hoover envió a la Casa Blanca un mensajero especial con la siguiente carta confidencial, fechada el 10 de febrero de 1944 y dirigida a Harry L. Hopkins, íntimo amigo y ayudante del presidente:

Estimado Harry: Acabo de saber de fuente confidencial pero digna de confianza que se ha realizado un acuerdo de enlace entre la Oficina de Servicios Estratégicos y la Policía Secreta Soviética (N.K.V.D.), en virtud del cual ambos servicios harán un intercambio de oficiales.

La Oficina de Servicios Estratégicos enviará algunos hombres a Moscú, y a su vez la N.K.V.D. instalará una oficina en Washington. Tengo entendido que este acuerdo... está ya tan avanzado que

los funcionarios del Departamento de Guerra estiman que no pueden modificar el programa.

He querido exponerle esta situación en el acto porque me parece altamente peligroso e indeseable permitir que se introduzca en los Estados Unidos una unidad del servicio secreto ruso, cuyo propósito reconocido es penetrar los secretos oficiales de otros gobiernos. La historia de la N.K.V.D. en Gran Bretaña demostró claramente que el propósito fundamental de sus operaciones era obtener subrepticamente secretos oficiales del gobierno británico. Se me informa que varios otros países donde ha operado la N.K.V.D. recogieron una experiencia similar.

Considero que sería altamente peligroso para nuestras dependencias gubernamentales autorizar oficialmente en los Estados Unidos el funcionamiento de un organismo como la N.K.V.D., que por la forma en que se plantean las cosas operaría sin fiscalización alguna. En vista del peligro potencial que surge de esta situación, he querido que usted la contemple, y le haré llegar cualquier otro informe que reciba sobre el particular. Cordialmente. — J. Edgar Hoover.

Hoover elevó también un memorándum al procurador general Biddle, poniéndolo al tanto de los acontecimientos. Formuló a Biddle la misma advertencia que a Hopkins, agregando:

La verdad es que agentes secretos de ese organismo, operando subrepticamente en los Estados Unidos, han tratado de obtener informes altamente confidenciales sobre los secretos del Departamento de Guerra. Creo que la instalación de una dependencia oficial de la N.K.V.D. en los Estados Unidos será una seria amenaza para la seguridad interna del país...

Los «secretos del Departamento de Guerra» a que se refería Hoover eran los de la bomba atómica, custodiados en ese entonces por el Distrito de Ingeniería de Manhattan, dependiente del Ejército.

La Casa Blanca bloqueó el intercambio de las misiones y no tardó en olvidarse la incidencia.

A medida que la contienda se acercaba a su fin, empezó a agigantarse el problema de la función que correspondería a los servicios de inteligencia durante la posguerra. Hubo acuerdo general en el sentido de reajustar un sistema que bajo la presión del conflicto había alcanzado proporciones inmensas. El quid estaba en la forma que asumiría el nuevo sistema y en la delimitación de jurisdicciones.

Fue entonces —en abril de 1945— cuando Harold D. Smith, director del Servicio de Presupuesto (*Budget Bureau*) informó al nuevo presidente, Harry S. Truman, que el Servicio de Presupuesto contaba con personal experto en problemas de inteligencia.

Truman lo recuerda en sus memorias:

...Entonces se me informó que el propio Servicio de Presupuesto tenía personal experimentado y competente, especialistas en todos los problemas que plantea el funcionamiento de un servicio de inteligencia...

Smith sugirió que sus expertos iniciaran estudios inmediatos en ese campo y yo di mi conformidad...

Por esa época, el Estado Mayor Conjunto, la O. S. S. y el F. B. I. también realizaban sus propios estudios. Y pronto se evidenció que existía una amplia gama de opiniones sobre la forma de organizar los servicios de inteligencia de la Nación.

El plan del Servicio de Presupuesto consistía en convertir al Departamento de Estado en «centro coordinador» de las tareas de espionaje y contraespionaje, distribuyendo las tareas de seguridad entre el Ejército, la Marina, el F. B. I., el Departamento de Estado, la Comisión de Valores y Bolsa, el administrador de la Propiedad Enemiga, el Control de Fondos Extranjeros y —en lo atinente a investigaciones sobre «lealtad» interna— la Comisión de Servicios Civiles, la Guardia Costera, la Policía Militar, el Departamento del Tesoro, etc. Prácticamente todas las ramas del gobierno tendrían algo que ver.

La O. S. S. y el Estado Mayor Conjunto favorecían la creación de un nuevo ente ejecutivo, encabezado por un director con facultades para montar una organización de alcance mundial y para supervisar el funcionamiento de toda otra agencia investigativa. El plan del F. B. I. consistía simplemente en expandir el sistema de inteligencia que actuó durante la guerra en el Hemisferio Occidental, dándole extensión mundial. Es decir, que el Ejército y la Marina seguirían ocupándose en asuntos de interés militar, mientras que el F. B. I. operaría en la esfera civil. Una comisión formada por representantes del Ejército, la Marina, el F. B. I. y el Departamento de Estado coordinaría y evaluaría las operaciones.

En este clima de controversia, en enero de 1946, el presidente Truman ordenó la creación de una Autoridad Nacional de Inteligencia (*National Intelligence Authority*) ⁽¹⁾. Órgano de trabajo de la misma era un Grupo Central de Inteligencia (C. I. G., *Central Intelligence Group*), que debía planear, desarrollar y coordinar las operaciones de inteligencia fuera del territorio de los Estados Unidos. El primer director de

(1) En 1946, es decir, en sus comienzos, la Autoridad Nacional de Inteligencia era un organismo integrado por Dean Acheson, secretario interino de Estado; John L. Sullivan, secretario interino de Marina; Robert P. Patterson, secretario de Guerra, y el almirante William D. Leahy, representante personal del presidente.

Inteligencia Central designado por el presidente fue el almirante Sidney W. Souers.

La medida de Truman dejó en pie ciertas dudas. Se ignoraba si el nuevo organismo participaría activamente en las operaciones de inteligencia, o si actuaría solamente como entidad coordinadora y evaluadora, delegando el trabajo activo en los servicios de informaciones ya existentes. Pero de algo estaba seguro Hoover: existía un plan en marcha para desplazar al F. B. I. de las operaciones de inteligencia en el exterior.

Souers dirigió el Grupo Central de Inteligencia como organismo coordinador y evaluador, pero cuando en junio de 1946 lo sucedió el general Hoyt Vandenberg, el nuevo director tomó rápidas medidas para que el grupo operase por su cuenta en todo el mundo. La Autoridad Nacional de Inteligencia dictó una disposición autorizando a Vandenberg para hacerse cargo de todas las investigaciones y análisis básicos en el terreno de la inteligencia, y para dirigir todas las actividades de espionaje y contraespionaje en el extranjero.

El rumor de que se estaba desplazando al F. B. I. provocó un diluvio de cartas de los jefes de misiones norteamericanas en Sudamérica, protestando por el retiro del F. B. I. Muchos afirmaron que la disolución del S. I. S. en momentos en que llegaba al apogeo de su organización era una medida temeraria. Un funcionario del Departamento de Estado resumió la actitud general en un memorándum elevado a sus jefes, donde decía: «Hasta donde alcanza mi experiencia, no se ha logrado en los servicios de informaciones una coordinación comparable a la obtenida por el F. B. I. y el Departamento de Estado en las operaciones de inteligencia que realizan en Latinoamérica...».

Pero la decisión de disolver el S. I. S. se había tomado en los niveles superiores del gobierno. Al F. B. I. no le quedó más remedio que aceptarla. Y así terminó la historia del Servicio Especial de Inteligencia del F. B. I. (1).

(1) Un balance final de las operaciones del F. B. I. en Centro y Sudamérica, entre el 1º de julio de 1940 y el 31 de marzo de 1947, revela los siguientes datos: Se identificaron un total de 837 agentes de espionaje, de los cuales 389 fueron arrestados y 105 condenados; también fueron identificados 281 agentes de propaganda, de los cuales se arrestó a 60; 30 sabotadores fueron identificados, y 20 arrestados. Entre los contrabandistas de materiales de guerra, las identificaciones ascendieron a 222, los arrestos a 75, las condenas a 11. Un total de 7.064 ciudadanos de países enemigos fueron desplazados de zonas estratégicas; 2.172 fueron internados y puestos en lugar seguro; a 5.893 se los deportó o expulsó. Las firmas o personas incluidas en la «lista negra» totalizaron 1.545.

Se localizaron un total de veinticuatro radios clandestinas. Las autoridades locales de los respectivos países secuestraron treinta radiotransmisores y una asombrosa variedad de materiales diversos, desde brillantes, códigos, partidas de mercurio y otros metales raros, hasta productos farmacéuticos.

XXV. - LA PRINCESA INTRIGANTE

Ninguna crónica de intrigas internacionales, verdaderas o ficticias, sería completa si no figurase en ella la astuta y enigmática mujer que en resplandecientes salones y cancillerías actúa como enviada y consejera de los hombres que traman la conquista del poder.

Por eso no podemos omitir a la pelirroja Steffi Richter, más conocida como Su Alteza Serenísima la Princesa Stefanie Hohenlohe-Waldenburg Schillingsfurst. La princesa fue emisaria de los apaciguadores que condujeron a la traición contra Checoslovaquia, consumada en Munich. Después, en 1940, concertó en San Francisco una entrevista entre un misterioso visitante inglés y el agente de más confianza de Hitler, capitán Fritz Wiedemann, donde se discutieron planes para establecer una monarquía en Alemania. El inglés pensaba que tanto el pueblo británico como el alemán se sorprenderían si supieran con cuánta facilidad podía negociarse una paz satisfactoria.

Pero sigamos con nuestro relato.

Steffi Richter, plebeya de origen, conquistó el capricho de un príncipe húngaro. Era hija de un abogado vienés y tenía, por entonces, dieciséis años. Al contemplarse en el espejo de su alcoba, haciéndose una reverencia y pronunciando ante sí misma aquellas palabras mágicas —«Su Alteza Serenísima»— comprendió que todos sus sueños se cumplirían. El hombre con quien soñaba era el príncipe Friedrich François Augustin Marie Hohenlohe-Waldenburg, oficial del ejército austriaco. Steffi y el príncipe se casaron en Londres en 1914 y se divorciaron seis años más tarde. Steffi dijo que fue por causa de otra mujer. El príncipe no dijo nada. Pero Steffi conservó su título regio y pronto se convirtió en una figura familiar en las capitales europeas. Su base de operaciones fue Londres, donde intimó con el grupo de Cliveden, que estaba dispuesto a coquetear con los nazis. Steffi se convirtió en favorita de Adolfo Hitler e íntima amiga del ayudante personal del Führer, capitán Wiedemann, a cuyas órdenes había actuado Hitler como sargento en la primera guerra mundial.

Muchas personas debieron preguntarse de dónde sacaba dinero la princesa para viajar tanto y para ofrecer recepciones tan suntuosas. Parte del misterio, por lo menos, se disipó en 1939, cuando Stefanie entabló pleito en Londres contra lord Rothermere, adinerado editor inglés. Alegaba que lord

Rothermere había violado un contrato por el que se comprometía a pagarle 20.000 dólares al año, en forma vitalicia, si actuaba como su «embajadora» personal ante Hitler y otros jefes de gobiernos europeos. Stefanie sostuvo más tarde que fue ella quien impulsó a Rothermere a trabajar en pro de la restauración de la monarquía húngara; pero que desistió cuando supo que Rothermere ambicionaba colocar un pariente en el trono de Hungría.

Lord Rothermere admitió que desde 1932 hasta enero de 1938 había pagado a Stefanie, no 20.000 dólares anuales, sino un total aproximado de 250.000 dólares, sin incluir costosos regalos que ella compró e hizo cargar en su cuenta. El abogado de Rothermere argumentó que el acuerdo entre Steffie y su defendido era un arreglo social, no un contrato legal, e insinuó en términos generales que las demandas de la señora «orillaban el chantaje».

El juez Tucker, después de escuchar todas las argumentaciones, dictaminó que no había pruebas de que Rothermere hubiera firmado un contrato vitalicio con la princesa.

Durante el proceso se presentó como evidencia una carta de particular interés, escrita por el capitán Wiedemann a lord Rothermere, expresando el agradecimiento de Hitler a la princesa por haberle presentado a lord Rothermere. Wiedemann agregaba que «gracias al trabajo subterráneo de la princesa había sido posible el acuerdo de Munich».

Los acontecimientos que precedieron al pacto de Munich fueron relatados a los agentes del F. B. I. por Su Alteza Serenísima en persona. He aquí su testimonio:

En junio de 1938 el mariscal de campo Hermann Goering la invitó a su castillo medieval, Karin Hall. Goering y la princesa «discutieron la posibilidad de una entrevista entre un representante de Alemania y lord Halifax, con el propósito de salvar la paz... Tal entrevista necesariamente debería concertarse sin conocimiento de «herr» Von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores. El problema era el agente que utilizarían los nazis. Goering y la princesa acordaron que el hombre para tan delicada misión era el capitán Wiedemann. Goering, según la princesa, estaba convencido de poder mejorar las relaciones entre Alemania e Inglaterra, y de ese modo impedir el conflicto armado, a pesar de Von Ribbentrop.

La princesa persuadió a Wiedemann de que solicitara el permiso de Hitler para entrevistar a lord Halifax en Londres, preparando el terreno para la visita de Goering.

Trazados estos planes en Alemania, la princesa fue a Londres. No tuvo dificultad para concertar una conferencia con lord Halifax, «quien se mostró muy dispuesto a tener una entrevista no oficial con Wiedemann en Londres, a fin de

preservar la paz y procurar una mejor comprensión entre Hitler e Inglaterra».

Wiedemann llegó a Londres con plena aprobación de Hitler para discutir los problemas pendientes entre ambos países. La princesa recordaría más tarde: «Aunque no estuve presente en la entrevista de Halifax y Wiedemann, tengo entendido que se llevó a cabo con pleno éxito». La visita de Goering, en cambio, no llegó a realizarse, porque de algún modo se filtró la noticia y entonces intervino Ribbentrop. Pero Hitler y el primer ministro británico, Chamberlain, se reunieron en Munich.

Stefanie, sin embargo, negó vigorosamente los informes que le atribuían intervención en la conferencia que celebró lord Runciman con el nazi checo Konrad Heinlein. En ella las reivindicaciones alemanas sobre el territorio checo de los Sudetes fueron recibidas con simpatía. Al producirse la crisis de Munich, Stefanie celebraba fastuosas recepciones en su residencia veraniega, Schloss Leopoldskron, que estaba frente al retiro montañoso de Hitler, valle por medio. De noche se podían ver a la distancia las luces de Berchtesgaden.

La princesa sostuvo más tarde que no había conocido a Hitler antes de entrar al servicio de lord Rothermere, y que la primera vez que lo vio fue a pedido de éste y cumpliendo con sus instrucciones. Al producirse la ruptura de ambos, Stefanie subrayó la admiración que Rothermere profesaba al Führer, diciendo que «estaba en primera fila de los apaciguadores ingleses, y siguió elogiando a Hitler después de Munich».

Stefanie explicó su papel como el de «una emisaria excesivamente glorificada», a pesar de que Hitler le había regalado una esvástica de oro, la orden de la Cruz Roja germana y una foto autografiada con estas palabras: «En recuerdo de una visita a Berchtesgaden». Y por si fuera poco, en cierta oportunidad el canciller alemán le escribió lo siguiente:

Sé con cuánta sinceridad y entusiasmo, en este último año transcurrido, ha bregado usted por la Nueva Alemania y sus necesidades vitales. Conozco perfectamente las numerosas molestias que eso le ha causado. Por eso, estimadísima princesa, desearía expresarle mi sincero agradecimiento por la gran comprensión de nuestro pueblo en general y de mi obra en particular que usted siempre ha demostrado...

Después del infame apaciguamiento de Munich, el F. B. I. recibió con particular interés la noticia de que Hitler mandaba a Wiedemann a los Estados Unidos como cónsul general en San Francisco. Parecía extraño que el ayudante de más confianza de Hitler fuera designado para un cargo tan mo-

desto después de sus brillantes hazañas en la diplomacia anterior a Munich. Wiedemann llegó de Alemania en el transatlántico *Hamburg* el 4 de marzo de 1939 y declaró a los periodistas: «Mi única intención, mi único deseo es servir de intermediario para fomentar el mejor entendimiento entre nuestros dos países...».

El arribo de Wiedemann a los Estados Unidos coincidió con la última etapa de los preparativos nazis para la guerra. Y el F. B. I. no tardó en averiguar que la misión del capitán no era tan inocente como él pretendía. Un informe procedente de Bruselas por intermedio del Departamento de Estado mencionaba el testimonio de dos íntimos colaboradores de Hitler, según los cuales la misión de Wiedemann era organizar en los Estados Unidos la propaganda germanófila y antisemita, fomentar el fascismo en México y convertir el consulado de San Francisco en cuartel general del espionaje germanojaponés.

Otro informe inquietante agregaba que la princesa Stefanie se reuniría con Wiedemann. De ese modo actuaría junto una vez más el equipo que tanta habilidad había demostrado en la preparación de la conferencia de Munich.

La princesa llegó a Nueva York en diciembre, poco después de perder su pleito contra lord Rothermere. Ante la pregunta de un reportero sobre sus pasadas actividades políticas, soltó a reír.

—Entiendo tanto de política como una bailarina —dijo—. Ni siquiera leo la mitad de las noticias que salen en los diarios.

Parece que a la princesa sólo le interesaba escribir sus memorias y encontrar un poco de «paz y tranquilidad». Nada más.

A pesar de tan inocentes declaraciones, el F. B. I. vigiló estrechamente a Wiedemann y a la princesa desde el preciso instante en que pisaron territorio norteamericano. Y los agentes no se asombraron cuando Stefanie llegó a Fresno, California, donde el 29 de mayo se encontró con Wiedemann en un restaurante. Fueron en automóvil al Parque Nacional Sequoia, y al día siguiente llegaron a Hillsborough, suburbio de San Francisco, donde la princesa se convirtió en huésped del capitán Wiedemann y señora. El F. B. I. logró cultivar dentro de la casa fuentes de información que le permitieron seguir, casi al minuto, sus actividades cotidianas.

El Departamento de Justicia estaba prevenido del peligro de que Wiedemann se convirtiera en un segundo Von Papen en caso de una guerra entre Alemania y los Estados Unidos. Se recordó que Von Papen había sido un eficaz agente alemán de espionaje durante la primera guerra mundial.

Pero entonces el F. B. I. supo que Wiedemann estaba tratando de ponerse en contacto con algún miembro del Servi-

cio de Inteligencia británico. Un diplomático del Reino Unido celebró una entrevista oficiosa con Wiedemann y descubrió que el capitán iba perdiendo la fe que había depositado en su antiguo sargento. Hitler empezaba a ignorar los consejos de sus generales, y para un viejo soldado como Wiedemann, los generales valían más que la intuición. Wiedemann quería saber qué condiciones impondría Inglaterra a Alemania si terminaba la guerra. Es evidente que temía la derrota de Hitler y trataba de salvar a su patria de un destino demasiado duro.

Los sondeos de paz de Wiedemann tuvieron respuesta. El 26 de noviembre de 1940 un noble inglés ocupó la habitación 1026 del Hotel Mark Hopkins, en San Francisco. Era un conocido banquero internacional, y el F. B. I. lo sabía relacionado con el Servicio de Inteligencia británico en los Estados Unidos. La primera persona en visitar la habitación 1026 fue Su Alteza Serenísima, la princesa Stefanie, que por lo visto no era tan ingenua, políticamente, como una bailarina.

El inglés —a quien llamaremos sir John— y la princesa hablaron esa tarde durante dos horas y cuarenta y cinco minutos. Después de la cena volvieron a encontrarse. La noche siguiente se les reunió el capitán Wiedemann.

Más tarde, informantes confidenciales pudieron entregar al F. B. I. una reseña completa de esas conversaciones, que en síntesis se desarrollaron así:

Sir John informó a la princesa que venía en representación de un grupo de ingleses convencidos de que era posible encontrar términos satisfactorios de paz entre Gran Bretaña y Alemania, antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra. Discutieron la posibilidad de que la princesa viajara a Berlín para presentar un ofrecimiento de paz a Hitler y al ministro de Relaciones Exteriores, Joachim Von Ribbentrop.

La princesa confiaba en persuadir a Hitler de que se estaba dando de cabeza contra un muro de piedra, pues lo que realmente le convenía era aliarse con Inglaterra para lograr una paz perdurable. Sir John prometió interceder ante el N° 10 de Downing Street (despacho del primer ministro) para que la visita de Stefanie a Alemania fuese aprobada extraoficialmente por el gobierno británico.

Al intervenir Wiedemann en la conversación, la idea de negociar con Hitler fue relegada, y el trío discutió la posibilidad de restaurar la monarquía alemana con el apoyo del ejército germano. Se acordó que era imposible confiar en Hitler, y que la paz, para que durase, debía firmarse con un grupo estable, cuyas promesas inspirasen confianza.

Stefanie sugirió una alianza directa entre Hitler e Inglaterra, señalando que Inglaterra podía celebrar semejante acuerdo y después «engañar» a Hitler. Pero el plan de traición de Stefanie

fue rechazado por los dos hombres, para quienes lo mejor era conseguir el apoyo del Ejército, derrocar a Hitler e instalar un nuevo rey en el trono alemán: quizá el príncipe heredero Wilhelm Hohenzollern, a quien la princesa llamaba «el pequeño Willy». Sir John pensaba que, estando vencida Francia, sería más fácil negociar el acuerdo germanobritánico... aunque dicho acuerdo reconocería la necesidad de conceder su independencia a Francia y Polonia.

El visitante inglés salió del hotel poco después de mediodía del 28 de noviembre y tomó un avión con destino a Washington, donde corrió a la Embajada británica⁽¹⁾.

Tres semanas después de la entrevista de San Francisco, Stefanie tuvo dificultades con el gobierno de los Estados Unidos, cuando éste le negó el permiso que solicitaba para permanecer en el país. Stefanie acudió a toda clase de armas para resistir la deportación: abogados, lágrimas, súplicas, amenazas, y hasta una dosis excesiva de sedantes que le produjo una leve intoxicación. Uno de sus defensores dijo que se había solicitado permiso de residencia para ella a cuarenta y dos países, y que los cuarenta y dos dijeron que no.

El mayor Lemuel B. Schofield, jefe del Servicio de Inmigración y Naturalización, se mostró «más duro que una piedra» en el caso Hohenlohe —según admitió un funcionario del mismo Servicio—, llegando a sostener que la princesa debía ser arrestada sin beneficio de excarcelación. Y efectivamente, funcionarios de Inmigración la detuvieron en custodia el 8 de marzo de 1941, pero la princesa tuvo un oportuno ataque de histeria, y entonces la llevaron a la enfermería del Servicio de Inmigración en San Francisco.

El mayor Schofield acudió a San Francisco a entrevistar personalmente a la princesa. Hablaron mucho. Y fue entonces cuando las imperiales lágrimas de Stefanie y su afirmación de que era una simple víctima de las mentiras periodísticas conmovieron la severidad del mayor⁽²⁾. El Servicio de Inmigración dejó en libertad a la princesa, y el mayor Schofield anunció que Stefanie había dado al gobierno algunos «informes interesantes», prometiendo colaborar en el futuro. La angustiada prueba parecía concluir para la princesa.

Stefanie estaba de visita en Filadelfia, bajo el nombre supuesto de «Mary Reihert», cuando se produjo el ataque con-

(1) Los planes de paz trazados en San Francisco fracasaron como tantas intrigas de la segunda guerra. Sin embargo, con fecha 29 y 30 de noviembre de 1940, el F. B. I. elevó informes de las «negociaciones» al presidente Roosevelt, así como a los Departamentos de Estado y del Tesoro.

(2) El 31 de julio de 1941, la princesa prestó una declaración de veinticuatro folios ante el Servicio de Inmigración y Naturalización. En la misma habló de sus primeras actividades; sus trabajos para lord Rothermere; sus contactos con los nazis, y su misión de intermediaria entre Fritz Wiedemann y sir John. El procurador general y el F. B. I. recibieron copia de dicha declaración.

tra Pearl Harbor. Al día siguiente la arrestaron los agentes del F. B. I. Quedó demorada, como ciudadana de país enemigo, en el Servicio de Inmigración y Naturalización de Gloucester City, Nueva Jersey. Poco más tarde, el presidente Roosevelt se enteró de que la princesa recibía un trato privilegiado y dirigió al procurador general un memorándum que terminaba así: «Sinceramente, esto se está convirtiendo en uno de esos escándalos que exigen medidas muy drásticas e inmediatas».

El 13 de febrero de 1942 el procurador general ordenó que Stefanie fuera internada. La llevaron a un campo de internación cerca de Seagoville, Texas.

A pesar del buen trato y de las consideraciones que se le dispensaron mientras estuvo internada, Su Alteza Serenísima empezó a irritarse. Seagoville no era una jaula de oro para una princesa. En presencia de un agente del F. B. I. terminó por estallar:

—Estoy cansada y harta de todo esto. Quiero una entrevista con el señor Hoover o con alguno de sus colaboradores inmediatos.

Parece que sabía muchas cosas de lord Rothermere, Fritz Wiedemann y otros amigos, y quería confiarlas al F. B. I. No vio a Hoover, pero habló con un agente durante cinco días.

La princesa Stefanie salió de Seagoville en libertad condicional poco después de terminar la guerra europea. En un tiempo relativamente breve, ya estaba ofreciendo recepciones, y asistiendo a ellas, en los círculos sociales de Nueva York y Filadelfia. Concluido el molesto interludio de la segunda guerra mundial, la princesa se adaptaba perfectamente a las circunstancias.

Las investigaciones del F. B. I. en el caso Hohenlohe, por las que el presidente Roosevelt demostró un vivo interés, abarcaron un período de más de cuatro años. Y como en el episodio de los saboteadores nazis, se incorporaron a la tradición «bélica» del Servicio.

XXVI. - CONTRASTE ENTRE AMBAS GUERRAS

La actuación del F. B. I. durante la segunda guerra mundial ofreció un sorprendente contraste con las torpezas cometidas en la primera. Algo de tremenda importancia había ocurrido en el Servicio en dicho intervalo. Sin embargo, ese contraste pasó casi inadvertido entre las peripecias del conflicto.

Durante la segunda guerra mundial no se escucharon clamores de protesta por las redadas en masa ni se habló de violación de los derechos civiles. No fue necesario que grupos civiles reemplazaran a la policía en la caza de espías, saboteadores y desertores. No se produjeron rebeliones armadas contra la conscripción ni evasiones en masa del servicio militar.

Quizá el contraste más agudo entre ambos conflictos fue la forma en que el F. B. I. hizo dar cumplimiento a la ley de adiestramiento y servicio selectivo. Al terminar la primera guerra, unos 295.000 hombres figuraban en las listas de servicio selectivo como «remisos». Al fin de la segunda, en cambio, sólo andaban sueltos 8.836 infractores a las normas de enrolamiento militar. Los planes trazados por Hoover y sus hombres, con la cooperación de las policías locales y de la Legión Americana, dieron excelentes resultados y evitaron los viejos errores de 1917 y 1918.

La política del F. B. I. consistió en llevar soldados a los cuarteles, y no prisioneros a la cárcel. El procesamiento de los infractores se reservó para aquellos casos en que existían pruebas de malicioso incumplimiento de la obligación militar⁽¹⁾.

Hoover descartó los procedimientos drásticos, como aquellas grandes «batidas contra los remisos» (*slacker raids*) de 1918, que solamente en Nueva York habían culminado en el apresamiento de 50.000 hombres. La redada más grande, durante el segundo conflicto, se produjo en 1943, cuando el F. B. I. y las policías locales arrestaron a 779 hombres en treinta y nueve ciudades. Pero antes se había investigado cuidadosamente cada caso individual. El mayor número de arrestos en esta batida se practicó en Nueva York, donde hubo 161 detenciones, que prácticamente no ocasionaron protestas.

En la mayor parte de los casos, los que desobedecían el llamado bajo banderas actuaban por ignorancia u olvido, y no porque deliberadamente trataran de eludir el servicio militar. El jefe de redacción de un periódico neoyorquino, por ejemplo, se enteró de que debía llevar consigo su cédula de enrolamiento cuando lo detuvieron por no tenerla. En Denver, una señora distraída arrojó al horno de residuos la cédula de su hijo. En Cleveland, otra señora extravió un cuestionario de la oficina reclutadora, dirigido a su esposo, y

(1) Esta política resultó eficaz. Al 1º de septiembre de 1945, el F. B. I. había examinado 277.589 casos, de los que resultó la incorporación a filas de 190.718 hombres. Un total de 12.674 «evasores» fueron juzgados y condenados por tribunales federales. En los restantes casos, se estableció que no existía violación de la ley; o que la persona buscada estaba sometida a juicio por otros cargos; o que había muerto; o que padecía locura.

éste olvidó el asunto hasta que un agente del F. B. I. llamó a su puerta. Hubo millares de estos casos⁽¹⁾.

Pero además de los distraídos y los ignorantes hubo otros millares que intentaron desesperadamente —y por lo general sin éxito— eludir la obligación militar, llegando a mutilarse o fingir enfermedades inexistentes; escapando a México o adoptando nombres falsos; amén de muchos otros recursos. En Arkansas, una familia de granjeros hizo frente a la «autoridad» con un hacha de doble filo, una pala de carbón, un morillo de hierro, leños de la estufa y cuanto objeto contundente o arrojadizo encontraron a mano. Todo para defender a un muchacho en edad militar. La «autoridad» se impuso después de reñida lucha.

Otro problema por resolver fue el de aquellos que se negaban a ir a la guerra por motivos de conciencia (*conscientious objectors*). Durante una conferencia celebrada en el Departamento de Justicia en 1940, se acordó, tras minucioso estudio, que el F. B. I. investigara esos casos para determinar «el carácter de las objeciones de esas personas y la buena fe de las mismas». Solamente el tiempo que exigieron tales averiguaciones fue inmenso, pero no había más recursos que el tiempo y el ingenio para separar a los «objetores» sinceros de los farsantes. Durante la primera guerra mundial los *conscientious objectors* recibieron un apodo denigrante (*conchies*) que implicaba cobardía. Que tal punto de vista podía ser erróneo lo demuestra el hecho de que durante la segunda guerra la mayoría de los que invocaban escrúpulos de conciencia para no combatir aceptaron en cambio incorporarse a los servicios de sanidad de las fuerzas armadas, o se ofrecieron como «conejos de Indias» para experiencias científicas. La actitud del F. B. I. ante el problema contribuyó a una mejor comprensión del pacifista sincero, y al mismo tiempo puso en descubierto a los impostores.

El resultado último fue que las severas críticas dirigidas contra el F. B. I. en 1918 por la forma como encaró el problema de remisos y desertores se trocaron en elogios veinticinco años más tarde. En 1943, la Unión Americana pro Libertades Civiles (*American Civil Liberties Union*) publicó un folleto que decía entre otras cosas:

El sorprendente contraste entre la actitud asumida con respecto a las libertades civiles en los dieciocho meses iniciales de

(1) A pedido de las fuerzas armadas, el F. B. I. asumió la responsabilidad de buscar a los desertores del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Desde que se puso en práctica ese programa, en febrero de 1945, hasta el 30 de junio de 1956, el F. B. I. examinó 123.615 casos. Todos menos 1.920 fueron localizados por el F. B. I., las policías locales y las autoridades militares. Algunos regresaron voluntariamente. Era bastante común descubrir que un presunto desertor estaba en otro regimiento o en otra rama del servicio, se había excedido en el uso de su licencia, o se hallaba ya bajo custodia.

la primera guerra mundial, por un lado, y dicha actitud en el transcurso de la segunda guerra mundial, es un fuerte argumento en favor de la tesis de que nuestra democracia puede librar la más grande de las contiendas y al mismo tiempo salvaguardar los principios esenciales de la libertad.

Pero mientras muchos hombres luchaban y morían para defender esos principios de la libertad, otros se rebajaban al nivel de las alimañas. Entre ellos cabe mencionar a Amerigo Antonelli y sus secuaces, que deliberadamente fabricaban y vendían al gobierno granadas defectuosas con el solo propósito de ganar unos dólares más. Más de un soldado murió al estallar entre las manos una de esas granadas.

Amerigo era presidente de la Antonelli Firework Company (Compañía de Fuegos Artificiales), con sede en Spencerport, Nueva York. En los cinco años anteriores a la segunda guerra mundial, sus ingresos medios ascendieron a 2.000 dólares anuales. Después consiguió contratos del gobierno para fabricar granadas y bombas incendiarias, y el salario anual de Antonelli subió de golpe a 26.000 dólares, sin contar los beneficios del capital invertido.

Los inspectores militares tuvieron dificultades con Antonelli y sus capataces desde el primer momento. Las reglamentaciones en vigor ordenaban poner las granadas y bombas de descarte en cajones donde no pudieran mezclarse con las otras. Pero dichos rezagos aparecían a menudo en las líneas de montaje o en los cajones de explosivos ya aprobados.

Por último intervino el F. B. I.⁽¹⁾ Los agentes reunieron pruebas terminantes. Los empleados, uno tras otro, juraron que se les ordenaba poner sólo tres cargas de pólvora en granadas que debían tener cuatro... y sólo dos cargas de termita en bombas que debían tener tres. Una muchacha declaró que, al exponer sus dudas sobre el procedimiento, le contestaron:

—¡Qué diablos importa si las bombas son buenas o no! Lo importante es producir más.

Alguien contó que la pólvora derramada era recogida del piso, con tierra y todo, e introducida en las granadas. Y como estas historias, había muchas ⁽²⁾.

(1) La jurisdicción del F. B. I. se basa en la Sección 238, Capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, que pena con diez años de cárcel, o 10.000 dólares de multa, o cárcel y multa, el delito de «asociación ilícita para defraudar al gobierno» (*conspiring to defraud the government*). Desde el comienzo del año fiscal 1941 hasta el año fiscal 1946, inclusive, las investigaciones del F. B. I. resultaron en 1.002 condenas por dicho delito. Las sentencias correspondientes a tales condenas sumaron 1.395 años, seis meses y diecisiete días de cárcel, y 1.219.351 dólares de multas. En estos casos el fisco ahorró o recuperó 12.447.338 dólares.

(2) Amerigo Antonelli fue condenado a dos años de cárcel y 5.000 dólares de multa. Sus cómplices John y Joseph De Ritis, a dos años; Bennie Piteo, Dominick Barbollo y Frank Bianchi, a dieciocho meses. Las sentencias de Piteo y Bianchi quedaron en suspenso; ambos estuvieron en libertad «a prueba» durante un año. La Antonelli Fireworks Company fue multada en 10.000 dólares.

No eran mucho mejores que Antonelli aquellos altos jefes de la Collyer Insulated Wire Company, de Rhode Island, que se trazaron un plan para embaucar al gobierno vendiéndole cables eléctricos defectuosos, que luego serían utilizados a bordo de los buques y por el Cuerpo de Comunicaciones del Ejército.

Agentes del F. B. I. que inspeccionaban la fábrica de la Collyer entraron en sospechas al advertir, en tableros donde había voltímetros instalados, algunos indicios raros. Parecía que se hubieran retirado algunos interruptores y que se hubieran cambiado los cables. Otras señales indicaban la eliminación de interruptores en un circuito eléctrico donde funcionaban galvanómetros (aparatos usados para probar los cables).

Los agentes descubrieron que el motivo de estos cambios era un precipitado esfuerzo por ocultar un fraude. Algunos funcionarios y empleados, con mucho ingenio, estaban realizando trucos de prestidigitación eléctrica para engañar a los inspectores. Cambiando los cables y utilizando un interruptor adicional, los culpables podían mandar una corriente de 500 voltios por un cable y lograr que el voltímetro señalase 2.000. Entonces el inspector aprobaba ese cable, certificando que era capaz de resistir una carga de 2.000 voltios. Y al probar las pérdidas de electricidad a través de la aislación, se utilizaban tretas similares para alterar las indicaciones del galvanómetro.

Los agentes descubrieron que funcionarios de la compañía ensayaban más de una vez una muestra de cable en buenas condiciones para conseguir etiquetas de aprobación que luego endosaban a rollos de cable defectuosos. Estos se mantenían ocultos y clandestinamente se les pegaba la etiqueta que decía «aprobado». A una partida de rollos se le siguió el rastro hasta el depósito de la Infantería de Marina en Bars-tow, California. Un agente del F. B. I. fue en avión a Bars-tow y probó 400 rollos de cable. Descubrió que 127 fallaban en el ensayo de voltaje y 204 en el de aislación y resistencia.

Si el jefe de una compañía, en el frente de batalla, súbitamente perdía contacto con su batallón por una falla de su línea telefónica, o si un cable pelado producía un incendio en un buque, la culpa bien podía ser de la Collyer Insulated Wire Company ⁽¹⁾.

(1) El 3 de mayo de 1944, cinco jefes y empleados de la Collyer Insulated Wire Company se declararon culpables de fraude contra el gobierno. Joseph Lovell, Frederick A. McManus y Frederick L. Lawton pagaron multas de 5.000 dólares cada uno. Clarence Vigeant y Adolf P. Czerniawski pagaron multas de 2.500 dólares. La compañía fue multada en 10.000 dólares. El gobierno acudió a los tribunales para demandar a la compañía por devolución de fondos correspondientes a 105 reclamaciones falsas. El 9 de octubre de 1950 la Corte Federal de Distrito de Providence, Rhode Island, fijó en 210.412 dólares la indemnización correspondiente al gobierno.

Pero amén de estos fraudes y de multitud de problemas⁽¹⁾ ocasionados por la guerra, el F. B. I. debía enfrentar la inquietante posibilidad de que prisioneros de guerra fugitivos emprendieran actividades de sabotaje o espionaje. Había pasado menos de un año desde que los Estados Unidos entraron en la contienda, cuando el secretario auxiliar de Guerra, John J. McCloy, escribió lo siguiente:

El Departamento de Guerra ha convenido con el Departamento de Justicia que el Servicio Federal de Investigación se encargue de coordinar la búsqueda de internados y prisioneros de guerra fugitivos...

Esta medida fue tomada por sugerencia de Hoover.

Durante varios meses, el director del F. B. I. aconsejó normas de seguridad más estrictas para los campamentos de prisioneros a cargo del Ejército. Por lo general, los prisioneros fugados caían en manos de la policía local, el Ejército o el F. B. I. antes que transcurrieran veinticuatro horas.

Pero los simpatizantes nazis estaban dispuestos a brindar refugio a los prófugos, como se descubrió a comienzos de 1942, cuando un joven piloto de bombardeo alemán, el teniente Hans Peter Krug, escapó de un campamento del Canadá y entró en los Estados Unidos.

Los compañeros de encierro de Krug lo ayudaron construyendo un muñeco de paja y periódicos. Cuando se pasaba lista, llevaban el muñeco a la fila. El recurso, aunque tosco, disimuló la ausencia de Krug el tiempo suficiente para facilitar la fuga. El joven llegó a Windsor, Ontario, y en un bote robado atravesó el río Detroit, desembarcando en Belle Isle.

Krug llevaba consigo un papel con el nombre y las señas de Margareta Johanna Bertelman. Ese papel había sido encontrado, por un prisionero alemán, en el interior de un par de medias que formaba parte de un obsequio de Navidad llegado al campamento.

Krug llegó a casa de los Bertelman. Golpeó a la puerta, y cuando apareció la señora Bertelman, le pidió un vaso de agua. Ella lo hizo entrar. Entonces Krug se identificó, mostrando las jinetas de plata que había cortado de su uniforme.

—Esto prueba que soy un oficial de la Lutwaffe alemana —dijo.

La señora Bertelman aceptó aquel testimonio y, después

(1) Entre los años fiscales 1946 a 1956 inclusive, las investigaciones del F. B. I. sobre renegociación de contratos de guerra permitieron al gobierno recuperar 323.121.491 dólares. En el mismo periodo, al examinar casos planteados ante los Tribunales de Reclamaciones, donde el gobierno es la parte acusada en litigios civiles, el F. B. I. logró a menudo descubrir en las reclamaciones de los demandantes discrepancias que permitieron al gobierno aborrar o recuperar un total de 171.198.211 dólares.

de ofrecerle el desayuno, le dijo que conocía al hombre capaz de ayudarlo. Este hombre era Max Stephan, naturalizado norteamericano, que tenía un restaurante en Detroit. Antes de la guerra, el restaurante había sido centro de reunión de los miembros del *Bund* germanonorteamericano. Stephan tomó a Krug bajo su protección, le dio albergue y dinero, le compró un billete de ómnibus a Chicago y le dijo cómo debía proceder para evitar sospechas. En una palabra, lo puso en camino, y el prisionero alemán fue acercándose, por etapas, a la frontera mexicana. Tenía la esperanza de escapar a México y luego volver a Alemania.

Pero cuando firmó con el nombre de «Jean Ette» el registro de un hotelito de San Antonio, el empleado recordó haber visto un cartel del F. B. I. con la foto de Krug y la palabra «Buscado». Lo reconoció en el acto, y dos agentes del F. B. I., junto con dos policías de San Antonio, arrestaron al aviador alemán.

La captura de Krug trajo consigo la detención de Max Stephan, que fue procesado por traición. El tribunal lo declaró culpable. Era la primera vez que el gobierno federal condenaba a un hombre dentro de los términos de la ley de traición, desde 1794, cuando el jefe de la llamada «Rebelión del Whisky», ocurrida en Pensilvania, fue declarado culpable de pretender anular una ley que fijaba un impuesto al whisky. El tribunal estableció la pena de muerte para Stephan, pero el presidente Roosevelt la conmutó luego por la de prisión perpetua.

A medida que aumentaba el número de los prisioneros de guerra internados en los Estados Unidos —más de 400.000 en cierto momento— crecía la inquietud de Hoover ante el peligro de que los fugitivos se dedicaran al sabotaje y al espionaje. Hubo una época en que se producían alrededor de setenta y cinco evasiones por mes.

Las notas de Hoover al procurador general y a la Casa Blanca, pidiendo estrictas medidas de seguridad en los campamentos de prisioneros, se hicieron más insistentes. Pero su alarma no era compartida en otros sectores, hasta que a fines de diciembre de 1944 funcionarios norteamericanos, con destino en Londres, previnieron a Harry Hopkins que la vida del propio presidente Roosevelt podía estar en peligro.

El Servicio Secreto británico tenía en su poder informes dignos de confianza, según los cuales era probable que los alemanes aprovecharan las fiestas de Navidad para lanzar paracaidistas detrás de las líneas aliadas, así como en Londres y París. Uno de los candidatos a ser asesinados era el general Eisenhower. La información agregaba que también podría atentarse contra la vida del presidente Roosevelt,

mientras que los prisioneros de guerra arriesgarían una fuga en masa creando enorme confusión en el país.

Hopkins comunicó al F. B. I. que había transmitido estas noticias al general George C. Marshall, al almirante Ernest J. King y a Mike Riley, jefe del Servicio Secreto de la Casa Blanca.

Estas voces de alerta llegadas de ultramar obligaron a tomar medidas de seguridad más severas⁽¹⁾.

La gran guerra llegó a su fin, y las naciones, fatigadas de la lucha, dejaron caer sus armas y empezaron a disolver sus ejércitos..., todas menos Rusia. Estados Unidos desmovilizó sus tropas de tierra, convirtió en chatarra sus inmensos escuadrones aéreos y puso «entre naftalina» sus buques de guerra. La paz... era maravillosa.

Pero no había paz para el F. B. I.

(1) La primera fuga de un prisionero de guerra en los Estados Unidos, durante el segundo conflicto mundial, fue denunciada al F. B. I. el 19 de mayo de 1943. La última ocurrió el 7 de noviembre de 1946. Entre esas fechas, escaparon en total 2.003 prisioneros. Todos ellos fueron habidos, salvo tres: Kurt Rossmels, Georg Gaertner y Curt Westphal. Aparte de los canjes de prisioneros enfermos y heridos, el grueso de la repatriación de cautivos alemanes e italianos comenzó en agosto de 1945.

Las secuelas de la guerra

XXVII. - LA DELINCUENCIA EN LA POSGUERRA

El timbre sonaba con insistencia. La hermana Morand corrió a la puerta del Instituto Francés de Notre-Dame de Scion, escuela adonde mandaban sus hijos pequeños las mejores familias de Kansas City, Missouri. Eran las 10.55 del 28 de septiembre de 1953.

La hermana Morand abrió la puerta y vio una mujer regordeta, de edad madura, que evidentemente era víctima de una crisis emocional. La mujer se disculpó por sus nervios y explicó apresuradamente que era la tía del pequeño Bobby Greenlease, uno de los alumnos del instituto.

Había pasado algo terrible, dijo. La madre de Bobby acababa de sufrir un ataque al corazón y estaba en el Hospital St. Mary, donde pedía ver a su hijo. Había que llevar al chico inmediatamente.

La hermana Morand murmuró sus condolencias e invitó a la mujer a esperar en la capilla, mientras ella subía en busca del niño. Dijo a Bobby que lo reclamaba su tía, pero no le habló del ataque cardíaco de su madre.

Bobby no dio muestras de desconocer a la visitante, que refirió a la hermana Morand que había estado orando por la curación de la señora Greenlease, y agregó:

—Pero no soy católica, y no sé si Dios habrá escuchado mis rezos.

Pasó el brazo por el hombro de Bobby y salieron juntos de la escuela. Tomándolo de la mano, lo ayudó a subir a un taxímetro que aguardaba junto a la acera. Bajaron en la playa de estacionamiento Katz, en la intersección de 40 y Main Street, es decir, en pleno centro de Kansas City. Rápidamente la mujer llevó al niño (seis años tenía Bobby) a una camioneta rural Plymouth, donde esperaba un hombre rubicundo, con una pálida cicatriz en la frente. La camioneta se puso en marcha, pero no fue al Hospital St. Mary.

En ese momento, una de las monjas del Instituto llamaba

por teléfono a casa de los Greenlease para interesarse por el estado de la señora. Se quedó aturdida cuando le dijeron que la señora estaba perfectamente bien, en su hogar, y que nada sabía de esa mujer extraña que acababa de sacar a su hijo del colegio. La señora Greenlease llamó a su esposo, acaudalado comerciante de automóviles, quien corrió a su lado. Greenlease hizo la denuncia a la policía de Kansas City, que a su vez dio intervención al F. B. I.

Mientras se realizaban estas frenéticas llamadas telefónicas, la rural se alejaba de Kansas City hacia el sur, por la ruta 169. El hombre que conducía era Carl Austin Hall, de treinta y cuatro años, hijo descarriado de un abogado. La mujer era su amante, Bonnie Brown Heady, de cuarenta y un años. Hall, después de despilfarrar la herencia de sus padres, había cumplido dieciséis meses de una condena a cinco años por asaltos a taxistas en Kansas City. Salió bajo caución juratoria del presidio del Estado de Missouri, el 24 de abril de 1953.

Poco después de salir de la cárcel conoció a Bonnie Heady y fue a vivir con ella en la casa de Bonnie, en St. Joseph, Missouri. Cada uno bebía casi un litro de whisky diario, y entre borracheras planearon el secuestro del pequeño Greenlease.

Consumado el secuestro, llevaron a cabo el resto de sus planes.

La rural salió de la ruta para entrar en un camino lateral. Tres kilómetros más lejos se internó en una apartada senda y se detuvo. Bonnie Heady bajó y echó a andar por el campo, mientras Carl Hall se volvía hacia el chiquillo, que iba a su lado. Sus dedos se cerraron en torno al cuello del chico, tratando de estrangularlo. Pero el niño, forcejeando y retorciéndose, luchó salvajemente por salvar la vida. Entonces Hall llevó la mano al bolsillo.

Más tarde declaró ante los agentes del F. B. I.:

—Tenía la pistola en el bolsillo de la chaqueta. La saqué y apreté el gatillo, tratando de acertarle en el corazón. No sé si le pegué o no, pero seguía vivo... El segundo tiro se lo di en la cabeza.

«Lo bajé del automóvil, lo tendí en el suelo y lo puse dentro de una bolsa de material plástico. Recuerdo que había mucha sangre. La granja donde sucedió todo esto está unos tres kilómetros al sur y otros tantos al oeste de la frontera estatal, dentro del Estado de Kansas.»

Bonnie Heady volvió a la camioneta. Ayudó a Hall a levantar el cadáver y colocarlo sobre el asiento trasero. Después regresaron a la casa de St. Joseph y guardaron el automóvil en el garaje.

Ya antes habían empezado a cavar una fosa junto a la casa. Echaron el cadáver a la fosa y Hall derramó sobre él una bolsa de cal viva. Después lo cubrieron con tierra. Al día siguiente Bonnie Heady y Carl Hall compraron crisantemos y los plantaron en la tierra recién removida.

La primera carta de extorsión que enviaron a los Greenlease decía:

Vuestro hijo secuestrado, consigan 600.000 dólares en billetes de 20 y de 10 de la Reserva Federal de los doce distritos. El chico estará en buenas manos. Cuando tengan el dinero listo publiquen aviso en el *Star* de Kansas City. «M. se reunirá con ustedes en Chicago el próximo domingo. (Firmado) Mr. G.»

No llamen a la policía ni traten de poner productos químicos a los billetes ni anotar los números. No usen la radio para atraparnos porque el chico muere. Si intentan atraparnos, su esposa, su otro hijo y usted mismo pagarán con la muerte, estarán vigilados continuamente. Más adelante se les informará cómo entregar el dinero. Acusen recibo de esta nota pasando en automóvil por Main Street, entre calles 39 y 29, durante veinte minutos, con un trapo blanco en la antena del automóvil.

Si hacen exactamente lo que decimos, sin estratagemas, les devolveremos el chico sano y salvo dentro de las 24 horas de recibido el dinero. Dinero será entregado en maleta de lona del ejército. Estén dispuestos a entregarlo inmediatamente al producirse contacto. — M.

400.000 dólares en billetes de 20.

200.000 dólares en billetes de 10.

El F. B. I. se mantuvo en permanente comunicación con la familia Greenlease y con la policía de Kansas, pero no hizo nada para impedir que los Greenlease se pusieran en contacto con los secuestradores, ya que ése era el deseo de la familia.

Entonces empezó una de las series de cartas más crueles y sádicas de que haya memoria en los anales del crimen de los Estados Unidos. Todas ellas prometían la devolución del niño contra entrega del dinero.

Hubo llamadas telefónicas del misterioso «M.», y nuevos mensajes con instrucciones para entregar el rescate. Pero en cada oportunidad en que esto se intentó algo anduvo mal.

En una oportunidad, «M.» habló con amigos de la señora Greenlease. Esta, que se hallaba presente, pidió comunicarse con él. La conversación se desarrolló en estos términos:

Señora G. — M., habla la señora Greenlease.

Voz. — Escucho.

Señora G. — Tenemos el dinero, pero queremos estar seguros de que nuestro chico está sano y salvo. ¿Puede decirme eso? ¿Puede probarme que eso es cierto?

Voz. — Una pregunta muy razonable, pero, para serle franco, el chico nos está volviendo locos. No podemos arriesgarnos a traerlo a un teléfono.

Señora G. — Sí, me imagino. Pero hágame un favor. ¿Puede preguntarle dos cosas? ¿Puede decirme la respuesta a esas dos preguntas?

Voz. — Escucho.

Señora G. — Si yo tuviera la respuesta a esas dos preguntas, sabría que mi niño está vivo.

Voz. — Muy bien.

Señora G. — Pregúntele cómo se llama el chofer que tuvimos en Europa este año.

Voz. — Muy bien.

Señora G. — Y la segunda pregunta: ¿qué construiste con tu juego de cubos, en la sala de juegos, la última noche que estuviste en casa? Si usted puede darme la respuesta a esas preguntas, sabré que lo tienen ustedes y que está vivo, que es lo único que quiero saber.

Voz. — El chico está con nosotros. Está vivo. Créame. Nos ha enloquecido a todos.

Señora G. — Sí, me figuro. Es un niño tan movedido.

Voz. — Nos ha vuelto locos.

Señora G. — ¿Puede traerme esas respuestas?

Voz. — Muy bien.

Los procedimientos de Hall para comunicarse con los intermediarios de los Greenlease eran bastante complicados. Ora dejaba un mensaje bajo una roca marcada con tiza. Ora pegaba una carta con cinta adhesiva a la cara inferior de un buzón. A veces un mensaje señalaba la ubicación de otro, y de este modo los que trataban de seguir las instrucciones terminaban por confundirse. Las instrucciones telefónicas también eran enredadas. En cierta oportunidad, los 600.000 dólares del rescate (cuarenta kilogramos de billetes) fueron dejados a la orilla de un camino rural, y Hall no los encontró. Amigos de los Greenlease recuperaron la maleta de lona, y los atribulados padres debieron soportar la agonía de una larga espera hasta recibir un nuevo mensaje.

«M.» llamó por decimocuarta vez a casa de los Greenlease el 4 de octubre de 1953, a las 20.28. Atendió la llamada un íntimo amigo de los Greenlease, Robert Ledterman. La conversación se desarrolló aproximadamente en estos términos:

Ledterman. — Residencia de los Greenlease. Habla Ledterman.

Voz. — ¿Cómo está usted?

Ledterman. — Bien. ¿Cómo está usted esta noche?

Voz. — Un poco retrasado.

Ledterman. — Dijo usted a las ocho. ¿Está todo preparado?

Voz. — Todo preparado. Tenemos un plan perfecto. No podría haber ningún...

Ledterman. — ¿Cómo es eso? Repita eso.

Voz. — No podría haber ningún error. Es un plan perfecto. Tendrá que ser un poco más tarde. Yo también lo siento, pero queremos estar seguros de que no haya confusiones esta vez.

Ledterman. — Sí. Terminemos lo antes posible... A propósito, M., ¿el chico contestó a esas preguntas?

Voz. — No... No pude... no pudimos sacarle nada.

Ledterman. — ¿No pudieron sacarle nada?

Voz. — No quiso hablar... Pero puedo decirle esto. Lo devolveremos en Pittsburg, Kansas.

Ledterman. — No me estará engañando, ¿eh?

Voz. — Es la pura verdad...

Era alrededor de medianoche cuando Ledterman y Norbert S. O'Neill, otro amigo de los Greenlease, dejaron caer la maleta con el dinero en un puente próximo al empalme de las rutas 40 y 10E, cerca de Kansas City.

Poco después que regresaron volvió a sonar el teléfono en casa de los Greenlease. «M.» informó que había recogido el dinero, pero que no tuvo tiempo para contarlo. Ledterman le aseguró que estaba todo.

Voz. — Sí, seguramente. Dígame a la madre que lo verá dentro de veinticuatro horas, como le prometimos... Nos alegra mucho poder devolvérselo.

Carl Hall y Bonnie Heady llevaron el cruel engaño hasta sus últimos extremos.

Apenas conseguido el dinero, fueron a festejarlo a St. Louis. Hall compró dos valijas metálicas, a las que traspasó los billetes del rescate. La maleta de lona la enterró en un depósito de residuos en el sur de St. Louis (donde más tarde la encontraron los agentes del F. B. I.).

Al día siguiente del golpe, Hall llevó a Bonnie a un departamento situado en Arsenal Street, en St. Louis. Pero apenas ella se emborrachó y se quedó dormida, Hall escapó con el dinero, dejándole los 2.000 dólares que tenía en el bolso.

Hall y la Heady sólo gozaron de dos días de libertad después de cobrar el rescate. Hall se hizo demasiado amigo de un taxista, quien informó a la policía de St. Louis que acababa de descubrir «algo que huele muy mal». La policía arrestó a Hall y Bonnie la noche del 6 de octubre de 1953.

Pero de los 600.000 dólares entregados a los secuestradores el F. B. I. sólo recuperó 295.140.

Hall terminó por firmar una plena confesión ante la policía y los agentes del F. B. I. Estos últimos encontraron el cadáver del niño en la fosa, y el dentista de la familia lo identificó. En el piso del sótano y en la escalera de la casa de Bonnie Heady, así como también en una blusa de nilón y un felpudo de fibra, se encontraron manchas de sangre. Aparecieron también cápsulas de calibre 38, que según la pericia

realizada por el laboratorio del F. B. I. habían sido picadas por el revólver Smith & Wesson, 38, corto, que se le secuestró a Hall en el momento del arresto. Del piso de la camioneta de Bonnie Heady se extrajo una bala de plomo, y el laboratorio informó que había sido disparada por el revólver de Hall.

En cuanto a Bonnie Heady, admitió que había ayudado a Hall a redactar las cartas, y que fue ella quien retiró a Bobby Greenlease del colegio. Pero trató de adjudicar a Hall toda la culpabilidad del asesinato.

Carl Hall y su amante, acusados de secuestro por rescate, se declararon culpables ante el Tribunal Federal de Kansas City. Después un jurado escuchó los testimonios del caso, y el 19 de noviembre de 1953 recomendó la pena de muerte.

El juez Albert L. Reeves dijo:

—Creo que el veredicto está de acuerdo con las pruebas. Es éste el asesinato más brutal y sanguinario que nunca me ha tocado juzgar.

Los asesinos del pequeño Bobby Greenlease fueron ejecutados juntos en la cámara de gas de la penitenciaría del Estado, en Jefferson City, el 18 de diciembre de 1953. Hall fue declarado muerto a las 12.12, y Bonnie Heady murió veinte segundos más tarde.

El rescate se había pagado en 40.000 billetes distribuidos en cuarenta fajos. Hasta mediados de 1956, el F. B. I. no había podido localizar 301.960 dólares, que desaparecieron entre el momento en que los raptos cobraron el dinero y el momento en que las dos valijas metálicas ingresaron en la comisaría undécima de St. Louis, después del arresto de Hall. La búsqueda aún prosigue.

Este repugnante secuestro seguido de asesinato es apenas un ejemplo del problema criminal que han debido afrontar el F. B. I. y las policías locales después de la segunda guerra.

Hoover había previsto esa ola de delincuencia, que incluye el secuestro de Bobby Greenlease y la catástrofe aérea de Denver. Uno de los síntomas era el crecimiento de la delincuencia juvenil durante el conflicto.

Ya en 1944, Hoover declara lo siguiente:

Conviene analizar las condiciones que engendran el crimen en nuestra época, para que podamos prevenirlo en el futuro. Una de las causas primarias del alarmante crecimiento de la criminalidad entre nuestros jóvenes, por ejemplo, ha sido la desintegración del hogar en cuanto influencia monitora. El inmenso número de padres que se incorporaron a las fuerzas armadas o a las industrias de guerra ya no pueden ejercer una vigilancia suficiente sobre sus hijos. La hipertrofia de las ciudades industriales, donde las posibilidades de recreación y vida sana son inadecuadas, priva a millares de niños de los beneficios de una vida normal.

La migración de obreros, de las pequeñas poblaciones y las granjas a las ciudades y centros de producción bélica, produjo en muchos casos un derrumbamiento moral. La autoridad paterna sobre los hijos se debilitó. Numerosas familias debieron amontonarse en zonas superpobladas, donde los jóvenes no podían llevar una vida sana. Las chiquillas se volvieron «alocadas», y los jóvenes empezaron a buscar nuevas fuentes de diversión sin una mano firme que los guiara. Y el problema no se limitó a los sectores más pobres de la sociedad⁽¹⁾, sino que también hizo su aparición en los barrios «bien», en familias acaudaladas, donde padres e hijos se iban separando gradualmente, hasta llegar a un momento en que les resultaba imposible comprenderse.

El aumento de la criminalidad podía atribuirse, en gran parte, al aumento de la población del país. Pero ésa no era la única explicación, ni mucho menos, porque el índice de criminalidad de la posguerra ha crecido en escala mucho mayor que el índice demográfico. Entre 1945 y 1955, la población aumentó un 24,3 por ciento, mientras que la criminalidad aumentó un 44,5 por ciento.

Las estadísticas dan un panorama bastante claro. Los delitos graves cometidos en 355 ciudades durante el período de preguerra de 1937 a 1939 sumaron, término medio, 630.257 al año. Entre esos delitos graves incluimos el asesinato, el homicidio, el rapto, el robo, el asalto a mano armada, el hurto, la estafa y el robo de automóviles. En esas mismas ciudades, durante el período de posguerra de 1946 a 1955, dichos delitos mayores totalizaron un término medio anual de casi 800.000, lo que equivale a un aumento del 26,8 por ciento con respecto a la preguerra. En toda la nación, el número de delitos mayores superó en 1952, por primera vez, la cifra de 2.000.000. Tres años más tarde, ese índice había ascendido a 2.200.000 y las pérdidas anuales causadas por robos, hurtos, atracos, etc., llegaban a los 400.000.000 de dólares. En 1955 se cometía un delito mayor cada 13,9 segundos, término medio, en el transcurso de un día.

El aspecto más vergonzoso de la criminalidad de posguerra es el elevado número de adolescentes que incurren en delitos mayores. Entre 1.861.764 personas arrestadas en 1.477 ciudades durante 1945, por delitos graves, se estableció que

(1) Durante los años del conflicto, Hoover señaló con frecuencia un derrumbe de las normas de conducta moral, y las atribuyó a la psicosis bélica que creaba una actitud de inseguridad. Temía el resurgimiento de las pandillas y la resurrección de viejas alianzas entre los raqueteros, el hampa y los políticos. Sus profecías fueron confirmadas por las revelaciones de la comisión del Senado que, encabezada por el senador Estes Kefauver, investigó el problema de la delincuencia. Dicha comisión subrayó la crisis de la ley y el orden en ciertas comunidades, y el hecho de que los delincuentes ahora invertían sus intereses en empresas legítimas, lo que les permitía operar «con guantes blancos».

una de cada diez era un joven de menos de dieciocho años. Muchachos y chicas menores de dieciocho estuvieron complicados en el 42,3 por ciento de los arrestos efectuados por delitos mayores; y casi la mitad tenían menos de quince años. Las estadísticas demuestran que el 62,2 por ciento de las personas arrestadas por robos de automóviles, y el 52,7 de las arrestadas por robos comunes, durante 1955, no habían cumplido dieciocho años.

Las estadísticas desnudas daban la aterradora impresión de que los jóvenes carecían de frenos morales. Tal impresión era falsa, por supuesto, pero la situación frisaba en el escándalo; una atmósfera de caos reinaba en el país. Casi todos los estados tenían una definición distinta de la delincuencia juvenil, y sus propias leyes represivas.

El F. B. I. comenzó a interesarse mucho tiempo atrás por el problema de la juventud, porque abrigaba el convencimiento de que mientras no se dominara la delincuencia juvenil no había esperanza de disminuir el índice de criminalidad de los adultos. Los prontuarios demuestran que, con suma frecuencia, el criminal adulto ha sido un delincuente juvenil.

Ya en 1946 Hoover asignaba tanta importancia al asunto que ordenó crear dentro del F. B. I. una escuela de instructores para la lucha contra la delincuencia juvenil. Los agentes que ingresaban en la misma realizaban un amplio programa de investigaciones, complementado por conferencias que dictaban expertos en la materia. De ese modo, los agentes mismos quedaban capacitados para instruir a las policías locales sobre los últimos adelantos en el trato de los delincuentes juveniles, los problemas psicológicos que la delincuencia juvenil implica, cómo organizar clubes de jóvenes, tareas realizadas por distintas instituciones interesadas en la delincuencia juvenil, y temas afines. Muchos agentes ya contaban con cierta experiencia práctica, adquirida en clubes de jóvenes, *boy scouts* y organizaciones religiosas. Algunos, antes de entrar al F. B. I., habían sido funcionarios del sistema de libertades condicionales y libertades «a prueba».

La información reunida merced a estos estudios queda a disposición de los departamentos de policía, por intermedio de las escuelas de adiestramiento del F. B. I., que de ese modo les ayuda a cumplir sus propios programas de lucha contra la delincuencia juvenil.

Pero Hoover y sus hombres saben que la verdadera solución está en manos de los padres, y no de la policía. En un artículo publicado por la *Syracuse Law Review*, Hoover expuso el problema en estos términos:

La conducta criminal es conducta adquirida. El niño y el adolescente son impresionables, sus mentes activas forjan códigos de moralidad que no son superiores a los que rigen a su alrededor. El medio que la comunidad adulta ofrece a los niños que crecen es el factor más importante entre los que determinan la conducta del niño normal.

A medida que aumentaba la delincuencia juvenil, aumentaba proporcionalmente el número de asaltos a los bancos. Las viejas pandillas de la era de los «gangsters» —la de Dillinger, Karpis, «Baby Face» Nelson, «Pretty Boy» Floyd— ya no asolaban el país. Pero los asaltantes profesionales seguían trabajando, imitados por un número creciente de «amateurs», más sanguinarios y peligrosos que los profesionales, porque era imposible prever el uso que harían de sus armas.

En algunos casos, como el asalto a la casa Brink, la preparación del golpe estuvo a cargo de profesionales, que calcularon cada movimiento por anticipado, con la minuciosidad del célebre «Eddie» Bentz, pistolero que actuó allá por 1930. Bentz fue uno de los primeros en trazar planos de fuga y en estudiar minuciosamente un banco, hasta las costumbres de sus empleados, antes de asaltarlos.

—Siempre leo los informes financieros de los bancos —dijo Eddie en cierta oportunidad—. Si no sabe uno cuánto dinero hay en efectivo y cuánto en valores, es como si no se supiera nada.

Eddie era minucioso. Se pasaba días y a veces semanas enteras «balconeando» un banco, anotando los movimientos de los empleados y diagramando las vías de escape. Hasta leía los boletines policiales para estar al tanto de las últimas novedades.

—A veces cambio la marca de cigarrillos que fumo —contó Eddie a un amigo—, porque sé que los *G-Men* se fijan en esas cosas.

En la posguerra, los asaltantes aficionados —y no los profesionales como Bentz— se convirtieron en mayoría. En algunos aspectos, eso dificultó la tarea del F. B. I., porque el «amateur» a menudo no tiene prontuario criminal y resulta más difícil identificarlo. Pero, por otra parte, deja más indicios y comete más errores. Hubo uno, por ejemplo, que se puso nervioso y se equivocó de puerta: en vez de salir a la calle con lo robado, se metió en una oficina con una puerta enrejada, donde lo encerraron.

El F. B. I. descubrió que el ansia de obtener dinero fácil no es exclusiva de una edad determinada. Entre los ladrones de bancos, según las estadísticas, hay desde chicos de quince años hasta abuelos. Incluso familias enteras han pretendido dedicarse al «oficio». En Wisconsin, una señora, su hijo de

veinticuatro años, su hija de catorce y otros dos secuaces planearon y cometieron un asalto, huyendo con 11.533,93 dólares. La hija, que durante el hecho empuñaba un revólver, volvió luego a la escuela con una nota para la maestra, firmada por su madre: «Por favor disculpe a Margarita, estaba resfriada».

Su hermano se mostraba muy orgulloso de la joven.

—No sé lo que habría hecho si alguien hubiera empezado a los balazos —dijo después del arresto de la pandilla—, pero creo que se hubiera defendido bien.

El F. B. I. descubrió también que muchos asaltantes les tenían pavor a las mujeres o a los ancianos empleados de cajeros.

—Son gente tan rara... —exclamó el pistolero Clyde Milton Johnson después de ser arrestado—. Una mujer o un viejo nunca se sabe lo que van a hacer. Estuve a punto de rechazar un trabajo cuando averigüé que el banco tenía dos cajeras.

«No sé si me explico. Una vez entré en una casa de crédito, saqué el revólver y le apunté a un viejo que estaba sentado en la caja. ¿Saben lo que hizo? No movió un dedo.

«Le froté la nariz con el revólver y le dije:

«—¡Oiga, usted! ¡Esto va en serio!

«Me contestó:

«—Yo no tengo nada que ver con la plata.

«Y señaló al tipo de la ventanilla contigua.

«Bueno, yo me figuré que el viejo se quedaría tranquilo, y le apunté al otro. Entonces el viejo se levanta y empieza a caminar hacia la puerta.

«—¿Dónde diablos va? —aullé.

«Me miró por encima del hombro y dijo:

«—Voy a buscar un vigilante.

Y siguió andando.»

Johnson meneó la cabeza.

—¿Qué quieren que haga con gente así?

Hay otros casos que confirman el desencanto de Johnson. Un pistolero entró en un banco, apuntó con un revólver a una cajera y deslizó por la ventanilla un mensaje que decía: «Llene esta valija de dinero, o la mato».

La mujer leyó el mensaje y exclamó:

—¿Por qué se la agarra conmigo?

Después, tranquilamente, se acuclilló bajo la protección del mostrador. El desconcertado asaltante sólo atinó a escapar, y a estas horas seguirá meditando sobre las excentricidades del sexo débil.

Pero los episodios divertidos no alcanzan a disipar la estela de muerte y terror que dejan tras sí los asaltantes de los

bancos, que han constituido en la posguerra un problema de considerable magnitud.

Un asalto a un banco produce por lo general gran conmoción. De ahí que a veces resulte difícil identificar a los asaltantes. El F. B. I. sabe que las descripciones más «seguras» sólo pueden aceptarse con grandes reservas y sujetas a incansable verificación. Para ilustrarlo, cabe mencionar el caso de L. H., a quien arrestó la policía del Estado de Connecticut por violar los términos de la libertad «a prueba» que se le había concedido. Durante el interrogatorio que le hicieron, la policía empezó a sospechar que hubiera participado en un asalto a un banco que produjo pérdidas por 25.900 dólares. Seis testigos lo «reconocieron», y ratificaron esa declaración en presencia de agentes del F. B. I. El 20 de mayo de 1953 un jurado federal lo condenó, a pesar de que L. H. insistía en que era inocente, diciendo que al producirse el asalto estaba en su casa con su esposa.

Diez meses más tarde, en Indiana, otro hombre se confesó autor del asalto de Connecticut, disipando las sospechas que pesaban sobre L. H. Este, sin embargo, fue entregado a las autoridades estatales, acusado de robo a mano armada, pero entonces los testigos se negaron a identificarlo. Más tarde L. H. recibió una indemnización de 4.000 dólares.

Otro problema difícil para el F. B. I. es el inmenso número de automóviles robados. Entre 1935 y 1955 se calcula que hubo en los Estados Unidos más de 4.000.000 de robos de automóviles. En el curso de 1955 solamente, fueron robados 227.150 automóviles.

Ya en 1919 el miembro de la Cámara de Representantes por el Estado de Missouri, Newton, comprobó con asombro que el año anterior se habían robado en veintiuna ciudades 29.399 automóviles, de los cuales no se recuperaron 5.541, por un valor de más de 5.000.000 de dólares. Newton informó a sus colegas de la Cámara: «No hay en el país categoría de malhechores que obtengan ganancias más lucrativas, como recompensa a su ingenio, que los ladrones de automóviles». Y pidió la intervención del Congreso para reprimir a los ladrones, presentando un proyecto de ley en virtud de la cual transportar a través de la frontera de un Estado un automóvil sustraído constituyese un delito federal. Algunos juristas pretendieron ver en esa proyectada legislación una amenaza a los derechos de los Estados, pero la necesidad de que el gobierno federal asumiera jurisdicción sobre tales delitos era tan evidente que ese mismo año el Congreso aprobó la ley nacional sobre robos de vehículos (ley Dyer). Ya en aquellos primitivos tiempos del automovilismo el problema de los robos era demasiado grande para las autoridades locales,

que no podían perseguir a un ladrón más allá del linde del Estado en que ejercían jurisdicción.

La ley Dyer resultó, en la lucha contra la delincuencia, un arma más poderosa de lo que previera el Congreso. En la época de Dillinger y del gangsterismo en gran escala, sucedió con frecuencia que el único pretexto a que podían apelar los *G-Men* para perseguirlos era, justamente, el robo de un automóvil. Bastaba que un maleante cruzara un linde estatal con un automóvil robado, para que el F. B. I. pudiera actuar contra él dentro de los términos de la ley. Y el F. B. I. no desaprovechaba esas oportunidades.

Muchos robos de automóviles —por ejemplo, el caso repetido de la banda de muchachos que escamotean un coche para dar un paseo— constituyen simplemente un problema para la autoridad local. El F. B. I. se especializa en la búsqueda de vehículos utilizados en la comisión de delitos, y también en la lucha contra las pandillas profesionales que hacen del robo de automóviles un lucrativo comercio al margen de la ley.

En el transcurso de millares y millares de investigaciones, el F. B. I. ha cometido unos pocos errores. En alguna oportunidad un agente puede no investigar a fondo un caso particular, o bien se presenta un conjunto de circunstancias tales que la justicia tropieza y, al menos por un tiempo, los platillos de su balanza funcionan mal.

En cierta ocasión, por ejemplo, un automóvil Chevrolet robado en Fort Worth, Texas, fue localizado en un garaje de Cantiño, Texas. Las primeras averiguaciones realizadas por los agentes indicaron que el ladrón que buscaban podía ser un tal R. A. Mostraron al encargado del garaje fotografías de cinco hombres, pidiéndole que identificara al que había dejado el automóvil, y el encargado eligió la foto de R. A. Agregó que no podía efectuar un reconocimiento definitivo hasta que no viese a R. A. en persona. Sin embargo, las circunstancias eran tales que el fiscal nacional en Texas admitió que había causa suficiente para dictar una orden de captura contra R. A. Obtenido el consentimiento judicial, la delegación del F. B. I. en El Paso pidió a los agentes de Montana que localizaran y arrestaran a R. A.

R. A. fue arrestado en Montana a las 22 del 17 de mayo de 1956. No había duda de que R. A. era la persona con captura recomendada por la delegación de El Paso, porque su descripción física y su prontuario criminal concordaban.

Pero R. A. insistió en que el día del robo él estaba trabajando en Montana. Los agentes investigaron su declaración y descubrieron que era verídica. Estuvo trabajando en Bozeman ese día, y de ningún modo pudo robar el Chevrolet.

En menos de veinticuatro horas desde que se produjo su arresto, R. A. salió en libertad. Y la jefatura de Washington propinó a los responsables del error una buena «lavada de cabeza» por no investigar con más cuidado antes de practicar un arresto.

La lucha del F. B. I. contra la delincuencia de posguerra constituye quizá lo más espectacular de su actuación. Pero el Servicio no se limita exclusivamente a investigar crímenes⁽¹⁾. Le ha tocado intervenir en una gama asombrosamente amplia de litigios civiles. Sobre este solo aspecto de su actividad podría escribirse un libro. Baste decir que entre 1945 y 1955 ha ahorrado al gobierno un total de 601.975.128 dólares, aportando pruebas que permitieron desestimar falsas demandas o descubrir maniobras en perjuicio del fisco; realizando verificaciones contables de contratos de guerra renegociados; comprobando solvencia para pagar multas, y demostrando la no imputabilidad del gobierno federal en demandas por daños, perjuicios y accidentes de trabajo.

Muchas de estas investigaciones fueron complicadas ejercicios de contabilidad y finanzas. Otras sólo exigieron cuidadoso examen y documentación de las pruebas para rechazar falsas demandas. Tal el caso de un granjero, veterano de guerra, que reclamaba el pago de su seguro, pues alegaba invalidez total y permanente a consecuencia de actos de servicio.

Un agente del F. B. I. tomó un automóvil y fue a la granja, donde se pasó varias horas observando al «inválido».

El granjero estaba arando con un par de mulas. El surco del arado era de una rectitud perfecta. Rato después, el veterano cargó al hombro varias pesadas bolsas de fertilizante y las llevó al rastrojo. Estaba esparciendo el fertilizante, cuando las mulas se espantaron y echaron a galopar, arrastrando el arado. El granjero corrió tras ellas alrededor de cien metros, les dio alcance en una notable atropellada y las trajo de vuelta. Después siguió arando como si tal cosa.

El agente fotografió las hazañas del «inválido». Esas fotos constituyeron una prueba decisiva contra la demanda, que fue rechazada.

El F. B. I. maneja millares de casos. En los años de posgue-

(1) En 1950 hubo sectores que reclamaron a gritos que el gobierno federal interviniera en muchos casos. Hoover se opuso a que las leyes penales de aplicación federal fuesen ampliadas, pues advirtió que esa campaña era promovida por algunos funcionarios de las administraciones locales, que deseaban justificar su inoperancia y desplazar responsabilidades del nivel local al nacional. El 18 de mayo de 1950, en un discurso pronunciado en el Boy's Club de Washington, Hoover subrayó que no hacía falta una policía nacional, y que la custodia de las leyes debía estar, esencialmente, en manos de las autoridades locales. Y agregó: «No existe ciudad, pueblo o aldea de la nación que no pueda en 48 horas descargar un golpe categórico contra las fuerzas de la delincuencia, siempre que los ciudadanos se muestren dispuestos y resueltos a eliminar los lugares donde nace el crimen».

rra (como antes), no han faltado, sin embargo, los críticos dispuestos a escudriñarlos uno por uno, en busca de algún indicio que permitiera suponer ignorancia o violación de los derechos civiles. Nunca, probablemente, un organismo investigador ha estado expuesto durante tanto tiempo a una vigilancia tan microscópica. Pero los resultados obtenidos por los detractores han sido nulos.

XXVIII. - PARA PROTEGER ESTOS DERECHOS

Casi todos dormían en la localidad de Newton, Estado de Georgia, cuando el automóvil del «sheriff», M. Claud Screws, se detuvo en la plaza de los tribunales. Tres hombres bajaron del automóvil; luego, un cuarto. Eran el «sheriff», un policía, un ayudante del «sheriff» y un preso: un negro de treinta y cuatro años, llamado Robert Hall, detenido por el presunto robo de una cubierta de automóvil.

Hall iba esposado, mas de pronto —según los testimonios— los tres funcionarios policiales empezaron a golpearlo. Le dieron puñetazos y le aporrearon el cráneo con una cachiporra de hierro. El prisionero se desplomó, pero sus guardianes siguieron golpeándolo y pateándolo durante quince minutos por lo menos, acaso treinta. Más tarde arguyeron que el prisionero los había insultado, haciendo además de extraer una pistola. Esa fue la única excusa que dieron.

Cuando cesó la tunda, lo arrastraron tomándolo de los pies y atravesaron el patio de tribunales en dirección a la cárcel. Allí lo arrojaron a una celda.

Un testigo ocular declaró:

Estaba inconsciente, ensangrentado y cubierto de tierra, pero se arrastraba en cuatro patas. Tenía la nuca hecha papilla y se movía en un charco de sangre. La cabeza estaba tan hinchada que no podía abrir los ojos... En la sien izquierda tenía un agujero, y arriba de la cabeza, a la derecha, un tajo de una pulgada y media...

De la cárcel llamaron a la localidad de Albany para pedir una ambulancia. El practicante de la ambulancia echó un vistazo al prisionero y preguntó:

—¿Estuvo en un choque?

—Sí —dijo alguien—. Estuvo en un choque.

Robert Hall murió poco minutos después que la ambulancia llegara al hospital.

Para la gran mayoría de los sudeños, el brutal atentado cometido contra Hall era tan aberrante como para todos los ciudadanos del Norte, del Este y del Oeste respetuosos de las garantías constitucionales, que aseguran el derecho de cualquier habitante a ser juzgado por sus jueces y no por una turba de energúmenos.

Sin embargo, no tardó en plantearse un curioso interrogante. Al cumplir los tres funcionarios aquel acto de salvajismo, ¿habían negado a la víctima sus derechos civiles, incurriendo por lo tanto en violación de una ley federal? ¿O bien el episodio era un simple caso de brutalidad policial, punible por el Estado y no por el gobierno federal?

A pedido del Departamento de Justicia, el F. B. I. investigó el asesinato para determinar si los funcionarios policiales habían violado o no la ley federal que prohíbe a cualquiera «que actúe en nombre de la ley» privar maliciosamente a terceros de los derechos, privilegios e inmunidades garantizados por la Constitución o las leyes de la Nación ⁽¹⁾.

El gran jurado federal (*federal grand jury*) que examinó el caso opinó que Hall había sido privado de sus derechos constitucionales. Se dictó orden de encausamiento contra el «sheriff» Screws y sus dos secuaces. Un pequeño jurado federal (*federal petit jury*) escuchó los testimonios y condenó a los tres. La condena fue confirmada por la Corte de Apelaciones del circuito.

La Suprema Corte de los Estados Unidos calificó el hecho de «episodio escandaloso y repulsivo en la historia de las instituciones policiales», pero al mismo tiempo, por cinco votos contra cuatro de sus miembros, ordenó el nuevo enjuiciamiento de los acusados, porque el juez de la causa omitió explicar al jurado que sólo debía dictar sentencia condenatoria si consideraba que los funcionarios policiales habían golpeado a Hall con la intención y propósito específico de negarle un derecho constitucional ⁽²⁾.

En el segundo proceso los acusados resultaron absueltos, porque el gobierno no pudo probar que habían negado «maliciosamente» a Hall sus derechos civiles.

El caso Screws y otros similares impulsaron al director del F. B. I., Hoover, a formular esta advertencia:

Podemos tener la mejor Constitución, las mejores leyes y los más honestos jueces, pero si no conseguimos que la función policial arraigue en las tradiciones democráticas, mantenga el más alto nivel ético y se convierta en una carrera honorable, las libertades civiles seguirán siendo violadas permanentemente.

(1) Ahora Sección 242, Capítulo 18, Código de los Estados Unidos.

(2) Screws, et. al., v. U. S., 140 F. 2nd 672 (1944), 325 United States 91 (1945).

El caso *Screws*, ejemplo pocas veces visto de inhumanidad y sadismo, sirvió, no obstante, para poner de relieve una de las facetas más ignoradas de la lucha contra el crimen; es decir, las responsabilidades y limitaciones del F. B. I. en lo que atañe a la defensa de los derechos civiles.

Las enmiendas constitucionales conocidas con el nombre de Declaración de Derechos (*Bill of Rights*) garantizan libertad de religión, palabra, prensa, reunión y petición; derecho a tener y portar armas; derecho a resistir levas forzadas o allanamientos y capturas ilegales; no obligación de declarar contra sí mismo; no obligación de pagar fianzas o multas excesivas; derecho a no ser condenado sin proceso previo y a no sufrir castigo cruel o inusitado; y derecho al juicio por jurados, público y rápido. Estas son garantías básicas que protegen al individuo contra la opresión del gobierno federal. Las relaciones entre personas privadas son asuntos que competen, en su gran mayoría, a los Estados miembros de la Unión.

Es decir, que en los casos de violación de los derechos civiles, existe una línea divisoria entre la jurisdicción federal y la jurisdicción estatal. En 1871 el Congreso intentó abolir los linchamientos y excesos de las turbas por medio de una ley según la cual dos o más personas que conspirasen para negar a terceros el proceso legal a que tuvieran derecho incurrirían en delito de jurisdicción federal. Esta ley iba dirigida principalmente contra el Ku Klux Klan.

Sin embargo, la Suprema Corte de los Estados Unidos falló que la sección de la ley que hablaba de «conspiración criminal» (*criminal conspiracy*) era nula. El alto tribunal afirmaba⁽¹⁾ que, si bien la Decimocuarta Enmienda prohibía a un Estado limitar los derechos de un ciudadano, en cambio no regía sobre los actos de particulares. Por lo tanto, una turba podía linchar a un ser humano violando todas las normas de la moral y del «fair play», pero eso no significaba necesariamente una transgresión de las leyes federales. Y no existiendo violación de una ley federal, el F. B. I. no podía intervenir.

Las dos normas básicas que más o menos encuadran la jurisdicción del F. B. I. en este campo se encuentran en las Secciones 241 y 242 del Capítulo (*Title*) 18 del Código de los Estados Unidos. La Sección 241 trata principalmente de la servidumbre involuntaria, el «peonage» (trabajo forzado de peones en pago de presuntas deudas) y los derechos electorales. La Sección 242 trata principalmente de los actos de funcionarios policiales (*law enforcement officers*) que invo-

(1) U. S. v. Harris, 106 U. S. 629 (1882).

cando la ley («*under color of law*») niegan de mala fe (*wilfully*) a una persona los derechos garantizados por la ley y la Constitución.

No existe para el F. B. I. un terreno más delicado que éste de los derechos civiles, donde cualquier investigación roza preeminencias que los Estados custodian celosamente y donde es fácil agitar las pasiones de los hombres. Tanto es así que algunos sectores han acusado al F. B. I. de inmiscuirse en asuntos privativos de los Estados, mientras que otros lo critican por no intervenir con más firmeza⁽¹⁾.

A comienzos de 1956, ante una subcomisión de presupuesto de la Cámara de Representantes, Hoover declaró lo siguiente:

En los casos de violación de derechos civiles, el Servicio se halla en una situación comprometida, porque si reúne pruebas que justifiquen la intervención judicial, se lo critica; y si no reúne esas pruebas, también se lo critica. Nuestro único propósito es cumplir nuestro trabajo en forma objetiva.

El procurador general ha establecido las normas que debe seguir el F. B. I. cuando se denuncien violaciones de los derechos civiles:

1. Cada vez que se recibe una denuncia sobre presuntas violaciones de las leyes federales que protegen los derechos civiles, se dispone realizar una investigación preliminar.
2. Los resultados de la misma se comunican a la División Criminal del Departamento de Justicia, para su estudio.
3. Si la División Criminal decide que el caso no constituye violación de las leyes federales, o que no se justifica la intervención del gobierno federal, el F. B. I. no toma medida alguna.
4. Si la División Criminal decide que ha existido violación de las leyes federales, se ordena una investigación a fondo y se reúnen todas las pruebas a fin de promover acciones judiciales.
5. En ningún caso el F. B. I. recomienda al Departamento de justicia el curso a seguir.

En 1955, el gobierno federal presionó fuertemente para que el F. B. I. investigara el asesinato de Emmett Louis Till, un joven negro de catorce años, nacido en Chicago, a quien asesinaron en Misisipí por haber —según versiones— dirigido palabras indecentes a una mujer blanca, la esposa de Roy Bryant, en el interior de un almacén rural. Siete días des-

(1) La Academia Nacional del F. B. I. y las 23.419 escuelas de adiestramiento policial que actúan desde 1945 en el ámbito local han realizado una valiosa contribución a la defensa de los derechos civiles. A fines de 1955, cuando empezaban a aumentar las tensiones raciales, el F. B. I. creó a título experimental una Escuela de Derechos Civiles para policías, y a comienzos de 1956 lanzó un vasto programa de Escuelas de Adiestramiento en Derechos Civiles (*Civil Rights Training Schools*); en los primeros seis meses se crearon 420 escuelas. Todas ellas han sido bien recibidas y apoyadas por las autoridades comunales, condales y estatales. Al momento de escribir esto, el F. B. I. informa que entre los 21.980 oficiales de policía que asisten a dichas escuelas, ni uno solo ha sido acusado de violar libertades civiles.

pués de la incidencia, el cadáver de Till apareció flotando en el río Tallahatchie, con un tiro en la cabeza. Le habían colgado al cuello el ventilador de una desmotadora de algodón y lo habían echado al río. Los testigos declararon que el esposo de la señora Bryant y un hermanastro del mismo, J. W. Milam, habían sacado al joven Till de casa de su tío, en mitad de la noche, y se lo habían llevado. Se los acusó de asesinato, pero el jurado los absolvió.

La muerte del joven Till fue un asesinato brutal, salvaje e ignominioso, sin la menor duda. Pero la División Criminal del Departamento de Justicia resolvió que el F. B. I. no interviniera, pues la investigación preliminar no indicaba que se hubieran violado las leyes federales que protegen los derechos civiles.

El razonamiento en que se fundaba esta decisión era que, si bien se había cometido un asesinato, el gobierno federal no estaba facultado para investigarlo y procesar a sus autores en tanto no existiera transgresión a las leyes federales. Y mientras el Congreso no aprobara una ley que abarcara tales casos, la intervención del gobierno federal constituiría un avasallamiento de los derechos de un Estado.

No obstante, el clamor de la opinión pública exigía que el gobierno federal interviniese en casos como el de Till. De este modo se replanteaba la situación surgida después de 1930, cuando muchos sectores pedían la federalización de la policía para aniquilar el gangsterismo. Pero la verdadera solución del problema consiste en mejorar las policías locales, con el apoyo de la opinión pública inteligente.

En casos que implican libertades civiles vulneradas, los prejuicios locales constituyen para el F. B. I. una de las barreras más difíciles de superar. Algunos jurados no han querido condenar a los culpables aunque confesaran. A muchos testigos el temor o la simpatía por el acusado les tapa la boca. Las autoridades se niegan a cooperar. Y la opinión pública no demuestra excesivo entusiasmo por que se haga justicia.

Uno de los escándalos más grandes de que haya memoria lo dio un jurado en 1947, en Carolina del Sur, al negarse a condenar a los culpables de un horrendo asesinato. El asunto empezó cuando un taxista fue muerto a puñaladas cerca de la localidad de Liberty. Un sospechoso de raza negra, Willie Earle, fue arrestado y conducido a la cárcel de Pickens County. Allí lo interrogaron, pero él protestó su inocencia.

Entretanto, se corría la noticia de que Earle estaba detenido por la muerte del taxista. Y en la localidad de Greenville, Carolina del Sur, los furiosos colegas del muerto se reunieron para tratar el asunto. La reunión no tardó en con-

vertirse en una turba armada de escopetas y cuchillos que corrió en dirección a la cárcel de Pickens County. Irrumpieron en la vivienda del carcelero y lo obligaron a abrir la celda de Earle.

Willie Earle fue arrancado de la celda y subido a un automóvil. Se formó una caravana que hizo alto cerca de la represa de Saluda. Allí el prisionero «confesó» ser autor del crimen. Lo llevaron a un punto situado sobre Bramlett Road, en Greenville County, y lo bajaron del automóvil. La turba apaleó a Willie y lo perforó a cuchilladas. Un hombre le quebró en la cabeza la culata de su escopeta. Los puñales le arrancaron trozos de carne del cuerpo, y por fin varias perdigonadas apagaron la última chispa de vida. Los verdugos se fueron a sus casas.

El Departamento de Justicia autorizó al F. B. I. a realizar una plena investigación del linchamiento, porque Earle había estado bajo custodia de un funcionario, y por lo tanto existía la posibilidad de que se le hubieran negado sus derechos civiles «invocando la ley», siempre que el carcelero hubiera ayudado voluntariamente a la turba, o se hubiera mostrado remiso en el cumplimiento de su obligación. Pero el F. B. I. estableció que el carcelero era inocente.

La investigación fue realizada conjuntamente por el Servicio y la policía local. Se identificó a veintiocho personas que formaban parte de la muchedumbre. Cumpliendo órdenes de captura dictadas por el Estado, se las arrestó bajo acusación de asesinato... y veintiséis de los veintiocho acusados confesaron haber intervenido en el linchamiento. Una ola de escándalo sacudió a Carolina del Sur. El gobernador, J. Strom Thurmond, designó un fiscal especial para que se hiciera justicia. La defensa no presentó testimonio alguno. Pero el jurado declaró a los veintiséis procesados «no culpables» a pesar de las confesiones.

Cada vez que un oficial de policía o un funcionario de una institución estatal es acusado de una presunta violación de los derechos civiles, el F. B. I. investiga el caso, siempre que la División Criminal del Departamento de Justicia se lo ordene. Y la investigación se realiza aun cuando las autoridades del estado prefieran no tomar medidas por su cuenta. En cambio el Departamento se abstiene, por norma, si el Estado decide iniciar acciones por sí mismo.

La protección de los derechos civiles ha acarreado al F. B. I. serios conflictos, no sólo con oficiales de policía con quienes el Servicio viene cooperando desde hace años, sino también con los gobernadores de los Estados.

Una de estas disputas recibió amplia publicidad. En 1952, a pedido del Departamento, el F. B. I. realizó una encuesta

preliminar sobre presuntas violaciones de derechos civiles en la escuela de niñas del Estado de Texas, situada en Gainesville. Un agente del F. B. I. visitó a la directora de la escuela, quien prestó su colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Resultó que una internada se había rebelado contra la disciplina de la escuela, y a raíz de ello estuvo confinada; pero el F. B. I. no encontró fundamentos para una acusación judicial en regla. Y el informe elevado por el Servicio coincidió con las comprobaciones a que llegaron las autoridades del Estado.

Pero un año más tarde el gobernador Allan Shivers recordó la investigación de Gainesville como ejemplo de «intromisión» del F. B. I. en asuntos ya esclarecidos por las autoridades estatales, y lo acusó de no consultar a los funcionarios del Estado antes de realizar sus averiguaciones⁽¹⁾.

Hoover afirmó que sus hombres habían notificado debidamente a las autoridades, y agregó en carta dirigida a Shivers:

Por cierto que los miembros del F. B. I. no tenemos que presentar excusas a nadie cuando cumplimos con nuestro deber, haciendo respetar las leyes del país, según las instrucciones del procurador general. Si llegara el día en que el director del Servicio Federal de Investigación pudiera elegir a discreción las leyes que debe hacer cumplir, entonces realmente tendríamos una Gestapo, y le aseguro que yo no estaría en ella.

Pero antes del incidente con Shivers los gobernadores de Pensilvania y de Virginia, John S. Fine y John S. Battle, hablando en Seattle ante la conferencia anual de gobernadores, criticaron al F. B. I. por usurpar los poderes de policía de sus respectivos Estados. Aludían a las investigaciones realizadas por el F. B. I. en torno a presuntas brutalidades cometidas contra internados en los hospicios estatales.

Fine argumentó de este modo:

Debe señalarse que tal interferencia por parte del poder ejecutivo del Gobierno Federal va estrechamente aparejada con la intrusión que por medio del recurso de hábeas corpus consume el poder judicial. Puede ocurrir, entonces, que si un preso denuncia que lo despojan de sus derechos constitucionales, y el F. B. I. reúne presuntos elementos probatorios de la denuncia, el tal preso salga en libertad por medio de un recurso de hábeas corpus. El problema que se plantea, en consecuencia, es si el gobierno federal debe seguir tratando a los Estados como presuntos delinquentes, apoyándose para ello en denuncias de personas a quienes

(1) Al producirse la protesta de Shivers, el F. B. I. notificaba a los jefes de dependencias o instituciones sobre cualquier investigación que estuviera realizando en ellas. A partir de mayo de 1954, no sólo se notifica a dichos jefes, sino también al gobernador del Estado, para evitar malos entendidos sobre las actividades del F. B. I.

los Estados considera fundadamente ineptos para convivir en sociedad, o a quienes recluye con el fin de ayudarlos y de proteger a los restantes ciudadanos.

Hoover respondió al ataque declarando que los gobernadores criticaban al F. B. I. por asegurar la vigencia de una ley del Congreso y por cumplir instrucciones emanadas del Departamento de Justicia.

Y agregó:

Me parece que si los gobernadores se oponen a esa ley, lo natural es acudir al Congreso y pedir que sea derogada, en vez de concentrar sus ataques sobre el F. B. I. ...

La Unión Americana pro Libertades Civiles salió en defensa del F. B. I., con una carta dirigida a Fine que decía, entre otras cosas:

No alcanzamos a comprender por qué el F. B. I., que en conjunto tiene una excelente historia como defensor de estos derechos constitucionales, se ve sometido a tales ataques..., sobre todo porque en su discurso usted no criticó los métodos investigativos del F. B. I., sino que lisa y llanamente se opuso a cualquier actividad del mismo... Es indudable que el gobierno federal tiene la facultad de proteger a los ciudadanos contra el despojo de sus derechos, y llegado el caso su deber es actuar.

Otra situación difícil para el F. B. I. se produjo en 1953, cuando el entonces comisionado de Policía de la ciudad de Nueva York, George P. Monaghan, no permitió que fueran interrogados por el Servicio integrantes de la citada fuerza, acusados de tratar brutalmente a detenidos. Monaghan sostuvo que las investigaciones del F. B. I. estaban minando la moral de la policía neoyorquina; y que, además, el caso que interesaba al F. B. I. ya había sido investigado por su propio departamento; los oficiales fueron absueltos y se elevó un informe al fiscal de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York.

Resulta que Monaghan había llegado a un acuerdo con el fiscal y con la División Criminal del Departamento de Justicia, en virtud del cual el Departamento de Justicia transmitiría a la policía de Nueva York cualquier denuncia sobre violación de derechos civiles. El Departamento de Policía realizaría entonces su propia investigación, elevando un informe al Departamento de Justicia por intermedio del fiscal nacional. En caso de que los resultados de la indagatoria no satisficieran al Departamento de Justicia, éste podría tomar las medidas que estimara más adecuadas. El acuerdo se llevó a cabo sin conocimiento del F. B. I.

Hoover protestó ante el procurador general, James McGra-

nery, argumentando que ese arreglo, en el fondo, otorgaba a la policía de Nueva York privilegios especiales. Sostuvo que la policía neoyorquina debía estar en pie de igualdad con las otras dependencias policiales del resto del país. McGranery ordenó rescindir el acuerdo, y eventualmente se llegó a un compromiso entre el F. B. I. y el Departamento de Policía de Nueva York; en virtud del mismo se prestarían mutua colaboración para investigar las violaciones de derechos civiles.

En su mayor parte, las policías locales se muestran dispuestas a cooperar con el F. B. I. cuando aparece algún caso de libertades civiles vulneradas. Algunos departamentos de policía, como el de Dallas, Texas, comunican inmediatamente al F. B. I. cualquier denuncia de ese tipo que se formule contra cualquiera de sus oficiales. En todas partes va arraigando la convicción de que si un oficial de policía maltrata a un detenido, pisoteando sus derechos civiles, ese oficial merece ser denunciado, castigado y expulsado, para bien de la institución y de las leyes. Pero, si los cargos son falsos, entonces es necesario que la inocencia del oficial quede claramente establecida.

El F. B. I. se ha esforzado durante muchos años por lograr un plano de estrecha colaboración con las policías locales. Sin embargo, cuando hay que investigar algo, el F. B. I. no puede detenerse a calcular si su popularidad resultará o no afectada, porque entonces no investigaría jamás las violaciones de derechos civiles en que aparecieran complicados funcionarios gubernamentales. Ni se arriesgaría a enfrentar poderosas combinaciones políticas... Como la de Pendergast, en Kansas City, Missouri.

Tom Pendergast manejaba la política y el hampa de Kansas City. Su poder era legendario. Parecía intocable, hasta que el gobierno federal se lanzó contra él y contra sus testaferros políticos, que en las elecciones de noviembre de 1936 habían consumado un escandaloso fraude.

Un comité de ciudadanos, sublevados contra el caudillismo, comprobaron violaciones de las leyes electorales en algunos distritos y presentaron las pruebas al fiscal nacional. El juez federal Albert L. Reeves ordenó que un *grand jury* investigara las presuntas irregularidades. Ya a primera vista encontraron algo turbio: la población de Kansas City no llegaba a los 400.000 habitantes, y, sin embargo, había 270.000 electores empadronados. Se pidió la intervención del F. B. I.

El juez Reeves expresó ante el jurado:

No puedo cruzarme de brazos en mi distrito, cargado de responsabilidades como estoy, y permitir que mis compatriotas que

respetan la ley, mis conciudadanos que respetan la ley, vean llegar a la urna a un hombre con las manos manchadas por el fraude. Un voto fraudulento es una pistola apuntada al corazón mismo de América.

Los agentes del F. B. I. acumularon abrumadoras pruebas de fraude: urnas «cargadas», intimidación, boletas donde los nombres de candidatos republicanos habían sido reemplazados por candidatos demócratas. En una comisaría, se oyó decir a un oficial:

—He tenido un día bravo en el subsuelo. ¡Cómo escriben esos malditos republicanos! Lo difícil es borrar.

Expertos del F. B. I. examinaron las boletas y encontraron pruebas de la borrarina. En distintas boletas aparecían claros rastros de tachaduras efectuadas por una misma persona. Hasta impresiones digitales latentes de los culpables se encontraron. Y votos marcados mediante una muesca en el borde del papel.

La evidencia recogida era terminante. El jurado condenó a 256 personas. Y éste fue el principio del fin para una de las maquinarias políticas más corrompidas en la historia de los Estados Unidos.

Otra piedra miliar en los archivos del F. B. I. es la historia de un fracaso. Fracaso surgido de una interpretación tribalística de las leyes. Ocurrió en 1939. Un periódico de la ciudad de Mobile (Alabama), el *Register*, estaba llevando una campaña contra el vicio y el juego. Uno de sus redactores fue atraído con engaños a un lugar apropiado, y allí recibió una feroz paliza de una pandilla resuelta a terminar con la campaña periodística.

El F. B. I. forzó una investigación sosteniendo que había existido «conspiración» (*conspiracy*) para restringir la libertad de prensa. Los cinco culpables fueron condenados, pero la Cámara de Apelaciones del Circuito revocó la sentencia, sosteniendo que la Constitución y las leyes federales no protegían a la prensa contra los actos de particulares.

El más antiguo enemigo del F. B. I., en el campo de las libertades civiles, ha sido el Ku Klux Klan. Los agentes del F. B. I. vienen luchando contra él desde hace más de treinta años, y en cierto modo lo han desarticulado. Pero más de una vez, en el transcurso de esa lucha, el F. B. I. ha tenido que actuar contra funcionarios policiales que engrosaban las turbas o no hacían nada por impedir sus atrocidades.

En un caso ocurrido en Hooker, Georgia, en 1949, una muchedumbre de cincuenta a setenta y cinco personas, vestidas con túnicas y capuchas del Klan, quemaron una cruz cerca de la casa de una negra a quien acusaban de «celebrar or-

gías». En ese momento había en la casa seis negros, cuya edad oscilaba entre diecinueve y treinta años. Habían venido a visitar a un hijo de la dueña de casa. La turba cercó a los visitantes, los llevó a un cerro, los azotó y les dijo:

—¡Suban al cerro y váyanse de aquí!

Entre los testigos del episodio se contaban el «sheriff» de Dade County, John William Lynch, y su ayudante William H. Hartline. Hartline ayudó a cargar a los negros en el automóvil, y el «sheriff» presencié la escena sin formular una palabra de protesta ni hacer un gesto para proteger a los negros.

El jurado reunido para examinar el caso en la Corte Federal de Rome, Georgia, declaró al «sheriff» Lynch y a su ayudante Hartline culpables de violar una ley federal, por no proteger a los negros. Se los condenó a un año de cárcel y 1.000 dólares de multa. La Cámara de Apelaciones del Circuito confirmó la sentencia, y la Suprema Corte se negó a rever el caso.

Pero lo más curioso del episodio fue la resolución tomada por el gran jurado federal de Rome, compuesto por pobladores de la zona. Dicha resolución decía:

Los miembros del gran jurado federal... por la presente resuelven: que los agentes del Servicio Federal de Investigación que a continuación se mencionan... por su gran fidelidad y constancia para reunir los elementos que sirvieron de base al juicio por asociación ilícita celebrado en Dade County, Georgia, han cumplido con exceso su deber de ayudar, asistir y proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos, refirmando la causa de la igualdad y la justicia en América.

Sería grato poder decir que tantos esfuerzos han permitido consolidar un clima de armonía y comprensión. Pero la verdad es que, a pesar de los progresos realizados en el transcurso de los años, el germen de la violencia aún no ha desaparecido⁽¹⁾.

Los agentes del F. B. I. comenzaron a dar cuenta de un aumento de la tensión racial poco después que la Suprema Corte se pronunció por la integración de escolares blancos y negros en las escuelas públicas. Cuando esa tensión llegó a su apogeo, en la primavera de 1956, Hoover declaró lo que sigue:

(1) Durante el año fiscal 1956 pasaron por el F. B. I. 1.231 denuncias de violación de derechos civiles; 44 menos que el año anterior.

En los 17 años transcurridos desde que el F. B. I. comenzó a investigar violaciones de derechos civiles resultantes de actos de violencia, se han producido 39 linchamientos; en los 17 años anteriores a dicha intervención, el número de linchamientos ascendió a 317. En los últimos cuatro años no se ha denunciado un solo linchamiento.

La agitación creciente se manifiesta en actos desembozados de individuos, resistencia organizada por parte de los cuerpos legislativos y organización de grupos cada vez más amplios que resisten la integración en el Sur...

Para evitar hechos sangrientos, que ya están en boca de partidarios y enemigos de la integración, se necesita un verdadero entendimiento y una campaña de educación pública en torno a los factores de la actual situación, tan grave que en cualquier instante puede degenerar en actos de extrema violencia...

Los ciudadanos respetuosos de la ley, en el Sur, no aprueban ni justifican actos de brutalidad y mucho menos la supresión ilegítima de vidas humanas. Por otra parte, las tradiciones históricas y las costumbres forman parte de una herencia a la que no quieren renunciar sin lucha... Las tensiones en aumento sólo pueden resolverse mediante la comprensión, interpretando todos los impulsos motivadores que actúan... Pero hay una zona de peligro donde se producen fricciones entre extremistas de ambos bandos, siempre dispuestos a recurrir a la violencia.

La advertencia era oportuna.

XXIX. - LA GRAN ILUSION

Entre las personas que entraron en la sede central del F. B. I. aquella tibia tarde de junio de 1950 se contaba un hombre de edad madura, cuyo rostro sereno e inteligente no traicionaba la tormenta que bullía en su espíritu.

Bajó del ascensor en el quinto piso y se encaminó por el pasillo a una oficina donde lo esperaba el agente con quien había concertado una entrevista.

El visitante —llamémoslo el señor A.— explicó que tenía mucho interés en conocer con más detalles el Programa de Lealtad de Empleados Federales (*Federal Employees Loyalty Program*) anunciado por el presidente Truman. Ciertos aspectos de dicho programa, relativos a las libertades civiles, inquietaban al señor A. Quería consultar con alguien que tuviera conocimiento íntimo del problema.

El agente explicó cómo trabajaba el Servicio para investigar la lealtad de los empleados del gobierno, pero a medida que hablaba comprendió que la conversación era una mera sucesión de fintas, y que lo que preocupaba al señor A. era otra cosa. Gradualmente, desvió el tema para ocuparse de las actividades subterráneas del comunismo.

—Nunca he logrado comprender —observó el agente— que un hombre pueda llevar la vida de engaño que lleva un comunista, y luego justificarse ante su propia conciencia, justificar la confianza que depositan en él sus amigos y su gobierno.

El comentario dio en el blanco. El señor A. empezó a hablar de la doble vida que el comunismo exige a los militantes del partido, y deploró la astucia, la falsedad y la deslealtad de los comunistas que obligaban al gobierno a vigilar a sus empleados como medida de seguridad.

—Usted sabe mucho de esas cosas, ¿verdad?

El hombre miró al agente largo rato.

—Sí —dijo por fin—. Sé mucho. Ignoro lo que usted mismo puede saber sobre mí...; acaso más de lo que imagino.

Después, como si hablara consigo mismo, prosiguió:

—He meditado mucho en lo que debía hacer...

—¿Usted estaba afiliado al partido?

—Sí.

La palabra fue un suspiro de alivio. El señor A. relató las misiones que había desempeñado para el partido a partir de 1930, su dedicación a la causa, su honesta pero trágica convicción de que el comunismo era una forma de liberalismo para hombres de manos callosas. Cuando los nazis y los rusos firmaron su pacto de no agresión, el señor A. comprendió por primera vez lo que realmente era el comunismo. Fascismo y comunismo eran gemelos imperialistas que ahora se estrechaban la mano.

—Hace mucho que lleva usted estas cosas adentro —observó el agente—. ¿No le parece que es hora de ayudar al gobierno diciendo lo que sabe?

El señor A. asintió.

—Diré todo lo que sepa.

—¿Y su familia?

—Quiero hablar con mi esposa y dejar que ella resuelva por su cuenta.

Varios días más tarde, el señor A. combinó para que un agente visitara su casa y hablara con su esposa. Ella también estaba harta de la sucia treta que el comunismo había jugado y seguía jugando a la humanidad. Más comprometida aún que su esposo, había trabajado en el aparato subterráneo del partido.

Los informes que ambos dieron⁽¹⁾ llenaron muchas lagunas e iluminaron varios hilos ocultos de la telaraña tejida por el partido para infiltrar sus miembros en cargos de confianza dentro del gobierno.

La historia de A. y de su esposa no era inusitada. Docenas de hombres y mujeres han llegado al F. B. I. a contar, en dramáticas confesiones, cómo fueron engañados por una especie de fascismo que se vestía con el disfraz del liberalismo. Querían descargar su propia conciencia e iniciar una nueva vida. Habían descubierto que, si el partido luchaba por captar los espíritus, no era porque tuviese interés en la libertad personal o intelectual del individuo. El partido trataba de seducir el intelecto de los hombres, porque esas inteligencias eran los instrumentos de conquista de un mundo; y cuanto más brillante fuese un intelecto, más útil podía ser en manos del partido. Estas gentes que acudían al F. B. I. ya no estaban dispuestas a que su inteligencia fuese una

(1) Esta información fue ofrecida y aceptada por el F. B. I. dentro de la más absoluta reserva. La afiliación del señor A. al partido permaneció en secreto hasta que él la reveló voluntariamente.

mera célula en el supercerebro de una dictadura que negaba las mismas libertades que decía defender. Tuvieron el coraje de admitir el error que habían cometido en una especie de pesadilla intelectual donde la más oscura reacción se les apareció como un paraíso liberal.

La lucha contra el comunismo ha sido, a todas luces, el capítulo más extraño —y el menos comprendido— en la historia del F. B. I. Para interpretar el papel del F. B. I. es necesario previamente conocer el problema tal como lo enfocan J. Edgar Hoover y los hombres que lo rodean.

En primer lugar, Hoover consideró al comunismo como una conspiración internacional desde su comienzo. Era la época —noviembre de 1917— en que Lenin proclamaba entusiasmado que por fin empezaba la revolución comunista, y la Tercera Internacional establecía las reglas básicas de acción para sus partidarios. El partido no era una «sociedad fraternal» consagrada a los ideales del liberalismo, y tampoco era un partido político en el sentido habitual. Era un peligroso mecanismo, organizado sobre una base mundial con el propósito de derrocar el sistema social existente y en consecuencia derribar por la fuerza al gobierno de los Estados Unidos, después de socavarlo por medio de la subversión⁽¹⁾.

En segundo lugar, los jefes del F. B. I. jamás albergaron la ilusión de que el Manifiesto Comunista y los escritos de Lenin, y luego Stalin, y luego Malenkov, y luego Khrushchev, fuesen meros ejercicios intelectuales clasificables como opiniones. Vieron en ellos lo que habían visto en *Mein Kampf*: un programa de conquista. Las tácticas podían variar, pero la gran estrategia de la conquista del mundo nunca había cambiado. El F. B. I. tomó en su sentido literal todas las declaraciones de los jerarcas rojos.

En tercer lugar, el comunismo amenazaba destruir las libertades, y el gobierno mismo a quien los hombres del F. B. I. habían jurado defender. Esa amenaza debía ser combatida, como se había combatido la amenaza del gangsterismo. No con los mismos métodos y las mismas armas, na-

(1) A fines de 1923 una subcomisión del Senado, dependiente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió al Departamento de Estado que expusiera su posición con respecto al reconocimiento diplomático de la Rusia Soviética. El secretario de Estado, Charles Evans Hughes, solicitó a J. Edgar Hoover, entonces director auxiliar del Servicio, que le preparase un informe sobre las actividades comunistas en los Estados Unidos. El informe del joven Hoover, basado en documentos originales, probó la íntima conexión y el dominio ejercido por la Rusia Soviética sobre la Tercera Internacional y los líderes comunistas de los Estados Unidos, dispuestos y resueltos al uso de la fuerza para el logro de los objetivos comunistas. Hoover concurrió a la interpelación con el secretario Hughes, y la presentación conjunta que ambos hicieron no fue refutada ni desmentida por los dirigentes comunistas de los Estados Unidos o del exterior. La Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado se abstuvo de despachar favorablemente el proyecto de resolución del Senado que otorgaba reconocimiento diplomático a la Rusia Soviética.

turalmente, pero sí con el mismo implacable vigor, utilizando todos los medios legales⁽¹⁾.

En cuarto lugar, los miembros del Partido Comunista o los que voluntariamente y a sabiendas seguían la línea del partido no eran más que instrumentos de la Rusia Soviética. Y siendo instrumentos dóciles de Rusia, constituían una amenaza potencial para la seguridad de los Estados Unidos. Como guardianes de la seguridad interna de la nación, los hombres del F. B. I. tenían el deber moral y legal de combatir esa amenaza y sofocarla donde fuera posible.

Esta era la actitud básica del F. B. I. ante el comunismo, puesta en práctica a partir de 1936, cuando el presidente Roosevelt ordenó que se vigilaran las actividades comunistas. Pero tal actitud existía desde antes, y permaneció invariable en el transcurso de los años, porque la apreciación del comunismo realizada por Hoover en 1919, cuando redactó su memorial de abogado contra el partido, era tan sólida como la de 1956. El tiempo no había hecho más que confirmar sus cálculos.

Y así fue como el F. B. I. vio ocurrir lo inconcebible en América..., pero inconcebible solamente porque la mayoría de los norteamericanos se negaban a creer que algunos de sus compatriotas pudieran aplicar contra su propio país aquellas palabras pronunciadas por Lenin:

En todos los países, aun los más libres, «legales y pacíficos» —en el sentido de que la lucha de clases es en ellos menos intensa—, ha llegado a su plena madurez el momento en que es absolutamente necesario que cada Partido Comunista combine sistemáticamente la acción legítima y la acción clandestina, la organización abierta y la organización subterránea...

La absoluta necesidad, en principio, de combinar la acción legítima con la acción clandestina está determinada... también por la necesidad de probar a la burguesía que no existe ni puede existir una esfera o campo de acción que los comunistas no sean capaces de conquistar.

Los comunistas creyeron en estas palabras. En los Estados Unidos formaron su organización subterránea, como aconsejaba Lenin. Agentes e informantes del F. B. I. respetos a vigilar la organización subterránea del partido, debieron sumergirse en un fantasmagórico mundo desdoblado, donde hombres y mujeres vivían normalmente la mitad de su vida, mientras en secreto entregaban la otra mitad a «la Causa».

(1) En un discurso pronunciado en 1938, Hoover afirmó: «Tanto el comunismo como el fascismo son la antítesis de las ideas norteamericanas de libertad y democracia... No hay lugar en este país para esos dogmas destructivos, anárquicos o despóticos. El fascismo ha crecido siempre en las cénagas del comunismo... No podemos tener una nación mitad americana y mitad extranjera en su espíritu».

Nada importaba que esa duplicidad chocara con las normas éticas habituales. ¿Acaso no había dicho Lenin: «Nuestra moral se deduce de la lucha de clase del proletariado»? No era inmoral, por lo tanto, mentir, engañar, robar, traicionar y aún eliminar a millares y millares de personas siempre que «las condiciones y las necesidades de la lucha de clases» exigieran semejantes tácticas. Y los comunistas empedernidos comprendían esto perfectamente.

Los comunistas norteamericanos se esforzaron desde el primer momento por captar a los obreros, trabajando desde adentro y gestionando acuerdos con líderes sindicales reconocidos. Así pudieron infiltrarse en algunos gremios y llegar a dominarlos, pero no consiguieron el apoyo de la masa ni el de los dirigentes más importantes.

En 1936, cuando el presidente Roosevelt ordenó al F. B. I. que investigara las actividades comunistas, el país salía de la depresión, pero aún quedaban millones de desocupados. El fascismo llegaba a su apogeo en Alemania, Italia y Japón. Ya se combatía en España y en el Lejano Oriente. Los Soviets demostraban un repentino interés por las ideas de seguridad colectiva. Rusia se había incorporado en 1934 a la Liga de las Naciones, y los comunistas propugnaban un frente unido para defender la paz.

Durante el séptimo congreso de la Internacional Comunista, realizado en 1935 —al que asistió una numerosa delegación del Partido Comunista de los Estados Unidos—, Georgi Dimitrov explicó a sus camaradas:

Lo primero que se debe hacer... es organizar un frente unido, lograr la unidad de acción de los trabajadores en todas las fábricas, en todos los distritos, en todas las regiones, en todos los países, en todo el mundo. La unidad de acción del proletariado, en escala nacional e internacional es el arma poderosa que permite a la clase obrera... contraatacar victoriosamente al fascismo...

El tema de la «unidad» adquirió momentánea preeminencia sobre el de la revolución. De la noche a la mañana, los comunistas norteamericanos se convirtieron en «progresistas» y «liberales». Surgieron como hongos las organizaciones colaterales. El comunismo fue saludado como «la democracia del siglo veinte». Los afiliados al partido, que sumaban 19.200 en 1933, aumentaron a 70.000 en 1939. En número, poco representaban entre los millones de norteamericanos; pero utilizaban la conocida táctica de escalar posiciones claves que les permitían maniobrar o influir en organizaciones paralelas, dependencias del gobierno, sindicatos, universidades, clubes y otros grupos.

Mientras se dedicaron exclusivamente a influir en el gre-

mialismo, los comunistas actuaron en un frente estrecho. Mas ahora se proclamaban liberales, y hasta apoyaban el *New Deal* (Nueva Política) rooseveltiano, cada vez que esa maniobra favorecía la línea partidaria. El lema de «Pan y Paz» ha conmovido el corazón de los hombres desde el principio de los tiempos. Ahora, en plena depresión interna, mientras afuera llegaban al poder los delincuentes fascistas, ese lema resultó muy útil para que el comunismo extendiera su influencia. El *Daily Worker*, órgano oficial del partido, borró de su primera plana la hoz y el martillo simbólicos y se proclamó «Defensor de la Libertad, el Progreso, la Paz y la Prosperidad del Pueblo».

Muchas personas se afiliaron al Partido Comunista sin tener la menor idea de que estaban jugando con fuego. Algunas creyeron honestamente que el comunismo era una forma de liberalismo. Millares fueron atraídas por organizaciones colaterales y dejaron utilizar sus nombres en causas cuya defensa resultaba útil al comunismo, al menos por el momento.

Los comunistas empedernidos no abrigaban falsas ilusiones. Sabían que su fuerza no radicaba en el número. Ya lo había dicho en 1932 un comunista veterano:

La fuerza actual del movimiento comunista en los Estados Unidos no puede expresarse con exactitud en cifras. Para medirla, hay que tener en cuenta principalmente la influencia que el partido y su programa ejercen sobre las masas.

Sabían que una minoría tenaz, resuelta a sacrificarlo todo para conseguir su objetivo último, era capaz de conquistar el poder.

A mediados de agosto de 1939 circuló el rumor de que Alemania y Rusia firmarían un pacto de no agresión. Los comunistas norteamericanos se declararon indignados. El *Daily Worker* se permitió poner en duda la versión publicada por el *Daily News* de Nueva York, y lo hizo así:

El *Daily News* incurre en miserable falsedad al afirmar que la Unión Soviética proyecta un «acuerdo» con el enemigo más ruin de la U. R. S. S. y de todas las democracias, el bestial régimen nazi...

La «miserable falsedad» se convirtió en un hecho el 24 de agosto de 1939. Rusia dejaba a Hitler en libertad de guerrear con el Oeste. Los «bestiales» nazis eran ahora buenos vecinos de la Unión Soviética. En cuanto al ataque ruso contra Finlandia, William Z. Foster lo explicó bonitamente diciendo: «El Ejército Rojo coopera con las masas laboriosas del pueblo finés...».

Cuando se firmó el pacto, los comunistas modificaron su «línea» en un abrir y cerrar de ojos. Los Estados Unidos bajo el *New Deal* ya no eran «progresistas», sino que junto con Gran Bretaña y Francia formaban parte del «belicismo imperialista». El comunismo acuñó nuevos lemas: «América no debe intervenir en la guerra imperialista», o bien «Los yanquis no pelearán por vosotros». El partido combatió el sistema de préstamos y arriendos a Gran Bretaña y la ayuda a Francia. El frente unido «antifascista» se convirtió en el frente unido «antiimperialista».

El «camarada» Earl Browder, secretario general del Partido Comunista, preguntó: «¿Qué motivos hay para creer que al mundo le conviene más una victoria aliada que una victoria alemana?».

Pero cuando Alemania se volvió contra Rusia, ya fue otro cantar. Los comunistas realizaron otra de sus acostumbradas cabriolas. La guerra que hasta el 21 de junio de 1941 era «injusta», el 22 de junio se convirtió en la más «justa» de las guerras. La lucha de los «mercaderes del belicismo imperialista» se trocó en «una poderosa cruzada popular contra el fascismo y la opresión». Los «frentes populares», que hasta ese momento abogaban por la paz, se disolvieron. Las «ligas antiimperialistas» se esfumaron. Y en su lugar aparecieron los movimientos pro unidad, pro segundo frente, pro ayuda total a Gran Bretaña, China y la Unión Soviética.

El partido perdió alrededor de 20.000 miembros, desilusionados ante tales piruetas, que evidenciaban adhesión a la Rusia Soviética y al comunismo, pero no a los ideales americanos de libertad. Sin embargo, al resucitar el viejo «frente unido», y al entrar Norteamérica en la guerra, el partido alcanzó en 1944 la cifra máxima de afiliación, con 80.000 miembros⁽¹⁾. El F. B. I. calculó que alrededor de un millón de personas, a sabiendas o no, colaboraban con las organizaciones colaterales. Los propios comunistas se jactaban de que por cada miembro del partido había diez que, sin serlo, seguían voluntariamente la «línea» partidaria.

En todo el transcurso de la guerra, el F. B. I. siguió vigilando las maniobras del Partido Comunista y de los «frentes» que cambiaban de nombre con la facilidad con que se cambia de traje. Cuando un frente o un nombre habían cumplido su objetivo, se los reemplazaba por otros nuevos. En 1921, por ejemplo, se organizaron los Amigos de Rusia Soviética. A medida que pasaban los años, y según las conve-

(1) Datos dignos de confianza señalan que al producirse la Revolución de Noviembre el Partido Comunista de la Unión Soviética sólo tenía 80.000 miembros, y que esta cifra representaba un aumento del 100 por ciento en ocho meses. La población de Rusia cuando los comunistas derribaron el gobierno era de 142 millones.

niencias del momento, esa misma organización se llamó Amigos de la Unión Soviética, Comité Norteamericano pro Amistad con la Unión Soviética, Consejo Americano pro Relaciones con el Soviet y finalmente Consejo Nacional pro Amistad Americano-Soviética.

En junio de 1941, poco antes de terminar la luna de miel entre nazis y comunistas, se realizó la más flagrante tentativa de entorpecer el programa de ayuda a Gran Bretaña. Una huelga repentina, inspirada por los comunistas, paralizó la fábrica de la North American Aviation Corporation situada en Inglewood, California, que tenía contratos para fabricar aviones por valor de 200 millones de dólares.

Pasando por alto las directivas de las autoridades nacionales del C. I. O. (*Congress of Industrial Organizations*, Congreso de Organizaciones Industriales, una de las dos centrales obreras norteamericanas), los delegados de fábrica llevaron a los obreros a la huelga, con el apoyo del C. I. O. local. El presidente Roosevelt ordenó al Ejército que ocupara la fábrica y declaró que la huelga «no era un conflicto sindical legítimo, sino una forma de sabotaje extranjero, inspirado y dirigido por fuerzas comunistas, a quienes no les interesaba el mejoramiento de la clase obrera, sino la derrota y la ruina de los Estados Unidos».

Cuando los Estados Unidos y Rusia se aliaron en la guerra contra el Eje, el Partido Comunista dedicó todos sus esfuerzos a evitar las huelgas. Earl Browder proclamaba la necesidad de brindar un apoyo total a Rusia y Gran Bretaña, diciendo que «no debe haber un hombre ocioso, una máquina parada, una hectárea improductiva⁽¹⁾».

En octubre de 1940, el Congreso había aprobado la ley Voorhis, que obligaba a todas las organizaciones sujetas a fiscalización extranjera a inscribirse en un registro de la procuración general, y un mes más tarde el Partido Comunista de los Estados Unidos cortaba «formalmente» sus relaciones con la Internacional Comunista (Comintern). Los comunistas nativos podían ahora jactarse de que no existía lazo alguno entre ellos y Moscú. Pero los informes del F. B. I. demostraban que el partido seguía la línea de Moscú con la fidelidad de siempre.

Sin embargo, se estaba incubando una crisis en el Partido Comunista norteamericano. En junio de 1943 Stalin disolvió

(1) El 23 de octubre de 1939 Browder fue arrestado por violación de pasaporte, y al día siguiente salió en libertad bajo fianza. Mientras estuvo en libertad, desarrolló una activa campaña como candidato del Partido Comunista en la elección presidencial de 1940. Posteriormente, un tribunal federal lo condenó a cuatro años de cárcel y 2.000 dólares de multa. La sentencia fue confirmada por la Suprema Corte. Ingresó en la penitenciaría de Atlanta el 27 de marzo de 1941. El 16 de mayo de 1942 el presidente Roosevelt le conmutó la pena.

el Comintern, como recurso para estrechar vínculos con los aliados occidentales. Apenas producida esta decisión, el F. B. I. observó febril actividad entre los dirigentes comunistas de Nueva York y otras ciudades. Se pidió a los informantes confidenciales que averiguasen lo que estaba pasando.

Los informantes explicaron que el comité nacional del partido había dispuesto que se estudiara la posibilidad de disolver el partido y reorganizarlo bajo distinto nombre. Browder y otros dirigentes pensaban que la nueva política de «amistad» soviética indicaba la conveniencia de renunciar a la palabra «partido». Con un nombre diferente —razonaban— la organización tendría más posibilidades de conquistar el apoyo de los sindicatos y otros grupos. Además, agregaron los informantes, el propio Comintern había ordenado, antes de disolverse, la disolución de los partidos miembros.

Esta era la situación del partido cuando el presidente Roosevelt, el primer ministro Churchill y Stalin se reunieron en Teherán, en diciembre de 1943, comprometiéndose a luchar unidos contra el Eje hasta el fin y a cooperar en la reconstrucción de posguerra. Una vez más los comunistas norteamericanos formaron corrillos para interpretar el significado de ese pacto en relación con su propio programa.

Browder llegó a la conclusión de que el acuerdo de Teherán postulaba la coexistencia pacífica del capitalismo y el comunismo en el mundo de posguerra, y que, en consecuencia, era preciso abandonar la idea de una revolución socialista en los Estados Unidos. Por eso declaró: «Si J. P. Morgan⁽¹⁾ apoya esta coalición y se juega por ella, yo como comunista estoy dispuesto a estrecharle la mano y unirme con él para llevarla a buen término».

Ante una asamblea general realizada en Nueva York el 10 de enero de 1944, Browder propuso cambiar el nombre de Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica por el de Asociación Política Comunista Americana. Esta asociación trabajaría dentro del sistema político bipartidario, prestando apoyo alternativamente a candidatos republicanos o demócratas, sobre una base extrapartidaria, es decir, según el tema en discusión⁽²⁾.

Pero la interpretación que daba Browder al pacto de Teherán no era la misma de William Z. Foster, quien elevó una nota al comité nacional diciendo que no se podía confiar en que las grandes empresas cooperasen con los obreros. También atacó la idea de Browder de atenuar la marcha del

(1) Magnate norteamericano, algo así como un símbolo del capitalismo. (N. del T.)

(2) Desde su nacimiento en 1919 hasta ahora, el Partido Comunista ha cambiado diez veces de nombre.

socialismo en el mundo de posguerra. Muchos dirigentes comunistas del interior preguntaban si la «línea» Browder implicaba que el compromiso antihuelguista seguiría vigente en la posguerra.

Una vez más el F. B. I. notó signos de inusitada agitación entre los líderes del partido. Un confidente informó que se había convocado al secretariado político del comité nacional para discutir en reunión secretísima los acuerdos de Teherán y la carta de Foster. La asamblea sería una de las más importantes celebradas por el partido en varios años.

Los agentes federales no tardaron en averiguar que una mujer, que actuaba para el partido, había alquilado una sala en un «estudio» de Nueva York. La reunión estaba convocada para el 8 de febrero, de 10 de la mañana a 10 de la noche. La mujer no reveló a los administradores del local su condición de agente comunista.

El estudio era utilizado por cantantes y músicos, profesionales y aficionados, para efectuar grabaciones. Había varias salas provistas de equipo grabador, y dos sin él, destinadas a ensayos, que a veces se alquilaban a grupos polémicos o sociedades diversas. El partido había reservado una de estas salas de ensayo, la número 11.

Conocida la sede de la reunión, los agentes del F. B. I. no perdieron tiempo. Reservaron la sala 11 para el 8 de febrero de 8 a 10 de la mañana y contrataron el salón contiguo —el estudio 14— para todo el día. Si alguien hubiera curioseado en los registros de la administración, habría descubierto que el estudio 14 estaba reservado por distintos conjuntos musicales que actuarían ininterrumpidamente hasta la noche...

Dos horas antes de la asamblea comunista, agentes provistos de instrumentos musicales entraron en el estudio 11, y mientras algunos tocaban un *ragtime*, otros sacaban rápidamente los cortinados acústicos de la pared contigua al estudio 14 y empezaban a instalar un micrófono.

Hicieron un agujero lo bastante profundo como para que el micrófono quedase a ras de la pared, y pasaron el cable al estudio 14, donde otros agentes lo conectaron con un grabador. Después taparon la cara externa del micrófono con una fina gasa y disimularon los bordes del agujero con una mano de yeso. Cualquiera que mirase, pensaría que en alguna época pasó por allí un tubo de calefacción, que después lo sacaron y revocaron el agujero. Los cortinados volvieron a quedar como estaban: clavados al piso y al cielo raso.

Los «músicos» pusieron violín en bolsa y se marcharon.

A las 11 de la mañana empezó a llegar gente al estudio número 11. Estaban entre ellos Browder y Foster, Eugene Dennis, Sam Darcy, Abram Flaxer, Robert Minor, James

Ford, Ben Davis, Ella Reeve Bloor («Mamá» Bloor) y alrededor de veinte más cuyos nombres eran bien conocidos para todos aquellos que seguían con atención el movimiento comunista.

Los agentes apostados en el estudio 14 empezaron a escuchar la voz de Foster:

...no es necesario que yo me pare aquí a recordar lo mucho y espléndido que ha realizado, lo mucho que ha contribuido el camarada Browder a la vida del partido... Pero creo que el camarada Browder... también está expuesto a cometer un error...

Foster atacó vigorosamente la sugerencia de Browder en el sentido de que el comunismo y el capitalismo podían colaborar en el mundo de posguerra. Ridiculizó la idea de que el capitalismo pudiera ser «progresista» y la posibilidad de un entendimiento entre las clases sociales.

—No abriguemos la ilusión —dijo Foster— de que el pacto de Teherán ha suprimido la lucha de clases en los Estados Unidos.

Y terminó su larga argumentación acusando a Browder de pintar un cuadro de «capitalismo floreciente» gracias a la ayuda de la Unión Soviética.

—Sólo quiero decir —agregó— que a la larga la ayuda que el capitalismo mundial puede recibir de la Unión Soviética no cabe en el interior de un dedal...

Foster veía claramente el futuro. Sabía muy bien que la Unión Soviética no había renunciado ni renunciaría jamás a la lucha de clases. Pero entre las treinta y cinco personas presentes esa mañana en el estudio 11, sólo una —Darcy— apoyó a Foster.

La discusión en torno a los acuerdos de Teherán se prolongó el día entero. Entretanto, nuevos conjuntos «musicales» entraban y salían de la sala contigua. Y cada vez que se abría la puerta, se escuchaba la estridencia de una trompeta, el quejido de un saxofón o el tintineo latoso de un viejo piano. Todos los agentes de Nueva York capaces de tocar un instrumento musical estaban desempeñando su papel en el drama del estudio 14.

La asamblea puso de relieve la fisura existente en las altas esferas comunistas. La rivalidad entre Browder y Foster presagiaba una nueva pirueta del partido. El F. B. I. permaneció a la expectativa.

Al fin se impuso la «línea» Browder. El partido se disolvió en mayo de 1944, siendo reemplazado por la Asociación Política Comunista, que se declaró dispuesta a colaborar con el «capitalismo progresista». Y éste llegó a ser el frente más popular que hayan organizado los comunistas, puesto que

se comprometía públicamente a cooperar con la política interna e internacional del gobierno.

Pero, mientras los comunistas desempeñaban su nuevo papel de acercamiento al capitalismo y evitaban toda alusión a la lucha de clases, el espionaje soviético se mostraba más activo que nunca. Hombres como Klaus Fuchs, Harry Gold, Julius Rosenberg, y muchos otros infiltrados en las esferas gubernamentales de Washington entregaban secretos a los agentes soviéticos y los diplomáticos rusos. Estos últimos tenían entera libertad de movimientos en los Estados Unidos, pero los diplomáticos norteamericanos en Rusia no gozaban de reciprocidad.

El clima de amistad con Rusia, desarrollado durante la contienda, permitió a los comunistas actuar con una libertad que a veces frisaba en el arrogante desconocimiento de las leyes norteamericanas. El F. B. I. sabía que algunos diplomáticos rusos formaban parte del sistema de espionaje soviético. A veces eran auténticos matones, que llegaron a intervenir en secuestros de personas.

Uno de estos secuestros ocurrió en San Francisco en 1943. Al amanecer del 7 de octubre, una patrulla policial que recorría la zona portuaria observó a cuatro o cinco hombres que apaleaban a un cautivo y lo arrastraban al carguero ruso *Leonid Krasin*. El cautivo era Alexander S. Egorov, joven marinero ruso que había desertado en 1942, ocultándose en una granja de Oregón. El consulado soviético denunció la fuga y las autoridades del Servicio de Inmigración norteamericano localizaron al evadido. Egorov dijo que había escapado de la dictadura comunista, a la que acusaba de fusilar a su padre y encerrar a su madre en un campo de concentración. Las autoridades inmigratorias le permitieron salir de San Francisco en un buque noruego, pero cuando el buque entró en Oregón, Egorov escapó de nuevo.

Esta vez los mismos rusos le siguieron la pista. Lo encontraron en San Francisco y a pesar de su resistencia lo llevaron al carguero. El F. B. I. empezó a investigar, pero el Departamento de Estado dictaminó que el Servicio no tenía jurisdicción sobre el caso. Dos días después del secuestro de Egorov, un funcionario del Servicio de Inmigración subió a bordo del carguero. El joven tripulante declaró que uno de los hombres que lo habían secuestrado y apaleado era Yakov Lomakin, cónsul general soviético (1). El informe oficial de la entrevista realizada a bordo dice:

(1) En agosto de 1943, la señora Oksana Kosenkina se tiró del tercer piso del consulado soviético en Nueva York, en una desesperada tentativa de fuga. Se logró salvarla y sacarla del lugar, a pesar de las protestas de Lomakin, entonces cónsul general soviético en Nueva York. A raíz de este caso, el Departamento de Estado declaró persona no grata a Lomakin por su «conducta extremadamente incorrecta».

Egorov fue traído a la sala, bajo custodia, para ser interrogado. Vestía pantalones y camiseta. Tenía los hombros magullados y otras huellas de severos malos tratos en el resto del cuerpo. Indudablemente estaba asustado y temía mucho por su vida. Egorov declaró que dos días antes lo habían atacado cuatro o cinco hombres, uno de los cuales era Lomakin. Dijo que lo arrastraron a bordo del buque. Afirmó que no deseaba salir de los Estados Unidos y que temía por su vida. Suplicó a los funcionarios norteamericanos que lo sacaran del barco.

Pero Lomakin sostuvo que él, personalmente, acababa de inscribir a Egorov como «miembro de la tripulación». El carguero zarpó el día siguiente.

El informe concluía: «Egorov tuvo una crisis de nervios y rompió a llorar cuando los funcionarios norteamericanos abandonaron el barco... Es evidente que marcha a una muerte segura».

Transcurrieron casi cinco años antes de que el público se enterase del secuestro de Egorov. Este incidente y la desertión de otro marinero soviético en puerto norteamericano durante la guerra impulsaron a Hoover a escribir al procurador general Biddle, en noviembre de 1944, lo siguiente:

Creo que estos individuos que abandonan el servicio de la Unión Soviética por razones políticas son refugiados políticos de buena fe, y devolverlos a las autoridades soviéticas equivale a entregarlos a una muerte cierta. Por su condición de refugiados de buena fe, merecen por lo menos un refugio temporario en los Estados Unidos y la oportunidad de abandonar el país con destino al refugio permanente que elijan.

Pero, volviendo al comunismo norteamericano, la política de colaboración de Browder comenzó a debilitarse durante la Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco en 1945. Como se recordará, las delegaciones de los Estados Unidos y de los países comunistas tuvieron un serio choque al discutirse la admisión de nuevos miembros⁽¹⁾. Por aquella época, asimismo, el líder comunista francés Jacques Duclos, que acababa de realizar una visita a Moscú, escribió un artículo para un periódico comunista francés, en el que criticaba a Browder por introducir un criterio «revisionista» en el comunismo norteamericano. Duclos explicó a sus camaradas por qué Browder estaba equivocado al disolver el partido y reemplazarlo por la Asociación Política Comunista.

(1) La Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en San Francisco a partir del 25 de abril de 1945 dio origen al primer choque público de importancia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los temas básicos de controversia fueron la admisión de la delegación argentina y el rechazo de la delegación del Gobierno Provisional de Lublin que venía como representante de Polonia. Los dirigentes de la Asociación Política Comunista atacaron en seguida a la delegación norteamericana en la U. N.

Estas fueron sus palabras:

Earl Browder ha sacado de la conferencia de Teherán conclusiones erróneas, que en modo alguno responden a un análisis marxista de la situación. Earl Browder se ha hecho protagonista de un falso concepto sobre los caminos de la evolución social en general, y en primer término, de la evolución social de los Estados Unidos...

Y agregó:

Estamos presenciando una notoria revisión del marxismo por parte de Browder y sus secuaces; revisión que se expresa en el concepto de una paz social a largo plazo en los Estados Unidos y en la posibilidad de suprimir la lucha de clases en la posguerra llegando a una armonía entre el capital y el trabajo.

Los comunistas norteamericanos reconocieron en la voz de Duclos la voz de la autoridad. Los mismos que habían apoyado a Browder en la reunión del estudio 11, ahora se volvieron contra él votando su expulsión del cargo de secretario general. Foster asumió la conducción del partido. La Asociación Política Comunista fue hecha a un lado, y en el mes de julio de 1945 volvió a constituirse el Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica. La vieja maquinaria estaba nuevamente en funcionamiento.

El F. B. I., entretanto, seguía acumulando información reservada sobre las actividades comunistas. Y gracias a ello supo advertir que unos pocos miembros del partido, por simple acto de presencia en ciertas posiciones claves, eran capaces de influir en los actos de muchas personas. Un ejemplo de ello ocurrió en 1943, durante la convención nacional del C.I.O., celebrada en el Hotel Bellevue-Stratford, de Filadelfia.

Los agentes del F. B. I. descubrieron que el Partido Comunista había instalado su cuartel general en el Hotel St. James, donde los dirigentes partidarios locales estaban reunidos con un miembro del Comité Nacional para resolver la estrategia y las tácticas que iban a adoptar, y también para discutir las decisiones de la junta ejecutiva del C. I. O. Cuando el comité de resoluciones de la convención aceptó las medidas que se iban a someter a la aprobación de los delegados, los únicos borradores existentes fueron a parar al puesto de comando del Partido Comunista.

El miembro del comité nacional leyó las minutas, modificó la redacción de algunos pasajes y finalmente señaló el orden en que debían presentarse a la asamblea los proyectos de resolución, para obtener el efecto buscado por el partido. Y así alterados los borradores fueron a la imprenta.

El F. B. I. ha experimentado frecuentes ataques por vigilar las actividades comunistas, y también por realizar ciertas

«investigaciones de lealtad» (*loyalty checks*) a pedido de otras dependencias gubernamentales.

Cierta vez circuló en Washington el rumor de que el F. B. I. había sido «sorprendido» mientras investigaba a Edith B. Helm y Malvina Thompson, secretaria social y secretaria personal, respectivamente, de la señora Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin D. Roosevelt. Y se agregaba que la señora Roosevelt estaba poniendo en apuros al F. B. I.

La verdad era que William H. McReynolds, secretario de la comisión asesora del Consejo de Defensa Nacional, y asimismo secretario de la Casa Blanca, escribió el 11 de julio de 1940 una carta dirigida al procurador general pidiendo que se investigara la «lealtad» de varias personas incluidas en una lista adjunta. La carta de McReynolds decía:

El presidente y la comisión desean que se investigue cuidadosamente a cada una de estas personas, pero sobre todo a las de la primera parte de la lista, a fin de comprobar que justifican la confianza depositada en ellas...

Tres meses más tarde, el ayudante de McReynolds envió otra lista, pidiendo por nota que el F. B. I. «realizara una investigación». Uno de los nombres de la lista era Edith B. Helm. Puesto que la orden procedía de una dependencia de la Casa Blanca, se le dio cumplimiento.

Al filtrarse la noticia de la investigación, llovieron las críticas sobre el F. B. I. Hoover escribió al general de división Edwin M. Watson, secretario del presidente, explicando el origen de lo ocurrido, y envió una carta similar a la señora de Roosevelt. La señora de Roosevelt replicó para decir que le sorprendía que se investigara a la señora Helm, y que alguien había estado realizando averiguaciones sobre los asuntos privados de la señorita Thompson. «Me parece que esta clase de investigaciones recuerda demasiado los métodos de la Gestapo —decía la señora Roosevelt— y en mi opinión revela la ineficiencia de la persona que la ordenó».

Hoover, en respuesta a la señora de Roosevelt, declaró que el F. B. I. no había investigado a la señorita Thompson, y que tampoco era responsable por la inclusión de la señora Helm en la lista recibida de la Casa Blanca.

Admitió que investigar a la señora Helm «revelaba la ineficiencia de la persona que lo ordenó», pero dijo que la orden no había partido del F. B. I., y que la investigación se había realizado en forma rutinaria.

El episodio Helm no fue más que una tormenta en un vaso de agua, pero sirvió de anuncio a las dificultades y malos entendidos que iban a producirse cuando el gobierno investigara a sus empleados en la «guerra fría» que se avecinaba.

XXX. - EL DESPERTAR

El crimen tiene muchos rostros. Pero uno de los más odiosos es el de envenenar la confianza que un país deposita en la lealtad de sus propios ciudadanos. Y éste es el crimen que ha cometido el comunismo contra el pueblo de los Estados Unidos.

Hubo una época en que la fidelidad de cualquier norteamericano al destino de su país era algo que nadie ponía en tela de juicio. Pero entonces apareció el comunismo internacional y logró convencer a muchos de que debían lealtad, no a los Estados Unidos, sino a la Rusia Soviética.

Antes, se entendía por lealtad un sereno amor a la patria. Todo hombre lo llevaba en el fondo de su corazón, todo hombre se enorgullecía de los ideales de su país. El gobierno lo daba por descontado. Pero el comunismo sembró las semillas de la sospecha y la desconfianza. Los secuaces del comunismo, con su propia deslealtad, traducida en engaños, en actividades subversivas, en tentativas de espionaje, inyectaron en el torrente sanguíneo de la vida política norteamericana esas dudas que jamás debieron existir.

Hasta que el gobierno tuvo que hacer frente a la dura realidad. Y la realidad era que algunos funcionarios gubernamentales eran infieles. Había empleados a quienes no podían confiarse secretos de Estado. Entre los 2.000.000 de personas que trabajaban al servicio del gobierno, había una inmensa mayoría cuya lealtad e integridad estaban más allá de toda duda. Pero unos pocos traicionaban la fe de que eran depositarios. Y esos pocos sembraban en las mentes el sutil veneno de la desconfianza y la inquietud.

Y así fue como, por culpa de los pocos, el gobierno federal tuvo necesidad de escudriñar minuciosamente a todos. Y aunque en principio cada empleado público era tenido por inocente mientras no surgieran indicios en contrario, el solo hecho de que haya sido menester realizar tales investigaciones pone de manifiesto la enormidad del crimen comunista. Poco a poco se comprendió que la lealtad de un comunista era algo que no podía darse por descontado.

En los meses que siguieron a la terminación de la contienda, mientras la Rusia Soviética convertía naciones libres en esclavas, la «guerra fría» alcanzó contornos de sorda realidad. En noviembre de 1946, el presidente Harry S. Truman nombró una comisión provisional encargada de estudiar el pro-

blema de la lealtad de los empleados públicos y los recursos más adecuados para eliminar de la administración federal a los agentes desleales. Tanto dentro como fuera de la Administración existía el convencimiento general de que era preciso desarraigar a comunistas y afines de los cargos de confianza. Pero esto había que hacerlo, dentro de lo posible, sin perjudicar a terceros.

La Comisión Truman estudió lo que se había hecho antes para resolver el problema, y después informó:

Aunque tales tentativas para impedir que personas desleales obtuviesen o retuviesen empleos del Gobierno fueron bien intencionadas, resultaron ineficaces para fiscalizar actividades subversivas que se valen del subterfugio, la propaganda, la infiltración y el disimulo.

Más de siete años antes, el 2 de agosto de 1939, el Congreso había aprobado la ley Hatch que, con la enmienda del 19 de julio de 1940, estableció para todo empleado federal la prohibición de ser miembro de cualquier organización o partido político que persiguiera la destrucción de nuestra forma constitucional de gobierno. Dicha ley no preveía el enjuiciamiento, sino solamente la cesantía de los transgresores.

Tres días después de ser reformada la ley, la Casa Blanca trazó las normas básicas a que se ajustaría el F. B. I. para investigar la lealtad de los empleados públicos. El ayudante administrativo del presidente Roosevelt, William H. McReynolds, elevó al procurador general Jackson un memorándum donde señalaba que cualquier denuncia sobre deslealtad de un empleado debía presentarse al jefe de la dependencia en que el mismo trabajaba. Y el F. B. I. no emprendería investigación alguna a menos que el jefe de la dependencia lo solicitara. En realidad, el procedimiento delineado por McReynolds no difería del utilizado hasta entonces por el F. B. I. Significaba, en síntesis, que aun cuando el F. B. I. recibiera pruebas concluyentes de que se había violado la ley Hatch, no podía iniciar una investigación a menos que la solicitara un jefe de dependencia gubernamental.

Este criterio estuvo en vigor hasta octubre de 1941, cuando el procurador general Biddle informó a las distintas oficinas del gobierno que cada vez que el F. B. I. tuviera indicios de que había infringido la ley Hatch, iniciaría una investigación sin previa consulta a la dependencia interesada, a cuyo jefe, sin embargo, se harían conocer los resultados de las averiguaciones efectuadas, una vez concluido el procedimiento.

Dentro de los términos de la ley Hatch, no se indagó a empleado alguno a menos que existiera una denuncia con-

creta contra él. El Departamento de Justicia dictaminó que el Congreso, al aprobar la ley, no tuvo la intención de investigar a todos los empleados.

El 18 de mayo de 1942, el secretario de la Comisión Interdepartamental envió un memorándum a los más altos jefes de departamentos, dependencias y organismos autárquicos, donde decía entre otras cosas:

Es indudable que el Congreso considera no sólo conveniente sino imperativo que se elimine del servicio federal a comunistas y nazis (1).

Sin embargo, las investigaciones produjeron sólo unas pocas cesantías. Era evidente que el programa de vigilancia no estaba logrando los objetivos perseguidos (2).

Recordando este período, que va de 1940 a 1946, J. Edgar Hoover ha dicho:

En algunos casos el Servicio establecía que el empleado era miembro del Partido Comunista, y en otros casos él mismo admitía su afiliación. Sin embargo, como no siempre el Servicio podía probar la afiliación antes que la oficina empleadora dejase de interesarse en el caso, la mayoría de las veces no se tomaba medida administrativa alguna.

La Comisión Truman, creada para investigar la lealtad de los empleados públicos, recomendó en su primer informe que cada departamento y cada dependencia se hiciera responsable de la vigilancia de sus propios agentes. Después de estudiar el informe, el F. B. I. sugirió que se crease una Junta de Reconsideración (*Loyalty Review Board*), que actuaría como tribunal de apelación con la facultad de confirmar o derogar las medidas tomadas contra los empleados por los jefes de departamentos o dependencias; y que asimismo impartiría instrucciones y daría una orientación general al programa.

El 21 de marzo de 1947, el presidente Truman dictó el decreto 9835, creando el llamado Programa de Lealtad de Empleados Federales (*Federal Employees Loyalty Program*). La tarea de investigar a los empleados se encomendó, en

(1) La primera lista de organizaciones declaradas subversivas por el Departamento de Justicia fue despachada a todas las delegaciones regionales del F. B. I. en una circular fechada el 15 de septiembre de 1941. Las ocho organizaciones de la lista original eran las siguientes: Partido Comunista de los Estados Unidos; Bund Germanoamericano; Movilización Americana pro Paz; Comité de Acción Democrática de Washington; Federación pro Libertades Constitucionales de Michigan; Federación Nacional pro Libertades Constitucionales; Congreso de la Juventud Americana; Congreso Nacional de la Raza Negra.

(2) Desde 1940 hasta el 21 de marzo de 1947, fecha en que entró en vigencia el Programa de Lealtad, se estudiaron 6.296 casos incluidos en la ley Hatch. Las resoluciones fueron las siguientes: cesantías, 114; otras sanciones, 78; renuncias producidas durante las investigaciones, 46; otras bajas, 1963; sin sanción, 2.818; denuncias desvirtuadas, 1.144; pendientes, 90. Cuarenta y tres de estos casos fueron posteriormente resueltos dentro de los términos del Programa de Lealtad.

principio, a la Comisión de Servicio Civil, salvo en los casos de dependencias que tuvieran sus propios organismos de investigación. Se creó una Junta de Reconsideración y se estableció que los organismos investigadores podían negarse a revelar el nombre de sus informantes.

El decreto presidencial decía:

La norma básica para negar empleo, o para separar a un empleado de su cargo en un departamento o dependencia del poder ejecutivo por motivos de lealtad, es que, a todas luces, exista fundamento razonable para creer que la persona implicada es desleal al gobierno de los Estados Unidos.

En 1951, por decreto 10.241, se enmendó el texto del decreto 9.835, que donde decía: «exista fundamento razonable para creer que la persona implicada es desleal», dice ahora: «exista duda razonable con respecto a su lealtad».

Para configurar el cargo de deslealtad, el decreto del presidente, que sólo es aplicable a la rama ejecutiva del gobierno, incluía esta lista de actividades prohibidas:

1. Sabotaje, espionaje o complicidad con espías o elementos subversivos.
2. Traición o sedición.
3. Predicar la revolución, la fuerza o la violencia para alterar la forma constitucional de gobierno.
4. Revelación intencional y no autorizada de documentos o informes de carácter confidencial en circunstancias que indiquen deslealtad.
5. Servir los intereses de otros gobiernos con preferencia a los intereses de los Estados Unidos.
6. Ser miembro, afiliado o colaborador de cualquier organización nacional o extranjera calificada por el procurador general como totalitaria, fascista, comunista, subversiva o partidaria de derrocar al gobierno por la fuerza.

Este fue el comienzo del primer esfuerzo en gran escala realizado por el gobierno federal, dentro de la propia administración, para protegerse contra las actividades subversivas. Pero a medida que pasaban los meses arraigó en mucha gente la creencia de que el F. B. I. estaba investigando a cada empleado y a cada postulante; que intervenía los teléfonos de los funcionarios y vigilaba a millares de empleados.

La verdad era otra. El F. B. I. no tenía nada que ver en la gran mayoría de las investigaciones. Su función se limitaba a buscar en sus archivos antecedentes que indicaran deslealtad por parte de un empleado... y siempre que ese empleado figurara en los archivos⁽¹⁾. Si no aparecía en el archivo

(1) Durante la posguerra el F. B. I. ha debido investigar a los aspirantes a ocupar cargos en las siguientes dependencias: Comisión de Energía Atómica; Ofi-

información desfavorable, se estampaba en el expediente un sello que decía: «No registra antecedentes de deslealtad en los archivos del F. B. I.», y se devolvía a la Comisión de Servicio Civil o a la oficina empleadora⁽¹⁾.

Para la provisión de cargos públicos, el decreto presidencial ordenaba que los datos personales que el aspirante hacía constar en su solicitud de ingreso fuesen verificados en los archivos del F. B. I., la Comisión de Servicio Civil, las Fuerzas Armadas, otros órganos de investigación e inteligencia del gobierno, la Comisión de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes y la policía local; también eran consultados los colegios o universidad a que hubiera asistido el recurrente, sus ex empleadores y las personas que él mismo mencionaba como «referencias». Finalmente, se consultaba el fichero dactiloscópico del F. B. I.

La responsabilidad del F. B. I. terminaba al localizar en sus archivos los antecedentes del postulante, salvo que de alguno de los recaudos arriba citados surgiera presunción de deslealtad. En ese caso, el F. B. I. realizaba una investigación a fondo y elevaba a las juntas de lealtad (*loyalty boards*) los resultados obtenidos.

Para que se dispusiera semejante investigación, tenía que ocurrir una de las siguientes cosas: 1) que el F. B. I. encontrara en sus archivos pruebas de deslealtad del aspirante; 2) que se presentara contra él una denuncia por deslealtad; 3) que la Comisión de Servicio Civil u otras dependencias gubernamentales solicitaran dicha medida, y 4) que en el transcurso de otras investigaciones surgieran datos comprometedores.

La función del F. B. I. consistía en reunir pruebas, en la forma más completa y exacta posible, para elevarlas a los organismos encargados de resolver. El informe del F. B. I. jamás incluía recomendaciones a favor o en contra de un empleado o postulante, por la simple razón de que no se puede ser al mismo tiempo investigador, juez y jurado.

A menudo se oye decir que alguien ha sido «absuelto de sospecha por el F. B. I.». Esto, naturalmente, no es cierto,

cina de Defensa Civil del Distrito de Columbia; Programas de Ayuda Extranjera; Junta Nacional de Recursos de Seguridad; Voz de América, y otras. El 23 de agosto de 1951, por recomendación del F. B. I., el procurador general solicitó al Congreso que eximiera al F. B. I. de investigar a dichos postulantes, y el Congreso sancionó la ley pública 298 del 82º período de sesiones, transfiriendo a la Comisión de Servicio Civil el grueso de tales investigaciones. Esa ley entró a regir el 2 de octubre de 1952. Sin embargo, el F. B. I. efectúa todavía investigaciones relativas a cargos muy delicados de la Comisión de Energía Atómica, y otros, como jueces federales, fiscales nacionales, empleados del Departamento de Justicia, asesores presidenciales, etc., siempre que lo pida autoridad superior del ejecutivo gubernamental.

(1) El examen de postulantes se realiza por las divisiones de investigación de distintas dependencias gubernamentales, como la Comisión de Servicio Civil, Inteligencia Naval, Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, Departamento de Estado, C. I. A. G-2, Tesoro, y Departamento de Correos.

porque el F. B. I. no tiene ni pretende semejante facultades. El F. B. I. ni siquiera «formula cargos» contra nadie. Sus agentes se limitan a establecer los hechos que prueben o desvirtúan una acusación de deslealtad.

El «programa de lealtad» de Truman fue vigorosamente criticado, desde el principio, por grupos comunistas y de extrema izquierda. Uno de los primeros ataques provino de los Empleados Públicos Unidos de América (*United Public Workers of America*), organización sindical afiliada al C. I. O.⁽¹⁾, que insistían en que toda la campaña no era más que una «cacería de brujas». Y como en casos anteriores, hubo asambleas, petitorios, colectas de fondos y persistentes esfuerzos por desacreditar conjuntamente el programa de Truman y al F. B. I. «¿Quién investiga al hombre que lo investiga a usted?», rezaba el título de un panfleto. Otro decía: «Once millones de dólares para que espiones y entrometidos fastidien a los empleados del gobierno». Se acusaba al F. B. I. de dirigir «una campaña para destruir los sindicatos, so pretexto de investigar la lealtad de los empleados», porque los «formularios de lealtad» pedían a empleados y postulantes que mencionaran las organizaciones a que pertenecían.

El presidente de la U. P. W. A., Abram Flaxer, declaró en una conferencia de prensa: «Cuando se concede al F. B. I. tanta libertad para conseguir las listas de afiliados a los sindicatos, no es que estemos en peligro de tener un Control de Estado; es que ya lo tenemos».

Después que el presidente de la Junta de Reconsideración, Seth Richardson, dio un comunicado señalando las normas y procedimientos a que debía ajustarse el examen de los distintos casos, la U. P. W. A., entregó una declaración a la prensa, donde decía:

Un cuidadoso estudio de las 58 páginas de instrucciones y reglamentaciones pone de relieve el hecho escandaloso de que la junta tiende a servir de pantalla para la adopción de procedimientos típicos de las policías totalitarias. Es evidente que la junta ha ordenado una serie de falsas audiencias y trámites con el propósito de ocultar la verdadera situación; y que un organismo policial, el Servicio Federal de Investigación, tiene en estos momentos autoridad única y exclusiva para pronunciarse sobre la lealtad de los empleados del Gobierno...

Hubo otras manifestaciones similares. Una mujer, formalmente acusada de pertenecer al Partido Comunista y desarrollar actividades comunistas se negó a comparecer ante una junta de lealtad. Y escribió lo siguiente:

(1) El 26 de febrero de 1950 el C. I. O. expulsó de su seno al U. P. W. A., considerando que sus reglamentos y actividades «...apuntan permanentemente a la realización del programa y de los propósitos del Partido Comunista...».

Me niego a continuar en un empleo donde se me hacen estos cargos... Sé que dentro de los términos del decreto presidencial una persona es culpable mientras no pueda demostrar ante la junta que es inocente. No conozco disposición alguna de la Constitución de los Estados Unidos que permita semejante procedimiento.

Una y otra vez la campaña fue calificada por ciertos sectores como un deliberado ataque contra las libertades civiles. Y había también hombres sinceros, a quienes les inquietaba que un programa gubernamental analizara la profundidad del sentimiento patriótico, o planteara siquiera el problema de la lealtad de una persona, a menos que fuera sorprendida en un acto de deslealtad.

Sobre este punto, Hoover opinó lo siguiente:

Un empleo público es más un privilegio que un derecho. Por no comprenderlo, son muchos los que dicen tonterías sobre el programa. El extinto presidente de la Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes, lo expresó con mucha claridad en 1892, cuando era miembro del alto tribunal de Massachusetts. Un policía de New Bedford, exonerado por realizar actividades políticas prohibidas, solicitaba su reincorporación. Al rechazar la solicitud, el juez Holmes observó que «el peticionante puede tener el derecho constitucional de hablar de política, pero no tiene el derecho constitucional de ser un policía».

Así comenzó el gran debate sobre el tema «Comunistas en el gobierno», una de las más encarnizadas controversias políticas que registra la historia del país. Pero el tumulto que armaron las derechas, las izquierdas y el centro no modificó el hecho básico de que existía en el país un factor de perturbación; podía discutirse su profundidad, pero ningún hombre sincero y responsable, funcionario o no del gobierno, podía negar su existencia y la necesidad de hacer algo para ponerle remedio.

En esta atmósfera estalló el gran escándalo del caso Hiss, que produjo una conmoción jamás igualada en los Estados Unidos. En agosto de 1948 Whittaker Chambers, hombre regordete y desaliñado, de gruesas mandíbulas y pesados párpados, se presentó ante la Comisión de Actividades Anti-americanas de la Cámara de Representantes y confesó que había sido miembro del Partido Comunista desde 1924 a 1937. Dijo que había pertenecido también al sistema de espionaje soviético, traficando con documentos robados al gobierno de los Estados Unidos. Y agregó que uno de sus colaboradores en ese trabajo era Alger Hiss, joven y brillante diplomático que antes de la guerra, y en el transcurso de la misma, estuvo al servicio del Departamento de Estado.

Si hubiera sido una película, todos habrían criticado el

reparto. El acusador, en la pantalla cinematográfica, debió ser el joven y atractivo intelectual que se sentaba a la mesa de los grandes del mundo; el acusado, aquel furtivo y desconocido Chambers. Pero aquí parecía haber intervenido la mano de Hitchcock...

Como en el mejor de los dramas, el caso Hiss-Chambers fue descubriendo sorpresa tras sorpresa. Los periódicos registraron las negativas de Hiss; luego, su careo con Chambers; después, su afirmación de que sólo conocía a Chambers bajo el nombre de George Crosley, escritor de segunda categoría; la demanda por calumnias e injurias iniciada por Hiss contra Chambers, por llamarlo públicamente comunista; la indemnización de 75.000 dólares que exigía Hiss. A lo que Chambers contestaba exhibiendo los documentos del Departamento de Estado que le había entregado Hiss para darlos al coronel Boris Bykov, agente soviético; la admisión, por parte de Hiss, de que cuatro notas que figuraban entre esos documentos estaban escritas de su puño y letra; y por último, las pruebas decisivas aportadas por Chambers: dos bandas de «microfilm» con fotos de documentos originales del Departamento de Estado y tres rollos de película sin revelar.

El papel del F. B. I. en esta controversia fue investigar la exactitud de los cargos formulados por Chambers y de las negativas de Hiss. En total, 263 agentes adscriptos a cuarenta y cinco de las cincuenta y dos delegaciones regionales del F. B. I. participaron de la investigación en algún momento u otro. He aquí un resumen de las pruebas obtenidas contra Hiss:

Agentes del F. B. I. demostraron que algunos documentos de la colección Chambers habían sido escritos con una máquina Woodstock, que perteneció a los Hiss en 1936 y 1937. En 1937 la señora Hiss había utilizado esa máquina para escribir un informe destinado a la Bryn Mawr Alumnae Association y una carta dirigida a la Universidad de Maryland. En la Landon School, de Bethesda (Maryland), los agentes descubrieron otra carta fechada en 1936 y firmada por Hiss, que había sido dactilografiada en la misma máquina.

Los agentes trataron de encontrar algún testigo que hubiera visto juntos a Chambers y Hiss. La búsqueda parecía destinada al fracaso, hasta que la esposa de Chambers recordó que en cierta oportunidad había pintado un retrato de una mucama llamada Edith Murray, que tal vez recordara las entrevistas de Hiss y Chambers. Utilizando reproducciones fotográficas del retrato, los agentes localizaron a Edith Murray, que identificó a Hiss y su esposa y recordó que los había visto en casa de los Chambers, en Baltimore.

Chambers declaró que Bykov le había entregado alrededor de 1.000 dólares con el fin de comprar regalos para sus cuatro me-

jores informantes: Hiss, A. George Silverman, Harry Dexter White y Henry Julian Wadleigh. Chambers agregó que hizo enviar a Hiss una alfombra de Bokhara. Hiss admitió haber recibido el presente, pero dijo que la alfombra le fue regalada al propio Chambers por un amigo de éste, y que Chambers se la dio a él por no saber qué hacer con ella. Chambers afirmó que a fines de 1937 había pedido a Hiss un préstamo de 400 dólares, que necesitaba para comprar un nuevo automóvil. Dijo que Hiss le prestó ese dinero. Hiss lo negó. Los agentes del F. B. I. descubrieron que el 19 de noviembre de 1937 Hiss había retirado de su cuenta bancaria la suma de 400 dólares. También averiguaron que el 23 de noviembre Esther Chambers (esposa de Whittaker Chambers) permutó un Ford sedán modelo 1934 por otro Ford de modelo más reciente, pagando la cantidad adicional de 486,75 dólares en efectivo. Chambers dijo que, en virtud de un arreglo con Hiss, la esposa de éste se comprometió a pasar a máquina copias o resúmenes de los documentos que Hiss llevaba a su casa. La señora Hiss afirmó que era mala dactilógrafa. Los investigadores del F. B. I. probaron que en 1927 había aprobado en la Universidad de Columbia exámenes de dactilografía e idioma inglés.

Chambers dijo que los documentos que le entregaba Hiss eran fotografiados por un fotógrafo del que sólo recordaba su nombre de pila, «Felix». Recordaba, en cambio, que Felix solía vivir en Callow Avenue, Baltimore, y que en una época trabajó en un negocio de artículos eléctricos. El F. B. I. probó que en 1937 vivía en Callow Avenue un tal Felix Inslerman, que trabajaba en una casa de electricidad. Lo encontraron en Cambridge, Massachusetts, y Chambers lo reconoció. Los investigadores del F. B. I. descubrieron que Inslerman, antes de radicarse en Baltimore, se había afiliado al Partido Comunista. Inslerman negó conocer a Chambers, pero admitió tener una cámara Leica que, según dijo, le regalaron para su cumpleaños en 1937. El Laboratorio del F. B. I. estableció que ciertas marcas microscópicas de las películas entregadas por Chambers eran idénticas a las producidas por el cierre de la Leica de Inslerman. Es decir, que los «microfilms» suministrados por Chambers habían sido expuestos por la cámara de Inslerman (1).

Las revelaciones de Chambers y de otros ex comunistas produjeron en los Estados Unidos la misma sensación que causó en Canadá, al concluir la segunda guerra mundial, la noticia de que hombres de ciencia y funcionarios gubernamentales en quienes se depositaba plena confianza estaban

(1) El 15 de diciembre de 1948, un gran jurado federal reunido en Nueva York dictó orden de encausamiento contra Alger Hiss, acusado de perjurio. En el primer proceso, que se inició en mayo de 1949, el jurado no llegó a un acuerdo; pero en el segundo, realizado en noviembre de 1949, Hiss fue declarado culpable y condenado a cinco años. Salió en libertad en noviembre de 1954.

Whittaker Chambers, al relatar el caso Hiss en su libro *El Testigo* (Witness, Random House, 1952), dice: «Las fuerzas que en definitiva ganaron para la nación la causa Hiss fueron: Thomas Murphy, Richard Nixon, los hombres del F. B. I. junto con los dos jurados de acusación, y Tom Donegan, y los dos jurados del proceso». Thomas Murphy es actualmente juez federal de distrito. Richard Nixon es vicepresidente de los Estados Unidos.

entregando secretos del gobierno de Canadá a los diplomáticos soviéticos de la embajada rusa en Ottawa.

Pero, junto con el escándalo político provocado por estas revelaciones, se sucedieron los ataques contra el F. B. I., cuya labor se tildaba de misteriosa y siniestra. Gran parte de esas críticas iban dirigidas contra el empleo de informantes confidenciales y contra la forma en que el F. B. I. organizaba sus archivos.

El presidente Truman, al dictar el decreto 9.835 que ponía en vigencia el «Programa de Lealtad», consideró necesario proteger el anonimato de los confidentes⁽¹⁾. Hoover informó a la Junta de Reconsideración —encargada de establecer las normas operativas del «Programa de Lealtad»— que el F. B. I. acostumbraba mantener en reserva la identidad de sus informantes. Y agregó que, en sus relaciones con los testigos, la junta debería optar por una entre dos alternativas opuestas. Más tarde, Hoover recordaría su posición en estos términos:

Comparecí ante la Junta de Reconsideración del Programa de Lealtad (*Loyalty Review Board*) y esbocé los problemas que se planteaban. Manifesté que una de las normas básicas del F. B. I. era no formular cargos contra empleados del gobierno. Nuestro papel se limita a establecer los hechos. Declaré que el F. B. I. es un organismo investigador que no hace las veces de fiscal, juez ni jurado. Informé a la junta que nuestros agentes se presentarían para dar testimonio de hechos de los que tuviesen conocimiento directo, y que haríamos una lista de los nombres y señas de aquellas personas que no prefiriesen reservar su identidad. Expliqué que, cuando un agente del F. B. I. interroga a una persona que se presta a declarar dentro de una estricta reserva, es necesario respetar esa reserva. Asimismo señalé que tenemos fuentes de información altamente confidenciales y que, si quedaran en descubierto, ello no sólo privaría al gobierno de informes valiosos para nuestra seguridad interna, sino que podría acarrear perjuicios materiales a los informantes.

Sugerí, como alternativa, que podíamos explicar nuestra misión a cada persona, y aclararle que podía ser llamada a declarar en público como testigo, y que en ese caso nosotros sólo elevaríamos

(1) Entre el 21 de marzo de 1947 y el 27 de mayo de 1953 el F. B. I. cooperó con el «Programa de Lealtad» revisando 4.660.122 fichas dactiloscópicas, de las cuales un 8,5 % correspondían a individuos que registraban antecedentes en los archivos de identificación; se tramitaron 4.756.705 formularios del «Programa de Lealtad», de los cuales un 99,4 % fueron devueltos con el sello «No registra antecedentes de deslealtad»; se realizaron 26.236 investigaciones completas, y otras 26.833 diligencias preliminares destinadas a comprobar que informes recibidos por el F. B. I. se referían a empleados del gobierno y no a otras personas con el mismo nombre. La Comisión de Servicio Civil anunció que las 26.236 investigaciones completas tuvieron el siguiente resultado: 560 personas quedaron cesantes, o se les negó empleo del gobierno; 6.828 renunciaron o retiraron su solicitud de ingreso; 569 casos fueron examinados por el Ejército dentro de los términos de la Legislación de Seguridad (*Security Legislation*); 16.503 personas quedaron libres de sospecha por haber recaído resolución favorable en sus respectivos casos; y 1.776 fueron procesadas dentro de los términos del Programa de Seguridad para Empleados Federales.

aquella información que nos fuera suministrada sin reserva alguna sobre la identidad del informante. Informé a la junta que a ella tocaba decidir esta cuestión de procedimiento.

Los informantes voluntarios del F. B. I. incluían hombres de negocios, médicos, abogados, obreros, amas de casa, agentes de venta, y en general cualquier individuo que conociera o estuviera vinculado a la persona a quien se investigaba. En suma, los agentes hablaban con cualquiera que pudiera contribuir a establecer la veracidad o falsedad de una acusación. El adiestramiento de los agentes del F. B. I. incluía clases sobre procedimientos de interrogatorio. Se prevenía a cada agente que su deber era conseguir informes sin introducir en sus preguntas el menor matiz acusatorio, eludiendo hasta la simple sugerencia de que existiera algún cargo contra nadie. El agente que no procedía de este modo violaba expresas instrucciones de Hoover.

Si en el transcurso de una investigación alguien preguntaba: «¿Por qué investigan ustedes a esta persona?», el agente debía responder: «Porque se ha puesto en práctica un «Programa de Lealtad», por decreto del Poder Ejecutivo, que ordena investigar a los empleados del gobierno y a los aspirantes a cargos públicos. El señor X. es un empleado del gobierno (o un postulante). Se lo investiga dentro de los términos de ese programa».

Como algunos insinuaran que en el transcurso de estas investigaciones correspondientes al «Programa de Lealtad» el F. B. I. interfería los aparatos telefónicos, vigilaba la correspondencia y fiscalizaba las actividades de todos los empleados gubernamentales, Hoover decidió salir al paso de tales acusaciones, fijando con estas palabras las normas a que se ajustaba el Servicio:

Por regla general, no se utilizaron durante estas investigaciones recursos técnicos (es decir, interceptaciones telefónicas). Asimismo se descartaron otras técnicas confidenciales utilizadas en casos de espionaje y de seguridad interna, pero los informes obtenidos de otro tipo de investigaciones donde realmente se usaron tales técnicas fueron incorporados, siempre que resultaran pertinentes, a los sumarios instruidos.

Un hombre de negocios, antes de tomar un empleado, acude a todas las posibles fuentes de información para establecer su honestidad y fidelidad. Lo mismo hace el F. B. I. cuando investiga los antecedentes de lealtad de los empleados públicos y de los aspirantes a serlo.

A cada informante se le preguntaba si estaba dispuesto a firmar una declaración y comparecer como testigo ante una junta de lealtad. En caso afirmativo, su nombre y sus señas

figuraban en el informe elevado por el F. B. I. Pero el Servicio protegía las confidencias de quienes lo solicitaban, y en tales casos se reemplazaba el nombre por un símbolo convencional —por ejemplo «T-199»—, ya que el decreto dictado por Truman señalaba específicamente que «... el organismo investigador puede negarse a revelar los nombres de informantes confidenciales». Por otra parte, no se privaba a la Junta de Lealtad de un elemento de juicio sobre la buena fe de la información obtenida. Una fuente confidencial era calificada como «fidedigna», o bien como «fuente que ha suministrado anteriormente información fidedigna», o bien como «fuente cuya veracidad se ignora», llegándose en caso necesario a describirla y explicando si esa persona gozaba o no de buen nombre en el medio donde actuaba.

Si aparecía algún motivo para poner en tela de juicio la buena fe de un informante⁽¹⁾, el F. B. I. dejaba de cultivarlo, introducía todas las correcciones necesarias en la información previa suministrada por él y comunicaba el caso a los organismos interesados, para que pudiesen en caso necesario reparar cualquier perjuicio cometido. También se informaba a esos organismos en qué momento cesaba la necesidad de mantener el anonimato de un informante.

A pesar de todos los recaudos y precauciones, a veces se cometían errores. Véase, por ejemplo, el caso de A. B., que aspiraba a un puesto en la emisora «Voz de América». Un informante denunció que A. B. y miembros de su familia eran afiliados al Partido Comunista. Agregó que había visto a A. B. en varias sesiones secretas del partido, y que tenía un escritorio a su disposición en el comité central del mismo.

A. B. negó las imputaciones. El F. B. I. descubrió que no era A. B. quien realizaba actividades comunistas, sino su hermano. El notable parecido de familia motivó que el informante lo confundiera. El F. B. I. notificó entonces a los organismos interesados que la acusación original era infundada, y la Junta de Reconsideración calificó a A. B. como «apto en lo que concierne a su lealtad» (*eligible on loyalty*).

(1) Quizá el ataque más violento contra el sistema de informantes nació del episodio en que intervino Harvey M. Matusow, ex miembro del Partido Comunista que suministró informes al F. B. I. desde junio hasta diciembre de 1950, fecha en que se dejó de tratarlo. Más tarde Matusow declaró ante varias comisiones del Congreso y fue testigo por la acusación en varios procesos judiciales. En enero de 1955 anunció públicamente que había dado falso testimonio en dos juicios contra dirigentes comunistas y en varias audiencias de las comisiones parlamentarias. La Subcomisión de Seguridad Interna del Senado, en un informe sobre el caso Matusow, reveló que el 90 por ciento de las personas a quienes Matusow, en sus informes al Departamento de Justicia, identificó como comunistas, ya estaban catalogadas como tales conforme a otros testimonios; y que el Departamento no disponía de información alguna que desvirtuara la identificación del 10 por ciento restante.

Habiendo de este episodio, el procurador general Herbert Brownell (h.) declaró: «El caso Matusow es único. Forma parte de una premeditada campaña para desacreditar a los testigos del gobierno, el programa de seguridad y últimamente, nuestro sistema de justicia».

El gobierno de Eisenhower, como el de Truman, aprobó la utilización de fuentes confidenciales y la norma de proteger el anonimato de los informantes. En una directiva presidencial dictada en 1948, dijo Truman:

La más eficiente y justa administración del Programa de Lealtad de Empleados exige que los informes, constancias y archivos vinculados al programa se mantengan en estricto secreto. Esto es necesario, en interés de nuestra seguridad y bienestar nacionales, para preservar el carácter confidencial de la información suministrada...

De todas las controversias surgidas en torno al F. B. I., ninguna tan grave como la que provocó la acusación de espionaje formulada por el gobierno, en 1949, contra Judith Coplon⁽¹⁾.

Durante veinticinco años, Hoover había custodiado celosamente la inviolabilidad de los archivos del F. B. I., para proteger no sólo a los informantes, sino también a personas inocentes a quienes podía perjudicar la divulgación del conjunto de informes no evaluados, denuncias e insinuaciones que se acumulan en el curso de una investigación o que se reciben por medio de cartas no solicitadas o llamadas telefónicas.

Pero, en el caso Coplon, el procurador general Tom C. Clark, revocando órdenes de Hoover, permitió que los fiscales del ministerio público pusieran en evidencia documentos extraídos de los archivos «inexpurgados» del F. B. I., a fin de cumplir con un mandato judicial dictado por el juez federal Albert L. Reeves. De los datos así expuestos, sólo unos pocos eran relevantes para la acusación fiscal. Los demás —la mayor parte— habrían sido descartados en cualquier procedimiento normal. Pero lo que ocurrió fue que se dio preemi-

(1) El 4 de enero de 1949 se inició una investigación completa por motivos de «lealtad» (*a full field loyalty investigation*) en torno a Judith Coplon. El 16 de enero de 1949 la misma se convirtió en una «investigación de espionaje». El motivo fue que agentes del F. B. I. observaron una entrevista clandestina entre dicha empleada del Departamento de Justicia y Valentín A. Gubitchev, agregado a la delegación soviética ante las Naciones Unidas. A pesar de las «tácticas evasivas» de ambos y de los esfuerzos que realizaron para no ser vigilados, el F. B. I. pudo registrar otro encuentro clandestino celebrado el 4 de marzo de 1949, de 19.57 a 21.36. Ambos fueron arrestados por agentes del F. B. I. que obedecían órdenes del procurador general Tom C. Clark. Se dictó orden de encausamiento contra ambos en Nueva York; la Coplon también fue encausada en Washington bajo acusación de espionaje. Las cortes federales de ambos sitios la condenaron. Gubitchev regresó a Rusia.

La condena dictada por el tribunal de Nueva York fue revocada por los siguientes motivos: el F. B. I. arrestó a la Coplon sin orden judicial de captura y sin que mediase «probabilidad de fuga»; el juez de la causa se equivocó al no dar a la defensa acceso a todas las constancias procedentes de comunicaciones interceptadas; asimismo, negó a la defensa oportunidad de requerir informes que permitiesen establecer si el motivo de la denuncia original era una interceptación telefónica. El Congreso reformó inmediatamente las normas legales que hacían al caso, confiriendo autoridad al F. B. I. para practicar arrestos en situaciones semejantes que se presentaran en el futuro. En la causa celebrada en el Distrito de Columbia, la Cámara de Apelaciones dejó en suspenso la condena mientras se realizaba una audiencia para determinar si las conversaciones entre la Coplon y su abogado fueron interceptadas, lo que daría origen a un nuevo juicio.

nencia justamente a las trivialidades, y los archivos del F. B. I. quedaron en ridículo ante la opinión pública, convertidos en un acumulamiento de pequeños chismes.

El jefe de redacción del *Washington Post*, J. R. Wiggins, escribió más tarde lo siguiente:

El Servicio Federal de Investigación empieza a recuperarse de la mayor catástrofe jurídica experimentada en 25 años...

La orden judicial que sacó esos documentos del archivo infligió al F. B. I. un triple golpe:

1) Puso en descubierto a informantes secretos, anulándolos como tales y en algunos casos exponiéndolos, probablemente, a gravísimos peligros.

2) Dañó la reputación de muchas personas a quienes sólo se mencionaba incidentalmente en constancias incompletas y no evaluadas.

3) Provocó la desconfianza de los informantes que hasta ahora se sentían protegidos por la reserva del Servicio.

Y lo que resulta más extraño es que se ataca y critica al F. B. I. por las revelaciones producidas en el caso Coplon, cuando es evidente que hizo todo lo posible para evitarlas...

En circular dirigida a sus ayudantes ejecutivos y a todos los jefes de distritos, Hoover explicó lo ocurrido:

Cuando se planteó el problema de introducir en la causa judicial los informes del Servicio, no me opuse en absoluto a que el tribunal o la defensa tomaran conocimiento de todos los hechos relevantes... Había ciertos informes que podían presentarse como pruebas sin comprometer fuentes de información, ni perjudicar otras investigaciones, ni fastidiar a personas inocentes. Estábamos dispuestos a ceder esos informes, en caso necesario. En cambio, me opuse vigorosamente a la divulgación de otras constancias que revelarían la identidad de informantes confidenciales, y que incluyendo denuncias y datos no corroborados, podían perjudicar a terceros. Recomendé al procurador general que buscara la anulación del proceso, o una citación por desacato, antes de producir esos informes, con el consiguiente y devastador perjuicio para el F. B. I., y con la divulgación de hechos no corroborados, existentes en los archivos, que afectarían a terceros.

Cuando me enteré de que los informes ya estaban en el tribunal, exhibidos como pruebas, era tarde. Los documentos fueron seleccionados por el Departamento de Justicia, y no por el Servicio...

El episodio Coplon fue un factor decisivo de malas interpretaciones sobre la forma en que procede el F. B. I. para organizar su archivo «en bruto» (*raw files*), de donde salen los informes redondeados y terminados.

Un expediente puede iniciarse por muchas causas: porque alguien formula una denuncia o porque un informante confidencial suministra datos que indican deslealtad de un funcio-

nario, o violación de una ley federal⁽¹⁾. Esta información preliminar puede estar llena de errores: errores de identificación, sospechas infundadas, chismes escandalosos y hasta cargos de deslealtad basados en pruebas documentales que luego resultan no ser tales.

Luego viene la etapa de investigación. Agentes destacados en una docena de ciudades interrogan a testigos y elevan voluminosos informes. Se acude a fuentes confidenciales en busca de noticias. Se compaginan los documentos reunidos.

En esta etapa, el expediente «en bruto» puede contener información falsa, trivial y hasta malintencionada. También describe detalles administrativos de la investigación, técnicas utilizadas e identidad de los informantes. Es un expediente incompleto, que si cae en manos ajenas puede perjudicar a un inocente y hasta poner en peligro la vida de un informante. Por eso, el F. B. I. nunca ha permitido que gente de afuera tuviese acceso a dicha documentación⁽²⁾.

Los agentes dejan constancia, en sus informes, de los resultados que van obteniendo. Es decir, señalan los hechos que confirman o desvirtúan los cargos formulados, y comunican esos hechos a las dependencias gubernamentales interesadas.

Estos informes constituyen, pues, el producto refinado y expurgado que se extrae del expediente «en bruto»; encierran únicamente aquellos elementos de juicio que son relevantes para dar intervención al ministerio público, o que pueden servir en la vista de causas relacionadas con el «Programa de Lealtad». Un solo expediente «depurado» puede contener una docena o más de estos informes, y es necesario, en un caso determinado, tenerlos todos en cuenta para saber si el peso de la prueba señala la culpa o la inocencia del acusado⁽³⁾.

(1) Un informe fechado el 26 de junio de 1956 revela que en los treinta y ocho años transcurridos desde 1918 el F. B. I. inició un total de 4.742.000 expedientes individuales. Entre ellos estaban comprendidos 522.000 expedientes viejos sobre actividades pro germanas y afines durante la primera guerra mundial; 414.000 prontuarios del Servicio Selectivo; 425.785 investigaciones de postulantes a cargos en la Comisión de Energía Atómica; 498.000 investigaciones de postulantes a empleos en otros servicios y departamentos; 126.000 sumarios por desertión en las Fuerzas Armadas; 211.000 casos de robo y transporte interestatal de vehículos automotores; 427.000 expedientes de Seguridad Interna y 104.465 sumarios administrativos. Los 2.013.750 expedientes restantes abarcan investigaciones de 148 categorías diferentes, inclusive problemas internos y correspondencia general del Servicio.

(2) La necesidad de que el F. B. I. y otros organismos investigadores aceptaran informes de cualquier origen fue señalada por Rex Collier, del *Evening Star* de Washington, que escribió lo siguiente: «Si se impusieran al F. B. I. restricciones sobre la clase de informes que puede aceptar y archivar, su eficacia en cuanto baluarte de la Nación contra el espionaje extranjero quedaría muy resentida. Y en todo caso habría que imponer restricciones semejantes a la Agencia de Inteligencia Central (*Central Intelligence Agency*) y a los servicios de inteligencia militar y naval. Eso equivaldría peligrosamente a maniatar nuestras fuerzas de seguridad».

(3) El F. B. I. no evalúa los resultados de sus investigaciones. Hoover ha rechazado las tentativas de adjudicarle esa responsabilidad de extraer conclusiones. En 1950 la Cámara de Representantes estaba a punto de reformar la ley de la Fundación Nacional de Ciencias (*National Science Foundation Bill*), estableciendo que el F. B. I. debía certificar la lealtad de cada persona investigada. Hoover elevó una protesta por medio del procurador general, y el Congreso le dio la razón.

Al declarar ante la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado, en 1950, Hoover expresó sus puntos de vista sobre el secreto de los archivos del F. B. I.

Un expediente no contiene sólo información probada. Un expediente debe considerarse como un conjunto. Un informe puede denunciar los crímenes más atroces, pero a veces la veracidad o falsedad de la denuncia surge únicamente cuando se han compulsado varios informes, cuando se ha investigado a fondo y se ha separado el trigo de la paja.

Yo, por mi parte, no tendría el menor deseo de pertenecer a una organización investigadora que gozara de facultades discrecionales para resolver la divulgación de ciertos datos y vetar la de otros...

Si se diesen a publicidad las constancias de un expediente cualquiera, se crearía un problema que excedería con mucho al caso en investigación. Saldrían a relucir nombres de personas que bien pueden ser inocentes y que sólo por imperio de las circunstancias figuran en las diligencias realizadas. Dar a publicidad esos nombres sin explicar en qué forma están conectados con el caso sería una grave injusticia. Y aun cuando posteriormente se les otorgara la oportunidad de justificarse, el hecho es que toda implicación deja tras sí un residuo que la verdad no alcanza a disolver. No quiero hacerme cómplice de acto alguno que manche a personas inocentes por el resto de su vida. No podemos olvidar los principios básicos de una elemental decencia, ni la tradición americana del juego limpio...

Los informes internos del F. B. I. contienen en detalle las declaraciones de los testigos. Si esos detalles fuesen revelados, quedarían expuestos a malas interpretaciones, podrían ser citados fuera de su contexto, o utilizados para torcer la verdad, deformar medias verdades y tergiversar los hechos en general. La materia prima, las denuncias, las relaciones entre partes y la recopilación de informes que obran en los archivos del F. B. I. deben ser considerados como un todo.

Son elementos valiosos para que el investigador cumpla su deber.

La finalidad de los archivos no ha sido jamás otra que ésa, y la divulgación de sus datos en modo alguno conviene al interés público... (1).

El escándalo del caso Coplon sólo fue igualado por el que se produjo cuando Hoover debió comparecer ante la Subcomisión de Seguridad Interna del Senado, el 17 de noviembre de 1953, para responder a la pregunta de si había intervenido en un acuerdo celebrado en 1946 para mantener a Harry Dexter White en un cargo del gobierno, a pesar de que ya entonces White era acusado de espía soviético.

(1) En respuesta a insinuaciones de que el F. B. I. favorecía a ciertos miembros del Congreso «filtrándoles» datos de sus archivos, Hoover declaró: «Puedo afirmar terminantemente que es una absoluta mentira... Hay gente que se complace en manipular el nombre del F. B. I. Muestran un informe y dicen: Esto es del F. B. I. Pero ese informe no ha sido suministrado por el F. B. I.»

Hoover negó en forma terminante haber tomado parte en ese arreglo. Entonces lo acusaron amargamente de haberse «embanderado» con los republicanos contra los demócratas, sin tener en cuenta la estricta prescindencia política que durante veintinueve años había impuesto en el seno del F. B. I.

La singularísima interpelación de Hoover por parte de la comisión senatorial se produjo así: el 6 de noviembre de 1953, el procurador general Herbert Brownell (h.), hablando en el Executives Club de Chicago, dijo que Harry S. Truman había dado a White un cargo en el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que dos informes del F. B. I. lo señalaban como incurso en «actividades de espionaje».

El discurso de Brownell provocó una gran conmoción política. La Subcomisión de Seguridad Interna del Senado llamó a Hoover a declarar. Hoover se negó dos veces.

Los periódicos no tardaron en sugerir que el presidente Truman había adoptado esa medida para que el F. B. I. «pudiera vigilar mejor a White en su trabajo». El 14 de noviembre de 1953 el *New York Times* publicó una crónica firmada por Arthur Krock, con este título: «Ayudantes de Truman dicen que nombró a White con consentimiento del F. B. I.». La versión se atribuía a «personas que estaban enteradas en virtud de sus cargos», y decía que, «según ellas, J. Edgar Hoover sugirió o por lo menos consintió la actitud tomada por el presidente Truman».

Otros artículos periodísticos afirmaban que el traslado de White, del Tesoro al Fondo Monetario Internacional, se había resuelto con la aprobación de Hoover en una conferencia a la que asistieron, además de él, Tom C. Clark (más tarde procurador general) y Fred Vinson (más tarde secretario del Tesoro). Al publicarse estas historias, Robert Morris, miembro informante de la Subcomisión de Seguridad Interna, notificó al F. B. I. que se intimaría formalmente a Hoover para que se presentara a declarar. El F. B. I. contestó a Morris que debía discutir el asunto con el procurador general.

La subcomisión elevó entonces al Departamento de Justicia una citación formal, y el 16 de noviembre el procurador general Brownell informó a Hoover que su comparecimiento estaría dentro de lo correcto. Recordando el incidente, Hoover declaró más tarde: «Ante la tercera citación accedí a declarar, porque quería evitar una orden judicial y porque los rumores circulantes no sólo me perjudicaban a mí, sino también al Servicio».

Cuando Hoover apareció ante la comisión del Senado, el 17 de noviembre de 1953, el presidente de la misma, William Jenner, subrayó que Hoover no debía ser interpelado por las comisiones parlamentarias, salvo en casos especiales, pero

que «ha recibido amplia publicidad la versión de que a Harry Dexter White se le permitió seguir ocupando un cargo gubernamental en virtud de un acuerdo en el que participó el señor J. Edgar Hoover... Por eso nos ha resultado necesario... pedirle que relate los hechos.

Cabe señalar, incidentalmente, que el ex presidente Truman en ningún momento afirmó que Hoover hubiera intervenido en un arreglo de ese tipo. El director del F. B. I., por su parte, negó haber tenido entendimiento alguno con Vinson y Clark.

—Yo no he participado en ningún acuerdo destinado a trasladar a White del Departamento del Tesoro al Fondo Monetario Internacional. Eso no estaba dentro de mis atribuciones... En ningún momento participó el F. B. I. en un acuerdo para ascender a Harry Dexter White, y en ningún momento dio su aprobación a semejante acuerdo... La decisión de mantener a White fue adoptada por una autoridad gubernamental más alta...

Hoover pudo reproducir del modo más convincente sus conversaciones con Clark y Vinson, respecto a White, por que después de cada discusión dictó un memorándum para que quedase constancia en el archivo.

Al comentar el testimonio de Hoover, el *New York Times* dijo entre otras cosas:

Hace varios días los ex colaboradores del señor Truman empezaron a «explicar» que, naturalmente, había existido un motivo para retener al señor White en el gobierno. El «motivo» —sugieren ellos— fue que al exonerarlo habrían dado la alarma y que todos los comunistas que formaban la red de espionaje se habrían ocultado o habrían huido a las antípodas.

Pero los colaboradores del señor Truman han ido aún más lejos. Mencionaron una «entrevista» a la que asistió el señor Hoover, e insinuaron que el jefe del F. B. I. tomó parte en «el plan de retener a White para atraparlo»... El señor Hoover... se vio casi forzado a prestar testimonio para esclarecer ese punto clave...

Hacía algo más de tres meses que el presidente Eisenhower había asumido el poder, cuando dictó el decreto 10.450, que establecía bases más amplias para juzgar la aptitud de una persona para obtener o retener un cargo en el gobierno federal.

El «Programa de Lealtad» del gobierno se convirtió en un programa de «riesgos contra la seguridad» (*security-risk program*). Y un peligro contra la seguridad podía serlo cualquiera que fuese un ebrio, un toxicómano, un enfermo mental o una persona indigna de confianza. La Junta de Reconsideración fue abolida, y la decisión de contratar o despedir

personal quedó nuevamente en manos de los jefes de dependencias.

En lo que atañe al F. B. I., sus funciones dentro del nuevo programa fueron aproximadamente las mismas que en el anterior.

XXXI. - EL ATAQUE CONTRA EL COMUNISMO

Eran las 11.10 del 14 de octubre de 1949. Un murmullo recorrió la sala de la corte federal situada en Foley Square, Nueva York.

—¡Ahí viene el jurado! ¡Traen el veredicto!

El juez Harold Medina, enfundado en su negra toga, salió de la cámara de los jueces y subió al estrado. Desde su silla de alto respaldo contempló a los once acusados que aguardaban en la sala. Eran los jerarcas del Partido Comunista de los Estados Unidos a quienes se juzgaba por predicar y fomentar el derrocamiento por la fuerza del gobierno estadounidense.

Fue éste uno de los procesos criminales más largos que se hayan celebrado ante la justicia federal. Duró ocho meses y veintiocho días. Y muchos de los que estaban en la sala pensaban que los abogados defensores habían procurado deliberadamente que se decretase la anulación del juicio, recurriendo para ello a la insolencia, a tácticas dilatorias y a una despectiva desobediencia frente a las órdenes del tribunal.

—Haga pasar al jurado —ordenó el juez Medina al ordenanza de la sala.

Los integrantes del cuerpo entraron en fila, se encaminaron al palco del jurado, y ocuparon las sillas tapizadas de rojo, desde las que venían presenciando los testimonios durante semanas y semanas.

—¿Procedo, Su Señoría? —preguntó el ujier.

—Sí.

Se leyeron en voz alta los nombres de los jurados, que respondieron: «presente». Después el ujier se volvió hacia la señora Thelma Dial, mujer de raza negra que presidía el jurado, y preguntó:

—Señora presidenta, ¿han pronunciado ustedes el veredicto?

—Sí.

—¿Cuál es?

—El jurado declara culpables a todos los acusados.

Hubo un murmullo en la sala. Y eso fue todo.

El ujier interrogó separadamente a cada uno de los miembros del jurado, diciendo:

—¿Afirma usted que declara culpables de los cargos formulados contra ellos a Eugene Dennis, John B. Williamson, Jacob Stechel, Robert G. Thompson, Benjamín J. Davis (h.), Henry Winston, John Gates, Irving Potash, Gilbert Green, Carl Winter y Gus Hall? (1)

Todas las respuestas fueron afirmativas. El juez Medina agradeció al jurado, alabando su paciencia y la atención que dispensaron al caso. Después le ordenó retirarse.

—Ahora —anunció el juez Medina— debo ocuparme de un asunto pendiente.

Nombró a los seis abogados defensores: Harry Sacher y Eugene Dennis, de Nueva York; Abraham J. Isserman, de Newark, Nueva Jersey; Richard Gladstein, de San Francisco; George W. Crockett (h.), de Detroit, y Luis F. McCabe, de Filadelfia. Les pidió que se pusieran de pie.

«Considero —dijo el juez— que los actos, las declaraciones y la conducta de cada uno de los defensores han constituido un deliberado y malicioso ataque contra la administración de justicia, una tentativa de sabotear el funcionamiento del sistema judicial federal y una inconducta de índole tan grave que la simple imposición de una multa sería un rasgo fútil y un castigo enteramente insuficiente...»

Sentenció a Sacher, Gladstein y Dennis a seis meses de cárcel; a Isserman y Crockett a cuatro meses, y a McCabe a treinta días.

Un coro de protestas surgió de los seis hombres, que interpelaron coléricos al juez Medina repitiendo a gritos las insinuaciones formuladas día tras día y semana tras semana durante el juicio: que el tribunal era culpable de prejuicios raciales, corrupción, parcialidad y connivencia con el fiscal.

El juez Medina concluyó sin inmutarse:

—Que estas condenas por desacato sirvan para advertir a ustedes y a todos los que se sientan tentados de seguir su ejemplo que el sistema judicial de los Estados Unidos tiene facultades que le reconoce la Constitución, y que existen leyes para proteger la dignidad del tribunal y la ordenada administración de justicia.

Dennis aprovechó para gritar su última insolencia:

—Yo quiero decirle a Su Señoría que en la Alemania nazi y en la Italia de Mussolini hubo hombres que también ocupaban altos estrados, también vestían negras togas y también pronunciaban sentencias pro fascistas; pero yo quiero

(1) El secretario nacional, William Z. Foster, también fue encausado, pero no se lo juzgó porque estaba enfermo.

recordar al tribunal que el pueblo revocó esos veredictos y esos fallos, y que igualmente nuestro pueblo revocará el veredicto y las condenas en este caso, y que el veredicto del pueblo será en pro de la paz, la democracia y el progreso social.

Así concluyó el proceso que había despertado la atención mundial.

Este drama se había iniciado más de diez años antes, cuando el F. B. I. comenzó a reunir pruebas de que los líderes del Partido Comunista no predicaban una revolución política pacífica dentro del marco de la Constitución norteamericana, sino que conspiraban para derribar al gobierno por la fuerza.

Durante los años «de paz» transcurridos entre 1930 y 1940, el F. B. I. vigiló las actividades comunistas con tanto celo como las del *Bund* alemán. Ambos grupos eran considerados por Hoover peligrosos para la seguridad americana y agentes potenciales de países extranjeros. Confidentes infiltrados en el partido y ex comunistas desilusionados colaboraron en la larga y secreta investigación que se desarrolló día tras día en los cuatro rincones del país. Y como siempre que es necesario enfrentar a un grupo secreto, dedicado a la conspiración, el F. B. I. debió a su vez utilizar métodos secretos y clandestinos para indagar las actividades comunistas.

En 1940 el Congreso aprobó la ley Smith, que decía entre otras cosas: «Será penado quien a sabiendas o maliciosamente predique, fomite, aconseje o enseñe la obligación, necesidad, ventaja o conveniencia de derribar o destruir por la fuerza y la violencia cualquier gobierno de los Estados Unidos...».

Las primeras condenas por violación de la ley Smith se produjeron en 1941, cuando los agentes del F. B. I. reunieron pruebas contra miembros del Partido de los Trabajadores Socialistas (*Socialist Workers Party*), organización trotskista, a quienes se acusó de transgredir el artículo de la ley que hablaba de «asociación ilícita». Se condenó a dieciocho de los acusados; seis a un año y un día de cárcel, y los otros doce a dieciséis meses. La Corte de Circuito de los Estados Unidos confirmó las sentencias, y la Suprema Corte se negó en tres oportunidades a rever el caso.

Algunas personas opinaron que en este asunto el gobierno no actuó con demasiada prudencia, y que incluso se habría apartado de las normas constitucionales. Pero los comunistas, aunque deplorasen la aprobación de la ley Smith, aplaudieron cuando ella fue aplicada a los trotskistas. Un escritor partidario declaró: «Decir que el caso de los trotskistas constituye una violación de las libertades civiles es burlarse del más elemental concepto de la democracia. Equivale a propug-

nar libertades civiles para los fascistas...». Otros se expidieron en análogos términos.

En 1945, cuando los comunistas se volcaron contra la política de «colaboración pacífica» de Earl Browder, disolvieron la Asociación Política Comunista y restablecieron el Partido Comunista de los Estados Unidos de América, el F. B. I. comprendió que ni en la clandestinidad ni en la lucha abierta el partido jamás renunciaría al objetivo marxista-leninista de una guerra revolucionaria de clases que provocara la destrucción violenta de todos los sistemas de gobierno no comunistas.

En 1946 y 1947 el F. B. I. compaginó un memorándum legal de 1.350 páginas con 546 ilustraciones, que encerraba las pruebas reunidas en el transcurso de los años contra el partido y sus dirigentes. Dos suplementos agregaron 500 páginas y 300 ilustraciones más. Estas 1.850 páginas y 846 ilustraciones constituían quizá la exposición más completa que jamás se haya realizado sobre las actividades y objetivos del Partido Comunista en los Estados Unidos. Era en verdad una reedición gigante del memorial redactado veintisiete años antes contra el Partido Comunista por el mismo Hoover.

El trabajo fue enviado al procurador general Tom C. Clark en febrero de 1948, y el Departamento de Justicia decidió actuar contra los doce miembros de la Junta Nacional del Partido Comunista. Por primera vez en un cuarto de siglo el gobierno amenazaba con un golpe decisivo al comunismo norteamericano.

El 20 de julio de 1948 un gran jurado federal reunido en la ciudad de Nueva York dictó orden de encausamiento contra los dirigentes partidarios, acusados de «conspirar» para violar la ley Smith. La orden de encausamiento decía que «han conspirado ilícitamente, maliciosamente y a sabiendas... para organizar, con el nombre de Partido Comunista de los Estados Unidos, una sociedad, grupo y asamblea de personas que enseñan y predicán el derrocamiento y la destrucción por la fuerza y la violencia del Gobierno de los Estados Unidos...».

El juez federal Vincent L. Leibell firmó órdenes de arresto contra los acusados, y el F. B. I. empezó a detenerlos. El *Daily Worker* calificó todo el procedimiento de «gigantesca farsa».

Hoover admitió que, para que el gobierno pudiera iniciar acciones judiciales, era preciso poner en descubierto algunos de los informantes confidenciales del F. B. I., infiltrados en el partido desde años atrás, y presentarlos como testigos. Entre agosto de 1948 y enero de 1949, los agentes del F. B. I. concertaron alrededor de sesenta entrevistas entre el fiscal na-

cional John F. X. McGohey, por un lado, y por otro los informantes confidenciales y ex comunistas dispuestos a prestar testimonio.

El juicio se inició el 17 de enero de 1949. Quizá la mayor sorpresa para los acusados y sus correligionarios fue la aparición del joven Herbert A. Philbrick como testigo de la acusación. No disimularon su asombro, porque Philbrick era conocido en Boston como hombre de confianza en el círculo interior del partido; nadie, ni siquiera su esposa, sabía que era en realidad un agente secreto del F. B. I.

En 1940, a la edad de veinticinco años, Philbrick ayudó a fundar en Boston una organización juvenil que lo nombró presidente; pero luego descubrió que en el grupo dominaban en secreto jóvenes comunistas. Discutió el caso con el F. B. I. y accedió a seguir en su puesto para revelar en lo posible las actividades comunistas. Philbrick se vio así obligado a llevar una fantasmagórica doble vida. Por un lado desempeñaba el papel de comunista fanático; por otro, informaba al F. B. I. sobre las maniobras del partido, hasta que llegó el momento de declarar ante el juez en Foley Square. Philbrick fue uno de los seis informantes confidenciales que el gobierno presentó como testigos.

Uno en pos de otro, los testigos fueron exponiendo ante el jurado la prédica comunista, expresada concisa y agudamente por Stalin cuando afirmó que una revolución en los Estados Unidos era «imposible si antes no se destruía violentamente la maquinaria del Estado burgués». Los acusados pretendían convertir esas palabras en hechos. Las sombras de Marx y Lenin descendieron a la sala del tribunal, donde vibraban los dogmas de una ideología que estaba arrastrando naciones enteras al cautiverio.

El juicio fue una áspera batalla. La defensa alegó que los once acusados no habían hecho otra cosa que ejercitar su derecho de opinión y su libertad de pensamiento.

El jurado no compartió ese punto de vista.

El veredicto de culpabilidad fue confirmado por el juez del circuito, Learned Hand, quien dijo entre otras cosas:

No conocemos ningún país donde ellos (los acusados) pudieran gozar de una libertad tan semejante a la licencia como la que aquí tuvieron; ninguno, salvo Gran Bretaña, donde se les sometiera a un proceso tan ecuánime. El único motivo plausible de queja que alegan es que se les ha negado esa libertad de expresión que serían los primeros en destruir. Admitimos que no siempre es fácil proteger esa libertad; y que no hay una clara línea divisoria que la defina. Hemos tratado de demostrar que lo que estos hombres enseñaban y predicaban está fuera del ámbito de la libertad...

La ley Smith fue declarada constitucional por fallo unánime de la Cámara Nacional de Apelaciones del Circuito. Al referirse a los informantes del F. B. I. que actuaron como testigos del gobierno, expresó el juez Hand:

Los tribunales han contemplado desde tiempo inmemorial el empleo de informantes; en casos de conspiración, o en otros casos donde el delito consiste en la preparación de otro delito, es necesario generalmente confiar en informantes o en cómplices de los ejecutores, porque es casi seguro que éstos actuarán en la sombra. Excluido el secuestro, que aquí no lo hubo, otras formas de engaño y disimulo destinadas a prevenir un delito, son siempre permisibles.

El 4 de junio de 1951 la Suprema Corte de los Estados Unidos confirmó la condena de los líderes comunistas, sosteniendo la constitucionalidad de la ley Smith, por seis votos contra dos de sus miembros.

El presidente de la Suprema Corte, Fred Vinson, redactó el despacho de la mayoría, que afirmaba entre otras cosas: «La confabulación de los acusados para organizar y propugnar el derrocamiento por la fuerza y la violencia del gobierno de los Estados Unidos creó el *peligro evidente y actual* de que se intentara ese derrocamiento».

El fallo de la Suprema Corte fue la señal para que cuatro de los once comunistas condenados, que estaban en libertad tras pagar una fianza de 20.000 dólares cada uno, se dieran a la fuga. Gus Hall, Robert Thompson, Henry Winston y Gilbert Green desaparecieron. El F. B. I. empezó a buscarlos⁽¹⁾.

Hall, secretario nacional del partido, escapó a México con ayuda de la organización subterránea comunista. Se tiñó de color castaño oscuro el cabello, las cejas y las pestañas, que eran rubios. Se afeitó el bigote y logró adelgazar alrededor de cuarenta libras. Pero el disfraz no le sirvió de nada. Policías mexicanos lo encontraron en un centro de turismo, en las afueras de la ciudad de México. Como sus documentos no estaban en regla, lo condujeron a la frontera. El 10 de octubre de 1951, agentes del F. B. I. lo recibieron en custodia en Laredo, Texas⁽²⁾.

Robert Thompson eludió al F. B. I. durante más de dos años. Finalmente lo encontraron en un refugio de las montañas Sierra, unas 120 millas al este de San Francisco⁽³⁾. Se

(1) El Partido Comunista reconoció más tarde, en conferencias privadas, que había permitido un error táctico al permitir que sus más altos dirigentes se convirtieran en prófugos de la justicia.

(2) A consecuencia de su fuga, Gus Hall fue declarado culpable de desacato al tribunal y sentenciado a tres años de cárcel, además de los cinco que le correspondían por violación de la ley Smith.

(3) Junto con Robert Thompson, se arrestó a Sidney Steinberg, Carl Rasi, Sa-

había dejado crecer el bigote y se había teñido el cabello de color de zanahoria. Usaba el nombre de John Francis Brennan, voluntario que después de combatir en la guerra civil española formando parte de la Brigada Abraham Lincoln se había suicidado en Nueva York en 1938.

Thompson llevaba partida de nacimiento, registros de conductor expedidos por los Estados de Pensilvania e Illinois, ficha de seguridad social y otros documentos de identidad, todos a nombre de Brennan. Cuando lo detuvieron, negóse a hablar. Pero su silencio no creó problema alguno. Lo identificaron sobre el terreno, al cotejar sus impresiones digitales con la ficha dactiloscópica que llevaban los agentes.

El arresto de Thompson sacudió a los comunistas. El partido empezó a buscar frenéticamente al «traidor» que había denunciado el escondite. Pero el F. B. I. guardó el secreto, que nunca fue descubierto.

Producida la condena de las altas jerarquías partidarias, el F. B. I. se lanzó tras las huellas de diecisiete comunistas de «segunda fila», recogiendo una vez más las pruebas de que el marxismo-leninismo no era simplemente una teoría social, sino una guía para la acción revolucionaria dentro de la lucha comunista por derrocar al gobierno de los Estados Unidos, y que los diecisiete acusados formaban parte de una conspiración para llevar a los hechos esa idea revolucionaria⁽¹⁾.

Alexander Bittelman, unos de los acusados, había puesto de relieve la absoluta necesidad de que los comunistas convirtieran la teoría en acción, con estas palabras: «En el leninismo revolucionario, la teoría ha llegado a alturas sin precedentes. En los Partidos Comunistas —partidos marxistas de nuevo cuño—, la teoría revolucionaria se ha transformado en factor decisivo en cuanto guía para la acción...».

Al cabo de un juicio que duró nueve meses y medio, se pronunció sentencia condenatoria contra trece de los diecisiete acusados⁽²⁾.

muel Coleman y la señora Shirley Kremen. Steinberg había sido encausado por violación de la ley Smith en junio de 1951.

Thompson fue condenado a cuatro años por desacato al tribunal. A Steinberg, Rasi, Coleman y Kremen se los acusó de encubrimiento con el fin de impedir el arresto de Thompson. A Rasi, Coleman y Kremen se los acusó también de dar refugio a Steinberg. Steinberg y Coleman fueron condenados a tres años, Rasi a dos y Kremen a uno.

(1) Los procesos por violación de la ley Smith realizados en todo el país han acarreado 145 encausamientos y arrestos; 108 condenas; 5 juicios suspendidos y 10 absoluciones. A dos personas se les otorgaron nuevos procesos después de ser condenadas. Las penas sumadas de todos estos casos ascienden a 418 años y un día, y 435.500 dólares de multa.

(2) El proceso contra los diecisiete líderes comunistas empezó en Nueva York el 15 de abril de 1952 y terminó el 21 de enero de 1953. Trece comunistas fueron declarados culpables. Alexander Bittelman, Elizabeth Gurley Flynn, V. J. Jerome, Arnold Johnson, Pettis Perry, Alexander Trachtenberg y Louis Weinstein fueron condenados a tres años de cárcel y 6.000 dólares de multa cada uno. George Blake Charney, Betty Gannett, Albert Lannon, Jacob Mindel y William Weinstein fueron

El procesamiento de los líderes comunistas formó parte de un amplio ataque gubernamental contra el comunismo en los años de la «guerra fría» que sucedió al segundo conflicto mundial. Y cuando la Suprema Corte declaró la constitucionalidad de la ley Smith, los comunistas empezaron a actuar en forma clandestina.

Un estudio del movimiento clandestino comunista, efectuado en 1952 por el F. B. I., decía:

La actual organización subterránea del Partido Comunista de los Estados Unidos constituye un verdadero peligro potencial para la seguridad de este país, y por lo tanto es una fuerza hostil que debe tenerse en cuenta al trazar los planes nacionales de defensa. El peligro existe porque el movimiento clandestino comunista está capacitado: a) para realizar actividades de espionaje; b) para realizar sabotaje; c) para unir fuerzas con los representantes de naciones comunistas en caso de que este país se vea envuelto en una guerra.

En el transcurso de los años el F. B. I. había descubierto que el comunismo norteamericano —como el de otros países— sólo mostraba a la luz pública una de sus caras, la que estaba a la vista de todo el mundo: era la faz legal, cuyos dirigentes no hacían esfuerzo alguno por disimular su actuación. Pero había siempre un rostro oculto, al que los mismos comunistas llamaban «el aparato ilegal», que operaba en secreto y ocultaba la identidad de sus miembros. Algunos comunistas trabajaban únicamente en la clandestinidad, otros a la luz y otros en ambas organizaciones. Y no siempre se advertía con claridad dónde terminaba un sector y dónde empezaba el otro.

En una franca discusión de las actividades «legales» e «ilegales», exigidas por la Tercera Internacional, el órgano oficial del Partido Comunista de los Estados Unidos de América dijo lo siguiente:

El centro de gravedad de nuestras actividades no es fijo. Se desplaza continuamente; unas veces, hacia la organización legal; otras, hacia la organización clandestina. Este centro de gravedad queda siempre determinado por las realidades constantemente cambiantes de la actual lucha de clases.

A fines de 1946, cuando las «realidades» de la lucha de clases empezaban a convertirse en la «guerra fría», el Partido

penados con dos años de cárcel y 4.000 dólares de multa. A Claudia Jones le tocaron un año y un día y 2.000 dólares de multa.

Isidore Begun y W. Gerson fueron absueltos. El proceso contra Israel Amter y Marion Bachrach se suspendió por enfermedad de los acusados. A Trachtenberg y Charney se les otorgó nuevo proceso por presunto perjurio del testigo de la acusación Harvey Matusow, pero el 31 de julio de 1956 la Corte Federal que los juzgó por segunda vez volvió a declararlos culpables.

Comunista desplazó su centro de gravedad hacia lo clandestino. En octubre de 1947, según los informes recibidos por el F. B. I., el partido había completado los preparativos para montar una organización subterránea eficaz. Y a fines de 1948 grupos estatales habían llegado a un acuerdo para realizar sus actividades al abrigo de ciertos «frentes». Miembros del partido empezaron a desaparecer de los lugares que frecuentaban, resurgiendo en otras ciudades con nombres supuestos. Informes procedentes de todos los rincones de los Estados Unidos indicaban que por doquier se tomaban las mismas medidas precautorias.

Cuando los líderes máximos del partido fueron condenados en el juicio de Nueva York, otros dirigentes menores empezaron a buscar escondites y alquilar oficinas y residencias para futuras reuniones secretas. Se pidió a los afiliados que dieran nombres de simpatizantes «políticamente seguros» que pudieran ofrecer refugio en sus casas. Un jefe partidario ocultó a su esposa y su hijo, guardó sus muebles en un depósito y desapareció él mismo. Cuando salió de su escondite, usaba un nombre falso.

El F. B. I. descubrió que al prepararse para la lucha clandestina, el partido había tomado las siguientes medidas de seguridad, entre otras:

1. Destruir las fichas de afiliación.
2. Limitar a no más de cinco miembros la unidad básica partidaria, el «club», y designar un capitán de grupo que fiscalizara sus actividades. Los miembros de un grupo no debían conocer la identidad de otros.
3. Reducir al mínimo las conversaciones telefónicas referentes a actividades partidarias, y en lo posible usar frases en código y juegos de palabras.
4. Restringir la correspondencia. Usar en lo posible casillas de correos y señas confidenciales.
5. Ampliar el sistema de correos personales.
6. Reducir el número de las asambleas y disfrazarlas como reuniones sociales de pequeños grupos en casa de los afiliados.
7. Destruir u ocultar la documentación partidaria. Quedó prohibido conservar padrones de afiliados donde constaran nombres de individuos.
8. Se compraron mimeógrafos y grandes cantidades de papel, que se ocultaron en el domicilio de afiliados de confianza.
9. El Comité Nacional creó su propio «programa de lealtad», designando comisiones para investigar antecedentes personales, actividades, fojas de servicio, actividades sociales, relaciones, etc., de los afiliados. Se distribuyeron detallados cuestionarios biográficos cuyas preguntas ahondaban en lo más íntimo de los asuntos personales y costumbres de los afiliados. Los comités de los estados recibieron instrucciones de leer esos informes, analizarlos y elevar sus conclusiones al Comité Nacional. Cualquiera cuya con-

ducta o actividades despertaran sospechas debía ser radiado por orden del Comité Nacional. En caso de duda, se interrogaba exhaustivamente al sospechoso.

Al reconstruir la historia del partido clandestino, el F. B. I. estableció que en 1948 tres líderes comunistas habían sido elegidos para expandir la organización subterránea. Cada uno recibió orden de nombrar tres subordinados inmediatos, y el mismo sistema se aplicó a las unidades de distrito, estado, condado, ciudad y «club». De ese modo, un estrato de la organización clandestina sólo estaría en contacto con el inmediato superior y el inmediato inferior. Y al F. B. I. le resultaría más difícil penetrar en los estratos superiores.

A mediados de 1956 el F. B. I. calculó que el Partido Comunista norteamericano había quedado reducido a un núcleo recalcitrante de 20.000 miembros. La disminución en el número de afiliados obedecía al procesamiento de los dirigentes partidarios y a que gradualmente se iba comprendiendo en todos los sectores del país la creciente amenaza mundial que constituía el comunismo.

En 1950 el Congreso había establecido una fiscalización más rígida de las actividades comunistas al aprobar, pasando por sobre el veto del presidente Truman, la ley de seguridad interna⁽¹⁾, que obligaba a todas las organizaciones de acción comunista, sus dirigentes y miembros a registrarse ante el Departamento de Justicia como agentes de una potencia extranjera. También obligaba a registrarse a los «frentes populares» de inspiración comunista y a sus dirigentes.

La ley creaba una Junta de Fiscalización de Actividades Subversivas, encargada de establecer si una organización era o no un grupo de acción comunista o una entidad colateral.

En octubre de 1950 el F. B. I. elevó al procurador general Clark un informe de 660 páginas con elementos de prueba que apoyaban el criterio del Servicio de que el Partido Comunista norteamericano era una organización de acción comunista. Sobre la base de este informe, Clark solicitó a la Junta de Fiscalización de Actividades Subversivas que declarase al Partido Comunista comprendido en los términos de la ley. La junta recibió las argumentaciones de ambas partes, y el 20 de abril de 1953 dictaminó que el partido era un grupo de acción comunista «alimentado por la Unión Soviética». En consecuencia, se ordenó al partido que se registrara en la procuración general⁽²⁾.

(1) También conocida como ley McCarran, porque la patrocinó el extinto senador por Nevada, Pat McCarran.

(2) La ley de seguridad interna de 1950, aprobada el 23 de septiembre de ese año, exigía específicamente que todas las organizaciones de acción comunista o colaterales, así como sus dirigentes, se inscribieran en el registro de la procuración

Pero el comité nacional del partido se negó a acatar la orden, y sus abogados, en una presentación efectuada ante la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos, atacaron la constitucionalidad de la ley de seguridad interna. La Cámara de Apelaciones declaró que la ley era constitucional, y por dos votos contra uno de sus miembros confirmó la orden de la Junta de Fiscalización de Actividades Subversivas. El partido apeló del fallo ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, que después de examinar el caso lo devolvió a la junta para que prosiguieran las actuaciones. Eso ocurrió el 30 de abril de 1956, y el asunto aún está pendiente.

El próximo golpe de importancia contra el partido lo descargó en 1953 el presidente Eisenhower, al firmar la ley de fiscalización del comunismo, que, entre otras cosas, facultaba al procurador general para dirigirse a la Junta de Fiscalización de Actividades Subversivas pidiendo una investigación cuando se demostrara que un sindicato estaba infiltrado por los comunistas. Si el cargo se probaba, el sindicato afectado no podría seguir usando las instalaciones de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo y perdería los derechos previstos por la ley de relaciones entre el trabajo y la administración.

En la trama de las actividades comunistas descubiertas por el F. B. I. se destacaba un hilo ininterrumpido: la consagración del partido a los intereses de la Rusia Soviética y del comunismo mundial. Cada vez que chocaban los intereses de los Estados Unidos y los de Rusia, el partido optaba por Rusia.

Cuando el ejército comunista nordcoreano invadió a Corea del Sur, el 25 de junio de 1950, los comunistas norteamericanos acusaron a su propio gobierno y a Wall Street de ser responsables de la guerra. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue vilipendiado cuando declaró a Corea del Norte culpable de atacar a través del paralelo 38; y la decisión de las Naciones Unidas de ayudar a Corea del Sur y contener la agresión fue para esos círculos el fruto de «la intervención imperialista de los Estados Unidos en Corea». En cambio, la política exterior de la Unión Soviética «defendía la igualdad soberana de las pequeñas naciones y apoyaba la lucha por la liberación de los pueblos coloniales».

Los Estados Unidos estaban parcialmente en pie de guerra, y la tensión con Rusia crecía, de ahí que el trabajo del F. B. I. en el campo de la seguridad aumentara cada vez más. Se destacó un número mayor de agentes para cubrir las actividades comunistas, especialmente las clandestinas.

Hoover ordenó restablecer alguna de las viejas medidas

general. Si dichas organizaciones no se inscribían en el plazo estipulado, debía hacerlo cada miembro individual.

de seguridad utilizadas con éxito en la segunda guerra mundial. Entre ellas, programas especializados de cooperación con la Legión Americana y las policías locales, y la reimplantación de los programas de seguridad en las fábricas afectadas a la producción bélica⁽¹⁾.

En aquellos días tensos creció la certeza de que la lealtad de los comunistas norteamericanos era dudosa en caso de guerra con Rusia. Por ese motivo el F. B. I. adoptó medidas extraordinarias para vigilar las actividades subterráneas del partido e identificar a quienes las realizaban.

La duda no se disipó después de la guerra coreana.

La primera tregua en la actividad clandestina de los comunistas se produjo en 1955, tras la conferencia de Ginebra, cuando los líderes rusos empezaron a hablar de «coexistencia pacífica» entre el comunismo y el capitalismo, alentando la esperanza de que los dos sistemas pudieran vivir en paz en el mismo mundo.

Fue en esta atmósfera cuando los comunistas prófugos comenzaron súbitamente a salir de sus escondites y entregarse a las autoridades. Miembros del partido, ausentes durante meses, reaparecieron para reanudar abiertamente su acción proselitista. Informantes del F. B. I. explicaron que entre los propios comunistas eran muchos los que creían en una próxima era de «amistad» y que las sonrisas de N. S. Khrushchev, primer secretario del Comité Central, y de N. A. Bulganin, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, significaban un aflojamiento de las tensiones internas e internacionales.

Pero poco más tarde, a fines de 1955, el F. B. I. supo que los dirigentes partidarios estaban realizando un «análisis de acción leninista», y que interpretaban que no podía haber «evolución pacífica» del socialismo en los Estados Unidos y que el partido debía trazar sus futuros planes sobre esa base.

Los informantes agregaron que dicho análisis produjo confusión en algunos líderes, que argumentaban que la coexis-

(1) Además del F. B. I., muchas otras dependencias federales cumplen funciones de seguridad interna. El Servicio de Inmigración y Naturalización protege las fronteras del país, impidiendo la entrada ilegal de personas, y administra las leyes de inmigración y naturalización; el Servicio de Aduanas reprime el contrabando y administra las leyes aduaneras y de navegación; el Departamento de Comercio fiscaliza las exportaciones; el Departamento de Estado revisa los pasaportes y las visas de entrada al país; la Comisión Federal de Comunicaciones reprime las radioemisoras clandestinas; la Comisión de Energía Atómica cuida la seguridad física de las instalaciones de energía atómica; el Ejército, la Marina, la Aeronáutica y la Infantería de Marina son responsables de la seguridad de sus propias instalaciones y personal, así como de la seguridad industrial de las fábricas que cumplen contratos para las Fuerzas Armadas; la Agencia Central de Inteligencia realiza funciones de vigilancia fuera de los Estados Unidos; la Comisión de Servicio Civil y las dependencias individuales del gobierno federal tienen en sus manos el programa de seguridad y lealtad de los empleados federales; y el Consejo Nacional de Seguridad dicta normas generales de seguridad y ha organizado numerosas comisiones encargadas de asuntos especializados.

tencia pacífica aún formaba parte de la «línea» partidaria. La dura realidad se hizo evidente, sin embargo, en febrero de 1956, cuando los comunistas realizaron en Moscú su vigésimo congreso. Khrushchev y otros dirigentes del partido hablaron de no violencia y de la evolución pacífica del comunismo en todo el mundo. Pero fue el mismo Khrushchev quien informó al Congreso.

En los países donde el capitalismo sigue siendo vigoroso y cuenta con un inmenso aparato militar y policial, es natural que las fuerzas reaccionarias sigan ofreciendo seria resistencia. Allí la transición al socialismo irá acompañada de una aguda lucha revolucionaria de clases...

A. I. Mikoyan, primer vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, agregó por su parte:

Una revolución pacífica es posible, naturalmente, pero sólo con una clase obrera fuerte, bien organizada y con conciencia de clase. En otros casos, cuando la burguesía posee una vigorosa maquinaria militar y policial, es indudable que impondrá al proletariado la lucha armada con el fin de mantener su dominio. El proletariado debe estar alerta de antemano...

Y M. A. Suslov, miembro del Secretariado, Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, dijo:

En muchos países capitalistas, en aquellos donde las fuerzas reaccionarias y el aparato militar y policial son especialmente poderosos, la transición al socialismo vendrá acompañada de una frenética resistencia por parte de las clases explotadoras, y en consecuencia habrá también una violenta lucha revolucionaria por parte de la clase trabajadora...

La aplicación de métodos más pacíficos o más violentos depende, no tanto de la clase trabajadora como del grado y naturaleza de la resistencia ofrecida por la clase explotadora, que no quiere renunciar voluntariamente a su riqueza, su poder político y otros privilegios.

En lo que atañe al F. B. I., la «línea» del partido era bastante clara. Los comunistas estaban dispuestos a desencadenar una revolución violenta en aquellos países donde el capitalismo era fuerte y resistía al comunismo.

En el vigésimo congreso, los jefes comunistas vapulearon a Stalin y criticaron amargamente el «culto del individuo». Moscú parecía aflojar la severa fiscalización que ejercía sobre el comunismo mundial. Pero todo esto no engañó al F. B. I., que lo consideró como un conjunto de maniobras tácticas dentro de la gran estrategia soviética.

Si los comunistas estaban retornando al leninismo —como

ellos mismos afirmaban—, entonces era tiempo de recordar lo que había dicho Lenin:

Debemos... estar preparados para cualquier sacrificio en cualquier momento, y si fuere necesario, debemos practicar el engaño, cultivar la astucia y recurrir a métodos ilegales, llegando inclusive a olvidar u ocultar la verdad...

XXXII. - EL HOMBRE DE CIENCIA Y EL DESCONOCIDO

Era el 3 de diciembre de 1943. En Italia, el quinto ejército norteamericano se abría un lento y ensangrentado camino, a través de las montañas ocupadas por los nazis, en dirección a Cassino. En el frente ruso, la suerte se había volcado contra los alemanes en la batalla de Stalingrado...

Saliendo de las heladas brumas del Atlántico, el transporte británico *Andes*, ancló en las tranquilas aguas de Norfolk, Virginia. El largo y peligroso viaje iniciado en Inglaterra había concluido. Tripulantes y pasajeros respiraron con alivio. En la barandilla del buque, unos pocos hombres de ciencia británicos reían y bromeaban mientras los marineros amarraban los cables y tendían la planchada.

Esta noche estarían en Nueva York, ciudad rutilante de luces, mientras que en Londres, desde cuatro años atrás, la gente tropezaba por las calles en la lobreguez de los apagones..., ciudad donde no se escuchaba el roncar de aviones enemigos, donde no se oía el estruendo de las bombas «rompemanzanas» y de las baterías antiaéreas y de las sirenas que noche tras noche desgarraban el sueño y ponían los nervios de punta...

Pero además de la emoción del arribo había otra, y más grande. La emoción de participar en un proyecto bélico tan secreto que sólo un puñado de personas entendía su verdadero significado... y aun los integrantes de este grupo selecto sólo podían conjeturar lo que les reservaba el futuro.

Ninguno de aquellos hombres de ciencia podía imaginar que cambiando sus conocimientos con los canadienses y los norteamericanos lograrían convertir el átomo en arma militar en el lapso increíblemente corto de diecinueve meses⁽¹⁾. Ninguno, ni siquiera aquel físico brillante, de consu-

(1) El F. B. I. se enteró del proyecto de fabricación de la bomba atómica en 1943, no por las vías oficiales, sino a consecuencia de la vigilancia impuesta a los líderes del Partido Comunista en la costa del Pacífico. Informantes que actuaban en círculos partidarios escuchaban, cada vez con más frecuencia, comentarios relativos a un arma nueva y poderosa, al empleo del uranio y la aplicación de la

mido rostro, que contemplaba por primera vez los Estados Unidos.

Otro sabio de más edad se apoyaba en la barandilla junto al joven, cuyos ojos parecían grandes y redondos detrás de los gruesos lentes.

—Ahí la tienes, Klaus —dijo el más viejo—. La colonia que cambiamos por un cargamento de té. Y estoy más que contento de hallarme aquí.

Klaus Fuchs sonrió.

—Yo también me alegro. Nunca estuve en los Estados Unidos.

—Oh, pero encontrarás viejos amigos...

—No —dijo Fuchs—. Sólo tengo una hermana en Cambridge, Massachusetts.

Era verdad. Aparte de su hermana, Fuchs no conocía a nadie en los Estados Unidos. Como tantos hombres de ciencia, había escapado de Alemania a Inglaterra en 1933, cuando Hitler conquistó el poder. Después Alemania y Gran Bretaña fueron a la guerra. Fuchs fue internado como extranjero de país enemigo, pero la internación no duró mucho. Empezó a trabajar con los ingleses en investigaciones nucleares, y ahora tenía la ciudadanía británica. Ya gozaba de extraordinaria reputación como físico y matemático. Y por eso integraba esta delegación de sabios.

No, Klaus Fuchs no conocía mayormente a nadie en los Estados Unidos, salvo su hermana. Pero en algún sitio, entre los millones de habitantes del país, un desconocido lo estaba esperando. Fuchs sabía que en algún momento él y ese hombre se encontrarían y se reconocerían. En ese encuentro se formaría un vínculo, como los que allá, en Inglaterra, lo unían al Desconocido. Una sombra sin rostro, sin forma, sin nombre. Siempre era lo mismo. Y el Otro, en ese mismo momento, estaba en ese país ignorado, caminando por calles extrañas en una ciudad extraña, esperando el día, la hora, el minuto del encuentro.

Una voz gritó:

—¡Klaus!

El joven investigador parpadeó. Se apartó de la barandilla y bajó corriendo por la planchada con sus compañeros.

teoría atómica en el desarrollo de la nueva arma. Estos datos se filtraban de un equipo que trabajaba en secreto en la Universidad de California, donde los miembros del partido tenían relaciones amistosas con algunos hombres de ciencia. El F. B. I. transmitió esta información al Ejército. Pero el 18 de marzo de 1943, el mayor general George V. Strong, jefe de Inteligencia Militar, pidió al F. B. I. que dejase de vigilar a uno de los científicos que trabajaban en el programa secreto de la Universidad de California. El Servicio tuvo conocimiento oficial del proyecto atómico el 5 de abril de 1943, cuando el general Strong confió a E. A. Tamm, entonces ayudante del director Hoover, los planes secretos del Ejército para proteger el desarrollo ultrasecreto de la nueva arma en el Distrito de Ingeniería de Manhattan (Manhattan Engineer District).

No hubo trámites fastidiosos. El Ejército tenía la responsabilidad exclusiva de custodiar los secretos atómicos y aprobar el personal⁽¹⁾ destinado al Manhattan Engineer District, que dirigía el programa de energía atómica. Los británicos informaron que Fuchs había sido investigado y que se le consideraba un hombre leal y digno de confianza. El Ejército aceptó esas seguridades⁽²⁾.

El grupo británico se dirigió a Nueva York, donde disfrutaría brevemente del esplendor de la ciudad antes de sumergirse en las incógnitas del átomo.

Pero había entre ellos un hombre a quien no preocupaban exclusivamente los problemas de la ciencia pura. Una ventosa tarde de un sábado, poco después de su arribo, Klaus Fuchs salió del Barbizon Plaza Hotel, donde se alojaba. Pocos minutos después, el subterráneo lo dejaba en un lugar del East Side neoyorquino.

Tal vez los transeúntes hayan sonreído al ver a ese hombre flaco y pálido, enfundado en un sobretodo, que llevaba una blanca pelota de tenis en la mano. Tal vez no. Espectáculos aún más singulares pasan inadvertidos en las calles de Nueva York.

Y entonces Klaus Fuchs vio al Desconocido. Lo reconoció instantáneamente por los guantes y el libro de tapas verdes que traía en la mano. Era un hombre de edad mediana, robusto, que medía alrededor de un metro y ochenta centímetros. Tenía una cara redonda e impasible. Los ojos del Desconocido se posaron brevemente en la pelota de tenis que llevaba Fuchs. Pronunció unas palabras, y los dos subieron a un taxi.

Ocuparon una mesa en un restaurante de la Tercera Avenida, y el Desconocido dijo entonces:

—Yo soy Raymond.

Fuchs no sabía jamás que su verdadero nombre era Harry Gold.

La sombra de una sonrisa pasó por los labios del hombre de ciencia.

—Yo soy el doctor Klaus Fuchs.

(1) El acuerdo sobre jurisdicciones (*Delimitations Agreement*), firmado el 9 de febrero de 1942 por los jefes de Inteligencia Militar, Inteligencia Naval y F. B. I., estipulaba que el Departamento de Guerra asumiría la responsabilidad de investigar a todos sus empleados civiles, así como también a los civiles ocupados en reservas militares o sujetos a fiscalización militar. El Distrito de Ingeniería de Manhattan se hallaba bajo jurisdicción del Departamento de Guerra. En una conferencia celebrada entre el G-2 y el F. B. I. el 5 de abril de 1943, los representantes del G-2 afirmaron que asumían la total responsabilidad de las funciones de vigilancia relacionadas con el proyecto Manhattan. Este acuerdo estuvo en vigor hasta el 1º de enero de 1947, fecha en que la Comisión de Energía Atómica se hizo cargo del proyecto Manhattan, en cumplimiento de la ley de energía atómica de 1946.

(2) Dentro de los términos aprobados por la Conferencia de Quebec en 1943, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá se comprometieron a colaborar como socios en el campo atómico. Cada país se hacía responsable de la lealtad de su propio personal.

El Desconocido asintió.

Fuchs le habló del supersecreto Manhattan Engineer District. Habló del esfuerzo combinado de muchos sabios por resolver el problema científico e industrial de producir uranio fisionable en cantidad con el fin de obtener una arma de guerra. Prometió detalles específicos para más adelante. Convinieron una contraseña para el próximo encuentro y se separaron.

En esos escasos y fugitivos minutos, Klaus Fuchs y el Desconocido abrieron la puerta al más asombroso crimen de nuestra historia: el robo de secretos atómicos por parte de Rusia Soviética.

Esto sucedió a comienzos de 1944.

A comienzos de septiembre de 1949, la lucha en los campos de batalla de Europa y del Pacífico era un recuerdo. Rusia comunista ya no era un aliado. Se había convertido —para el lenguaje no diplomático— en el enemigo de Occidente.

En su despacho del Departamento de Justicia, en Pennsylvania Avenue, el director del F. B. I., J. Edgar Hoover, estudiaba un informe secretísimo... y a medida que lo iba leyendo, su rostro enrojecía de cólera y asombro. Porque allí estaba la prueba irrefutable de que agentes de una potencia extranjera habían robado el corazón mismo de la bomba atómica; habían robado el secreto de su fabricación y su mecanismo detonador⁽¹⁾.

Hoover tomó el teléfono interno y dictó una serie de órdenes a sus ayudantes. Pronto la vasta maquinaria del F. B. I. empezó a trabajar a todo vapor. En su esencia, las instrucciones de Hoover eran éstas:

—Han robado el secreto de la bomba atómica. ¡Hay que descubrir a los ladrones!

El responsable de la seguridad atómica no era ya el Ejército, sino el F. B. I. La ley de energía atómica de 1946, aprobada por el Congreso para reforzar el secreto de las investigaciones, decía:

Salvo que la Comisión de Energía Atómica lo autorice en casos de emergencia, ninguna persona será empleada por dicha comisión antes que el Servicio Federal de Investigación investigue e informe a la comisión acerca del carácter, relaciones y lealtad de esa persona. Todas las violaciones de esta Ley serán investigadas por el Servicio Federal de Investigación...

Esta reglamentación entró a regir el 1º de enero de 1947.

(1) Según la ley de energía atómica de 1946, revelar datos sobre el diseño, manufactura o utilización de armas atómicas, constituye «ofensa criminal» (*criminal offense*).

Y ahora, en las manos de Hoover estaban las pruebas de un delito tan escandaloso que se le ha llamado «el crimen del siglo».

Los hombres del F. B. I. afluyeron a la planta atómica de Los Alamos, cerca de Santa Fe (Nuevo México), y a otros establecimientos similares. Analizaron exhaustivamente los ficheros de personal y la documentación existente en la Comisión de Energía Atómica, y entrevistaron a centenares de personas que podían suministrar algún indicio. En pocos días, llegaron a la conclusión de que el culpable principal pertenecía, probablemente, a una misión extranjera; un hombre con libre acceso a todas las etapas de procesamiento del uranio y montaje de la bomba; y muy probablemente, un físico. Los británicos fueron notificados de tales conclusiones.

Mientras se desarrollaba esta intensa búsqueda, el presidente Truman sacudió a la nación al anunciar que el gobierno tenía «pruebas de que en las últimas semanas se ha producido en la Unión Soviética una explosión atómica». El mundo supo entonces que los Estados Unidos ya no poseían el monopolio de la bomba A. Y se hizo evidente, asimismo, que de algún modo los rusos habían realizado gigantescos progresos en las investigaciones nucleares, debilitando drásticamente la posición del mundo libre frente al comunismo.

A fines de septiembre, los indicios reunidos apuntaban a Klaus Fuchs. A primera vista, parecía imposible. Fuchs era ya el respetado jefe de la División de Física Teórica en el laboratorio de energía atómica instalado por los ingleses en Harwell. Un hombre de brillante porvenir, que parecía muy discreto y completamente absorbido por su trabajo. Las mujeres que lo habían conocido lo recordaban como «un hombre tímido, muy simpático», que aparentemente no se interesaba en cuestiones políticas. Por otra parte, los funcionarios británicos de seguridad habían garantizado su lealtad.

Pero entonces se descubrió un detalle inquietante. Al revisar viejos archivos nazis capturados en Alemania por oficiales de inteligencia durante la segunda guerra mundial, un agente encontró una anotación con el nombre de un tal Klaus Fuchs.

Traducida, esa anotación decía: «Klaus Fuchs, estudiante de filosofía, diciembre 29, 1911, Russelsheim, RSHA-IVA2, Delegación Regional Gestapo, Kiel».

El agente observó que la fecha de nacimiento del Klaus Fuchs registrado en los archivos de la Gestapo coincidía con la del físico británico de origen alemán que había trabajado en Los Alamos. Las iniciales RSHA significaban *Reichssicherheitshauptamt*, Oficina Central de Policía de Seguridad. El número romano IV era un departamento de la RSHA. El

símbolo A2 indicaba el fichero especial que utilizaba la Gestapo para los sindicatos como comunistas. En el fichero de comunistas, por otra parte, figuraba también un pariente de Klaus Fuchs.

El viejo archivo de la Gestapo, por sí mismo, no probaba nada. Era indudable que los nazis, por razones políticas o de otra índole, habían acusado de comunistas a muchas personas inocentes. Sin embargo, el dato no podía permanecer ignorado.

Los agentes revisaron todas las constancias a su disposición en busca de nuevas pistas. Consultaron el expediente del caso Igor Gouzenko, el empleado de la embajada rusa en Ottawa (Canadá) que en 1946 pidió asilo y reveló la existencia de una red de espionaje atómico. En ese expediente había copia fotográfica de una agenda secuestrada por la policía canadiense. Y entre las direcciones anotadas figuraba ésta: «Klaus Fuchs, 84 George Lane, Universidad de Edimburgo, Escocia».

En 1946, esa anotación no tenía particular significado para el F. B. I. Tampoco lo tenía el nombre de Kristel Heineman, que según se supo más tarde era la hermana de Fuchs. Cuando los canadienses entregaron la agenda al F. B. I., éste se hallaba al margen del programa de seguridad atómica.

Ahora, en cambio, el nombre de Fuchs significaba mucho. Y todos los indicios y fragmentos de información, reunidos, pesaban contra él. Hoover notificó al Servicio de Inteligencia Británico (MI5), aconsejando que se vigilara a Klaus Fuchs. Agentes del MI5 empezaron a seguirlo. A fines de octubre los mismos ingleses estaban convencidos de que Fuchs era el espía atómico..., o por lo menos, uno de ellos.

En diciembre de 1949, William J. Skardon, funcionario de seguridad en Harwell, llamó a la puerta de Fuchs. Una vez adentro, le dijo que era sospechoso de pasar informes a los rusos.

Fuchs se mostró sorprendido.

—No me parece —barbotó.

Skardon insistió, diciendo que había pruebas concretas contra él.

—No me parece —repitió Fuchs.

—Esa es una respuesta ambigua.

—No comprendo —dijo Fuchs—. Tal vez usted me dirá en qué consisten las pruebas. Yo no he hecho tal cosa.

Fuchs siguió negando su culpa. Pero el 24 de enero de 1950 hizo avisar a Skardon que quería hablarle.

Skardon fue a las habitaciones de Fuchs.

—Usted pidió verme. Aquí estoy.

—Sí —dijo Fuchs—. Parece que ha llegado el momento.

Era evidente que sufría una fuerte crisis emocional.

En forma desordenada, Fuchs recordó su vida en Alemania; su lucha contra los nazis; su temprana creencia de que el comunismo era un remedio para los males del mundo, y el temor por su padre, que estaba en la zona roja alemana.

Skardon escuchaba atentamente. Sabía que las incoherencias de Fuchs explicaban el motivo de sus actos; pero Fuchs no hablaba sobre los actos propiamente dichos.

Skardon le sugirió que descargase el peso que oprimía su conciencia, contándolo todo.

—Usted nunca logrará hacerme hablar —exclamó Fuchs.

Pero después que almorzaron juntos, la confesión salió a borbotones de labios de Fuchs. Sí, había entregado secretos atómicos a los rusos, desde que empezó a trabajar en investigaciones nucleares, en 1942, hasta comienzos de 1949. Fue él mismo, por propia iniciativa, quien buscó a los rusos. Antes de viajar a los Estados Unidos, le dieron las contraseñas y le indicaron dónde debía reunirse con el Desconocido. Sí, había pasado información atómica a los rusos, en forma irregular pero frecuente. En 1946 —continuó Fuchs—, poco después de volver a Inglaterra, había aceptado de los rusos 100 libras, como «pago simbólico» que atestiguaría su «sumisión a la causa».

Skardon le preguntó si ese acto de traición nunca le trajo remordimientos.

Sí, dijo Fuchs, en cierto momento empezó a dudar. Aún creía en el comunismo, pero no como se lo practicaba en Rusia. Ahora, demasiado tarde, veía en el comunismo soviético algo que era necesario combatir.

Una escena menuda, pero significativa, ocurrió el 27 de enero de 1950, cuando Skardon acompañó a Fuchs al Ministerio de Guerra para prestar declaración formal. Skardon se encaró con Fuchs, el hombre que había traicionado a Inglaterra, a los Estados Unidos, al Canadá, a sus camaradas, a los hombres libres de todo el mundo.

—Debo decirle —anunció el funcionario británico— que no está obligado a declarar, ni debe tener en cuenta promesas o amenazas que pudieren formularsele con ese propósito.

Fuchs miró a Skardon. Quizá en ese momento comprendió por primera vez en su tortuosa existencia cuál era la verdadera garantía de la dignidad humana: el imperio de la ley.

—Comprendo —dijo—. Adelante.

Fuchs firmó la confesión. Cuatro días más tarde, los británicos informaron a Hoover que habían «resuelto» el caso, y que estaba probado que Fuchs había cumplido actividades de espionaje para los rusos desde fines de 1941 hasta el mes de febrero de 1949, sin interrupción.

El director del F. B. I. notificó a las más altas autoridades. El 3 de febrero, el gobierno británico anunció el arresto de Fuchs.

A la sede central del F. B. I. llegó un mensaje de Steve Early, secretario adjunto de Defensa y ex secretario de Prensa de la Casa Blanca: «Me alegro de que Edgar intervenga en esto. Hace mucho tiempo sostengo que es el único capaz de manejar estas cosas, y ahora me darán la razón».

Hoover cablegrafió a sir Percy Sillitoe, jefe del M15: «Felicitaciones por el buen trabajo. Su cooperación en este caso se agradece mucho. Saludos».

La Comisión Conjunta del Congreso para la Energía Atómica declaró: «Se puede afirmar sin exageración que Fuchs, él solo, ha afectado la seguridad de mayor número de personas, y provocado más daño, que ningún otro espía, no sólo en la historia de los Estados Unidos, sino en la historia de las naciones».

La misma comisión señaló que Rusia, merced a sus espías, había podido resolver, con inmenso ahorro de tiempo y dinero, dos grandes problemas: 1) producción en cantidad de materiales fisiónables; y 2) diseño y montaje de armas materiales. En Los Alamos, Fuchs había tenido acceso a todos esos secretos.

Klaus Fuchs compareció ante el tribunal de Old Bailey el 1º de marzo. Se declaró culpable de entregar «a personas desconocidas» informes que podían ser útiles a un enemigo. El principal abogado defensor de Fuchs, Derek Curtis-Bennet, alegó que cuando Fuchs obtuvo la ciudadanía británica, en 1942, «era un comunista conocido, y jamás fingió ser otra cosa».

Afirmó que Fuchs había tenido relaciones visibles con los comunistas británicos, y agregó:

—Cualquiera que haya leído algo de teoría marxista debe saber que todo hombre que haya abrazado el comunismo, en Alemania o en Timbuctú, reaccionará del mismo modo. Cuando un comunista obtiene cualquier clase de información, lo primero que infortunadamente recuerda, de modo casi automático, es su lealtad a la idea comunista.

El presidente a la Suprema Corte, lord Goddard, después de escuchar los testimonios, dijo a Fuchs:

—Usted ha pagado con la más grosera de las traiciones la hospitalidad y la protección que le brindó este país... La máxima pena prevista es de catorce años. Esa es la condena que le impongo.

Fuchs fue encerrado en el presidio de Wormwood Scrubs.

Desde que Fuchs confesó, el F. B. I., se dedicó a buscar la respuesta a una pregunta: ¿quién era el Desconocido, el hom-

bre misterioso a quien por lo menos en diez oportunidades —en Nueva York, en Santa Fe, en Nuevo México, en Cambridge— había entregado informes atómicos el científico británico?

La única pista era una vaga descripción suministrada por Fuchs. El Desconocido era un hombre de edad mediana, de cuarenta a cuarenta y cinco años; de un metro y ochenta centímetros de estatura; corpulento, de cara redonda. No era un físico, ni siquiera probablemente un empleado de los establecimientos atómicos. Sabía algo de química. Tal vez fuese un químico. Se hacía llamar «Raymond», pero evidentemente ése no era su nombre auténtico.

Fuera de esta borrosa imagen, Fuchs no supo agregar otros datos.

Los Estados Unidos es un país extenso. Hay millones de hombres robustos, de edad mediana y cara redonda, que no son físicos ni empleados atómicos. ¿Por dónde empezar? ¿Por arriba, por abajo, por el costado?

«Tal vez sea un químico...».

Agentes del F. B. I. fueron a Cambridge y visitaron a la hermana de Fuchs, casada con Kristel Heineman. Los Heineman recordaron que a fines de enero de 1945 vino a la casa un desconocido que preguntó por Klaus. Este, que proyectaba pasar sus vacaciones con ellos, aún no había llegado. El desconocido era un hombre corpulento, de edad mediana. Dejó un número telefónico de Nueva York, para que Klaus lo llamase. Volvió al mes siguiente. Klaus parecía conocerlo. Los dos hablaron largamente. El visitante parecía cariñoso con los niños, porque prometió al hijo de los Heineman un equipo de química. Los Heineman no recordaban su nombre.

Todo esto no servía de mucho, salvo la descripción del Desconocido, que coincidía con la que había dado Fuchs; y el hecho confirmado de que fue en Cambridge donde Fuchs entregó algunos de sus informes a «Raymond».

También debía tenerse en cuenta esa alusión a la «química». El F. B. I. decidió restringir el campo de sus investigaciones y buscar a un químico que respondiese a la descripción física del Desconocido. Durante días y semanas los agentes revisaron ficheros y archivos. La tarea era enorme, porque en Nueva York solamente había en 1945 un total de 75.000 firmas de químicos registradas.

Mediante un lento proceso de eliminación, fue posible reducir esas cifras, primero a 1.500, luego a 1.000, a 100, a 20..., hasta llegar por último a Harry Gold.

El F. B. I. reparó por primera vez en Gold en mayo de 1947, durante una investigación surgida de informes suministrados por Elizabeth T. Bently, comunista confesa que actua-

ba como emisaria del partido. En el archivo, Gold figuraba como químico.

Ahondando la averiguación, se estableció que Gold estaba ahora a cargo de las investigaciones biológicas en la sección cardiología del Hospital General de Filadelfia. El 15 de mayo de 1950 —seis semanas después de pronunciada la condena contra Fuchs— dos agentes del F. B. I. fueron al hospital de Filadelfia y solicitaron una entrevista a Gold.

—Con mucho gusto —dijo Gold—. Pero en este momento estamos muy ocupados. ¿Por qué no vuelven esta noche?

Los agentes regresaron después de la cena. Gold los estaba esperando. Recordó que el F. B. I. lo había interrogado en otra oportunidad, y preguntó qué deseaban ahora. Le mostraron una fotografía de Klaus Fuchs.

—¿Qué foto curiosa!... —exclamó—. ¡Es ese espía inglés!

Y agregó que no conocía personalmente a Fuchs, por supuesto, pero que, con tanta publicidad en los diarios, le resultaba fácil identificarlo.

Le preguntaron si conocía a los Heineman de Cambridge, o si tenía amigos en Santa Fe (Nuevo México). Contestó que no, que en realidad nunca había estado en Nueva Inglaterra, y tampoco al oeste del río Misisipí. Respondía a las preguntas voluntariamente, y hasta con aire de candor, como si no tuviera nada que ocultar. Pero los agentes descubrieron discrepancias en el relato de Gold. Pequeñas fallas. Nada de importancia vital, sino simples evasivas y la ocasional negación de hechos que los agentes conocían como ciertos.

Pasó una semana, en cuyo transcurso Gold fue interrogado varias veces, hasta que por fin dijo:

—Les he contado todo lo que sé. No tengo nada que ocultar. Si no me creen, pueden registrar mi casa.

Firmó una autorización escrita para el allanamiento de su domicilio: un edificio de dos pisos en Kindred Street 6823, Filadelfia.

Por sugerencia del propio Gold, los agentes empezaron el registro en el dormitorio, donde estaban la mayoría de los papeles, libros, periódicos y cartas de Gold. Este se instaló cómodamente en un sillón, pensando que la búsqueda llevaría tiempo.

Uno de los agentes atisbó detrás de una biblioteca que, evidentemente, no había sido movida en muchos años. Y encontró un sobre amarillento, con un mapa de turismo editado por la Cámara de Comercio. Era un mapa de «Santa Fe, ciudad capital del Estado».

El agente desplegó el mapa.

—¿Dijo usted que nunca estuvo al oeste del Misisipí?

Harry Gold contempló el mapa. Por un minuto, nadie ha-

bló. Los agentes observaban a Gold, expectantes. De pronto el hombre pareció derrumbarse interiormente, como si ya no fuese capaz de soportar su propio peso.

—Sí... Yo soy el hombre a quien Klaus Fuchs entregaba sus informes.

Después del momento inicial, como en el caso del científico británico, las palabras brotaron a borbotones. Gold dijo que se había encontrado con Fuchs en Nueva York, en Cambridge y en Santa Fe; explicó cómo recibió los informes y los transmitió inmediatamente a «John», que no era otro que Anatol A. Yakovlev, vicecónsul ruso en Nueva York.

Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo para que hombres como éstos traicionaran a su propio país, sirviendo de espías a una potencia que avasallaba la libertad de millones de personas?

La explicación de Gold era un viejo estribillo familiar: confuso idealismo que desembocaba en traición. Dijo:

Empecé a realizar espionaje industrial para la Unión Soviética en 1936 con plena conciencia de lo que hacía. Quise ayudar, en el camino del poderío industrial, a una nación cuyos objetivos últimos aprobaba.

Sobre su trabajo con Fuchs, comentó: «...pensé que, como aliado, yo no hacía más que ayudar a la Unión Soviética a obtener informaciones a las que, en mi opinión, tenía derecho».

Pero finalmente Gold, lo mismo que Fuchs, empezó a dudar. Temía ser descubierto. Le preocupaba la perspectiva de que su familia, que ignoraba sus actividades, se viera envuelta en un oprobio «espantoso y total».

Mas ya era tarde para retroceder.

... Estaba tan comprometido que, aun deseándolo, me hubiera resultado difícilísimo escapar. Sin embargo ... jamás llegué siquiera a sugerirlo a las personas con quienes trabajaba ...

... La idea de que estaba entregando informes secretos a otra potencia era tan aterradora que sólo atiné a relegarla al fondo de la mente, tratando en lo posible de no pensar en ella ... Lo que hice fue simplemente borrar como pude de mi cabeza todo pensamiento referente al tema⁽¹⁾.

(1) Harry Gold compareció ante un gran jurado en Brooklyn, el 9 de junio de 1950, acusado de conspiración para violar la ley de espionaje de 1917. Se declaró culpable en Filadelfia, el 20 de julio de 1950, y el 9 de diciembre de 1950 fue condenado por el juez federal James P. McGranery a treinta años de cárcel. Alfred Dean Black, químico de Syracuse, Estado de Nueva York, se declaró culpable de espionaje el 18 de septiembre de 1950. Había formado parte de una red de espionaje soviético en 1943 y 1944, y se le acusó de pasar a Harry Gold las fórmulas secretas de un poderoso explosivo. El 22 de septiembre de 1950 fue condenado a quince años de cárcel.

XXXIII. - ALGO PEOR QUE UN ASESINATO

Nueve meses después que J. Edgar Hoover advirtiera que agentes extranjeros habían robado los secretos atómicos, el F. B. I. conocía ya toda la deprimente historia.

Los agentes del F. B. I. habían seguido el rastro hasta llegar al doctor Klaus Fuchs, y de Fuchs al químico de Filadelfia, Harry Gold. A partir de allí, las pistas se bifurcaban formando un verdadero laberinto de traiciones. Gold reconstruyó el camino recorrido en catorce años al servicio del Soviet. En ese camino aparecía un ex sargento del ejército, David Greenglass, de veintiocho años, que vivía con su esposa Ruth y dos hijos en el departamento 6 de Rivington Street N° 265, Nueva York.

Greenglass estaba en la cocina preparando el biberón para el más pequeño de los chicos cuando dos agentes del F. B. I. llamaron a la puerta. Eran las 13.46 del 15 de junio de 1950. Greenglass abrió la puerta.

—¿El señor David Greenglass?

—Sí.

—¿Podemos entrar?

El dueño de casa asintió con un gesto y los dos visitantes entraron.

—Somos del F. B. I. —dijo uno de ellos, mostrando sus credenciales—. Estamos reuniendo informes sobre pérdida, extravío o robo de materiales en la planta atómica de Los Alamos. Usted trabajó en Los Alamos, ¿verdad?

—Sí —dijo Greenglass—. Pero no puedo ayudarlos. No sé nada.

Los agentes siguieron interrogando al ex sargento. Le preguntaron si se oponía a un registro del departamento, aclarando que le asistía ese derecho.

—No tengo nada que ocultar —insistió Greenglass—. Revisen no más...

Firmó una autorización. Pocos minutos después uno de los agentes salía del departamento con veinticuatro fotos de Greenglass y de su esposa, inclusive una instantánea en la que David aparecía de uniforme, durante la segunda guerra mundial.

Los agentes llevaron las fotos a Harry Gold. El químico las examinó. Por fin dijo:

—Este es el hombre con quien me entrevisté en Albuquerque.

—¿Cuándo?

—En junio de 1950.

—¿Por orden de quién?

—Yo obedecía instrucciones de mi jefe soviético, «John». El hombre de la foto me entregó informes sobre el trabajo que realizaba en Los Alamos... y yo transmití esos informes a «John».

—¿Está dispuesto a declarar eso por escrito?

Gold accedió.

Por un tiempo, Greenglass protestó su inocencia. Pero finalmente, como Gold y como Fuchs, contó su versión de los hechos. Poco a poco se había reconstruido el rompecabezas. Ninguna persona en particular conocía todos los datos, pero cuando el F. B. I. ensambló las distintas piezas surgió con toda nitidez el cuadro de una vasta operación de espionaje. He aquí lo que había ocurrido, según lo confirmaron más tarde los testimonios judiciales.

El 29 de noviembre de 1944 —tres meses después que el sargento David Greenglass fue trasladado a la planta atómica de Los Alamos— Ruth Greenglass llegó a Albuquerque, Nuevo México. David, que trabajaba de maquinista, había conseguido cinco días de licencia. Se encontró con Ruth en el Hotel Franciscan. Ese día era el segundo aniversario de su boda.

Una tarde, mientras caminaban por la ruta 66, fuera de los límites de la ciudad, Ruth informó a David de una conversación que había tenido con Julius y Ethel Rosenberg en Nueva York. Ethel era la hermana de David.

Según Ruth, Julius le contó que tanto él como su esposa Ethel habían interrumpido sus actividades comunistas; ya no frecuentaban las reuniones partidarias ni leían el *Daily Worker*.

David se mostró sorprendido.

—Pero ¿por qué? —exclamó.

—Porque Julius dice que por fin está haciendo lo que siempre quiso hacer: transmitir informes secretos a la Unión Soviética...

Julius Rosenberg —según Ruth— sabía también lo que estaba haciendo David. David estaba trabajando en la bomba atómica, el arma más mortífera concebida por el hombre. Julius y Ethel Rosenberg querían que David les suministrara informes sobre esos trabajos; informes que serían útiles a Rusia. Afirmaban que Rusia era un aliado a quien se retaceaba la información a que tenía derecho. Si todos los países estuviesen igualmente adelantados en el uso de la energía atómica, entonces —afirmaba Julius— ninguna nación podría utilizar la amenaza de la bomba contra otras naciones.

David se asustó.

—No puedo, Ruth... —dijo.

Pero al día siguiente vio las cosas de otra manera ⁽¹⁾. Durante muchos años, Julius había sido una especie de héroe para él. Fueron Julius y Ethel quienes lo persuadieron para que se afiliase a la Liga de Jóvenes Comunistas cuando tenía catorce años. Sus padres no simpatizaban con Julius porque era comunista, y no les gustaba que Ethel anduviese con él, y menos que se casara con él. Pero David estimaba a Julius. No quería verlo fracasar en nada. Y accedió.

David dio a Ruth una descripción de la planta atómica de Los Alamos, mencionó el número aproximado de personas que trabajaban en la zona y los nombres de los investigadores cuyo papel en el proyecto atómico se suponía ultrasecreto. Esos nombres los había recogido de conversaciones escuchadas al azar. Ruth memorizó todo lo que David le contaba, y al volver a Nueva York lo repitió a Julius Rosenberg.

Dos meses después de esta entrevista, el propio David regresó a Nueva York en uso de licencia. A pedido de Julius, dibujó varios croquis del molde de una lente plana que se utilizaba en experimentos atómicos. También le dio una lista con nombres de personas que trabajaban en Los Alamos y simpatizaban con el comunismo; quizá fuera posible lograr que suministraran otros informes ⁽²⁾.

Uno o dos días más tarde, los Greenglass fueron a cenar al departamento de los Rosenberg. Julius le dijo a Ruth:

—¿Te gustaría vivir en Albuquerque?

—Me encantaría —exclamó Ruth.

—Pues entonces, irás —dijo Julius.

Y agregó que no se preocupara por los gastos. El se haría cargo de ellos... con dinero de los rusos.

A continuación, trataron de discurrir un procedimiento que permitiera a David identificar a cualquier desconocido que viniese a pedir información de parte de Julius.

—No te preocupes —dijo Julius—. Te daré algo para que puedas reconocer a cualquiera que venga en mi nombre.

Ruth y los Rosenberg entraron en la cocina. Julius tomó un recipiente de cartón vacío, arrancó una de las caras y la cortó en dos trozos dentados. Entregó una mitad a Ruth.

Retornaron al «living room». David Greenglass vio las dos mitades del trozo de cartón, que al ser juntadas encajaban perfectamente.

(1) Al principio, Julius Rosenberg pidió a Ruth que procurase la ayuda de David para obtener informes con destino a los soviéticos. Ella se negó, y entonces Ethel Rosenberg persuadió a Ruth de que transmitiera el pedido a David y lo dejase resolver por sí mismo.

(2) Estando en Nueva York, Rosenberg dio los pasos necesarios para que su «contacto» soviético interrogase a Greenglass sobre el desarrollo de la bomba atómica.

—Muy ingenioso —comentó.

Julius sonrió.

—Las cosas más simples son las más ingeniosas.

Ruth guardó una mitad de la contraseña en su billetera. Julius se quedó con la otra mitad.

Greenglass regresó a Los Alamos a fines de enero, cuando terminó su licencia. Pero en febrero llegó Ruth a Albuquerque, y no tardó en alquilar un departamento en 209 North High Street, donde David podía ir a verla cuando estaba franco de servicio.

David y Ruth estaban en casa cuando un desconocido llamó a la puerta. Un hombre que más tarde sabrían se llamaba Harry Gold.

Pocos días antes, Harry Gold se había encontrado en un pequeño bar y restaurante de la calle 42 y Tercera Avenida (Manhattan) con el vicedónsul soviético Anatol Yakovlev. Tomaron unas copas y después se sentaron a una mesa para hablar sin ser escuchados.

Discutieron el lugar y la hora de su próxima entrevista. Gold debía ir a Santa Fe a recoger informes atómicos suministrados por el doctor Klaus Fuchs. Y después —dijo Yakovlev— tenía que viajar a Albuquerque, para otra misión muy importante.

Gold protestó. El viaje ulterior a Albuquerque trastornaba todos sus planes para la entrevista con Fuchs. Pero Yakovlev lo interrumpió:

—¡Usted va! ¡Es una orden!

El ruso entregó a Gold una hoja de papel de fumar donde había escrito el apellido «Greenglass» y una dirección en High Street. Debajo del nombre se leía esta anotación: «Santo y seña. Vengo de Julius».

También le dio un trozo de cartón —la contraseña que le serviría para identificarse— y un sobre con 500 dólares para entregar a Greenglass.

Gold llegó a Santa Fe el 2 de junio de 1945. Tenía tiempo de sobra, y decidió pasear por la ciudad. Se detuvo en un quiosco y compró un mapa editado por la Cámara de Comercio: un sobre amarillo con la inscripción «Santa Fe, ciudad capital del Estado». Distraídamente guardó el plano en el bolsillo. Ese fue el error que cinco años más tarde le resultaría fatal, cuando un agente del F. B. I. descubrió el olvidado sobre amarillo detrás de una biblioteca de su departamento en Filadelfia.

Pero Gold no pensaba en el F. B. I. mientras caminaba por las calles de Santa Fe hacia el punto de cita convenido con Fuchs. Vio acercarse, en un viejo automóvil, al pálido hombre de ciencia. El coche se detuvo y Gold subió. Minutos

después, Fuchs le había entregado un grueso paquete con secretos atómicos. Dijo que la bomba sería ensayada en Alamogordo, Nuevo México, el próximo mes.

Concluida esta parte de su misión, Gold tomó un ómnibus que lo condujo a Albuquerque, donde llegó un sábado por la noche. Los Greenglass no estaban en casa, y la ciudad padecía la típica aglomeración de la guerra. Gold tuvo que dormir en un catre, en el pasillo de una pensión. A la mañana siguiente alquiló un cuarto en el Hotel Hilton. Después se dirigió a High Street.

Los Greenglass acababan de tomar el desayuno cuando el desconocido llamó a la puerta. Apareció David.

—¿Usted es el señor Greenglass?

—Sí.

Gold entró en el «living room».

—Vengo de parte de Julius —dijo.

—¡Oh! Llega usted antes de lo que esperaba —comentó Greenglass.

Tomó el bolso de su esposa y sacó el rectángulo de cartón. Gold mostró la otra mitad. Las dos mitades encajaban perfectamente.

—¿Tiene algún informe para mí? —preguntó Gold.

—Sí —repuso David—. Pero tendré que escribirlo. Si viene usted más tarde, se lo daré.

En ese momento apareció su esposa. David la presentó.

El desconocido se fue y Greenglass empezó a trabajar. Dibujó planos del molde de la lente⁽¹⁾ en que había trabajado como operario, y explicó por escrito que la lente era utilizada como mecanismo detonador en ciertas experiencias atómicas. Y una vez más dio una lista de personas a quienes consideraba espías potenciales.

Gold volvió por la tarde. Recogió los informes de Greenglass y dejó el sobre con los 500 dólares.

En septiembre de 1945 Greenglass tuvo otro período de licencia y volvió a Nueva York. La bomba atómica ya había estallado sobre Hiroshima y Nagasaki. El Japón se había rendido. La guerra estaba terminada.

Esta vez, David entregó a Julius el croquis de un corte de la bomba lanzada en Nagasaki, según pudo reconstruirla por su propio trabajo en el mecanismo detonador y por las conversaciones entre científicos que había escuchado. Ade-

(1) Durante el proceso contra los Rosenberg, el doctor Walter S. Koski, químico nuclear que trabajó en Los Alamos de 1944 a 1947, declaró que recordaba haber visto a Greenglass en un taller de maquinarias adonde él, Koski, había llevado unos croquis de la lente plana para hacer fabricar los moldes. Dijo que los bocetos de la lente preparados por Greenglass eran copias razonablemente exactas de los que él había dibujado; y que esas copias podían resultar valiosas para una potencia enemiga, porque, basado en ellas, cualquier experto podía reconstruir los trabajos de Los Alamos y el papel de la lente en la bomba atómica.

más de esos planos, dio a Rosenberg un informe escrito sobre los trabajos que se realizaban en Los Alamos.

Julius se mostró satisfecho.

—Esto es muy bueno —dijo.

Instalaron una máquina de escribir en el «living room» de los Rosenberg y Ethel empezó a dactilografiar el informe manuscrito de Greenglass. Julius y Ruth corregían la redacción. Rosenberg informó a Greenglass que había robado una espoleta de proximidad cuando trabajaba en la Emerson Radio.

Y más tarde se jactó de que sus agentes le habían suministrado informes sobre proyectos de aviones propulsados con energía atómica y datos sobre una «plataforma espacial».

En cierta oportunidad, Julius aconsejó a Greenglass que ingresara en un colegio superior para seguir ingeniería y cultivar la amistad de estudiantes de física y ciencia nuclear; los rusos le darían el dinero que necesitara, como ya lo hacían con otros estudiantes reclutados por Rosenberg.

Pero el 3 de febrero de 1950 los ingleses anunciaron el arresto de Fuchs. Julius Rosenberg fue al departamento de los Greenglass e invitó a David a dar un paseo. Caminaron hasta el Hamilton Fish Park, y allí Julius informó a David de lo ocurrido con Fuchs.

—¿Te acuerdas del hombre que vino a verte en Albuquerque? —dijo Julius—. Bueno, Fuchs también era uno de sus contactos.

Calculaba que Gold no tardaría en ser capturado, y que a Greenglass le convenía salir del país.

Después del arresto de Gold, Julius instó a David a huir lo antes posible a México, desde donde podría dirigirse a Checoslovaquia, pasando por Suecia o Suiza. Le dio instrucciones de viaje y 5.000 dólares en efectivo⁽¹⁾.

Pero Greenglass no se fue.

El gran jurado federal reunido para examinar la causa ordenó el encausamiento de Julius y Ethel Rosenberg, Morton Sobell y David Greenglass, acusados de asociación ilícita con fines de espionaje y de violar la ley federal de espionaje de 1917, específicamente la subsección A, sección 32, capítulo 50 del Código de los Estados Unidos. Greenglass se declaró culpable. Los Rosenberg se declararon no culpables.

El proceso Rosenberg-Greenglass se inició el 6 de marzo de 1951, en la Corte de los Estados Unidos en Foley Square, Nueva York. El juez era Irving Robert Kaufman, de cua-

(1) Según la declaración de Greenglass, su esposa empleó 1.000 dólares en el pago de cuentas domésticas. Después él entregó los 4.000 dólares restantes —en una bolsita de papel— a un cuñado, para que se los guardase. Dijo que esos 4.000 dólares fueron a manos de su abogado cuando a él lo arrestaron.

renta años, el magistrado federal más joven de los Estados Unidos. Fue designado para entender en la causa por el *chief judge* John Knox⁽¹⁾.

El juez Kaufman aclaró desde el primer momento que comprendía las profundas derivaciones del caso: la posibilidad de que prejuicios religiosos o políticos influyeran en el pensamiento de los miembros del jurado, ya fuese a favor o en contra de los procesados. Interrogó cuidadosamente a los que iban a formar el cuerpo. Donde notó la más pequeña falta de objetividad, o el menor desagrado ante la tarea impuesta, el propio juez excusó al candidato, ahorrando así a la acusación y a la defensa numerosas recusaciones.

A pesar de todo, el juez Kaufman otorgó a los abogados de la defensa el derecho a formular un total de treinta recusaciones, es decir, diez más de las que tenían derecho por ley. La defensa utilizó ese derecho en veintinueve casos antes de aceptar el jurado definitivo. Durante el proceso, y en sus recomendaciones al jurado, el juez Kaufman subrayó el hecho de que la militancia en el Partido Comunista sólo era relevante si demostraba intención de ayudar a la Unión Soviética; de lo contrario, no debía tenerse en cuenta para llegar a una decisión.

El jurado declaró a los Rosenberg y a Sobell culpables de transgredir la ley de espionaje, que establecía que quienes la violasen «serán castigados con la muerte o con no más de treinta años de cárcel». El 5 de abril de 1951, cuando llegó el momento en que el juez Kaufman debía dictar sentencia, se produjo en la sala un gran silencio. Los abogados habían pronunciado sus últimos alegatos, y ahora contemplaban al juez, vestido con su negra toga, que a su vez miraba fijamente a Julius y Ethel Rosenberg.

—¿Desean los acusados añadir algo?

Julius Rosenberg dijo:

—No, señor.

El juez miró a Ethel Rosenberg.

—¿Desea usted añadir algo?

—No, señor.

El juez Kaufman empezó a hablar. Sus palabras eran las de un hombre que ha llegado a una decisión después de meditar largas y fatigosas horas en el espíritu y la letra de la ley; después de interrogar hondamente su propio corazón.

(1) Actuaron por la parte acusadora el fiscal nacional Irving H. Saypol y los fiscales auxiliares Roy M. Cohn, Myles J. Lane, John M. Foley, James B. Kilsheimer, y James E. Brannigan (h.), Emmanuel H. Bloch y su padre, Alexander Bloch, representaron a los Rosenberg. O. John Rogge fue el abogado de Greenglass. Sobell nombró defensores a Harold M. Phillips y Edward Kuntz.

Un acto de espionaje como el que hoy juzgamos aquí ... es algo más bien sórdido y sucio —aunque quienes lo cometen puedan racionalizarlo en los términos más idealistas—, algo cuya característica básica es la traición al propio país ...

Considero que el crimen que habéis cometido es peor que un asesinato. Un simple asesinato deliberado y premeditado empuenece en magnitud cuando se lo compara con el crimen que vosotros habéis perpetrado. El asesino sólo mata a su víctima ... Pero el acto cometido por vosotros, al entregar a los rusos la bomba A, varios años antes de que ellos pudieran realizarla por sus propios medios, según los cálculos de nuestros mejores científicos, ha provocado ya, a mi juicio, la agresión comunista en Corea que produjo hasta ahora más de 50.000 bajas, y quién sabe cuántos millones de personas inocentes tendrán que pagar el precio de vuestra traición. Es indudable que vuestra infidencia ha alterado el curso de la historia en perjuicio de nuestro país ...

Lo que voy a decir ahora no me resulta fácil decirlo. He reflexionado durante horas, noches y días. He sopesado cuidadosamente la evidencia. Cada nervio y cada fibra de mi cuerpo han pagado su tributo a la vigilia ... He revisado los anales de la justicia, he escrutado mi propia conciencia, buscando cualquier cosa que justificase un acto de misericordia, porque es humano ser clemente y es natural el deseo de ahorrar vidas. Estoy convencido, sin embargo, de que violaría la solemne y sagrada misión que el pueblo de este país me ha encomendado si tuviese piedad con los acusados, con los Rosenberg.

No está en mis manos, Julius y Ethel Rosenberg, perdonaros. Únicamente Dios puede encontrar misericordia para lo que habéis hecho ... Os condeno a la pena de muerte.

Sobell fue sentenciado a treinta años de cárcel. Sobell había huido a México con su esposa, pero fue expulsado de ese país y entregado al F. B. I. A Greenglass le tocaron quince años.

Antes que los Rosenberg muriesen como traidores en la silla eléctrica de Sing Sing, su caso fue sometido a una de las más completas y prolijas revisiones en toda la historia procesal norteamericana. La Corte de Distrito de los Estados Unidos lo examinó dieciséis veces, en distintos puntos. Hubo siete apelaciones a la Cámara de Apelaciones de Circuito, siete solicitudes de revisión a la Suprema Corte de los Estados Unidos y dos pedidos de clemencia al presidente de la nación⁽¹⁾.

(1) Mientras se organizaban comités de defensa y campañas de propaganda en favor de los espías atómicos condenados a muerte, y se elevaban pedidos de clemencia al presidente de la Nación y a la Suprema Corte, el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev, declaró que estaba en vigencia en Rusia una disposición que ordenaba:

1. Los organismos investigadores deben acelerar el trámite de aquellos casos que involucren preparación o ejecución de actos de terrorismo.

2. Los órganos judiciales no deben suspender la ejecución de sentencias de muerte dictadas por estos crímenes, ni considerar la posibilidad del indulto, por cuanto

La decisión del juez Kaufman quedó firme.

Antes que el jurado entregase su veredicto, el abogado de Julius Rosenberg, E. H. Bloch, parecía convencido de que el juez Kaufman había rodeado el proceso de todas las garantías, mostrándose justo y ecuaníme.

He aquí sus palabras, dirigidas al tribunal y al jurado: «Quiero decir a la Corte, en nombre de todos los abogados de la defensa, que nos habéis tratado con la máxima cortesía y nos habéis otorgado todos los privilegios que esperábamos como abogados ... Creemos que este proceso se ha celebrado con la dignidad y el decoro que corresponden a un tribunal norteamericano ...».

En otro momento dijo: «Sé que el juez se ha conducido como un verdadero magistrado norteamericano».

Dos años más tarde, sin embargo, Bloch parecía haber olvidado esas palabras. En el funeral de los Rosenberg, clamó: «Esto ha sido un asesinato frío y premeditado ... Coloco el asesinato de los Rosenberg en el umbral del presidente Eisenhower, del procurador general Brownell y de J. Edgar Hoover. Se ha dado muerte a dos seres amables, encantadores y cultos ... La insania, la irracionalidad, la barbarie y el crimen parecen anidar en el corazón de quienes nos gobiernan».

¿Qué había sucedido entre 1951, cuando Bloch elogió la forma en que se realizaba el proceso, y ese día de junio de 1953, cuando gritó en el funeral de los Rosenberg: «Esto ha sido un asesinato frío y premeditado»?

Durante el proceso contra los Rosenberg, la prensa comunista guardó silencio. Apenas mencionó que habían sido condenados.

Pero, a mediados de agosto de 1951, el F. B. I. descubrió los primeros indicios de que se avecinaba algo. El *National Guardian*, semanario de izquierda, órgano oficioso del Partido Progresista, empezó a publicar una serie de artículos sobre el caso Rosenberg. El primero decía, entre otras cosas: «Hay fuertes motivos para sospechar que los Rosenberg son víctimas de una trampa política en gran escala».

Cinco meses más tarde inauguraba su sede en Nueva York un Comité Nacional pro Justicia en el Caso Rosenberg, de inspiración comunista, que inició una vergonzosa campaña para pintar a los Rosenberg como inocentes víctimas del antisemitismo, envueltos en una deliberada confabulación urdida por el juez Kaufman, el F. B. I. y el gobierno.

el Presidium del Comité Central Ejecutivo de la U. R. S. S. no recibirá esa clase de peticiones.

3. Los órganos del Comisariato de Asuntos Internos deben ejecutar la pena de muerte contra los criminales arriba mencionados, inmediatamente de dictada la sentencia.

La primera declaración de prensa del comité, expedida el 3 de enero de 1952, decía: «Es significativo que ninguno de los miembros del jurado fuese judío»; y agregaba después que la sentencia contra los Rosenberg había «despertado temores en la prensa judía... de que los Rosenberg fuesen víctimas del fanatismo religioso».

En realidad, tanto el juez Kaufman como dos de los fiscales federales, Irving Saypol y Roy M. Cohn, eran judíos. En el número de julio de 1952 de *Commentary*, Lucy S. Dawidowicz escribió lo siguiente: «Un examen de los 156 nombres propuestos para jurados ... revela que quince eran evidentemente judíos. La Corte excusó a diez de ellos por motivos personales; cuatro fueron recusados por la defensa, y uno por el gobierno. Probablemente había otros judíos en dicha lista, pero sólo esos quince nombres eran claramente judíos».

Tras exhibir el espantajo del antisemitismo, los comunistas se lanzaron contra él. El *Daily Worker*, diario del partido, se unió a la campaña, proclamando: «El caso Rosenberg es una siniestra confabulación política. Su fin es suministrar víctimas a los cazadores de brujas, desatar nuevas violencias, fomentar el antisemitismo y el linchamiento legal de defensores de la paz y marxistas a quienes se acusa de espías».

El Congreso pro Derechos Civiles, organización colateral comunista, declaró por su parte: «El linchamiento de estos dos inocentes judíos norteamericanos, a menos que el pueblo lo impida, será la señal para que se desencadene, en todo el territorio de los Estados Unidos, una ola de genocidio hitleriano contra la comunidad judía...».

La campaña organizada bajo el lema «Salvar a los Rosenberg» entró en su apogeo. Hubo mítines, desfiles y paseo de cartelones frente a la Casa Blanca. Se obtuvieron millares de firmas para peticiones de clemencia; muchos firmantes ni siquiera sabían lo que estaban pidiendo. Los dos hijos de los Rosenberg fueron usados como piezas del juego.

Organizaciones judías responsables trataron de contener la marea de propaganda comunista. El *Bulletin* de la Liga Antidifamación de B'nai B'rith (*Anti-Defamation League of B'nai B'rith*) dijo sin rodeos: «A los comunistas no les interesan los Rosenberg en cuanto judíos. No les interesa el bienestar de la comunidad judía. Declaman contra el antisemitismo, pero defienden sus propios intereses partidarios».

La Unión Americana pro Libertades Civiles, sin pronunciarse a favor o en contra de las sentencias de muerte, anunció que a su juicio las libertades civiles no estaban en juego en el caso Rosenberg⁽¹⁾.

(1) Al denegar una de las numerosas peticiones incorporadas a la causa, el juez federal Sylvester Ryan observó «...que se ha concedido a los peticionantes el pleno

Pero la campaña alcanzó tal intensidad emocional que en todo el mundo libre muchos hombres y mujeres honestos se sintieron perturbados. La línea divisoria entre las peticiones de clemencia y las protestas contra el juicio en sí —calificado de «farsa»— se tornó muy borrosa. Y no faltó quien fomentase la idea de que vender los secretos del país no era tan grave, porque al fin y al cabo los rusos igual se hubieran enterado de todo.

Muchos norteamericanos aceptaban sin discutir la culpabilidad de los Rosenberg, pero consideraban el castigo demasiado severo. Algunos aborrecían la pena capital por cualquier delito que fuese. Algunos temían que los Rosenberg se convirtieran en «mártires» útiles a la causa comunista. Algunos padres se compadecían de los dos pequeños Rosenberg. Y había otros, indudablemente, que se preguntaban por qué no se habían producido estallidos emocionales semejantes cuando se condenó a muerte a los secuestradores del pequeño Bobby Greenlease o a los saboteadores nazis de la segunda guerra mundial.

El hombre en quien estas presiones recaían con máxima fuerza era el juez Kaufman. Pero no cedió. Al denegar reducción de la pena, el juez Kaufman dijo: «Advierto que algunos sectores están tratando de utilizar este caso para agitar sentimientos antinorteamericanos... Sigo creyendo que el delito cometido por los condenados es peor que el asesinato... Este tribunal se ha visto sometido a una creciente y organizada campaña de calumnias, diatribas y presiones. Este tribunal, sin embargo, no tiene por qué sucumbir ante semejante campaña... y tampoco hacen falta las tácticas que se emplean, para que advirtamos la tragedia humana que el caso encierra...».

El presidente Eisenhower tampoco claudicó. «La ejecución de dos seres humanos —dijo—, es un asunto grave, pero aún más grave es la muerte de millones de personas, que puede atribuirse directamente a lo que estos espías hicieron... No intervendré en este asunto».

Julius Rosenberg fue ejecutado en el presidio de Sing Sing a las 20.5 del 19 de junio de 1953. Ethel Rosenberg, diez minutos más tarde.

El camino de la traición había conducido a Klaus Fuchs, a Harry Gold, a David Greenglass, a Julius y Ethel Rosenberg ... y finalmente a la cámara de la muerte en Sing Sing.

Ahí concluyó el drama.

y completo goce de los derechos que la Constitución les otorga, y que esos derechos en modo alguno han sido negados o violados». El fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Circuito, y la Suprema Corte respaldó al juez Ryan, negándose en dos oportunidades a rever el fallo.

Un examen retrospectivo

XXXIV. - EL SALDO

Cuando el presidente Theodore Roosevelt, en 1908, ordenó crear un organismo investigador dependiente del Departamento de Justicia para luchar contra los ladrones de tierras, los «trusts» y otros transgresores de las leyes federales, no faltó quien predijese, sombríamente, que esa medida conducía al espionaje político y a la supresión de los derechos civiles.

Casi medio siglo más tarde volvía a expresarse de tanto en tanto un temor parecido: «¿Es cierto que el F. B. I. amenaza convertirse en una Gestapo?».

A veces, el interrogante respondía a móviles políticos. Otras, aparecía en boca de comunistas militantes o simpatizantes, en quienes alentaba el deliberado propósito de fomentar inquietudes y sospechas que socavarán la posición del F. B. I. Pero es indudable que en algunos casos la pregunta era formulada porque el pueblo norteamericano, que aborrece la idea de un «sistema de espionaje» dirigido contra los asuntos privados de los propios ciudadanos, sabía muy poco acerca de esa organización «enigmática» que se designa con las siglas F. B. I.

La Gestapo era la policía secreta hitleriana, que tenía facultades para practicar arrestos, incomunicar a los detenidos, realizar allanamientos sin orden judicial, condenar a muerte sin proceso, y perseguir a cualquiera cuyas ideas políticas o antecedentes raciales no se aviniesen con la ideología nazi. Era la hermana gemela de la policía secreta que impera en Rusia Soviética y en sus satélites.

Comparar al F. B. I. con estos sistemas policiales foráneos es tan absurdo como comparar el poder judicial independiente de los Estados Unidos con los tribunales de la Unión Soviética.

Cualquiera que estudie por adentro el funcionamiento del F. B. I. leyendo las órdenes de Hoover a sus subordinados, hojeando los reglamentos internos y comprobando cómo un organismo políticamente corrompido se transformó en una

fuerza que lucha por el logro de un ideal, llegará inevitablemente a esta conclusión:

El F. B. I. no podrá jamás convertirse en el brazo represivo del gobierno, o de una minoría selecta, mientras se cumplan las siguientes condiciones:

—que el presidente de los Estados Unidos sea un hombre que rechaza la idea de un sistema secreto de espionaje político.

—que el F. B. I. sea dirigido por hombres íntegros que respeten no sólo la letra, sino el espíritu de las leyes.

—que probar la inocencia sea tan importante como probar la culpa.

—que el Congreso vigile con ojo crítico los gastos y las normas operativas del F. B. I. y que el Servicio de Presupuesto siga fiscalizando celosamente cómo y por qué el F. B. I. gasta los dineros que se le asignan.

—que la rama judicial del gobierno retenga su facultad de cuestionar los procedimientos investigativos en todas las causas criminales, analizar las pruebas suministradas por los agentes y proteger los derechos del acusado mediante los resortes previstos por las leyes.

—que la prensa del país goce de libertad y tenga valor para denunciar las arbitrariedades.

—que la política no se inmiscuya en el Servicio.

Pero existe una situación hipotética en la que el F. B. I. podría convertirse en una «Gestapo». Esto sucedería si los recaudos y medidas tradicionales fuesen corrompidos o eliminados por un gobierno dictatorial y se utilizara el F. B. I. como instrumento político.

Esta hipótesis, desde luego, puede aplicarse a todos los organismos investigadores del gobierno. El F. B. I. es indudablemente el más conocido, pero a menudo se olvida que existen dieciocho dependencias federales que tienen personal de investigación con la responsabilidad específica de hacer cumplir las leyes federales y las normas de seguridad. No es concebible que los Estados Unidos lleguen a prescindir de las garantías constitucionales que amparan a sus ciudadanos.

El F. B. I. no es un «robot» de eficiencia. Es una organización formada por seres humanos, como todas; seres humanos que en el transcurso de una investigación pueden incurrir en errores de juicio y de procedimiento.

Pero cada vez que se ha cometido un error —y el porcentaje es mínimo en el total de investigaciones— obedeció a fallas funcionales, y no a propósito deliberado. Hoover no se cansa jamás de repetir a sus agentes que las indagaciones deben ser exhaustivas, para que «no quede margen de error», pues aun cuando no hubiese intención de causar perjuicio

injusto, basta que éste se concrete para deducir la existencia del error. Esta actitud resume la amplia diferencia que hay entre el F. B. I. y una policía totalitaria.

Cada vez que se ha producido un fracaso, el F. B. I. ha reajustado sobre la marcha sus procedimientos, para evitar que el mismo se repita.

No es difícil descubrir fallas y errores en casi medio siglo de actividad del Servicio, sobre todo en su primera época. Pero lo importante es que el F. B. I. ha progresado, en su tarea de custodiar los derechos civiles, tanto como la Nación misma.

El juez federal Jerome N. Frank, miembro de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de los Estados Unidos, ha puesto de relieve ese progreso al señalar que, en la época en que se sancionó la Constitución, sólo tres Estados de la Unión otorgaban a los católicos el derecho del voto. Pasaron cincuenta y cinco años antes de que el Estado de Nueva Jersey permitiese a católicos o judíos ocupar cargos públicos. Los negros estuvieron sometidos a la esclavitud hasta que se produjo la Guerra Civil. Y el Estado de Nueva Jersey sólo concedió a católicos y judíos el derecho de desempeñar cargos públicos en 1867.

Hace medio siglo, era muy poco —o nada— lo que se había hecho en el orden nacional para que la función de policía gozara del prestigio de una carrera honorable; pero al mismo tiempo los «representantes de la autoridad» poseían un poder inmenso, que tanto podían usar para proteger como para destruir las libertades civiles. Estaba firmemente arraigada, por ejemplo, la absurda creencia de que, «para atrapar a un ladrón, hace falta otro ladrón».

La historia de F. B. I. en realidad, corre paralela a la historia de los Estados Unidos y simboliza la lucha por un ideal. El F. B. I. no será un organismo perfecto, pero ha progresado a pasos gigantescos, y es incomparablemente mejor que hace treinta años.

Nada hay de mágico en el funcionamiento del F. B. I., ni en los métodos que utiliza para develar un «enigma» a partir del más insignificante de los indicios.

La verdad es que los crímenes más desconcertantes se esclarecen merced a largas y exhaustivas horas de trabajo. El F. B. I. nunca «cierra» un caso hasta que está resuelto. Esta es la clave de sus brillantes éxitos.

Pondremos unos pocos ejemplos más. El 4 de julio de 1956, en Westbury, Long Island, se produjo el secuestro de un niño de treinta y tres días de edad, Peter Weinberger, hijo de Morris Weinberger. Su madre lo había dejado en su cochecito, en el patio de la casa. Cuando se asomó para vigi-

larlo, descubrió con espanto que la criatura había desaparecido. En el cochecito encontró un mensaje: debía dejar 2.000 dólares dentro de un sobre de color pardo junto a un poste indicador en la esquina más próxima.

Los Weinberger hicieron la denuncia a la policía de Nassau County. Empezó la búsqueda del pequeño. El F. B. I. se enteró de lo ocurrido, a las 20.40 de esa noche, cuando un particular que había escuchado la noticia denunció el caso en la delegación neoyorquina del Servicio. El inspector de guardia despachó varios agentes al escenario del hecho. En ese momento, no existían pruebas de que el niño hubiera sido llevado a través de una frontera estatal, o de que el secuestrador hubiera utilizado comunicaciones interestatales. El asunto, pues, era de competencia de la policía local. Los padres del chico, por otra parte, reunieron el dinero del rescate y lo dejaron en el lugar establecido, pero el secuestrador no lo recogió.

Seis días después, la madre recibió una llamada del secuestrador y se reanudaron las negociaciones. Pero, una vez más, el secuestrador no realizó esfuerzo alguno por recoger el dinero, si bien dejó un segundo mensaje, escrito al dorso de un formulario de una compañía comercial. Siete días después del secuestro, el F. B. I. abordó el caso, dentro de los términos de la ley Lindbergh de 1934, que establecía que, a menos que la víctima fuese liberada antes de los siete días de producido el secuestro, surgiría la presunción de que había sido conducida a través de una frontera estatal.

Entre los escasos indicios, los dos mensajes manuscritos brindaban la oportunidad más factible de identificar al raptor. Un grupo especial de agentes estableció su cuartel general en Mineola, Long Island, y la sede central del F. B. I. en Washington envió a ese lugar un conjunto de peritos calígrafos para emprender el fatigoso estudio de la escritura de centenares de millares de personas. En realidad, se había decidido no descartar ninguna muestra de escritura que llegase por cualquier medio a manos de los investigadores.

Los agentes empezaron el examen de las escrituras con ayuda de prontuarios dactiloscópicos y archivos policiales de Long Island. Comenzaron a hurgar en los archivos de las oficinas de correos, ficheros del Servicio Civil, registros de hospitales, registros de vehículos automotores, solicitudes de empleo, documentos comerciales..., en suma, cualquier trozo de papel manuscrito. En algunos momentos hubo más de cien agentes trabajando en el caso Weinberger. Y cada vez que aparecía una firma o un papel escrito cuya letra tuviese una remota semejanza con la de los mensajes, se los remitía a Mineola, donde eran examinados por peritos calígrafos.

En la tarde del miércoles 22 de agosto, un agente que revisaba los archivos de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York encontró el prontuario de Angelo LaMarca, que había sido arrestado en 1954 al allanarse un garito. El 28 de julio de 1955 LaMarca fue condenado a noventa días de cárcel. La sentencia quedó en suspenso, y LaMarca salió en libertad «a prueba» por un año. El agente observó con atención la escritura de LaMarca. Se parecía sospechosamente a la del secuestrador. Los expertos compararon las muestras y llegaron a la conclusión de que habían sido escritas por una misma persona.

Tras revisar dos millones de muestras caligráficas, el F. B. I. había encontrado al hombre que buscaba. Pocas horas más tarde LaMarca confesó. En el garaje donde trabajaba, los agentes encontraron un bloque de formularios en blanco idénticos a los utilizados para la segunda carta extorsiva. Un examen microscópico del bloque y de la hoja de la carta demostró que ésta provenía de aquél.

El cadáver del pequeño Peter Weinberger fue encontrado al día siguiente, y el F. B. I. debió retirarse del caso cuando se probó que el niño no había sido conducido a través de la frontera de un Estado. Pero, como consecuencia directa del infortunado suceso, el Congreso modificó la ley de secuestros, autorizando al F. B. I. a investigar cualquier secuestro veinticuatro horas después de producido, en vez de esperar una semana para ello.

Otro caso espectacular en que intervino el F. B. I. fue el atentado contra el comentarista gremial Víctor Riesel, que venía librando una intensa campaña contra los raqueteros que infestaban los sindicatos neoyorquinos.

Víctor Riesel y su secretaria, Betty Nevins, salieron del restaurante *Lindy's* en la madrugada del 5 de abril de 1956. Caminaron por Broadway y doblaron en la calle 51. Un hombre surgió bruscamente de las sombras. Extendió la mano hacia el rostro de Riesel, y un chorro de ácido candente y corrosivo le bañó la cara y le penetró en los ojos, dejándolo ciego para siempre.

Víctima de atroces dolores, Riesel atinó a decir a la señorita Nevins:

—Llama al F. B. I. Ellos sabrán lo que deben hacer.

Eran las 3.25, cinco minutos después del ataque, cuando Betty Nevins telefoneó al F. B. I. La denuncia fue transmitida a los altos jefes del Servicio.

El fiscal nacional del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que el atentado contra Riesel era un caso flagrante de obstrucción de la justicia, puesto que el periodista debía declarar como testigo en el transcurso de una investigación

federal sobre el «raquetismo» en los gremios de Nueva York. El F. B. I. se lanzó a la búsqueda de los culpables.

A todo lo largo y lo ancho del país los agentes empezaron a vigilar los movimientos de los «matones» que podían estar complicados en el hecho. Buscaban a alguien que hubiera desaparecido de los lugares que frecuentaba, o cuyos actos hubieran despertado súbitamente el interés de los informantes confidenciales. Por fin identificaron al autor material. Era Abram Telvi, que apareció tendido en una calle del Lower East Side de Nueva York, con un balazo en la nuca. Estaba muerto.

No habían transcurrido cinco meses desde el atentado, cuando el Departamento de Justicia anunció el arresto de los instigadores. Víctor Riesel escribió a Hoover: «La única emoción que no me resulta difícil expresar es el profundo y cálido agradecimiento a usted y sus colegas, que han cumplido una tarea inmensa para resolver el misterio del ataque realizado contra mí».

Bajo las órdenes de Hoover, el F. B. I. se ha convertido en una organización que goza fama de eficiente e incorruptible. Hoover ha introducido en él el principio de la empresa privada de delegar la autoridad y responsabilidad administrativas. Pero al mismo tiempo no hay quizá en todo el gobierno una dependencia que vigile tan minuciosamente a sus empleados y la eficacia de su trabajo.

Durante los peores años de la Prohibición, cuando el dinero de las destilerías clandestinas y de los contrabandistas corrumpía al Servicio de Prohibición, a las policías locales y a los políticos, sólo un agente del F. B. I. «tomó por mal camino». Aceptó 350 dólares de soborno en un caso de quiebra fraudulenta, fue sorprendido y procesado en el acto.

Uno de los factores del éxito del F. B. I. ha sido la continuidad de su dirección, que implica continuidad en los métodos. Las normas básicas establecidas por Hoover en 1924, bajo la guía de Harlan Fiske Stone, permanecen inalteradas.

En la mayoría de las dependencias y departamentos del gobierno llega un jefe y tarda varios años en establecer nuevas normas y nuevos procedimientos operativos. Pero entonces cambian las autoridades, el jefe se va, y todo empieza de nuevo. Hoover, en cambio, ha permanecido al timón del F. B. I. a través de cinco presidentes y once procuradores generales⁽¹⁾.

(1) Desde 1924, en que Hoover asumió la dirección del F. B. I., los gastos totales del mismo han ascendido a 983.179.844 dólares, mientras que el monto de las multas más los bienes ahorrados o recuperados por el Servicio llega a 1.390.093.138. En otros términos, el balance del F. B. I. muestra una ganancia neta de 406.913.294 dólares. El F. B. I. ha capturado un total de 157.110 prófugos de la justicia. En los casos investigados por el F. B. I. se han dictado 226.087 sentencias condenatorias.

Uno de los capítulos interesantes en la historia del F. B. I. es el de sus relaciones, en el transcurso de su lucha contra el comunismo, con algunos conocidos liberales e intelectuales. Por lógica, todos los intelectuales liberales debieran haber respaldado al F. B. I. en su lucha por desenmascarar al comunismo como el movimiento más reaccionario e imperialista que el mundo ha conocido. Lo que se jugaba en esa lucha era demasiado grande para que los políticos o los demagogos lo tomaran como entretenimiento. Es cierto que algunos han usado el comunismo como una especie de «pelota de fútbol» política, pero eso no altera la perversidad intrínseca del movimiento comunista.

Muchos intelectuales liberales apoyaron efectivamente al F. B. I. Señalaron que en nada se traiciona al liberalismo respaldando al F. B. I. en cuanto organismo profesional encargado de luchar contra el espionaje, el sabotaje y la subversión. Pero otros se mostraron hostiles, como si el F. B. I. estuviese invadiendo un reino de sofisticación política situado más allá de lo que un simple funcionario policial era capaz de comprender. Uno de los mitos sembrados por los comunistas era que atacar el comunismo equivalía a atacar la libertad de pensamiento. Y en algunos sectores fue creciendo la sospecha de que el F. B. I. era una fuerza reaccionaria y un símbolo de intolerancia.

Por eso el juez Frank pudo escribir, en 1953, en el *Bulletin* de la Liga Antidifamatoria de B'nai B'rith:

Para comprender el significado histórico de estas épocas de intolerancia que han manchado la democracia norteamericana es preciso reconocer un hecho básico, a saber: que en cada una de esas épocas existió cierta justificación objetiva del temor que impulsaba el movimiento persecutorio. Es decir, existían personas que merecían, no persecución, pero sí proceso ecuánime y condena.

Nuestra repugnancia contra la despreciable conducta estimulada por el miedo no puede, entonces, hacernos olvidar los terribles peligros que justifican cierta aprensión auténtica; no puede hacernos olvidar el hecho de que el régimen totalitario que nos considera su enemigo tiene, entre nosotros, activos agentes secretos ...

Hoy está de moda, en los círculos seudoliberales, criticar severamente al F. B. I. Una fuerza que por obra de su jefe está al nivel de las mejores policías, que repudia las torturas y sabe respetar las libertades civiles ...

Todo sugiere que los elocuentes «seudoliberales», como los llama el juez Frank, no han querido enfrentar la desnuda verdad, que es ésta: el comunismo es hechura del cerebro de los intelectuales —Marx, Engels, Lenin— y no del proletariado. El comunismo no surgió de los obreros ni es un

movimiento liberal que busca la libertad del individuo y de la inteligencia. El comunismo es un plan brillantemente concebido para destruir el viejo mundo y construir uno nuevo, donde el «partido» será el todopoderoso cerebro central que gobierne a las masas. Es una dictadura del espíritu «científico» que utiliza a los trabajadores como medio para un fin. Marx y Lenin, y quienes los siguieron, sabían esto muy bien.

Los altos jefes del F. B. I. no se forjan ilusiones, no creen que el comunismo pueda ser destruido en los Estados Unidos mediante la investigación, enjuiciamiento y condena de los líderes del Partido Comunista que conspiran para derribar el gobierno por la fuerza. Aquélla es solamente una fase en una lucha de alcances mundiales.

El F. B. I. sabe que la responsabilidad más amplia está en manos de los intelectuales del mundo libre: los filósofos, los pensadores, los profesores y hombres de ciencia. La gente que piensa —los intelectuales— es la que puede y debe convencer a la opinión pública de que el comunismo es un mal. Los intelectuales del mundo deben comprender, ellos mismos, que el comunismo es el enemigo más mortal que han tenido nunca. Y deben estar dispuestos a consagrarse a esta causa así como los comunistas se dedican a la suya.

Los intelectuales del mundo libre que asumen un papel neutral en la lucha y se limitan a observar sin comprometerse ponen en peligro la causa de la libertad.

Los más altos dirigentes sindicales norteamericanos nunca se han forjado ilusiones con respecto al comunismo. Durante años han combatido a los comunistas dentro de sus propias filas, y con unas pocas excepciones han logrado expulsarlos de los puestos claves. Esos dirigentes saben que cuando el comunismo se apodera de un país, las «masas laboriosas» pierden sus derechos y hasta su dignidad personal.

En un discurso pronunciado en 1956 ante los egresados de la Academia Nacional del F. B. I., George Meany, presidente de la Federación Americana del Trabajo (*American Federation of Labor*) y del Congreso de Organizaciones Industriales (*Congress of Industrial Organizations*), las dos centrales obreras norteamericanas, actualmente fusionadas, dijo lo siguiente:

Ningún régimen donde un partido es el gobierno —y particularmente cuando existe un solo partido con poder absoluto sobre todos los estratos de la vida— puede ser un gobierno de derecho. Y sin un gobierno de derecho, no puede haber libertad ... Donde el partido es el Estado y ejerce todo el poder, la tiranía carece de freno. Y la tiranía no puede reformarse. Debe abolirse ...

El dilema es claro. El comunismo fue concebido por reaccionarios, y debe ser destruido por auténticos liberales que

tengan la capacidad intelectual de llegar al espíritu de los hombres, oponiendo a la falsa lógica del comunismo un credo que fortalezca la fe del hombre en sí mismo, en sus instituciones libres y en la idea de que la libertad personal y el imperio del derecho no deben desaparecer de la faz de la tierra.

En el conjunto de la lucha, el F. B. I. representa el esfuerzo del pueblo norteamericano por afirmar el imperio de la ley. El F. B. I. es un organismo de la justicia. Y en el futuro será tan fuerte o tan débil como el pueblo norteamericano lo exija. Nada más. Y nada menos.

FIN

DE

HISTORIA DEL F. B. I.

INDICE

Al lector	7
Prólogo	11
EL F. B. I.	
I. — El F. B. I. en acción	17
II. — Comienza la historia	33
LOS AÑOS DE INQUIETUD	
III. — Espionaje y Sabotaje, Sociedad Ilimitada	44
IV. — Los «vigilantes»	52
V. — El nuevo enemigo: el comunismo	58
VI. — Las «batidas rojas» de Palmer	66
ESCANDALOS EN WASHINGTON	
VII. — Una vergüenza nacional	76
VIII. — Hoover hace una limpieza	88
IX. — El F. B. I. se pone serio	97
LA TEMPESTUOSA DECADA DEL VEINTE	
X. — Los «gangsters» conquistan el poder	108
XI. — Rebelión contra el crimen	118
XII. — La redada	132
XIII. — Asesinato por procuración	144
EL NUEVO F. B. I.	
XIV. — Los ayudantes de Hoover	151
XV. — Impresiones digitales	163
XVI. — El laboratorio del F. B. I.	174
XVII. — La academia del F. B. I.	186
ROOSEVELT Y EL F. B. I.	
XVIII. — El enemigo interior	194
XIX. — Roosevelt defiende a Hoover	209
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL	
XX. — El F. B. I. va a la guerra	223
XXI. — Espionaje limitado	233
XXII. — Por qué fracasaron los saboteadores	245
XXIII. — La peligrosa lucha al sur de la frontera	259
XXIV. — Burlando al enemigo	270
XXV. — La princesa intrigante	283
XXVI. — Contraste entre ambas guerras	289
LAS SECUELAS DE LA GUERRA	
XXVII. — La delincuencia en la posguerra	297
XXVIII. — Para proteger estos derechos	310
LA «GUERRA FRIA»	
XXIX. — La gran ilusión	322
XXX. — El despertar	337
XXXI. — El ataque contra el comunismo	355
XXXII. — El hombre de ciencia y el Desconocido	368
XXXIII. — Algo peor que un asesinato	379
UN EXAMEN RETROSPECTIVO	
XXXIV. — El saldo	390



La presente edición
se terminó de imprimir
el día 30 de enero de 1959
en Talleres Gráficos Torfano
Castro Barros 130,
Buenos Aires,
Argentina